

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**Los estados fallidos y el estado social y democrático de derecho en los
países de América Latina**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Johan Newton López Ureña

Director

Francisco Jiménez García

Madrid, 2018



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
ORTEGA Y GASSET

DOCTORADO EN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tesis Doctoral

**LOS ESTADOS FALLIDOS Y EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE
DERECHO EN LOS PAÍSES DE AMERICA LATINA**

JOHANN NEWTON LÓPEZ UREÑA

Director de la Tesis

**DR. FRANCISCO JIMÉNEZ GARCÍA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS**

Madrid, 2016

DEDICATORIA

A la memoria de Fabio Antonio Ureña, Consuelo García y Griselda García.

Quienes supieron cultivar el arte de la familia.

Agradecimientos

Al Dr. Francisco Jiménez García, por creer en el proyecto de investigación y aceptarme para la tutoría, lo cual muestra la vocación que refleja en su accionar como un gran y estimado docente, y que a la vez es muestra de su sensibilidad por las investigaciones, le estoy especialmente agradecido.

A mis padres, Ángel Antonio López y Lourdes Fabiola Ureña por enseñarme lo importante de siempre dar el mayor esfuerzo en cualquier tarea y que el sacrificio tarde o temprano tiene su recompensa.

A Elizabeth Loveras García, Eliezer Loveras, Camila López y Nashla López por enseñarme que la familia es la base de donde surge cualquier intento de lucha en la vida, pues sólo mirando el futuro de la familia, se podrá entender la importancia del presente.

A mis hermanos Ángel Amauris López, Juan Stalin López y Lourdes Hanoi López, quienes me hicieron la vida más llevadera a lo largo de los años.

Al Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Kelvin Ludovino Colón, por su apoyo e interés en esta tarea.

Al Ministro de Medio Ambiente, Dr. Francisco Domínguez Brito, por su apoyo desinteresado y creer en cada paso que he dado.

Al Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, quien ha sido un gran ejemplo de cómo se ejerce la docencia, y de cómo se ha de inspirar a los estudiantes para seguir hacia adelante.

A la joven Rocío Pérez, por sus grandes aportes y fructíferas discusiones.

Al joven Luis Alberto Tavárez, por su ayuda desinteresada.

Al joven fiscal Osvaldo Antonio Bonilla, por su solidaridad.

Al joven Enmanuel Ramírez, por su ayuda desinteresada.

ÍNDICE

ABSTRACT.....	1
RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN.....	15
CAPÍTULO I. ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y A LA CRISIS DEL MISMO.....	21
I.1 El Estado y su relación con el Poder.....	24
I.2 Origen del Estado y su legitimación	27
I.3 El Poder, el Estado y su relación con el Derecho interno	29
I.4 La definición del Estado	33
I.5 Esbozo del Estado en la antigüedad y su paso al Estado Moderno.....	37
I.6 Elementos del Estado.....	40
I.6.1 El Territorio	41
I.6.2 Población	44
I.6.3 Gobierno	48
I.6.4 La Soberanía	49
I.6.4.1 El principio de autodeterminación de los pueblos	52
I.6.4.2 Competencia del Estado.....	53
I.7 El monopolio del Poder	55
I.8 Formas de Estados y Formas de Gobiernos.....	56
I.9 Funciones del Estado	58
I.10 El Estado como sujeto de Derecho Internacional y el reconocimiento Internacional.....	59
I.10.1 Revocación del reconocimiento	63
I.10.2 Reconocimiento de gobierno	63
I.11 Extinción de los Estados	66
I.12 El Estado Latinoamericano	66
I.12.1 Estados Unidos y las relaciones con los Estados de Latinoamérica	71
I.12.2 Latinoamérica como un Estado ejecutivo	73
I.13 La crisis del Estado	74
CAPÍTULO II. HACIA UNA TEORÍA DE LOS ESTADOS FALLIDOS	79
II.1 Conceptualización de los Estados Fallidos y problemas para su definición.....	79
II.2 Los Estados Fallidos, el terrorismo, la amenaza latente y la ayuda humanitaria.....	92
II.3 El Estado fallido, fracasado, colapsado, desestructurado, inoperante o débil; una clasificación para la problemática	95
II.3.1 El Estado en proceso de formación	100

II.3.2 Propuesta de una clasificación.....	102
II.4 El Estado Ideal.....	103
II.5 Contrato social, Estado ideal y el monopolio del Poder del Estado	105
II.6 El Estado Social y Democrático de Derecho y los Estados fallidos	107
II.7 Influencia foránea en la falla de los Estados	108
II.8 Criterios para determinar la falla de un Estado fallido	110
II.9 La Fund for Peace y la Foreign Policy	112
II.9.1 Indicadores del índice de Estado fallido.....	114
II.9.2 Crítica al índice de la Fund For Peace	119
II.9.3 Estados fallidos en Latinoamérica y el índice de la Fund For Peace.....	122
II.10 La descertificación, los Estados fallidos y el Consejo de Seguridad.....	126
CAPÍTULO III. DECISIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL ESTADO DE SOMALIA Y EL ESTADO DE HAITÍ: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA FALLA Y LA FRAGILIDAD DE LOS ESTADOS.....	139
III.1 Somalia: origen de un problema.....	139
III.2 Soberanía y decisiones del CDS de la ONU	149
III.3 Representación de Somalia ante la Comunidad Internacional	156
III.4 Amenaza de Somalia a los demás Estados.....	160
III.4.1 El terrorismo en Somalia.....	160
III.4.2 La piratería en Somalia	162
III.5 El monopolio del Poder en Somalia.....	166
III.6 El monopolio del Poder y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.....	166
III.7 Breves señalamientos a la amenaza de Somalia.....	167
III.8 Haití y el origen de su problemática.....	170
III.8.1 El terremoto del 12 de enero del 2010 y la situación de crisis del Estado haitiano	177
III.9 Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Estado Haitiano	179
III.9.1 Consideración de las decisiones del Consejo de Seguridad sobre el Estado frágil de Haití.....	183
III.9.2 Las Misiones de la ONU y Haití	183
III.10 El Monopolio del Poder en el Estado frágil de Haití	185
III.11 El monopolio del Poder en Haití, el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones Unidas.....	187
III.12 Amenazas sobre la fragilidad de Haití	193
III.13 El Estado frágil de Haití y el Estado fallido de Somalia: consideraciones sobre la región de Latinoamérica	194
III.14 El Consejo de Seguridad y la disolución de los Estados fallidos: caso Somalia.....	196

CAPÍTULO IV. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS CONFIGURADOS EN LA FÓRMULA INTERNA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO..... 199

IV.1 El monopolio del Poder y los principios democráticos.....	199
IV.2 El derecho internacional y los principios democráticos.....	200
IV.3 Concepto de Democracia	203
IV.3.1 Democracia y República	205
IV.3.2 Democracia liberal	208
IV.3.3 La mayoría en la democracia	209
IV.3.4 Sistema de representación y los partidos políticos.....	210
IV.3.5 Partidos políticos.....	211
IV.3.6 Sistemas electorales en el Estado democrático	215
IV.4 Acercamiento al Estado de Derecho	219
IV.4.1 La separación de funciones	221
IV.4.2 El principio de legalidad	222
IV.5 El Estado y los derechos sociales.....	226
IV.5.1 Surgimiento y noción del Estado Social	226
IV.5.3 La Constitución de Weimar	235
IV.6 Organización Internacional del Trabajo (OIT)	237
IV.6.1 La comunidad internacional y sus esfuerzos.....	238
IV.7 El Estado como garante de derecho	239
IV.8 Los Derechos en el Estado social.....	246
IV.8.1. Derecho al trabajo	247
IV.8.2 El derecho a la salud	250
IV.8.3 Derecho a la seguridad social.....	252
IV.8.4 Derecho a una vivienda digna.....	254
IV.8.5 Derecho a la educación	255
IV.8.6 El derecho a la alimentación	256
IV.8.7 Derecho al deporte y a la educación física.....	257

CAPÍTULO V. APLICACIÓN DE INDICADORES DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO COMO MECANISMO PARA DETERMINAR LA DEBILIDAD O FALLA DEL ESTADO EN LATINAOMÉRICA 259

V.1 La separación de funciones y el imperio de la Ley en los Estados de Latinoamérica: World Justice Project y el índice de Estado de Derecho	259
V.2 El sistema de partidos y los procesos electorales en los Estados de Latinoamérica como elementos esenciales del Estado democrático	260

V.3 Análisis de los reportes de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones de los procesos electorales de los Estados de Latinoamérica.....	268
V.3.1 Legitimidad del sistema de partidos y de los procesos electorales.....	273
V. 4 Los derechos humanos en Latinoamérica y los instrumentos internacionales	273
V.5 Enfoque analítico de los derechos humanos en América Latina	276
V.5.2 Los derechos sociales en Latinoamérica	278
V.6 El Comité de Derechos Humanos y la evaluación en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Colombia, República Dominicana, Venezuela y México	285
V.6.1 Colombia	286
V.6.2 República Dominicana	288
V.6.3 Venezuela	290
V.6.4 México.....	292
V.7 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la evaluación de tales derechos en Colombia, República Dominicana, Venezuela y México .	293
V.7.1 Colombia	293
V.7.2 República Dominicana	295
V.7.3 Venezuela	296
V.7.4 México.....	297
V.8 Elementos que impide la concreción de los derechos humanos y los principios democráticos en América Latina.....	298
V.8.1 La Corrupción de las instituciones estatales en los países de la región.....	298
V.8.2 La corrupción y los derechos humanos	302
V.8.3 Corrupción judicial en Latinoamérica	303
V.8.4 La impunidad y la corrupción en el sistema de justicia.....	305
V.8.5 Corrupción y violación al libre acceso a la justicia	305
V.8.6 La corrupción en Latinoamérica como obstáculo para los derechos humanos, según el Banco Mundial, Latinobarómetro y la World Justice Project	306
V.9 Distribución de la riqueza, desigualdad y pobreza	309
V.9.1 Pobreza extrema en América Latina.....	313
V.10 El desarrollo de la delincuencia acorde al Banco Mundial y al Barómetro de las Américas	314
V.11 Falta de voluntad política para combatir los males que enfrenta Latinoamérica	317
CONCLUSIÓN.....	321
BIBLIOGRAFÍA	325
ANEXOS:.....	357

ABSTRACT

Failed States and the social and democratic rule of law in Latin American Countries

In 2005, the Foreign Policy magazine as well as Fund For Peace Organization published a document where 76 states were pointed as “failed”. Those states were settled in two categories. In one hand, there was *States on Alert*, where the countries did not fulfill the essential functions to become a “state”. On the other hand, *States in Danger* compounded by those countries that were in the line to collapse, showing significant institutional weaknesses.

Among the states evaluated, there were several Latin-American countries that showed their disagreement related to the results provided by the previously listed document. Per their belief, the results were far from the actual reality faced by those countries. This situation became aggravated by the discomfort showed by political leaders of the region, since the failed states debate was pointing Latin-American countries. Primarily, this debate was centered in discussing the reality of African countries, and some other countries outside that region that could exhibit terrorist cells. However, since it included the countries in Latin-America, the whole scenario changed as well as the reception of those results.

Since late 80’s and early 90’s, all US security agencies were concerned regarding those states that had been able to gain independence in the process of decolonization. Those countries were showing considerable weaknesses. Thus, they were not able to continue to function properly, which could become sources of insecurity for neighboring countries.

States that concerned security forces, due to the conditions prevailing in their territories, could not maintain minimum levels of power. This was translated in a lack of control of those internal groups that could become states’ threats. Thus, this debate opened its way through academia to identify the states that could be considered as “failed”. Several parameters were indicated: what aspects can be considered to qualify a state as “failed”, what states could compromise the peace, and what is the responsibility of the international community to confront the failures of those states. After 9/11, the concern regarding failed states got to a boiling point. This situation was marked as US foreign policy priority,

resulting into a foundation of its military actions, and representing the start of its preventive war.

The international community and academia started to present a higher interest regarding “failed states”. The terms of this interest were based on prevention, so that States could not fall into failure. Also, there was another aspect that was pointed and compromised responsibility, which the developed States had in the face of such a situation, which was related to the illegitimacy of the powers to intervene in the sovereignty of other States, and the answer was ineffable, but the United States continued with its intervention plan.

The problem arrived specifically when the discussion touched Latin-American territory. The states in the region did not have any direct influence in the monopoly of power, which is the essential axis to consider a State as “failed”. Therefore, calling such states as the description got worse when taking into consideration that the Latin-American countries assume as ideal state the constitutional model of social and democratic rule of law. The states seek to fulfill the requirements of this model, resulting in a continuity of institutions, making a minimal effort to try to achieve the goals, values, principles and rules that requires the democratic constitutional model. This model becomes a method to demonstrate that the States of the region cannot be classified as failed, because for a democracy to function the state must have the monopoly of power.

It must be assumed that the reports of the Fund For Peace have a scientific value, which in principle cannot be denied. However, it stems from the fact that besides from analyzing indicators that attempt to measure the monopoly of state’s power, there are other indicators that belong to the social and democratic state of law. This makes compatible these indicators with other indicators made by institutions like the World Bank, the Economic Commission for Latin America (ECLA), Transparency International, Latino-barometer, the United Nations Development Program, World Justice Project (WJP), among other institutions.

By analyzing the States in Latin-America, based on the international conventions and covenants on human rights, as well as the democratic principles of American regional law in their abstraction from the Social and Democratic State of Law, the status of Latin-American countries can be categorized. It can be deduced the possibility that the problems

that undermine the region are not necessarily related to the absence of a monopoly of power.

The relevance of the present research is that it allows: First, the comparison of a country like Somalia considered by the academics as the example of a failed State, in contrast to the poorest State of America: Haiti, as well as the comparison between them with the other States of the region; Second, the use of indicators of the Social and Democratic State of Law to explain the behavior of States in Latin America, through the decomposition of the concept; And, Third, it can be related to a theory of “failed states” that is intended to be constructed through the analysis of power as a product of the social contract of individuals and the ideal state for the countries of the region, and for those countries that have chosen the form of State based on democracy, from the point of view that the absolute non-fulfillment of the rules, principles and values derived from the Social and Democratic State of Law translates into a weakness of the monopoly of State Power.

As a result of the investigation, it could be pointed out the following conclusions:

First, the States of Latin America do not constitute States that can be qualified as “failed”, since this qualification only has to correspond to the States that have a real annulment of the monopoly of the State Power. Nevertheless, within the classification that has been proposed it can be determined that most of the States in the region obey the category of "moderately stable", and that the only country that is within States with "weakness or fragility" is Haiti, but it could not be considered as failed State, because that State does not have an absence of the monopoly of Power.

Second: The concept of "States in the process of formation" is also not appropriate to categorize States in Latin-America, since this would mean that the monopoly of power in one of the States has been interrupted and is being formed again. Or that the States have come out of a process of decolonization or protectorate, or have recently become independent, which is not the case of the countries in Latin-America that have been the subject of this research.

Third: So far, according to the treatment of academics, the only State that may have the term "failed" is Somalia, which, when compared to the situation of the Haitian State,

proves sufficiently that Haiti cannot be considered a failed state but much less the other States of the region.

Fourth: The treatment of “failed States” and “weak States” by the United Nations Security Council is aimed at protecting the democratic system, human rights, and the principles of international humanitarian law. The denominations were made based on their interventions on the chapter VII of the Charter of San Francisco, on the basis that the Council has always protected the unity and sovereignty of States. Which is why it has believed in humanitarian aid and development cooperation, although its missions have been commonly criticized but have always preferred the development of states that the extinction of the same as some academics would prefer.

Fifth: The organs of the United Nations have opted for a democratic system of States, although international law does not require a specific form of State. However, American regional law does impose the adoption of the system on the member countries of the Organization of American States (OAS). Therefore, for the Latin American states, one way to assess its functioning is with the indicators that measure the Social and Democratic State of Law, since it is perceived as an ideal State, which tends to be constantly renewed. Moreover, when there is a complete distortion of the values, principles and rules of this state model, there is also a dysfunctional state and a lack of control of the monopoly of power that does not necessarily mean that it is failed but weak.

Sixth: States that have chosen a form of autocratic State can not be evaluated under the same system of indicators that measure democratic states. If they were evaluated under those indicators, it will not attend to objectivity. However, if what is pursued is to evaluate simply the monopoly of power, it could be done under common indicators, but in no way harbor rules, values or principles derived from the Social and Democratic State of Rights.

Seventh: Although legitimacy is a very important point for democratic states, it can not be considered when evaluating the failure of a State. It would not allow to explain some historical events of the region of Latin-America, and other parts of the world, where power was held by dictators, and yet the state still operated with full power monopoly.

Eighth: Violations of human rights, legitimacy, and democratic principles are not synonymous with the absence of the monopoly of power, but simply that the State does not respect such rights. An outstanding example could be North Korea.

Ninth: The Fund For Peace reports published by the journal Foreign Policy from 2005 to 2009, were not based on scientific and well-defined methods, but on arbitrary selection criteria that did not correspond to the reality of the States in Latin-America.

Tenth: After 2009, the Fund For Peace reports tended to be more consistent, since indicators responded in a more scientific way. Which is why recent reports were related to others presented by the World Bank, the United Nations Program Development and other institutions.

Eleventh: The concept of "failing states index" is too narrow to encompass countries that have been evaluated, as well as "index of fragile states". They suggest that states that are contained therein are unsuccessful or fragile. These concepts do not correspond to the inform carried out by the Fund For Peace, so the foundation should consider other names to determine the listing, since the mere inclusion of the Nordic countries question the report and is no more than a mere populist report objective-less.

Twelfth: The analysis of the various indicators, as well as the reports of the OAS, and the United Nations Human Rights Committees, show that States of the region, with the exception of Haiti, try to comply with the human rights and democratic principles, even though the undeniable disadvantages for their full compliance.

Thirteenth: Using the method of indicators of the Social and Democratic State of Law for the evaluation of the countries, allows to clearly observe even what are the problems or shortcomings that present the States of the region in a concrete way. The problems with a higher index were corruption, poverty, inequality, and the lack of political will to change such ills.

Fourteenth: Although the evils of corruption, poverty, inequality, and lack of political will are flaws in the States of the region, it is no less true that they have so far not created a problem with the monopoly of Power. It is the point to determine when a State should be considered as failed, although the nonobservance and worsening of such evils can lead to the lack of control of the monopoly of Power.

Fifteenth: The best way in which the international community can help weak and failed states without affecting sovereignty is through humanitarian aid and development

cooperation, since intervention is a resource that still lacks legitimacy in the International sphere.

Sixteenth: The best classification that can be made is the following: *Strong states*, for those States whose results in the measurement of ideal state are extremely optimum, and at the same time, play a referential role with respect to the other States; *Moderately stable states*, for states whose assessment of the ideal state are not within weak states or within strong states, presenting drawbacks in their states, such as corruption, inequality, poverty, not on a large scale, and in which the struggle to achieve the ideal state is maintained, and there is no questioning the monopoly of the state's coercive power; *Weak or fragile states*, which have serious conflicts with the ideal state, and the monopoly of State coercion power is seriously questioned; And *failed, collapsed, inoperative or failed states*. These four concepts become synonymous, where “failed” is when there is a real annulment of the monopoly of State Power. With this classification, more justice is done to other countries, in addition to obtaining a more objective analysis of States. It does not try to force categories that do not allow the clear distinction between where a state should belong and where another belongs with identical problems and/or categories can support levels or grades.

RESUMEN

Los Estados fallidos y el Estado Social y Democrático de Derecho en los países de América Latina

En el año 2005 la revista Foreign Policy y la Fund For Peace publicaron un informe en la cual constaban 76 Estados que eran considerados como fallidos, en el que había dos categorías; Estados en alerta, que eran países que no cumplían con las funciones esenciales de los Estados, y en los cuales existía una completa anarquía; y, los Estados en peligro, que eran Estados que estaban al borde de ser considerados en alerta, los cuales mostraban un gran deterioro en sus instituciones. Dentro de esos Estados evaluados se encontraban algunos países de América Latina que a todas luces se mostraban en desacuerdo entre los resultados del informe y la realidad que presentaban dichos países, lo que trajo indignación entre algunos líderes políticos de la región. A raíz de ello el debate de los Estados fallidos se trasladó al terreno de los Estados de Latinoamérica, puesto que los mismos, aunque con excepciones, se habían centrado primordialmente en los países de África, y algunos que otros Estados que podían albergar células terroristas.

Desde finales de los 80 y principios de los 90, los órganos de seguridad de los Estados Unidos comenzaron a mostrar más preocupación por aquellos Estados que en el proceso de descolonización habían logrado obtener su independencia, pero que sin embargo no habían podido seguir el buen funcionamiento del Estado, los cuales podían convertirse en focos de inseguridad para los Estados vecinos.

Esos Estados con falencias complejas no podían mantener siquiera niveles mínimos del monopolio del Poder en el territorio en el que ejercían su soberanía, lo que se traducía en una falta de control en grupos que podían representar una amenaza para los demás Estados. Sin embargo, este debate se abrió paso en el mundo académico desde donde se trataba de determinar cuáles eran esos Estados fallidos que podían comprometer la paz de la comunidad internacional, qué aspectos se podrían tomar en cuenta para considerar un Estado como fallido, y la responsabilidad de la comunidad internacional y de las grandes potencias para enfrentar las fallas de tales Estados. Con los atentados del 11 de septiembre del 2001, la preocupación por los Estados fallidos llegó a su punto cumbre, debido a que se convirtió en un estandarte a seguir en un primer plano en la política exterior de los

Estados Unidos, incluso siendo un fundamento de su accionar bélico, encontrando el ejemplo más representativo en la guerra preventiva.

La comunidad internacional y la comunidad académica comenzaron a interesarse aún más por el tema de los Estados fallidos en cuanto al modo de prevención para que los Estados no pudieran caer en el fracaso, sin embargo en la prevención había otro aspecto que apuntaba y comprometía la responsabilidad que tenían los Estados desarrollados ante tal situación, lo que iba relacionado con la ilegitimidad de las potencias para intervenir en la soberanía de los demás Estados, no encontrándose la respuesta inefable, pero los Estados Unidos seguían con su plan de intervención.

El problema viene específicamente con el traslado del debate a la región de Latinoamérica, ya que los Estados de la región no presentan anulación alguna en el monopolio del Poder, el cual es el eje esencial para considerar a un Estado como fallido, partiendo de ello sería incorrecto denominar a tales Estados con ese calificativo, lo que resulta peor al tomar en consideración que los países de Latinoamérica asumen los Convenios y Pactos Internacionales sobre derechos humanos y los principios democráticos del derecho regional americano, teniendo dichos postulados su abstracción en el derecho interno en el modelo constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, lo que se transcribe en una continuidad de las instituciones, así como representa un compromiso por parte de los Estados de realizar el esfuerzo mínimo para tratar de alcanzar los objetivos, valores, principios y reglas que exige el modelo democrático, viniendo a constituir ese modelo un método para demostrar que los Estados de la región no pueden ser calificados como fallidos, pues para que una democracia pueda funcionar el Estado debe tener el monopolio del Poder.

Hay que partir de que los informes de la Fund For Peace tienen un valor científico que en principio no se puede negar, sin embargo el mismo nace del hecho de que aparte de analizar indicadores que intentan medir el monopolio del Poder del Estado, hay otros indicadores que son propios del Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual hace que al establecerse estos indicadores, los mismos sean compatibles con otros indicadores realizados por instituciones como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Transparencia Internacional, Latinobarómetro, el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo, World Justice Project (WJP), entre otras instituciones.

Al realizarse el análisis de los Estados en América Latina, tomando como cuerpo de comparación los Convenios y Pactos Internacionales sobre derechos humanos y los principios democráticos del derecho regional americano, en su abstracción del Estado Social y Democrático de Derecho se puede categorizar el estatus de los mismos, al tiempo que se puede vislumbrar la posibilidad de que los problemas que socavan la región no estén necesariamente relacionados con la ausencia del monopolio del Poder.

La relevancia de la investigación es que permite, primero, la comparación de un país como Somalia considerado por los académicos como el ejemplo de un Estado fallido, con respecto al Estado más pobre de América: Haití, y a la vez con los demás Estados de la región; segundo, el uso de los indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho para explicar el comportamiento de los Estados en Latinoamérica, a través de la descomposición del concepto; y, tercero permite relacionarlo con una teoría de los Estados fallidos que se pretende construir a través del análisis del Poder como producto del contrato social de los individuos y del Estado ideal para los países de la región y para aquéllos países que han elegido la forma de Estado basado en la democracia, desde el enfoque de que el incumplimiento absoluto de las reglas, principios y valores derivados del Estado Social y Democrático de Derecho se traduce en una debilidad del monopolio del Poder de Estado.

La investigación guarda su justificación en el hecho de que el análisis de los Estados considerados fallidos y del Estado Social y Democrático de Derecho permite crear una teoría de los Estados fallidos más acabada que explican los comportamientos históricos de distintos Estados sin necesidad de forzar una teoría, al igual se puede observar un método diferente para la evaluación de los Estados que permitiría analizar en un primer plano indicadores sobre el monopolio del Poder del Estado, y en un segundo plano, permitiría evaluar el Estado Social y Democrático de Derecho, partiendo de sus valores, principios y reglas, por ser el modelo de Estado ideal que han abrazado los países de occidente y muy especialmente los países de Latinoamérica por el influjo de los Tratados y Convenios Internacionales, y de lo cual se puede constatar más fehacientemente los verdaderos problemas que achacan a la región.

En ese sentido, el objetivo de la investigación es determinar si los países de la región de Latinoamérica obedecen a Estados fallidos o fracasados, o si obedecen a Estados frágiles o débiles o a otro tipo de categoría, y en caso de ser así precisar cuáles serían esas debilidades que presentan los Estados, y señalar basado en qué sistema de comparación podríamos decir que tienen debilidades, pues ahí es donde juega un papel interesante el Estado ideal al cual se refería Kant, que para los países de la región es ostentado en la fórmula de Estado Social y Democrático de Derecho y que a su vez encuentra su fundamento en el contrato social, en ese contexto se hace necesario aplicar los indicadores del modelo constitucional de Estado para identificar el cumplimiento sobre los mismos que presentan los Estados de la región tomando en cuenta que son Estados democráticos y verificar cuáles serían esos problemas que socavan a la sociedad Latinoamérica y relacionarlos con el monopolio del Poder del Estado.

A raíz de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

Primero: Los Estados de América Latina no constituyen Estados que puedan ser calificados como fallidos, pues dicho calificativo sólo ha de corresponderle a los Estados que tienen una anulación real del monopolio del Poder del Estado, sin embargo dentro de la clasificación que se ha propuesto se tiene que determinar que la mayor parte de los Estados en la región obedecen a la categoría de “moderadamente estables”, y que el único país que se encuentra dentro de Estados con “debilidad o fragilidad” es Haití, pero que sin embargo no podría ser considerado como Estado fallido, en virtud de que dicho Estado no tiene una ausencia del monopolio del Poder.

Segundo: El concepto de “Estados en proceso de formación” tampoco es propio para categorizar a los Estados en Latinoamérica puesto que esto equivaldría a decir que el monopolio del Poder en uno de los Estados ha sido interrumpido y se está formando otra vez, o que los Estados han salido de un proceso de descolonización o protectorado o se han recientemente independizado, lo cual no es el caso de los países en América Latina que han sido objeto de la investigación.

Tercero: Hasta el momento según el tratamiento de los académicos el único Estado que puede tener el calificativo de fallido es “Somalia”, el cual al ser comparado con la situación del Estado haitiano, prueba suficientemente que Haití no puede ser considerado como un Estado fallido pero que mucho menos los demás Estados de la región.

Cuarto: El tratamiento dado a los Estados fallidos y a los Estados débiles por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas van dirigidos a la protección del sistema democrático, a los derechos humanos, a los principios del derecho internacional humanitario, basando sus intervenciones en el capítulo VII de la Carta de San Francisco, resultando que el Consejo siempre ha protegido la unidad y soberanía de los Estados, por eso ha creído en la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, aunque comúnmente sus misiones han sido criticadas, pero siempre han preferido el desarrollo de los Estados que la extinción de los mismos como preferirían algunos académicos.

Quinto: Los Órganos de las Naciones Unidas se han decantado por el sistema democrático de los Estados, aunque el derecho internacional no exige una forma determinada de Estado, pero el derecho regional americano sí le impone la adopción del sistema a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que para los Estados de Latinoamérica una manera de evaluar su funcionamiento es con los indicadores que miden el Estado Social y Democrático de Derecho, puesto que el mismo es percibido como un Estado ideal, que tiende a renovarse constantemente por los principios que alberga, y como tal cuando hay una completa distorsión de los valores, principios y reglas de dicho modelo de Estado, también hay una disfuncionalidad del Estado y una falta de control del monopolio del Poder que no necesariamente significa que es fallido pero sí que es débil.

Sexto: Los Estados que han elegido una forma de Estado autocrática no pueden ser evaluados bajo el mismo sistema de indicadores que miden los Estados democráticos, pues de hacerse de ese modo no se atenderá a la objetividad, sin embargo si lo que se quiere es evaluar simplemente el monopolio del Poder, sí podría hacerse bajo indicadores comunes, pero que en nada alberguen reglas, valores o principios derivados del Estado Social y Democrático de Derechos.

Séptimo: Si bien la legitimidad es un punto muy importante para los Estados democráticos esta no puede ser considerada al momento de evaluar el fracaso de un Estado, pues no permitiría explicar algunos acontecimientos históricos de la región de Latinoamérica y otras partes del mundo, en el que el Poder era detentado por dictadores, y sin embargo aún el Estado continuaba funcionando con pleno monopolio del Poder.

Octavo: Las violaciones a derechos humanos, a la legitimidad, a los principios democráticos no son sinónimos de ausencia del monopolio del Poder, sino simplemente de que dicho Estado no respeta tales derechos, como sería un ejemplo sobresaliente el e Corea del Norte.

Noveno: Los Informes de la Fund For Peace publicados a través de la revista Foreign Policy, desde el 2005 hasta el 2009, no obedecieron a métodos científicos y bien definidos, sino a criterios arbitrarios de selección que no se correspondían con la realidad de los Estados en Latinoamérica.

Décimo: Luego del 2009, los informes de la Fund For Peace tendieron a ser más coherentes puesto que los indicadores respondían de manera más científica, razón por la cual los informes guardaban relación con otros informes realizados por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y otras instituciones.

Décimo primero: El concepto de “índice de Estados fallido” es un término demasiado restringido para englobar los países que han sido evaluados, al igual que “índice de Estados frágiles”, pues dan a considerar que los Estados que están contenidos en él son fallidos o frágiles, conceptos los cuales no se corresponden con la tarea realizada por la Fund For Peace, por lo que la fundación debiera considerar otros nombres para determinar el listado, pues la simple inclusión de los países nórdicos pone en entredicho el informe y no pasa de ser un mero informe populista y poco objetivo.

Décimo segundo: El análisis de los distintos indicadores, así como los informes de la OEA y los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dan muestra de que los Estados de la región, con excepción de Haití, tratan de cumplir con las exigencias de los derechos humanos y los principios democráticos, aunque con inconvenientes innegables para su total cumplimiento.

Décimo tercero: El usar el método de los indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho para la evaluación de los países permite observar claramente incluso cuáles son los problemas o falencias que presentan los Estados de la región de manera concreta, siendo los más destacados, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y la falta de voluntad política para cambiar dichos males.

Décimo cuarto: Si bien los males de la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y la falta de voluntad política son fallas de los Estados de la región, no menos cierto es que los mismos hasta el momento no han originado problema con el monopolio del Poder, que es el punto para determinar cuándo un Estado debe ser considerado como fallido, aunque la inobservancia y empeoramiento de dichos males puede dar lugar a la falta de control del monopolio del Poder.

Décimo quinto: La mejor manera en que la comunidad internacional puede ayudar a los Estados débiles y fallidos sin afectar la soberanía es a través de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo, pues la intervención es un recurso que aún no encuentra legitimidad en la esfera internacional.

Décimo sexto: La mejor clasificación que se puede realizar es la siguiente: *Estados fuertes*, para aquellos Estados cuyos resultados en la medición del Estado ideal sean sumamente óptimos, y a la vez, cumplen con un papel referencial respecto a los demás Estados; *Estados moderadamente estables*, para los Estados cuya evaluación del Estado ideal no están dentro de los Estados débiles ni dentro de los Estados fuertes, los cuales presentan inconvenientes de funcionamiento en sus Estados, como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, no a grandes escalas, y en lo que se mantiene la lucha por alcanzar el Estado ideal, y no hay un cuestionamiento al monopolio del Poder de coacción del Estado; los *Estados débiles o frágiles*, los cuales presentan serios conflictos con el Estado ideal, además que el monopolio del Poder de coacción del Estado está seriamente cuestionado; y, los *Estados fracasados, colapsados, inoperantes o fallidos*, estos cuatro conceptos devienen como sinónimos, y es cuando hay una anulación real del monopolio del Poder del Estado. Con esta clasificación se les hace más justicia a otros países, además de que se obtiene un análisis más objetivo de los Estados, y no trata de forzar categorías que no permiten la distinción clara entre dónde debe pertenecer un Estado y dónde pertenece otro con idénticos problemas. Las categorías pueden admitir niveles o grados.

INTRODUCCIÓN

En el año 2005 la revista *Foreign Policy* y la *Fund For Peace* publicaron un informe en la cual constaban 76 Estados que eran considerados como fallidos, en el que había dos categorías; Estados en alerta, que eran países que no cumplían con las funciones esenciales de los Estados, y en los cuales existía una completa anarquía; y, los Estados en peligro, que eran Estados que estaban al borde de ser considerados en alerta, los cuales mostraban un gran deterioro en sus instituciones. Dentro de esos Estados evaluados se encontraban algunos países de América Latina que a todas luces se mostraban en desacuerdo entre los resultados del informe y la realidad que presentaban dichos países, lo que trajo indignación entre algunos líderes políticos de la región. A raíz de ello el debate de los Estados fallidos se trasladó al terreno de los Estados de Latinoamérica, puesto que los mismos, aunque con excepciones, se habían centrado primordialmente en los países de África, y algunos que otros Estados que podían albergar células terroristas.

Desde finales de los 80 y principios de los 90, los órganos de seguridad de los Estados Unidos comenzaron a mostrar más preocupación por aquellos Estados que en el proceso de descolonización habían logrado obtener su independencia, pero que sin embargo no habían podido seguir el buen funcionamiento del Estado, los cuales podían convertirse en focos de inseguridad para los Estados vecinos.

Esos Estados con falencias complejas no podían mantener siquiera niveles mínimos del monopolio del Poder en el territorio en el que ejercían su soberanía, lo que se traducía en una falta de control en grupos que podían representar una amenaza para los demás Estados. Sin embargo, este debate se abrió paso en el mundo académico desde donde se trataba de determinar cuáles eran esos Estados fallidos que podían comprometer la paz de la comunidad internacional, qué aspectos se podrían tomar en cuenta para considerar un Estado como fallido, y la responsabilidad de la comunidad internacional y de las grandes potencias para enfrentar las fallas de tales Estados. Con los atentados del 11 de septiembre del 2001, la preocupación por los Estados fallidos llegó a su punto cumbre, debido a que se convirtió en un estandarte a seguir en un primer plano en la política exterior de los Estados Unidos, incluso siendo un fundamento de su accionar bélico, encontrando el ejemplo más representativo en la guerra preventiva.

La comunidad internacional y la comunidad académica comenzaron a interesarse aún más por el tema de los Estados fallidos en cuanto al modo de prevención para que los Estados no pudieran caer en el fracaso, sin embargo en la prevención había otro aspecto que apuntaba y comprometía la responsabilidad que tenían los Estados desarrollados ante tal situación, lo que iba relacionado con la ilegitimidad de las potencias para intervenir en la soberanía de los demás Estados, no encontrándose la respuesta inefable, pero los Estados Unidos seguían con su plan de intervención.

El problema viene específicamente con el traslado del debate a la región de Latinoamérica, ya que los Estados de la región no presentan anulación alguna en el monopolio del Poder, el cual es el eje esencial para considerar a un Estado como fallido, partiendo de ello sería incorrecto denominar a tales Estados con ese calificativo, lo que resulta peor al tomar en consideración que los países de Latinoamérica asumen los Convenios y Pactos Internacionales sobre derechos humanos y los principios democráticos del derecho regional americano, teniendo dichos postulados su abstracción en el derecho interno en el modelo constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, lo que se transcribe en una continuidad de las instituciones, así como representa un compromiso por parte de los Estados de realizar el esfuerzo mínimo para tratar de alcanzar los objetivos, valores, principios y reglas que exige el modelo democrático, viniendo a constituir ese modelo un método para demostrar que los Estados de la región no pueden ser calificados como fallidos, pues para que una democracia pueda funcionar el Estado debe tener el monopolio del Poder.

Hay que partir de que los informes de la Fund For Peace tienen un valor científico que en principio no se puede negar, sin embargo el mismo nace del hecho de que aparte de analizar indicadores que intentan medir el monopolio del Poder del Estado, hay otros indicadores que son propios del Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual hace que al establecerse estos indicadores, los mismos sean compatibles con otros indicadores realizados por instituciones como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Transparencia Internacional, Latinobarómetro, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, World Justice Project (WJP), entre otras instituciones.

Al realizarse el análisis de los Estados en América Latina, tomando como cuerpo de comparación los Convenios y Pactos Internacionales sobre derechos humanos y los principios democráticos del derecho regional americano, en su abstracción del Estado Social y Democrático de Derecho se puede categorizar el estatus de los mismos, al tiempo que se puede vislumbrar la posibilidad de que los problemas que socavan la región no estén necesariamente relacionados con la ausencia del monopolio del Poder.

La relevancia de la investigación es que permite, primero, la comparación de un país como Somalia considerado por los académicos como el ejemplo de un Estado fallido, con respecto al Estado más pobre de América: Haití, y a la vez con los demás Estados de la región; segundo, el uso de los indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho para explicar el comportamiento de los Estados en Latinoamérica, a través de la descomposición del concepto; y, tercero permite relacionarlo con una teoría de los Estados fallidos que se pretende construir a través del análisis del Poder como producto del contrato social de los individuos y del Estado ideal para los países de la región y para aquéllos países que han elegido la forma de Estado basado en la democracia, desde el enfoque de que el incumplimiento absoluto de las reglas, principios y valores derivados del Estado Social y Democrático de Derecho se traduce en una debilidad del monopolio del Poder de Estado.

La investigación guarda su justificación en el hecho de que el análisis de los Estados considerados fallidos y del Estado Social y Democrático de Derecho permite crear una teoría de los Estados fallidos más acabada que explican los comportamientos históricos de distintos Estados sin necesidad de forzar una teoría, al igual se puede observar un método diferente para la evaluación de los Estados que permitiría analizar en un primer plano indicadores sobre el monopolio del Poder del Estado, y en un segundo plano, permitiría evaluar el Estado Social y Democrático de Derecho, partiendo de sus valores, principios y reglas, por ser el modelo de Estado ideal que han abrazado los países de occidente y muy especialmente los países de Latinoamérica por el influjo de los Tratados y Convenios Internacionales, y de lo cual se puede constatar más fehacientemente los verdaderos problemas que achacan a la región.

En ese sentido, el objetivo de la investigación es determinar si los países de la región de Latinoamérica obedecen a Estados fallidos o fracasados, o si obedecen a Estados frágiles

o débiles o a otro tipo de categoría, y en caso de ser así precisar cuáles serían esas debilidades que presentan los Estados, y señalar basado en qué sistema de comparación podríamos decir que tienen debilidades, pues ahí es donde juega un papel interesante el Estado ideal al cual se refería Kant, que para los países de la región es ostentado en la fórmula de Estado Social y Democrático de Derecho y que a su vez encuentra su fundamento en el contrato social, en ese contexto se hace necesario aplicar los indicadores del modelo constitucional de Estado para identificar el cumplimiento sobre los mismos que presentan los Estados de la región tomando en cuenta que son Estados democráticos y verificar cuáles serían esos problemas que socavan a la sociedad Latinoamérica y relacionarlos con el monopolio del Poder del Estado.

Ámbito de investigación

La presente investigación trata de despejar las siguientes hipótesis: a) Los países de América Latina no son fallidos o fracasados; b) La medición de la ausencia del monopolio del Poder de los Estados, es lo que determina si un Estado es fallido, débil, o fuerte, lo que se aplica a todos los Estados sin importar su forma; c) Las evaluaciones sobre derechos humanos, principios democráticos o legitimidad no son indicadores que miden directamente el monopolio del Poder del Estado, pero ayudan para evaluar el funcionamiento de los Estados democráticos; d) El simple hecho de que se pueda medir un grado de funcionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho es sinónimo de que el Estado no es fallido, pues implica que se tiene control del monopolio del Poder; y, e) Se debe determinar los problemas que afectan a la región y ver si guardan relación con la falta del monopolio del Poder del Estado .

El fin es el análisis del Estado Latinoamericano, las fallas que puede presentar y la causas que la motivan, y si dichas causas hacen presumir que el Estado es fallido, para ello se tomará en consideración: a) la teoría del Estado en un estudio interdisciplinario, pero haciendo hincapié en el Derecho Internacional; b) el estudio de los Estados fallidos y tratar de forjar una teoría de los mismos; c) el análisis comparativo de la situación de los Estados de Somalia y Haití, y las decisiones que los órganos de las Naciones Unidas han tenido en el tratamiento a dichos Estados; d) evaluar el monopolio del Poder en relación al Estado democrático y definir a qué se refiere dicho modelo; y, e) el resultado de los

indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho, como mecanismo para ver los problemas reales que afectan a los Estados y su vinculación con el monopolio del Poder.

Metodología

Esta investigación tiene como fundamento central que los indicadores del monopolio del Poder se le pueden aplicar a cualquier Estado para determinar la ausencia del mismo, pero cuando se toman en cuenta aspectos democráticos los Estados autocráticos y los Estados democráticos deben ser evaluados de distintas maneras para mostrar las debilidades que los mismos ostentan.

La investigación en tanto se organiza a través del estudio de los países de América Latina, tomando en consideración la forma de Estado que han elegido los mismos, así como el Estado ideal al que aspiran los individuos como resultado de los anhelos de aquéllos en el contrato social, y de la comparación de los aspectos formales del Estado ideal con las mediciones realizadas por instituciones internacionales.

También se utiliza el método comparativo como una manera de mostrar qué es un Estado fallido según el análisis del Estado de Somalia, en lo relativo al Estado haitiano, y por ende a los demás Estados de Latinoamérica; lo mismo permite tener una noción clara de lo que significa ser un Estado fallido.

Para ello se valoran distintas fuentes, primordialmente el Derecho Internacional, las relaciones internacionales, la política exterior, la teoría del Estado, el derecho constitucional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos.

Breve descripción del contenido

Para la investigación se han elaborado cinco capítulos. En el primero, se trata todo lo concerniente al Estado, su formación a través de la historia, los elementos que lo componen, la relación del derecho con el Poder, las formas de Estado, así como las formas de gobierno, el Estado como el sujeto primordial del Derecho Internacional, el

reconocimiento de los Estados, el reconocimiento de los gobiernos, la descertificación de los Estados, la extinción de los Estados y la crisis de los mismos.

En el segundo capítulo se tratan los Estados fallidos, la conceptualización de los mismos, el surgimiento del llamado Estado fallido en los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos y posteriormente a nivel académico, la clasificación de los Estados en base a sus falencias y la búsqueda de una clasificación adecuada, el establecimiento del modelo de Estado ideal, con fines de evaluar la funcionalidad de los Estados en Latinoamérica.

En el tercer capítulo se analiza la situación del Estado de Somalia, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto a dicho Estado, así como el monopolio del Poder del Estado somalí, por igual se analiza la situación del Estado haitiano, las resoluciones del Consejo de Seguridad y los informes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la crisis haitiana, el monopolio del Poder en el Estado haitiano, la comparación entre ambos Estados, y la comparación de los mismos respecto a América Latina.

En el cuarto capítulo se explicará todo lo concerniente a los derechos humanos y los principios democráticos, la relación de estos con el monopolio del Poder, y la abstracción de los mismos en el derecho interno en la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, descomponiéndolo en cuanto a las implicaciones de la democracia y a los derechos humanos, poniendo de relieve los derechos sociales.

En el quinto capítulo se analizarán distintos indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho de diferentes instituciones internacionales, así como se observarán los informes de la OEA en lo concerniente a los procesos electorales en la región, y también los informes del Comité para el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los informes del Comité para el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los problemas que impiden que los Estados se conviertan en Estados fuertes.

CAPÍTULO I. ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y A LA CRISIS DEL MISMO

Para el análisis de los Estados fallidos se debe recurrir a distintas disciplinas como el derecho constitucional, la teoría del Estado, la ciencia política, pero muy especialmente al derecho internacional y a las relaciones internacionales, como un modo de estudio del Estado desde distintos enfoques. La teoría del Estado es la disciplina que intenta describir el origen y el fin último del Estado, aunque como disciplina data de la segunda mitad del siglo XX, luego de dicho concepto ser introducido en la Alemania pensante, siendo dicha disciplina la que nos lleva a estudiar el comportamiento de los Estados por encima de sus sistemas jurídicos. Estudiar por ende el Estado más allá de su instauración jurídica conlleva a conocer con profundidad su estructura, sus elementos principales, las causas que motivan su accionar, su comportamiento con relación a los gobernados así como la manera en que actúa al interactuar con otros Estados, pero como ya dijimos no limitándose a lo político jurídico, sino simplemente observando su manera de obrar.

Sin embargo, aún subsisten algunos inconvenientes entre la teoría del Estado y la Ciencia Política, pues “Las fronteras entre la ciencia política y la teoría del Estado son imprecisas... hoy predomina la opinión de que la ciencia política se diferencia de la teoría del Estado en que la primera es una ciencia práctica y valorativa, y la segunda teórica y libre de valoraciones”¹. Esto se debe a que la teoría del Estado es una ciencia extremadamente joven por ello como todas las ciencias al separarse de la filosofía aún después de muchos años mantienen ciertos lazos, lo que también ocurre en su relación con la ciencia política.

Hay que hacer referencia a estas dos ciencias puesto que las mismas estudian al Estado teniendo objetos distintos. En cuanto al Derecho Constitucional, cuyo objeto de estudio no es debate entre los doctrinarios; se puede definir como la ciencia que estudia el modo de cómo se organiza y se ordena el Estado jurídicamente, así como la relación jurídica de éste con los individuos, y a su vez traza las pautas de relación entre los mismos individuos. O sea, que partiendo de aquí no cabe la menor duda de que cualquier otra definición gira en el entorno de lo antes expuesto. El Derecho Constitucional es una herramienta que se

¹ HELLER, H. (2012): *Teoría del Estado*, Ed. Fondo de Cultura Económico, México D. F., pág. 81.

utilizará en la investigación por su carácter jurídico político para la organización del Estado, máxime en cuanto al modelo de Estado Social y Democrático de Derecho como configuración interna de las actuales exigencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los principios democráticos exigidos en el sistema regional americano².

Mientras que el derecho internacional es el resultado de un grupo de normas e instituciones que tratan de regular la sociedad internacional³. De lo cual se colige que, en primer lugar, hay una comunidad internacional distinta a la comunidad que existe a lo interno de los Estados, segundo, se constata que hay un derecho internacional diferente a los ordenamientos jurídicos del Estado, y, tercero, lo antes mencionado muestra que hay una relación entre la sociedad internacional y el derecho internacional⁴. Lo interesante en el derecho internacional es que tiene una ardua tarea por los constantes problemas que surgen con los sujetos del derecho internacional, así como por el trato que debe aplicar a esos Estados reputados como fallidos, más en el ámbito de la representación internacional y del cuidado de su soberanía.

En tanto que las relaciones internacionales, es definida por Truyol como “aquellas relaciones entre individuos y colectividades humanas que en su génesis y su eficacia no se agotan en el seno de una comunidad diferenciada y considerada como un todo, que fundamentalmente (pero no exclusivamente) es la comunidad política o Estado, sino que

² En lo adelante ESDD.

³ DUPUY citado en SALMÓN, E. (2014): *Curso de derecho internacional público*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, pág. 13.

⁴ *Ibidem*, pág. 13; Vid. MONROY CABRA, M. G. (2002): *Derecho Internacional Público*, Ed. Temis, S. A., Bogotá, pág. 3; HERDEGEN, M. (2005): *Derecho internacional público*, Universidad Nacional Autónoma de México/ Fundación Konrad Adenauer, México D. F., pág. 1; ROJAS AMANDI, V. M. (2010): *Derecho Internacional Público*, NOSTRA ediciones, México, D. F., pág. 15; hablando específicamente sobre el derecho internacional público se expresa que: “es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional”; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., SAENZ DE SANTA MARÍA, P. A. (2008): *Curso de derecho internacional público*, 4ta. Ed., Editora Thomson Civitas, Pamplona, pág. 97; RODRÍGUEZ CABRER, M. A. (2002): *Definiciones, notas y apuntes en el derecho internacional público*, Ed. Unicaribe, Santo Domingo, pág. 21; RIZZO ROMANO, A. (1994): *Derecho internacional público*, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, pp. 18-24; DIEZ DE VALASCO, M. (2007): *Instituciones de derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid, pp.59-79; RUZIÉ, D. (2002); *Droit international public*, DALLOZ, París, pág. 1; GAMBOA SERAZZI, F. (1992): *Manual de derecho internacional público*, LOM Ediciones, Santiago, pág. 21; VERDROSS, A. (1976): *Derecho internacional público*, Ed. AGUILAR, Madrid, pág. 3; REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, J. L. (2010): *Derecho internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 37; GAVIRIA LIÉVANO, E. (1998): *Derecho internacional público*, Ed. Temis, Bogotá, pág. 1; RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J. (2007): *Lecciones de derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 64.

trascienden sus límites”⁵. En el mismo tenor Celestino del Arenal manifiesta que: “Hoy, la sociedad internacional se presenta como una colectividad humana en la que encuentran su correcto sentido y alcance la mayoría de los más graves problemas que afectan al hombre y a la humanidad (...). De ahí que las relaciones internacionales, como ciencia de la sociedad internacional, aparezcan como la ciencia llave y central de la consideración del hombre, como ser que vive en sociedad”⁶. Las relaciones internacionales permiten visualizar el conglomerado de personas que viven en los Estados fallidos y valorarlos al momento de buscar una solución a su problemática.

Por igual la política exterior en el análisis de los Estados fallidos guarda una consideración muy estimable; la misma se entiende como “aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”⁷. La relación de los Estados fallidos con la política exterior de las potencias mundiales es de una profunda estrechez, puesto que incluso el estudio de dichos Estados se desarrolla como un tema de seguridad, que sirvió de base para definir la política exterior de los Estados Unidos⁸.

El Estado fallido, sin querer entrar en su análisis inmediato ha sido, es y será un tema de muchos debates, los cuales vienen a surgir después de la aparición de dicho concepto⁹, hecho éste que hace merecer que todas las ciencias pongan sus ojos en este fenómeno para su estudio y conocimiento, pues indudablemente por la vigencia del mismo es posible augurar aún toda una guerra de opiniones al respecto, ya que implican una responsabilidad para toda la comunidad internacional y para los ciudadanos de los países

⁵ Cit. por BARBE, E. (1995): *Relaciones Internacionales*, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 19.

⁶ Cit. por BARBER, E., *op. cit.*, pág. 26. Vid. CALDUCH CERVERA, R.: “Concepto y método de las relaciones internacionales”, en *Lecturas básicas para introducción al Estudio de Relaciones Internacionales*, Cid Capetillo, Ileana (dir), Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2001, pág. 7 y ss. Vid. ZORGBIBE, C. (1997): *Historia de las relaciones internacionales*, tomo I, Alianza Editorial, Madrid; y Vid. ZORGBIBE, C. (1997): *Historia de las relaciones internacionales*, tomo II, Alianza Editorial, Madrid; Vid. MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 7; BARBOZA, J. (2003): *Derecho internacional público*, Ed. Zavallá, Buenos Aires, pág. 11; AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M. (Ed), Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2004, pág. 53.

⁷ CALDUCH CERVERA, R.: “Dinámica de la sociedad internacional”, *CEURA*, Madrid, 1993, pág. 3. En <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib2cap1.pdf>

⁸ En lo adelante EE.UU.

⁹ Aunque los países en las condiciones fallidas hayan aparecido a lo largo de nuestra historia según la doctrina imperante del Estado es con la aparición del concepto que comienza a surgir el debate entre los académicos.

de pobreza extrema, así como también, para los ciudadanos y gobernantes de los países desarrollados.

I.1 El Estado y su relación con el Poder

El Poder en su término sencillo es definido por la Real Academia de España como “Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo” y “Gobierno de un país” y “Suprema potestad rectora y coactiva del Estado”¹⁰. Todas estas definiciones son propias de lo que realmente significa el Poder en el sentido que interesa, es decir en su relación con el Estado y de todo lo que de él se desprende.

El profesor Maurice Duverger establece lo siguiente: “Debe efectuarse una distinción fundamental entre el poderío material y el Poder; el primero reposa solamente en la posibilidad de coaccionar a otro; el segundo se basa, además, en la creencia del coaccionado de que es legítimo aceptar la coacción”¹¹. De lo dicho, ambas categorizaciones tienen importancia, sin embargo para los Estados democráticos la relevancia está en la segunda categorización del Poder que ha definido el profesor Duverger, simplemente para dar a entender que el Poder que se relaciona con el Estado es aquél que es legitimado por la conformación de todos los ciudadanos y que guarda una estrecha relación con el Estado y su origen.

Continuando con el Estado, Heller expresa que “El Estado, como toda organización, es un poder engendrado por varios factores pero que, por su parte, actúa unitariamente, y cuyos actos no pueden ser imputados ni a los órganos exclusivamente ni a la ordenación entrelazante en sí misma y ni siquiera a todos los actuales partícipes”¹². Con esta afirmación de Heller, deja ver que en toda la organización existe un Poder o se reconoce un Poder, el cual nace en el mismo modo en el que nace el Poder del Estado; es decir, donde hay una comunidad organizada hay un Poder.

Sin embargo, el Poder que nace de la comunidad estatal tiende a ser distinto en cuanto a la grandeza del mismo. Es muy aceptado en el mundo de la sociología y la política que el Poder es sólo uno, por lo que la naturaleza del Poder es la misma tanto en una

¹⁰ Real Academia Española (<http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=poder>).

¹¹ DUVERGER, M. (1982): *Instituciones políticas y derecho constitucional*, Ed. Ariel, Barcelona, pág. 26.

¹² HELLER, H., *op. cit.*, pág. 303.

organización como en el Estado, pero la estructura y organización de este Poder estatal suelen ser más complejas, y a su vez, este Poder que nace de la comunidad estatal es un Poder aplastante, por el que, como veremos más adelante, debe valerse de otras herramientas para protegerse a sí mismo y por ende a la comunidad y a los individuos que la conforman.

Max Weber tratando de definir al Estado y la relación que guarda con el Poder entiende que hay una sola coacción legítima en tanto que la organización del Estado la permita o la señale, siendo el monopolio del Poder una característica esencial del Estado tanto como su aspecto instituto racional y de empresa continuada¹³. Weber habla sobre el monopolio que solamente ostenta el Estado, en vista de que incluso el Poder disciplinario que tenía el padre, cuando existía el señor de la casa, en el cual podía disponer de la vida de los hijos de los esclavos, había pasado a manos del Estado, y sólo le quedaba al padre un poco de esa potestad que el mismo Estado había permitido o delegado¹⁴.

Foucault también hace referencia al Poder, cuando lo relaciona con los métodos punitivos, las técnicas de Poder, las relaciones de Poder, la justicia penal y el cuerpo político y la relación de estos con el castigo. Foucault analiza el Poder desde el punto de vista de su expresión en el castigo y en todo el proceso penal, en cuyas partes se manifiesta un poco de ese Poder¹⁵.

Para Rousseau el Poder deriva de que “Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y nosotros recibimos además a cada mimbrio como parte indivisible del todo”¹⁶ y a raíz del cual se toma el “cuerpo político, que es llamado por sus miembros Estado, cuando es pasivo; soberano, cuando es activo; poder, al compararlo a sus semejantes; respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo”¹⁷.

¹³ WEBER, M. (2002): *Economía y Sociedad, Esbozo de sociología comprensiva*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid, pág. 45; Vid. GUZZINI, S.: “El poder en Max Weber” en *Revista de Relaciones Internacionales*, Grupo de Estudio de Relaciones Internacionales (GERI) –UAM, núm. 30, octubre 2015 – Enero 2016, pp. 97-116.

¹⁴ *Ibidem*, pág. 45.

¹⁵ FOUCAULT, M. (2003): *Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión*, Ed. Siglo veintiuno editores, Buenos Aires; vid. FOUCAULT, M. (2000): *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Ed. Alianza Editorial Madrid, Madrid.

¹⁶ ROUSSEAU, J. J. (2007): *Contrato social o principios de derecho político*, Ed. Espasa Calpe, S. A., Madrid, pág. 46.

¹⁷ *Ibidem*, pág. 47.

Desde el derecho internacional se entiende que el Poder es “la capacidad de la organización estatal de establecer y hacer funcionar un orden político interno (soberanía interna) y de actuar de manera independiente en el marco del DIP (soberanía externa)”¹⁸. El alcance que en este caso se le atribuye a la soberanía es relativo, en tanto que el Poder del Estado ha de estar a merced del Derecho Internacional Público, de lo que el Poder de un Estado se confina por el Poder soberano de los otros Estados, muestra de esto, es la ingente cantidad de tratados internacionales que se han celebrado y que están en la agenda internacional; las limitaciones del Estado encuentra su razón de ser en los derechos humanos¹⁹.

En el mismo sentido, el ordenamiento internacional delimita el radio de acción del Poder del Estado atribuyéndole, su influencia en el territorio, en su población, y en las relaciones con los demás Estados, calificándose el ejercicio de dicho Poder, acorde a su objeto, como territoriales, personales y relacionales; a) ese Poder del Estado se expresa en una dimensión de espacio, terrestre, aéreo, y el mar territorial, no pudiendo el Estado violentar esta delimitaciones; b) los Poderes del Estado son el resultado de adquirir la personalidad jurídica internacional, que se manifiesta en la creación del derecho internacional por parte del Estado; y c) el Estado cuida de que se cumplan las normas internacionales en el territorio sobre el cual ejerce su soberanía como sobre la relación con los demás Estados²⁰.

Elizabeth Salmón, hablando sobre el Poder en las relaciones entre Estados, manifiesta que en el foro internacional, las potencias han tratado de reafirmar su supremacía tanto en iure como en facto, lo que se refleja en las reservas de Poder, en la ágoras exclusivas, en los clubes como la Santa Alianza y el Concierto europeo. Esa fórmula de permanecer con Poder se hizo notoria en las guerras napoleónicas, puesto que las potencias que participaron del Congreso de Viena aprovecharon el debilitamiento de los revolucionarios e intentaron equilibrar el Poder en Europa, y buscar un estandarte político diferente, que consignara el principio de legitimidad, frenando con ello las ideas libertarias posteriores

¹⁸ ROJAS AMANDI, V. M., *op. cit.*, pág. 36.

¹⁹ *Ibidem*, pág. 36.

²⁰ GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., SAENZ DE SANTA MARÍA, P. A., *op. cit.*, pp. 480-481.

a la Revolución Francesa²¹. Por ello Onuma dispone que “la sociedad internacional es una sociedad donde la distribución del poder es extremadamente asimétrica”²².

Pero es necesario tomar el Poder en la forma concebida por Duverger tanto en su manera de poder material como en su forma de Poder, el cual encuentra legitimación en la aceptación por parte de las personas sobre la cual se ejerce dicho Poder, pues tanto el Poder por el cual se coacciona a las personas, como aquél que es aceptado por los individuos deben ser monopolizados por el Estado, sin, en principio, importar la legitimidad.

I.2 Origen del Estado y su legitimación

En este punto es importante resaltar que el Estado ha sido el resultado del acuerdo de los individuos que lo conforman, sin importar que dicho acuerdo se haya dado de forma tácita o que los ciudadanos se hayan puesto de acuerdo al momento de dar su consentimiento. En tal sentido, Aristóteles manifiesta que “existe en el hombre un instinto natural que lo impulsa, no sólo a entrar en relación con sus semejantes (sociabilidad natural del hombre), sino, de manera precisa, a formar con ellos la sociedad política”²³.

Desde un punto de vista histórico, Aristóteles afirma que:

En la historia de la humanidad, o, más exactamente, de las comunidades humanas, llega un momento en que los hombres experimentan la necesidad vaga, indeterminada, de un bien que sobrepasa su bien particular inmediato y que, al mismo tiempo, sería capaz de garantizarlo y de promoverlo. El mismo constituye el bien común o público, consistente en un régimen de paz, de coordinación de esfuerzos, de ayuda mutua organizada. Por su razón, el hombre se ha dado cuenta de que el medio de realizar tal régimen es la reunión de todos en una agrupación específica que tenga como fin el bien público²⁴.

En el mismo tenor Santo Tomás de Aquino expresa que la naturaleza es quien motiva al hombre a formar la sociedad política; mas es la voluntad de los seres humanos la que ha dado paso a las distintas sociedades, tanto antiguas como modernas. En virtud de lo cual

²¹ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 32.

²² *Ibidem*, pág. 32; en el mismo sentido vid. MERLE, M., *op. cit.*, pp. 171 y ss; vid. BARBOZA, J., *op. cit.* 24.

²³ Citado por DABIN, J. (2003): *Doctrina General del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 92.

²⁴ *Ibidem*, pág. 92.

el instinto natural no ha sido suficiente. Los seres humanos han concretizado la voluntad en el pacto explícito y también en el consenso implícito de la población, de la fuerza o de una negociación, o de un arreglo de la diplomacia, o de armonizar dichas modalidades. La mayor parte de las veces, la tarea se ha instituido paulatinamente, a raíz de diferentes acontecimientos, ya sea una invasión o cooperaciones múltiples, del acto de hombre sobre los demás hombres²⁵.

Sin embargo, a la disyuntiva del consenso o la falta de consenso Max Weber expresa que:

...contrariamente a lo que pudiera indicar su contraposición típico-ideal, ambas formas de legitimación no se hallan del todo desvinculadas entre sí. La aceptación real, el consenso verdadero, también puede justificar éticamente a un orden estatal, partiendo, en primer lugar, de la autonomía ética del individuo es decir, de que las convicciones de conciencia de éste constituyen una base suficiente de legitimación ética y, en segundo término, de que el consenso que sostiene al orden estatal es expresión de dichas convicciones²⁶.

El Estado, el Poder y la legitimidad han sido objeto de constantes estudios por parte de distintos doctrinarios, todo ello debido a que conociendo la naturaleza del Poder se puede llegar a un mejor entendimiento del Estado, puesto que el Estado debe su existencia, gracias a ese tipo de Poder que nace de una comunidad y que al nacer encuentra un sistema de legitimidad²⁷. En tal virtud, la legitimidad en la que se aferra la comunidad radica en el sistema de creencia que está intrínseca en la comunidad misma, sin embargo yéndonos aún más lejos, la “universalidad” del sistema de creencia es puesto en duda, debido a que algunos países musulmanes de modalidad autocrática encuentran legitimidad al momento de ejercer el Poder, ya que la forma de las actividades de Poder de estos difiere de los países occidentales en donde impera la democracia representativa²⁸.

Si se pudiera hacer un simple ejercicio y preguntarle a cada ciudadano de los Estados que están admitidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)²⁹, sobre si están de acuerdo con sus formas de Estado, podría resultar que una gran mayoría de ciudadanos

²⁵ Citado por DABIN, J. (2003): *Doctrina General del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 92.

²⁶ MAX WEBER citado por ZIPPELIUS, R. (1985): *Teoría General del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 124.

²⁷ Vid. *Supra* Cap.1.1.

²⁸ Max Weber desarrolla una teoría de la legitimación basado en las creencias de la sociedad, a la cual le establece un aspecto cambiante, y por ende la legitimación también cambia, Vid. WEBER, M., *op. cit.*

²⁹ Se dice de los admitidos por la ONU para no entrar en confrontación con los países que tienen problemas con su reconocimiento.

está de acuerdo con sus respectivos Estados y con las actividades de Poder del mismo, independientemente de que estén de acuerdo o no con quienes ejercen el Poder o si ponen en duda el modo de la administración del gobierno. Esto entraña cierta importancia por el hecho de que los sistemas de creencias en los distintos países suelen cambiar, y como tal el modo de legitimación es diferente, producto de lo que, a su vez, el modo de configuración del Estado también cambia, lo que a raíz de otro sistema de creencia puede resultar ilegítimo³⁰.

I.3 El Poder, el Estado y su relación con el Derecho interno

Aquí es donde juega su papel el derecho al entrar en el escenario del acuerdo del pueblo que da vida a eso que se llama Estado, en el sentido de que es el derecho quien establece la relación, primero, en la organización y orden del Poder, y segundo, en cómo este Poder se relaciona con los individuos que lo sustentan; por ello el profesor Duverger expresa que “El derecho es uno de los instrumentos esenciales del poder” y “Las Constituciones, los códigos, las leyes, los reglamentos, las decisiones administrativas, las sentencias de los tribunales son procedimientos de acción fundamentales del poder. En ellos se fundan sus dos elementos: el elemento coacción y el elemento legitimidad”³¹, asimismo Duguit establece que la voluntad que proviene de los gobernantes sólo puede encontrar su legitimidad por medio del derecho³².

Aunque Maurice Duverger sólo se refiere al papel legitimador y al elemento de la coacción; estos son el resultado del rol organizador y ordenador del Derecho, en el cual también se ve que el carácter de legitimidad es otorgado por los mismo hombres que dan aquiescencia al pacto colectivo, pero que al darse cuenta del gran Poder que se estaba creando ponen de relieve algún elemento que les garantice que dicho Poder no se volverá contra ellos mismos, y aquí entra el derecho como un instrumento de dicho Poder; por lo que posteriormente agrega el referido estudioso “El derecho es un elemento del poder, un

³⁰ Cfr. La primavera árabe en donde no todos los países prefirieron gobiernos más democráticos, aunque en occidente se entiende que es la mejor forma de Estado, DE LA TORRE, M. V.: “La Primavera árabe 5 años después: el norte de África como caso de análisis” en *Observatorio de Política Internacional*, en <http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/08/AfricaDelaTorre.pdf>

³¹ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág. 33.

³² ORTIZ, J. C. (1986): *Poder político y orden social*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 230.

medio de acción del poder, una forma del poder. Organiza el poder, institucionaliza el poder, contribuye a legitimarlo. Pero, no obstante, comporta también elementos de garantía contra el poder”³³.

El Derecho se ha ido formando y perfeccionado a través de la historia. En la relación del Estado y el Derecho esto no es menos, el derecho debe de irse adaptando si se quiere a lo que Ferdinand Lasalle llamaba los factores reales de poder, o más bien, al contexto histórico del momento, por lo que en lo concerniente al Estado, el derecho que cumple su función de instrumento del poder es el derecho conocido como positivo, aunque esto podría ser cuestionable desde la filosofía del derecho.³⁴ Kelsen va acorde y entiende el derecho como el conjunto de normas coactivas³⁵. Mientras que Marx ve en el derecho el medio a través del cual una clase somete a otra a su dominio³⁶.

El modo en que el Poder se legitima a través del derecho, es por medio de los procedimientos que dicho derecho establece, puesto que para la consecución de una determinada meta que tenga consecuencias jurídicas, todos los individuos deben recurrir al mismo proceso o a los procesos que disponga la ley, no pudiendo ser otro, de lo contrario sería ilegítimo e ilegal, sin entrar al debate filosófico de lo legal y lo legítimo³⁷.

En lo que concierne al aspecto sancionador del derecho “las sanciones, resultado de la transgresión de la norma, garantizan, a la vez, la fuerza de motivación y la eficacia de las normas en los casos, mucho más numerosos, de cumplimiento voluntario”³⁸. A raíz de lo cual, es toda una obligación del Estado cumplir con este propósito sancionador, tal es así, que luego se podrá ver que la condición primordial exigida a los Estados fallidos responden al poder sancionador y sus instrumentos en el mantenimiento de la paz y la seguridad.

³³ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág. 40.

³⁴ *Ibidem*, pág. 40.

³⁵ Cit., por ATIENZA, M. (2001): *El sentido del derecho*, Ed. Ariel, Barcelona, pág. 38.

³⁶ Cit., por ATIENZA, M., *op. cit.*, pág. 39. El derecho, per se, no siempre encuentra una definición adecuada, pues los tratadistas tratan de llegar a lo que realmente entienden del derecho según sus propias concepciones, vid. CÁRDENAS GRACIA, J. (2009): *Introducción al estudio del derecho*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 73. Para profundizar en el término del derecho, vid. PONCE ESTEBAN, M. E.: “Los conceptos de justicia y derecho en Kant, Kelsen, Hart, Rawls, Habermas, Dworkin y Alexy” en *Revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana*, pp. 211-234, 2005.

³⁷ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág., 41.

³⁸ ZIPPELIUS, R., *op. cit.*, pág. 58.

Asimismo, “La tarea de garantizar la paz y la seguridad jurídicas requiere que los titulares de papeles estatales (en el marco de sus competencias) afirmen enérgica y eficazmente el monopolio de la fuerza física contra todo acto de violencia (delictuoso o político) que no provenga del Estado”³⁹. Esto es debido a que se entiende que cuando hay posibles actos que van en contra de la paz y la seguridad jurídica, es un atentado en contra del Estado mismo, lo que puede dar origen que el Estado en la relación con los ciudadanos pueda cambiar estableciéndose con ello una especie de gobierno basado en la dictadura, hecho que justifica que el Estado mantenga y sea el único autorizado del poder coercitivo al momento de que algún ciudadano de la comunidad pueda infringir las normas establecidas⁴⁰.

Para el profesor Remiro Brotons derecho y Poder caminan por los mismos espacios, puesto que cuando crece el Poder del Estado, también aumenta la capacidad del Estado para proteger sus intereses, asimismo influye en las normas en cuanto a su contenido y revisión, y se presenta como un ángel que protege a la colectividad⁴¹. En su relación en la esfera internacional el profesor Remiro Brotons manifiesta:

El derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) es la expresión extrema del formidable privilegio que hubo de reconocerse a los más poderosos al término de la Segunda Guerra Mundial, gracias al cual pueden hurtarse no sólo a las consecuencias de sus infracciones (y las de sus clientes) de la prohibición de la amenaza y uso de la fuerza, sino a la previa calificación de las mismas por el órgano al que se atribuye la responsabilidad primordial de proveer a la seguridad colectiva. La impunidad de que goza Israel, gracias a la cobertura de los Estados Unidos, para ejecutar una política violatoria del principio de libre determinación del pueblo palestino y de las normas fundamentales del Derecho Internacional humanitario y de los derechos humanos en Cisjordania y Gaza es, seguramente, el caso más característico de una aplicación gravemente discriminatoria de las normas inducida por el ejercicio del poder estatutario de la primera potencia militar sobre la tierra⁴².

³⁹ *Ibidem*, pág. 58.

⁴⁰ Uno de los puntos que caben destacar en este contexto es el uso de la fuerza a los fines de mantener el control de la sociedad, incluso se ha de entender que los Estados tienen que tener un poder coercitivo, de lo contrario se tendría un Estado fundamentado en la anarquía, o un Estado como los descrito por Tomás Moro en su tratado “Utopía” o por Tommaso de Campanella en la “Ciudad del Sol”, pero tomando en cuenta la estructura de conflicto que ha imperado en los Estados, se podría decir que la fuerza para mantener el control en el territorio es una condición, que incluso viene relacionada con el término de “soberanía”, del cual posteriormente se hablará con más detalle.

⁴¹ REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, .L., *Derecho internacional...*, pág. 44.

⁴² *Ibidem*, pág. 44.

El profesor Remiro Brotons al estatuir sobre el derecho y el Poder, lo hace desde el ámbito en que el Poder, al igual que en la esfera interna, se impone y establece las reglas que regirán en lo adelante, o sea un gobernante aprueba sus propias leyes y la aplica a los demás que forman parte de la sociedad, por igual, en la sociedad internacional el hegemon dispone cuáles serán las disposiciones que deben cumplir para los más débiles, y protege a aquellos que le son fieles⁴³. Sin embargo, también las reglas que son impuestas por el hegemon pueden ser aprovechadas por los más desvalidos en los escenarios que tienen a su favor como la Asamblea General de las Naciones Unidas, por tanto se aprovecha el derecho internacional para limitar el Poder, en tanto que “El poder es subterráneo, el Derecho terrenal y la justicia flota en las alturas; el primero puede apoderarse del segundo a través de las obligaciones más particulares, pero los principios, al reparo de la última, resisten mejor sus embates”⁴⁴.

De lo antes expresado se colige que el derecho se constituye en expresión del Poder, y en un ente legitimador del mismo, pero la legitimación según lo expresado por Weber, obedece a las creencias que mantienen las sociedades, las cuales pueden cambiar, por ello los Estados autocráticos también pueden encontrar legitimidad a través del derecho, y que a su vez el derecho reposa en las creencias de los individuos del Estado, haciendo que sus sistemas incluso dictatoriales sean legítimos, aunque pudiendo ser contrarios a derechos humanos⁴⁵.

⁴³ Cf. REMIRO BROTONS, A. (1972): *La hegemonía norteamericana, factor de crisis de la OEA*, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza.

⁴⁴ Sobre la desigualdad en la distribución del Poder en la esfera internacional J. NYE establece que “Hoy día, la distribución del poder se realiza como en un juego de ajedrez en tres niveles. En el tablero superior, militar y unipolar, Estados Unidos destaca muy por encima de todos los demás Estados. El tablero intermedio, económico, es multipolar, puesto que los dos tercios de la producción mundial se encuentran en EE.UU., Europa y Japón. Sin embargo, la estructura de poder del tablero inferior es más dispersa, al enmarcar las relaciones transnacionales que atraviesan fronteras y escapan del control de los gobiernos. Esta complejidad viene a dificultar la elaboración de políticas, ya que implica jugar en distintos tableros al mismo tiempo, *ibídem*, FERNANDEZ TOMÁS, A., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J. M., FORCADA BARONA, I. (2011): *Lecciones de derecho internacional público*, Tirant Lo Blanch, VALENCIA, pág. 38; vid. JIMÉNEZ PIERNAS, C. (2010): *Introducción al derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid, pág. 39.

⁴⁵ Weber desarrolla un sistema de legitimación basado en la creencia, la cual puede presentarse de distintas maneras. Vid. WEBER, M., *op. cit.*

I.4 La definición del Estado

Es innegable que para ahondar en el tema objeto de la presente investigación existe la necesidad de acercarse a una definición del Estado como a sus tópicos anejos, lo que abrirá el camino para el análisis del Estado Social y Democrático de Derecho así como para los Estados calificados como fallidos. El Estado es considerado como “Todas las formas de agrupación política que revela la historia. Es la posición de los filósofos y de muchos otros, sociólogos e incluso juristas”⁴⁶, el tratadista parte de la idea de la relación de poder y más aún de quién mantiene el poder, por lo que desde su punto de vista lo interesante es que el estado está profundamente relacionado a la persona que ejerce el poder sobre las demás.

En lo concerniente a las agrupaciones y a la nación el profesor Duverger establece que: “...Estado-nación es una agrupación humana, una comunidad que se distingue de las otras por diversos criterios: los lazos de solidaridad son particularmente intensos, la organización es particularmente potente. La diferencia entre el Estado y las otras agrupaciones humanas es más de grado que de naturaleza”⁴⁷, destacando el profesor el concepto de agrupación humana, y estableciendo la diferencia existente entre la agrupación del Estado de las demás agrupaciones, pues el Estado nace sobre la base de un pueblo con ciertas características que lo hacen muy peculiar.

Sin embargo, el concepto de Estado también se define desde un enfoque formalista, como la agrupación de carácter político por excelencia, en cuya argumentación el vocablo “agrupación” implica al género, el término “político” la especie, representando el Estado la agrupación política superior⁴⁸. Desde tal perspectiva la entidad “Estado” guarda una estrecha armonía con el comportamiento de la sociedad a través del tiempo, en su relación de Poder con los gobernantes; pues las formas de Estado cambian según cambia esta relación entre gobernados y gobernantes.

Muchos otros autores tratan primero de decir qué no es un Estado para llegar a un entendimiento sobre la verdadera concepción del Estado, en tal sentido el profesor Juan Bosch advierte que ni nación ni país significan Estado, explicando que tales vocablos tienen un fondo natural tomando en cuenta el aspecto etimológico del asunto, mientras

⁴⁶ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág. 45.

⁴⁷ *Ibidem*, pág. 45.

⁴⁸ DABIN, J., *op. cit.*, pág. 9.

que el Estado como tal es una organización política instituida por una clase social para mantener bajo su mandato a un grupo de la sociedad, en virtud de lo cual quienes fundan el Estado guardan a su favor el poder coercitivo a través de los cuerpos castrense a fin de ejercer el control⁴⁹.

Asimismo, el profesor Bosch también se refiere a que el Estado es una institución que muta cuando cambia la clase dominante del país, lo que deja entrever otra vez la relación de Poder desde la clase gobernante hacia la clase gobernada y cómo esa relación llega a ser parte de la forma de Estado, claro está, el profesor hace acopio de la teoría marxista del Estado, la cual ha sido bien acatado por muchos juristas, sociólogos, politólogos y estudiosos de la materia en sentido general.

David Held afirma que los Estados se diferencian “tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial determinada, basados en el monopolio del poder coercitivo, y dotados de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos”⁵⁰, se puede observar que Held involucra el poder, la legitimidad y el origen de esa legitimidad del Estado, lo cual va relacionado con todo lo antes expuesto por el profesor Juan Bosch sobre la relación entre los gobernantes y los gobernados pero ya no desde la lucha de clase, sino desde la superioridad del Estado sobre las clases. Mas, cuando Held asevera que los Estados son distintos a los gobernantes y los gobernados está haciendo referencia a la personalidad real que ostenta el Estado, o sea, apela al carácter autónomo del Estado o la personalidad independiente del Estado.

El Estado es visto como la nación organizada jurídicamente, lo cual responde a una concepción del Estado tomado desde la frontera del Derecho Constitucional, en el sentido de que este estudia y define el Estado partiendo de las leyes mismas que le dan lugar, no obstante es interesante conocer todas las definiciones elaboradas del concepto de “Estado” y todo lo que de él se desprende. Como se ha observado, la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional como disciplina que comprenden un mismo objeto desde

⁴⁹ BOSCH, J. (2000): *El Estado: sus orígenes y desarrollo*, (5ta. ed), Ed. Editora Alfa & Omega, Santo Domingo.

⁵⁰ Cit. por TREMINIO SÁNCHEZ, I.: “El Estado en su dimensión de filtro: un breve esbozo de la teoría del Estado” en *Revista de Derecho Electoral*, Tribunal Supremo de Elecciones, núm. 8, 2009, pág. 5, en https://www.tse.go.cr/revista/art/8/Treminio_Sanchez.pdf

ángulos diferentes guardan más que una estrecha relación, y de ahí la importancia del estudio de ambas disciplinas para una mejor comprensión del Estado.

Por su parte el profesor Manuel A. Amiama estableció que el “Estado es una comunidad social, más o menos numerosa, con una organización gubernativa propia e independiente de toda otra comunidad, y asentada sobre un territorio propio”.⁵¹ Así, puede evidenciarse que todas las definiciones entorno al Estado tienen cierta afinidad, sólo que algunas son desde el punto del Derecho Constitucional, otras más afín de la Ciencia política y otras desde la teoría del Estado, sin embargo de alguna manera todas dan respuestas al Estado, el Poder y la legitimidad⁵².

Diez de Velasco, desde el derecho internacional, más que definir el Estado prefiere ceñirse a la caracterización que se ha hecho del Estado en cuanto a sus tres elementos, la población, el territorio y la organización política, bajo la sombrilla del concepto básico de soberanía, lo que permite distinguir el Estado como una organización de Poder autónoma sobre un territorio⁵³. El preeminente internacionalista acuña lo expuesto por la Convención de Montevideo del 26 de diciembre del 1933, por ser la forma más genérica y aceptable en que el derecho internacional ha definido el Estado⁵⁴.

Continuando con el patrón expuesto por Diez de Velasco, Mariño Menéndez, arguye a que el vocablo Estado no está definido en ningún instrumento internacional, a su vez, la Comisión de Derecho Internacional de las Organización de las Naciones Unidas⁵⁵ ha evitado construir un concepto de Estado expresamente, por lo que sólo se puede recurrir a la doctrina para acercarse a una definición de Estado desde el Derecho Internacional Público⁵⁶. No obstante, se hace referencia a que la condición fundamental para la individualización de un Estado es la autonomía soberana, debido a que el territorio, la

⁵¹ AMIAMA, M., *op. cit.*, pág. 13.

⁵² El Derecho Constitucional es la disciplina que tiene que ver con la organización y estructuración del Estado a través del derecho, es decir, parte de las leyes que organizan y limitan el Estado, mientras que la teoría del Estado es la disciplina que estudia el Estado en su comportamiento normal, así como su origen y finalidad.

⁵³ DIEZ DE VELASCO, M., *op. cit.*, pág. 273.

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 273-274.

⁵⁵ En lo adelante ONU.

⁵⁶ MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. (2005): *Derecho Internacional público*, Editorial Trotta, Madrid, pp. 99-100; vid. DIEZ DE VELASCO, *op. cit.*, pág. 273.

población y el gobierno pueden ser dirigidos a otras entidades como los Estados federados⁵⁷.

Aguilar Navarro entiende que “el Estado es la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio”⁵⁸, a ello se le agrega que debe gozar de una soberanía o independencia exterior para ser considerado como un Estado que pueda asumir derechos y obligaciones en la comunidad internacional⁵⁹. Sin embargo, para el profesor Remiro Brotons ese estadio del “Estado existencial” que se debía a los tres elementos de población, territorio y gobierno propio ya tiene razón de ser en la actualidad, puesto que con el principio de la “libre determinación de los pueblos” este tema tiene otros aires⁶⁰. En esa misma idea, se refiere Alfred Verdross al exponer que un Estado soberano es una colectividad humana con las características de ser “perfecta y permanente” que se autogobierna, por lo que no hay ninguna autoridad que ejerza influencia terrenal sobre ella, sólo el Derecho Internacional Público, y que cuya organización hace que intervenga en las relaciones internacionales⁶¹.

Toro Jiménez entiende al Estado como una manera de asociación con carácter permanente con una población de naturaleza institucional, asentada en un determinado territorio, el cual debe serle propio, y que tiene a su vez un Poder político organizado y centralizado, que adquiere derechos y obligaciones, pero que el aspecto de la soberanía externa no le resulta tan imprescindible para ser un sujeto de derecho internacional público⁶². En el mismo sentido Herdegen expone que debido a la heterogeneidad del mundo los Estados responden a un concepto amplio, en vista de lo cual “el Estado presupone, como unidad jurídica determinada, un territorio, un pueblo y un poder estatales”⁶³. Sin embargo, Herdegen critica estas definiciones puesto que no valoran al Estado como una unidad en movimiento, aunque defiende la ventaja de la definición tomando en cuenta la

⁵⁷ *Ibidem*, pág. 103.

⁵⁸ Cit. por GAMBOA SERAZZI, F., *op. cit.* 65.

⁵⁹ *Ibidem*., pág. 65.

⁶⁰ REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, J.L., *op. cit.*, pág. 67.

⁶¹ VERDROSS, A., *op. cit.*, pág. 177.

⁶² TORO JIMÉNEZ, F. (1982): *Manual de derecho internacional público*, volumen I, Universidad Central de Venezuela, Caracas, pág. 303

⁶³ HERDEGEN, M., *op. cit.*, pág. 71.

heterogeneidad de los Estados, y que desde la teoría de los tres elementos, es más fácil tratar algunos problemas que se pueden presentar en lo concerniente al Poder estatal⁶⁴.

Analizar el Estado desde una perspectiva fuera del ámbito de la relación de Poder es más que imposible, desde ahí que todo concepto debe versar sobre el Poder, la legitimidad, y la causa de esta legitimidad, como ha sido lo mostrado por David Held, pues la noción de Estado ha encontrado distintos significados en diferentes épocas, como en distintas situaciones, y según el afán de los ideales que le dan cabida en un determinado momento, con ello ha habido, más aún en la teoría alemana, toda una serie de interesantes trabajos tratando de buscar una mejor comprensión del Estado⁶⁵.

Se debe tomar lo planteado por los autores, atendiendo a que lo indispensable para el desarrollo de cualquier criterio sobre el Estado es un argumento sólido en base al Poder y su construcción social. De la misma manera, una correcta definición vincula a quién ejerce el Poder en la relación entre gobernantes y gobernados y de dónde proviene ese Poder. Todo esto se puede vislumbrar mejor respecto a las teorías de la naturaleza del Estado como a la transformación que ha tenido el Estado desde su nacimiento, y el rol del Derecho y la legitimidad en el accionar del Estado, y algunos que otros autores dirían que también es recomendable conocer los elementos que componen el Estado.

I.5 Esbozo del Estado en la antigüedad y su paso al Estado Moderno

Es pertinente destacar que en ocasiones las ciencias del Estado se hacen ayudar de la historia, la sociología así como de otras ciencias, en razón de que la historia lo permea todo, y la sociología cumple un rol importante en el análisis del surgimiento de la sociedad. La manera en cómo el individuo se une a la sociedad encuentra su justificación en la cultura, en base a la cual se unifican los individuos al reconocer en ella cosas que los identifican, por ende, los individuos de una sociedad se unen porque tienen familiaridad con el lenguaje, con el pensamiento, con la religión, haciendo que esos lazos lleguen a concretarse y se formen en costumbre, y que con ello posteriormente se llegue

⁶⁴ *Ibidem*, pág. 71.

⁶⁵ HELLER, H., *op. cit.*, pág. 165.

a un punto en donde surge una autoridad a la cual se deban en obediencia los demás miembros de la comunidad.

Sin la relación de fuerza tampoco se produciría el Estado, por ello algunos autores remiten el origen del Estado a las ciudades estados del tercer milenio antes de nuestra era, es decir en la Mesopotamia, con las ciudades Ur, Lagash, Eridu, Umma, y le asignan una peculiaridad en común y es que estaban basada en el régimen de la esclavitud⁶⁶. Aunque el estado ciudad surgido en dicho milenio no puede compararse con el Estado Moderno que se conoce hoy en día, pues las complejidades tienden a variar de forma sustancial; sin embargo estudiando la historia, se podría evidenciar que cada estado ciudad conformaba una unidad, el cual tenía sus propias costumbres, lenguas, ideas, religiones, pues la noción del mundo tampoco era como se percibe hoy en día con un carácter globalizado y sin alguna tierra más que descubrir⁶⁷.

De aquellas ciudades estado se puede decir que las más sobresalientes debido a los aportes que hicieran sus ciudadanos y a la influencia que ellas, aún en la actualidad generarían, son Atenas y Roma. Realmente Roma emula en muchas cosas a la ciudad griega de Atenas pero con un don de imperio, lo cual complejiza la organización de la ciudad estado de Roma, empero hay que decir que ambas ciudades estados estaban basados en la esclavitud. En el caso del imperio romano fue decayendo debido a la gran crisis que había en el cual los esclavos, los libertos, los amos, no podían sostenerse casi así mismos, y mucho menos a otros, terminando con todo lo que significó el esplendor romano⁶⁸.

Ello conllevó al establecimiento del sistema feudal, en el que se estableció una monarquía y se entendía que entre el rey y Dios había un contrato de enfeudación, en el cual el Rey era el vasallo, pero también el rey establecía señoríos, al darle tierras a los nobles del reino; tierras estas que estaban habitadas por libertos que se hicieron parte de la tierra, por eso se denominaban los siervos de la gleba, y los mismos establecían un contrato de enfeudación con los señoríos, en el cual ambos se obligaban a cumplir ciertas

⁶⁶ BOSCH, J., *op. cit.*, pág. 27 y siguientes.

⁶⁷ *Ibidem*, pág. 27. En ese mismo sentido Monroy Cabra argumenta que “En el año 3100 a. C.se celebró un tratado entre Eannatum, victorioso señor de la ciudad-Estado de Lagash, en Mesopotamia y los hombres de Umma, otra ciudad-Estado dela misma región. El tratado se redactó en sumerio y fijaba los límites fronterizos entre Lagash y Umma. Este tratado está separado por un periodo de más de mil años del siguiente tratado del que existe prueba documental”, MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 49.

⁶⁸ *Ibidem*, pág. 27; AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M. (Ed)... pp. 60-62; VERDROSS, A., *op. cit.*, pp. 37-38; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 15; MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pp. 50-51.

obligaciones recíprocas, siendo la principal por parte de los siervos el trabajar las tierras a favor de los señoríos⁶⁹.

Posteriormente, con el tratado de la Paz de Westfalia en el 1648 surge el llamado Estado nación, con el cual se establecía fronteras claramente diferenciadas, se trató de cohesionar a la población bajo el nacionalismo, dicha población debía ser más o menos permanente, y a su vez, el Estado debía tener un gobierno, y su economía sería de autosuficiencia, aunque posteriormente se llegara a un mercantilismo más abierto y a una diplomacia más adecuada⁷⁰.

Este Estado nación es la base del Estado como lo conocemos actualmente, llegando a tener distintas variantes según la forma de Estado, el tipo de gobierno y la forma de producción de la economía. En eso llega el absolutismo, el cual presentaba en su modelo de producción vestigios del feudalismo y en el cual el rey era el mismo Estado, siendo unos de sus más grandes ejemplos Luis XIV, quien gobernó desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVII, sintetizando dicha época en su frase “El Estado soy yo”.

Toda esta época transcurrió hasta que llegara el capitalismo, haciendo su primera aparición en los Estados Unidos de América, aunque para muchos historiadores del tema, el capitalismo se asomó primero en la Inglaterra y otros países de Europa. El hecho de que los Estados Unidos fuesen el primer país capitalista tiene su explicación lógica, debido a que los ciudadanos europeos que llegaban a los Estados Unidos lo hacían corriéndole al feudalismo, y abrazando un nuevo sistema de vida llamado capitalismo, y este dejar atrás el sistema feudal fue lo que viabilizó el capitalismo en los Estados Unidos de América, convirtiéndose en el primer país capitalista, al tiempo que se convertía en el nuevo modelo o en un Estado Moderno basado en una república democrática y federativa. Este Estado es también conocido como Estado Liberal, del cual hablaremos más adelante en el próximo capítulo⁷¹.

⁶⁹ *Ibidem*, pág. 27.

⁷⁰ Vid. BREMER, J. J. (2013): *De Westfalia a post-westfalia, hacia un nuevo orden internacional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.; AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M. (Ed)... pág. 64; FERNANDEZ TOMÁS, A., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J. M., FORCADA BARONA, I., *op. cit.*, pág. 41-43; CASSESE, A. (2006): *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, pp. 59-51; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 25. MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 62; BARBOZA, J., *op. cit.*, pág. 13.

⁷¹ BOSCH, J., *op. cit.*; VERDROSS, A., *op. cit.*, pág. 56; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 26; MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 63.

Hay una relación firme entre las formas de Estado que se han suscitado en la historia, y los modelos económicos que se han asumido, cobrando relevancia los postulados de Karl Marx sobre los medios de producción. El Estado a veces aparece como una expresión del modelo económico, y otras veces simplemente como el impulsador de las condiciones económicas⁷².

I.6 Elementos del Estado

Es necesario determinar los elementos del Estado. A tal fin, interesa circunscribirse a los elementos doctrinariamente conocidos, ya que estos pueden ayudar a comparar ciertos Estados con otros Estados, es decir Estados considerados como fallidos con Estados considerados con un nivel de riesgo menor o con cualquier otro Estado, pues el conocer estos elementos, puede dar una visión global de lo que es un Estado y su conformación, en su carácter externo. Los elementos del Estado son: el territorio, la población y la soberanía, los cuales se irán definiendo⁷³.

Toro Jiménez refiere que el Estado puede ser territorial, institucional, permanecer en el tiempo y tener capacidad jurídica y de goce plena. En esa virtud, será *territorial* entendiendo que debe contar con un territorio en el cual ejerza su soberanía; es *institucional*, puesto que la conglomeración de individuos no es circunstancial, ya que están políticamente organizados, con propósitos y objetivos determinados; *permanente*, ya que es el resultado de un grupo de individuos organizados que quieren estar unidos en el tiempo; *con capacidad jurídica o de goce*, pues es el único sujeto del Derecho Internacional Público que adquiere todos los derechos y deberes internacionales; y, es *activo*, al entenderse como un creador constante de las normas internacionales⁷⁴.

⁷² Se podría decir que los Presidentes que eligieron el sistema neoliberal actuaban más como la expresión del modelo económico que como un mero vigilante del mercado.

⁷³ Vid. CASSESE, A. (2006): *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, pp. 57-94;

⁷⁴ TORO JIMÉNEZ, F., *op. cit.*, pág. 303. Vid. RIZZO ROMANO, A., *op. cit.*, 83; LLANOS MANSILLA, H. (1980): *Teoría y práctica del derecho internacional público*, Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, pág. 6-7; FERNANDEZ TOMÁS, A. F., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J. M., FORCADA BARONA, I., *op. cit.*, pp. 63-65; SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 42; RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., *op. cit.*, pág. 71; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 47; REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, T., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, J., PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 69; HERDEGEN, M., *op. cit.*, pág. 71.

I.6.1 El Territorio

El territorio es uno de los elementos que incluso entra con mayor frecuencia en el debate político jurídico. El territorio debe comprenderse como aquel espacio en el cual el Estado ejerce su Poder, limitándolo a ese preciso territorio, pues también es un indicativo del límite de dicho Estado como de los demás Estados. Y dicho ejercicio no sólo se refiere al Poder en el suelo, sino en el subsuelo, como en el espacio aéreo y marítimo, tal como los acuerdos internacionales así lo han definido. Pues como ya se ha afirmado “...una relación de vinculación nacional no puede adquirir consistencia más que entre hombres que están en contacto por el hecho mismo de su convivencia permanente sobre uno o más territorios comunes”⁷⁵, y “El Estado necesita imprescindiblemente poseer un territorio propio, porque ésta es la condición esencial de toda potestad estatal”⁷⁶, “se quiere significar, no sólo que los hombres llamados a componer el Estado deban estar establecidos permanentemente en un suelo, que constituye, así, su patria (*terrapatrum*), sino que la formación estatal misma supone un territorio sin el cual no podría haber Estado. Es lo que se expresa diciendo que el Estado es corporación territorial”⁷⁷.

En el mismo tenor Hernández Becerra ha expuesto que el territorio es el centro de partida para determinar la jurisdicción del Estado, sin embargo se entiende que en los grupos sedentarios no hay controversias pero en algunos pueblos que por alguna razón se han considerado nómadas se entiende que el territorio no es un requisito indispensable del Estado, lo cual parece un error⁷⁸. Sobre el asunto hay que considerar que hay pueblos que aún están luchando por un territorio, lo que apunta a la indispensabilidad del territorio, pero hay que admitir que está siendo cuestionado el elemento del territorio.

Para el profesor Vargas Carreño el territorio es “el espacio físico sobre el cual el Estado ejerce su jurisdicción, constituye también un elemento esencial del Estado”⁷⁹, y de igual

⁷⁵ DE MALBERG, R. C. (2001): *Teoría General del Estado*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F., pág. 22.

⁷⁶ DE MALBERG, R. C., *op. cit.*, pág. 23.

⁷⁷ DABIN, J., *op. cit.*, pág. 25; RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., *op. cit.*, pág. 71; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 48; MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 264; PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 325; REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, T., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, J., PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 69.

⁷⁸ HERNÁNDEZ BECERRA, A. (1981): *Estado y Territorio*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pp. 53-54.

⁷⁹ VARGAS CARREÑO, E. (2007): *Derecho internacional público*, Editorial jurídica de Chile, Santiago, pág. 229.

forma se advierte que “El territorio está limitado por las fronteras y en él tiene su asiento la población del Estado”⁸⁰.

Como un ejemplo para el entendimiento de esto, el profesor Leacock escribió en el decenio del 1920: “Los judíos diseminados en extranjeras tierras, que no ocupan ni controlan un territorio particular, no constituyen un Estado”⁸¹. En la actualidad quien leyera esto sin saber a cuándo se remonta dicho libro pensaría que el mencionado profesor tiene un lapsus mental, pero aquí se puede ver la gran importancia que tiene el territorio, pues posterior a dicho libro ser publicado llegaron los primeros judíos a la región de Palestina, y posteriormente ya en el 1948 la Organización de las Naciones Unidas⁸² declara y reconoce a los Estados de Israel y Palestina, aunque estos entraron en conflicto y estos últimos aún no gozan de un territorio debido a los acontecimientos sucedidos desde entonces, empero lo cierto es que, Israel es un Estado, incluso es una potencia nuclear.

La competencia del Estado sobre el territorio tiene dos caracteres generales, la plenitud y la exclusividad. La plenitud de competencia hace alusión de que el Estado puede ejercer sobre su territorio la función de los tres poderes, según la clasificación de Montesquieu, es decir la función ejecutiva, legislativa, y judicial, mientras que a su vez, la exclusividad de la competencia territorial hace referencia a que el Estado establece un monopolio sobre su territorio, lo cual no puede ser ejercido por otro Estado. Debido al aspecto conflictivo, el elemento del territorio, es el tema más debatido, pues desde la antigüedad las civilizaciones se han enfrentado a los fines de extender sus dominios sobre nuevas tierras, aunque, en la actualidad el concepto de “tierra nullius” no tiene asidero ya que no hay tierra por descubrir, y el conflicto armado está regulado, aunque aún hay muchos conflictos como se ha señalado.

El concepto de competencia territorial no sólo se refiere a lo relativo al terreno sino también al aire y el mar; las libertades del aire están recogidas en la Convención de Chicago del 1944, mientras que sobre lo concerniente al mar está regulado en la Convención del 1958, sobre el mar territorial y la zona contigua, y en la Convención sobre el Derecho del Mar del 1982, puntos estos que pueden ir cambiando con el devenir de los

⁸⁰ MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 264.

⁸¹ LEACOCK, S., *op. cit.*, pág. 14.

⁸² En lo seguido ONU.

tiempos y las apetencias de las grandes potencias⁸³. Al respecto se sostiene que “El territorio constituye el ámbito geográfico preciso para el ejercicio de las competencias estatales”⁸⁴, refiriéndose al triple espacio que compone el territorio, el terrestre, el marítimo y el aéreo⁸⁵.

Interesa poner en tapete el concepto de “soberanía territorial” sobre el cual han habido algunos debates, por ejemplo se entiende que es un concepto erróneo ya que la soberanía es de carácter personal, puesto que engloba a las personas que están en el alcance del territorio⁸⁶, sin embargo desde un humilde parecer el concepto de soberanía territorial es muy propio y hace referencia no sólo a los individuos que se encuentran en él, sino a todo el acontecer del Estado al desplegar su Poder sobre el territorio. En lo concerniente al territorio lo destacable es el hecho de que en el mismo es que se ejerce el Poder del Estado.

I.6.1.1 Dominio territorial

El territorio en cuanto ámbito de ejercicio de la soberanía del Estado aún mantiene su relevancia, pues aún se sostiene la tesis de que el Vaticano por su poca extensión, así como la Orden de Malta por carecer de territorio propio, no son Estados⁸⁷. Rizzo Romano expresa que el concepto de dominio territorial proviene del latín “dominus” traducida como “Señor” y por tanto se habla de “dominio” o “señorío”⁸⁸. De ello Moreno Quintana comprende el dominio territorial como “el *poder* que ejerce el Estado, a consecuencia de su soberanía, sobre, encima y debajo del espacio del globo terrestre sometido a su autoridad”⁸⁹. Rizzo Romano, comentando sobre unas notas al respecto de Vélez Sársfield, sostiene que:

Vélez Sársfield nos habla del dominio internacional o propiedad del Estado, como la obligación pasiva de todas las naciones de respetar la acción de cada pueblo sobre su territorio. También expresa que la Nación tiene, con respecto a las demás, los derechos de un propietario. Por lo tanto, parece inclinarse por la teoría patrimonialista o romanista. Dominio territorial sería entonces, el derecho de una

⁸³ Vid. NÚÑEZ MERETTE, A. (2004): *Derecho Internacional del Mar, orígenes y codificación*, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, Santo Domingo, pp. 24 y ss; sobre los derechos del mar y el espacio aéreo vid. PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 325; MONROY CABRA, M. G., *op. cit.*, pág. 264; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pp. 83-109.

⁸⁴ FERNÁNDEZ TOMÁS, A. F., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J. M., FORCADA BARONA, I., *op. cit.*, pág. 63.

⁸⁵ *Ibidem.*, pág. 63.

⁸⁶ DABIN, J., *op. cit.*, pág. 28.

⁸⁷ RIZZO ROMANO, A., *op. cit.*, pág. 137.

⁸⁸ *Ibidem.*, pág. 137.

⁸⁹ *Ibidem.*, pág. 138.

nación de ‘usar y percibir sus productos, disponer de su territorio con exclusión de las otras naciones, mandar en él como poder soberano’. Derecho que crea –para los demás Estados– la obligación correlativa de no poner obstáculos a su ejercicio⁹⁰ (...) así como en las obligaciones existe un sujeto activo o acreedor, un sujeto pasivo o deudor y un objeto o prestación, que puede ser de dar, de hacer o no hacer, también en el ‘dominio internacional’ existe una obligación pasiva de todas las naciones ‘de respetar la acción de cada pueblo sobre su territorio, no turbarla ni imponerle obstáculo alguno’. Con respecto al condominio internacional, se dice que en realidad crea una nueva persona internacional que tiene un carácter eminentemente transitorio, mientras dure esa situación especial. El dominio puede ser ficticio, es la llamada ‘ficción de extraterritorialidad’. Por ejemplo, al gobierno polaco en el exilio Gran Bretaña le reconoció soberanía territorial en aquellos lugares que ocupaba como sede del gobierno, en la ciudad de Londres⁹¹.

I.6.2 Población

La población juega un rol esencial pues todos los Estados han de tener una cantidad de seres humanos, los cuales deben conformar una colectividad política diferente a los grupos políticos vecinos, ya que el Estado es una agrupación humana⁹². Pues “Más conviene subrayar desde ahora que la concepción del Estado es inseparable de una concepción del hombre y que toda doctrina negadora de la personalidad humana tiene su repercusión necesaria en el campo del Estado”⁹³. El hombre y el Estado caminan de la mano, se puede ver que incluso Hobbes en el Leviatán se refiere a que el hombre utiliza su aspecto creador y crea lo que se conoce como el Estado⁹⁴.

El profesor Remiro Brotons en lo referente entiende que no puede haber Estado sin una población, sin embargo no hay una cantidad de habitantes exigida para conformar una población. Así, en China, en India, Estados Unidos, en Indonesia, en Brasil y Rusia se encuentra habitando la mitad de la población mundial; empero China es un Estado como

⁹⁰ *Ibidem*, pág. 138.

⁹¹ *Ibidem*, pág. 139.

⁹² DE MALBERG, R. C., *op. cit.*, pp. 21-22.

⁹³ DABIN, J., *op. cit.*, pág. 13.

⁹⁴ “La Naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial (...) El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado”, HOBBS, T. (1982): *Leviatán, la materia, forma y poder, de una República, eclesiástica y civil*, Ed. Skla, Bogotá, pág. 11.

Nauru y Tuvalu con tan sólo algunos miles de habitantes. En lo atinente a la densidad también pasa lo mismo⁹⁵.

Tampoco es interesante que la población sea nómada, mas ello podría tener problemas con el sistema gubernamental, por lo que se implementan políticas sedentaristas, resaltándose que lo importante de dichas políticas es que se respeten los derechos fundamentales de la población que la componen y las particularidades de estos pueblos nómadas⁹⁶. Herdegen se refiere a la “población estatal” como un conjunto de seres humanos (nacionales), los cuales tienen características comunes como una relación en el tiempo, regidos por un mismo sistema de derecho, y una misma organización gubernamental, asimismo se expresa la no indispensabilidad de la homogeneidad en el idioma, en los asuntos religiosos y culturales, en las etnias, aunque el conglomerado debe estar unido por un sentimiento de “pertenencia”, lo cual se interpone como un arraigo para que la población se considere como parte del Estado, e incluso si ese sentimiento estatal desaparece se inicia a desmembrar el Poder del Estado⁹⁷.

Los que componen la población son primordialmente nacionales del Estado, pero ello no es una condición indispensable, tanto así que la nacionalidad en algunos países es una especie de lujo. De acuerdo a los múltiples rasgos la población puede ser homogénea o heterogénea, de aquí viene la existencia de las minorías y de las mayorías⁹⁸.

Al igual podemos observar que “Cada pueblo tiene su propio cuerpo físico que se mantiene mediante la reproducción natural. El pueblo, en este su aspecto natural, es la población...”⁹⁹. Actualmente, podríamos decir, que los demás elementos que conforman el Estado han podido ser cuestionado en un momento dado si es necesario para la conformación del Estado, sin embargo el único elemento que no puede en modo alguno ser puesto en esa interrogante es la “población”, pues nunca ha habido un Estado que no tenga población.

⁹⁵ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 70.

⁹⁶ *Ibidem*, pág. 70.

⁹⁷ HERDEGEN, M., *op. cit.*, pp. 72-73.

⁹⁸ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 70.

⁹⁹ HELLER, H., *op. cit.*, pág. 206.

I.6.1.1 La población y la nacionalidad

El Estado guarda su vínculo con los ciudadanos a través de lo que se conoce como la “nacionalidad”, debido a que esta figura jurídica está muy vinculada a la soberanía de los pueblos, por lo que, por lo común, los Estados dictan su propia norma en asuntos de nacionalidad, sin embargo en los últimos tiempo ha habido una corriente que establece la nacionalidad como parte de los derechos humanos o como tal permiten cierta injerencia en la soberanía de los pueblos al respecto. A través de la nacionalidad el Estado establecerá cierto deber para con sus nacionales, lo cual será desde el momento en que los individuos nacen.

Para el profesor Alfred Verdross se debe hacer una distinción entre *nacionalidad*, el cual tiene un carácter jurídico internacional, y el de *ciudadanía*, que se caracteriza por ser jurídico-interno, en tal virtud, para el Derecho Internacional Público lo relevante es aquello que es permanente y “pasiva en una persona a un determinado Estado”¹⁰⁰, para el derecho interno se distingue entre los súbditos de las colonias y los “ciudadanos propiamente dichos”, sin embargo los súbditos también resultan ser súbditos del Estado del que la colonia es parte, y por ello al igual que los “ciudadanos del Estado patrio, están bajo la protección jurídico-internacional de este”¹⁰¹.

El Derecho Internacional le confía a los Estados la libre elección de sus normas sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad, en tal razón los tratadistas antiguos concluyeron que el Derecho Internacional no establecía límites en lo concerniente. Aunque está claro, que se ha trazado unos lineamientos que ayudan a los Estados a formalizar las pautas para la adquisición de la nacionalidad¹⁰².

La nacionalidad es otorgada de dos modos; mediante lo que se denomina “jus sanguinis” que es la nacionalidad obtenida por los lazos familiares, o como comúnmente se le denomina la nacionalidad “por la sangre”, la cual aparece como un modo de mantener los lazos con el Estado por la raza o estirpe, mientras que de otro lado tenemos la nacionalidad por “jus solis” la cual indica el derecho a la nacionalidad por el hecho de nacer en el territorio. Normalmente los países establecen una especie de jus solis restringido.

La Constitución española establece sobre la nacionalidad:

¹⁰⁰ VERDROSS, A., *op. cit.*, pág. 285.

¹⁰¹ *Ibidem*, pág. 285.

¹⁰² *Ibidem*, pp. 286 y ss.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen¹⁰³.

Como se puede observar la Constitución española prescinde del jus solis, pero afianza la nacionalidad adquirida por el jus sanguinis. En el mismo tenor la Constitución dominicana establece lo siguiente:

Son dominicanas y dominicanos:

1. Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;
2. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución;
3. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas;
4. Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas;
5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley;
6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior;
7. Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley
8. Párrafo.- Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la Nación Dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración”¹⁰⁴.

En la República Dominicana se establece el jus sanguinis, al tiempo en que se instaura un sistema de jus solis restringido, en el cual, a su vez, se impide la adquisición de esta nacionalidad a los que se encuentran en un estado transitorio o residan en el país de manera ilegal. En lo que tiene que ver con la nacionalidad, los Estados admiten la nacionalidad adquirida o naturalización a través de la cual un extranjero puede hacerse nacional de un país, luego de cumplir con los procesos establecidos a tal efecto.

¹⁰³ Artículo 11, Constitución del Reino de España.

¹⁰⁴ Artículo 18.

Es necesario precisar el concepto de “ciudadanía” que consiste en la institución que permite que un individuo pueda participar de forma activa en la esfera política de un país, para lo cual se exige una determinada edad para su adquisición, que vale para todos los individuos que se unen al Estado por la nacionalidad, en casos de extranjeros, luego de adquirida la nacionalidad se limita, de alguna forma, en cuanto a los derechos para postularse a algún cargo electivo, ejemplo, en la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 79, numeral 2, se dispone que: “Las personas naturalizadas sólo podrán ser elegidas al Senado diez años después de haber adquirido la nacionalidad dominicana, siempre que hayan residido en la jurisdicción que las elija durante los cinco años que precedan a su elección.

I.6.3 Gobierno

El gobierno responde a cómo el Estado distribuye su Poder, indiscutiblemente que el término Gobierno tiene varias acepciones; entendiéndose por dicho vocablo el conjunto de funcionarios que dirigen el Estado, asimismo se considera el Gobierno en similitud al Poder ejecutivo del Estado, por lo que en este sentido muchos autores se referirán a un concepto u otro; aunque muchos utilizan el concepto de administración para encontrar una barra divisoria entre el gobierno y la administración. A los fines de la investigación, interesa el concepto de gobierno en su sentido holístico de la administración del Estado, pues a los fines de ver el buen funcionamiento del ESDD es necesario explorar en parte la eficacia de los poderes del Estado, y los males que achacan a estos.

Es sumamente lógico comprender que para existir un ESDD la justicia tiene que estar funcionando, que la asamblea o congreso del Estado esté sesionando, y que el ejecutivo esté administrando el erario público. Aunque esto puede tener variaciones atendiendo en primer lugar al tipo de Estado de que se trate, y en otro plano, al desarrollo del Estado, pues aún no existe el Estado perfecto de las utopías, y por tanto hay que tener en cuenta que los Estados tendrán sus falencias.

Remiro Brotons entiende que *un gobierno instituye una presunción de que existe un Estado*. El gobierno es una organización de índole política con la capacidad de mantener el orden interno y capaz de intervenir en las relaciones internacionales de forma autónoma. Sin importar, el tipo de Estado hay una exigencia en que en que el sistema debe realizar actividades que le son propias al Estado como la relación con otros sujetos

del derecho internacional, categorizándose el mismo como el elemento medular al momento de definir el Estado como sujeto de derechos y obligaciones internacionales¹⁰⁵.

Verdross entiende que uno de los elementos del Estado es el autogobierno pleno, lo que imple que en principio el Estado puede reglar y elegir libremente su forma de Estado y de gobierno, la estructuración interior y la manera de comportar de sus miembros, así como la política interna como la política externa. Ese autogobierno pleno trae consigo la autonomía constitucional. Verdross sostiene que los Estados que abandonan o pierden su gobierno en favor de otros Estados, tienen una soberanía aparente. Esos Estados “con pleno autogobierno solo son Estados soberanos si son jurídicamente independientes de otros Estados y están únicamente subordinados al D. I. Esta nota característica es la que distingue a los Estados soberanos de los dominios y colonias que se gobiernan plenamente a sí mismos”¹⁰⁶.

El gobierno también es visto como el aparato político por medio del cual el Estado se expresa, por ende no se limita al órgano ejecutivo, sino que hace alusión a la organización general de los poderes públicos. *Por igual, el derecho internacional no constriñe a una determinada modalidad de gobierno o de Estado, aunque en el derecho internacional americano y europeo hay obligaciones jurídicas con el sistema democrático.* El gobierno tiene a su cargo la administración del Estado, y debe satisfacer las necesidades esenciales de la población¹⁰⁷.

I.6.4 La Soberanía

La soberanía es quien reafirma la supremacía del Estado, pues la soberanía está muy relacionada al Estado, y puede ser considerada como una piedra angular en la constitución del Estado mismo¹⁰⁸. La soberanía de hecho tiene una doble vertiente, pues una cosa es la teoría de la soberanía en el Estado y otra la soberanía del Estado. La soberanía en el Estado concierne a la legitimidad de quien ostenta el máximo Poder en el Estado, mientras

¹⁰⁵ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 71.

¹⁰⁶ VERDROSS, A., *op. cit.*, pp. 178-179; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 48; AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M... pág. 264.

¹⁰⁷ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 43.

¹⁰⁸ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág. 53.

que la soberanía del Estado hace referencia al Estado y su independencia para actuar en la esfera internacional como un sujeto de derecho.

De lo que es la soberanía en el Estado se comienza a hablar a partir del siglo XVI en Francia, cuando el rey quería reafirmar su Poder por encima del papado y de la aristocracia que había dejado el periodo feudal, desde entonces nace la doctrina de Juan Bodin en el cual se expresa que el Rey gobernaba por mandato divino, por tanto su mandato aunque efímero venía de lo divino, argumento que utilizó la monarquía para centralizar el Poder. Posteriormente, en la postrimería del siglo XVIII, comienza a repensarse la soberanía, y es ahí donde aparece Juan Jacobo Rousseau, quien da pie a lo que comúnmente es llamado teoría de la soberanía popular, en el cual ese Poder absoluto provenía del mismo pueblo.

Al respecto dispone Carré De Malberg “...por encima de todo, lo que constituye un Estado es el establecimiento, en el seno de la nación, de una potestad pública que se ejerce autoritariamente sobre todos los individuos que forman parte del grupo nacional”¹⁰⁹. El profesor Malberg se expresa en base a lo que es la soberanía en el Estado, concepto este, que incluso es el más debatido por los juristas, y el más discutido en todo el transcurrir de la historia, sin embargo a partir del siglo pasado, debido a la globalización y a la interdependencia que existe entre los países de la comunidad internacional, cada día el concepto de la soberanía del Estado toma un valor más preponderante.

Así el maestro Carré de Malberg asevera que “lo que distingue al Estado de cualquier otra agrupación es la potestad de que se halla dotado. Esta potestad, que sólo él puede poseer, y que por lo tanto se puede ya caracterizar denominándola “potestad estatal”, lleva, en la terminología tradicionalmente consagrada en Francia, el nombre de soberanía”¹¹⁰.

La soberanía en el Estado y la soberanía del Estado, también son llamadas soberanía interna y soberanía externa, pero desde nuestro punto de vista sólo existe una sola soberanía, en virtud de la cual se constituye el Estado, y acorde a los elementos exigidos el pueblo crea un Poder, y es este mismo Poder el que permite al Estado ser un sujeto y actor internacional, por lo que ambos conceptos no se contradicen entre sí, por el contrario son una misma cosa. Es decir, no puede haber ningún otro país o fuerza foránea que le

¹⁰⁹ DE MALBERG, R. C., *op. cit.*, pp. 25-26.

¹¹⁰ *Ibidem*, pág. 28.

imponga al Estado cómo debe ser su accionar respecto de sus ciudadanos y cómo debe ser el accionar de este Estado en la sociedad internacional, no significando que no se deban cumplir las normas internacionales que regulan las relaciones entre los Estados, sino a que un Estado pueda decidir por otro sin su consentimiento¹¹¹.

Por igual, se diferencian la soberanía interna de la externa arguyendo que la interna se refiere a las competencias del Estado dentro de su territorio, mientras que la soberanía externa se manifiesta el hecho de que no hay autoridad que esté por encima del Estado, excepto si el Estado ha dado su consentimiento, desde esta parte de la soberanía es que nace el respeto de las inmunidades y privilegios diplomáticos¹¹².

Del mismo modo Salmón expresa que “La soberanía es una característica que ostentan exclusivamente los Estados, de modo que soberanía y Estado son conceptos indisociables”¹¹³, y se define a la misma como “la capacidad jurídica del Estado, plena y entera, que le permite, al menos potencialmente, ejercer todos los derechos que el orden jurídico internacional conoce y en particular la facultad de decidir, de cumplir un acto y de crear reglas”¹¹⁴.

El derecho internacional suele distinguir la soberanía de la independencia, observando la soberanía como “el conjunto de los poderes supremos que integran la condición jurídica general de todo Estado. En ese sentido, soberanía equivale a ‘estatalidad’, o condición jurídica internacional del Estado”¹¹⁵, mientras que independencia refiere “que la estructura de gobierno no esté real y efectivamente subordinada a ningún otro poder exterior o interior”¹¹⁶. No obstante, para Carrillo Salcedo la independencia es compatible con el carácter exterior de la soberanía¹¹⁷, y en el mismo sentido Salmón sostiene que “la independencia es la condición previa de la soberanía (...) la independencia es una condición puramente fáctica, la soberanía constituye su formalización jurídica”¹¹⁸. La soberanía se presenta como una garantía de esa independencia.

¹¹¹ Vid. REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 93.

¹¹² SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 44.

¹¹³ *Ibidem*, pág. 44.

¹¹⁴ *Ibidem*, pág. 43.

¹¹⁵ MARÍN MENÉNDEZ, F. M., *op. cit.*, pp. 103-104.

¹¹⁶ *Ibidem*, pág. 104.

¹¹⁷ Cit., por SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 45.

¹¹⁸ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 46.

I.6.4.1 El principio de autodeterminación de los pueblos

Al final de la primera guerra mundial, el entonces Presidente de los EE. UU., Woodrow Wilson expuso sus catorce puntos, poniendo de relieve el concepto de “self-determination”, lo que venía a ser un rediseño del principio de las nacionales que había existido durante el siglo XIX y a inicio del siglo XX¹¹⁹. La Carta de San Francisco expresa entre los propósitos de la ONU “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos...”¹²⁰, asimismo en el artículo 55 de la Carta se entiende el principio de la igualdad de derechos y el de libre determinación de los pueblos como esenciales para crear condiciones de estabilidad y bienestar augurando unas relaciones pacíficas y amistosas.

La resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, del 14 de diciembre del 1960 constituyó un gran avance en el desarrollo del principio y en el proceso de descolonización, manifestando la referida resolución que “La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”, así como “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural”¹²¹.

El principio de la libre determinación de los pueblos ha sido reconocido en distintas resoluciones y declaraciones en la comunidad internacional, sin embargo en nuestros días, se podría decir que el principio no ha sido del todo claro con respecto a las acciones de algunos Estados con territorios y pueblos que desean su independencia o que por su ubicación se entienden que son parte de un Estado distinto del que en la actualidad forman parte¹²². El Profesor Remiro Brotons hace alusión a los pueblos indígenas como punto de

¹¹⁹ PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 260.

¹²⁰ Artículo 1.2 de la Carta de San Francisco.

¹²¹ *Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960*, en <http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml>; en el mismo sentido vid. *Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre del 1970*, que estatuye la Declaración sobre los principios de derecho internacional, en [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625\(XXV\)&Lang=S&Area=RESOLUTION](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=S&Area=RESOLUTION)

¹²² Un caso ejemplo de ello es Gibraltar y las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, aunque el profesor Pastor Ridruejo defiende, al menos desde el punto de vista histórico, el derecho que tiene sobre todos estos

referencia de grupos humanos diferenciados dentro del Estado, sin embargo el mismo establece que la libre determinación de los pueblos no es sinónimo de grupos separatistas. Un caso grave de ocupación extranjera es el de Palestina, con el cual se transgrede el principio de la libre determinación de los pueblos¹²³.

Hablando sobre las implicaciones de la libre determinación de los pueblos Pastor Ridruejo manifiesta:

...la resolución 1.541 (XV) de la Asamblea General, adoptada dos días después de la resolución 1.514 (XV), no contemplaba más que tres manifestaciones del ejercicio del derecho a la libre determinación: creación de un nuevo Estado, libre asociación con otro Estado, y la integración a otro Estado. Sin embargo, puesto que la resolución 2.625 (XXV) enuncia al derecho en términos generales –esto es, para toda clase de pueblos–, se vio obligada a añadir otra manifestación o resultando: la adquisición de cualquier otro estatuto político libremente decidido por el pueblo. Todo esto significa que la autodeterminación no debe desembocar forzosamente en la independencia, ya que su ejercicio puede conducir a situaciones distintas¹²⁴.

Tal cual expresaba el Profesor Brotóns, la autodeterminación de los pueblos no es asimilable a la independencia, al menos, así lo ha entendido la Asamblea General de la ONU. Otro aspecto interesante es que la Asamblea ha asumido la determinación de los pueblos como un deber de los Estados, pero también como un derecho de los pueblos, lo cual representó una salida del derecho internacional clásico al derecho internacional contemporáneo; este principio es uno de los mayores logros que ha tenido la comunidad internacional a través de la ONU¹²⁵.

I.6.4.2 Competencia del Estado

El Estado puede ejercer varios tipos de competencias, de un lado se encuentra la competencia que es ejercida sobre el territorio y de otro la competencia que es ejercida sobre la población, el profesor Remiro Brotóns entiende que “El ejercicio de competencia sobre los extranjeros revela que la competencia territorial prevalece sobre la personal,

territorios, desde nuestro humilde punto de vista todas las ciudades se encuentran bajo la misma situación, pues son vestigios del imperio británico y el español; Cf. PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pp. 269 y ss.

¹²³ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 71; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 111-112.

¹²⁴ PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 265.

¹²⁵ *Ibidem*, pp. 264-265.

pero ésta cuenta con un ámbito de acción propio”¹²⁶, pero se reconoce que las competencias que el Estado ostenta sobre sus nacionales van más allá de los límites territoriales para manifestarse fuera, puede ser en el territorio de otro Estado, o en espacios internacionales, como alta mar¹²⁷.

Para Pastor Ridruejo la competencia del Estado es una proyección jurídica de la soberanía puesto que si “el derecho internacional reconoce soberanía a los Estados es precisamente para que estos realicen sus funciones”¹²⁸, por lo cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger los intereses de la colectividad que está sobre el territorio, siendo la última radio de la soberanía el que se pueda satisfacer tal función, y para ello necesita tener algunas facultades o competencias, lo que desde lo jurídico es la soberanía¹²⁹.

En torno a la competencia territorial, como producto de la soberanía interna del Estado, se expone que la misma tiene dos consecuencias una positiva y otra negativa; la primera “se refiere al ejercicio exclusivo de jurisdicción sobre todas las personas y cosas al interior de su territorio”¹³⁰, mientras que “el efecto negativo está referido a la exclusión de las actividades de otros Estados (...) aunque esto conlleva la obligación de proteger sus derechos en el interior de un territorio”¹³¹.

Relacionando el Poder estatal con la competencia del Estado Herdegen entiende que “El poder estatal, como grapa organizadora, une el sustrato personal y territorial del Estado. Sin embargo, el Poder del Estado se determina desde el punto de vista del contenido, mediante su atribución a un territorio (...) y a una población”¹³². Dentro del territorio el Poder estatal se expresa en la forma de gobierno, mientras que externamente se manifiesta como un sujeto de derecho internacional. *Ese Poder del Estado implica un mínimo de efectividad, destacándose el hecho de que para determinar la existencia del Estado su legitimidad no es tan importante como su efectividad*¹³³.

¹²⁶ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 71; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 51.

¹²⁷ *Ibidem.*, pág. 71.

¹²⁸ PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 291.

¹²⁹ *Ibidem*, pág. 291-292.

¹³⁰ SALMÓN, E., *op. cit.*, 44.

¹³¹ *Ibidem*, pág. 44.

¹³² HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 73.

¹³³ *Ibidem*, pág. 73.

*Acorde a lo anterior, el Estado puede ser el resultado de una simple relación forzosa, sin una organización democrática. Hay una inclinación en el derecho internacional a través de la ONU de promocionar la organización democrática, sin embargo, es una exigencia al Poder del Estado, pero no es una condición para obtener el carácter de Estado. Pero, en algunas situaciones aparecen ambos, ejemplo de ello es cuando se le exige a un Estado que cumpla con la organización democrática o con la protección de minorías para otorgarle el reconocimiento*¹³⁴.

I.7 El monopolio del Poder

Extrapolando lo referido por Weber en el sentido del Estado y su conexión con el Poder, el mismo entiende que hay una sola coacción legítima en tanto que la organización del Estado la permita o la señale, aseverando Weber que *el monopolio del Poder es una característica esencial del Estado tanto como su aspecto instituto racional y de empresa continuada*¹³⁵. Ese monopolio de Poder hoy en día, es el ejemplo más palpable del Poder del Estado, pues el monopolio de la violencia, de la fuerza o del Poder, es elemento indispensable para calificar a un Estado como fallido.

Aunque Weber especifica “coacción legítima” en la práctica democrática, esto sería un signo distintivo de un Estado débil, en los Estados autoritarios o autocráticos la legitimidad no ha sido un elemento determinante, puesto que incluso el Gobierno de los EE.UU durante su existencia republicana se ha hecho asistir de gobierno dictadores como una forma de mantener su poderío en algunas regiones. Tal situación, fue la que impuso dictaduras en Venezuela, en la República Dominicana, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Haití, en Perú, pero tales Estados tenían a su favor que los gobiernos dictatoriales que tenían mantenían el monopolio del Poder lo que para la gran potencia es lo único importante.

Incluso, en la actualidad, ese monopolio de la fuerza, del Poder o de la violencia también es asumida por Estados proclives del gobierno de los EE.UU., sin embargo, lo importante para dicho Estado es que los que tengan ese monopolio estén a su favor, y no sean

¹³⁴ *Ibidem*, pág. 73.

¹³⁵ WEBER, M., *op. cit.*, pág. 45.

contrarios a sus intereses, puesto que de ocurrir esto, pudieran dar cabida a grupos terroristas o que puedan invertir en armas nucleares. Ese monopolio será el factor determinante en los Estados para considerar su falla y sus debilidades. Así lo expresa Fucuyama “*La esencia de la estatalidad es, en otras palabras, la aplicación de las leyes: la capacidad última de enviar a alguien con uniforme y pistola para que imponga el cumplimiento de las leyes del Estado. A este respecto, el Estado estadounidense es extraordinariamente fuerte*”¹³⁶. La indispensabilidad de los Estado es contar con el monopolio del Poder, como un modo de ver el control sobre el territorio del Estado, de lo contrario el debilitamiento del monopolio se traduciría en caos, en anarquía, en delincuencia, en la falta de seguridad en todos los niveles, en amenaza, en la falta de cumplir con las funciones básicas del Estado.

I.8 Formas de Estados y Formas de Gobiernos

Las formas de Estados se han tratado de clasificar de distintos modos atendiendo a una serie de variables, sin embargo sólo incumbe en su valor político, a las formas de Estado obtenidas en la relación de los elementos del Estado; poder, territorio y población. Las formas de Estados que se generan de la correlación entre el poder y la población son: la autocracia y la democracia. Las formas de Estado van conexas a las formas de Gobierno y que una forma de Estado puede involucrar varias formas de gobierno. La autocracia es aquella forma de Estado en el cual el Poder es ejercido por una persona o por un grupo reducido de persona, siendo ejemplo de ello, la dictadura, la monarquía, los sistemas comunistas en el que impera un sólo partido de gobierno, entre otros¹³⁷.

En el mismo tenor, la forma de Estado basado en la democracia es aquel en que el pueblo adquiere, por medios de mecanismos el derecho a elegir y ser elegidos, por lo que el pueblo elige a las autoridades que los van a representar en la administración de la cosa pública. Dicho modo de Estado comprende varias formas de gobierno entre las cuales se encuentran la democracia presidencialista, la democracia parlamentaria, el gobierno

¹³⁶ FUCUYAMA, F. (2004): *La construcción del Estado, hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*, Ediciones B, Barcelona, pág. 22.

¹³⁷ JORGE PRATS, E. (2010): *Derecho Constitucional*, vol. I, Ed. Ius Novum, Santo Domingo, pp. 548-549.

directorial, entre otros. La interacción de los elementos de Poder y población conllevan a estos tipos de Estados¹³⁸.

Al igual, la relación del Poder con el elemento de la territorialidad da luz a otras formas de Estado; el Estado Unitario, el estado regional o descentralizado y el Estado Federal. El Estado Unitario es aquel en donde el Poder de decisión que es ejercido está centralizado, es decir, hay un sólo poder legislativo, un sólo poder ejecutivo y un sólo poder judicial, y donde los gobiernos locales legislan sólo para su funcionamiento, mientras que los Estados regionales o descentralizados son aquellos en los cuales el Poder de decisión se distribuye también entre algunas regiones, siendo un ejemplo de este tipo de Estado, el Reino de España, donde las regiones pueden tener su propia independencia legislativa y ejecutiva; en nuestra percepción España representa un ejemplo de la construcción vertical del Estado, en vista de que cada comunidad autónoma muestra toda una cultura distinta y propia, lo cual hace que las relaciones con el órgano central sean más complejas, pero hace de dicho modelo un todo atractivo.

Los Estados federados son aquellos en los cuales el Poder de decisión es distribuido entre distintos Estados o Provincias, pero debiendo haber un órgano central federativo. Aquí los Estados tienen capacidad de legislar y tener su propio órgano que ejerza las funciones ejecutivas, amén de que los tribunales tienen la obligación de aplicar la ley del Estado o Provincia. Tanto en los casos de los Estados descentralizados como en los federados, la Constitución es el instrumento que pone en sintonía el engranaje legal, debiendo toda ley ser acorde a la Carta Magna¹³⁹.

Algunos autores también se refieren a la confederación de Estados, en el cual todos los Estados que conforman la unión participan de igual manera en las decisiones centrales, sin embargo este tipo de Estado ha entrado en una especie de desuso, siendo el mayor ejemplo el de la Confederación Helvética o Confederación Suiza, aunque ya no es un modelo de Estado que se pueda tomar en cuenta según el panorama de la comunidad internacional¹⁴⁰.

¹³⁸ *Ibidem*, pág. 549.

¹³⁹ JORGE PRATS, E. (2012): *Derecho Constitucional*, vol. II, Ed. Ius Novum, Santo Domingo, pp. 587 y ss.

¹⁴⁰ *Ibidem*, pág. 590.

I.9 Funciones del Estado

Aun siendo muy variadas las argumentaciones sobre cuáles son o deberían ser las funciones del Estado, son bien sustentadas las enumeradas por el jurista Carré de Malberg, a saber: 1. Resguardar la seguridad de la nación respecto a otros Estados; 2. Asegurar el orden y el derecho en las relaciones que entre sí mantienen los individuos; y, 3. El desarrollo de la prosperidad moral y material de la nación¹⁴¹.

Para los países que han mantenido cierta hegemonía y aquellos que tienen una política clara sobre lo que es la geopolítica, el punto de protegerse de otras naciones tiene más prioridad que los países quizás que estén en vías de desarrollo, pues en su calidad de potencias hay todo un defenderse constante que todavía se mantiene; ejemplo de ello vendría a ser, los acontecimientos que están pasando en la región de Crimea, en donde occidente ha tenido sus intereses y Rusia ha tenido sus intereses también, y de acuerdo a los hechos cada parte ha actuado, sin importarle el bienestar general de los crimeos y los ucranianos, sino sus propias apetencias.

Del asunto de asegurar el orden entre los individuos, éste es uno de los grandes eslabones del Estado, puesto que en el contrato social del pueblo estos intentan protegerse a sí mismos y tratan de establecer reglas claras de la convivencia, en el cual los más débiles sean protegidos de los más fuertes, fruto de esta situación sería el principios de la seguridad jurídica y muchos otros principios del derecho que intentan armonizar las relaciones sociales, incluso el mismo derecho a la paz, que está dentro de los derechos colectivos o difusos, puede verse como un corolario de este fin del Estado.

En cuanto al desarrollo de la prosperidad moral y material se hace referencia al pleno goce de los individuos a la superación mediante el trabajo tesonero, al cúmulo de virtudes y al cúmulo de riqueza de forma honesta y transparente, así como al bienestar colectivo de los individuos convertidos en una nación de pasar de la pobreza a la riqueza colectiva. Estas tres funciones o fin del Estado engloban todo lo relativo a la actividad estatal. No se debe confundir las funciones aquí enumeradas con las funciones estatales que hacen referencia al órgano legislativo, al judicial y al ejecutivo, pues las funciones aquí manifestadas aluden a los fines del Estado.

¹⁴¹ DE MALBERG, R. C., *op. cit.*, pp. 21-22. Para Hobbes la “seguridad” es el fin del Estado. Vid. HOBBS, T., *op. cit.*, pág. 144.

I.10 El Estado como sujeto de Derecho Internacional y el reconocimiento Internacional

El Estado en sus funciones juega un rol a lo interno, pero también debe cumplir con un papel en la esfera internacional, pues así como los individuos están sometidos a reglas de conducta, el Estado, como un ente con personalidad propia debe cumplir con normas de carácter internacional que mantienen la convivencia pacífica de la sociedad mundial. En ese tenor, el Estado cuando adquiere personalidad propia se convierte en un sujeto de derecho internacional y adquiere derechos, obligaciones y a su vez, tiene capacidad para realizar reclamos y ser objeto de los mismos. Esto define lo que es un sujeto de derecho internacional, que no se debe confundir con actor internacional, ya que el primero se conceptualiza desde una perspectiva jurídica, mientras que el segundo lo hace desde una lógica muy diferente¹⁴².

El doctrinario Carré de Malberg ha argumentado que el Estado:

...es el sujeto de sus propios derechos. Según esta doctrina, en efecto, la personalidad del Estado no es la expresión de una concentración personal de sus miembros en un ser jurídico único, sino que es el producto y la expresión de una organización real, en la cual la nación no interviene más que como un elemento de estructura, al mismo título que el territorio o la potestad gubernamental. El Estado es, pues, una persona en sí, o para decirlo con más exactitud: lo que se encuentra personificado en el Estado no es la colectividad de hombres que contiene, sino el establecimiento estatal mismo¹⁴³.

Lo cual deja entrever que aunque el Estado se encuentra estrechamente relacionado a los elementos que lo conforman, como entidad es independiente en su accionar¹⁴⁴.

Quien debería determinar quiénes son sujetos del derecho internacional, es la norma jurídica internacional, sin embargo el problema está en el asunto de que no existen normas en el derecho internacional que diga de forma taxativa y ni siquiera enunciativa, quienes son los sujetos del derecho internacional. Empero, la evolución misma de la comunidad internacional, deja ver quiénes son sujetos de derecho internacional, los cuales pueden ser

¹⁴² Al respecto se ha manifestado que la conformación del Poder en el Estado es uno de los requisitos para que el Estado pueda asumir los deberes internacionales, y la confianza en que dicho Estado cumpla con ellos está sujeta a la cohesión interna del Estado, lo cual es algo que se puede palpar más en el ámbito económico. Ver: ZIPPELIUS, R. *op. cit.*, pág. 69.

¹⁴³ DE MALBERG, R. C, *op. cit.*, pág. 29.

¹⁴⁴ Aunque en este punto se debe tener en cuenta que en materia de derecho penal internacional la responsabilidad recae sobre la persona actuante en las decisiones del Estado, independientemente de cualquier condena indemnizatoria al Estado.

de naturaleza distintas, pero también las capacidades de estos para actuar en el plano jurídico internacional podrán ser distinta de los demás sujetos.

En el mismo sentido, las necesidades de la comunidad internacional determinarán los sujetos del derecho internacional, un ejemplo de ello es que antes sería impensable considerar al individuo como un sujeto de derecho internacional, pero con la creación de los tribunales de derechos humanos y la aquiescencia a la potestad sancionadora de esas cortes, la comunidad internacional ha dado acogida al individuo para que en materia de derechos humanos sea considerado un sujeto de derecho internacional, los demás sujetos de derecho internacional son: las Organizaciones Internacionales, movimientos de liberación nacional, la Orden de Malta, la Santa Sede y otros.

Resumiendo lo desarrollado, el Estado para tener personalidad jurídica y por ende convertirse en un sujeto de derecho internacional debe reunir los elementos de, una población permanente, un territorio determinado, y una organización gubernamental (soberanía). Estas exigencias se encuentran recogidas en el Convenio de Montevideo de 1933, también en el laudo arbitral del tribunal arbitral mixto germano polaco, en el asunto *Deutsche Continental Geseuschaft*.

Luego establecer estos elementos, se adentra al plano del reconocimiento de los Estados, del cual se entiende que cuánto más complicado sea la estimación de un territorio como Estado y mientras más fuertes vayan a ser las exigencias de la calidad del Estado, más grande será la connotación del reconocimiento del Estado por parte de la comunidad¹⁴⁵.

Relativo al reconocimiento en el derecho internacional hay dos teorías que intentan explicar el alcance del mismo, la teoría del efecto constitutivo, que anteriormente era la más aceptada, la cual identificaba el reconocimiento como una condición obligatoria para que un Estado pueda existir. Mientras que del otro lado estaba la teoría del efecto declarativo, la cual entiende que la existencia del Estado no se subordina al reconocimiento de otros Estados; teoría que se ha convertido en la más aceptada. Dicha teoría ha cobrado más fuerza en vista de que los Estados, muy especialmente las grandes potencias juegan al reconocimiento según los fines políticos¹⁴⁶.

¹⁴⁵ HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 74.

¹⁴⁶ *Ibidem*, pp. 74-75; vid. REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 81;

La Carta de la Organización de los Estados Americanos expresa que:

La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros Estados conforme al derecho internacional¹⁴⁷.

Empero, se le puede otorgar al reconocimiento cierto grado de relevancia en la constitución del Estado como una manera de despejar la duda de un Estado, pues para la comunidad internacional importa mucho el reconocimiento de otros Estados, especialmente cuando se está hablando de las grandes potencias, sin embargo para el reconocimiento es necesario que el Estado naciente haya resuelto sus luchas por el Poder, pues el reconocimiento del mismo bajo estas circunstancias violaría la prohibición de intervención del derecho internacional¹⁴⁸.

Han existido, en lo relativo al reconocimiento, una profusión de resoluciones de pretender no reconocer cuando los Estados o algunos de los Estados violan una norma del *ius cogens*¹⁴⁹, como la no intervención o el uso de la fuerza. Sin embargo, el reconocimiento dependerá de la efectividad del Estado.

Como ejemplo del juego de las grandes potencias se puede observar lo que ocurrió con Kosovo, el cual fue reconocido por una parte de los países occidentales, mientras que no recibió el reconocimiento de los países ideológicamente contrarios a Estados Unidos encabezado por Rusia. Pero en otra perspectiva, Rusia estratégicamente reconoció a Osetia del Sur y a Abjasia, como Estados Independientes, como una forma de no permitir

MARIÑO MENENDEZ, F. M., *op. cit.*, pág. 167 y ss; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pág. 60; RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., *op. cit.*, pág. 79; AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M... pp. 276 y ss.; PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 298.

¹⁴⁷ Artículo 99 de la Carta de la OEA.

¹⁴⁸ HERDEGEN, M., *op. cit.*, pág. 75.

¹⁴⁹ Las normas *ius cogens* son normas de carácter obligatorio en la esfera internacional, contrario a las normas de carácter *dispositivum*, las cuales son producto de las obligaciones surgidas de los acuerdos firmados por los Estados o mejor dicho de las obligaciones contraídas por los mismos Estados. Hoy existe la prohibición de reconocer situaciones derivadas de violaciones de la norma que prohíbe el uso ilícito de la fuerza, prohibición que ha crecido especialmente sobre tres hechos: a) Pacto Briand-Kellog -1928-, b) Doctrina Stimson -1932- y c) art. 2.4 de Carta de las NN.UU.

que la OTAN¹⁵⁰ penetre en estas regiones que entonces eran parte de Georgia, mas Estados Unidos aún permanece sin reconocer estas regiones como Estados.

Otro ejemplo de ello es que China en su rol de potencia no ha permitido que se reconozca como un Estado a Taiwán, pero también tiene ciudades que podrían bien ser consideradas como Estados, tales como Macao y Hong Kong, las cuales hasta hace poco pasaron a ser administradas por la República Popular China, por lo que en este tópico hay que reconocer cierta hipocresía internacional de parte de las potencias donde el reconocimiento va anejo a los intereses de los países.

En cuanto a la obligación y la verificación de condiciones para otorgar el reconocimiento en el Derecho Internacional no se han establecido los parámetros convencionales, sin embargo la Unión Europea estableció una serie de requisitos para el reconocimiento de los países de la antigua Unión de República Socialistas Soviéticas (URSS), los cuales iban más allá de la mera constatación de los elementos del Estados, a saber:

- El cumplimiento de las disposiciones de la Carta de la ONU y de las obligaciones contempladas en el Acta Final de Helsinki y de la Carta de París, especialmente en lo que respecta a los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos;
- Garantías para los derechos étnicos y los grupos nacionales y las minorías en concordancia con las obligaciones que surgen en el marco de la CSCE;
- El respeto a la inviolabilidad de todas las fronteras, las cuales sólo podrán ser modificadas por vías pacíficas y a través de convenio;
- Hacerse cargo de todas las obligaciones respectivas en relación con el desarme y la no expansión nuclear, así como de la seguridad y la estabilidad;
- La obligación de reglamentar todas las cuestiones relacionadas con la sucesión de Estados, así como solucionar las controversias regionales mediante acuerdo, y, donde no se llegue, acudiendo al proceso arbitral¹⁵¹.

El reconocimiento aunque con efecto declarativo, aún guarda su nivel de importancia, especialmente cuando el reconocimiento ha sido otorgado por unas de las potencias influyentes, como los EE.UU., China, Rusia, o la Unión Europea, o el Estado del cual se ha escindido. Como se señalaba anteriormente, el Gobierno de Taiwán ha sufrido las consecuencias negativas del reconocimiento, pues los mismos tenían incluso la

¹⁵⁰ *La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o North Atlantic Treaty Organization (NATO).*

¹⁵¹ Vid. HERDEGEN, M., *op. cit.*, pp. 76-77; vid. REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 80.

representación de China ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el año 1973, cuando le fue quitado y pasado al Gobierno de la República Popular China. Mientras que en la Actualidad Taiwán está invirtiendo en los Estados que lo reconocen como un modo de incentivar a la comunidad internacional a su reconocimiento.

I.10.1 Revocación del reconocimiento

Antonio Remiro Brotons pone en la palestra de la discusión un tema bastante interesante como lo es la revocatoria del reconocimiento dado por parte de un Estado, entendiendo que ese problema obedece más a la teoría que a la realidad, puesto que prácticamente es difícil observar actos “expresos” que signifiquen revocatoria de reconocimiento, y los “implícitos” podrían tener una explicación desde el punto de vista de la pérdida de los elementos que componen el Estado, pudiéndose dar ocasiones en que un Estado sea absorbido por otro o se haya desmembrado sin que se reconozca su continuidad¹⁵².

El referido profesor deja claro que *“hablar de la revocación del reconocimiento del Estado cuando sus elementos no han cambiado sustancialmente es ir contra los actos propios sin que puedan sugerirse (...) consecuencias jurídicas más allá de la ruptura de relaciones”*¹⁵³, siendo la terminación de las relaciones una facultad del Estado sin necesidad de recurrir a un desconocimiento, pero se pone de manifiesto que *“Los Estados a los que se imputa una condición criminal podrían ser despojados de su estatuto soberano por instituciones multilaterales representativas de la comunidad internacional en su conjunto y después de un debate contradictorio”*¹⁵⁴.

I.10.2 Reconocimiento de gobierno

El reconocimiento de gobierno es distinto de lo que es el reconocimiento de los Estados, pues tiene que ver con el elemento de la representación del Estado, dicho reconocimiento tiene lugar cuando se produce un gobierno de facto, o cuando hay conflicto interno, en el cual distintas facciones se disputan el Poder del Estado. El profesor Remiro Brotons refiere que cuando una parte en disputa cuenta con legitimidad, lo correcto sería que dicha parte mantenga la representación del Estado y los demás que ostenten el estatuto de

¹⁵² REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 84.

¹⁵³ *Ibidem*, pág. 84.

¹⁵⁴ *Ibidem*, pág. 84.

insurrectos o beligerantes, por igual dicho profesor entiende que “*un problema de reconocimiento de gobiernos puede transformarse en otro de reconocimiento de Estados cuando el conflicto civil es, o se transforma, en separatista*”¹⁵⁵.

El reconocimiento de los gobierno se mueve entre la valoración de la efectividad y la legitimidad, así hay quienes entienden que lo importante es la efectividad que el gobierno de facto tenga obviando un poco su legitimidad, sin embargo hay quienes sostienen que la legitimidad es la base fundamental sobre el cuál debe erigirse el reconocimiento de un gobierno de facto, en el caso de los Estados Unidos y del Reino Unido, los mismos se han propuesto desconocer cualquier gobierno ilegítimo¹⁵⁶.

Hay varias doctrinas que intentan dar respuesta al reconocimiento de los gobiernos; primero, tenemos la doctrina Tobar, la cual debe su nombre al señor Carlos Tobar, canciller ecuatoriano, quien en 1907 propuso que se desconociera a todos los gobiernos que habían llegado al Poder, por vías de la revolución en contra de un gobierno constitucionalmente establecido, en tal virtud los gobiernos que tenían que ser reconocidos eran gobiernos democráticos, que habían sido electos por el pueblo¹⁵⁷. Aunque la doctrina Tobar concedía el derecho a los gobiernos revolucionarios de que pudieran demostrar que el pueblo los apoyaba¹⁵⁸.

De otro lado se encuentra la doctrina Estrada, la cual data desde el 1930 al ser expuesta por el canciller de México, Genaro Estrada, la misma nace como protesta en contra de las potencias y sus intervenciones en Latinoamérica. La doctrina manifestaba que México establecería o no relaciones con los gobiernos sin importar la situación legítima del mismo¹⁵⁹, a través de un comunicado el Estado mexicano exponía que:

Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus Ministros o Encargados de Negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas haciéndoles conocer que México no se

¹⁵⁵ REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 81; GAVIRIA LIÉVANO, E., *op. cit.*, pp. 60-62; vid. PASTOR RIDRUEJO, J. A., *op. cit.*, pág. 303.

¹⁵⁶ HERDEGEN, M., *op. cit.*, pág. 77 y ss; REMIRO BROTONS, A., RIQUELIME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pág. 81; RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., *op. cit.*, pág. 79.

¹⁵⁷ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 56.

¹⁵⁸ ARIAS NÚÑEZ, L. (2010): *Manual de derecho internacional público americano*, Ed. Centenario, S. A., Santo Domingo, pág. 62; ARIAS NÚÑEZ, L. (2005): *Derecho internacional público contemporáneo*, Ed. Centenario, S. A, Santo Domingo, pág. 61.

¹⁵⁹ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 57.

pronuncia en el sentido de otorgar reconocimiento, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sabe herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen actitud de crítica al decidir favorablemente o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.

En consecuencia el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditadas en México sin calificar ni precipitadamente ni posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus Gobiernos o Autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fórmulas habituales para acreditar o recibir agentes y canjear cartas autógrafas de Jefes de Estado y Cancillerías, continuará usando las mismas que hasta ahora, aceptadas por el Derecho Internacional y el Derecho Diplomático¹⁶⁰.

De otro lado tenemos la doctrina Lauterpacht o teoría de la efectividad, la cual fue esgrimida en el 1948 por el profesor Lauterpacht, la cual entiende que debe reconocerse a los gobiernos que tienen efectividad, o sea, un gobierno efectivo tiene manejo de la población del territorio del Estado, y tiene la característica de mantenerse en el tiempo, debiendo reconocerse la efectividad que ostenta ese determinado Estado, sin interesarse por el modo en que los miembros del gobierno asumieron el Poder del Estado¹⁶¹.

Un caso estudiado en lo referente al reconocimiento es la disputa entre el Estado de Costa Rica e Inglaterra conocido como caso Tinoco, en el que un tribunal de arbitramento se ocupó de los compromisos que había asumido el gobierno, ya derrocado, de Tinoco. William H. Taft, árbitro de la situación, manifestó que:

El no reconocimiento por otras naciones de un gobierno que clama tener una personalidad nacional es usualmente una evidencia apropiada de que no ha alcanzado la independencia y control que le da el derecho internacional de ser clasificado como tal. Pero cuando el reconocimiento vel non de un gobierno se encuentra para tales naciones determinado por interrogantes, no sobre su soberanía de facto y el completo control gubernamental, sino acerca de su origen ilegítimo e irregular, su no reconocimiento pierde algo de peso evidencial sobre el tema que concierne a aquellos que aplican las reglas del derecho internacional (...) un no reconocimiento tal por cualquier razón no puede quitarle peso a la evidencia presentada ante mí en lo que concierne al carácter de facto del gobierno de Tinoco...¹⁶²

¹⁶⁰ ARIAS NÚÑEZ, L., *op. cit.*, pp. 71-72.

¹⁶¹ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 57.

¹⁶² HERDEGEN, M., *op. cit.*, pp. 77-78; al respecto vid. SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 58.

I.11 Extinción de los Estados

Un Estado soberano deja de tener existencia cuando comienza a formar parte de otro Estado, o si en cambio ha sido anexionado por otro Estado o si se ha fraccionado en algunos Estados o si se unifica con otro para constituir un nuevo Estado. A estos, se añaden otros como la posible extinción de la población, o cuando el territorio ha desaparecido. Vale la aclaración de que si un Estado forma parte de otro, pero mantiene algunas atribuciones como sujeto de derecho internacional, el Estado continúa como un sujeto parcial del derecho internacional¹⁶³.

Mas, *“un Estado no deja de existir a consecuencia de un golpe de Estado o de una revolución. Tampoco la mera debellatio da lugar a que cese el Estado debelado mientras sigan defendiéndole sus aliados o su gobierno en el exilio sea reconocido”*¹⁶⁴. Como se puede observar, en la doctrina del derecho internacional los casos de extinción del Estado están bien definidos, no habiendo hasta el momento otra circunstancia en que un Estado pueda extinguirse.

Herdegen también esgrime los argumentos antes referidos al entender que para que un Estado desaparezca se hace necesario que se haya eliminado de manera duradera unos de los elementos que componen el Estado como el poder estatal, el territorio o la población, sin embargo, la existencia del Estado puede soportar ciertas crisis por un largo periodo, sólo *“en el caso en que existe evidencia demostrable de una pérdida definitiva del poder, o de otras características del Estado, el Estado desaparece”*¹⁶⁵.

I.12 El Estado Latinoamericano

El Estado en Latinoamérica se ha caracterizado por el intervencionismo, por la autonomización y su rectoría, ha heredado costumbres y fuerzas provenientes de los Austrias hasta el 1700, y bajo los Borbones hasta la independencia. La fase colonial para el Estado Latinoamericano representó un mecanismo de centralización, puesto que las

¹⁶³ VERDROSS, A., *op. cit.*, pág. 234.

¹⁶⁴ *Ibidem*, pág. 234.

¹⁶⁵ HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 80.

conquistas y colonización se realizaron bajo control del Estados absolutistas, lo que trajo un aparato político en el cual sobresalía el poderío¹⁶⁶.

El aparato estatal interviene en la ocupación del territorio, en su urbanización, en la estructuración del sistema socioeconómico, en la creación de clases y en la normalización de los conflictos. La lucha por el Poder se convierte en primordial. El Estado nación en América Latina es el resultado de la conquista y la colonización de los territorios del nuevo mundo, lo que implicó sometimiento, aniquilamiento, desorganización y reorganización, de pueblos, culturas de los aborígenes por quienes detentaban el Poder de las potencias europeas¹⁶⁷.

Lo anterior significó que, se destruyera el sistema económico y político que imperaba en Latinoamérica, y la reestructuración de lo que quedó de aquello, con la finalidad de obtener beneficios para enriquecer a la Corona, a la Iglesia, a los conquistadores y colonos, lo que sin duda, ha mostrado una mezcla de sistemas, tanto el ibérico como el indígena, y que también involucraban transformaciones socioeconómicas, tecnológicas, ideológicas y políticas¹⁶⁸.

Así para el Profesor Zeitler la colonización y todo el proceso de afianzamiento de la conquista representó la:

...interacción entre lo que podríamos denominar dos mundos distintos, causando cambios a la vez que sobreviven permanencias de distintas índole. La arribada del europeo al nuevo mundo fue para las sociedades naturales una interrupción y perturbación del curso normal de su vida. Esta penetración blanca trajo aparejada consigo toda una serie de consecuencias que afectaron todos los ámbitos de la vida indígena. Desde su organización político-territorial de la sociedad indígena, su dinámica de población, su sistema económico, su organización social, su mundo cultural y sus creencias religiosas¹⁶⁹.

El Estado Latinoamericano se va presentando con un sistema de organización que, a su vez, estaba basado en el sistema de organización romano, recibiendo la región una

¹⁶⁶ KAPLAN, M. (1996): *El Estado latinoamericano*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 8. Para teoría de la dependencia Vid. SOTELO VALENCIA, A. (2005): *América Latina: de crisis y paradigmas, la teoría de la dependencia en el siglo XXI*, Ed. Plaza y Valdés, S. A., Barcelona, pág. 193.

¹⁶⁷ *Ibidem*, pág. 8.

¹⁶⁸ *Ibidem*, pp. 8-9.

¹⁶⁹ ZEITLER, T. E.: "La colonización de América y sus consecuencias" en *Universidad Nacional del Nordeste*, Chaco, en <http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/handle/minam/1721/BIV01492.pdf?sequence=1>

influencia de dicho sistema, sin embargo el Estado español en cuanto a su estructura y a la dinámica de las colonias, son moldeadas por las necesidades y los intereses y los actos de la monarquía, así como por grupos de Poder que fueron surgiendo a nivel local ya sean terratenientes, mercantiles, burócratas. La relación de las colonias con las urbes, conllevó a la limitación de un progreso independiente al tiempo que crecía una marcada desigualdad social¹⁷⁰.

La Monarquía absoluta que reinaba en España no llegaba a completar la transición hacia un Estado moderno, lo que se reflejó como una sociedad incompleta. España se mostraba como un Estado paternalista y centralizado, pues no contaba con empresas con capacidad para movilizarse y encarar los riesgos, razón por la que la conquista se convierte en una empresa de la Corona, la cual se hacía valer de un jefe de misión, que mediante un contrato denominado “Capitulación” se le “asigna a éste el área de conquista y los títulos si tenía éxito de expedición, contra el pago de tributo sobre la riqueza obtenida”¹⁷¹.

El absolutismo continuaba su manifestación por el centralismo de las políticas implementadas, pues el Rey debía resolver problemas irrisorios que mostraban las colonias, como modo de tener el control. Esto también se vio reflejado en las leyes, comenzando por un reglamento universal para aplicárselo a todas las colonias, y a las leyes que ya existían, a lo que se agrega la legislación de Indias. Hay un poder despótico que vislumbra al Rey por encima de las leyes, y, con el favor hacia los súbditos de que puedan dirigirse al Rey, todo lo cual manifiesta las debilidades de las autoridades de las colonias¹⁷².

La sociedad que es resultado del proceso de conquista y colonización tienen sus raíces en esa mezcla de fuerza, formas y atributos feudales y capitalistas, en el que éste último triunfa, puesto que el colonialismo encontró fines propios del capitalista del momento, en ese sentido las economías de aquellos dominios de España se muestran dependientes, abiertas, y se estructuran en base a un comercio a larga distancia. En ese drama, se

¹⁷⁰ KAPLAN, M., *op. cit.*, pág. 12.

¹⁷¹ *Ibidem*, pág. 13.

¹⁷² *Ibidem*, pág. 14. Sobre el absolutismo Vid. ANDERSON, P. (1987): *El Estado absolutista*, Ed. Siglo XXI, México, D. F., pág. 134.

expropiaran grandes excedentes económicos, lo que se produce de manera desigual acorde a la dirigencia de grupos y a las clases dominantes de la urbe y las colonias¹⁷³.

El Estado en Latinoamérica recibió gran influencia de las potencias colonizadoras, tanto en su sistema político, como en el sistema económico, y quizás lo no apropiado es usar el término “influencia”, pues lo que ocurrió fue una imposición de un sistema que ya tenía España, pues como se advierte “Si esta significación decisiva del Estado ha ido alcanzando su culminación en las últimas décadas, sus raíces se encuentran ya en el periodo colonial y, sobre todo, en la etapa de formación primaria de la sociedad y el Estado durante el siglo XIX”¹⁷⁴.

En el desarrollo del siglo XIX y a inicios del XX se puso en marcha en los principales Estados de la región un sistema económico de tipo primario-exportador y dependiente; la sociedad se organizó de manera jerárquica, en donde la riqueza estaba en manos de pocos, al igual que el Poder en unión con las urbes y sus empresas supranacionales. En este proceso quienes detentaban el Poder, entre los que se encontraban los terratenientes, comerciantes, los políticos, funcionarios, militares y eclesiásticos, aplican los modos de Poder y autoridad, el sistema político y su legitimidad, logrando el soporte de otro grupo de la clase dominante, así como la sujeción de la clase media y popular¹⁷⁵.

Desde el 1893 hasta el 1980, el intervencionismo del Estado se hizo más pronunciado producto de la relación de elementos externos e internos. El enfoque externo muestra cómo se producen cambios en las interacciones de fuerzas en la política y en la economía a nivel mundial. Pues para la época se observaba cómo los EE.UU se mantenían en un constante ascenso en la dirección del sistema capitalista, teniendo una influencia en el llamado “Tercer Mundo”. Por igual, la Unión Soviética crecía en la esfera internacional convirtiéndose en la otra cara de la polarización de la hegemonía mundial, lo que se sostuvo en una atmósfera de guerra fría y de competencia entre las referidas potencias¹⁷⁶.

¹⁷³ *Ibídem*, pág. 32.

¹⁷⁴ KAPLAN, M. (1981): *Aspectos del Estado en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 69. Como un análisis a la teoría de la dependencia que utiliza Kaplan Vid. BUITRAGO VALERO, C. J.: “La formación del Estado latinoamericano: entre la dependencia externa y el colonialismo interno” en *Revista Grafía* Vol. 11, núm. 1, 2014, pp. 82-94.

¹⁷⁵ *Ibídem*, pág. 70.

¹⁷⁶ *Ibídem*, pág. 79.

Latinoamérica entró en otra relación de dependencia al inclinarse al ámbito de dominación de EE.UU, esto significaba que las multinacionales de EE.UU, iban a adentrarse en la industria, el comercio, las finanzas y el Estado. El dominio estadounidense significó una reestructuración de los medios de producción y del desarrollo social; en ese contexto, el Poder de las clases que dominaban la región se redujo, así como la independencia de decisión. Esto trajo consigo una nueva etapa de crecimiento y cambio social, que originó por medio del cambio de la producción primario-exportadora y de los asuntos agrarios, la industrialización sustitutiva de importaciones, las modificaciones de las clases, la intervención del Estado¹⁷⁷.

Kaplan arguye sobre el Estado Latinoamericano manifestando que:

Las acciones del Estado y las consecuencias previstas de las mismas se refractan en una estructura y en un ambiente desfavorable u hostil al desarrollo, al cambio social, a la modernización y a la racionalidad; contribuyen a ello la penetración e influencia de grupos privados restringidos. En virtud de la crisis de hegemonía, ninguna clase o fracción domina total y exclusivamente al Estado, ni puede usarlo de modo irrestricto en función de una estrategia definida y coherente. Todas las clases, capas y sectores puján sobre y dentro del Estado, en mayor o menor grado y con fuerza variable, para lograr satisfacer sus intereses sectoriales. La acción estatal parece convertirse a menudo en mera resultante inestable del juego de presiones múltiples, que contribuyen a desgarrarla, irracionalizarla y paralizarla¹⁷⁸.

En ese tenor, la aceptación de los países de Latinoamérica a los postulados del liberalismo económico, llevaron a la “autoabdicación” de sus posibilidades, de sus poderes, y de las herramientas de control, normalización y cambio, y a la falta de capacidad para proveer una ideología, valores, proyectos y programas que pueden hacer funcionar una estrategia para el desarrollo¹⁷⁹.

Por lo visto, el Estado de Latinoamérica mantuvo una dependencia de la Corona de España en su época colonial, desde donde recibió una gran influencia, la cual aún se mantiene pero no bajo el concepto de dominio y explotación, sino de cooperación. Asimismo, EE.UU, al hacer su aparición en la esfera internacional como una potencia

¹⁷⁷ *Ibídem*, pág. 80. Sobre el temas vid. KAPLAN, M.: “La teoría del Estado en la América Latina contemporánea: El caso del marxismo” en *El Trimestre Económico*, vol. 50, núm. 198 (2), pp. 677-711, abril-junio de 1983. También vid. GRACIANO, J.: “El Estado Latinoamericano en perspectiva, figuras, crisis, prospectiva” en *Revista Pensamiento Iberoamericano*, núm. 5, enero-junio, 1984.

¹⁷⁸ KAPLAN, M. (1985): *Sociedad, política y planificación en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pp. 18-19.

¹⁷⁹ *Ibídem*, pág. 19.

hegemónica, influye en los países de la región, creando una dependencia fundamentada en el liberalismo económico y político. Ello muestra cómo los imperios o potencias han colaborado con la concretización del Estado en Latinoamérica, a quienes se les puede atribuir parte de los males que hoy atacan en América Latina.

Basado en la misma teoría de la dependencia hay quienes analizan las revoluciones y golpes de Estado en Latinoamérica, desde la perspectiva de la ilegitimidad del Poder, o sea, el Poder del Estado era manejado en sus inicios por la Corona, lo que se fue arrastrando en la historia por medio del mismo EE.UU, no teniendo los Estados mucha independencia de elección, y esa ilegitimidad se mantiene en la época, provocando que los ciudadanos no se vean reflejados por quienes los gobiernan, y por tanto se producen los golpes de Estado¹⁸⁰.

I.12.1 Estados Unidos y las relaciones con los Estados de Latinoamérica

En los comienzos del 1800 EE.UU, había comenzado su pensamiento expansionista e imperialista con la acogencia de la doctrina Monroe, la cual intentaba frenar las intervenciones de las potencias europeas reconociéndose a ellos mismos el derecho a intervenir en los países de América cuando estos sean amenazados por las potencias europeas; la doctrina se resume en aquella famosa frase de “América para los Americanos”.

A la doctrina Monroe se le suma la doctrina del destino manifiesto acuñada por John L. O’ Sullivan en el 1845, quien en un artículo escribió que la Providencia le había dado el derecho de expandirse desde el Atlántico al Pacífico, con el fin del logro de la libertad y el autogobierno, asentándose la base para la hegemonía estadounidense. La doctrina Monroe tuvo su origen en una política de autoprotección y expansión hacia los territorios del Continente Americano bajo el subterfugio de la no intervención europea. Mientras,

¹⁸⁰ Vid. MONTANER, C. A. (2001): *Las raíces torcidas de América Latina*, Madrid, en <http://www.hacer.org/pdf/Montaner16.pdf>; Carlos Alberto Montaner comienza el estudio con lo siguiente: “¿Hay algo más latinoamericano que ese penoso espectáculo de los militares entrando a la casa presidencial con la pistola al cinto y los gobernantes huyendo por la puerta trasera? En el siglo pasado –el XX, naturalmente–, sólo un país de este universo, sólo un país de este universo, Costa Rica, aparentemente se vio libre de este azote, pero ni siquiera totalmente...” desde ahí se origina la búsqueda de las raíces de esos problemas en América Latina, *Ibidem*, pág. 11.

que la doctrina del destino manifiesto tenía entrañado el embrión del imperio global al tratar de expandirse más allá del territorio del continente Americano¹⁸¹.

Luego de la Paz de París, España abandonó Cuba, cedió Puerto Rico, las Filipinas y Guam a los EE.UU, acabando la descolonización de Europa en la región, pero igual marcó el punto de la influencia imperial de los Estados Unidos en los países de América Latina. Iniciando un camino de expropiación de tierras.

Theodore Roosevelt establece la política del Gran Garrote o Big Stick en el 1904, de lo que se establece que la misma “transforma a los Estados Unidos en policía internacional con disposición y capacidad de intervención directa en los países de la región para obligarlos a cancelar compromisos adquiridos con potencias europeas o, más recurrentemente, para garantizar condiciones favorables a los intereses económicos estadounidenses”¹⁸².

Desde entonces, Washington observó en América Latina un área en el que tenían la necesidad de influir, lo que se hizo evidente en el conflicto de frontera entre Venezuela y la Guyana británica, en donde el entonces Secretario de Estado de los EE.UU le comunicó a Londres haciéndole saber que la rectificación de la frontera por parte de Gran Bretaña era una transgresión a la doctrina Monroe, y reconocía la “soberanía” de los EE.UU para accionar en el continente¹⁸³.

La política exterior de EE.UU se agudizó con el endurecimiento de sus estrategias a través de la que intervinieron en el Caribe, influyendo en la independencia de Panamá, en el canal de Panamá, en la República Dominicana con un periodo de intervención de 8 años desde el 1916 hasta el 1924; de la misma manera en Haití para pagar a los Bancos de Europa su deuda, en la invasión militar de Cuba, entre otras acciones de la política exterior de los EE.UU¹⁸⁴.

¹⁸¹ Para ampliar más sobre la doctrina del destino manifiesto vid. PFAFF, W.: “El destino manifiesto de EE UU: ideologías y política exterior” en *Revista Política Exterior*, núm. 117, mayo/junio, 2007, pp. 60 y ss; para las relaciones de Estados Unidos y Latinoamérica vid. BOERSNER, D. (1985): *Relaciones internacionales de América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

¹⁸² SUAREZ, H. (2010): *Intervenciones de Estados Unidos en América Latina*, Ed. Manifesto Press, Londres, pág. 6.

¹⁸³ PASTOR GÓMEZ, M. L.: “La política exterior norteamericana hacia América Central y el Caribe: una aproximación histórico-política” en *Documento de Análisis*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 08, pp. 117, 2016, pág. 4.

¹⁸⁴ *Ibidem*, pág. 5.

Desde entonces EE.UU propició una serie de intervenciones en los países de América Latina en una labor de policía internacional, tomando sus propios parámetros para las intervenciones, que se resguardaban en su política expansionista e imperialista. El influjo de EE.UU en Latinoamérica empeoró la situación de los países, tomando como ejemplos la intervención de República Dominicana del 1965, golpes en Bolivia en el 1971, Uruguay en el 1972/3, Chile en el 1973, Perú en el 1975 y Argentina en el 1976, todos auspiciados por los EE.UU¹⁸⁵.

Los Estados de Latinoamérica, desde el 1492, han experimentado cambios en su estructura, productos de la intervención de los imperios coloniales, y luego del imperialismo de EE.UU; el dominio de estos imperios no ha permitido el desarrollo pleno de los Estados, pues en el caso de los EE.UU, estos han incidido incluso en todas las dictaduras que hubo. Sin embargo, la influencia de EE.UU se sigue manteniendo en los países de la región de distintos modos, aunque el papel militar de las intervenciones se ha mitigado en América Latina¹⁸⁶.

I.12.2 Latinoamérica como un Estado ejecutivo

Cuando se habla del “Estado ejecutivo” se hace referencia a la inclinación predominantemente presidencialista que tienen los países de Latinoamérica, lo cual en ocasiones crea Estados paternalistas o facilitan el camino a políticos populistas, ya sean de izquierda o derecha. Aunque los Estados entienden que el Poder principal es el Congreso, en la conducta política no es lo que domina, pues el órgano que ejerce las funciones ejecutivas del Estado es quien se muestra como la causa de todo lo que ocurre. El origen de ello viene dado por la influencia del sistema presidencialista de los Estados Unidos, en el cual el Jefe de gobierno también es el Jefe del Estado, centrándose en una persona ambas funciones.

Esto crea que los líderes Latinoamericanos lleen las funciones que tienen en su rol de titular del órgano ejecutivo con las funciones que se le asigna como Jefe del Estado. Los

¹⁸⁵ PETRAS, J.: “Estados Unidos y América Latina. Los cambiantes contornos del imperio: jerarquías, redes y clientes” en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, núm. 57-78, 2007, pág.64; al respecto el profesor Juan Bosch trata sobre el manejo de la política exterior en algunos países de la región, a tal efecto vid. BOSCH, J. (2006): *Temas internacionales*, Ed. Búho, Santo Domingo, pp. 185, 301, 365.

¹⁸⁶ Cfr. AA.VV.: *Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional*, GANDÁSEGUI, M. A. (dir), Ed. CLACSO, Buenos Aires, 2016, pp. 303-443. También vid. AA.VV.: *El futuro de las relaciones Latinoamérica-Estados Unidos*, MARTÍNEZ LILLO, P. (dir), Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 2011.

caudillos que han tomado presencia en la historia de América Latina, muchas veces han encontrado un gran respaldo en el modelo presidencialista de la democracia representativa, y con ello no se quiere decir que tal modelo es peor, sin embargo su estructuración atraviesa todo el Estado, y hace, aún con los controles que se le imponen por el sistema de freno y contrapeso, que los líderes políticos no se sujeten a los lineamientos trazados por la norma y prefieran un sistema práctico de populismo y paternalismo¹⁸⁷.

I.13 1La crisis del Estado

En las dos últimas décadas ha habido un incremento de voces que sostienen la crisis del Estado, lo que a su vez se traduce en una crisis a la soberanía misma, entre los inconvenientes que se presentan a la crisis del Estado yace el hecho de que muchos Estados asumen diferentes naciones, siendo un caso muy destacable el de Bolivia, por igual, aunque en el fondo ello no constituye un problema, per se, para el Estado y el derecho internacional. Aquí hacen su entrada el surgimiento de los “microestados” y los “Estados fallidos”, puesto que ponen en duda los elementos constitutivos del Estado, pues hay un problema de competencia y con la incapacidad del Estado para hacer frente a los problemas que se le presentan, pero a merced de Salmón “*la conjunción de los elementos territorio, gobierno y población es suficiente para la configuración de un Estado*”¹⁸⁸, por lo que el gobierno del Estado debe estar anulado para hablar de crisis o tendiente a ello.

Refiriéndose a los problemas de la crisis del Estado Salmón entiende que:

Ciertamente, el Estado parece a veces muy grande para solucionar los pequeños problemas y muy pequeño para los grandes problemas actuales (...). No obstante, creemos que, al mismo tiempo, los Estados representan un elemento de estabilidad de las relaciones internacionales y la mejor forma de proteger también internacionalmente a los individuos frente a las dificultades que genera la actuación de entes no estatales como los grupos alzados en armas o incluso empresas multinacionales. De lo que se trata, en todo caso, es de entender la acción estatal en toda su complejidad y en diálogo permanente con los otros sujetos del derecho internacional¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Vid. AA.VV.: *El predominio del poder ejecutivo en Latinoamérica*, ALEGRÍA, P., CARPIZO, J., STEIN, J. L. (dirs), Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1977.

¹⁸⁸ SALMÓN, E., *op. cit.*, pág. 78.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

Herdegen entiende que los inconvenientes surgen cuando se suscitan las crisis a lo interno de los Estados, las cuales impiden el ejercicio del Poder de manera constante, poniendo como ejemplo de ello a Líbano y a Camboya dándole la categoría de “*failing state*”, o que pueden llevar a una desaparición absoluta del Poder estatal, a los cuales señala como “*failed state*”. Para Herdegen el Estado continúa con su existencia, pero no es capaz de mantener sus funciones o esa capacidad se extingue por completo, en ese sentido destaca que “*Cuando toda seña de retomar nuevamente el poder en forma más o menos efectiva parece desaparecer definitivamente, el Estado desaparece para la comunidad de Estados*”¹⁹⁰.

En la actualidad esos Estados que se encuentran en “ruinas” por su incapacidad de accionar, para la comunidad internacional son aún Estados, sin embargo destacando que “*esto en la medida en que no se puede dejar en un vacío legal la organización del territorio estatal y del pueblo*”¹⁹¹.

En lo relativo a los Estados fallidos el Derecho Internacional no tiene una regulación para los Estados que tienen dicha condición, pues el mismo, advierte de los elementos que componen un Estado, pero no de la evolución que tienen los Estados, por lo que el debate se ha presentado justamente sobre el cuestionamiento de la soberanía en contraposición con el principio de autodeterminación de los pueblos¹⁹². Al respecto Herdegen resalta que:

En los casos de irrupción de bandas locales que sufrió Somalia durante los graves problemas de hambre, las Naciones Unidas se vieron obligadas, por motivos humanitarios, a la intervención y a la atribución cuasitutelar de las funciones de provisión y organización más elementales. Para asegurar las medidas humanitarias, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), con observadores militares y un gran número de fuerzas de seguridad (S/Res. 751, 1992, VN 1993, p. 63). Luego de que se vio que estas medidas habían sido insuficientes, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó una intervención militar masiva, que resguardara las medidas de ayuda humanitaria. La resolución del Consejo de Seguridad núm. 794 (1992), que se apoyó en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, calificó expresamente la situación interna en Somalia, en relación con la obstaculización de las medidas humanitarias, como una amenaza a la paz internacional y a la seguridad internacional. Apoyado en esa valoración, el Consejo de Seguridad

¹⁹⁰ HERDEGEN, M., *op. cit.*, pág. 88.

¹⁹¹ *Ibidem*, pág. 89.

¹⁹² HERNÁNDEZ LORENTE, M. J. (2013): *Cooperación al desarrollo en los Estados frágiles: Una arquitectura de la ayuda diferenciada*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC-UCM, pp. 11-12.

autorizó en la resolución al Secretario General de la ONU, para tomar todas las medidas necesarias para crearle un ambiente seguro a las medidas humanitarias (S/Res. 794, 1992, VN, 1993, p. 65): El Consejo de Seguridad, reconociendo el carácter singular de la situación imperante actualmente en Somalia, habiendo determinado que la magnitud de la tragedia humana causada por el conflicto en Somalia, exacerbada aún más por los obstáculos que se han venido imponiendo a la distribución de la asistencia humanitaria, constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales actuando de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, autoriza al Secretario General y a los Estados miembros para que empleen todos los medios necesarios a fin de establecer cuanto antes un ambiente seguro para las operaciones de socorro humanitario en Somalia¹⁹³.

Al respecto Jiménez Piernas argumenta que el sistema internacional contrasta con un conjunto de problemas que encuentran su inicio en los Estados, males de los cuales padecen, pero cuya radio de influencia puede ser llevado a otros Estados. Los hechos del 11 de septiembre del 2001, fueron un punto de reflexión en el sistema internacional, puesto que los mismos produjeron una incesante labor de estudio de las diferentes ciencias sociales. El fenómeno se muestra con características propias dependiendo del área en donde se desarrolle, como ejemplo de ello, Jiménez Piernas muestra que América Latina es la región *“más desigual y violenta del mundo; en esta región, las situaciones de vulnerabilidad ofrecen la peculiaridad interna a causa de la pujanza del narcotráfico, el crimen organizado y la violencia”*¹⁹⁴, mientras que en el caso de África sus características se encuentran en *“la actividad de grupos armados más o menos organizados que impugnan la autoridad del gobierno y usurpan sus funciones en partes del territorio del Estado”*¹⁹⁵.

Jiménez Piernas matiza que en el mundo globalizado de hoy en día la vulnerabilidades de un Estado, puede reflejarse más allá de sus fronteras, muy especialmente entre los Estados más cercanos, significando amenazas en contra del Estado y su seguridad, comenzando por el hecho de que la inestabilidad de los Estados genera un flujo de refugiados hacia otros Estados, por igual, en el Estado de la inestabilidad se instauran redes criminales y terroristas. Jiménez Piernas pone como ejemplo el combate al narcotráfico por parte de Colombia y México, y de ver cómo las redes de narcotráfico se trasladan a Estados más débiles que no pueden combatirlo, como lo que ha ocurrido con Guatemala. Asimismo

¹⁹³ HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 89.

¹⁹⁴ JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Estados débiles y Estados fracasados” en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. LXV/2, Madrid, julio-diciembre 2013, pp. 11-49, pág. 14.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

como ejemplos se ponen Afganistán, Somalia o la República Democrática del Congo y la inseguridad que representan para sus vecinos¹⁹⁶.

La diatriba al respecto de estos Estados, como se había señalado, radica entre la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía o la consideración de la extinción del Estado. El profesor Stephen D. Krasner pone en el tapete las contrariedades que presenta la soberanía hoy en día, aduciendo a que algunos piensan que la soberanía está siendo socavada por el elemento de la globalización. Asimismo, en algunos Estados el problema es de reconocimiento mutuo, lo cual, *para algunos tiene relación con la capacidad del Poder del Estado para ejercer un control efectivo*¹⁹⁷. Krasner comprende que algunos han manifestado que “*normas nuevas, tales como la aceptación de la existencia de derechos humanos universales, representan una ruptura fundamental con el pasado, al tiempo que hay quienes consideran estos valores simplemente una manifestación de las potencias de los poderosos*”¹⁹⁸.

Krasner pone de manifiesto que las normas internacionales sobre los Estados soberanos tienen una influencia débil y siempre se encuentran bajo discusiones por el hecho de que presentan contradicciones lógicas, v. gr., no intervención en contraposición a la democracia, así mismo en la problemática de la crisis del Estado y de la soberanía señala que hay desigualdades de Poder entre los actores del sistema internacional, especialmente sobre los Estados¹⁹⁹.

Un Estado podría poseer soberanía legal internacional, incluso haber sido reconocido por otros Estados, sin embargo podría no disfrutar de una soberanía interna apropiada, debido a su incapacidad para ejercer el control interno en la extensión de su territorio. Krasner, también apela al ejemplo más notorio: Somalia. Poniéndolo como un ejemplo del significado de la comparación realizada, en el cual un Estado se mantiene como sujeto de derecho internacional, pero su soberanía interna está mermada por hechos que impiden la capacidad de control sobre el territorio del Estado²⁰⁰.

¹⁹⁶ *Ibidem*, pág. 16.

¹⁹⁷ KRASNER, S. D. (2001): *Soberanía, hipocresía organizada*, Ed. Paidós, Barcelona, pág. 13.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

¹⁹⁹ *Ibidem*, pág. 14.

²⁰⁰ *Ibidem*.

Observando que las grandes potencias son las que ponen las reglas a su conveniencia, Krasner expone que:

Los gobernantes han hecho también uso de la invitación, políticas voluntarias que comprometen la autonomía de la propia entidad política, como por ejemplo la firma de acuerdos sobre derechos humanos establecidos por estructuras judiciales supranacionales, o la aceptación de acuerdos sobre préstamos internacionales que proporcionan a quienes los condenen no sólo el derecho a cobrarlos, sino también a influir sobre las políticas y las instituciones internas. La norma de la autonomía, punto neurálgico de la soberanía westfaliana, ha sido puesta en entredicho por alternativas que incluyen los derechos humanos, los derechos de las minorías, la responsabilidad fiscal y el mantenimiento de la estabilidad internacional. Y aún más, en el sistema internacional las afirmaciones en términos de principios a menudo han servido sencillamente para racionalizar el recurso de explotar las oportunidades que ofrecen las asimetrías de poder²⁰¹.

Lo expuesto es el reflejo de lo que representa la crisis del Estado que se traduce en Estados frágiles, débiles o fallidos; es un fenómeno que ha llevado al estudio del mismo desde las relaciones internacionales, el derecho internacional, la teoría del Estado. Pero muy especialmente, el derecho internacional, aún no tiene respuesta y se debate entre aspectos de derechos humanos, asuntos democráticos, la libre determinación de los pueblos, soberanía exterior y soberanía interior, amenazas y seguridad, entre otros aspectos que se analizarán en los capítulos siguientes.

²⁰¹ *Ibidem*, pág. 20.

CAPÍTULO II. HACIA UNA TEORÍA DE LOS ESTADOS FALLIDOS

II.1 Conceptualización de los Estados Fallidos y problemas para su definición

Si se hace una retrospectiva de los artículos periodísticos de los últimos años es posible notar que el concepto de “Estados fallidos” presenta distintas acepciones, refiriéndose ya sea a los problemas con la corrupción, a los inconvenientes con la desigualdad y con la pobreza extrema, a la permanencia de una corriente política en el gobierno, a la mala administración de un gobierno, al carácter autocrático de los Estados, a un Estado en donde no se respetan los derechos humanos o parte de los derechos, o a la inestabilidad política o al irrespeto por la democracia²⁰².

El concepto de Estados fallido hace su aparición a inicios del 90, con Gerald Helman y Steven R. Ratner, al exponer sobre las ayudas humanitarias, y el derecho a la injerencia con el objetivo de protección al ser humano²⁰³. Para el 1995, se realiza un estudio de los Estados fallidos para determinar la pérdida del monopolio de la violencia en los Estados, como una situación que pone en peligro los intereses de los Estados Unidos, el cual fue producido para la Central Intelligence Agency (CIA), por académicos de distintas universidades, los cuales analizaron indicadores sociales, económicos y políticos²⁰⁴, a

²⁰² FERNÁNDEZ, E. (2009): *¿Estados fallidos o Estados en crisis?*, Ed. Comares, Granada. pp. 09-48.

²⁰³ HELMAN, G., RATNER, S.: “Saving Failed States” en *Foreign Policy*, núm. 89, 1993, pp. 3-21.

²⁰⁴ “Four separate of state failure, or serious political crisis, were examined: (1) revolutionary wars, (2) ethnic wars, (3) mass killings (genocides or “politicides” in which large numbers of people are killed for their political views and activities), and (4) adverse or disruptive regime changes (events in which democratic regimes are terminated or authoritarian regimes are disrupted, causing an extended period of disorder, but excluding routine coups d’états in authoritarian states and abrupt regime changes to stable democracy, neither of which the task force considers significant failures). The task force looked at all events of these kinds between the years 1955 and 1994 in all countries with population greater than 500,000. During this period, 133 cases of state failure were identified. For comparison, a randomly chosen set of years and countries where no state failure occurred was used as a control set. These two groups in combination are the models dependent variable; that is, the variable to be explained statistically by the political, social, and economic factors”, AA.VV.: *State Failure Task Force Report*, ESTY, D. C., GOLDSTON, J. A., GURR, T. R., SURKO, P. T., UNGER, A. N., del 30 de noviembre del 1995, en https://www.researchgate.net/publication/248471752_Working_Papers_State_Failure_Task_Force_Report, Las agencias de investigación continuaron realizando estudios constantes al respecto. Vid. AA.VV.: *State Failure Task Force Report: Phase II Findings*, ESTY, D., GOLDSTONE, J. A., GURR, T. R., HARFF, B., LEVY, M., DABELKO, G. D., SURKO, P. T., UNGER, A. N., 1999, en https://www.researchgate.net/publication/247638675_State_Failure_Task_Force_Report_Phase_II_Findings; AA.VV.: *State Failure Task Force Report: Phase III Finding*, GOLDSTONE, J. A., GURR, T. R., HARFF, B., LEVY, M. A., MARSHALL, M. G., BATES, R. H., EPSTEIN, D. L., KAHL, C. H., SURKO, P. T., ULFELDER, J. C., UNGER, A. N., 30 de septiembre del 2000, en <https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/StateFailureReport.pdf>

partir de entonces el concepto se convierte en un objetivo tanto académico como de diseño de la política exterior de EE.UU y algunos aliados.

Para el profesor Noam Chomsky el concepto de Estado Fallido va asociado a otros conceptos utilizados por los Estados Unidos como “estados terroristas”, “estados canallas”, los cuales yacen inmersos en la política exterior de los Estados Unidos. Chomsky entiende que después del concepto de Estados Fallidos los EE.UU inventaron otro concepto como “eje del mal”, con los argumentos, siempre imperantes de que, los miembros de dicho eje debían ser destruidos, fundamentándose en las armas nucleares y en las amenazas del terror²⁰⁵.

Chomsky refiriéndose al Estado fallido argumenta que:

Al igual que el de estado terrorista y estado canalla, el concepto resulta frustrantemente impreciso, susceptible de demasiadas interpretaciones. Una vez más, hace falta un meticuloso modelado de las pruebas para excluir a Estados Unidos a la vez que se incluye a los ejemplos deseados. Pongamos Haití, un estado fallido prototípico. La versión estándar de gran parte de los textos especializados –y de manera casi invariable en la prensa– es que la intervención de Clinton en 1994 para restaurar la democracia por desgracia no ha conducido a la democracia sino al caos político, una represión redoblada y unas relaciones Estados Unidos-Haití deplorables²⁰⁶.

Chomsky recurre a una teoría conspirativa para explicar el surgimiento del Estado fallido por los Estados Unidos, y asume que tras el 11-S la definición de los Estados fallidos fue ampliada con la finalidad de abarcar en ella a Estados como el iraquí, puesto que estos tenían armas de destrucción masiva y apoyaban el terrorismo internacional, por lo que este argumento también sirvió de base para que el concepto de Estado débil fuera abarcado por el de Estados fallidos, ya que había países que no podían ser nada débil, como era el caso con Irak, pero que acorde a la política exterior le servía mejor el concepto de Estados fallidos²⁰⁷.

En el mismo sentido Chomsky definiendo a los Estados fallidos, desde su concepción como herramienta conspirativa, arguye que:

Incluso en su interpretación más restringida, se identifica a los estados fallidos por su incapacidad para ofrecer seguridad a la población, garantizar derechos en casa

²⁰⁵ CHOMSKY, N. (2007): *Estados fallidos, el abuso de poder y el ataque a la democracia*, Ed. B., Barcelona, pág. 129.

²⁰⁶ *Ibidem*, pág. 130.

²⁰⁷ *Ibidem*, pág. 131.

o en el extranjero o mantener unas instituciones democráticas efectivas (y no meramente formales). A buen seguro el concepto debe abarcar también a los estados forajidos que se desentienden con desdén de las reglas del orden internacional y sus instituciones, construidas con esmero a lo largo de muchos años y en su inmensa mayoría por iniciativa estadounidense. Vuelven a surgir las consabidas dificultades: la categoría cubre un abanico demasiado amplio para ser doctrinalmente aceptable²⁰⁸.

Es indudable que el concepto de Estados fallidos se desarrolla en el seno de la seguridad de los EE.UU en su relación con los demás países del mundo que puedan afectar la hegemonía impuesta por dicho Estado. A voz del propio Chomsky “La potencia mundial dominante está escogiendo por su propia voluntad políticas que tipifican a los estados fallidos, que ponen en grave peligro a la población nacional y que socavan la democracia sustantiva”²⁰⁹. Para Chomsky el concepto carece de todo sentido en virtud de tratarse de una cuestión de política exterior de los EE.UU, y por ende el referido intelectual sostiene que lo mismo pasó con el término comunismo, el cual debía de ser desacreditado en la esfera internacional para cumplir con el cometido de los intereses de la referida nación²¹⁰.

Para Alcalde Cardoza en el decenio del 90 habían países como Afganistán, Camboya, Haití y Somalia, los cuales presentaban gobiernos débiles o ausencia de gobiernos, y por ende en la atmósfera de estos países gravitaban la violencia, la falta de orden, poniendo en riesgo el bienestar y la seguridad de los individuos, lo cual repercutía en los países vecinos, principalmente con el flujo migratorio. En algunos Estados las falencias que presentaron conllevó a una intervención, que en ocasiones se puede reputar de destructiva y a veces de positiva, como en los casos de Bosnia, Camboya y Haití²¹¹.

Alcalde Cardoza entiende que el origen del concepto de Estados fallidos era desde su aspecto humanitario, pero que “a partir del derrumbamiento de las Torres Gemelas y de la intervención en Afganistán, ella ha cambiado de naturaleza”²¹², pasando de ser esencialmente humanitaria para convertirse en un tema de seguridad, pero seguridad esta que se circunscribía a los EE.UU²¹³.

²⁰⁸ *Ibidem.*, pág. 131.

²⁰⁹ *Ibidem*, pág. 132.

²¹⁰ *Ibidem*, pág. 132.

²¹¹ ALCALDE CARDOZA, J. (2004): *Los Estados fallidos: la influencia del desarrollo*, Ed. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), Lima, pág. 15.

²¹² *Ibidem*, pág. 16.

²¹³ *Ibidem*, pág. 16.

El concepto de Estados fallidos aún se encuentra en una indeterminación que es asociada a la inviabilidad de los Estados, sin embargo el inconveniente al respecto se presenta cuando se analiza que muchos de los gobiernos que han tenido los Estados en el siglo pasado han sido desordenados e incompetentes, y cuyas poblaciones se han encontrados en un estado de desprotección que los hace alienarse, aterrorizarse o simplemente rebelarse. Sin embargo, en lo concerniente al hecho de la violencia resulta importante determinar cuál es la violencia que es permitida a los Estados internamente, pues si un país estuviera intervenido por potencias internacionales ¿la violencia allí generada se podría reputar como normal y no preocupante?²¹⁴

Para Paul Collier los Estados fallidos son países cuya renta es baja, las cuales no llegan a alcanzar la línea mínima en materia de gobierno como de políticas económicas²¹⁵. Agrega Collier que esos Estados “están fallando en dos sentidos. En primer lugar, están fallando a sus ciudadanos. Mientras que la mayoría de países de renta baja crece a gran velocidad, los Estados fallidos están estancados”²¹⁶. La definición aportada por Collier parte de un punto de vista puramente económico, amén de que lo económico en los Estados fallidos es una consecuencia de su inestabilidad del Poder, sin embargo, el mismo lo reconoce y aduce que “es bastante complicado acertar con la definición. No todos los países de renta baja situados por debajo de nuestro umbral mínimo han sido Estados fallidos”²¹⁷, y en tal sentido “sólo consideramos Estados fallidos aquellos países que han obtenido una puntuación baja durante cuatro años seguidos”²¹⁸. Esta definición se afianza a los índices, por lo que si los indicadores sobre los Estados fallidos no son objetivos tampoco lo serán sus resultados, y por ende se cometería mucha imprudencia al catalogar a un determinado Estado como fallido.

Thürer ha optado por el uso del concepto “desestructurado” como un modo de hacer referencia al Estado fracasado, del que entiende que “no denota una situación definida y clasificable con precisión. Es, más bien, una etiqueta amplia para un fenómeno que puede

²¹⁴ Cit., por ALCALDE CARDOZA, J., *op. cit.*, pág. 19.

²¹⁵ COLLIER, P. (2011): *El club de la miseria*, Ed. Turner Publicaciones, Madrid, pág. 79.

²¹⁶ *Ibidem.*

²¹⁷ *Ibidem.*

²¹⁸ *Ibidem.*

interpretarse de varias maneras”, y arguye a que esos Estados tienen problemas internos, y que hay una ausencia de ley y orden y no hay órganos de representación del Estado²¹⁹.

Como un modo de exponer lo que representa un Estado fallido la profesora López Martín pone de ejemplo a tomar en cuenta a Somalia. La misma expresa que Somalia es “único” y que “ningún otro Estado de los que se mencionan como posibles Estados ‘fallidos’ o aparecen en las listas elaboradas al efecto, representa como éste la realidad a la que se quiere hacer referencia con esta expresión”²²⁰. En la misma dirección, la profesora Rosana Garciandía Garmendia entiende que Somalia es el “paradigma del colapso del Estado con indicadores como el problema de la piratería o la recientemente declarada hambruna”²²¹. En muchos Estados se pueden encontrar prueba de crisis, debilidad o fragilidad del Estado, los cuales han encaminado a que se les sindique como fracasados. No obstante, ninguno es como Somalia, pues el gobierno no ejerce un control sobre su territorio, tampoco goza de cierta legitimidad por parte de la población sobre su territorio, no tiene ninguna seguridad interna, tampoco ofrece servicios públicos a los ciudadanos, y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Todo lo cual ha permanecido por un lapso de dos décadas, lo que hace de Somalia un prototipo de lo que es un Estado fallido²²². A modo de entender la situación de lo que es un Estado fallido en base a Somalia, la distinguida profesora señala que:

Somalia no conoce la Paz. La guerra ha causado casi medio millón de muertos y una masiva inmigración de más de dos millones de personas hacia campos de refugiados en Kenia y Yemen²²³.

Así hablando sobre la difícil situación que se vive en Somalia con la guerra civil, el profesor Jiménez Piernas asevera que la misma es más complicada debido al fracaso del gobierno, la relevancia de la estructura de clanes y el manejo de los conflictos que se originan entre los clanes; enfrentamiento entre líderes del poder político y el económico;

²¹⁹ THÜRER, D.: “El ‘Estado desestructurado’ y el derecho internacional” en Revista Internacional de la Cruz Roja, 1999, en <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdntg.htm>

²²⁰ LÓPEZ MARTÍN, A. G.: “Los Estados ‘fallidos’ y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico internacional”, *Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, pág. 12 en http://eprints.ucm.es/14687/1/LOS_ESTADOS_FALLIDOS-CURSO_VITORIA.pdf; vid. JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Los Estados fracasados y el derecho internacional: el caso de Somalia” en *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LXII/1, Madrid, enero-junio, pp. 17-59, 2010.

²²¹ GARCIA DÍAZ GARMENDIA, R. (2013): *De los Estados fallidos a los Estados frágiles: un reto para el Derecho internacional contemporáneo*, Ed. Comares, Granada, pág. 2.

²²² LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 13; con el fin de ahondar más sobre la situación de Somalia vid. COLLIER, P., *op. cit.*; KABUNDA, M., SANTAMARÍA, A.: (2009): *Mitos y realidades de África Subsahariana*, CATARATA/Casa África, Madrid.

²²³ *Ibidem*; lo referente al Estado de Somalia se ampliará en el capítulo siguiente.

la gran cantidad de armas, pese a que el Consejo de Seguridad mandó al embargo de las mismas; una lucha por recursos como el agua y la tierra; el influjo que tienen los Estados vecinos en el territorio, en su apoyo a partes en conflicto; la impunidad imperante, y la lamentable situación humanitaria²²⁴.

La profesora López Martín recurre al método de la descripción para mostrar lo que es un Estado fallido, no obstante la misma contundentemente entiende que “*el término Estado ‘fallido’ (failed) y sus sinónimos deben reservarse para el grado más extremo de fracaso estatal, sólo debería aplicarse a los casos más graves, los más excepcionales; a aquellas raras situaciones en las que las instituciones que están obligadas a mantener la ley y el orden y a proteger a los ciudadanos y proveerles de servicios básicos dejan de actuar, desaparecen y, en su lugar, el control, la autoridad es ejercida por entidades privadas, clanes, tribus, señores de la guerra-; una situación, por lo demás, que no es temporal sino duradera*”²²⁵.

En ese tenor, un Estado fallido es aquél cuya característica principal es el colapso absoluto y duradero en el que “*el elemento constitutivo del Estado de la organización política y social ha desaparecido plenamente*”²²⁶, siendo Somalia el Estado que cumple con dichas características, por lo que el colapso temporal y parcial no es en modo alguno sinónimo de colapso, debiendo ser colocados en otra categoría²²⁷.

En cuanto a los Estados fallidos Robert Rotberg establece dos divisiones de los mismos, primero, los Estados débiles, dentro del cual podrían entrar distintos Estados, y segundo, los Estados colapsados, lo cual entiende como el extremo de la falencia. Para el académico son Estados débiles Colombia²²⁸, Chad, Sri Lanka y Zimbabwe, los cuales pueden convertirse en colapsados en cualquier momento. Y como un ejemplo de Estado colapsado entiende que sería Somalia, en la cual se muestra una total ausencia de la autoridad; pero se verá la clasificación de Rotberg más adelante²²⁹.

²²⁴ JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Los Estados fracasados y el derecho internacional: el caso de Somalia”, en Revista Española de Derecho Internacional, Madrid, enero-junio pp. 17-59, pág. 25. Incluso a un simple entender el hecho de que el profesor JIMÉNEZ PIERNAS tomará el ejemplo de Somalia no es circunstancial, sino que es el mejor ejemplo de un Estado fallido.

²²⁵ *Ibidem*, pp. 19-20.

²²⁶ *Ibidem*, pág. 20.

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ A nuestra consideración Colombia no es un Estado débil.

²²⁹ ALCALDE CARDOZA, J., *op. cit.*, pág. 20.

Para Rotberg las falencias que presentaban los Estados fallidos eran, el aumento de la violencia criminal y la política, la ausencia de control en las fronteras, conflictos étnicos, religiosos y culturales en constante crecimiento, las guerras civiles, el miedo como modo de subordinar a los individuos, instituciones débiles, infraestructuras deficientes, la no capacidad para la recaudación de impuestos sin recurrir a la violencia, los altos grados de corrupción, los niveles de mortalidad infantil en constantes crecimiento, fallos en el sistema de salud y en la educación pública, disminución abrumadora de la renta per cápita, una inflación bastante elevada, la particularidad del uso de monedas extranjeras para las transacciones normales, aguda escasez de los alimentos²³⁰.

Sin embargo, hay varios aspectos que merecen ser estudiado acorde a lo expuesto por Rotberg. Algunos de las causantes del Estado fallido por sí solas no representarían un problema por el cual se le pueda decir que un Estado está reputado como fallido, ejemplo de ello es que una infraestructura deteriorada no representa un valor determinante en el estudio, por igual la elevada inflación, ésta podría ser, como es ahora, un indicador de que la economía no va bien, los crecientes niveles de la mortalidad infantil es un tema sumamente preocupante pero que no puede llevar a decir que un Estado está al borde de ser considerado como fallido o que simplemente lo es. Incluso si eligiéramos los tres aspectos aludidos y lo viéramos como un todo tampoco se podría decir que dicho Estado está fallido. Muchos de los puntos expresados por Rotberg simplemente son las consecuencias de la falta de control en el monopolio del Poder.

El tema de la violencia sigue siendo el punto determinante para medir el grado de fallo de un Estado, pues cuando hay una anulación completa del monopolio del Poder del Estado se podría decir que se está ante un Estado fallido. Sin embargo, ¿a qué se refiere la anulación completa de este monopolio?, pues al hecho de que en el interior del Estado la violencia reinante sea de una manera tal que el gobierno se vea bastante disminuido frente a otras fuerzas que gravitan en el territorio, lo cual lleve a un punto tal de decir que no hay gobierno, poniendo en duda la violencia imperante el establecimiento y la efectividad del gobierno, llegando a la confusión de no saber quién es o quiénes son los que gobiernan en el territorio, por ende ninguna función del Estado puede ser cumplida.

²³⁰ *Ibidem*, pág. 20.

Javier Alcalde Cardoza haciendo una crítica a la caracterización mostrada por Rotberg entiende que la misma no comprende las transiciones abruptas o que se encaminan hacia un régimen totalitario, aduciendo además que dichas transiciones “son un rasgo de inestabilidad de gobierno que puede ser muy preocupante para las empresas pero que no es uno de los criterios más importantes para juzgar si un Estado se halla o no en una situación de falencia”²³¹, y también dispone que “por otro lado, es discutible que el abandono temporal de la democracia, que en la mayor parte de los casos es puramente formal, sea un síntoma de falencia de Estado”²³².

De lo antes expuesto, habría que tomar en cuenta algunos aspectos que podrían coadyuvar a elaborar un mejor concepto respecto de los Estados fallidos, en primer lugar, hay que comenzar diciendo que las revoluciones que se originen no pueden ser sinónimo de las falencias de los Estados, puesto que el común denominador en las revoluciones (no intervenciones extranjeras) es que los grupos emergentes reclaman una mejor calidad de vida para los individuos, o que se encuentren en contra de un gobierno dictatorial y también cabe preguntarse ¿podría un Estado que tenga una administración centralizada y con irrespeto a los derechos humanos ser considerado como fallido? La respuesta sería no, pues el hecho de que tenga un gobierno de esa índole no quiere decir que el Estado es fallido, aunque los gobiernos represivos y autoritarios deben de encaminarse hacia un gobierno democrático, como el menos malo de los gobiernos. Las violaciones de los derechos humanos por parte de los gobiernos tampoco pueden hacer alusión a que el Estado es fallido, pues lo que no existe es un gobierno que respete y promueva el aspecto social y democrático de derecho de los Estados pero sí el monopolio del Poder del Estado. A raíz de lo que habría que considerar la constancia de las revoluciones, al igual que los golpes de Estado, el efecto de estos en el control del monopolio del Poder, y en el caso de los golpes de Estado, la efectividad del nuevo gobierno en el control del monopolio del Poder.

Luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el tema de Estado fallido y su relación con el manejo de la violencia, la seguridad nacional e internacional, se tornó más preponderante, puesto que se tomó como base de análisis el Estado de Afganistán, en el cual se entrenaron y se organizaron grupos terroristas; Estados Unidos, confirmaba el

²³¹ *Ibidem*, pág. 20.

²³² *Ibidem*.

hecho de que los Estados fallidos permitían el desarrollo del terrorismo, y que a su vez, constituían peligros para los Estados, sin embargo en el caso del terrorismo ya no era un peligro solamente para sus vecinos, sino para toda la comunidad internacional, especialmente para los Estados que eran objetivos para estos grupos²³³.

En ese sentido, la preocupación se agudizó y ya no sólo se limitaba, per se, a los grupos terroristas, sino que se iniciaba la reflexión sobre las guerras civiles que se desarrollaban en los países del tercer mundo, la presencia de grupos terroristas inmensos en esta guerra, y los efectos de los desastres humanitarios²³⁴. Como se puede ver en la teoría conspirativa de los Estados fallidos argumentada por Noam Chomsky²³⁵, de la cual se hablará más adelante, el concepto de Estado fallido se amplió hasta resultar vago.

Laura Tedesco expone que: “El fracaso del estado se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estatalidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social”²³⁶, por lo que algunas de estas definiciones hacen referencia al funcionamiento del Estado, y es entendido que si un Estado llega al fracaso es porque ha sido deficiente con el Estado de derecho, con el entramado político y la administración y con la seguridad, en tanto que estos males son lo que provocan que el Estado no pueda disponer de un monopolio legítimo de la fuerza física y que los individuos puedan ser protegidos de la violencia²³⁷.

Sin embargo, la legitimidad en el uso de la fuerza física es cuestionable para decir que un Estado es fallido, más aún desde el punto de vista de los EE.UU, puesto que dicho país generó mucha violencia interna en otros países, y apoyó muchos dictadores de la región. Y, mientras los dictadores se mantuvieron en Latinoamérica, los Estados seguían funcionando, con debilidades que en la actualidad se toman al comparar los gobiernos de la época con los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y los principios democráticos configurados en el derecho interno en la fórmula del ESDD, como elecciones libres, derechos humanos, Estado democrático, pero en modo alguno

²³³ TEDESCO, L.: “El Estado en América Latina ¿Fallido o en proceso de formación?” en *Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)*, núm. 37, 2007, pág. 1.

²³⁴ *Ibidem*, pág. 1.

²³⁵ Vid. CHOMSKY, N., *op. cit.*

²³⁶ TEDESCO, L., *op. cit.*, pág. 1.

²³⁷ *Ibidem*, pág. 1.

quiere decir que esos Estados eran fallidos²³⁸. Dichos Estados, aunque con una forma de gobierno autocrática represiva no eran Estados fallidos, pues tenían un control real del monopolio del Poder.

Como se ha visto, el concepto se asocia, muy especialmente por el tema de seguridad, con lo asuntos militares, ejemplificado con las invasiones de Irak y Afganistán, pues las agencias de los Estados Unidos, se han decantado por utilizar los Estados fallidos como los espacios que no pueden ser gobernados, y que por ende representan una amenaza real de la seguridad internacional, constituyendo objetivos militares para el referido país, aunque el concepto haya surgido por asuntos humanitarios²³⁹.

Ciertamente, el concepto de Estados fallidos resulta impreciso, y como se ha visto ha servido de base para distintas prioridades tanto militares, como de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, a lo que Tedesco manifiesta que “el concepto parecería asumir que hay solamente una forma de estado y, por lo tanto, ignora el desarrollo histórico de éstos. Simplifica la idea del estado, presentándolo como por encima de toda controversia o disenso”²⁴⁰.

La diatriba en las evaluaciones de los Estados fallidos que se están realizando radica en que los aspectos que se evalúan no son propios de la medición del monopolio del Poder del Estado, sino de indicadores que miden el ESDD, cuyas exigencias constituyen el modelo de Estado actual que es esperado por la comunidad internacional de occidente y por muchos individuos de las naciones, así muchos informes confunden los indicadores del monopolio del Poder con los indicadores para medir el ESDD.

Por ello, al momento de equiparar los informes de los Estados fallidos y los informes de organizaciones internacionales se pueden encontrar en ello cierta similitud, pues aunque el índice se refiera a Estados frágiles o Estados fallidos puede que los indicadores no se refieran específicamente a la idea del fallo del Estado, en esto, hay algo destacable en el hecho de que el conflicto en el monopolio del Poder del Estado también está relacionado con problemas en las funciones del Estado, y en todo lo concerniente al ESDD.

²³⁸ Durante la guerra fría Latinoamérica tuvo que soportar un número considerables de dictadores como Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, el general Jorge Rafael Videla en Argentina, Juan María Bordaberry en Uruguay, Augusto Pinochet Ugarte en Chile, Hugo Banzer en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en el Perú, entre otros en Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua.

²³⁹ TEDESCO, L., *op. cit.*, pág. 2.

²⁴⁰ *Ibidem*, pág. 2.

Ruiz Medrano sostiene que:

En un Estado fallido, el gobierno no tiene el control físico sobre su territorio y carece del monopolio de la fuerza. Sus instituciones son débiles o inexistentes, el debate democrático está ausente. La guerra civil por sí sola no conlleva el fracaso del Estado se trata de un indicador complejo que incorpora otras variables distintas de la economía, para aportar mayores elementos de análisis sobre la condición de fortaleza o debilidad institucional del Estado. En total son tres variables incorporadas en el análisis de este aspecto: sociales, económicas y políticas que se desdoblan en doce indicadores²⁴¹.

Cuando se analiza la definición de Ruiz Medrano, basada en el informe de la Fund For Peace, se puede colegir que todavía lo que se mantiene como el eje central del análisis es el control del monopolio del Poder, y posteriormente se analizan elementos que pueden ser productos de la misma violencia, o que su deterioro llegue a un punto tal que se origina en una violencia que ponga en entredicho el monopolio del Poder, aunque la Fund For Peace no parte de aquí para sus análisis.

Continuando con el debate conceptual, para Rotberg los Estados llegan al fracaso cuando han sido consumidos por la violencia en sus territorios, y no administran a sus individuos bienes políticos beneficiosos. En el contexto, los gobiernos pierden la credibilidad, y la permanencia del mismo cae en la duda y deviene ilegítima para los ciudadanos. El fortalecimiento de los Estados, así como su declive se presentan como algo no nuevo, pero en el Estado moderno la desintegración que se ha suscitado en África, Asia, Oceanía y Latinoamérica tienen un factor identificador y es que amenazan el propio sistema²⁴².

Zapata Callejas entiende que el concepto es una imagen contemporánea que se refiere a los problemas, deficiencias e imposibilidades que presentan algunos Estados para dar respuesta a las distintas demandas que realizan los ciudadanos²⁴³. Amén de no dar respuestas a sus ciudadanos, pone en peligro a los Estados vecinos, por la cantidad de refugiados que puedan migrar, además presentan una inestabilidad en el ámbito político, así como conflictos.

²⁴¹ RUIZ MEDRANO, S. F.: “De los estados fallidos, Failed States” en *Revista boliv. de derecho*, Núm. 11, pp. 86-113, 2011, pág. 98.

²⁴² ROTBERG, R. I.: “El fracaso y el colapso de los Estados – nación. Descomposición, prevención y reparación”, en AA.VV.: *Los Estados fallidos o fracasados, un debate inconcluso y sospechoso*, MONCADA ROA, P. (dir), Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007, pp. 153-154.

²⁴³ ZAPATA CALLEJAS, J. S.: “Teoría del Estado Fallido: entre aproximaciones y disensos” en *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 9, núm. 1, enero-junio, pp. 87-110, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, 2014, pág. 89.

Evaluando la definición aportada se tiene que entender que la incapacidad de dar respuesta a los ciudadanos es producto de la falta de control del monopolio del Poder, lo mismo ocurre con los refugiados, los conflictos y la inestabilidad política, aunque los conflictos pueden degenerar en que el Estado sea fallido. Respecto a la inestabilidad política, la misma en menor grado puede llevar al bloqueo del monopolio del Poder.

Mendoza Pinto, extrae la definición aportada por el gobierno de los EE.UU, basado en la amenaza que constituyen los Estados fallidos, a saber: “se definen como aquellos que carecen de democracia representativa y de libertad de comercio; ya que pueden albergar en su territorio a células terroristas o desarrollar tecnologías catastróficas (Por Ej., armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, biológicas)”²⁴⁴. Esta definición es muy abstracta, democracia representativa y libertad de comercio pueden ser indicadores, pero por sí solos no podrían ser tomados en consideración para reputar un Estado como fallido. Algo interesante es que se muestra en el trasfondo la importancia que revisten para la política exterior de los Estados fallidos.

Mas, cuando aquí se establecen los Estados fallidos, se hace acorde a lo expuesto por Robert Jackson, cuando entiende que al referirse a los mismos, no aduce a las disrupciones sociales que se originan en los Estados por causas de los desastres naturales, como los terremotos, las inundaciones, las sequías, entre otros. Siendo estas situaciones temporales o de urgencia que pueden superarse por la ayuda nacional e internacional para mitigar los daños y restablecer las condiciones previamente existentes. Tampoco se plantea el asunto de la ayuda económica a los países pobres, comprendiendo que un Estado fallido no es por obligación subdesarrollado económicamente, puesto que hay Estados que se podría decir que son desarrollados y que llegan a la incivilidad, ya que el civismo no es sólo un compromiso de los ricos, y la pobreza no puede ser una excusa para los actos de barbarie. Tampoco se hace referencia a los Estados destrozados por las guerras internacionales. Los Estados fallidos no se han colapsado por las presiones externas, como el caso de Alemania y Japón en la segunda guerra mundial. Dichos Estados han llegado a tal situación debido a la anarquía que impera en ellos. Y, en tal virtud, resultaría engañoso hablar del gobierno o de los ciudadanos, ya que estos papeles

²⁴⁴ MENDOZA PINTO, J. E.: “Los Estados fallidos – Estados desestructurados: una amenaza a la seguridad internacional o un pretexto para la injerencia de las grandes potencias” en *Revista Política y Estratégica* núm. 98, pp.83-98, Ed. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, junio 2005, pág. 84.

no encuentran sentido en esos países. Por igual, no se ha referencia a los Estados que no tienen inclinación democrática, pues un Estado podría ser un lugar sumamente seguro para la convivencia sin ser democrático²⁴⁵.

Por ello Jackson concluye que los Estados fallidos:

...constituyen una categoría más limitada que los estados que no son democráticos o incluso que los estados autoritarios. Cuando me refiero a estados fallidos, hablo exclusivamente de estados que no pueden o no salvaguardarán las condiciones civiles mínimas –esto es, la paz interna, las leyes y el orden y el buen gobierno– para sus poblaciones. El nombre compuesto estado fallido es algo inapropiado (...) los Estados fallidos son unas cáscaras jurídicas que ocultan, a nivel interno, una condición insegura e incluso peligrosa, un estado de naturaleza. Estos estados tienen una existencia legal internacional pero una escasa existencia política interna²⁴⁶.

Jackson da en la diana del asunto, pues deja ver claramente la falta del monopolio del Poder del Estado que se refleja en el aseguramiento de las condiciones civiles mínimas, como el orden y el buen gobierno, que en modo alguno significa que sea un gobierno de índole democrático. Y en cuanto a la incongruencia del concepto “Estados fallidos”, ciertamente la hay, pues cuando se anula el monopolio del Poder, ya el Estado está siendo puesto en duda, pues la esencia del Estado es ese Poder, por lo que al menos doctrinalmente el término guarda contradicción.

Aunque Jackson trata de limitar el concepto de fallido, no ocurre así en la manera que trata a estos, pues entiende que algunos Estados han fallado desde su independencia, en tal ánimo menciona a Chad, que desde su independencia en los años sesenta ha sido fallido, al igual que Sudán ha mostrado un fracaso desde que los Británicos salieron del país en el 1956, y en el caso de Haití que ha sido Estado fallido desde que se liberó del Imperio francés²⁴⁷. Aunque lo delimita en la definición, en la práctica lo usa para referirse a Estados débiles, y muy especialmente que culpa a dichos Estados por los problemas que provocó la colonización y el protectorado, en donde la mayor parte de los inconvenientes vino porque el monopolio del Poder lo tenían potencias extranjeras.

²⁴⁵ JACKSON, R.: “Los Estados fallidos y la tutela internacional” en *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, núm. 10, febrero de 2008, GERI – UAM, pp. 4-5, en <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/144.html>

²⁴⁶ *Ibidem*, pág. 5.

²⁴⁷ *Ibidem*.

Sin embargo, se precisa mantener parte de la delimitación de Jackson en que “el nombre compuesto estado fallido es algo inapropiado (...) los Estados fallidos son unas cáscaras jurídicas que ocultan, a nivel interno, una condición insegura e incluso peligrosa, un estado de naturaleza. Estos estados tienen una existencia legal internacional pero una escasa existencia política interna”²⁴⁸, la condición insegura y peligrosa resulta de la ausencia de control del monopolio del Poder del Estado. Se destaca que “Estado fallido” no tiene que ver con Estados autocráticos, es un concepto más limitado; tomar esto en cuenta es la mejor manera de entender los procesos históricos que han ocurrido sin confundirlos con los Estados débiles o con Estados autocráticos o ilegítimos²⁴⁹, con ello se establece coherencia con las funciones o fines del Estado y con la teoría de las formas de Estado²⁵⁰.

II.2 Los Estados Fallidos, el terrorismo, la amenaza latente y la ayuda humanitaria

Tomando en consideración que se ha entendido que los Estados fallidos responden a la abolición del monopolio del Poder del Estado, pueden dar cabida al desarrollo de distintos males y dentro de estos, del terrorismo, en tal sentido Condoleezza Rice expuso que:

(...) el 11 de septiembre cristalizó nuestra vulnerabilidad. Puso de relieve la índole de las amenazas que enfrentamos hoy. Las amenazas de hoy provienen menos de grandes ejércitos que de pequeñas y oscuras bandas terroristas; menos de Estados fuertes que de Estados débiles o fracasados. Y luego del 11 de septiembre ya no queda duda de que Estados Unidos enfrenta hoy una amenaza existencial a nuestra seguridad, una amenaza tan grande como cualquiera de las que enfrentamos durante la Guerra Civil, la denominada Guerra Justa o la Guerra Fría²⁵¹.

Tokatlián comprende que “El ejemplo de las relaciones entre Washington y Bogotá desde mediados de los noventa en adelante es utilizado como un estudio de caso en el que se muestra la forma en que la construcción en torno a la cuestión del Estado fallido fue esencial para legitimar una creciente y masiva intervención estadounidense en los asuntos

²⁴⁸ *Ibidem*, supra cit., pág. 5.

²⁴⁹ La legitimidad está sujeta a las creencias de los pueblos y no viene dada por la forma de Estado sino que es la creencia la base de la forma de Estado, y cuando el Estado entra en conflicto con la creencia de los individuos, viene la ilegitimidad y por ende constantes conflictos, pero ello no significa que los Estados que tienen gobiernos ilegítimos o autocráticos son fallidos.

²⁵⁰ Vid. Cap. 1.9. lo referente a las funciones y fines del Estado de CARRÉ DE MALBERG Y HOBBS.

²⁵¹ Cit., por OROZCO RESTREPO, G.: “Estados fallidos y fallas globales. Un análisis crítico sobre el origen de las amenazas en la globalización” en *RAI Revista Análisis Internacional*, núm. 1, 95-118, Madrid, año 2010, pág. 96.

colombianos”²⁵². Desde el enfoque dado por el autor el comentario muestra el tema de los Estados fallidos en la política exterior de los EE.UU, pero desde otro enfoque muestra la preocupación por el hecho de que los conflictos de beligerancia se puedan convertir en hechos que promuevan el terrorismo, como pasó con el Estado colombiano.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, condicionaron el panorama internacional para que se pusiera en práctica una política exterior diseñada conforme el concepto de Estados fallidos y lo que significa un Estado fallido para la seguridad del pueblo estadounidense²⁵³. Este tipo de política exterior luego se tradujo en invasiones militares de carácter preventivo, fue la llamada guerra preventiva que tuvo su mayor desarrollo durante el gobierno de Bush, las invasiones de Afganistán y de Irak fueron el ejemplo más ilustrativo sobre el significado de los Estados fallidos en la política exterior de los EE.UU, lo que se convertía en un sinónimo de terrorismo²⁵⁴.

Este tipo de política exterior fue continuada por la administración del Presidente Obama, pero de una manera más atenuada. Aunque los ataques terroristas en los EE. UU, fueron frenados en sus intentos, el terrorismo visualizó otros objetivos, como Bélgica y Francia, aparte de los objetivos que ya tenía en el oriente; esto ha conllevado a que la relación de los Estados fallidos con el terrorismo sea una relación que con el pasar del tiempo se va agudizando.

Bonilla Maldonado también se expresa sobre el ataque a las Torres Gemelas entendiendo que “se hizo brutalmente evidente que los Estados débiles, fallidos o en vías de fracaso no son un peligro solamente para sus ciudadanos, sino también para el orden internacional”²⁵⁵. Aunque se puede diferir en cuanto a la amenaza latente en todos los Estados débiles, los cuales son distintos a los Estados fallidos.

La ayuda humanitaria se desarrolló concomitantemente con las intervenciones militares que se realizaban, asimismo como con el concepto mismo de Estados fallidos, pues la ayuda humanitaria se convirtió en parte de la política exterior de los EE.UU, así como de

²⁵² TOKATLIÁN, J. G.: “La Construcción de un “Estado fallido” en la política mundial” en *Revista Análisis político*, núm. 64, septiembre-diciembre, 67-104, Bogotá, 2008, pág. 68.

²⁵³ *Ibidem*, pág. 68.

²⁵⁴ CHOMSKY, N. (2003): *Hegemonía o supervivencia, el dominio mundial de EE.UU*, Grupo Editorial Norma, Bogotá, pág. 22.

²⁵⁵ Presentación en AA.VV.: *Los Estados fallidos o fracasados, un debate inconcluso y sospechoso*, MONCADA ROA, P. (dir), Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007, pág. 16.

los países desarrollados, como un modo de colaborar con aquellos Estados que se encontraban en condiciones que podían poner en amenazas a dichos países, evitando masacres y futuros genocidios²⁵⁶.

El desarrollo de la ayuda humanitaria en los Estados fallidos, permitió las intervenciones legales justamente con el propósito de ayudar a los seres humanos, por lo que no había que usar la fuerza para acceder al país, exponiendo Tokatlián que “Quizás por un hiato breve a principios de los noventa esta estrategia informó, al menos parcialmente, las políticas exteriores y de defensa de las administraciones del saliente Presidente George Bush y del entrante Presidente William Clinton”²⁵⁷.

En el mismo tenor Mendoza Pinto expone que luego del 11-S los Estados fallidos tienen una mayor preponderancia en la política exterior de los EE.UU, puesto que son vistos como aspectos de la estrategia de seguridad de los EE. UU, en la guerra en contra del terrorismo global, lo cual ha sido clarificado en “The National Security Strategy of the United States of America”, NSS, de septiembre del 2002, donde se establece que el terrorismo y las armas de destrucción masivas se hacen acompañar de los Estados fallidos²⁵⁸. Aunque en este contexto se mal interpretan las amenazas, pues el terrorismo, las armas de destrucción masivas y los Estados fallidos no constituyen amenazas los tres, el hecho reside según la política exterior de los Estados Unidos, en que los Estados fallidos son los espacios en los cuales se pueden desarrollar el terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masivas.

Si bien es cierto que el uso del concepto de Estados fallidos por la política exterior de los EE.UU ha hecho un uso cuestionable del mismo, no menos cierto es que han colaborado en la discusión, especialmente al agregarle lo referente a la seguridad y el orden, que es uno de los puntos primordiales del monopolio del Poder del Estado. Pues para la política de EE.UU lo importante es el control del territorio por los Estados aun siendo autocráticos. Y, como se verá luego, aunque se haya empleado por Washington como un modo de injerencia, la ayuda humanitaria posteriormente se convertiría en una panacea.

²⁵⁶ TOKATLIÁN, J. G., *op. cit.*, pág. 71.

²⁵⁷ *Ibidem*, pág. 72.

²⁵⁸ MENDOZA PINTO, J. E., *op. cit.*, pág. 84.

II.3 El Estado fallido, fracasado, colapsado, desestructurado, inoperante o débil; una clasificación para la problemática

El concepto de “Estados fracasados” también ha tenido una participación estelar en el desarrollo del concepto de “Estados fallidos” debido a que el fracaso fue uno de los calificativos que se usaron para referirse a los Estados que estaban presentando ciertas debilidades, así “aquél incipiente tratamiento durante los setenta de lo que constituía el fracaso de los estados recientemente independizados estuvo limitado por varios condicionantes intelectuales y políticos del momento”²⁵⁹. Tal vez por ello, se entiende que el concepto de Estados fallidos tuvo su origen en los setenta y ochenta²⁶⁰.

El fracaso en el Estado, así como los demás calificativos de fallido, inoperante, colapsado, tiene la exigencia añadida de que haya un modelo de Estado ideal con el cual se pueda comparar para decir que un determinado Estado ha fracasado, por ello el modelo que se usaba de base de comparación en la época de los 70 y 80 era el Estado democrático que sostenía los EE.UU y los países de Europa. Lo que indica que el término fracasado podría ser ambiguo al existir dos clasificaciones contundentes de los tipos de Estados, como son los autocráticos y los democráticos, y las modalidades que engloben ambas categorías²⁶¹.

Otro punto a tener en cuenta, es que el término de “fracasado” hace alusión a un Estado que no podrá volver a ser Estado jamás, lo que en cierto sentido no podría ser, en vista de que el concepto al usarse en los 70 y 80 respecto a algunos Estados, muestra que el calificativo era inadecuado en vista de que dichos Estados aún continúan funcionando. Pero debe haber un reconocimiento de que el calificativo fue usado, como los demás, para determinar la política exterior de los Estados en occidente²⁶².

Para hacer una distinción entre los Estados fuertes de los débiles y de los Estados débiles de los que fracasan o llegan a colapsar, Rotberg, se sujeta a la eficiencia en los suministros de bienes políticos fundamentales, y con ello define como bienes políticos “aquellas solicitudes intangibles y difíciles de cuantificar que en su tiempo hacían los ciudadanos a los soberanos y que hoy presentan a los Estados”²⁶³. Entre esos bienes políticos, el estudio

²⁵⁹ ROTBERG, R. I., *op. cit.*, pág. 69.

²⁶⁰ “La reflexión en torno a los Estados fallidos surgió en el ámbito académico estadounidense y europeo, muy vinculado al caso de África, en el marco regional del proceso de descolonización y en el contexto más amplio de la bipolaridad Este-Oeste” Cf., *ibídem*, pág. 69.

²⁶¹ Vid. Cap. I.8.

²⁶² *Ibídem*, pág. 69 y ss.

²⁶³ *Ibídem*, pág. 157.

entiende que garantizar la seguridad tiene cierta preponderancia, ya que a los individuos les resulta difícil proporcionarse su seguridad. Otros bienes políticos son resguardar la seguridad nacional de invasiones en el territorio; la eliminación de las amenazas internas y ataques que afecten el orden nacional y toda la estructura de la sociedad; la prevención del crimen y de otros actos que constituyan peligros para la sociedad, permitiéndole a su vez a los ciudadanos que puedan dirimir sus diferencias por las vías legales y legítimas estipuladas sin la necesidad de recurrir a la violencia²⁶⁴.

Llama la atención lo expuesto por Rotberg, pues todos los bienes políticos considerados en el párrafo anterior responden al monopolio del Poder por parte del Estado, pues el proporcionar seguridad es un hecho propio de ese Poder, como sinónimo de que sólo el Estado puede ejercer violencia en la forma en que las leyes, la Constitución y los tratados lo permitan, en principio. Al igual, el resolver las controversias entre los individuos por las vías que institucionaliza el Estado es parte de ese Poder, pues se reitera que sólo el Estado tiene el monopolio del Poder, y ningún individuo puede reclamar usando la violencia, ya que le estaría usurpando el uso de la misma al Estado, pues como agrega el mismo Rotberg: “Los Estados modernos (...) proporcionan métodos predecibles, reconocibles y sistematizados de resolución de las disputas y regulan las normas y las costumbres dominantes de una sociedad o cuerpo político particular”²⁶⁵.

Rotberg diferencia entre los Estados débiles y los Estados fracasados, entendiendo que en el Estado débil existe una crisis general, mientras que en el Estado fracasado hay dominio de la anarquía internamente. Sostiene como un elemento divisorio más marcado que en el Estado débil, aún el Estado se mantiene como el proveedor exclusivo de los bienes políticos, y en el Estado fracasado el Estado ha perdido o cedido parte del rol de proveedor exclusivo de los bienes políticos²⁶⁶.

También la división admite diferentes grados en la debilidad de los Estados, entre los que se encuentra el Estado en vías de fracaso, caracterizado por mantener una anarquía latente, lo que lo hace distinto a las otras debilidades que presentan los Estados como, Estados

²⁶⁴ *Ibidem*, pág. 157-158.

²⁶⁵ *Ibidem*, pág. 158.

²⁶⁶ *Ibidem*, pág. 130.

estructuralmente débiles y Estados temporalmente débiles o con un potencial medio de fracaso²⁶⁷.

Sin embargo, hablando del límite en donde se encuentran los Estados fallidos separándose de los que están en vías de fracaso, se aduce que:

En el Estado fallido la anarquía interna ya se ha instalado, la capacidad económica y fiscal de maniobra es mínima, ha sido consumida por la violencia y prácticamente casi no proporciona bienes porque las instituciones estatales y la infraestructura necesaria para hacerlo están muy debilitadas o han dejado de existir”²⁶⁸, sin embargo expresa del Estado en vías de fracasar en contraposición a este que: “En el Estado en vías de fracasar la anarquía interna no se ha extendido por completo y conserva ciertos márgenes de maniobra, lo que sirve para explicar por qué el Estado moderno – como forma de organización política –en este caso no está deslegitimado por completo, a diferencia de lo que sucede en el tipo fracasado, en donde el contrato social se ha quebrado²⁶⁹.

En cuanto a lo referente al quebranto del contrato social en los Estados fracasados, habría que ver si hay una ruptura real del contrato social, o simplemente no se ha podido cohesionar el monopolio del Poder del Estado, pues el quebranto de ese contrato significa que por alguna razón los individuos de la nación no han querido ceder parte de su libertad para conformar el Poder, sin embargo el Estado puede estar fallido y aún permanecer el contrato social.

Para Rotberg la ausencia de autoridad hace del Estado que se aplique la ley del más fuerte, caracterizándolo de “jungla”, es lo que etiqueta a los Estados fallidos, siendo esta la diferencia esencial de los Estados colapsados, diferenciándose de los fracasados. De lo cual se expone:

De manera que el punto de inflexión entre estos dos tipos de Estado radica en que, como lo dice Rotberg cuando describe al Estado colapsado, la poquísima semblanza de orden y provisión de algunos bienes que el Estado fallido todavía aparenta –a pesar de la “energía negra” bajo la cual funciona -, en el Estado colapsado está consumida por las fuerzas entrópicas²⁷⁰.

Para Jean Marie Grose existen cinco clases de Estados reputados como fallidos: 1. El Anarchicstates; en donde no se encuentra un Poder político centralizado; 2. Phantomstates; en donde sólo hay autoridad confinada de Estado; 3. Anemicstates; en el

²⁶⁷ *Ibidem*, pág. 130.

²⁶⁸ *Ibidem*, pág. 130.

²⁶⁹ *Ibidem*, pág. 130.

²⁷⁰ MONCADA ROA, P. “Estudio preliminar”, en AA.VV.: *Los Estados fallidos o fracasados...*, pág. 131.

cual se incluyen a Estados que poseen pocos recursos que están atravesando por guerras con grupos secesionistas; 4. Capturedstates; los cuales son conducidos por grupos étnicos; y 5. Abortedstates; en cuyos Estados no existe un Poder único que controle el monopolio de la fuerza²⁷¹.

La anterior clasificación resulta interesante, hay puntos que resultan cuestionables como sería el manejo del Poder del Estado mediante grupos étnicos, lo cual no quiere decir que el Estado sea fallido, aunque ciertamente los conflictos étnicos pueden conllevar a que un Estado sea reputado como fallido. Los Estados con pocos recursos y en procesos de guerra tampoco deben ser considerados como fallidos a menos que el nivel de desarrollo de la guerra impida el monopolio del Poder de coacción del Estado.

La profesora López Martín como un modo de clasificación, dispone que se use el término de Estado fallido o colapsado para aquellos casos en donde haya una abolición total del elemento de la organización política, mientras que entiende que para los demás casos, podría usarse la categoría de “Estados en vías de fallar (failing)”;

siendo aquellos Estados que de no tomar otro rumbo, pueden caer en lo fallido, dentro del cual pueden estar Zimbabwe, Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía o Sudán. Mientras, que cuando las instituciones de un Estado funcionan pero son débiles y que a veces fuerzas ajenas sobrepasan sus instituciones podrían entrar en categoría de “Estados frágiles, débiles o en situación de fragilidad (fragile or weak)”, en dicha categoría se encontrarían a Yemen, Haití, Pakistán, República Centroafricana o Timor Leste, entre otros²⁷².

El profesor Jiménez Piernas trata de diferenciar dos conceptos, el concepto de Estado débil y el concepto de Estado fracasado. Para ello toma en cuenta los rasgos que tienen los Estados viables o sostenibles, del cual entiende “se define (también idealmente) por ser capaz de mantener la autoridad efectiva sobre su territorio, además de proporcionar los servicios públicos básicos a su población”²⁷³, y en cambio ve a un Estado fracasado como “aquel que no ejerce un control efectivo y que ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza sobre parte de su territorio, porque se desafía o suplanta su autoridad por medios violentos”²⁷⁴, ese Estado fracasado no le garantiza a sus individuos “el

²⁷¹ *Ibidem*, pág. 90.

²⁷² LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 20.

²⁷³ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Estados débiles y Estados fracasados...*, pág. 18.

²⁷⁴ *Ibidem*, pág. 19.

imperio de la ley (rule of law), la seguridad, la sanidad y educación públicas y las infraestructura mínimas”²⁷⁵, y se subraya que “*no se da una situación de fracaso por la simple ausencia de un buen gobierno, elemento secundario del tipo, sino del propio gobierno que es el elemento nuclear del mismo, siempre que se prolongue en el tiempo*”²⁷⁶.

De todas las clasificaciones la más aceptada entre los que se han referido al tema es la desarrollada por Rotberg, no obstante la misma resulta complicada al momento de determinar las fronteras de una categoría a otra, o de las subcategorías, pero no deja de ser interesante, aunque no permite explicar algunos hechos históricos en el desarrollo de los Estados, ya que parte de la suposición de que la democracia y la legitimidad han de estar sujetas a dicha forma de Estado. Mientras que con respecto a los Estados débiles, el referido profesor, hace la observación de que el concepto de Estados débiles es más propio de las instituciones internacionales de cooperación, puesto que trata de cosas comunes que guardan una relación con el subdesarrollo económico, a razón de lo cual define el concepto de Estados débiles “frente al estándar del Estado sostenible, es aquel que padece un proceso de deterioro político y socioeconómico que merma la gobernabilidad y le impide proporcionar un estándar mínimo de servicios públicos básicos”²⁷⁷.

En consideración del criterio asumido por el profesor Jiménez Piernas la debilidad de un Estado pende mucho de la gobernabilidad, ya que ésta es la capacidad que tienen los Estados para lidiar con conflictos sin que pueda sufrir su estabilidad, el cual exige unos niveles mínimos de funcionamiento en las instituciones, así como en la economía y en la cohesión social. En torno a la debilidad Jiménez Piernas sostiene que la misma es determinada por “ante todo, una situación de permanente subdesarrollo, que lo hace muy vulnerable frente a crisis y conflictos endógenos o exógenos”²⁷⁸ e identifica como parámetros a tomar en cuenta para la determinación de la debilidad el “analfabetismo y escolarización, mortandad infantil y esperanza de vida, renta nacional y renta per cápita y otros indicadores”²⁷⁹.

²⁷⁵ *Ibidem*.

²⁷⁶ *Ibidem*, pág. 20.

²⁷⁷ *Ibidem*, pág. 21.

²⁷⁸ *Ibidem*, pág. 22.

²⁷⁹ *Ibidem*.

II.3.1 El Estado en proceso de formación

El concepto de Estado en un proceso de formación es uno de los recursos que se ha utilizado para entender el fenómeno de los Estados fallidos. El concepto puede ser válidamente aplicable para determinadas circunstancias, pero no para designar todos los Estados fallidos o aquellos que presentan inconvenientes con el derecho internacional de los humanos y los principios democráticos, pues esencialmente el concepto de Estado en proceso de formación sugiere algunas situaciones particulares: A) Un Estado que se haya recién independizado, pues al escindirse de otro, el monopolio del Poder del Estado naciente estaría en un proceso de formación, cuyo tiempo puede ser corto o relativamente largo, sin embargo luego de formado el monopolio del Poder del Estado el mismo puede presentar inconveniente con el modelo de Estado ideal, pero si se obnubila el monopolio del Poder del Estado quiere decir que es un Estado fallido; B) Un Estado que ha dejado de ser colonia real y efectivamente, pues en éste el monopolio del Poder del Estado era foráneo, lo que le tocaría construir ese monopolio de Poder. Tal vez, en los procesos de descolonización de los Estados africanos se puedan encontrar muchos países que se presenten en un “proceso de formación”, pues el tiempo para la conformación de ese monopolio es impreciso, y esta imprecisión viene dada debido a que muchas veces ocurren acontecimientos que no permiten la unicidad del monopolio del Poder, ya sean acontecimientos bélicos, internos o externos o fenómenos naturales.

Tedesco explorando la realidad latinoamericana, expresa que:

A pesar de que los cambios políticos y económicos que llegaron durante y después de los años ochenta tenían el potencial para modificar el estado y sus relaciones sociales, paradójicamente, el regreso de la democracia fue testigo de la aparición de un nuevo contrato social que profundizaba las desigualdades económicas y sociales bajo el paraguas del concepto de igualdad política. El proceso reciente de formación del estado frustró la promesa democrática²⁸⁰.

Por igual agrega:

La esencia de la democratización es la transformación de un régimen autoritario en un régimen democrático pero, además, significa la transformación de un estado autoritario en un estado democrático... Hasta ahora, los gobiernos latinoamericanos han fracasado en la construcción de un estado semejante²⁸¹.

²⁸⁰ TEDESCO, L., *op. cit.*, pp. 13-14.

²⁸¹ *Ibidem*, pág. 14.

En cuanto al primer párrafo se tiene que argumentar lo siguiente; para Tedesco los cambios se originan al nivel del contrato social, lo cual se refleja en las relaciones sociales, si esto fuera de tal modo, entonces los individuos también estuvieran de acuerdo con las dictaduras militares de la región de Latinoamérica, lo que sin duda es negativo, pero en esas dictaduras acaso ¿no seguían siendo un Estado Venezuela, República Dominicana, Argentina, Nicaragua, Chile y Perú? O ¿esos Estados estaban y siguen estando en un proceso de formación? Parecería irrisorio decir que sí.

El contrato social aparece en la conformación del Estado originariamente, sin embargo lo que hace que los individuos quieran asumir otros modelos aún más democráticos en el Estado, es específicamente ese Estado ideal que puede cambiar de momento a momento pues éste es parte del contrato social, y aunque los individuos de los Estados quisieran una forma de Estado basado en la democracia, y el Estado que imperara sea autocrático, en modo alguno significaría que el Estado sea fallido o que esté en proceso de formación, lo único que significa es que no ha alcanzado el modelo de Estado ideal, y que en parte, resultaría ilegítimo al ser contrario a las aspiraciones del contrato social. La teoría del proceso de formación de los Estados encuentra problemas a la hora de aplicarlo a los acontecimientos históricos de los Estados.

En cuanto al segundo párrafo referido de Tedesco, es válido decir que la democratización trata de llevar de un Estado autocrático a un Estado democrático, y de uno democrático a otro aún más democrático y participativo, pero se alude a que los Estados de la región han fracasado en la conformación de ese Estado, también a este postulado la respuesta es negativa, pues los Estados de Latinoamérica son Estados democráticos, que buscan alcanzar el modelo ideal de Estado, pero que presentan ciertos problemas o inconvenientes, los cuales llevan a que no puedan satisfacer los valores y principios que informan los derechos humanos y los principios democráticos, pero no dejan de ser Estados basados en la democracia.

La teoría del proceso de formación de los Estados es una teoría altruista que en parte entra en defensa de algunos Estados, para que no puedan ser considerados como Estados fallidos, la cual tiene una validez explicativa parcialmente en cuanto a los nacientes e interrumpidos Estados en procesos de formación del monopolio del Poder.

Y, continuando con Tedesco, la académica hace referencia a que: “los países de América Latina no parecen estar experimentando estados fallidos. Existen, sin duda, ciertas discontinuidades en las instituciones del estado que está todavía en el proceso de formación”²⁸²; la aseveración hecha de que, en sentido general, en la región no aparecen rastros de Estados fallidos es cierta, pero lo interesante en lo citado, es la parte de la discontinuidad de las instituciones como un elemento esencial para considerar un Estado en proceso de formación; la continuidad de las instituciones en el Estado podría ser un indicador de estabilidad democrática y gobernabilidad, pero no puede ser un indicador de que el Estado aún está en proceso de formación, aunque es aceptable en las formas que anteriormente se había aludido, pero si los individuos de un Estado decidieran cambiar de forma de Estado pasando de autocrático a democrático o a la inversa ¿se estaría ante un Estado en proceso de formación? El Estado estaría plenamente formado lo que ha elegido es la manera en estructurar y organizar el Poder y el modo en cómo ese Poder se relaciona con los individuos, pero hay ya un Estado formado que simplemente está cambiando su forma de relación y de organización.

II.3.2 Propuesta de una clasificación

Con la finalidad de promover una clasificación que no sea compleja pero que permita comprender momentos históricos de los Estados, captando la realidad que verdaderamente expresan, se entiende que la división debe ser: *Estados fuertes*, para aquellos Estados cuyos resultados en la medición del Estado ideal sean sumamente óptimos, y a la vez, tales Estados cumplen con un papel referencial respecto a los demás Estados; *Estados moderadamente estables*, para los Estados cuya evaluación del Estado ideal no están dentro de los Estados débiles ni dentro de los Estados fuertes, los cuales presentan debilidades en sus Estados, como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, no a grandes escalas, y en los que se mantiene la lucha por alcanzar el Estado ideal, pero no hay un cuestionamiento al monopolio del Poder del Estado; los *Estados débiles o frágiles*, los cuales presentan serios conflictos con el Estado ideal además que el monopolio del Poder del Estado está seriamente cuestionado; y, los *Estados fracasados, colapsados, desestructurados, inoperantes o fallidos*, estos cuatro conceptos devienen como

²⁸² TEDESCO, L., *op. cit.*, pág. 18.

sinónimos, y tienen lugar cuando hay una anulación real del monopolio del Poder del Estado. Con esta clasificación se le hace más justicia a otros países, además de que se obtiene un análisis más objetivo de los Estados, y no trata de forzar categorías que no permiten la distinción clara del lugar que ocupan dos Estados con problemas iguales.

Esta clasificación es propia para los Estados que han elegido la democracia como forma de gobierno en base al Estado ideal, por lo que para su medición debe haber primero un análisis del monopolio y luego del Estado ideal o al inverso, pues la medición del ESDD como Estado ideal es un buen referente del funcionamiento del Estado y los logros que quedan por alcanzar, lo que permitiría ser una herramienta, especialmente para los países de América Latina, y a la vez, evitaría que se hagan clasificaciones alegres.

Pero se debe tener claro que de lo que se trata es de determinar si el Estado tiene control del monopolio del Poder o no, y en ello sí pueden entrar todos los Estados sin importar su forma, por tanto los indicadores deben girar solamente en base a la medición del control del monopolio del Poder y no a asuntos que toquen el ESDD, como la legitimidad, la democracia entre otros. Así se establece un índice muy objetivo, incluso se pueden usar las categorías señaladas para clasificarlos, ateniendo a los niveles de violencia, de seguridad, de conflictos, entre otros. Esto ayudaría a identificar cuáles Estados son débiles o fallidos, permitiendo a la comunidad internacional un marco más acertado y científico que estaría acorde a la construcción del Estado y permite explicar procesos históricos. Pero es recomendable realizar una medición sin importar la forma de Estado en base al ESDD para observar temas como los derechos humanos entre otros, luego de realizado la medición del control del Poder.

II.4 El Estado Ideal

Tedesco dispone que:

El estado-idea es el nivel más abstracto de esta interpretación del estado y por lo tanto es el punto de partida de esta discusión. La noción del estado como idea hace referencia al concepto kantiano del estado como ideal que no existe necesariamente, no tiene una manifestación histórica de su forma más pura. De acuerdo con Kant el estado perfecto puede que nunca llegue a existir: Sin embargo

esto no afecta a la idea de que con el fin de llevar esta organización legal al punto más cercano a su perfección, presenta un arquetipo de la idea más pura²⁸³.

El modelo de Estado ideal puede ir cambiando acorde a las circunstancias y a un periodo determinado, pues seguro es que Rousseau aun con sus ideas democráticas no alcanzaba a ver un Estado con las exigencias de derecho como el que se tiene ahora, sin embargo el ideal de Rousseau y de otros tantos que manifestaron en su momento el ideal de gobierno, fue lo que hizo que el Estado democrático se centre en la dignidad del hombre como eje central y en la soberanía popular. Un ejemplo de ello es que en su momento el Estado absoluto constituía el modelo de Estado ideal, lo mismo con el Estado democrático.

Dentro del Estado ideal, muy especialmente con la asunción de la democracia como forma de Estado, se encuentra el principio de progresividad y otros principios que tratan de mejorar esa imagen ideal del Estado, hecho por el cual el Estado ideal se torna casi inalcanzable, pues el principio de progresividad inherente al mismo, hace que el ideal sea más exigente a medida que se vayan consiguiendo logros que se acerquen a ese Estado ideal.

En este contexto de Estado ideal es que se originan los derechos internacionales de derechos humanos y los principios democráticos configurados en la fórmula interna de ESDD, pues en la actualidad los valores, principios y reglas que inspiran el concepto constituyen el modelo democrático a que aspiran la mayor parte de los países de occidente. Ese Estado ideal del ESDD es lo que permite que los países puedan ser medidos a través de distintos indicadores, los cuales evalúan las deficiencias que presentan los Estados, y que es el mejor método para determinar los problemas reales cuando el Estado democrático tiene control del monopolio del Poder. Aunque ese modelo de Estado resulta ser inalcanzable hay países que tienen un gran desarrollo, cuyos modelos se acercan bastante a este Estado ideal²⁸⁴.

Sin embargo, como se ha dicho el ESDD, el principio de progresividad inherente al referido concepto va haciendo que el modelo ideal se vaya renovando constantemente, este renovarse nunca termina, es la naturaleza del Estado ideal mismo, pero los Estados deben esforzarse en la consecución de los objetivos que le impone el ESDD, pues es lo

²⁸³ TEDESCO, L., *op. cit.*, pág. 7.

²⁸⁴ Un ejemplo de ello lo constituyen los países nórdicos, los cuales en la mayoría de mediciones que se realizan ocupan los primeros lugares.

que hará que los Estados vayan mejorando, y esta mejoría siempre será en provecho del ser humano. Aquí yace la importancia de conocer concretamente lo que implica el ESDD.

La problemática con el Estado ideal surge cuando se interpola el ESDD a algunos países asiáticos cuyos regímenes son autoritarios, y empeora cuando a los individuos de aquellas naciones no les interesa el modelo democrático de Estado. El hecho está aquí en ver la legitimidad del Estado conforme al interés de los individuos para continuar con el Estado autocrático; al respecto, la primavera árabe ha puesto en dudas el carácter legítimo que occidente entiende que tiene la democracia.

II.5 Contrato social, Estado ideal y el monopolio del Poder del Estado

El contrato social en el cual los individuos de un conglomerado social acceden a la creación de una nación, y consienten al hecho de que parte de su libertad será confinada en pro de la convivencia, es lo que origina como se ha visto en el primer capítulo de este trabajo, el Estado, el cual se asimila plenamente con el Poder. En tanto, que el derecho cuando hace su entrada le asegura a los individuos que este Poder no se desbordará y que ningún individuo puede hacer uso de dicho Poder, al menos que el derecho establecido así lo permita, pero siempre teniendo en cuenta que el monopolio del mismo estará en el Estado.

Al respecto Williams sostiene que:

El contrato social debería ser considerado como una forma del estado-idea que ayuda a legitimar las relaciones sociales que dan forma al estado. En este sentido, el contrato social expresa la idea de una institución dinámica que cambia de acuerdo a las transformaciones de los valores y los intereses entre los distintos grupos de personas que habitan un territorio espacial determinado en un momento de tiempo específico²⁸⁵.

De la definición de Williams se podría hacer algunas acotaciones. Más que una manera del Estado-idea, el contrato social es lo que origina ese Estado ideal pues luego de que los individuos se someten a ese contrato es que surge un modelo de Estado ideal. Sin embargo, el contrato social también es dinámico, pues a medida que va pasando el tiempo lo individuos van poniéndole nuevas condiciones al contrato social que se traducen en obligaciones y derechos o en derogaciones de estos, los cuales son informados por valores

²⁸⁵ Cit. por TEDESCO, *op. cit.*, pág. 7.

y principios en un determinado momento; lo que tiene su impacto en el modelo de Estado Ideal.

Aunque se quiere buscar la superación de la idea kantiana del Estado ideal²⁸⁶ a través de la teoría del contrato social, puesto que éste es representado como “un concepto racional que simultáneamente describe, refleja y se origina en las relaciones sociales existentes”²⁸⁷, el hecho está en que estos dos no tienen el por qué llegar a una contradicción, pues si el contrato social permite partir de la realidad imperante, el Estado ideal representa las aspiraciones de los individuos y muchas veces de la comunidad internacional que se manifiesta en las Declaraciones y Convenios Internacionales.

El contrato social tiene dos implicaciones, cuando los individuos se asocian para formar el Estado, en un primer lugar, aceptan las condiciones en que se encuentran en el momento, pues no pueden pactar desconociendo la realidad, pero en un segundo e importante lugar, los individuos advierten y se ponen de acuerdo en que quieren otro modelo de Estado que les pueda favorecer y por ello el contrato social puede obedecer tanto a la realidad pero también a fines que perseguir.

La Constitución de un determinado Estado es una muestra del contrato social al que han arribado los individuos al querer formar una nación, por ello en las constituciones hay normas que son de carácter operativo, es decir, pueden aplicarse directamente, mientras que hay otras normas que muestran las aspiraciones a que desea llegar el pueblo pactante, por eso en el modelo de ESDD no todas las normas tienen un cumplimiento inmediato, pero en el concepto está impreso el deseo magnánimo de la población de querer conseguir los fines propuestos. A su vez, las reformas constitucionales son vislumbres de las aspiraciones siempre renovadoras del Estado ideal, en tanto que en el Derecho Internacional los Tratados y Convenios reflejan la más excelsa intención para con el ser humano.

²⁸⁶ “Con el fin de superar el concepto de kantiano del estado-idea, la noción del contrato social permite que esa idea se realice a través de actividades como, por ejemplo, las que se dan por las relaciones sociales entre individuos, e instituciones como el gobierno. El contrato social se entiende como un concepto racional que simultáneamente describe, refleja y se origina en las relaciones sociales existentes”, *Ibídem*, pág. 7.

²⁸⁷ *Ibídem*, pág. 7.

II.6 El Estado Social y Democrático de Derecho y los Estados fallidos

Lo principios que obedecen al ESDD son comprendidos como bienes políticos por Rotberg dentro del cual se encuentra el bien político de la seguridad del que se aduce que cuyo contenido esencial trae consigo leyes, procedimientos, es decir un conjunto normativo exigible, derecho de propiedad, inviolabilidad de contratos, sistema judicial adecuado, grupo de normas que dan legitimidad a los valores del Estado de derecho, y otro bien político es la participación en los procesos políticos, lo cual comprende la libertad de intervenir en la política, el respeto a las instituciones políticas nacionales y regionales, como el órgano judicial y el órgano legislativo, la tolerancia, los derechos humanos y civiles fundamentales²⁸⁸.

Se establecen otros conjuntos de bienes políticos que son exigidos por los individuos como, los servicios de salud, los servicios de educación, las infraestructuras, un sistema bancario y monetario que suele ser controlado por un Banco Central, las redes de comunicación, una atmósfera institucional y fiscal que coadyuven a los ciudadanos a perseguir sus objetivos empresariales, un espacio en el cual la sociedad civil se pueda desarrollar, mecanismos que normalicen el uso de los recursos naturales propiedad de la sociedad²⁸⁹.

A partir de la organización jerárquica de los bienes políticos que establece la teoría homónima, se disponen de criterios con los cuales se pueden considerar los Estados como fuertes, débiles o fallidos. Para lo cual la selección resultará simple, puesto que los Estados fuertes cumplen con los bienes políticos en su conjunto y de manera separada, mientras que los Estados débiles se presentan en una doble vertiente, cumpliendo con algunos de los bienes políticos y en otros no. Y por tanto “cuanto peor es el desempeño de los Estados en relación con estos bienes (...) más débiles se hacen y más tiende la debilidad a conducirlos al filo del fracaso”²⁹⁰.

Del filo del fracaso, los Estados pueden descender a una subcategoría denominada “Estados en camino hacia el fracaso”²⁹¹, aduciéndose también a que los Estados fallidos pueden incurrir en no estar acorde a ninguno de estos bienes, pero no será necesario que

²⁸⁸ *Ibídem*, pág. 158.

²⁸⁹ *Ibídem*, pág. 159.

²⁹⁰ *Ibídem*, pág. 159.

²⁹¹ *Ibídem*, pág. 159.

no cumplan con el total de los bienes políticos, pues con el no cumplimiento del bien de la seguridad se puede originar un Estado fallido²⁹².

Desde la teoría de los bienes políticos resulta un tanto complejo la explicación, en cambio es notable que la simple examinación de lo esgrimido por Rotberg apunta hacia los derechos contenidos en los Tratados y los principios democráticos contenidos en la fórmula del ESDD, pues los elementos que describe señalan el mismo como el modelo de valores y principios ideal en el Estado. Por ello, se parte de analizar en los índices factores que son propios de este modelo constitucional de Estado democrático, y los cuales pueden mostrar cierta fragilidad o debilidad en los Estados. No obstante, el punto esencial de un Estado para ser calificado como fallido no lo puede constituir la seguridad, pues puede existir una abolición de la seguridad, y aún mantenerse el monopolio del Poder del Estado, aunque parezca momentáneamente perdido, pero sin duda que la seguridad es un indicador²⁹³.

II.7 Influencia foránea en la falla de los Estados

Thürer ha entendido que los Estados “desestructurados” deben su procedencia a tres factores, en un primer plano, al término de la guerra fría, debido a que las potencias protagonistas habían patrocinado a líderes políticos con muy poco arraigo, líderes a los cuales, se les enviaba armas, y que por lo general tenían una ideología en común, conllevando a que se mantuviera una “unidad” aparente en el territorio²⁹⁴. En un segundo plano, el colonialismo se mantuvo durante mucho tiempo imperando en las colonias, provocando con ello que las estructuras tradicionales se destruyeran, y que en cambio impusieron organizaciones constitucionales correspondientes a occidente y en un tercer plano, los procesos de modernización que promovía la movilidad social, pero que no estaban basados en la construcción del Estado como una nación, razón por la cual se carecía de unos cimientos firmes²⁹⁵.

²⁹² *Ibidem*, pp. 159-160.

²⁹³ La seguridad es un efecto de los problemas de control del monopolio del Poder, pero no es sinónimo de su anulación total, en la región de Latinoamérica hay países que muestran inseguridad como El Salvador, México, República Dominicana, pero no quiere decir que sean fallidos.

²⁹⁴ THÜRER, D., *op. cit.*

²⁹⁵ *Ibidem*.

Para López Martín no se puede pensar que las causas que llevan a un Estado a ser considerado como fallido es de la exclusiva responsabilidad de los problemas internos de los Estados, calificando dicho criterio de “simplista”. Entre los factores que pueden ser endógenos se encuentran las guerras civiles, la corrupción, la pérdida de legitimidad popular, penuria, pobreza. Mientras que los elementos exteriores son instituciones financiera de carácter internacional, así como las cooperaciones multinacionales que aflijan la economía y la infraestructura del gobierno, producto de la globalización²⁹⁶. Las intervenciones de la comunidad internacional no han *“tenido un papel acertado en muchas de estas situaciones que se pueden denominar de fragilidad. Incluso al contrario, en ciertos casos, su intervención ha podido ser la causante de mayores niveles de fragilidad, o hasta de colapso del Estado”*²⁹⁷.

Las profesoras Pozo Serrano y López Martín esgrimen las siguientes causas:

- En primer lugar hay que referirse al pasado colonial de muchos de esos países o a sus dificultades para constituirse como Estados independientes. Con carácter general, los regímenes coloniales erosionaron los modelos sociales y económicos tradicionales sin que llegaran a nacer y consolidarse otras formas que permitieran que el nuevo Estado estuviera dotado de una identidad real.
- La herencia de las fronteras coloniales supuso un serio obstáculo para la integridad territorial y para la construcción de la unidad nacional de los nuevos Estados. No se puede ignorar que el marco jurídico e institucional colonial que heredaban algunos nuevos Estados se había diseñado para explotar divisiones locales y no para superarlas.
- En el ámbito económico el legado colonial fue origen de políticas al servicio de los intereses de las antiguas metrópolis y nocivas para el desarrollo local. En estas circunstancias en los Estados multiétnicos se tiende a politizar la pertenencia a un grupo étnico, y las minorías desfavorecidas, a menudo oprimidas, que no controlan el poder pueden considerar que el control del gobierno es el único medio para garantizar su supervivencia.
- El enfrentamiento ideológico entre Este y Oeste durante la Guerra Fría es otro factor coadyuvante en el proceso. Porque las Grandes Potencias favorecían la existencia de regímenes aliados que mantenían la cohesión interna del Estado mediante la fuerza; por otro lado, porque en no pocas ocasiones éstas fomentaron divisiones internas y apoyaron a cada uno de los bandos enfrentados. Con el fin de la Guerra Fría el apoyo externo cesó y muchos de estos regímenes fueron incapaces de mantener su poder político sin ayuda. Desaparecida la única base de cohesión, el conflicto entre los diferentes grupos, clanes o etnias era difícil de evitar.
- La lucha entre bloques ha dado paso a intereses económicos, relacionados con las riquezas del país. Tiene lugar una privatización del Estado e, incluso una

²⁹⁶ LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 22.

²⁹⁷ GARCÍANDÍA GARMENDIA, R., *op. cit.*, pág. 2.

criminalización pues las facciones enfrentadas controlan alguna de las regiones ricas en recursos naturales que son explotados en beneficio propio para financiar su bando, o participan en actividades ilegales como cultivo o tráfico de drogas y armas; Liberia, Angola y Sierra Leona, son un buen ejemplo de ello²⁹⁸.

Tanto lo expuesto por la profesora López Martín como por Thürer muestran que la comunidad internacional, especialmente las grandes potencias, tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad por las fallas que presentan algunos Estados, pues incluso, la inercia mostrada en la actualidad, es producto de ese mismo reconocimiento de que las potencias tienen una gran participación, principalmente en el tratar de imponer un sistema democrático que podía ser contrario a lo que en el momento querían los pueblos de los Estados. Un ejemplo de lo que ha significado el protectorado y las colonias, es el genocidio ruandés.

II.8 Criterios para determinar la falla de un Estado fallido

Para Boutros Boutros-Ghali los rasgos distintivos de un Estado fallido deberían ser la distorsión de las instituciones del Estado, particularmente la policía y el órgano judicial, así como el orden público, y el bandolerismo, y la permanencia de un caos; en el mismo las funciones del gobierno son suspendidas, al igual, los bienes del gobierno son saqueados y destruidos y los funcionarios son asesinados y los que no, se ven obligados a abandonar el territorio²⁹⁹.

Thürer destaca como característica de los Estados desestructurados las siguientes:

En primer lugar, el aspecto geográfico y territorial, es decir, el hecho de que los “Estados desestructurados” están esencialmente asociados con problemas internos y endógenos, aunque, incidentalmente, éstos puedan tener impactos más allá de sus fronteras. La situación a la que nos enfrentamos es de implosión, más que de explosión de las estructuras de poder y de autoridad, de desintegración y desestructuración de los Estados, más que de su desmembramiento. En segundo lugar, está el aspecto político, es decir el colapso interno de la ley y el orden. El énfasis está puesto aquí en el desmoronamiento total o casi total de las estructuras que garantizan la ley y el orden, más que en el tipo de fragmentación de la autoridad del Estado que se ve en las guerras civiles, en las que rebeldes militares o paramilitares claramente identificados combaten ya sea por fortalecer su propia posición dentro del Estado ya sea para separarse de éste. En tercer lugar, hay un

²⁹⁸ LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 22.

²⁹⁹ Cit. por LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 20.

aspecto funcional, es decir, la ausencia de órganos capaces, por un lado, de representar al Estado a nivel internacional, y por otro, de recibir influencias del mundo exterior. O bien no existe ninguna institución con autoridad para negociar, representar y hacer cumplir la ley, o, si existe, no puede en absoluto confiarse en ella, pues actúa en general como “estadista de día y bandido de noche”³⁰⁰.

Para López Martín los criterios que se deben tomar en cuenta para la determinación de un Estado como fallido son:

1. La ruptura de la ley y el orden producido cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos (o, peor aún, son utilizadas para oprimirlos o atemorizarlos).
2. La escasa o nula capacidad para responder a las necesidades de sus ciudadanos, proveer servicios públicos básicos y asegurar las condiciones mínimas de bienestar y de funcionamiento de la actividad económica normal.
3. La ausencia de entidad creíble que represente al Estado ad intra frente a sus ciudadanos, ad extra más allá de sus fronteras.
4. Como consecuencia de lo anterior o, precisamente, causa de ello, asentamiento de grupos armados, carteles, mafias, milicias, señores de la guerra que son quienes realmente ostentan el monopolio del uso de la fuerza y actúan, en general, en sustitución del Estado³⁰¹.

En forma de aclarar los cuatro puntos mencionados, la profesora López Martín afirma que un conflicto interno, per se, no puede ser considerado como causa única para etiquetar a un Estado como fallido, tampoco que el Estado esté pasando por una crisis, o por una catástrofe natural, o en la pobreza extrema³⁰².

Se podría estar de acuerdo con la profesora López Martín, ya que la causa primordial o rasgo esencial para caracterizar a un Estado como fallido es la pérdida absoluta del monopolio del Poder, pues es la ausencia de control del Poder lo que genera la ruptura de la ley y el orden, y la incapacidad de proteger a los ciudadanos, así como la anulación de la función del Estado de proveer los servicios básicos a los individuos, lo que también trae como consecuencia un quebranto de la autoridad para representar al Estado interna y externamente. Y como otra consecuencia de la pérdida del monopolio del Poder, es el afianzamiento de los grupos armados, de las mafias entre otros. Aunque en este punto hay

³⁰⁰ THÜRER, D., *op. cit.*

³⁰¹ *Ibidem*, pág. 20.

³⁰² *Ibidem*, pág. 21.

que agregar, que los mismos pueden conllevar también a la pérdida del control del monopolio del Poder. Sin embargo, todo ello puede representar indicadores para determinar la pérdida del control del monopolio del Poder.

Ese “Poder” que sostiene el Estado, que es su fundamento, no necesariamente tiene que ser legítimo, pues la legitimidad del Poder no ha sido una constante en el desarrollo de los pueblos, y admitir la legitimidad para los Estados fallidos lleva a afirmar que el Estado español durante el gobierno de Franco era fallido, lo cual no es así; o que la República Dominicana durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo era un Estado fallido, lo que también no es correcto, pese a que el Poder que se tenía en ese momento se ejercía de manera ilegítima.

Incluso, en la actualidad hay una moda por decir que las violaciones sobre derechos humanos³⁰³ constituyen actos que le imputan a un Estado la consideración de ser fallido, lo que iría en contra de lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho penal internacional, los cuales ofrecen las vías correspondientes para ir en contra del Estado que comete los actos violatorios de derechos humanos, que en modo alguno es decir que es fallido. Hay quienes propugnan por la ampliación del término de fallido con su correspondiente pérdida de la soberanía, entendiendo que dichos Estados son “invisibles”³⁰⁴.

II.9 La Fund for Peace y la Foreign Policy

La Fund For Peace³⁰⁵ es una institución autónoma, no partidista, sin ánimo de lucro, y que se dedica a la investigación, la cual trabaja a los fines de prevenir los conflictos violentos y promover la seguridad sostenible, siendo dicha seguridad promovida a través de la investigación, la formación y la educación. Buscando lograr la participación de la sociedad civil, la construcción de puentes a través de distintos sectores, y el desarrollo de tecnologías innovadoras y herramientas para los responsables políticos³⁰⁶.

³⁰³ KRASNER, S., *op. cit.*, pág. 17 y ss.

³⁰⁴ HERBST, J., MILLS, G.: “The invisible State” en *Foreign Policy Magazine*, pp. 1-80, 2013.

³⁰⁵ En lo adelante FFP.

³⁰⁶ Fund For Peace en <http://global.fundforpeace.org/aboutus>

Por igual, la FFP se autodefine como una fundación líder en la evaluación de los conflictos, centrándose en los Estados débiles y fallidos, siendo el objetivo principal de la misma, la creación de herramientas prácticas y enfoques para la erradicación de los conflictos que son útiles para las personas que deciden³⁰⁷.

La FFP adopta un enfoque holístico de los problemas derivados de los Estados débiles y fallidos, acorde a su propia descripción, trabajan con los actores de la sociedad civil y a nivel político con los tomadores de decisión. La institución ha trabajado en más de 50 países con una amplia gama de socios en todos los sectores: gobiernos, organizaciones internacionales, militares, organizaciones no gubernamentales, académicos, periodistas, redes de la sociedad civil y el sector privado³⁰⁸.

Pero muy especialmente la FFP produce el llamado “índice de Estados fallidos”, el cual constituye una clasificación anual de 177 países a través de la evaluación de 12 indicadores, lo cual es publicado en la revista Foreign Policy desde el año 2005 hasta la fecha. En un sentido más conciso la FFP busca la identificación de los conflictos, las amenazas transnacionales, el desarrollo sostenible y la seguridad³⁰⁹.

Desde el 2005, la FFP se ha convertido en el índice de Estados fallidos más influyente, siendo la revista Foreign Policy el medio en el cual es publicado el índice, intentando convertirse en una herramienta de los gobiernos, pues a sus inicios comenzó con pocos países, mientras que con el desarrollo de los años fue incluyendo a otros, hasta que al momento tienen una cantidad considerable de Estados.

El índice de Estados fallidos más que analizar simplemente el monopolio del Poder del Estado, se interesa por analizar el ESDD, pues muchos de los indicadores que mide, son propios de este modelo de Estado democrático, el cual es un modelo ideal que le resulta interesante a los países de occidente, pero que entra en conflicto con el Estado autocrático, y por tanto no permite una evaluación objetiva de los Estados fallidos.

³⁰⁷ *Ibidem.*

³⁰⁸ *Ibidem.*

³⁰⁹ *Ibidem.*

II.9.1 Indicadores del índice de Estado fallido

El índice de Estados fallidos ha dividido los indicadores acorde a tres factores: social, económico y político. En total son 12 indicadores, que son tomados para analizar las falencias que presentan los Estados.

II.9.1.1 Indicadores sociales

En los indicadores sociales se encuentran el “incremento de presiones demográficas”. En este indicador se mide las presiones que recibe la población, tales como las enfermedades, los desastres naturales, los cuales dificultan a los gobiernos la tarea de cuidar a sus ciudadanos o demostrar una falta de capacidad o voluntad, más específicamente aparte de los desastres naturales y las enfermedades, mide el ambiente, la contaminación, la escasez de alimentos, la desnutrición, la escasez de agua, el crecimiento de la población, el aumento de la juventud y la mortalidad³¹⁰. Para Ruiz Medrano la formulación que presenta el informe es muy subjetiva, puesto que las presiones demográficas son catalogadas desde el punto de vista de que “son demasiadas personas, luego, deben de existir problemas; a mayor población mayores problemas”, lo que equivale a decir que el problema es correlativo a la cantidad de personas y no a otros tipos de parámetros³¹¹.

El indicador de “movimiento masivo de refugiados” es otro parámetro, el mismo incluye la emergencia humanitaria, el alejamiento de poblaciones de grandes comunidades producto de la represión, lo cual plantea una situación de amenaza a la seguridad, por lo que mira el desplazamiento, los campos de refugiados, campos de desplazados, enfermedades relacionadas con el desplazamiento³¹². Indicador el cual trae confusión pues aduce a que el movimiento de las personas es lo que crea los conflictos, y que también criminaliza a los refugiados como los creadores de los inconvenientes, y no pone de relieve las causas que originaron el desplazamiento³¹³.

También se encuentra la “salida ingente de la sociedad y la llamada fuga de cerebros”, el cual dispone que cuando hay poca oportunidad, las personas emigran, dejando un vacío

³¹⁰ Vid. *Fragile State Index 2014*, pág. 10, publicado en Fund For Peace, en <http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf>

³¹¹ RUIZ MEDRANO, S. F., *op. cit.*, pág. 99.

³¹² Vid. *Fragile State Index 2014*, *op. cit.*

³¹³ RUIZ MEDRANO, S. F., *op. cit.* 99.

del capital humano, y aquellas personas con recursos también tratan de salir del país, midiéndose la migración per cápita, el capital humano y la emigración de la población educada³¹⁴. Ciertamente los problemas económicos provocan estos flujos migratorios, sin embargo Ruiz Medrano dispone que:

...en un mundo donde las fronteras se comienzan a hacer obsoletas, resulta innegable que es un concepto subjetivo carente de una visión global, ya que se trata de un problema que puede ser visto desde la óptica de la migración normal de las personas hacia una mejora de su calidad de vida, o bien, como un concepto global, donde ésta migración es constante en todos los países. Así mismo, esta visión carece del hecho que se ve solamente en un sentido, es decir, los problemas que acarrea al país emisor, no de los problemas, o, beneficios que acarrea al país receptor³¹⁵.

Las “venganzas de grupos” se erige como otro de los indicadores sociales, el cual hace referencia, primero, a la existencia de tensión y violencia entre los grupos, y segundo, a la capacidad del Estado para proporcionar seguridad, produciéndose una atmósfera de miedo en el cual la violencia puede sobrevenir, midiéndose la discriminación, la falta de poder, la violencia étnica, la violencia comunitaria, la violencia sectaria y la violencia religiosa³¹⁶. Este elemento también pasa a ser bastante subjetivo y asume que es normal que haya individuos con sed de venganza, llena de rencor y con resentimiento, lo cual puede permanecer por siglos en la psiquis de las personas y desatarse un conflicto en un momento determinado³¹⁷.

II.9.1.2 Indicadores económicos

Ya dentro de los indicadores económicos, se encuentra el “desarrollo económico desigual”, que se presenta cuando hay disparidades étnicas, religiosas o regionales, muestra de que el gobierno tiende a ser desigual con su compromiso con el contrato social³¹⁸. Este elemento se mide sobre una percepción y sobre una verdad que muestra una contradicción en los parámetros³¹⁹.

³¹⁴ Vid. *Fragile State Index 2014*, op. cit., pág. 10.

³¹⁵ RUIZ MEDRANO, S. F., op. cit., pág. 100.

³¹⁶ Vid. *Fragile State Index 2014*, op. cit. pág. 10.

³¹⁷ RUIZ MEDRANO, op. cit., pág. 100.

³¹⁸ Vid. *Fragile State Index 2014*, op. cit., pág. 10.

³¹⁹ RUIZ MEDRANO, op. cit., pág. 100.

El otro indicador económico es la “pobreza y el deterioro económico”, aquí se prueba la capacidad de los Estados para proveer a los ciudadanos en caso de que no puedan valerse por sí mismos y si se crea fricción entre los ricos y los pobres, se incluyen el déficit económico, la deuda gubernamental, el desempleo, el empleo de los jóvenes, el poder adquisitivo, el PIB per cápita, el crecimiento del PIB, la inflación³²⁰. Este aspecto criminaliza la pobreza, puesto que si hay baja en la actividad económica del Estado, entonces las personas deberán inclinarse por realizar actividades punibles para sobrevivir. Esta percepción es lo que provoca que los problemas se ataquen desde las consecuencias y no desde las causas real que los produce, o sea se lucha en contra del pobre, el crimen, pero no se ventilan las causas que encaminan al Estado a esas circunstancias, como el capitalismo avaricioso³²¹.

II.9.1.3 Indicadores políticos

Dentro de los indicadores políticos se encuentra la “legitimidad del Estado”, el cual mide la corrupción y la falta de representatividad en el gobierno, los cuales afectan directamente el contrato social, se incluyen como elementos la corrupción, el gobierno eficaz, la participación política, el proceso electoral, la democracia, economía ilícita, el tráfico de drogas, las protestas y demostraciones, y las luchas de Poder. Como se puede ver los lineamientos que intenta cubrir este indicador obedece a lo que traza el ESDD, en cuanto a sus valores, principios y reglas. Sin embargo, por igual, hay que tomar en consideración que algunos de estos elementos pueden ser puestos en tela de juicio con aquellos gobiernos autocráticos y que no necesariamente signifique que sean fallidos.

En este factor, también yace el indicador de “los servicios públicos”, que busca medir la prestación de la salud, de la educación y los servicios de saneamiento entre otros, aquí se incluye la vigilancia, la criminalidad, la provisión de educación, la alfabetización, el saneamiento de agua, la infraestructura, la calidad sanitaria, la telefonía, el acceso a internet, la fiabilidad energética y las carreteras. Estos inconvenientes pueden presentarse en cualquier Estado, empero se enfocan desde la violencia y el terrorismo.

³²⁰ Vid. *Fragile State Index 2014*, op. cit., pág. 10.

³²¹ RUIZ MEDRANO, op. cit., pág. 100.

Otro indicador interesante es el concerniente a “los derechos humanos y al Estado de derecho”, el cual intenta ver las violaciones a los derechos humanos como una falta a la responsabilidad que tiene el Estado, siendo objeto en este indicador la libertad de prensa, las libertades civiles, las libertades políticas, la trata de personas, los prisioneros políticos, el encarcelamiento arbitrario, la persecución religiosa, la tortura y las ejecuciones. Como se puede observar estos temas dejan ver claramente que hay una evaluación al ESDD en la evaluación que realiza la FFP, pues éstos son postulados que ese modelo constitucional de Estado emula tanto como un valor, como un principio y como una regla. Aunque dentro de este hay algunos aspectos que pueden ser discutibles³²².

El “aparato de seguridad” es otro indicador del factor político, el cual alude a que el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza legítima, y se entiende que el contrato social se debilita en donde esto se ve afectado a causa de los grupos en competencia. En el indicador se evalúan los conflictos internos, la proliferación de las armas, los disturbios y las protestas, las muertes a causa de conflicto, los golpes militares, los bombardeos y los prisioneros políticos³²³. Se puede destacar el hecho de que no se puede confundir gobierno con Estado, pues aunque haya cambios de gobiernos, el Estado continúa, incluso si hay cambios en la forma del Estado, aun así éste continúa³²⁴.

El indicador de “aumento de las élites fraccionalizadas”, se entiende que cuando los líderes locales y nacionales se involucran en una política arriesgada sólo para obtener beneficios propios se lesiona el contrato social, se trata de ver las luchas de Poder, los desertores, las elecciones viciadas, la competencia política. Elementos estos que son propios de los Estados democráticos, de los principios y la forma de Estado que están contenidos en la fórmula del ESDD, siendo una muestra más de cómo la evaluación de la FFP se expande hacia la medición del modelo constitucional de Estado antes citado, y no se limita a la medición del control en el monopolio del Poder.

³²² Vid. RUIZ MEDRANO, *op. cit.*, pág. 102, el mismo expresa que: “El empleo del ejército para legitimar un actuar de un gobierno o bien para amedrentar y someter a la población disidente de la forma de un gobierno, son la muestra de una destrucción de las instituciones de un Estado, más no de la destrucción de un Estado en sí mismo, que en cualquier momento puede cambiar de gobierno sin perder de vista que, para la comunidad internacional seguirá existiendo, no desaparecerá y volverá a renacer por el hecho de un cambio de gobierno”.

³²³ Vid. *Fragile State Index 2014*, *op. cit.*, pág. 10.

³²⁴ RUIZ MEDRANO, *op. cit.*, pág. 103.

El último de los indicadores es la “intervención de otros Estados o agentes externos”, se examina cuando el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales o domésticas, los actores externos intervienen para proporcionar los servicios o para manejar los asuntos internos del Estado, el cual toma en consideración la ayuda exterior, la presencia de agentes mantenedores de la paz, la presencia de misiones de la ONU, las intervenciones militares extranjeras, las sanciones y el grado de solvencia³²⁵. Este tipo de situaciones bien podrían indicar rasgos de debilidad del monopolio del Poder del Estado, sin embargo hay situaciones que no tienen nada que ver con la falla de un país, es decir, las intervenciones que se realizaron en Latinoamérica por parte de los EE.UU no fue producto de las fallas del Estado, sino que las mismas obedecieron a asuntos de la política exterior de los EE.UU en la región al estar en el desarrollo de la guerra fría o que obedecieron a políticas de control geopolítico y geoestratégico.

Como se ha podido ver, los informes de Estados fallidos o frágiles de la FFP no se limitan a establecer los problemas que puede haber con el monopolio del Poder por parte del Estado, algunos de estos indicadores, principalmente lo que entrañan a la violencia y a los conflictos, pueden indicar que algo no está bien con el monopolio del Poder, pero los informes prevén otros indicadores que son propios del ESDD, sin embargo hay algunos puntos importantes que se deben tomar en cuenta, cuando un Estado puede ser evaluado acorde al modelo de ESDD es porque no es un Estado fallido, sino que puede presentar problemas en su desarrollo, aunque hay que admitir que para los países que han abrazado la democracia como forma de Estado la evaluación del ESDD puede ser un buen índice, en casos de que haya una anulación completa de los indicadores correspondiente a este modelo constitucional de Estado, se estaría ante un Estado débil, si se mantiene aún el monopolio del Poder, o fallido, si hay ausencia plena del monopolio del Poder, sin embargo al momento de analizar un Estado autocrático el ESDD no sería lo más recomendable sino que sólo sería pertinente los indicadores que pueden medir el monopolio del Poder; no es apropiado mezclar en la medición indicadores del ESDD y del Estado fallido, a menos que lo que se esté midiendo sea lo primero.

¿Por qué se puede utilizar el ESDD como fórmula para medir la fragilidad o el fallo de los Estados democráticos? La respuesta es simple, pues si hay una anulación casi total de los principios y reglas que se ordenan en el cumplimiento de éste, es porque sencillamente

³²⁵ Vid. *Fragile State Index 2014*, op. cit., pág. 10.

el monopolio del Poder se ha perdido o está a punto de perderse y por tanto no puede establecerse un proceso electoral, no se pueden asegurar unos derechos mínimos, no hay un poder judicial funcionando, no hay respeto por las normas constitucionales. También el análisis del ESDD sería, tomando en cuenta su Estado ideal, la mejor forma en que los Estados se pueden comparar e ir calificando su progreso. Resulta obvio, el por qué no se estaría actuando de manera objetiva si un Estado autocrático es evaluado negativamente por no realizar elecciones o por tener un sistema penal inquisitorio, y que tal vez no cumple con las garantías que exige el proceso penal³²⁶.

Aparte de lo aquí mencionado hay otros aspectos que pueden ser discutible en los indicadores, pero que no se entrarán en ellos, por carecer de valor, sin embargo hay algo que se debe dejar en claro, los elementos que aparecen en el informe, aunque haya posiciones contrarias, sí tienen un carácter que se podría tildar de científico, lo cual hace que sea compatible con otros indicadores que pueden medir aspectos del ESDD, pero no miden el monopolio del Poder del Estado para calificar un Estado como fallido, sino que lo científico simplemente radica en los indicadores que son propios del ESDD, pero que para los primeros años del índice de la FFP los indicadores podían ser puesto en duda por la metodología utilizada por la FFP. Una calificación mínima en el ESDD es muestra de que un Estado no es fallido.

II.9.2 Crítica al índice de la Fund For Peace

Para la publicación realizada por Foreign Policy del índice de “Estados fallidos” de la FFP para el año 2009, Robert I. Rotberg realizó un artículo como crítica al índice, en forma de alarma, en el cual entiende que la etiqueta de “fallido” permanece para aquellos Estados que ya no pueden servir más a su pueblo. Resaltando que la clasificación de la FFP para ser útil debe ser objetiva y más precisa, y discriminar más, y no solamente ceñirse a la concepción popular de “Estado fallido”, por lo que el índice debiera dirigirse más a los países en riesgo, en vez de hacer una publicación de “Estados fallidos”. En razón de ello, Rotberg comprende que se debe tomar en cuenta para catalogarse a un

³²⁶ Vid. FERRAJOLI, L. (2001): *Derecho y razón*, Ed. Trotta, Madrid, pág. 851.

Estado como fallido; primero, el servicio de bienes políticos a sus ciudadanos y, segundo, la pérdida del monopolio sobre la violencia³²⁷.

Sostiene Rotberg que “los Estados en la cúspide de la falla son ya sea ‘débiles’ o ‘frágiles’ pero no ‘fallidos’ o ‘colapsados’, los cuales deberían ser reservados para expresiones geográficas sin un gobierno, tal como Somalia”³²⁸.

Sobre la metodología empleada en el índice del año 2009, sobre los Estados fallidos, Rotberg, entiende que la misma produce resultados desconcertantes, pues Zimbabwe tiene el puesto número 2 de los Estados fallidos, seguido de Sudán, Chad, la República Democrática del Congo, Iraq y Afganistán. Zimbabwe no tiene pérdida del control del monopolio de la violencia y por consiguiente no debería ser considerada fallida. Mientras que en Sudán, la República Democrática del Congo, Irak, Afganistán, y Pakistán, dichos Estados sólo pueden ser considerados fallidos si su provisión de bienes políticos para la población ha fallado³²⁹.

Otros resultados son iguales de confusos ¿Puede Nigeria, con alguna violencia pero con un territorio controlado, calificarse peor que Sri Lanka, con sus conflictos internos? Por ello, “Un sistema más objetivo de calificación ayudaría mejor a los responsables políticos a analizar las opciones disponibles y elegir las medidas que se adapten al país en peligro”³³⁰.

López Martín también ha concebido que la lista publicada por la FFP traen algunas polémicas. Reseñando que para el índice del año 2010, hay algunos puestos que no concuerdan, así Pakistán detenta el no. 10, estando entre los 10 más críticos, o Corea del Norte con el no. 19, de los 20 más críticos, o Irán ocupando el puesto no. 32, y Georgia el no. 37, a quien se le sindicaba como un “Estado satélite” de la Unión Europea, que están en la zona peligrosa o que países sumamente estables como Colombia, en el no. 46 y Bolivia en el no. 53, puedan ser considerados como Estados fallidos, o que también para el 2005 se considere a la República Dominicana entre los 20 primeros países fallidos. Otros puntos destacable por la profesora es que no se toma muy en cuenta la crisis

³²⁷ ROTBERG, R. I.: “Disorder in the ranks” en *Foreign Policy Magazine*, 2009, pág. 93.

³²⁸ *Ibidem*.

³²⁹ *Ibidem*.

³³⁰ *Ibidem*.

económica, ya que Grecia aparecía en el puesto no. 147, por igual, Irlanda tenía el puesto 173 mostrando más estabilidad que Alemania, Reino Unido y EE.UU.³³¹.

Los datos y los indicadores que se aplicaron en el índice de la FFP muestra la poca confiabilidad de los mismos acorde a los puestos que ocuparon los Estados, en razón de lo cual deja ver que el uso del concepto “Estado fallido” no es usado de la manera adecuada, dándole un carácter muy banal, puesto que no podrían calificarse de la misma manera a Somalia en el puesto no. 1, y a Pakistán en el puesto no.10, o Corea del Norte en el no. 19, los cuales están en la zona de alerta³³².

Se corre un gran riesgo con el uso de las listas, al modo usada por la FFP. Pues, en un primer plano, indicar el fracaso o la fragilidad en un Estado resulta ser, en principio, subjetivo, puesto que no hay conceptos claros sobre “gobierno, estabilidad o efectividad institucional”. Incluso *“con la aparición de áreas sin gobierno que suponen una amenaza para la seguridad –sobre todo la occidental–, la definición de fragilidad estatal sirve más para legitimar el intervencionismo, que para prevenir o poner fin al sufrimiento”*³³³. En segundo plano, cuando se hace una comparación de estadísticas entre Estados, si se quiere ser objetivo, debe explicar el camino seguido por aquellos Estados que han fracasado y poner las alternativas que se deberían seguir para que los donantes intervengan de manera inteligente³³⁴. En tercer plano, una cosa es observar en donde se encuentran los Estados que tienen inconvenientes y otra es saber a dónde se irá a colocar el dinero, como una manera de dónde se dirigirá la ayuda humanitaria³³⁵.

En tal virtud López Martín concluye que “para cumplir los marcados objetivos del desarrollo del milenio, es necesario abordar el problema de los Estados “fallidos”, de los Estados “en vías de fallar”, y de los Estados “frágiles” o “en situación de fragilidad”. Con esta finalidad, resulta operativo este tipo de “encasillamientos”, pues es necesario saber dónde se debe actuar. *Cualquier otra intencionalidad que busque justificar una intervención en aquellos Estados que aparecen en estas listas, debe ser rechazada*”³³⁶.

³³¹ LÓPEZ MARTÍN, A. G., *op. cit.*, pág. 27.

³³² *Ibidem.*

³³³ *Ibidem.*

³³⁴ *Ibidem.*

³³⁵ *Ibidem*, pp. 27-28.

³³⁶ *Ibidem*, pág. 28.

II.9.3 Estados fallidos en Latinoamérica y el índice de la Fund For Peace

La FFP realizó su primer informe a través de la Foreign Policy en el 2005, destacándose el informe por el alto nivel de controversia, puesto que en este informe sólo se presentaban dos categorías; en alerta, países colapsados, y en peligro, países al borde del derrumbe, pero fueron considerados todos como Estados fallidos. En sentido general, en ese año Haití ocupó el puesto 10, Colombia el 14, la República Dominicana el 19, Venezuela el 21, Guatemala el 31, Paraguay el 36, Perú el 40, Honduras el 41, Ecuador el 46, Cuba el 58, El Salvador el 72 y México el 73³³⁷.

Lo polémico del asunto se debió a que algunos jefes de Estado en ese entonces se sorprendieron por el hecho de que se consideraran a estos países como fallidos, pues había una falta de coherencia, ya que se trataba de países que estaban en un funcionamiento y que tenían un modelo de Estado ideal que perseguían, independientemente de los males que achacaban a los Estados, pues como se verá posteriormente los problemas que afectan a la región son los mismos y el índice ha ido cambiando, lo que significaba que había una disociación entre lo que exponía la FFP y la realidad, muestra de esto es que dichos permanecen sin mayores inconvenientes que los que ya tenían. Es de interés que delante de los cuatro primeros países de Latinoamérica se encontraban a pocos puestos países como Costa de Marfil, la República Democrática del Congo, Sudán, Iraq, Somalia, Sierra Leona, Chad³³⁸. Habiendo una clara disparidad.

En el año 2006, el índice de Estados fallidos, se continuó llamando igual, lo que era inadecuado en vista de que en su gran mayoría los países no eran fracasados o fallidos, mientras que se aumentó significativamente el número de países sujetos a evaluación. Dentro de los países que se encontraron en alerta se estaban Haití y Colombia, este patrón se torna repetitivo; seguía la República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Venezuela, Perú, Honduras, El Salvador, México, el Paraguay, Jamaica y Brasil, los cuales entraban en la categoría de peligro pero en distintos niveles de la misma categoría³³⁹.

³³⁷ Vid. *The Failed states index 2005*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2005-sortable>

³³⁸ *Ibidem*.

³³⁹ Vid. *The Failed States Index 2006*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2006-sortable>

En el 2007, el patrón continuó, pero ya el único país que estaba en alerta era Haití, mientras que le seguía Colombia en el puesto 33 mundial, seguido de Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Cuba, Perú, El Salvador, Honduras, Paraguay México y Brasil. Hubo un aumento de los puestos de la región, lo que evidencia el error que tuvo la FFP en sus evaluaciones, que eran bastante alejadas de la realidad, pero que seguían siendo alejadas puesto que dichos países no eran fallidos, y aunque tal vez haya un mal uso del concepto, tampoco algunos de esos países obedecen a su realidad al ponerlos en la categoría de peligro³⁴⁰.

Para el 2008, 2009 y 2010 se mantenían los mismos lineamientos aunque podían haber algunos movimientos de países que iban mejorando sus puntuaciones como Colombia, República Dominicana y Ecuador, otros países subían y bajaban ligeramente. Sin embargo, ya desde el 2007 había aumentado el número de Estados evaluados dando espacio a que se tomara en consideración otros países, facilitando así la comparación entre los Estados del índice³⁴¹.

Desde el 2011 hasta el 2012, los países de la región se mantenían subiendo y bajando, sin embargo, en el 2011 Haití aún se encontraba en alerta en el puesto número 5 mundial, Colombia le seguía en el puesto 44, Bolivia en el puesto 59, Ecuador en el puesto 62, y le seguían Nicaragua, Guatemala, Honduras y Venezuela, estos mismos países se mantenían para el año 2012 en el mismo orden para Latinoamérica. En el informe Brasil aún continuaba entre los Estados en alerta, aunque en el nivel más inferior, pero lo extraño era que para la fecha Brasil había mostrado rasgos distintivos de su desarrollo en la región y en el mundo³⁴².

Para el año 2013 y 2014, aún se mantenía Haití en alerta, y Colombia en la categoría superior de peligro, entre el 2012 a 2013 se experimenta una ligera disminución en la puntuación, lo que se traduce como un mejoramiento, sin embargo para el 2014, ya algunos países mostraron aumentos livianos, cambiando algunos sus posiciones, pero

³⁴⁰Vid. *The Failed States Index 2007*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2007-sortable>

³⁴¹Vid. *The Failed States Index 2008*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2008-sortable>; *The Failed States Index 2009*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2009-sortable>; y, *The Failed States Index 2010*, Fund For Peace <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2010-sortable>

³⁴²Vid. *The Failed States Index 2011*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2011-sortable>; y, *The Failed States Index 2012*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2012-sortable>

manteniéndose el mismo parámetro³⁴³. Algo importante ocurrió en el informe del 2014, con respecto al cambio de nombre de “Failed” a “Fragile”.

Según la FFP, ellos reconocen que el término “índice de Estados fallidos” estaba mal empleado, pero que querían llamar la atención de los líderes para que vieran lo que les podía ocurrir a los Estados si no se hacían los correctivos de lugar, por lo que el objetivo de la fundación nunca fue discutir qué definía los “Estados fallidos”, sino que se utilizara como un instrumento que ayudara a prevenir las condiciones que los manejara, y muy especialmente tener como meta la mejoría de la seguridad humana en los países de todo el mundo³⁴⁴.

La excusa planteada por la FFP tiende a ser irresponsable, más cuando ellos mismos reconocen que fueron muy criticados por el concepto “Failed States”³⁴⁵, y aun cuando sus primeras evaluaciones fueron muy criticadas por el distanciamiento de la realidad, máxime con los Estados de la región de Latinoamérica. Empero, como un modo “altruista” cambian el nombre del índice aludiendo que: *“En tanto que, estamos cambiando el nombre del índice para asegurar que nosotros podemos ser parte de la dirección de aquellos cambios y que el índice puede ser usado, como una herramienta de muchos, para guiar el desarrollo de prioridades y medidas de mejoras y desafortunadamente también cuando las cosas empeoran”*³⁴⁶. Lo cual muestra la falta de coherencia del índice, habiendo una diferencia de lo que se pretendía medir y lo que miden en realidad, pero se puede admitir que al establecer elementos propios del ESDD en los Estados democráticos un resultado muy crítico en los indicadores es sinónimo de que puede haber problemas en el monopolio del Poder, pudiendo hacer cierta debilidad, pero los resultados del informe caen en lo infundado al combinar indicadores del ESDD y del control en el monopolio del Poder.

Para los años 2015 y 2016, el comportamiento de los Estados de Latinoamérica en el índice se mantiene, los Estados ocupan más o menos posiciones comunes a las anteriores,

³⁴³ Vid. *The Failed States Index 2012*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2012-sortable>; *The Failed States Index 2013*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2013-sortable>; y, *The Fragile States Index 2014*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2014>

³⁴⁴ HENDRY, K.: “From failed to fragile: Renaming the index”, en *The Fragile States Index 2014*, pág. 8, Fund For Peace, en <http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf>

³⁴⁵ *Ibídem*, pág. 8.

³⁴⁶ *Ibídem*, pág. 8, “So, we are changing the name of the Index to make sure we can be a part of addressing those challenges and that the Index can be used, as one tool of many, to guide the development of priorities and measure improvements and unfortunately also when things get worse”.

sin embargo hay un cambio notable en cuanto a la República de Colombia que pasa de ser el país que seguía a Haití en la región, a la posición 4, por lo que, Guatemala y Venezuela son quienes le siguen a la República de Haití, lo que denota una mejoría en Colombia y muy especialmente un descenso de Venezuela³⁴⁷.

Como se ha reiterado, se debe reconocer un cierto carácter científico al índice de la FFP que nace de la comparación con otros indicadores llevados a cabo por otras organizaciones, las cuales tienen que ver con valores, principios y reglas que exige el ESDD, por ello se puede observar cómo también de los países de la región como Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay ocupan los primeros lugares en otros índices al igual que en el índice de la FFP. Pero, ninguno de los Estados de Latinoamérica puede ser considerado como fallido, pues el hecho de que tengan calificaciones de un Estado que funciona, hace innecesaria la tipificación de fallido, como se verá al ver las comparaciones entre Somalia y Haití, así como las comparaciones de distintos índices y los problemas reales que albergan los Estados, tomando como fundamento el Estado alcanzable y renovable que prevén los derechos humanos y los principios democráticos. En el caso de Haití mismo puede estar dentro de los Estados débiles, pero en modo alguno puede considerarse como fallido, pero las debilidades que ostentan sí podría conducirle a ello.

Pero sin duda alguna que los primeros informes de Estados fallidos realizados por la FFP distaron de todo esfuerzo científico, pues es la misma FFP que reconoce que su sistema metodológico se encuentra en un proceso de actualización, por ello es la gran distancia entre la realidad y el informe, y que llevó a líderes de Latinoamérica a expresarse al respecto³⁴⁸. El ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna expresó que: *“Sin la intención de opacar los méritos obtenidos mediante la aplicación de la metodología del sistema de evaluación de conflictos, lo cierto es, sin embargo, que hasta ahora sus resultados no son siempre convincentes, y, por consiguiente, esto provoca que se expresen algunas dudas sobre sus consecuencias prácticas”*³⁴⁹.

³⁴⁷ Vid. *Fragile States Index 2015*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015>; y, *Fragile States Index 2016*, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016>.

³⁴⁸ Vid. Declaraciones del Ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, quien sostuvo que República Dominicana no era un Estado fallido.

³⁴⁹ FERNÁNDEZ REYNA, L.: “República Dominicana no es un Estado fallido”, *Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano*, Ed. Universidad Alcalá, Madrid, núm. 14, primavera, 2006, pp.179-186, Pág. 181.

II.10 La descertificación, los Estados fallidos y el Consejo de Seguridad

Los Estados fallidos al desarrollarse como un tema propio de seguridad para los demás Estados de la comunidad, ha llevado a pensar cuál sería el mejor camino para dichos Estados, permitir el fracaso o prestarle ayuda para que se puedan incorporar³⁵⁰. Como un supuesto base se pone de manifiesto que desde el año 1900, algunos imperios como el austrohúngaro, el belga, el británico, el danés, el holandés, el etíope, el francés, el alemán, el italiano, el japonés, el otomano, el portugués, el ruso, el soviético y el español fracasaron dejando un número considerable de Estados pequeños, resultado de lo cual se aumentó de 45 Estados a 192³⁵¹.

Este hecho es la base de la teoría aportada por Jeffrey Herbst, quien entiende que debe repensarse el sentido de la soberanía en los Estados fallidos, a saber:

Un paso más que pueden tomar los Estados Unidos y otros países sería reconocer oficialmente que algunos Estados simplemente no ejercen control formal sobre partes de su país y no deberían, por lo tanto, considerarse soberanos. Es fundamental que la comunidad internacional, al menos de manera experimental, se aleje de la idea de que una vez que un Estado consigue ser miembro de la Asamblea General de Naciones Unidas, la soberanía queda garantizada para siempre, sin que importe lo que ocurra dentro de sus fronteras³⁵².

En tal sentido, Herbst, pone de ejemplo que los Estados Unidos en materia de drogas y corrupción, así como de lavados de activo producto de estos delitos, descertifica a los Estados en un modo de retirarle los fondos que están destinados para esos Estados que se pretenden descertificar, y que de igual forma se podría hacer con aquellos Estados que son considerados como fallidos³⁵³.

A raíz de lo cual, la descertificación sería como una especie de sanción cuando el Estado no está marchando correctamente, y por ende la comunidad internacional, interpreta la soberanía y entiende que la misma ya no es propia de cada Estado. En virtud de la descertificación habría que pensar en otras salidas para los Estados, como el apoyo de nuevos líderes en puntos determinados del país. Esta descertificación, por igual

³⁵⁰ Vid. HERBST, J. (2007): “El fracaso y el colapso de los Estados – nación. Descomposición, prevención y reparación”, en *Los Estados fallidos o fracasados, un debate inconcluso y sospechoso*, MONCADA ROA, P. (dir), Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, pág. 277.

³⁵¹ *Ibidem*, pág. 277.

³⁵² *Ibidem*, pág. 294.

³⁵³ *Ibidem*., pág. 294.

implicaría, que los Estados no ejercieran su soberanía en cuanto a pertenecer a órganos internacionales³⁵⁴.

Herbst aduce en su teoría a una nueva visión de la soberanía en el cual la valoración de la misma venga dada por la comunidad internacional y muy especialmente por los EE.UU, lo cual choca y tiene que llevar a una reformulación del principio de autodeterminación de los pueblos del Derecho Internacional. Sin embargo, lo que habría de preguntarse si sería correcto que el control del monopolio del Poder de un Estado sea mantenido por otro Estado, pues algunos países del África han tenido sus desavenencias fruto de los Estados desarrollados, con las colonias y protectorados³⁵⁵.

Otro señalamiento muy notorio, es que para ello se exige un árbitro, y por lo expuesto por Herbst se tiene que determinar que los EE.UU sería en su concepción el árbitro predilecto, sin embargo ¿serían los Estados Unidos un árbitro imparcial para la determinación de quién debe poder ejercer su soberanía? Es una pregunta que puede ser contestada fácilmente cuando se analiza la historia de los EE.UU³⁵⁶. Por igual, cómo deviene la legitimidad de un país para convertirse en árbitro para determinar quién puede ostentar su soberanía y quién no, sería una brecha para producir cualquier intervención indeseada. Aún si se produjera por una organización internacional como la ONU, bajo qué parámetros se podrían tomar tales decisiones y de producirse una decisión que conllevara a que un Estado se fraccionara en varios Estados ¿sería esta la mejor solución? Resultaría difícil pensar que sí.

Herbst ha abierto el paso a repensar la soberanía desde el punto de vista del derecho internacional y de los países hegemónicos, aunque no obstante no se detuvo a pensar de dónde puede venir el hecho de que muchos países estén considerados como fallidos, si tuvo algo que ver la intervención que hicieron algunos países en esos Estados, como es el caso de Afganistán, si en un momento algunas de las grandes potencias apoyaron gobiernos atropellantes como un mal necesario. El hecho es que la comunidad internacional y sus organizaciones aún no tienen la legitimidad necesaria para descertificar un Estado, incluso siendo la cuestión del reconocimiento un acto político y

³⁵⁴ *Ibidem*, pág. 296.

³⁵⁵ Un ejemplo de ello fue el conflicto de Ruanda, a causa del Estado belga

³⁵⁶ Vid. CHOMSKY, N. (2015): *La quinta libertad, la intervención de los Estados Unidos en América Central y la lucha por la paz*, Ed. Planeta, S. A, Barcelona.

no jurídico, aunque el ingreso a una organización internacional por parte de un Estado represente un paso importante en la vida estatal.

Continuando con la descertificación Herbst entiende que:

Sean cuales fuera las medidas correctas que se adoptasen al final, la descertificación proporcionaría una salida al bloqueo actual, en el que no existe otro estatus que se pueda conceder a un país que el de la soberanía, con independencia de cuál sea su realidad nacional. La descertificación sería un instrumento que se usaría como último recurso. Hacer que la descertificación fuera relativamente difícil enviaría un mensaje mucho más poderoso cuando recurriera a ella. La descertificación tendría también la obligación de declarar públicamente que los Estados Unidos u otros actores importantes comprenden que algunos países no son soberanos aunque no se sepa con claridad qué es lo que son. La descertificación podría ser así una posada a medio camino para países que en algún momento posterior podrían ser capaces de reconstruir su autoridad soberana. En otros casos, la descertificación podría ser el primer paso para reconocer que un Estado ha muerto, si es que alguna vez hubo vida y que una cosa distinta ha ocupado su lugar³⁵⁷.

Otro enfoque que ha perdido de vista el fundamento de esta teoría es que la intervención de otro Estado significaría un cambio forzoso en el contrato social que es la base de ese Estado, y por tanto se tendría que pensar que el funcionamiento en ese nuevo Estado o esos nuevos Estados que se vayan a crear a raíz del viejo Estado por la descertificación, estaría en duda, y sólo puede funcionar cuando la población que conglomeraba ese nuevo Estado decide continuar con el mismo, en vista de que por alguna razón acepte las condiciones impuestas, pero de lo contrario el nuevo Estado o los nuevos Estados se verán en una entropía inacabable³⁵⁸.

Aún no se acaba de entender que muchos de los Estados reputados como fallidos son el resultado del protectorado y la colonización de las grandes potencias, contrario a lo que se piensa que las fallas de los Estados era ocultada puesto que la presencia de esas grandes potencias no permitían verlas. El juicio al respecto no se debe realizar de manera ligera, atribuyendo a que la comunidad internacional no entiende lo que está ocurriendo con los Estados fallidos, es al inverso, la comunidad se ha dado cuenta del error que cometió en el pasado³⁵⁹.

³⁵⁷ HERBST, J., *El fracaso y el colapso de los Estados...*, pág. 296.

³⁵⁸ *Ibidem*, pp. 297 y ss.

³⁵⁹ *Ibidem*, pp. 301-302.

De una manera más equilibrada hay quienes sostienen que los líderes de la política exterior deben pensar en soluciones como los fideicomisos y la soberanía compartida³⁶⁰, en ella se parte de los mismos hechos, atribuyendo deficiencia a la soberanía de los Estados, así como a los líderes que lo administran, que se preocupan por tratar de enriquecerse ellos, conllevando a que los Estados tengan fallas, razón que permite evidenciar que la soberanía ha de ser reevaluada³⁶¹.

Debido a los problemas que han surgidos desde la soberanía de Westfalia y con los inconvenientes que afrontan, la soberanía compartida, les brinda una salida, en la que individuos escogidos por organizaciones internacionales o por las potencias o algunas entidades provisionales compartirían con las autoridades nacionales en algunos aspectos la soberanía nacional. Dicha soberanía compartida encuentra su legitimación en un contrato entre las autoridades nacionales y un agente externo, que podría ser uno de los que se ha hecho mención. Pero lo mismos agentes externos pueden establecer que lo más conveniente sería un fideicomiso de hecho o un protectorado, en tal sentido la soberanía westfaliana sería violada y la soberanía jurídica internacional sería suspendida³⁶².

James Fearon y David Laitin muestran que la lucha interna es más probable en los países que sufren de la pobreza, la descolonización reciente, de alta población, y el terreno montañoso, condiciones las cuales permiten el desarrollo de bandas de guerrillas que operan con cierto nivel de eficacia, puesto que los gobiernos reconocidos no tienen la competencia administrativa para participar en contra de la insurgencia rural³⁶³.

Los Estados que experimentan el fracaso o un mal gobierno tienden a ser perturbados por muchos problemas, principalmente porque las infraestructuras se deterioran, la corrupción empeora, las fronteras no están bien definidas, con un producto interno bruto en retroceso o estancado; el crimen es agobiante, y la moneda nacional no es muy aceptada. Hay grupos armados dentro del territorio, y los cuales no pueden ser controlados por el gobierno. También, el recurso de la administración central, la entidad que ejerce las prerrogativas de la soberanía internacional, por ejemplo, la firma de los tratados y el

³⁶⁰ KRASNER, S.: "Governance failures and alternatives to sovereignty" en *CDDRL*, Workin Papers, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law, Stanford IIS, 2004, pág. 2, en: <http://cddrl.stanford.edu>

³⁶¹ *Ibidem*, pág. 5.

³⁶² *Ibidem*, pág. 6.

³⁶³ Cit. por KRASNER, S., *op. cit.*, pág. 7.

envío de delegados a las reuniones internacionales, no puede extenderse a todo el país; y en algunos casos no se extiende más allá de la capital³⁶⁴.

Otro problema que agobia a los Estados fracasados es que los líderes políticos que operan en un ambiente en el cual los recursos materiales e institucionales están limitados a menudo eligen políticas que empeoran las cosas. Para algunos líderes el desorden y la incertidumbre son más atractivos que el orden y la estabilidad, ya que son más capaces de extraer los recursos de una sociedad desordenada, y las decisiones que afectan a la distribución de la riqueza se basan en conexiones personales en lugar de regulaciones burocráticas o el estado de derecho³⁶⁵.

Todos estos inconvenientes en el funcionamiento del Estado son propios de los Estados fallidos, en el cual el control del monopolio del Poder queda distorsionado, y los problemas que pueden presentar algunos Estados tienden a agudizarse aún más, pues no hay una fuerza que impida la violencia, pues hay una ausencia total del derecho o de ese monopolio del Poder por parte del Estado; estos mismos problemas son la base en la que se fundamenta la soberanía compartida de los Estados como salida al fracaso, sin embargo, como es posible darse cuenta, son las mismas falencias que todos reconocen que tienen estos Estados.

En cuanto a la salida, sin duda alguna no hay un acuerdo sobre la respuesta correcta, pero hay teorías que tienden a respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, contrario a lo que se ha visto. No se puede desconocer el hecho de que cuando la criminalidad trasciende el territorio de un Estado, ya el problema no puede dejarse a ese Estado, máxime cuando se intenta proteger a los individuos de los demás Estados, mas la línea que divide el colaborar con erradicar estos males con una intervención disfrazada es muy sutil; lo que pueda dar pie a lo que Chomsky ha denunciado³⁶⁶.

Pero hay que reconocer que la soberanía compartida no parece tan descabellada cuando se afianza en lo temporal, pues la soberanía compartida puede ayudar con la regulación de la política monetaria, también se debe observar, que los agentes externos tienen que proveer de recursos al Estado por un tiempo prudente, lo cual también abriría el paso a otros donantes externos. A su vez, se puede prever que un comité integrado por

³⁶⁴ *Ibidem*, pág. 7.

³⁶⁵ *Ibidem*, pág. 8.

³⁶⁶ Vid. CHOMSKY, N., *Estados fallidos, el abuso de poder y el ataque a la democracia*, op. cit.

funcionarios y particulares de los países donantes pueda desarrollar una agenda de estudio para el país, lo mismo con el sistema de salud, que puede ser administrado por personas de ONGs internacionales³⁶⁷.

Visto desde esta perspectiva, la división entre soberanía compartida y la cooperación al desarrollo es casi imperceptible, pero por el concepto de “soberanía compartida”, hay una falta de anuencia por parte del Estado que cede, o una obligación de tener que aceptar ese compartir de la soberanía. El sistema que se intenta desarrollar con la “soberanía compartida” tal vez, esté amparado en un esfuerzo noble, pero el medio para el fin también es determinable al momento de colaborar con un país, pues como se ha dicho, el contrato social de un país debe ser respetado, pero como expresa Krasner:

No existe una panacea para los fracasos de soberanía nacional. Incluso con la mejor de las intenciones y recursos sustanciales, los agentes externos no pueden eliminar rápidamente las causas de estos fracasos: la pobreza (...) la inseguridad, la falta de materia prima. Pero los instrumentos actualmente disponibles para los formuladores de políticas para hacer frente a lugares como el Congo, Haití e Irak son inadecuadas, fideicomisos de facto y la soberanía compartida sobre todo ofrecerían a los líderes políticos una mejor oportunidad de lograr la paz y la prosperidad de las poblaciones de los estados mal gobernados y reducir la amenaza que tales entidades políticas representan para la comunidad internacional³⁶⁸.

Al respecto, Robert Jackson también establece las bases de la descertificación al disponer sobre los Estados fallidos que “existen porque el mundo los reconoce como tales y respeta su soberanía al margen de sus condiciones domésticas. Tienen una existencia jurídica, pero poca, si acaso alguna, existencia empírica”³⁶⁹. Y la existencia de dichos Estados sólo viene dada por el surgimiento de una sociedad postcolonial internacional, la cual tiende a ser tolerante con los niveles de estatalidad en el mundo³⁷⁰. En tanto, que esa garantía internacional que le da seguridad a la estatalidad ha permitido la existencia de algunos Estados que resultan ser insustanciales, o marginales e incluso nominales. En voz del propio Jackson podrían denominarse “casi-estados”, puesto que han fracasado y ya no son Estados, en el sentido empírico del término³⁷¹.

³⁶⁷ KRASNER, S., *op. cit.*, 35.

³⁶⁸ *Ibidem*, pp. 38-39.

³⁶⁹ JACKSON, R., *op. cit.*, pág. 5.

³⁷⁰ *Ibidem*, pág. 5.

³⁷¹ *Ibidem*, pág. 6.

Jackson toma en cuenta los postulados dispuesto por la Carta de la ONU para determinar la incoherencia de la estatalidad jurídica y la estatalidad empírica, en una clara conclusión de que lo correcto es que dichos Estados no existieran, pero como se había expuesto anteriormente, no se puede analizar esta realidad sin ver la culpa que yace en las potencias, y ciertamente resulta impreciso para analizar datos históricos, y hay otra pregunta que de seguro se quedaría sin respuesta ¿cumplen los Estados Unidos todo lo que estipula la Carta de la ONU? Si la respuesta es negativa entonces los Estados Unidos tampoco serían un Estado.³⁷²

Para Jackson el protectorado se ve como el mejor modelo a seguir, en el cual la sociedad internacional toma el compromiso de gobernar los Estados fallidos con la finalidad de crear y reponer las condiciones internas primordiales de seguridad y de libertad, de manera que la soberanía pudiera devolverse a los habitantes locales, con la confianza de que los individuos podrán manejar el Estado adecuadamente, lo cual sería el completivo del proyecto de la descolonización para traer la libertad verdadera a las personas del mundo³⁷³.

Sin embargo, aunque Jackson trata de hacer un reconocimiento de lo antes mencionado, concluye que los líderes de occidente no tienen el derecho de ponerse por encima de la comunidad internacional, aun en sus relaciones con otros países europeos, mientras que el respeto a la soberanía estatal siga siendo un estándar de conducta internacional. Y se enfatiza, que albergar una buena causa como la democracia y los derechos humanos, los cuales constituyen el estandarte a seguir en occidente, e incluso teniendo el Poder de imposición de estas normas mediante los recursos bélicos, “no justifica la transgresión de la soberanía estatal en esta región o en cualquier otro lugar”³⁷⁴.

El debate radica entre el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos, a su soberanía y la *seguridad* de la comunidad internacional, debido a que el derecho internacional no tiene previsión alguna en lo relativo a los Estados fallidos o frágiles, por ello la “seguridad” es el aspecto al cual se sujetan los internacionalistas, en el entendido del peligro que provocan los Estados fallidos para la comunidad internacional. La Carta

³⁷² *Ibidem*, pág. 6.

³⁷³ *Ibidem*, pág. 11.

³⁷⁴ *Ibidem*, pp. 29-30.

de San Francisco tiene como eje central “la seguridad y el mantenimiento de la paz”, de lo que se resaltan algunas disposiciones:

-...la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión o quebrantamiento de la paz; y lograr por medio pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversia o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz”³⁷⁵.

-La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales³⁷⁶.

-A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad³⁷⁷.

-El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales³⁷⁸.

La ONU ha vertido algunas decisiones sobre la ayuda humanitaria en algunos países que se han venido tomando como referente para tratar el tema, especialmente el Consejo de Seguridad³⁷⁹. Thürer divide en cuatro los enfoques de las decisiones asumidas por el Consejo de Seguridad.

1. La característica más preponderante es la recurrencia al Capítulo VII de la Carta de San Francisco. La resolución 794 del 3 de diciembre del 1992 en lo concerniente a Somalia, marcó una línea a seguir, en la misma el Consejo de Seguridad manifestó que la dimensión de la tragedia humana provocada por el conflicto, bastaba para observar que ciertamente había una amenaza, tomando en cuenta el antes aludido artículo 39. Luego de dicha resolución se expidió la resolución 688 del 5 de abril del 1999, sobre la situación de los Kurdos en Irak. En dicha resolución el Consejo de Seguridad expuso que las

³⁷⁵ Artículo 1.1 de la *Carta de San Francisco*.

³⁷⁶ Artículo 2.6, *ibídem*.

³⁷⁷ Artículo 24.1, *ibídem*.

³⁷⁸ Artículo 39, *ibídem*.

³⁷⁹ Cf. JIMÉNEZ PIERNAS, C., Los Estados fracasados y el derecho internacional..., *op. cit.*; JIMÉNEZ PIERNAS, C., Estados débiles y Estados fracasados...*op. cit.*

violaciones de derechos humanos por los Estados en contra de sus mismos ciudadanos son una amenaza a la paz. Mientras que en la resolución 841 del 16 de junio del 1993, sobre el caso haitiano, argumentó que una forma de gobierno que no esté acorde a los principios democráticos es una amenaza para la paz, amparado en el mismo artículo 39 de la Carta. De las resoluciones antes mencionadas se podría argumentar que las transgresiones a derechos humanos o al principio de la democracia es más que suficiente para que se pueda intervenir el territorio de un Estado por la fuerza del Consejo de Seguridad, por lo menos en los supuestos en que un Estado no cuenta con el poder gubernamental³⁸⁰.

2. En virtud de las resoluciones 794 del 3 de diciembre del 1992, la resolución 814 del 26 de marzo del 1993, y la resolución 837 del 6 de junio del 1993; y, a merced de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de San Francisco, el Consejo de Seguridad, en las cuestiones de Bosnia-Herzegovina, Ruanda y la República de Haití, permitió a los Estados, y en el asunto de Somalia, a la organización para mantener la paz, la ONUSOM II, a lograr los objetivos, pudiendo acceder al uso de la fuerza en los casos que fuera necesario, facilitando dicha resolución las medidas de coerción con el objetivo de lograr la paz, ya que en el caso en cuestión no se está ante otro Estado como agresor, por lo que el Consejo, acuerdo a la práctica implementada, pueda intervenir para la restauración del orden, pudiendo usar las fuerzas bélicas y así acabar con la amenaza a la paz, también amparada en el artículo 39 de la Carta, infiriéndose que en el caso de marras, el Consejo de Seguridad no tiene que buscar la aquiescencia del Estado al que se interviene, más aún en el entendido de que no hay un gobierno que represente al Estado, pero ese consentimiento se desprende del pueblo, por una cuestión de ayuda humanitaria³⁸¹. Algunos de los textos de estas resoluciones expresan lo siguiente:

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, autoriza al Secretario General y a los Estados Miembros que cooperen en la puesta en práctica del ofrecimiento mencionado en el párrafo 8 supra para que, en consulta con el Secretario General, empleen todos los medios necesarios a fin de establecer cuanto antes un ambiente seguro para las operaciones de socorro humanitario en Somalia³⁸².

³⁸⁰ THÜRER, D., *op. cit.*

³⁸¹ THÜRER, D., *op. cit.*

³⁸² S/RES/794 (1992), del 3 de diciembre del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Decide aumentar los efectivos de la fuerza de la ONUSOM y ampliar su mandato de conformidad con las recomendaciones contenidas en los párrafos 56 disposiciones de la presente resolución³⁸³.

Reafirma que el Secretario General, en virtud de la resolución 814 (1993), está autorizado para tomar todas las medidas necesarias contra todos los responsables de los ataques armados mencionados en el párrafo 1 supra, incluidos los responsables de haber incitado públicamente a esos ataques, a fin de establecer la autoridad efectiva de la ONUSOM II en toda Somalia, incluso para investigar esas acciones y arrestar, detener y encarcelar a esas personas a los efectos de su inculpación, enjuiciamiento y castigo³⁸⁴.

3. El Consejo de Seguridad no se ha conformado con sus criterios, sino que ha tratado de ampliarlo. A tal efecto, el Consejo de Seguridad ha extendido su competencia más allá de los asuntos de seguridad en su sentido más limitado, hasta llegar a la conservación de la infraestructura de transporte, como son los aeropuertos, como medio que facilita a los miembros de las organizaciones de mantenimiento de la paz o a alguna organización sin fines de lucro, el cumplimiento de la ayuda humanitaria, o con el fin de proteger determinadas áreas de seguridad para la protección de los individuos. Lo cual ocurrió en Camboya con el mandato del Consejo de Seguridad de desarticular las Fuerzas Armadas y propiciar la conservación de la infraestructura social y económica hasta reformar la organización gubernamental. Somalia también fue un ejemplo de cómo la sociedad internacional asumió los compromisos administrativos del Estado³⁸⁵.

4. En los asuntos de Somalia, Bosnia-Herzegovina, entre otros Estados calificados como “desestructurados”, el Consejo de Seguridad ha tomado en cuenta a las partes en desacuerdo, en efecto, en lo que se refiere a los Estados fracasados se abrió un enlace que admitirá que las pautas cautelares que prevé en el Capítulo VI se puedan usar no sólo para los conflictos entre Estados sino también para los conflictos internos de los Estados³⁸⁶.

Lo mismo observa la profesora Pozo Serrano, quien ve como una paradoja el hecho de que la comunidad internacional a través de los órganos de la ONU le otorgue legitimidad a la realización de operaciones a la vista del Capítulo VII para contrarrestar todas las transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario pudiendo

³⁸³ *S/RES/814 (1993), del 26 de marzo del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*

³⁸⁴ *S/RES/837 (1993), del 6 de junio de 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*

³⁸⁵ *Ibidem.*

³⁸⁶ *Ibidem.*

recurrir a la fuerza cuando fuera necesario, estribando la paradoja en que la posición de la ONU era otra. Sin embargo, la nueva actitud de la ONU sobre las intervenciones en los Estados en conflicto interno, choca al momento de que Organizaciones intervienen por ellos mismos bajo la excusa de la legítima defensa, siendo un ejemplo de ello el caso de Afganistán o el de la OTAN en Kosovo³⁸⁷.

A manera de conclusión en lo relativo, el Consejo de Seguridad en los casos en que hay un Estado con una grave conmoción interna, que ha generado cierta amenaza para la comunidad internacional ha permitido la implementación de medidas de coerción y la disposición de tomar decisiones internamente en los Estados, de manera temporal, sin necesidad de contar con el consentimiento del Estado que ha sido intervenido. También se puede observar que el Consejo de Seguridad ha tomado en cuenta los derechos humanos y los elementos de un Estado democrático, aunque con respecto a los asuntos democráticos, puede entenderse que el Consejo de Seguridad lo ha tomado más en cuenta en aquellos Estados que han elegido la forma democrática de Estado y gobierno como expresión del pueblo, como es el caso del pueblo haitiano.

El hecho de todo lo antes expuesto es que se está volviendo a pretender a que los salvadores son una coalición internacional o que el salvador es un determinado país, o una institución internacional gubernamental o no gubernamental, lo cual erra, y más en los casos en donde se ha producido una intervención de otro Estado como Irak y Afganistán. Siendo de este modo, ¿cuál sería el camino a que debe asirse la comunidad internacional para colaborar con los Estados fallidos y los Estados débiles? pues sin duda alguna, que se debe recurrir a la ayuda humanitaria en los casos en que se amerite, pero también a la cooperación al desarrollo como el modo en que se puede acompañar a un Estado a que sus instituciones puedan ser mejoradas, sin la necesidad de que haya una usurpación del control del monopolio del Poder del Estado.

Hay una relación de colaboración, y no de usurpación de la soberanía, en la ayuda humanitaria para los casos que se necesite, y para el desarrollo de las instituciones del Estado la cooperación al desarrollo ha de ser la fórmula adecuada, ese debe seguir siendo el camino a trillar por la comunidad internacional, más cuando el derecho internacional

³⁸⁷ POZO SERRANO, P.: “La aplicación del derecho internacional humanitario a la fuerzas de Naciones Unidas: algunos interrogantes”, *El derecho Internacional humanitario antes los nuevos conflictos armados*, RAMÓN CHORNET, C. (ED), Tirant Lo Blanch Monografías, 2002, pp. 319-354, pág. .

aún pende de la voluntad de las grandes potencias, y por tanto no hay reglas claras, pues las mismas potencias violan los derechos humanos cuando se pueden ver afectados por una situación legítima o no³⁸⁸.

La historia es el mejor elemento al que se puede recurrir para mostrar la efectividad de la imposiciones de modelos de Estados y gobiernos acorde a lo que piensa occidente y la efectividad que han tenido éstos en el tiempo, en ese sentido Fucuyama expresa:

Estados Unidos ha intervenido y/o actuado como autoridad de ocupación en muchos otros países como Cuba, Filipinas, Haití, la República Dominicana, México, Panamá, Nicaragua, Corea del Sur y Vietnam del Sur (...). En cada uno de estos países, Estados Unidos se involucró en lo referente a la construcción de la nación: celebrar elecciones, tratar de acabar con los caudillos y con la corrupción y fomentar el desarrollo económico. Corea del Sur fue el único país que alcanzó un crecimiento económico a largo plazo, logrado gracias al propio esfuerzo del país asiático más que al de Estados Unidos. Las instituciones duraderas fueron escasas³⁸⁹.

Fucuyama llama la atención en que el objetivo de instaurar una construcción del Estado basado en el sistema de occidente, aunque parezca lo más adecuado posible para el avance del ser humano, no es del todo recomendable, pues los hechos así lo han dejado ver, puesto que hay unos factores culturales y estructurales que dependen mucho de la nación, por ello cualquier extrapolación de un sistema ajeno a ese aspecto no tendrá fruto alguno, así podrían ser las intervenciones del Consejo de Seguridad con respecto a algunos países, pues cuando se hace una revisión, en los lugares en donde se ha enviado misiones de mantenimiento de la paz, aún siguen con cierta fragilidad³⁹⁰.

³⁸⁸ Vid. Los ataques en contra del pueblo Chechenio y los tratos inhumanos que se llevan a cabo por los Estados Unidos para los sospechosos de terrorismo.

³⁸⁹ FUCUYAMA, F., *op. cit.*, pág. 65. Aunque respecto al hecho de que Estados Unidos quería acabar con los caudillos, no es cierta, pues Estados Unidos durante la guerra fría fue el patrocinador de todos los dictadores que tuvo Latinoamérica con el objetivo de tener alguien con las manos duras que pudiera evitar las revueltas socialistas. Vid. CHOMSKY, *la quinta libertad...*, *op. cit.*

³⁹⁰ *Ibidem*, pp. 44-45.

CAPÍTULO III. DECISIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL ESTADO DE SOMALIA Y EL ESTADO DE HAITÍ: ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA FALLA Y LA FRAGILIDAD DE LOS ESTADOS

III.1 Somalia: origen de un problema

Somalia viene a ser el símbolo de lo que es un Estado fallido o fracasado, o sea, un Estado en el cual los representantes del gobierno no ejercen un control del monopolio del Poder sobre su territorio³⁹¹. En el mismo sentido Martín-Peralta destaca que “En efecto, Somalia constituye el paradigma de Estado fallido o de no Estado ya que desde hace más de dos décadas convergen en ese país prácticamente todos los factores de inestabilidad posibles, varios de los cuales tienen una repercusión regional e incluso global”³⁹².

El profesor Jiménez Piernas expresa que Somalia desde el 1991 no había logrado que la comunidad internacional la tomara en cuenta hasta que los malos resultados de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, conocida como ONUSOM I y II, en el lapso de 1992 y 1995, en primer lugar, y los hechos procedente de la delincuencia organizada en sus costas, llevaron a que Somalia esté en el centro de la mira de la opinión pública internacional, siendo centro de atención del Consejo de Seguridad de la ONU, del Secretario General, la Unión Europea, la Unión Africana entre otras organizaciones que han mostrado preocupación³⁹³.

La región del cuerno de África ha dejado ver algunas persistencias en el mantenimiento de los conflictos armados, lo que en algunas ocasiones se ha originado por el conflicto entre Estados, lo que diferencia a los Estados de esa región con los otros Estados del África subsahariana. Ese viene a ser uno de esos aspectos que identifican ese conflicto, es decir su complejidad, separándolo de los demás conflictos, lo que también tiene añadido un gran número de problemas internos, como los hechos que se produjeron por poco más de dos años que condujeron al derrocamiento del régimen de Siad Barré en

³⁹¹ ROYO ASPA, J. M.: “Las sucesivas crisis de Somalia” en *FRIDE*, pág. 1, en http://fride.org/descarga/COM_Somalia_ESP_sep07.pdf

³⁹² MARTÍN-PERALTA, C. M.: “2013: Somalia y el Cuerno de África en la encrucijada” en *Boletín Electrónico del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, núm. 12/2013, enero de 2013, pág. 4, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEEO12-2012_SomaliaCuernoAfrica_Encrucijada_Martin-Peralta.pdf

³⁹³ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Los Estados fracasados y el derecho...*, pp. 17-18.

Somalia, conjuntamente con la independencia de Eritrea, la cual por medio de una larga lucha de guerrilla y un referéndum logró su separación³⁹⁴.

Escalona Carrillo manifiesta que en los últimos momentos de la Guerra Frías, África era un continente deseable del orbe. Región a la cual se le culpó por la ingente cantidad de actos bélicos a la persistencia de los conflictos étnicos, a la poca capacidad que tenían los africanos para mantener un gobierno efectivo y a los problemas de intereses entre las potencias; lo que se podría catalogar como un matiz “colonialista”, pensamiento éste que se mantiene en la actualidad sobre la inferioridad de los pueblos africanos, y la misma supuesta incapacidad que tienen los individuos de África de gobernar³⁹⁵.

El proceso colonial del Cuerno de África comenzó con la apertura del canal del Suez en el 1869, lo que sentó las bases a Europa para entrar al Mar Rojo, y por igual al Índico, buscando territorios con el fin de extender el radio de acción de cada potencia, trayendo una repartición de las tierras del continente africano³⁹⁶. Ya para el año 1840, Gran Bretaña se radicó en la costa norte de Somalia y en el desierto de Adén. Mientras que Italia se focalizó en lo que hoy es Eritrea, obteniendo posteriormente mediante las concesiones de sultanes de Obbia, Midyurtina y Zanzíbar, las cesiones de Brava, Mogadiscio, Warsheik, Merka. En el mismo sentido, Francia fundó la Somalia francesa en el año 1888, territorio de la hoy Djibouti³⁹⁷.

En esa fase de expansión por el reino del Shoa, que estaba localizado en el centro del Cuerno de África, y que estaba tratando de ampliar sus fronteras en la nación perjudicando las tierras de los nómadas y de los pastores gallas, con los danákiles y los somalíes, nombra a Menelik II en el 1876 como Rey de Etiopía, con un territorio bastante amplio. Se ocupa el Amhara, luego el territorio correspondiente al sultanato somalí de Harar, en el noroeste del Cuerno de África, y otras tierras que fueron intercambiadas con Italia en el sur, sin tomar en cuenta lo que pensaban los habitantes³⁹⁸.

³⁹⁴ GUGLIELMO, M. (2009): *Somalia, Le ragioni storiche del conflitto*, Edizioni Altravista, Lungavilla, pág. 12.

³⁹⁵ ESCALONA CARRILLO, N. C.: “Somalia: proceder de los actores internos, regionales e internacionales y su impacto sobre el conflicto en el período”, en CLACSO, 2011, pp. 339-391.

³⁹⁶ *Ibidem*, pág. 342.

³⁹⁷ *Ibidem*.

³⁹⁸ *Ibidem*, pág. 343.

La definición de la frontera de Etiopía y Somalia en el Ogadén y a 300 kilómetros en la costa índica, fue el fruto de los persistentes apremios británicos con el objetivo de que Menelik II paralizara a los italianos, pero muy especialmente porque Etiopía no quería dar más cabida a Europa, dirigiendo dichas acciones al Ogadén en el territorio etíope, y estableció una división entre los habitantes de Darood y Hawiye, las cuales eran las étnicas de Somalia más cuantiosas³⁹⁹.

Sin embargo, Etiopía no ejercía control alguno en el territorio sino hasta mediados del siglo pasado. En tanto, que la población de Somalia, así como la población de la antes Punt de los egipcios, quedaron diseminado entre Etiopía, Gran Bretaña, Francia e Italia⁴⁰⁰. Una característica que identifica a la población somalí es que se consideran descendientes de musulmanes gallas, etnia que fue desalojada por el imperio Etíope, no obstante, es evidente el sentido de pertenencia a la etnia, pues tienen una misma religión, una lengua común, costumbres iguales, aspectos éstos que los habitantes somalíes se negaban a perder⁴⁰¹. La historia colonial en Somalia muestra la responsabilidad que han tenido las potencias europeas en los conflictos que se han generado en Somalia.

La nueva posición de Italia hacia su antigua colonia de Somalia se definió en la esfera internacional por medio de un largo conflicto entre las cuatro potencias vencedoras (Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética), y a lo interno de la ONU, en la cual se aprobó un acuerdo de fideicomiso, mediante la cual Italia asumía la responsabilidad del territorio de Somalia. La conocida Administración Fiduciaria Italiana en Somalia (AFIS), se estructuró con el fin de que se promuevan las instituciones políticas libres. Esa tutela debía estar supervisada por la ONU, debiendo la AFIS dar la garantía de transferir el Poder del Estado para el pueblo de Somalia, lo cual se debía hacer de manera gradual. Ese acuerdo de tutela aprobado por la ONU el 2 de diciembre del 1950, también aprobó un conjunto de principios constitucionales, que estaban destinados a dar garantía de los derechos políticos de la representación a la población somalí, y también como un modo de que Italia se circunscribiera a la agenda que se había programado según el acuerdo, por dicha razón también se dio paso a lo que era el Consejo Asesor de las

³⁹⁹ *Ibidem.*

⁴⁰⁰ *Ibidem.*

⁴⁰¹ *Ibidem.*

Naciones Unidas, con asiento en Mogadiscio, que servía de enlace entre la ONU y el gobierno italiano⁴⁰².

A finales del decenio del 1950, especialmente en el 1959 se introdujeron una serie de reformas sobre los asuntos políticos de Somalia, que llevó a que se generara un momento de gran tensión, en la cual se originaron muchos conflictos entre los distintos clanes que pretendían formar parte del Poder del Estado⁴⁰³. Los partidos que intentaban quedarse con el Poder para el 1959 en la Somalia que sería descolonizada, tenían el mismo estandarte de conformar una Gran Somalia⁴⁰⁴.

El sentimiento de no querer perder sus tradiciones y todo lo que envolvía llevó al pueblo de Somalia en el 1961 a proclamar su independencia, abarcando los territorios británicos e italianos. El sentimiento de unidad de la población de Somalia deriva de que los mismos son musulmanes sunnís; el Islam representó un elemento cohesionador, especialmente con la educación recibida de la cofradía de la Ahmedia, en la que sobresalió el señor Mad Mullah, quien configuró a Somalia sobre un fundamento nacionalista y religioso, teniendo como enemigos a los agresores externos⁴⁰⁵.

Los clanes y la religión islámica en Somalia históricamente se compenetraron pese a años de rupturas y de conflictos, logrando estos influir en la conformación y el rol social. Somalia ha encontrado su legitimidad en el hecho de las luchas nacionales y muy especialmente anticoloniales, primordialmente en contra del control británico, lo que ha provocado en la población un énfasis ideológico, marcado por la creencia de que representan una de las pocas naciones a lo interno de un continente, cuyas estructuras fueron el fruto de los antiguos colonos, y cuyo sentimiento se refleja en que se identificaban como una nación que aún estaba en busca de un Estado⁴⁰⁶.

Uno de los problemas primordiales a mediados del siglo XX, era que la base social de Somalia estaba formada por cinco clanes mayores, pero que estaban disperso por todo el Cuerno de África:

⁴⁰² *Ibidem*, pp. 29-30.

⁴⁰³ *Ibidem*, pp. 30 y ss.

⁴⁰⁴ ESCALONA CARRILLO, N. C., *op. cit.*, pág. 348.

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

⁴⁰⁶ GUGLIELMO, M., *op. cit.*, pp. 23.

...los Issa gadabursi, al norte, poblando lo que fuera Somalia francesa. Estos son mayoría en Djibouti. Se hallan también los Isacc, asentados en la antigua Somalia británica, y otros tres: Marchan, Hawiye y Darood, que ocupan indistintamente la otrora posesión italiana en todo el centro y sur de Somalia, y se extienden hasta el desierto de Ogadén ocupado por los etíopes y los límites fronterizos del norte de Kenya. De cada una de estas estructuras étnicas, se desglosan otros subclanes, que complejizan el entramado social, político y religioso⁴⁰⁷.

En tanto que, uno de los primeros pasos en Somalia para que se adquiriera una legitimidad política, era tratar de negar y eliminar los lazos fraternales que se imponían por medios de los clanes en Somalia, puesto que los mismos eran tildados de obstáculos para la construcción de una identidad nacional. Sin embargo, el afán por eliminar las tradiciones de clanes, y obligar a que se adaptaran a nuevas estructuras ajenas a lo que eran las costumbres del pueblo somalí, conllevó a lo que posteriormente se identificaría como “clanismo”⁴⁰⁸.

Los primeros diez años de la vida independiente de Somalia se caracterizó por tratar de instituir una democracia basada en el multipartidismo, teniendo como soporte un Estado centralizado, que debería estar por arriba de los clanes, puesto que la población le otorgaba a éstos una mayor relevancia tanto política como social. Sin embargo, la corrupción se hacía más rapante en los asuntos políticos y administrativos, agudizándose la situación por la falta de acuerdo en la búsqueda de un gobernante luego de la muerte del Presidente Abdi Rashid Ali Sharmarke, quien fue asesinado, llevando dicha situación al golpe militar de Siad Barré para el año 1969. El mismo impuso el “socialismo científico”, el cual era una especie de proyecto basado en la revolución con un supuesto soporte socialista. Dicha doctrina comprendía un partido único que tenía como eje la misma figura de Siad Barré, cuyo objetivo era el afianzamiento del nacionalismo, que a su vez, contemplaba una gran Somalia, que se extendía a distintas regiones somalíes que estaban bajo el dominio de otros Estados vecinos. También se tenía pensado la eliminación de los clanes y la terminación de la corrupción de manera definitiva⁴⁰⁹.

Sin embargo, lo que Siad Barré no observó, fue que la erradicación del Parlamento así como de los partidos ayudó a que desde el principio se instaurara un movimiento de oposición que era solventado por los Estados vecinos, esencialmente Libia y Etiopía.

⁴⁰⁷ ESCALONA CARRILLO, N. C., *op. cit.*, pp. 348-349.

⁴⁰⁸ GUGLIELMO, M., *op. cit.*, pp. 23-24.

⁴⁰⁹ ROYO ASPA, J. M., *op. cit.*, pág. 2.

Pero, la Unión Soviética fortaleció el ejército de Siad Barré, haciéndolo uno de los más importantes de África. Esta fue la base principal sobre la futura crisis⁴¹⁰. Siad Barré al sentir que tenía en sus manos un Poder cohesionado y apoyado por la URSS, tomó en cuenta el tratar de obtener la zona oriental etíope, por lo que en ese objetivo, Siad Barré se acerca al gobierno de EE.UU, pero pierde el respaldo que le había otorgado la URSS, la cual pasó a dar su apoyo a Etiopía. En esa sazón, la guerra llevada a cabo entre los años 1977 y 1978 por el territorio del desierto de Ogadén, que había sido una tierra en donde los somalíes nómadas ejercían el pastoreo, era también, como era de esperarse en plena guerra fría, un enfrentamiento entre bloques, en la cual Francia y China respaldaron a Somalia⁴¹¹.

Empero, esas pretensiones, incluso de los partidos que en Somalia intentaban asirse con el Poder para el decenio del 1950, de la reunificación de las etnias no tuvo fruto alguno, puesto que la OUA, fijó y sostuvo su doctrina de que las fronteras entre los Estados estaba marcada por los lineamientos que fueron establecidos en el periodo colonial. Después con la Derrota de Siad Barré en Etiopía, se abre paso a un proceso de desencuentros en el ejército y en toda la sociedad de Somalia, y que se manifestó en un debilitamiento del régimen de Barré⁴¹².

Otra de las causas que provocó el empeoramiento del régimen de Barré y el empeoramiento de la crisis de Somalia, fue las intervenciones que hubo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), pues las políticas impuestas por dichas organizaciones puso en declive la ya tambaleante economía somalí, desde la devaluación de la moneda nacional, la importación de los alimentos que se configuraba como una ayuda de occidente, así como también el deber que impuso el Banco Mundial de que se aplicaran las leyes que regulaban los mercados⁴¹³.

Los Estados Unidos como cuota de responsabilidad, se les endilga que le vendieron al gobierno de Barre armas de fuego por una suma que ascendía a doscientos millones de dólares, y con el fin de aprovechar la crisis, para el año 1991 los EE.UU se habían hecho de las dos terceras partes de los campos de petróleo de Somalia⁴¹⁴. Las grandes potencias

⁴¹⁰ *Ibidem*.

⁴¹¹ ESCALONA CARRILLO, N. C., *op. cit.*, pág. 349.

⁴¹² *Ibidem*, pág. 349.

⁴¹³ *Ibidem*, pp. 350-351.

⁴¹⁴ *Ibidem*, pág. 351.

ayudaron en la falla exhibida por Somalia, como se ha podido mostrar, son culpables de gran parte de los problemas que internamente presenta el Estado; aunque, para los EE.UU la caída de Barre condujo al desconocimiento de los contratos, y por ende se tradujo en una pérdida considerable de dinero⁴¹⁵.

Desde la caída del régimen de Barre en el 1991, Somalia yace inmersa en un conflicto interno que ha tenido más de 350 mil bajas, con un millón y medio de desplazados. El escenario que se presenta es de constantes enfrentamientos entre clanes, subclanes y milicias de señores de la guerra para conseguir el Poder, aunque en los últimos tiempos la lucha se ha convertido en ideológica. El Yihadismo se convirtió en el más férreo opositor del Gobierno de Transición que era apoyado por la comunidad internacional. Todo esto, sin dejar a un lado la piratería, con los problemas de sequías, y de hambrunas, los desplazados y los refugiados, el intervencionismo, el secesionismo, particularmente con la declaración de independencia de la Somalilandia en el 1991, y la proclamación de la autonomía de Puntlandia para el año 1998, otro de los tantos inconvenientes de Somalia, era la falta de administración de justicia, y la asistencia de servicios a la población somalí, aparte de la desenfrenada corrupción que imperaba en el territorio, sin embargo en lo que toca a los Estados vecinos los problemas principales que enfrentaba Somalia era con el islamismo radical y el terrorismo proveniente del mismo, así como el problema de la piratería⁴¹⁶.

Para el 2004, se conformó un Gobierno Federal de Transición (GFT), que para la ONU es un gobierno reconocido internacionalmente, el cual mantiene su existencia hasta la fecha de manera compleja por distintas causas, como la corrupción agobiante, y las distintas divisiones en el interior del Estado, así como el influjo de los clanes primordiales, puesto que estos se reparten los ministerios, y en sentido general por la crisis que viene cultivando el Estado de Somalia. Aunque se pensaba que los aires que rodeaban el Estado eran propicio para el desarrollo del mismo, la intrusión de la Unión de Tribunales islámicos (UTI) en el 2006, empeoró la situación⁴¹⁷.

La UTI tomó una fuerza considerable en la capital Mogadiscio, extendiendo su control por todo el año 2006, de manera tranquila, a un poco más del territorio del sur del Estado,

⁴¹⁵ *Ibidem*, pág. 351.

⁴¹⁶ MARTÍN-PÉRALTA, C. M., *op. cit.*, pág. 4.

⁴¹⁷ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Los Estados fracasados y el derecho...* pág. 21.

y a las ciudades que componen la región, excepto a Baidoa, la cual era la sede provisional del Gobierno Federal de Transición, por lo que a finales del 2006, el dominio del GFT se circunscribía a Baidoa y sus alrededores. La UTI tenía una ventaja que le ayudaba en su desarrollo, y era el hecho de que tenían respaldo de la población somalí, puesto que los mismos mantenían cierta paz en el territorio que estaban controlando, lo que era una situación que no se había visto desde hacía mucho tiempo, por lo que la vida cotidiana del somalí se desenvolvía en la anarquía, seguida de la militarización y la perpetración de todo acto de tortura y barbarie, así como asesinatos y violaciones, y distintos problemas sufridos por la sociedad somalí⁴¹⁸.

Sin embargo, la expansión del dominio territorial de la UTI y los problemas que achacaban a la GFT provocó gran preocupación a Etiopía; el gobierno de Etiopía le imputaba a la UTI que apoyaba a grupos dentro del territorio de Etiopía, por lo que este Estado consideraba a la UTI como una amenaza nacional; por igual los Estados Unidos y Kenia mantenían cierta preocupación al hecho de si la UTI le daba cabida a miembros de Al-Qaeda, sin embargo Eritrea apoyaba económicamente a la UTI⁴¹⁹.

A raíz de las amenazas que representaba la UTI para Etiopía, ésta decidió tomar parte en el conflicto de Somalia, conformándose una coalición con el Gobierno Federal de Transición, para desalojar a la UTI de las regiones de Somalia, en una acción militar que duró sólo tres semanas, aunque también tuvieron la colaboración de los Estados Unidos con los bombardeos aéreos en contra de la UTI en el extremo meridional del territorio del Estado, supuestamente disfrazado bajo el subterfugio de que eran ataques en contra de Al-Qaeda⁴²⁰.

La expulsión de la UTI terminó con el orden y la seguridad que había sido impuesto por la UTI en los territorios que tenían bajo su dominio, principalmente en la ciudad de Mogadiscio, regresando la rivalidad entre los distintos clanes, así como la violencia y las bandas. De igual modo, el GFT no había tenido la capacidad de imponer su autoridad e impulsar un programa de desarme tanto en la capital como otras zonas de importancia; lo que ha hecho que la inestabilidad se agudice más aún⁴²¹.

⁴¹⁸ *Ibidem*, pág. 22.

⁴¹⁹ *Ibidem*, pág. 22.

⁴²⁰ *Ibidem*, pág. 22.

⁴²¹ *Ibidem*, pág. 22.

Parte de los miembros de la UTI se refugiaron en Eritrea, en donde formaron la Alianza por la Re-liberación de Somalia (ARS). Hubo un intento del GFT por imponer sus reglas, ya que había resultado vencedor con el apoyo de Somalia, sin embargo el Gobierno de Transición no pudo llenar el vacío del poder dejado por la UTI, trayendo como consecuencia la agudización en el sur y el centro, originando un desplazamiento considerable de personas, mientras que la presencia de la milicia del Gobierno de Transición se mantuvieron alrededor de Mogadiscio y Baidoa⁴²².

A comienzo del 2009, el Gobierno de Transición conformó una coalición con las fuerzas de oposición, momento en que también se retiraron las fuerzas de Etiopía, designándose como Presidente a Sharif Ahmed, quien era un islamista moderado y que también se había mantenido como unos de los líderes de la UTI. En el mismo mes de enero, después de la salida de la milicia etíope, la coalición de gobierno ha sido contrarrestada por los grupos extremistas en que se convirtieron muchos de los miembros de la UTI, manteniéndose abiertamente como tropas aliadas a grupos terroristas como Al-Qaeda, de los cuales reciben apoyo, tomando el conflicto somalí un matiz más preocupante, puesto que ha habido un aumento del terrorismo islamista que se traduce en atentados masivos o ataques suicidas o sendas formas⁴²³.

Ya a mitad del 2010, el Gobierno de Transición, quien luego del acuerdo de Yibuti, sigue siendo identificada por la comunidad internacional como un gobierno con reconocimiento y legitimidad, logra mantener pobremente su dominio en una gran parte del territorio, incluyendo Mogadiscio, incluso teniendo presiones de los grupos extremistas⁴²⁴.

Los problemas para Somalia aún se mantienen en el territorio, puesto que los deseos independentistas por la denominada “Somalilandia” en el 1991, y de la autonomía de la llamada “Puntlandia” en el 1998, de las regiones que ocupan parte del norte del territorio; han hecho que los partidos políticos más relevantes de “Somalilandia” ratificaran su independencia del GFT; en tanto que las autoridades en “Puntlandia”, controlan el tráfico de desplazados, a los cuales devuelven a Somalia, y en adición a ello los grupos de

⁴²² *Somalia*, Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), Madrid, pág. 20.

⁴²³ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, pág. 23.

⁴²⁴ *Ibidem*, pág. 23.

distintas regiones están compitiendo entre sí por el dominio de áreas limítrofes en controversia. Dicha situación ha conllevado a que fracasen todos los intentos de paz⁴²⁵.

La ONU como en la Unión Africana (UA) en el ámbito regional, con la Misión de la UA en Somalia (AMISOM), se encuentran colaborando con el Gobierno de Transición, tratando de blindarlo militarmente, y posteriormente para intentar ponerle fin al largo lapso de conflicto que ha tenido Somalia, buscando una transición pacífica. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido el referéndum de lugar y de lograr unas elecciones libres, y por ende obtener un Estado democrático con una organización federal⁴²⁶.

Respecto a los gobiernos de transición se dispone que:

...Omar Abdirashid Sharmarke fue nombrado primer ministro, restableciendo el equilibrio entre clanes y garantizando el apoyo de la administración de Puntlandia al gobierno de clanes y garantizando el apoyo de la administración de Puntlandia al gobierno de transición. Pese al apoyo y los pactos del segundo TFG con la ARS y otros grupos islamistas moderados como Ahlu Sunnah Wal Jama'a, y de hechos como promover la ley sharia como forma de legislación, el gobierno no consiguió el apoyo de al-shabab ni Hizbu al Islam, que siguen con la lucha armada hasta la actualidad. En octubre de 2010 Abdirashid Sharmarke fue sustituido como primer ministro por Mohamed Abdullahi Mohamed, quien a su vez sería sustituido en junio de 2011 por Abdiweli Mohamed Ali. La grave situación humanitaria producida por los conflictos entre las tropas fieles al gobierno y los grupos insurgentes se ha visto fuertemente agravada por la fuerte sequía que comenzó en la primavera de 2011, una de las sequías más fuertes de la historia de Somalia, que ha dejado cientos de miles de muertos y refugiados⁴²⁷.

El segundo gobierno de transición dio a su fin en agosto de 2012, momento en el que se instauró el primer gobierno permanente desde el estallido de la guerra civil, el Parlamento Federal de Somalia, que en septiembre nombró a Hassan Sheikh Mohamud como presidente, y éste a su vez a Abdi farah Shirdon como primer ministro. En septiembre de 2012, una ofensiva de las tropas de la Unión Africana expulsó a las milicias islamistas de la última gran ciudad, Kismayo, si bien siguen controlando la mayor parte del sur y centro de Somalia⁴²⁸.

⁴²⁵ *Ibidem*, pp. 23-24.

⁴²⁶ *Ibidem*, pág. 24; vid. *S/RES/1814 (2008)*, del 15 de mayo del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párr. 5. la cual expuso que “Decide que la Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia (UNPOS) y el equipo de las Naciones Unidas en el país, al promover una solución amplia y duradera para Somalia y, por conducto de la promoción del proceso político ya en marcha, aumenten su apoyo a las instituciones federales de transición con el objeto de elaborar una constitución y celebrar un referéndum constitucional, así como elecciones libres y democráticas, en 2009, como se dispone en la Carta Federal de Transición, y de facilitar la coordinación del apoyo de la comunidad internacional a esas iniciativas, y pide al Secretario General que, dentro de los sesenta días siguientes a la aprobación de la presente resolución, presente un informe sobre los progresos alcanzados en esa labor”.

⁴²⁷ *Somalia*, Comisión Española de..., pág. 20.

⁴²⁸ *Ibidem*, pág. 20.

En agosto del 2012 se erigió un gobierno de manera definitiva luego del derrocamiento de Siad Barre, el cual está compuesto por un órgano ejecutivo, otro legislativo integrado por un parlamento bicameral y el órgano judicial. Somalia se estructura en cuanto a su territorio como un Estado federado, en el cual el gobierno está formado por dos niveles, un gobierno central federado y el gobierno de los Estados federados miembros de la federación. No obstante a todos los esfuerzos realizados, el gobierno mantiene una falta de dominio sobre su territorio ya que de hecho la misma se encuentra dividida en la República de Somalilandia situada al noroeste, el Estado cuasiautónomo de Puntlandia y la Somalia del sur y central, cuyos territorios en buenas porciones están controlados por los grupos rebeldes⁴²⁹.

III.2 Soberanía y decisiones del CDS de la ONU

Somalia, técnicamente, ya no es un Estado activo desde el 26 de enero del 1991, fecha en la cual Siad Barré corre de Mogadiscio, dejando todo un país arruinado por la guerra civil. Ya que el territorio se vio dividido y controlado por distintas formaciones políticas, las cuales representan a distintos clanes, por lo que hubo toda una explosión de conflicto en el territorio en sentido general, concentrándose más en el Norte del país en donde el comité central del Movimiento Nacional Somalí (SNM) proclamó formalmente la independencia de la República de Somalilandia⁴³⁰. Todo lo cual era evidencia de que el monopolio del Poder en el Estado estaba diseminado en distintos grupos, no existiendo por tanto un monopolio como tal del Poder.

La ONU como órgano mundial, puede disponer que ciertas actividades sean calificadas de amenazas para la paz de los demás sujetos internacionales, y en virtud de ello puede disponer de algunas acciones, sin embargo el órgano que tiene la potestad, acorde al capítulo VII, para ejercer tales acciones es el Consejo de Seguridad. Por tanto, esa determinación de la paz, dependerá de la voluntad del Consejo de Seguridad⁴³¹.

De forma general y hablando sobre los Estados que presentan inconvenientes internamente con un alto grado de debilidad o que han llegado al fracaso como el caso de

⁴²⁹ *Ibidem*, pág. 21.

⁴³⁰ GUGLIELMO, M., *op. cit.*, pp. 16-17.

⁴³¹ SALMÓN, E., *op. cit.*, pp. 229-231

Somalia, Jiménez Piernas, contraponiendo la soberanía y la intervención a lo interno de los países recurre a las decisiones del Consejo de Seguridad indicando que “el CdS ha constatado y denunciando las graves infracciones de los derechos humanos y del DI humanitario cometidas por partes, grupos o facciones en lucha, concretadas inter alia en toda clase de abusos y crímenes contra la población civil”⁴³².

El Consejo de Seguridad también se ha expresado en casos en donde ha habido una gran pérdida de vidas humanas como también de daños materiales, por haber una prolongación de los conflictos, asimismo se ha expresado por el impedimento que grupos en conflictos le ponen a la ayuda humanitaria destinada para la población civil, así como la constatación de transgresiones al derecho internacional humanitario⁴³³. El Consejo de Seguridad, por igual, se ha pronunciado, sobre la incapacidad que dejan ver los Estados en conflictos para dar garantía de la seguridad y el mantenimiento del orden público⁴³⁴.

Poniendo el problema en la mesa de discusión Jiménez Piernas pregunta “¿Cuál ha sido la respuesta del CdS ante el desafío del contraste entre lo que dispone el DI sobre el principio de la soberanía e integridad territorial y la realidad de los Estados fracasados?”⁴³⁵ Aduciendo de antemano, que el Consejo de Seguridad ha invitado a que las organizaciones regionales con interés, los Estados miembros de la ONU, a que colaboren con el sistema de seguridad en las regiones afectadas por los conflictos, o a que ayuden por medios económicos, técnicos e incluso humanos para cumplir distintas tareas⁴³⁶.

Basado en una crítica que se puede tildar de responsable, la profesora López Martín manifiesta que *tal situación hay que observarla con cierta lógica puesto que no se puede promover la conservación del estatuto jurídico del Estado, y también entender que como la autoridad gubernamental desapareció la soberanía no puede exigir las mismas condiciones que un Estado con un gobierno efectivo, en tanto que la inviolabilidad del territorio no es una prioridad, o lo que es lo mismo, asumir que el Estado fracasado no está protegido por el principio de no intervención*⁴³⁷.

⁴³² JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Los Estados fracasados y el Derecho...* pág. 33.

⁴³³ *Ibidem*, pág. 33.

⁴³⁴ *Ibidem*, pág. 34.

⁴³⁵ *Ibidem*, pág. 34.

⁴³⁶ *Ibidem*, pág. 34.

⁴³⁷ *Ibidem*, pág. 34.

Acorde a la situación que estaba presentando Somalia, dicho Estado a través de su representante dirigió una carta al Consejo de Seguridad mediante la cual, invitaba al Consejo a que evaluaran la situación que estaba ocurriendo en Somalia, lo que produjo la aprobación de la resolución 733 del 1992, mediante la cual instaba a algunas autoridades internacionales para que se comprometieran a “*poner fin a las hostilidades a los efectos de permitir la distribución de la asistencia humanitaria, promueva la cesación del fuego y su cumplimiento y ayude en el proceso de normalización política del conflicto en Somalia*”⁴³⁸. En la misma resolución, bajo la sombra del capítulo VII de la Carta de San Francisco se ordenaba, con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad en Somalia, que se aplicara un embargo general y total de los suministros de todo tipo de armas a Somalia, hasta tanto el Consejo decidiera algo distinto⁴³⁹. Aunque en principio se solicitó la evaluación de la situación por Somalia, la resolución muestra cómo el Consejo intervino en el Estado, ordenando un alto al fuego y el embargo del suministro de armas, mostrando preocupación por el mantenimiento de la paz⁴⁴⁰.

Mediante la resolución 746 del 1992, el Consejo sigue mostrando preocupación por los sucesos en Somalia, sin embargo continúa alentando la ayuda humanitaria en toda la zona de Somalia, y alienta el diálogo como modo de alcanzar la paz en Somalia⁴⁴¹. Con la resolución 751 del 1992, el Consejo pasa a dar otro paso adelante, y decide crear, bajo su autoridad una operación de la ONU en Somalia, la cual autoriza a que se despliegue la cantidad de 50 observadores con el fin de que se supervisara el alto al fuego por las partes en conflicto, conformándose la llamada ONUSOM⁴⁴².

La resolución 767 del 1992 exhorta de manera categórica a las partes, movimientos y facciones en conflicto en Somalia a que colaboren con el despliegue del personal, y que ayuden con la estabilización de la situación en Somalia, y que de no aprestarse al mandato de cooperación “el Consejo de Seguridad no excluye la adopción de otras medidas para

⁴³⁸ Vid. Resolución 733 (1992), del 23 de enero del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴³⁹ *Ibidem*, párr. 4.

⁴⁴⁰ *Ibidem*.

⁴⁴¹ Vid. Resolución 746 (1992), del 17 de marzo del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁴² Vid. Resolución 751 (1992), del 24 de abril del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; vid. PERAZA MARTELL, V.: “Las Naciones Unidas y el conflicto somalí”, en *Revista de África y Medio Oriente*, vol. 12, pág. 69.

prestar asistencia humanitaria a Somalia”⁴⁴³. Dicha resolución da muestra que respecto al caso de Somalia (considerado por los tratadistas como un Estado evidentemente fallido), el Consejo de Seguridad de la ONU tomando en cuenta que hay un problema humanitario, combinado con la falta de una autoridad firme, ejerce las acciones que cree pertinente sin tomar en cuenta el problema de la soberanía del Estado, ni lo que implica el estatuto jurídico del Estado.

Para Peraza Martell la presencia de la ONUSOM agregaba otro elemento al conflicto en Somalia que polarizó la lucha entre las facciones, y también a los habitantes, como era el hecho de la presencia de extranjeros en el territorio. Lo que para los combatientes se sumó otro aspecto caracterizado por la xenofobia, siendo causa de que ni la presencia de los observadores ni las negociaciones pudieran terminar con el conflicto en Somalia⁴⁴⁴. La resolución 775 del 1992, autorizó el aumento de los miembros de la ONUSOM y su correspondiente despliegue, y mantiene el embargo del suministro de las armas de fuego en Somalia, y advierte sobre el alto al fuego a las partes envueltas en el conflicto⁴⁴⁵.

Peraza Martell hacía la observación de que la acción de la ONU reflejaba que había terminado, debido a que sus gestiones no tenían ningún tipo de resultado. Aunque en la esfera internacional occidente aún seguía enviando ayuda a la población de Somalia, lo que resultaban pocos y no había logística para su distribución por los problemas entre las distintas facciones, así como de los inconvenientes que se presentaban con las bandas armadas. Empero, las ayudas generaron otro problema por el hecho de que la ONU y los demás órganos internacionales se hacían ayudar de las agrupaciones y clanes con la finalidad de que se pueda lograr la distribución de la ayuda, lo que generó que dichas agrupaciones se convirtieran en grupos con Poder dentro del territorio, agravando aún más la situación en Somalia⁴⁴⁶. Así también lo expone Escalona Carrillo “La ONU y las agencias humanitarias buscaban apoyo de los clanes para su labor. Esto propició que se erigieran determinados núcleos en posiciones de poder dentro del país”⁴⁴⁷.

⁴⁴³ Cf. *S/RES/767 (1992)*, del 27 de julio del 1992, de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párr. 4.

⁴⁴⁴ PERAZA MARTELL, V., *op. cit.*, pág. 70.

⁴⁴⁵ Vid. *S/RES/775 (1992)*, del Consejo de Seguridad, del 28 de agosto del 1992.

⁴⁴⁶ PERAZA MARTELL, V., *op. cit.*, pág. 70.

⁴⁴⁷ ESCALONA CARRILLO, N. C., *op. cit.*, pág. 357.

El Consejo también tomado en consideración las violaciones en Somalia del derecho internacional humanitario verificando “violaciones generalizadas del derecho humanitario internacional en Somalia incluidos actos y amenazas de violencias contra el personal que participa lícitamente en las actividades de socorro humanitario”⁴⁴⁸, y que también han habido “ataques deliberados contra no combatientes, envíos de socorros y vehículos, así como contra instalaciones de servicios médicos y de socorro, y la obstaculización de la entrega de alimentos y suministros médicos y de socorro, y la obstaculización de la entrega de alimentos y suministros médicos esenciales para la supervivencia de la población civil”⁴⁴⁹.

Incluso, el Consejo de Seguridad al condenar las acciones que violan las normas del Derecho Internacional Humanitario, especifica la responsabilidad penal de quienes realicen tales actos, por ello afirma que “los que cometan u ordenen que se cometan tales actos serán considerados responsables de ellos a título individual”⁴⁵⁰. En la resolución 794 del 1992, el Consejo recalca la toma de todas las medidas necesarias que se tengan que tomar con la finalidad de garantizar un ambiente seguro para la ayuda humanitaria⁴⁵¹.

En la resolución 814 del 1993, el Consejo de Seguridad continuó con el seguimiento a los problemas que enfrentaba Somalia entre los que estaban “violaciones generalizadas del derecho humanitario internacional y *de la total desaparición del imperio del derecho en Somalia*”⁴⁵², así muestra preocupación por “el hambre y la sequía que han asolado a Somalia”⁴⁵³, pero un hecho muy importante es que el Consejo reconoce que “*incumbe al pueblo de Somalia la responsabilidad última por la reconciliación nacional y la reconstrucción del país*”⁴⁵⁴, dando chance a que se exprese el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

La citada resolución también da muestra de la inclinación del Consejo de Seguridad por la forma de Estado democrática al estatuir que se debe lograr “un acuerdo sobre el establecimiento de las instituciones del gobierno de transición y un consenso sobre las medidas y *los principios básicos para la creación de instituciones democráticas*

⁴⁴⁸ S/RES/794 (1992), del 3 de diciembre del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁴⁹ *Ibidem*.

⁴⁵⁰ *Ibidem*, párr. 5.

⁴⁵¹ *Ibidem*, párr. 10.

⁴⁵² S/RES/814 (1993), del 26 de marzo del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁵³ *Ibidem*.

⁴⁵⁴ *Ibidem*.

representativas”⁴⁵⁵. También mediante dicha resolución se aumentan los miembros de la ONUSOM y se amplía el mandato, creándose la ONUSOM II⁴⁵⁶. Quizás la imposición de los principios democráticos ha sido la máxima crítica que se le ha hecho a la ONU en sus intervenciones.

En el desarrollo de los conflictos armados en Somalia, los miembros de la ONUSOM II se inmiscuyeron en los enfrentamientos bélicos, lo que trajo como consecuencia que los mismos fueran atacados por tropas del Congreso de la Unidad Somalí, en donde murieron un número estimable de personas, en fecha 5 de junio del 1993. A causa de tales hechos, el Consejo emitió la resolución 837 del 1993, por medio de la cual condenaba los ataques en contra de la ONUSOM II, y observó los mismos como una afrenta en contra de la comunidad internacional y de la ayuda que la misma le enviaba al Pueblo Somalí, y por igual como actos contrarios a la paz⁴⁵⁷.

Otro punto interesante de la referida resolución es que la misma le otorga la potestad al Secretario General, acorde a la resolución 814 (1993), para que haga uso de las medidas pertinentes con el fin de que los culpables de la incitación de los actos en contra de la ONUSOM II sean investigados, arrestados y disponer de su enjuiciamiento y castigo⁴⁵⁸. Y mediante la resolución 885 (1993) autoriza la conformación de una comisión para investigar los ataques de que fueron objeto los miembros de la ONUSOM II⁴⁵⁹.

Mediante la resolución 1907 del 2009, el Consejo de Seguridad manifiesta su respeto a “la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia, Djibouti y Eritrea, respectivamente”⁴⁶⁰, mientras que asevera, según informe que “Eritrea ha proporcionado asistencia política, financiera y logística a los grupos armados que intentan socavar la paz y la reconciliación en Somalia y la estabilidad de la región”⁴⁶¹.

⁴⁵⁵ *Ibidem*.

⁴⁵⁶ *Ibidem*, párr. 5 y párr. 6; vid. *S/RES/897 (1994)*, del 4 de febrero del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la misma prorroga la permanencia de la ONUSOM II; vid. *S/RES/923 (1994)*, del 31 de mayo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la misma también extiende la ONUSOM II; al mismo efecto vid. *S/RES/946 (1994)*, del 30 de septiembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; *S/RES/953 (1994)*, del 31 de octubre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; vid. *S/RES/954 (1994)*, del 4 de noviembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁵⁷ *S/RES/837 (1993)*, del 6 de junio del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁵⁸ *Ibidem*, párr. 5.

⁴⁵⁹ *S/RES/885 (1993)*, del 16 de noviembre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁶⁰ *S/RES/1907 (2009)*, del 23 de diciembre del 2009, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁶¹ *Ibidem*.

Por igual, el Consejo identifica que “las acciones de Eritrea en detrimento de la paz y la reconciliación en Somalia y la controversia entre Djibouti y Eritrea constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”⁴⁶² y decide que “Eritrea no suministrará, venderá o transferirá directa o indirectamente desde su territorio o por conducto de sus nacionales o utilizando buques o aeronaves de su pabellón ningún armamento o material conexo”⁴⁶³. Como se puede observar el Consejo decide tomar medidas en contra de Eritrea por considerar sus actos como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, por la ayuda que había prestado a los insurgentes extremistas en el territorio de Somalia, con la única finalidad de derrocar el Gobierno Federal de Transición.

La resolución 1972 del 2011, contrario a lo que se ventila de la supuesta intromisión del Consejo de Seguridad a la soberanía de Somalia, el Consejo da muestra de que reafirma el “el respeto de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Somalia”⁴⁶⁴. Lo contrasta con la teoría de interferencia, pues por el modo en que se ha comportado el Consejo a través del análisis de las distintas resoluciones, es evidente que los mismos intervienen en los Estados fallidos atendiendo a dos parámetros; 1. Que haya francas violaciones al derecho internacional humanitario, principios democráticos o derechos humanos y, 2. Que el Estado receptor de las acciones humanitarias o de las medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional no tenga un gobierno efectivo que pueda representarlo en la esfera internacional como es el caso de Somalia, aunque incluso hay que decir que el análisis de la situación en Somalia comenzó por una solicitud que hiciera un funcionario del entonces gobierno somalí en el 1991, aunque después se prescindiera de la misma por no existir un monopolio del Poder concentrado en un gobierno capaz de cohesionar a la sociedad de Somalia y representarla en todas las esferas.

López Martín sostiene que:

Llegados a este punto, creo que es donde, sin duda, resulta fundamental obrar con rigor a la hora de aplicar la etiqueta de Estado “fallido” y reservarla única y exclusivamente a las situaciones de colapso total y prolongado donde la autoridad estatal existente –Somalia–. Sólo en este supuesto, y sólo ante una eventual

⁴⁶² *Ibidem*.

⁴⁶³ *Ibidem*, párr. 5.

⁴⁶⁴ *S/RES/1972 (2011), del 17 de marzo del 2011, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.*

violación masiva y grave de derechos humanos, cabría plantearse la posibilidad de intervención por razones humanitarias sin el consentimiento del Estado, habida cuenta de que no existe autoridad alguna que pueda facilitar dicho consentimiento. Ahora bien, en nuestra opinión, ni siquiera en este contexto sería legítima una intervención unilateral, se trataría de una intervención autorizada por el Consejo de Seguridad, que podría actuar sin mediar el consentimiento del Estado territorial. Pero no sólo en la hipótesis de razones humanitarias, en general, cabría la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, que podría actuar sin mediar el consentimiento del Estado territorial. Pero no sólo en la hipótesis de razones humanitarias, en general, cabría la posibilidad de que el Consejo de Seguridad autorizara una intervención, sin necesidad de consentimiento del Estado afectado, siempre y cuando calificara la situación como una amenaza a la paz y seguridad internacionales en el contexto del Capítulo VII de la Carta, como ya ocurriera respecto de Somalia en 1993 –la Resolución 733 afirma que la falta de gobierno de Somalia, su situación de conflicto armado y caos, son una amenaza a la paz y seguridad internacionales, motivo que le lleva a decidir la intervención en Somalia a través del UNOSOM, sin consentimiento de ésta-. Lo mismo cabría decir en el caso de recibir ayuda o asistencia humanitaria. Sólo en el supuesto de Estado “fallido” estricto sería factible el envío de esta ayuda, inclusive la unilateral por otros Estados, sin el consentimiento del Estado “fallido” ante la ya señalada imposibilidad de obtención de éste. En los casos de Estados “en vías de fallar”, Estados “débiles” o “frágiles” –frecuentemente mal calificados como “fallidos”-. Ni la intervención, ni la ayuda humanitaria pueden darse sin el consentimiento del Estado afectado. De hecho en la práctica, la forma de actuar ha sido distinta. Baste citar un ejemplo. *En el terremoto del pasado 12 de enero de 2010 con epicentro en Puerto Príncipe, la asistencia prestada contó con el permiso (incluso la solicitud) del Presidente haitiano René Preval; mientras que cuando en 2004 Somalia sufrió un terremoto con centenares de víctimas –ramificación del maremoto de Indonesia que se dejó sentir en varios Estados- la Comunidad internacional respondió con el envío de ayuda a Somalia sin contar con su consentimiento.*

III.3 Representación de Somalia ante la Comunidad Internacional

Jiménez Piernas establece que el sistema internacional en cuanto al “estatuto jurídico de un Estado” se mueve en base al Estado soberano, puesto que este mantiene el “*monopolio de la fuerza ad intra y cumple sus obligaciones internacionales ad extra gracias a la presencia de una organización política o gobierno, condición imprescindible conforme a derecho para su reconocimiento internacional*”⁴⁶⁵. Ese estatuto permite que los Estados en el marco del Derecho Internacional se puedan relacionar bajo los cimientos de los

⁴⁶⁵ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Estados débiles y Estados fracasados...* pp. 44-45.

principios de soberanía y de la integridad territorial, el impedimento del uso de la fuerza y la no injerencia⁴⁶⁶.

En cuanto al Estatuto jurídico el derecho internacional no ha implementado medios que puedan permitir la revisión del estatuto de un Estado que pueda ser calificado como fallido, ya que la circunstancias de lo “fallido” no encuentra regulación alguna, sin importar lo grave del peligro. También, eso ocurre con la membresía en las Organizaciones Internacionales, sin que se hayan interesado o cuestionado la calidad de ese Estado reputado como fallido y que no puede mantener la intervención en las Organizaciones⁴⁶⁷.

Hasta el momento Somalia es el Estado que los analistas del tema entienden que es el mejor ejemplo de lo que es un Estado fallido. En el caso de Somalia la representación aún mantiene intacta en los organismos internacionales, por ello Collier señala que en esos tipos de Estado, como el de Somalia, se mantiene un gobierno aparente, con una simple fachada, los cuales participan de las convocatorias de los organismos internacionales en las negociaciones internacionales, como sería la Organización Mundial del Comercio, sin embargo los mismos no tienen nada que negociar, en el caso específico de Somalia, refiere que cuando la sociedad de Somalia se había desestructurado aún sus representantes participaban de los foros internacionales a nombre del Estado⁴⁶⁸

López Martín argumenta al respecto que:

..., observamos que Somalia ha mantenido su condición de miembro de todas aquellas Organizaciones Internacionales de las que lo era antes de 1991, sin que se cuestionara la misma. Tal es el caso, entre otras, de las Naciones Unidas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las que es miembro desde el 1960; de la Organización de la Conferencia Islámica (OIC) miembro originario desde 1969; del Banco Africano de Desarrollo, desde 1964; del Banco Islámico del Desarrollo, desde 1973; de la Autoridad Intergubernamental para el desarrollo (IGAP), desde 1983, o de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) desde 1985⁴⁶⁹.

⁴⁶⁶ *Ibidem*, pág. 45.

⁴⁶⁷ *Ibidem*.

⁴⁶⁸ COLLIER, P., *op. cit.*, pág. 13.

⁴⁶⁹ LÓPEZ MÁRTIN, A. G., *op. cit.*, pp. 33-34.

López Martín destaca que aunque Somalia sea miembro de tales Organizaciones Internacionales, en las mismas se produce la “silla vacía”, ya que desde el 1991 Somalia no ha tenido representantes con la autoridad necesaria para ocupar puestos, lo cual se ha prolongado desde entonces. En lo concerniente a la ONU, sólo fue hasta el año 2000, en la Cumbre del Milenio, cuando la Asamblea General le dio acceso a Abdikassim Salad, en su calidad de Presidente del Gobierno Nacional de Transición, y a Ali Khalif Galaydh, para participar en nombre de Somalia⁴⁷⁰.

El punto clave en ello radica en que la condición de miembro de Somalia en las Organizaciones Internacionales le permite el goce de derechos que son propios de los miembros, como podría ser la conservación de su asiento, plenamente identificado con su nombre, con los privilegios que le otorga la diplomacia; el mantenimiento de la bandera del Estado en la sede de la ONU y de los demás órganos, así como otros derechos referentes a los negocios que le permitía hacer la membresía en las Organizaciones⁴⁷¹.

En todo ello se puede encontrar un hecho divergente, en la Organización para la Unidad africana (OUA), siendo Somalia miembro de la misma desde el año 1960. A raíz de los conflictos en el territorio del Estado de Somalia, en el 1993, el Consejo de la OUA aprobó la suspensión de Somalia, lo que se mantuvo hasta el año 2000, puesto que la OUA había aceptado el representante que había sido enviado por el Gobierno Nacional de Transición. El vacío en la participación en las Organizaciones Internacionales fue interrumpido en el lapso 2000-2001, cuando había asumido el Poder la Unión de Cortes Islámicas, siendo dicho periodo una excepción a los fallos de gobierno que tuvo Somalia⁴⁷².

López Martín entiende que los Estados fallidos mantienen de manera aparente su condición como miembros de las Organizaciones Internacionales, como al momento de llegar a las circunstancias del colapso. Sin embargo, destaca magistralmente la distinguida profesora que “una vez que se produce el colapso y mientras dura esa situación de fracaso institucional les resulta imposible poder llegar a ser miembros de ninguna otra Organización Internacional”⁴⁷³. Se hace la afirmación puesto que hay todo un proceso para ser parte de una organización internacional que va desde la mera solicitud

⁴⁷⁰ *Ibidem*, pág. 34

⁴⁷¹ *Ibidem*.

⁴⁷² *Ibidem*.

⁴⁷³ *Ibidem*, pág. 35.

hasta la adhesión y posterior ratificación del tratado que da luz a la organización, en caso de que así se prevea, y para cumplir con tales compromisos se necesita de un gobierno que represente al Estado⁴⁷⁴.

Como un mecanismo interesante de ver la falla del Estado se pone de manifiesto los pagos de las cuotas realizados en las Organizaciones Internacionales, pues un Estado que no tiene una representación gubernamental efectiva no puede hacer frente a los pagos exigidos por las Organizaciones, teniendo la Organizaciones como norma que quien no pague las cuotas tendrá voz pero no voto a lo interno de las mismas. Por tanto, en lo que toca a la OIT desde el 1991 Somalia tiene suspendido el derecho al voto, mientras que la FAO también se ha manifestado en el mismo tenor, acumulando Somalia una deuda por encima de los 354, 468,97 dólares⁴⁷⁵.

En cuanto a la ONU, la misma prevé un sistema de cuota bien definido, comunicándole a cada Estado miembro la cuota que le corresponde a principio de cada año, debiendo Somalia pagar una cuota de 0,001%, cerca de veinte mil dólares al año. Aunque es una responsabilidad de los Estado el pago de la cuota, en la práctica no todos pagan, pues teniendo como ejemplo el año 2009, sólo 136 Estados habían pagado acordemente las cuotas que le correspondían pagar, mientras que los demás Estados estaban en una situación irregular de sus cuotas, entre los Estados que más deben a la Organización está Somalia con una deuda ascendente a 1,088,137 dólares, puesto que Somalia llevaba 20 años sin cumplir sus compromisos con la cuota⁴⁷⁶.

Caracterizando la representación internacional de los Estados fallidos se alega que “*si las instituciones gubernamentales están completamente ausentes, si el colapso institucional es total y prolongado, si se plantea un serio problema de representación internacional, pues es evidente que no hay autoridad central que asuma dicha función o que pueda acreditar debidamente a representante alguno*”⁴⁷⁷, en ese sentido se podría decir que el Estado de Somalia no tiene la representación de un Estado débil, el hecho es que no tiene representantes por carecer de un gobierno efectivo, siendo ésta una característica propia de los Estados fallidos.

⁴⁷⁴ *Ibidem*, pág. 35.

⁴⁷⁵ *Ibidem*, pág. 40.

⁴⁷⁶ *Ibidem*, pág. 41.

⁴⁷⁷ *Ibidem*, pág. 43.

III.4 Amenaza de Somalia a los demás Estados

Retomando lo antes expuesto⁴⁷⁸, los Estados considerados como fallidos eran tema de las agencias de seguridad de los EE.UU., no llegando el debate al mundo académico tal como se puede observar hoy en día. Las agencias de seguridad evaluaban tales Estados por las amenazas que los mismos podían representar para la comunidad internacional, aunque muy especialmente para los EE.UU, por ello es necesario apreciar las amenazas que envuelve al Estado somalí en relación con los demás Estados.

Aunque Somalia cuenta con un gobierno que goza del reconocimiento internacional por parte de la ONU, no ha podido lograr una representación internacional efectiva, por algo bastante simple, y es que el interés del Consejo de Seguridad y de la ONU en sentido general, es quien da pie al Gobierno en Somalia, pero este llamado “gobierno”, tiende a ser muy aparente, en el sentido de que no goza con el monopolio del Poder del Estado, en tanto que mientras no goce del monopolio del Poder, tendrá problemas con la representación internacional efectiva.

III.4.1 El terrorismo en Somalia

Martín-Peralta asevera que “La estabilidad de Somalia es la clave para alcanzar la de la región”⁴⁷⁹. La llamada organización yihadista salafista “Harakat Al Shabab Mujahedin”, o mejor dicho “Al Shabab” o “La Juventud”, debe su existencia a la Unión de Tribunales Islámicos, la cual tuvo un apogeo para el año 2004, teniendo la capacidad de imponer un orden, asimismo como lograr la administración de justicia en la atmósfera del conflicto total que gravitaba para la fecha en Somalia. Su objetivo de llevar al pie de la letra la “sharia”, la encaminó a tener enfrentamientos con distintos ejércitos, y con el mismo Gobierno Federal de Transición, que gozaba del patrocinio internacional. Para el 2006, la Unión de Tribunales Islámicos se dividió en dos vertientes: la moderada que se alojó en el Gobierno Federal de Transición, y la radical, Al Shabab, la cual era apoyada por el Estado de Eritrea, que también fue tomando parte del territorio de Somalia, especialmente áreas del sur, dentro de lo que se encontraban parte de Mogadiscio. Al Shabab es una

⁴⁷⁸ Vid. Cap. II.

⁴⁷⁹ MARTÍN-PERALTA, C. M., *op. cit.*, pág. 4.

organización terrorista asociada a Al Qaeda y a la yihad mundial, teniendo conexiones en Kenia, y alberga un gran número de combatientes de otros Estados⁴⁸⁰.

A principios del 2008 el grupo Al Shabab fue calificado como una organización de corte terrorista por los EE.UU, los cuales han ratificado en distintas ocasiones que responden al grupo terrorista Al-Qaeda. Pero la situación aún es más complicada, puesto que en Al Shabab hay líderes que tienen conexiones con Al-Qaeda, sin embargo la referida organización es una unión de distintas facciones amparadas bajo dichas siglas con la finalidad de derrocar el Gobierno Federal y a la AMISON y promover las medidas de carácter extremo que se conocen como sharia. Entre los líderes principales de Al-Shabab están desde las autoridades de ciudades extensas como Kismayo hasta miembros de clanes preexistentes; lo que trae consigo que entre sus militantes se encuentran tanto miembros nacionales de Somalia como simpatizantes y colaboradores de la yihad internacional, los cuales han acumulado sobradas experiencias de enfrentamientos militares en diferentes lugares en el mundo⁴⁸¹.

Al Shabab representa una célula terrorista de gran importancia para los Estados vecinos, muy especialmente para Etiopía, Estado el cual ayudó a expulsar a los UTI del territorio de Somalia. Pero también es una amenaza para EE.UU y occidente en tanto sean objetivos de estas células, y en tanto la yihad internacional pueda influir en ellos para la perpetración de actos que puedan ser calificados como terroristas. La falta de monopolio del Poder sobre el territorio por parte del Gobierno Federal hace que Al-Shabab pueda ir ganando más adeptos a sus causas.

En ese mismo sentido, otro de los grupos caracterizado por su extremismo fue el Hizbul Islam el cual tenía como líder a Sheikh Hassan Dahir Aweys, quien había formado parte de la UTI, pero que se puso a un lado en los acuerdos de paz de Djibouti, refugiándose en el Estado de Eritrea, y regresando después al Estado somalí, dicho grupo luego de luchar en contra del Gobierno Federal y en contra del mismo Al-Shabab, se fusionó con éste para diciembre del año 2010⁴⁸².

⁴⁸⁰ MARTÍN-PERALTA, C. M., *op. cit.*, pág. 5.

⁴⁸¹ *Somalia*, Comisión Española de..., pág. 28.

⁴⁸² *Ibidem*, pág. 29; vid. GARCÍANDÍA GARMENDIA, R., *op. cit.*, pp. 52 y ss.

III.4.2 La piratería en Somalia

Mientras que el asunto de la piratería, se originó en la década del 1990, como defensa ante el saqueo de los caladeros de pesca en las aguas territoriales de Somalia de naves extranjeras, lo que se desarrolló de manera vertiginosa hasta transformarse en piratería, lo que afecta al tráfico marítimo internacional en la ruta del canal de Suez. Para el año 2007, la piratería creció hasta un punto que llamaba la atención de la comunidad internacional, arrojando variados actos de ataques a naves que se fue creciendo hasta el 2011. Los secuestros fueron de la mano con los ataques a los barcos, exigiéndose sumas exorbitantes por el rescate de las tripulaciones de los barcos. En la actualidad, la piratería tiene su radio de acción en el noroeste y en el centro de Somalia, pero también en el océano Índico⁴⁸³.

En tal virtud manifiesta el profesor Jiménez Piernas:

Parecía inevitable que, de una u otra forma, la situación de fracaso del Estado somalí se proyectara o reflejara fuera de sus fronteras y así ha ocurrido. El GFT ha reconocido de forma expresa y reiterada su incapacidad manifiesta, ya para prevenir, ya para reprimir, el incremento espectacular de actos de delincuencia organizada que vienen cometiéndose (sobre todo desde 2007) en las aguas adyacentes a su costa y que han convertido a las aguas del golfo de Adén en las más peligrosas del mundo, por delante de las aguas del sur de la China y el estrecho de Malaca y del golfo de Guinea, áreas tradicionalmente afectadas por esta misma lacra. Es obvio que si el GFT es incapaz de controlar de forma efectiva su territorio, tampoco controle las aguas marinas bajo su soberanía o jurisdicción, al menos formal. Este inusitado incremento de un claro fenómeno de delincuencia organizada responde por supuesto al estado de desgobierno que padece Somalia, país con una gran fachada litoral al océano Índico. De hecho, conviene decirlo enseguida, el CdS ha reiterado en sus resoluciones, como un lugar común, que la plena erradicación de estas actividades ilícitas en las aguas frente a las costas de Somalia pasa necesariamente por la paz y estabilidad del país, el fortalecimiento de sus instituciones, el desarrollo económico y social, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley; el SG, los Estados miembros y otras organizaciones internacionales interesadas son de la misma. La consecución de estos objetivos representa, en las circunstancias actuales, una quimera⁴⁸⁴.

Lo expuesto es corroborado por Miguel Salvatierra quien arguye que “la actual piratería emerge como un fenómeno de gran complejidad y con unas implicaciones que van más allá del secuestro delictivo de un buque y su tripulación en alta mar”⁴⁸⁵. Salvatierra resalta

⁴⁸³ MARTÍN-PERALTA, C. M., *op. cit.*, pág. 5-6.

⁴⁸⁴ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, pág. 25.

⁴⁸⁵ SALVATIERRA, M. (2010): El próspero negocio de la piratería en África, CATARATA/Casa África, Madrid, pág. 8.

que “el despliegue aeronaval puesto en marcha por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero también por otros países como China, Rusia o la India (...) no ha sido suficiente”⁴⁸⁶. Esto muestra la gravedad del problema de la piratería, el cual luego de surgir no ha podido ser opacado por las potencias.

Un ejemplo de que el problema de la piratería afecta necesariamente a otros Estados es el hecho de que el centro principal de dicha actividad la constituye el océano Índico, las aguas del golfo de Adén y cerca de las costas somalí. Pero desde este punto el fenómeno se ha trasladado en la actualidad al golfo de Guinea y delta del Níger⁴⁸⁷. En tal sentido, “los llamados Estados fallidos o desestructurados, incapaces de ejercer una autoridad sobre sus costas, unido a la miseria y tráfico ilegal de armas, drogas o personas sin apenas obstáculos, integran el caldo de cultivo básico de la nueva piratería”⁴⁸⁸.

El *modus operandi* de los piratas somalíes es bastante básico. Muchas veces usan naves nodrizas, pero los asaltos se concretizan usando tres o cuatro lanchas rápidas. Los grupos dedicados a estas actividades utilizan fusiles AK-47, ametralladoras y las lanzagranadas RPG-7. También como avance tecnológico usan radares con la capacidad de detectar barcos en la noche y asimismo usan los llamados visores nocturnos. Cuando se va a producir un ataque, las lanchas se dirigen hacia el barco desde distintos puestos, luego de que implementar el correspondiente ataque de intimidación con armas sofisticadas o con granadas, como un método para la neutralización. Luego de que están en el buque, los piratas llevan el buque hacia las costas próximas, o buscan otro puerto más seguro para sus fines. Los piratas tienen su base de operaciones en ciudades como Eyl, o Hobyo o Harardhere en donde disponen de la logística necesaria para llevar a cabo sus planes, lo peor en ello es que el modo de vida de los piratas se está convirtiendo en algo deseable para el somalí puesto que “los piratas tienen dinero, poder, y cada día son más fuertes (...). Logran las mujeres más guapas, están construyendo grandes casas, tienen coches nuevos y armas modernas”⁴⁸⁹.

⁴⁸⁶ *Ibídem*, pág. 8.

⁴⁸⁷ *Ibídem*, pág. 8.

⁴⁸⁸ *Ibídem*, pág. 8.

⁴⁸⁹ *Ibídem*, pág. 15.

La piratería se ha convertido en un crimen organizado en donde se cuenta con abogados para intermediar en el rescate de los secuestros, así como en garantizar trabajo para mediadores entre los piratas e interesados de las víctimas, y en donde también han entrado al juego las compañías aseguradoras, por lo que cuando se está al día, las compañías aseguradoras cubren los daños, así como el dinero que haya que erogar para la negociación del secuestro, incluso la pérdida del dinero en caso de que haya sido robado por otros grupos interesados de la región de Somalia⁴⁹⁰. Se estima que para el año 2009, los piratas se beneficiaron con más de 200 millones de euros por sus actividades, sin incluir los daños económicos que generaban a las víctimas propietarias de los barcos secuestrados⁴⁹¹.

La falta de control por parte de las autoridades de Somalia sobre sus costas afectó no sólo a los Estados más cercanos con la piratería, sino a Estados distantes cuyas naves debían atravesar las aguas que concentran la piratería, lo que originó una preocupación muy acentuada por las potencias, hecho por el cual la OTAN tomó la iniciativa y envió una de las fuerzas navales de dicho órgano, mientras que la Unión Europea se puso de acuerdo para iniciar la llamada “operación atalanta”, con el apoyo de la ONU, la que constaba de trece naves, tres aeronaves y aproximadamente mil doscientos militares provenientes de distintos países de Europa, mientras que la OTAN desplegó tres fragatas, por igual mantienen presencia navales Rusia, EE.UU., China, la India, Arabia Saudí y Japón. Mas el problema continúa por el hecho de que el océano Índico es bastante grande y las embarcaciones desplegadas no pueden vigilar las costas de manera eficiente. La misión atalanta también, como parte de su ayuda, está preparando a militares somalíes para erradicar este mal, y que ayuden al Gobierno federal⁴⁹².

Sin embargo, como había un debate legal y político sobre la piratería y la legitimidad para procesar a los responsables de ejercer la piratería. El Consejo de Seguridad emitió la resolución 1846, mediante la cual los miembros del Consejo entendían que la piratería y al robo con armas en contra de naves en las aguas territoriales de Somalia y en alta mar agravaban más la situación en Somalia, lo que constituía todavía una amenaza a la paz y

⁴⁹⁰ *Ibidem*, pp. 16-17.

⁴⁹¹ *Ibidem*, pág. 18.

⁴⁹² *Ibidem*, pp. 73-74.

a la seguridad internacional⁴⁹³. Razón por la cual el Consejo de Seguridad autoriza a los Estados, y a las organizaciones que muestren interés y a la OMI, a que le den colaboración a Somalia, así como a los Estados ribereños próximos a Somalia para garantizar la seguridad de la costa, y permitiendo incluso que puedan combatir la piratería y los robos con armas de fuego en Somalia y en los litorales cercanos⁴⁹⁴.

El profesor Jiménez Piernas se refiere al respeto advirtiendo la obviedad del peligro derivado de la mala práctica de la piratería para la paz y la seguridad internacional. Lo cual desmejora y pone en peligro la seguridad en la navegación y en las vías comerciales en el Golfo de Adén, y en cuyo influjo está el canal de Suez, encareciéndose por motivo de la piratería la prima de los seguros. También la piratería puso barreras entre la población que debía recibir los alimentos y las organizaciones o Estados donantes, para lo cual se utilizan las vías marítimas, para enfrentar la emergencia humanitaria en que está Somalia. Amén de que el dinero de la piratería solventa el negocio facilitándole la compra de artefactos que mejoren la astucia para el ejercicio de tales actividades⁴⁹⁵.

Para Escalona Carrillo la piratería tiene que observarse como un hecho que ejemplifica la ausencia del poder en el estado somalí. Y como características de la piratería se puede notar, que el mismo se ejerce como un hecho delincuencia, en los que no se percibe los confinamientos producto de los clanes y los asuntos religiosos, los cuales etiquetan a la sociedad de Somalia, y al tiempo que debe destacarse que no todas las bandas dedicadas a la piratería son de Somalia, lo que es signo de la extensión de este mal por la región⁴⁹⁶.

⁴⁹³ Vid. S/RES/1846 (2008), del 2 de diciembre del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/1814 (2008), del 15 de mayo del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/1816 (2008), del 2 de junio del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual establece que “Insta a los Estados cuyos buques de guerra y aeronaves militares operen en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia a que permanezcan atentos a los actos de piratería y robo a mano armada y, en este contexto, *alienta*, en particular, a los Estados interesados en el uso de las rutas comerciales marítimas situadas frente a la costa de Somalia a que aumenten y coordinen sus esfuerzos por desalentar los actos de piratería y robo a mano armada en el mar en cooperación con el GFT”.

⁴⁹⁴ *Ibidem*, párr. 5; vid. S/RES/1814 (2008), del 15 de mayo del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁴⁹⁵ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, pág. 27.

⁴⁹⁶ ESCALONA CARRILLO, N. C., *op. cit.*, pág. 373.

III.5 El monopolio del Poder en Somalia

La investigación realizada da muestra de que el Poder en el Estado somalí no está concentrado en el gobierno que es reconocido por el Consejo de Seguridad de la ONU, por el hecho de que el territorio de Somalia está bajo distintos dominios, todos los cuales ejercen el Poder de la misma manera. Por tanto, en Somalilandia, Puntlandia, el Poder es ejercido por otros líderes distintos a los reconocidos por el Consejo, amén de que en Mogadiscio, Kismayo y otras ciudades hay líderes que se están enfrentando lo que implica, que el Poder no se ha podido manifestar en su correspondiente “competencia territorial”, al contrario la historia ha dado muestra de que en el paso de los tiempos otros líderes resurgen y la batalla entre los clanes se mantiene.

El monopolio del Poder, se puede notar en la inseguridad que vive el pueblo somalí, en la indeterminación de quienes detentan el Poder real (legítimo o no), en la falta de un órgano judicial que pueda juzgar a quienes perpetran los hechos, por consiguiente, la impunidad a gran escala es muestra de esa ausencia de Poder, así como la amenaza que significa el Estado para los Estados vecinos. El Estado Somalí, es a grandes rasgos el único Estado que se podría decir que es fallido⁴⁹⁷.

III.6 El monopolio del Poder y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

En la situación de Somalia, es inimaginable pretender que el Consejo de Seguridad de la ONU reemplazó el monopolio del Poder de Somalia, tomándolo en sus manos, pues el problema en Somalia como se ha descrito, es que no hay Poder, por tanto ni siquiera a través de las resoluciones que ordenaban las intervenciones el Consejo se hizo con el Poder del Estado, pues, v. gr., el enfrentamiento que hubo entre los grupos rebeldes y los efectivos enviados por el Consejo, en donde murieron un gran número de miembros de la Misión, es un buen ejemplo que testifica que el Consejo a través de las Misiones ONUSOM I y ONUSOM II, no ha podido siquiera controlar el Poder en el territorio de Somalia, siempre tomando en cuenta que estas Misiones están para controlar y normalizar y nunca para enfrentar, aunque hayan diversas circunstancias en la cuales han ocurrido enfrentamientos.

⁴⁹⁷ Vid. LÓPEZ MARTÍN, *op. cit.*

Tanto es así que Peraza Martell considera que la Misión de la ONU en Somalia se puede tildar de fracaso, entendiendo algunos puntos que la llevaron a ella a concluir en tal sentido, a saber: la necesidad de que antes de realizar una Misión se analice la situación y circunstancias que presenta el Estado, puesto que se desconocía la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Somalia; Debe haber una relación basada en la comunicación constante entre los efectivos que participan de la Misión en el país, pues había un desacuerdo entre lo que pensaba EE.UU y lo que pensaba la ONU; se debe mejorar la eficiencia de la ayuda humanitaria; la neutralidad en el conflicto no se mostró, pues el enfrentamiento a los adeptos del General Aidid dieron señas de la parcialidad de la Misión; se debe poner énfasis al funcionamiento de la economía tanto local como regionalmente como modo de superar la crisis, y no enfocarse tanto en el problema político; la ayuda humanitaria en vez de colaborar en el conflicto pasó a ser parte del mismo, ya que las bandas en conflicto luchaban entre sí para la obtención de dicha ayuda; la no intervención en primer plano de los órganos regionales lo que hacía era agudizar más la situación pues dichos órganos estaban subordinados a los mandatos de la ONU; las intervenciones militares no son una solución viable para los conflictos; se debe motivar a que las partes envueltas en el conflicto sean quienes tomen su propia iniciativa⁴⁹⁸.

Aunque no se está del todo de acuerdo con Peraza Martell, sus consideraciones dan muestra de la ausencia del Poder en el territorio de Somalia, y de cómo las Misiones enviadas no pudieron regular el Poder somalí.

III.7 Breves señalamientos a la amenaza de Somalia

La ausencia de Poder es notoria no sólo en el territorio terrestre sino también en el territorio marítimo de Somalia. La falta del monopolio del Poder ha llevado a que se instauren células terroristas asociadas a Al-Qaeda, y a la yihad internacional, lo que ponen en peligro a los demás Estados vecinos, especialmente a Etiopía, puesto que el mismo ha combatido las tropas de la UTI, los cuales encuentran respaldo en el Estado de Eritrea,

⁴⁹⁸ PERAZA MARTELL, V., *op. cit.*, pág. 75.

que como se ha visto sus actividades han sido condenadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre el grado de la violencia ejercida por este grupo terrorista se expone:

Pese a que tal clase de cifras siempre deban interpretarse con precaución, según las estimaciones más fiables entre 2007 y 2014 al Shabaab pudo llegar a realizar un mínimo de 1.700 ataques terroristas. Dicha violencia ha ido aumentando prácticamente año por año: desde los 10 atentados que le han sido atribuidos en 2007 hasta los más de ochocientos durante el pasado año. La letalidad de los ataques también ha sido diversa. Aunque alguna estimación haya fijado el promedio en 2,4 muertes causadas por cada atentado, al Shabaab ha demostrado capacidad sobrada para ejecutar acciones con gran número de víctimas⁴⁹⁹.

Casi un 49% de los ataques consumados entre 2007 y 2014 han ido dirigidos contra objetivos militares (etíopes, kenianos, somalíes, turcos, ugandeses y de otras nacionalidades integradas en la fuerza multinacional de AMISON), otros blancos de alta frecuencia han sido personal civil y propiedades privadas (26% del total), funcionarios y representantes del gobierno (12.9%), fuerzas de seguridad (8%), hombres de negocios (6.1), diplomáticos (2.0%), periodistas y medios de comunicación (2.0%). Analizados con más detalle también se encuentran objetivos tan variados como miembros de ONG's, líderes religiosos (con 24 incidentes y 23 respectivamente hasta 2013) o individuos de confesión cristiana, como la mayoría de los muertos en la Universidad de Garissa, seleccionados para morir por tal condición en el asalto realizado el 2 de abril de este año. En cuanto a los ataques contra edificios e instalaciones quizás sea interesante apuntar las acciones realizadas contra edificios oficiales y del gobierno (incluyendo el palacio presidencial en Mogadiscio) o de organismos internacionales, puertos y aeropuertos, medios de transporte y centros educativos y, con menor frecuencia, suministros de agua o alimentos, infraestructuras de telecomunicaciones, hoteles, locales privados y centros comerciales⁵⁰⁰.

Esto es muestra de la gran amenaza que representa la ausencia de Poder en el territorio de Somalia, lo que ha sido aprovechado por Al Shabab para perpetrar sus actos terroristas incluso en contra de otros Estados, pues el terrorismo ha alcanzado otras categorías como es la mejor muestra los actos terroristas del 11 de septiembre, así como los atentados terroristas del 11 de marzo en España, y los distintos atentados en Francia y en Bélgica. Actualmente, el terrorismo ha alcanzado dimensiones que antes no eran pensadas, pudiendo planificar atentados desde distintas áreas de la geografía mundial.

⁴⁹⁹ DE LA CORTE IBAÑEZ, L.: "Al Shabaab en el cuerno de África" en *Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, pág. 18, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEINV05-2015_Al_Shabaab_CuernoAfrica_LuisdeCorte.pdf

⁵⁰⁰ *Ibidem*, pág. 18.

En cuanto a la piratería, la misma ha sido un problema para los distintos Estados que han utilizado la ruta de las costas de Somalia, lo que también se ha convertido en un negocio lucrativo por parte de los grupos que se están dedicando a esta actividad, la cual ya no se circunscribe a los somalíes, sino que el mal se ha propagado a los individuos de otros Estados. Pero, la piratería está afectando gran parte del comercio, por dicha razón ha llamado la atención de muchos países, en ese tenor se expresa que:

Frente al flagelo de la piratería incluso países vecinos como Egipto tardaron en reaccionar. Las autoridades del Cairo lanzaron la voz de alerta, hasta que Europa anunció la posibilidad de cambiar la ruta del Golfo de Adén por un camino más largo y costoso, pero menos arriesgado alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que hubiera amenazado el comercio por el Canal de Suez; actualmente el tránsito por el Canal de Suez cuesta en promedio 600 mil dólares por barco más que un seguro adicional por riesgo de piratería que asciende a 100 mil dólares por nave⁵⁰¹.

Otros países ricos y musulmanes como Arabia Saudita, principal exportador de petróleo en el mundo, también han sido víctimas de la piratería. La captura del *Sirius Star*, en noviembre de 2008, un superpetrolero de 330 metros de largo y con una carga de crudo por un valor de 100 millones de dólares no sólo fue un shock para los Saudíes, sino que mostró al mundo, que los piratas son capaces de atacar barcos grandes en alta mar, incluso a una distancia de casi 500 millas de su costa y que sus víctimas también provienen de países musulmanes⁵⁰².

Los piratas, como reacción a la presencia de buques de guerra frente a sus costas, secuestran cada vez más barcos en alta mar, mostrando su capacidad de ataque lejos de Somalia, pero la mayoría de los atracos tienen lugar en el Golfo de Adén, el estrecho entre Somalia y Yemen donde pasa la tercera parte del petróleo mundial transportado por vía marítima. El International Maritime Bureau es el punto de contacto para los navieros y registra en internet todos los secuestros⁵⁰³.

Se observa que la preocupación sobre la amenaza de la piratería no es sólo con los Estados vecinos, sino incluso con los mismos países musulmanes exportadores de petróleos, así como los países que están en la obligación de cruzar por el Canal de Adén, puesto que de lo contrario las mercancías generarían más costo, lo que no resulta beneficioso para nadie, en tal razón la piratería ha sido un dolor de cabeza para los europeos, razón por la que Europa es quien lanza la operación *Atalanta*, aunque también han encontrado el apoyo de EE.UU, así como de Estados vecinos que sufren este malestar.

⁵⁰¹ BERGER, M.: "Visión Alemana sobre 'Atalanta': la misión europea contra la piratería somalí" en *Europeans Review*, pág. 2, en <http://www.ieeiweb.eu/wp-content/uploads/2016/01/n3.pdf>

⁵⁰² *Ibidem*, pág. 2.

⁵⁰³ *Ibidem*, pág. 2.

III.8 Haití y el origen de su problemática

Para tratar la problemática haitiana hay que remontarse a la dictadura de los Duvalier. Francois Duvalier (Papa Doc), comenzó en su carrera de la mano del movimiento de la llamada supremacía negra, desde donde ocupó cargos vinculados al ministerio de sanidad. Duvalier se opuso al golpe militar del 1950, lo que lo hace exilarse, regresando para el año de 1956, como un potable candidato por la Presidencia del país, resultando electo en las elecciones de manera abrumadora⁵⁰⁴.

Aunque había asumido el Poder de una manera democrática, Duvalier padre, estableció un gobierno represivo, imponiendo un “estado de excepción” con carácter permanente, por lo que recurrió a los decretos como manera de ejercer su autoridad plenamente. La represión en el gobierno llegó a su punto más cumbre con la llamada banda de los “Tonton Macoutes”, los cuales eran un grupo paramilitar que establecieron una atmósfera de miedo para el pueblo haitiano, grupo que se mantuvo activo también durante el gobierno de Jean Claude Duvalier, conocido como Baby Doc. Como era normal en el periodo de la guerra fría, la política exterior estadounidense se centró en el apoyo a los dictadores como un modo de reprimir los deseos socialista de un gran número de personas en la región, de la misma manera EE.UU le brindó su apoyo a Duvalier padre⁵⁰⁵.

Duvalier padre murió en el 1971, fecha en la cual subió al Poder, sin llegar siquiera a los 20 años de edad, Baby Doc. Al igual que su padre, Jean Claude Duvalier, gobernó bajo el miedo y la violencia, matizada por una extrema corrupción, conllevando a que para el 1986 saliera del Poder, tras un golpe de Estado encabezado por Namphy, quien ascendió al Poder en sustitución de Baby Doc. Pasado dos años, Leslie Manigat resultó electo en las elecciones, adquiriendo gran legitimidad debido a los constantes años de gobiernos que no fueron electos a través del voto popular, lo cual se vio frustrado por el hecho de que Henri Namphy dio otro golpe de Estado y asumió nuevamente el Poder⁵⁰⁶.

No obstante, los deseos de Namphy resultaron frustrados en pocos meses, luego de que Prosper Avril, le diera un golpe de Estado y asumiera el Poder del Estado hasta el año

⁵⁰⁴ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A. (2011): *El conflicto de Haití*, Instituto de estudios internacionales y europeos Francisco de Vitoria/ Escuela de Guerra del Ejército del Ministerio de Defensa/Ministerio de Defensa, Madrid, pág. 96; sobre la fragilidad haitiana vid. GARCÍANDÍA GARMENDIA, R., *op. cit.*, pp. 157 y ss.

⁵⁰⁵ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. ct.*, pág. 96.

⁵⁰⁶ *Ibidem*, pp. 96-97.

1990, siendo sustituido por un gobierno provisional conformado por Herard Abraham y Ertha Pascal-Trouillot, manteniéndose dicho gobierno hasta el 7 de febrero del 1991, cuando ascendió al Poder Jean Bertrand Aristide, tras unas elecciones ganadas con un alto porcentaje de los votos⁵⁰⁷.

Aristide representaba un eslabón de esperanza para la sociedad haitiana, el mismo creció en una familia campesina, se recibió como sacerdote, un gran adepto de la teología de la liberación, lo cual asociaba a la opresión a que estaba sometida la sociedad de Latinoamérica. Aristide se desarrolló por las constantes denuncias que el mismo realizaba desde el púlpito sobre los gobiernos de Duvalier y los demás que habían obtenido el Poder por medio de golpes de Estado. La actitud desafiante del sacerdote Aristide, trajo como consecuencia que la banda de los tonton macoutes intentara matarlo⁵⁰⁸.

Las quejas por parte de Aristide continuaron en contra de la corrupción que imperaba en el Estado haitiano, pero ya haciendo uso de la radio, sembró en el seno de la sociedad haitiana un sentimiento revolucionario, debido al hartazgo de los gobiernos corruptos y dictatoriales que habían tenido.

El gobierno de Haití, convocó para la celebración de elecciones, por lo que Aristide decidió ir a las elecciones, puesto que incluso había sido retirado de la actividad sacerdotal como consecuencia el proselitismo político. En las elecciones Aristide resultó electo con un alto margen de las votaciones, subiendo al Poder en febrero del 1991⁵⁰⁹. Al subir al gobierno Aristide implementó una serie de políticas sociales con el fin de mitigar la pobreza, así como la desigualdad que consumía al pueblo haitiano, por igual trató de promocionar los derechos humanos, sin embargo las políticas de Aristide fueron interrumpidas gracias a un golpe de Estado encabezado por Raoul Cédras, llevando a Aristide a Venezuela, y luego a EE.UU⁵¹⁰.

La violencia en Haití se incrementó luego del golpe de Estado en contra de Aristide, los grupos paramilitares habían tomado las calles, configurándose un gran número de asesinatos y desapariciones, lo cual se vio simbolizado en la llamada “matanza de Raboteau” en el 1994. La situación haitiana llevó a que se produjera una alta migración

⁵⁰⁷ *Ibidem*, p. 97.

⁵⁰⁸ *Ibidem*, pág. 97.

⁵⁰⁹ *Ibidem*, pág. 98.

⁵¹⁰ *Ibidem*, pág. 98.

que buscaba las costas de la Florida para salir de las atrocidades que se estaban viviendo. Empero, la sociedad internacional se hizo eco de lo que estaba ocurriendo pues tanto la OEA como la ONU entendieron que debía regresar el Presidente Aristide. El Consejo de Seguridad se pronunció al respecto exponiendo que:

Decide que las disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 14 infra, que están en consonancia con el embargo comercial recomendado por la Organización de los Estados Americanos, entren en vigor a las 00.01 horas (hora de la costa oriental de los Estados Unidos) del 23 de junio de 1993, a menos que el Secretario General, teniendo en cuenta las opiniones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, haya informado al Consejo que, a la luz de los resultados de las negociaciones dirigidas por el Enviado Especial para Haití del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en ese momento no se justifica la imposición de tales medidas⁵¹¹;

(...)

Decide que todos los Estados prohíban la venta o el suministro, por sus nacionales o desde sus territorios, o mediante el uso de buques o aeronaves con sus pabellones, de petróleo o sus derivados, o armas y material conexo de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo policial y las piezas de repuesto correspondientes, originarios o no de sus territorios, a toda persona u organismo de Haití o a toda persona u organismo para los fines de cualquier actividad realizada en Haití o que opere desde ese país, y todas las actividades de sus nacionales o en sus territorios que fomenten o estén concebidas para fomentar tales ventas o suministros⁵¹²;

(...)

Decide que los Estados en que haya fondos, incluidos todos los fondos provenientes de bienes a) del Gobierno de Haití o de las autoridades de facto de Haití o b) controlados directa o indirectamente por ese Gobierno o autoridades, o por entidades, dondequiera estén situadas u organizadas, de dicho Gobierno o autoridades o que se encuentren bajo su control directo, exijan que todas las personas y entidades dentro de sus propios territorios que tengan tales fondos, los congelen para que no estén directa ni indirectamente a disposición de las autoridades de facto de Haití ni redunden en su beneficio⁵¹³.

(...)

Se declara dispuesto a revisar todas las medidas enunciadas en la presente resolución con miras a su suspensión si, después de la entrada en vigor de las disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 14, el Secretario General, teniendo en cuenta las opiniones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, informa al Consejo que las autoridades de facto de Haití han firmado

⁵¹¹ *S/RES/841 (1993), del 16 de junio del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párr.3.*

⁵¹² *Ibidem*, párr. 5.

⁵¹³ *Ibidem*, párr. 8.

y empezado a aplicar de buena fe un acuerdo para restituir el Gobierno legítimo del Presidente Jean-Bertrand Aristide⁵¹⁴.

El embargo de la OEA y asumido por la ONU, instó a que las partes principales de la esfera política de Haití entraran en una atmósfera de conversación vigilada y propiciada por las referidas Organizaciones Internacionales. Y a los fines de que se aseguraran del cumplimiento de los acuerdos y se verificaran los problemas que transgredían los derechos humanos se estableció la llamada Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH), luego de que pudo restablecer el orden se amplió el mandato para el afianzamiento de las instituciones democráticas⁵¹⁵.

Como acuerdo cumbre de las negociaciones se originó el “Governors Island”, en el cual intervinieron los grupos políticos más influyentes de Haití, teniendo como fin dar garantía de que la transición se encaminaría por un proceso pacífico, debiendo crearse una atmósfera propicia que ayudara al gobierno, estableciéndose en dicho acuerdo los principios que debían tomar en cuenta los grupos políticos en Haití⁵¹⁶.

El Consejo de Seguridad tomando en cuenta su propuesta de la resolución 841 del 1993, levantó el embargo impuesto al Estado haitiano, lo cual se plasmó en la resolución 861⁵¹⁷, y mediante la resolución 867 se aprobó la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH o MINUH), la cual se erigió para darle seguimiento al acuerdo Governors Island. En un primer momento se mandaron una cantidad de mil doscientos soldados y personal de la milicia de apoyo, y también trescientos oficiales de la policía civil, asimismo ciento sesenta funcionarios internacionales, y ciento ochenta funcionarios locales, más dieciocho voluntarios de las Naciones Unidas⁵¹⁸.

El despliegue de los efectivos encontró una fuerte oposición de los individuos que simpatizaban por el gobierno de facto, por lo que la Misión no pudo lograr su objetivo, fracasando en el intento. La violencia siguió incrementándose esta vez dirigida a los

⁵¹⁴ *Ibidem*, párr. 16.

⁵¹⁵ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. cit.*, pág. 101; en lo referente a la Misión Civil Internacional en Haití véase <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml>

⁵¹⁶ *Ibidem*, pp. 101-102.

⁵¹⁷ Cf. S/RES/861 (1993), del 27 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; cf. S/RES/862 (1993), del 31 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵¹⁸ Vid. <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmih.htm>

partidarios del Presidente Aristide, que pudo ver su concreción con la muerte del Ministro de Justicia⁵¹⁹.

La ONU propició, a raíz de lo que estaba viviendo el Estado haitiano, que se retomaran las medidas del embargo, así como el robustecimiento de las medidas con el embargo impuesto al petróleo, y el impedimento de naves a los puertos del territorio haitiano. Esos hechos se mantuvieron de la misma manera hasta mayo del 1994, sin embargo la ONU, por medio del Consejo de Seguridad reforzaba las medidas que había tomado, pero los auspiciadores del golpismo proclamaron Presidente a Jonassaint y derrocaron el gobierno de Malval, sin embargo la situación en las calles era sumamente preocupante, en ese sentido el Consejo de Seguridad una misión que pudiera tomar el dominio de la situación en Haití, sacando a los golpistas y trayendo de regreso al Presidente Aristide, y la cual tenía en sus manos la tarea de propiciar la paz para que se pueda implementar las disposiciones del acuerdo “Governors Island”, y así como para que se pudiera celebrar elecciones en Haití. Empero, la intervención a que aspiraba el Consejo se vio frustrado por las negociaciones encaminadas por los EE.UU, de todos modos los efectivos militares se desplegaron en el territorio haitiano de manera pacífica y para dar cumplimiento a lo acordado en el pacto de Puerto Príncipe, que preveía el regreso del Presidente Aristide⁵²⁰. Finalmente, se pudo obtener la salida de Cédras y sus aliados golpistas, así como la instauración del gobierno constitucional de Aristide, por lo cual el Consejo levantó el embargo y desplegó todas las tropas en el territorio. Un año después se realizaron elecciones en Haití, resultando electo el señor René Préval en el 1996⁵²¹.

Entre los logros que obtuvo la UNMIH (MINUH), según la ONU son los siguientes:

- Ayudó a crear un entorno propicio para la celebración de unas elecciones libres e imparciales y proporcionó apoyo técnico y logístico a las autoridades haitianas responsables de la organización y celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 1995.

- Prestó asistencia en la formación, capacitación y apoyo de la nueva Policía Nacional Haitiana. La Policía Civil de la UNMIH, facilitó adiestramiento en el empleo y orientación a más de 5.000 nuevos oficiales de Policía Nacional Haitiana desplegados en todo el país y supervisó su progreso. La Policía Civil de la UNMIH también fue asignada a la nueva Unidad de Investigación Criminal de Haití. El Canadá, Francia y los Estados Unidos de América apoyaron una capacitación formal de la policía en la

⁵¹⁹ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. cit.*, pág. 102.

⁵²⁰ *Ibidem*, pág. 108.

⁵²¹ *Ibidem*, pág. 109.

Academia de Policía de Haití bajo la orientación del Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigaciones Criminales de los Estados Unidos.

-Ayudó a reconstruir las infraestructuras y facilitó formación y asistencia de otro tipo a través de más de 1.000 pequeños proyectos. Convencido de que "encender las luces" y mejorar las condiciones de vida ayudaría a mantener un entorno seguro y estable, el personal de la UNIMH trabajó con los haitianos para rehabilitar los servicios de suministro de agua y saneamiento, el suministro eléctrico y las carreteras. Se reconstruyeron las comisarías de policía, las escuelas y otros servicios públicos, y se facilitó capacitación en la gestión de situaciones de emergencia, primeros auxilios y otros temas. Las unidades de ingeniería de la UNMIH reconstruyeron el puente de vital importancia de Jacmel, destruido por un huracán en 1994.

-Prestó asistencia al Gobierno de Haití en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la preservación de un entorno seguro y estable proporcionando seguridad a los convoyes humanitarios, aeropuertos, puertos y lugares de almacenamiento, y manteniendo su presencia a través de patrullas en todo el país. Desde 1995, la UNMIH ha participado en grupos de trabajo compuestos por representantes del Gobierno de Haití, por el Grupo de Amigos del Secretario General para la cuestión de Haití (la Argentina, el Canadá, Francia, los Estados Unidos de América y Venezuela y Chile) y por la Misión Civil Internacional en Haití (**MICIVIH**). Estos grupos formulan planes e identifican los medios para ayudar al Gobierno de Haití hacer frente a problemas de transición. Los grupos de trabajo han tratado un gran abanico de temas tales como el desarme, la justicia, el encarcelamiento y los derechos humanos; tareas de extinción de incendios y la gestión de disturbios en las ciudades⁵²².

Posteriormente, se realizaron elecciones en el 2000, resultando vencedor el partido Fanmi Lavalás, encabezado por Jean Bertrand Aristide, quien obtuvo un gran respaldo del pueblo, sin embargo la oposición arreciaba su lucha en contra del Gobierno que había sido electo, los aires eran bastantes turbulentos, ya que hubo muchas personas que se unieron a las denominadas “quimeras”, las cuales eran grupos cercanos a Fanmi Lavalás, que de alguna forma lograron obtener armas de fuego, y quienes impusieron nueva vez el miedo en la sociedad haitiana.

En febrero del 2001, Aristide accede nueva vez a la Presidencia de la República, teniendo como primer ministro a Chérestal, quien luego fue sustituido por Neptune. La conmoción que vivía Haití seguía en pie, y en diciembre del 2001 se produjo un conato de golpe de Estado en contra del Presidente Aristide, el cual fracasó, pero la tensión seguía en aumento y por igual se mantenía la violencia, aspectos estos que gravitaron durante la

⁵²² <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmih.htm>

gestión de Aristide, pues hubo una cantidad estimable de personas muertas fruto del enfrentamiento de partidarios de Aristide y de la oposición⁵²³.

La celebración de los doscientos años de la independencia de Haití el primero de enero del 2004 marcó el comienzo del fin del gobierno del Presidente Aristide, puesto que los problemas que agobiaban a la población haitiana como las violaciones a los derechos humanos, los efectos de la corrupción inacabables, aún se mantenían, sin que el gobierno de Aristide pudiera hacer algo para contrarrestarlo⁵²⁴.

Un conglomerado de partidos y de rebeldes contrarios a la política del gobierno de Aristide exigían la dimisión de éste, puesto que las situaciones de violencia seguían empeorando, en donde la rebelión era liderada por Guy Philippe, que tenía en su dominio ciudades de relevancia del territorio haitiano, con un escenario en donde la policía del país aplicaba la más férrea violencia con los fines de la recuperación del Poder en el territorio. Sin embargo, todas las revueltas eran sinónimos de centenas de muertos, entre los que estaban el periodista Ricardo Ortega⁵²⁵.

Estos conflictos provocaron que Aristide se exilara. Seitenfus describe ese escenario de la siguiente manera:

“¿Usted sabe por qué estoy acá?”, preguntó en español, Luis Moreno, embajador adjunto de Estados Unidos en Haití. “Sí, por supuesto”, contestó el presidente Jean-Bertrand Aristide. Este diálogo ocurrió en las primeras horas de la madrugada del 29 de febrero de 2004 cuando, acompañado por seis oficiales de su seguridad, el diplomático norteamericano ingresó a la residencia particular de Aristide, ubicada en Tabarre, en los alrededores de Puerto Príncipe. A partir de este momento aparecen, para decir lo mínimo, dos versiones que se contraponen frontalmente. La de Estados Unidos sostiene que actuaron en respuesta a la solicitud del propio Aristide para que pudiese abandonar Haití con total seguridad. Llegaron a la residencia en vehículos oficiales de la embajada norteamericana y condujeron a Aristide al Aeropuerto Toussaint Louverture. A las 6:15 am, a bordo de un jet comercial fletado por el gobierno de Estados Unidos, Aristide y su esposa Mildred Trouillot, salieron de Haití⁵²⁶.

⁵²³ *Ibidem*, pp. 133-134.

⁵²⁴ *Ibidem*, pág. 134.

⁵²⁵ *Ibidem*, pág. 136.

⁵²⁶ SEITENFUS, R. A. S. (2016): *Reconstruir Haití: entre la esperanza y el tridente imperial*, Fundación Juan Bosch/CLACSO, Santo Domingo, pp. 111-112.

El mismo periodista Ricardo Ortega describía dicha situación de la siguiente manera:

Aristide ha renunciado pero la violencia no se detiene. El presidente haitiano abandonaba Puerto Príncipe al amanecer acosado por los rebeldes pero sobre todo bajo las presiones irresistibles de Francia y Estados Unidos que le habían retirado su apoyo y le habían conminado a dimitir. En estos momentos se vive una situación de absoluta incertidumbre y de vacío de poder. Es una incógnita si las fuerzas rebeldes aprovecharán esta coyuntura para avanzar a la capital. Lo que sí es un hecho es que en las calles de Puerto Príncipe se ha desatado de nuevo la violencia. Se registran saqueos, barricadas ardiendo, disparos de fusiles y de ametralladoras y explosiones con densas columnas de humo muy cerca del Palacio Presidencial. Ahora técnicamente el poder tendría que pasar a un juez del Tribunal Supremo pero en esta situación de caos, sin ejército ni policía, es muy difícil imaginar cómo se articularía este traspaso de poder. Los rebeldes están tan sólo a 35 km de la capital⁵²⁷.

Boniface Alexandre, tomó posesión del cargo, acorde lo estipulado en la Constitución haitiana, también se creó un Consejo Tripartito compuesto por un miembro seguidor del Presidente Aristide y otro que pertenecía a la oposición, y como un ente moderador se eligió alguien de la comunidad internacional, el Consejo eligió al “Consejo de sabios”, que a su vez, eligieron a Latortue como Primer Ministro de Haití, y eligieron un gobierno de transición⁵²⁸.

A su vez, la ONU se hizo notar, pues mediante la resolución 1529, autorizó el despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional, con el fin de ayudar a la estabilización del pueblo haitiano, y con la resolución 1542 aprueba la misión conocida como MINUSTAH. Para el 2006 se celebraron elecciones, resultando electo René Préval. El gobierno de Préval se puede calificar de estable, pese a las desavenencias que enfrentaba el pueblo haitiano, así como a los desastres naturales. Sin embargo, el poder judicial, mostraba signos de avance, por igual los derechos humanos, la policía también mostraba un desarrollo considerable.

III.8.1 El terremoto del 12 de enero del 2010 y la situación de crisis del Estado haitiano

Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter sacudió Haití el 12 de enero del 2010, dejando la capital y ciudades bajo la devastación, en donde murieron una cantidad por

⁵²⁷ MIRANDA, C., MARTÍN TAPIAS, J. (2011): *Ricardo Ortega, salgo para Haití*, Ediciones A P M, Madrid, pág. 249.

⁵²⁸ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. cit.*, pág. 140.

encima de doscientos mil muertos. El terremoto tocó las puertas de las instituciones del Estado haitiano, quedando también bajo las sombras de los escombros, siendo una gran tragedia para la comunidad internacional, y para la estabilidad del pueblo haitiano que ya había comenzado a dar sus mejores frutos. Con el terremoto la pobreza y el lamentable drama haitiano se agudizaban más⁵²⁹.

En el terremoto ministros de Haití, así como senadores, barrios completos quedaron en la ruina, también el Palacio Presidencial y el Cuartel general que albergaba la MINUSTAH, en donde murieron algunas personas también. El gobierno del Préval, con el fin de recibir ayuda humanitaria, permitió que los marines de los Estados Unidos se extendieran por todo el país. Varios años después Haití continuaba en la destrucción y la miseria que parecían nunca acabar⁵³⁰.

En el informe del Secretario General se describe lo siguiente:

Las Naciones Unidas también fueron víctimas de la catástrofe. El hotel Christopher, cuartel general de la MINUSTAH, se derrumbó y las oficinas y otras instalaciones vecinas de las Naciones Unidas sufrieron graves daños. En total, 101 miembros del personal de las Naciones Unidas perdieron la vida, entre ellos mi Representante Especial, el Sr. Hédi Annabi, el Representante Especial Adjunto, Sr. Luis Carlos Da Costa, el Comisionado de Policía interino, Sr. Douglas Coates, el Director de Asuntos Políticos, Sr. Gerard Le Chevallier, el Jefe de la Dependencia de Elecciones, Sr. Marc Plum, y otros miembros del personal militar, civil y de policía. Muchos más funcionarios quedaron heridos y otros no han podido regresar a sus labores. Los que sobreviven y permanecieron en la Misión presenciaron escenas de inimaginable devastación y sufrimiento. Están en Haití para prestar sus servicios y, como la población haitiana, siguen lamentando la pérdida de sus amigos y colegas⁵³¹.

Las elecciones en Haití que estaban pautadas para el mes de febrero del 2010, tuvieron que postergarse, sin embargo luego pudieron ser retomadas, por lo que en el proceso de votación, resultó electo Michel Martelly, y ya en la actualidad el Consejo Electoral Provisional de Haití dio como resultado de las elecciones celebradas a Jovenel Moise, quien ganó con el apoyo del Presidente Martelly con un margen estimable de los votos del pueblo. Por lo que se podría decir que la democracia en Haití ha ido en una constante

⁵²⁹ DURÁN VARGAS, L. R.: "Terremoto en Haití: las causas persistentes de un desastre que no ha terminado" en *Revista Nueva Sociedad*, núm. 226, marzo-abril de 2010, pág. 13.

⁵³⁰ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. cit.*, pág. 145.

⁵³¹ *S/2010/200, del 22 de febrero del 2010, del Secretario General de las Naciones Unidas.*

mejora, pese a los remanentes que aún permanecen del terremoto del fatídico 12 de enero del 2010.

III.9 Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Estado Haitiano

El Consejo de Seguridad de la ONU mostraba su preocupación por la situación haitiana y la inestabilidad política que tenía dicho país, lo que llevó a que se emitiera la resolución 841 del 1993, que implementaba el embargo como medida en contra del gobierno de facto para obligarlo a que se pusieran en conversación para que pudiera retornar el Presidente Jean Bertrand Aristide, expidiendo dicha resolución a raíz de lo que había decidido la Organización de los Estados Americanos (OEA)⁵³².

Las resoluciones 861 y 862 analizan la situación del Estado haitiano, así como el embargo y su posible levantamiento. En la resolución 862 el Consejo aprobó “un grupo de avanzada integrado por un máximo de 30 personas para evaluar las necesidades y hacer los preparativos necesarios para el posible envío de los componentes de policía civil y asistencia militar de la propuesta Misión de las Naciones Unidas en Haití”⁵³³, lo que se decidía en virtud del “mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que le incumbe al Consejo en virtud de la Carta”⁵³⁴.

La resolución 867, tiene gran importancia para Haití, pues prevé el envío de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), con el objetivo de que la misma coadyuve en el cumplimiento del Acuerdo de Governors Island y el Pacto de Nueva York, pudiendo extenderse si así lo considerara el Consejo⁵³⁵. Con el envío de la UNMIH el Consejo había decidido penetrar al territorio haitiano, y por tanto a su soberanía, basado en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo que en principio no tenía como objeto la ayuda humanitaria.

⁵³² S/RES/841 (1993), del 16 de junio del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³³ S/RES/862, del 31 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/861 del 27 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³⁴ S/RES/862, del 31 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³⁵ S/RES/867, del 23 de septiembre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Luego el Consejo de Seguridad de la ONU mantiene en pie el embargo en contra del gobierno de facto pero decide que *“los fondos que se deban congelar (...) podrán liberarse a petición del Presidente Aristide o del Primer Ministro Malval de Haití”*, siendo una muestra del apoyo que Aristide y Malval tenían, contrario a las autoridades del gobierno de facto⁵³⁶. Otras resoluciones se refirieron a la extensión de la Misión en el territorio haitiano⁵³⁷. Debido a los constantes inconvenientes que habían encontrado la UNMIH para cumplir con su misión, el Consejo agudizó las medidas del embargo⁵³⁸.

El Consejo de Seguridad, producto de la situación humanitaria del pueblo haitiano, y las permanentes violaciones de los derechos humanos, así como de la expulsión de los miembros de la Misión Civil Internacional (MICIVIH), autoriza, según el Capítulo VII, *“a los Estados Miembros a integrar una fuerza multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, el pronto regreso del Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legítimas del Gobierno de Haití”*⁵³⁹.

La referida resolución muestra un ícono en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, debido a que la misma crea una fuerza militar con el objetivo de intervenir el territorio de un Estado, con el propósito de restituir un gobierno que ha sido elegido por las vías democráticas. También era muestra del apoyo del Consejo a los gobiernos legitimados por los procesos que ha impuesto la democracia, amén de que es un modo de no reconocimiento a la efectividad del Estado, cuando el gobierno de facto se le impone a un gobierno que sí ha sido electo por vías electorales como demanda una democracia representativa.

Muestra del mismo apoyo a las autoridades elegidas por vía de los procesos electorales, y en sí, al sistema democrático, es la resolución 944, pues con ella retira, el embargo que había implementado hasta tanto depusiera el gobierno de facto, teniendo vigencia el retiro

⁵³⁶ S/RES/873, del 13 de octubre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³⁷ S/RES/905, del 23 de marzo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/933, del 30 de junio del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/1007, del 31 de julio del 1995, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/1048, del 29 de febrero del 1996, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³⁸ S/RES/917, del 6 de mayo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵³⁹ S/RES/940, del 31 de julio del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

del embargo un día después del regreso del Presidente Aristide al Estado haitiano⁵⁴⁰. Con la Resolución 1063 del 1996, el Consejo de Seguridad establece la “Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH) hasta el 30 de noviembre de 1996 con el fin de prestar asistencia al Gobierno de Haití en la profesionalización de la policía y en el mantenimiento de un entorno seguro”, ampliando su permanencia en el territorio haitiano⁵⁴¹.

La resolución 1529 del 2004 muestra cierta relevancia en razón de la situación que estaba viviendo el pueblo haitiano, pues el Consejo tomó en cuenta “la dimisión de Jean-Bertrand Aristide como Presidente de Haití y de la investidura de Boniface Alexandre como Presidente interino de Haití de conformidad con la Constitución del país”⁵⁴², y pone de manifiesto la pedida de ayuda a la comunidad internacional por parte del Presidente interino Boniface Alexandre⁵⁴³. En dicha resolución hay un reconocimiento, por igual al gobierno de Alexandre por estar amparado constitucionalmente, lo que muestra la inclinación del Consejo por el sistema democrático constitucional de los Estados.

Con la resolución 1542 del 2004, el Consejo de Seguridad decide establecer “*la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), fuerza de estabilización solicitada en la resolución 1529 (2004), por un período inicial de seis meses, con la intención de prorrogarla por nuevos períodos y pide que la autoridad de la FMP sea traspasada a la MINUSTAH*”⁵⁴⁴. Y posteriormente, el Consejo prorrogó la misión de la MINUSTAH⁵⁴⁵, mientras que la resolución 1658 del 2006, da muestra de la estabilidad que comenzaba a mostrar el pueblo haitiano con el ejemplo de civismo en las

⁵⁴⁰ S/RES/944, del 29 de septiembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; y vid. S/RES/948, del 15 de octubre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴¹ “Decide prorrogar por última vez el mandato de la UNSMIH conforme a lo establecido en la resolución 1063 (1996) y en los párrafos 6 a 8 del informe del Secretario General de 12 de noviembre de 1996, y de conformidad con la solicitud del Gobierno de Haití, hasta el 31 de mayo de 1997, con una dotación de 300 policías civiles y 500 soldados, en el entendimiento de que si el Secretario General informa antes del 31 de marzo de 1997 de que la UNSMIH puede contribuir ulteriormente a los objetivos enunciados en el párrafo 1 supra, se prorrogará nuevamente la Misión, por última vez, hasta el 31 de julio de 1997, tras el examen de la cuestión por el Consejo”, S/RES/1086, del 5 de diciembre del 1996, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴² S/RES/1529, del 29 de febrero del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴³ *Ibidem*.

⁵⁴⁴ S/RES/1542, del 30 de abril del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴⁵ S/RES/1576, del 29 de noviembre del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

elecciones⁵⁴⁶, y así ha reconocido el trabajo que se realizó en la transición y da muestra de su inclinación por las instituciones democráticas de los Estados e insta al gobierno de Préval a cumplir con una agenda destinada a promover los derechos humanos en el territorio⁵⁴⁷.

Luego del terremoto del 12 de enero del año 2010, las resoluciones del Consejo de Seguridad se tornaron hacia la ayuda humanitaria, saliéndose del enfoque de la estabilización política que era la esencia de las anteriores resoluciones del Consejo. Con el propósito de ayudar en los problemas que en el momento estaba enfrentando el pueblo haitiano, se aprueba la resolución 1908 del 2010, la cual aumentó los miembros de la MINUSTAH⁵⁴⁸, solicitando que la MINUSTAH “ *siga colaborando con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el equipo de las Naciones Unidas en el país para apoyar la labor humanitaria y de recuperación, y además alienta a todos los agentes a que sigan participando en la planificación conjunta y la coordinación a nivel nacional y local*”⁵⁴⁹.

Con la resolución 2243, del 2015, del Consejo de Seguridad se puede constatar que aún con sus falencias, la democracia del Estado haitiano se mantenía funcionando aunque habían problemas que preocupaban a la comunidad internacional como era los enfrentamientos entre bandas, que tenían un objetivo puramente delincuencial, por lo que no constituían amenazas políticas que desestabilizaran el sistema, también se muestra preocupación por las violaciones sexuales, así como por las violaciones de derechos humanos, y las muertes de niños en los enfrentamientos de bandas, pero en cuanto al Estado, el mismo se mantenía funcionando sin mayores inconvenientes⁵⁵⁰.

⁵⁴⁶ S/RES/1658, del 14 de febrero de 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴⁷ S/RES/1702, del 15 de agosto del 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴⁸ S/RES/1908, del 19 de enero del 2010, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁴⁹ S/RES/1927, del 4 de junio del 2010, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁵⁵⁰ S/RES/2243, del 14 de octubre del 2015, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; S/RES/2313, del 13 de octubre del 2016, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

III.9.1 Consideración de las decisiones del Consejo de Seguridad sobre el Estado frágil de Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU, en sus decisiones mostró que en los Estados frágiles, el Consejo atendiendo al “mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, interviene con el objetivo de restablecer el orden institucional democrático, así como ha dispuesto una intervención militar con el objetivo único de que regrese al Poder un gobierno elegido de manera democrática. Si bien el Derecho Internacional no regulaba los casos de Estados fallidos y los casos de Estados débiles o frágiles, el Consejo de Seguridad ha realizado ingentes esfuerzos en lo relativo.

Entre las tantas resoluciones del Consejo de Seguridad, las primeras estaban dirigidas a la guarda de los principios democráticos, mientras que luego del 12 de enero del 2010, las resoluciones del Consejo se concentraron en la ayuda humanitaria, pasando a un segundo plano la estabilidad política, pero entendiendo que era fundamental la intervención humanitaria para la estabilidad política.

III.9.2 Las Misiones de la ONU y Haití

La ONUVEH fue la primera misión que la ONU había decidido enviar para Haití, ya que el Secretario General, Pérez de Cuéllar, había replicado el modelo que se había utilizado en las elecciones de Nicaragua con la ONUVEN. Desde entonces comenzó la relación de las Naciones Unidas con el Estado haitiano, pues luego de la elección de Haití en el 1991, la inestabilidad era un asunto que comenzaba a tomar más valor en el seno de la ONU, más en los aspectos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los conflictos bélicos⁵⁵¹.

En la situación haitiana la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU actuaron de manera conjunta, por lo que para 1993 mandaron la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH). Pero, de acuerdo a la situación que se constataba, en septiembre del 1993, se envió para Haití la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), siendo ésta la primera Misión de Mantenimiento de la Paz, pero la UNMIH

⁵⁵¹ MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml>

no encontró colaboración de parte de los líderes políticos gobernantes en Haití, impidiendo que la UNMIH pudiera desplegarse en el territorio⁵⁵².

Luego, a mediados del 1994, el Consejo aprobó el envío de veinte mil efectivos, para que el gobierno considerado como legítimo por la ONU pudiera regresar al Poder, debiendo este promover el Estado de derecho a su retorno. Entre el 1994 y el 2004, la ONU utilizó otras misiones, entre las que estaba la misma UNMIH, la cual pudo desplegarse completamente para el 1995⁵⁵³.

Desde el 1995 al 2001 la ONU utilizó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH), y la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH). Las cuales, según las consideraciones de la propia ONU, tuvieron distintos hechos reputados de positivos, que van desde la regularización de cierto nivel de democracia, simbolizado en el cambio de manera pacífica entre dos presidentes electos por la vía electoral, el fortalecimiento de la sociedad civil y su intervención en el futuro político del país, basados en elementos democráticos, aunque reconocen que hubo muchas situaciones de crisis⁵⁵⁴.

En el 2004, es cuando la crisis empeora por los conflictos que se estaban generando entre el gobierno y la oposición política, que ya había tomado otra manera de oponerse basado en el conflicto armado, lo que llevó a que se ordenara la Fuerza Multinacional Provisional, los cuales debían colaborar con la estabilización del país, y ayudar con la seguridad del territorio haitiano. En abril del 2004, la ONU decide enviar la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), que reemplazó a la Fuerza Multinacional Provisional a inicio de junio del 2004⁵⁵⁵.

La MINUSTAH tenía entre sus objetivos: colaborar con el gobierno de la transición para mantener espacios seguros, colaborar con la reforma de la policía de Haití, promover el desarme de las fuerzas que se articularon en pro y contra del gobierno saliente, mantener

⁵⁵² *Ibidem*.

⁵⁵³ *Ibidem*.

⁵⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵⁵ *Ibidem*; al respecto de la Fuerza Multinacional Provisional vid. TRIPODI, P., VILLAR, A.: "Haití: la encrucijada de una intervención latinoamericana" en *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, año 19, núm. 2005, pp. 17-35.

la seguridad de los miembros de la ONU, también la seguridad de los civiles que estaban en riesgo de ser tocados por la violencia; coadyuvar con los procesos electorales tanto municipales, legislativos y presidenciales para que sean lo más transparente y diáfanos posibles; participar con las autoridades haitianas en la protección de los derechos humanos, y reportar todo lo pertinente sobre los derechos humanos en el país⁵⁵⁶.

Aunque la ONU ha entendido la importancia de las intervenciones que ha tenido en el Estado haitiano, la manera en cómo se han realizado y el plan que han trazado para el desarrollo de Haití, de parte de algunas personas no lo creen el más conveniente⁵⁵⁷, pues se ha entendido que el plan trazado para Haití no es el que mejor se adapte a ellos, por su cultura, estructura política y democracia, lo que incluso han preferido que las Misiones acaben sus intervenciones, y le permitan al pueblo haitiano continuar en su labor de desarrollo.

III.10 El Monopolio del Poder en el Estado frágil de Haití

En el desarrollo del presente capítulo se ha podido ver que Haití ha tenido constantes revoluciones traducidas en golpes de Estado, y ha tenido complicaciones por asuntos como la corrupción y otros males. Pero cuando se analiza la historia haitiana, conjuntamente con las decisiones expedidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, es fácilmente notar que el monopolio de Poder nunca ha sido puesto en juego, excepto en el momento en que se reclamaba la salida del Presidente Aristide, ya que la fuerza opositora resultó en un momento determinado con más Poder que el sostenido por Aristide, aunque esto no es suficiente calificar el Estado como fallido, pues como apunta Herdegen “*un Estado no deja de existir a consecuencia de un golpe de Estado o de una revolución*”⁵⁵⁸.

Por tal, en esas circunstancias para que un Estado pueda ser reputado como fallido es necesario que la confusión en el monopolio del Poder sea constante, como es el caso del Estado de Somalia. En tal virtud, ¿los golpes de Estado serían sinónimo de confusión en

⁵⁵⁶ MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml>.

⁵⁵⁷ GAUTHIER, A., BONIN, P.: “Haití: Las voces de los actores, un proyecto de investigación sobre la Misión de la ONU” en FRIDE, núm. 52; *Haití: soberanía y dignidad, Informe final de la Misión Internacional de Investigación y Solidaridad con Haití*, en http://www.papda.org/IMG/pdf/Rapport_final.pdf

⁵⁵⁸ HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 234.

el monopolio del Poder? La respuesta es No, al menos con respecto a Haití, pues los golpistas mantenían, luego del golpe, el control del Poder, mientras que el Presidente saliente, no albergaba Poder alguno, al menos en lo inmediato.

Esas desavenencias políticas en Haití, muchas veces arrastradas desde el pasado, son signos de las debilidades o fragilidades de un Estado, lo que significa que pudieran devenir en fallido cuando finalmente ocurre una confusión en el monopolio del Poder. Sin embargo, legítimo o no, ha habido un control del Poder en el Estado haitiano.

Otro aspecto del monopolio del Poder en Haití, es que luego de que el Presidente René Préval asumió el Poder en Haití, hubo una estabilidad política, incluso, se podría decir que el Estado se encontraba en vía de salir de la fragilidad, hasta la llegada del 12 de enero del año 2010, cuando ocurrió el terremoto, un punto que hay que tener claro es que los Estados fallidos no son el producto de los acontecimientos naturales, como bien ha acentuado Robert Jackson, por tanto las devastaciones que trajo el terremoto en nada han afectado el monopolio del Poder en el Estado⁵⁵⁹. Incluso en la actualidad, durante el lapso 2015-2016, con la celebración de las elecciones, no se podría decir en modo alguno que ha habido una confusión en el monopolio del Poder, en donde otros grupos ostenten más Poder o igual Poder que el concentrado en el Estado hasta un punto que se desconozca quién es la verdadera autoridad.

Concordando con lo anterior, no es correcta la afirmación de que “con Latortue como nuevo Primer ministro haitiano, con Phillipe controlando con sus fuerzas irregulares algunos de los enclaves más relevantes del país y con Aristide en el exilio, *Haití se convertía en un Estado fallido, un Estado paria de la Comunidad Internacional, tremendamente vulnerable económica, política y militarmente*, que debía recibir de manera inmediata ayuda de la Comunidad Internacional”⁵⁶⁰. Pues incluso en ese momento se procedió según lo que disponía la Constitución haitiana, por lo tanto es muestra de que el monopolio del Poder seguía en pie, y como se había dicho los golpes de Estado no son sinónimos de Estados fallidos, siempre que no se conviertan un letargo eterno de golpes y contra golpes, pues aquí se habría una confusión en el monopolio del Poder.

⁵⁵⁹ Vid. Cap.2.1.

⁵⁶⁰ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A., *op. cit.*, pág. 140

III.11 El monopolio del Poder en Haití, el Consejo de Seguridad y el Secretario General de las Naciones Unidas

En todo lo concerniente al Estado haitiano las resoluciones del Consejo de Seguridad siempre han sido dirigidas a que se pueda mitigar la inestabilidad política, producto de los golpes de Estado originados luego de la muerte de Duvalier padre, lo que ha traído cierta inconsistencia, razón por la que las primeras resoluciones del Consejo eran tendentes al restablecimiento del orden democrático. Sin embargo, ¿se podría afirmar que ha habido una sustitución del monopolio del Poder del Estado haitiano, por un monopolio del Poder del Consejo de seguridad?

Lo primero que se debe tener pendiente, partiendo de las consideraciones realizadas sobre las resoluciones del Consejo es que, hubo siempre una actitud de parte del Consejo, de que para todas las misiones se tomaran en cuenta a las autoridades haitianas, incluso ejemplo de ello es que en principio la UNMIH no pudo desplegar sus efectivos debido a que las autoridades haitianas no estaban colaborando para tal acción⁵⁶¹.

Otro punto a considerar es que, las fuerzas de intervención en Haití, si bien han tenido un repunte persuasivo para el mantenimiento de la paz, no menos cierto es que la calidad de salvadores tampoco la han tenido, pues aún continúan las fuertes violaciones a los derechos humanos, en ese sentido las asesorías mostrada a los líderes políticos no puede ser vista como un arrebato del Poder, como sí ocurrió con la intervención militar estadounidense de República Dominicana en el 1916. En Haití el Poder de decisión siempre ha estado en manos del pueblo haitiano⁵⁶².

El Secretario General en uno de sus informes explica que *“Durante todo el período del que se informa, la situación general de seguridad se mantuvo relativamente tranquila, aunque frágil, con casos esporádicos de disturbios civiles en todo el país vinculados con el proceso electoral”*⁵⁶³. Se puede mostrar que el Estado haitiano no presenta problemas de fallas estatales, sino de fragilidad o debilidad, como da muestra las palabras del

⁵⁶¹ Cf. MINUSTAH, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, en <http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml>

⁵⁶² Vid. S/2011/1540, del 25 de agosto del 2011, del Secretario General de las Naciones Unidas, en este informe se pudo ver que los problemas en Haití no son de índole políticos o ideológicos por la lucha por el poder, incluso los peores problemas que están afectando a la población acuerdo a lo atinente por el informe son procedentes del terremoto del 2010, enfermedades como el VIH, el cólera, entre otros inconvenientes.

⁵⁶³ *Ibidem*, párr. 7.

Secretario General al explicar la situación sobre la seguridad en el Estado haitiano, aunque da muestra de que no es estable como es típico de los Estados que presentan problemas con sus instituciones estatales.

En el informe S/2013/139 el Secretario General manifestó que *“la situación general de seguridad en todo el período que abarca el informe se mantuvo relativamente estable, aunque se caracterizó por un aumento de los disturbios civiles y los delitos graves. Se produjeron frecuentes manifestaciones contra el Gobierno en protesta por la aparente incapacidad de la administración para hacer frente a la anarquía...”*⁵⁶⁴. Este informe también da muestra de la estabilidad en la seguridad del pueblo haitiano, y hace referencia a las protestas en contra del gobierno, debiendo hacerse un paréntesis al respecto; las manifestaciones en contra del gobierno, aunque responden a que el gobierno no está haciendo bien las funciones que se le encomendaron, son una muestra de que el sistema democrático está avanzando. Contrario a ello sería que las protestas se hicieran con armas de fuego o de cualquier otra índole en actitud desafiante a las autoridades gubernamentales, si ese fuese el caso entonces se estaría imponiendo una anarquía, caso que no ocurre acorde al informe del Secretario General, aunque alguna de las manifestaciones hayan generado violencias⁵⁶⁵.

Pero como problemas de su fragilidad es que *“las estadísticas sobre delitos reunidas por la policía nacional y la MINUSTAH revelaron una tendencia al alza en el número de homicidios, con un promedio mensual de 79 homicidios entre septiembre y diciembre de 2012 frente a los 60 registrados en el mismo período de 2011”*⁵⁶⁶. Los informes del Secretario General resultan a ser bastantes interesantes puesto que se toman elementos que tienen que ver con la seguridad en todos los niveles, desde la que tiene que prevenir los crímenes comunes, como aquella que tiene que ver con el puro mantenimiento del orden y la estabilidad, no permitiendo que dicho orden pueda ser confrontado por grupos que, de acuerdo al poder acumulado puedan hacer frente al concentrado por el Estado haitiano.

⁵⁶⁴ S/2013/139, del 8 de marzo del 2013, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párr. 9.

⁵⁶⁵ *Ibidem*.

⁵⁶⁶ *Ibidem*.

Para el siguiente período del 2013, el informe del Secretario General muestra el mismo patrón del comportamiento del Estado haitiano; “La situación general de la seguridad se mantuvo relativamente estable a lo largo del período que abarca el informe y se observó una disminución de los disturbios civiles y los delitos graves”⁵⁶⁷, aunque reconoce que “Se produjeron manifestaciones, vinculadas principalmente a problemas socioeconómicos como la inseguridad alimentaria y la falta de servicios básicos. *La gran mayoría de estas protestas fueron pacíficas*”⁵⁶⁸.

Para el primer reporte del 2014 el Secretario General informó que “*la situación general de la seguridad en todo el período que abarca el informe siguió siendo estable. Las estadísticas sobre delitos reunidas por la Policía Nacional y la MINUSTAH mostraron una leve tendencia a la baja de los delitos graves en comparación con el período del año anterior*”⁵⁶⁹.

Como ejemplo de la debilidad aún imperante en el Estado haitiano el Secretario General comunicó que “el promedio mensual de violaciones denunciadas mostró un ligero aumento, 33,8 frente a 30,5 durante el período del informe anterior”⁵⁷⁰. Para el período el funcionamiento de la Policía Nacional continuó en constantes mejoras, puesto que la MINUSTAH se había retirado de cuatro departamentos y la situación en tales departamentos se mantenía estable, pero había algunas situaciones en que cuando la policía fue sometida a presiones se vio en la necesidad de acudir a la MINUSTAH para el apoyo operacional⁵⁷¹.

En el factor justicia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití siguió con la ejecución del plan para el periodo 2013-2016, poniéndose atención a las infraestructuras, también tuvo siguió con el proyecto de mejora de la justicia penal en la definición de políticas para combatir la delincuencia y determinar los mecanismos necesarios para el procesamiento de los hechos delictivos. El proyecto del 2013-2016 también prevé la creación de un instituto de medicina forense, como un brazo importante de la justicia, incluyéndose el modo de financiación del mismo en el presupuesto 2013/14⁵⁷². También

⁵⁶⁷ S/2013/493, del 19 de agosto del 2013, del Secretario General de las Naciones Unidas, párr. 9.

⁵⁶⁸ *Ibidem*, párr. 9.

⁵⁶⁹ S/2014/162, del 7 de marzo del 2014, del Secretario General de las Naciones Unidas.

⁵⁷⁰ *Ibidem*, párr. 11.

⁵⁷¹ *Ibidem*, párr. 13.

⁵⁷² *Ibidem*, pág. 35.

se han mantenido trabajando sobre la autonomía del poder judicial, como medio necesario para lograr el Estado de Derecho en Haití⁵⁷³.

El sistema penitenciario seguía cambiando, mejorando en su parte administrativa, lo que trajo como consecuencia que se redujeran los casos de las detenciones ilegales viabilizando los procesos, para que sean más expeditos y evitar las prisiones prolongadas, lo que produjo que se pusieran en libertad a 215 individuos que guardaban prisión desde el mes de diciembre del 2013, por igual los derechos de la salud también entraban en mejoría debido a un acuerdo entre los prisioneros y el Ministerio de Salud Pública⁵⁷⁴.

El segundo informe del año 2014 mostró que en los asuntos políticos se había firmado el Acuerdo de El Rancho, luego de un proceso de entendimiento que tuvo como mediador a la Conferencia Episcopal de Haití, del cual participaron los órganos ejecutivos, legislativos y las asociaciones políticas. Haciéndose hincapié en que el resto del periodo transcurrió en negociaciones entre el ejecutivo y el legislativo para la aplicación del Acuerdo de El Rancho, especialmente para el establecimiento de un órgano electoral, así como la aprobación de una ley electoral, las cuales debían ser aprobadas tiempo antes, ya que eran las bases de las elecciones locales y legislativas⁵⁷⁵.

Con la seguridad se informó que “se mantuvo relativamente estable, en particular en los cinco departamentos abandonados por el componente militar de la MINUSTAH (Grand-Anse, Nippes, Sur, Sudeste y Noroeste)”⁵⁷⁶. Según las estadísticas que tenía la MINUSTAH y la policía haitiana los secuestros se encontraban en descenso, pues bajaron un 74% en equiparación con el mismo período del 2013, siendo producto de que la policía había actuado en contra de redes de secuestros durante los últimos dos años. Pero hubo un crecimiento de un 24% de los homicidios equiparándolo al primer periodo del 2013, mientras que también el número de violaciones se mantenían ligeramente en crecimiento⁵⁷⁷.

El mismo Secretario General afirma que el “aumento en el número de homicidios confirma que, si bien la situación general de seguridad sigue siendo relativamente estable,

⁵⁷³ *Ibidem*, párr. 34.

⁵⁷⁴ *Ibidem*, pág. 36.

⁵⁷⁵ S/2014/617, del 29 de agosto del 2014, del Secretario General de las Naciones Unidas, párr. 2.

⁵⁷⁶ *Ibidem*, párr. 11.

⁵⁷⁷ *Ibidem*, párr. 11.

continúan habiendo deficiencias subyacentes debido a la debilidad de las instituciones del Estado”⁵⁷⁸, el Secretario señala signos de debilidad de un Estado, pero no de una debilidad que lo lleve a la falla, pues hincapié en las “instituciones del Estado”, como un medio de que a través del fortalecimiento de las mismas se pueda salir de las debilidades del Estado. A su vez, expone dos situaciones que no ayudan al Estado, “la incertidumbre política y el gran número de haitianos que viven en la extrema pobreza”⁵⁷⁹, pero también son rasgos de que la policía nacional tiene un gran reto de hacerle frente a la delincuencia que se concentra en algunos barrios, a causa de la falta de personal, así como de los equipos necesarios para contrarrestar tal flagelo⁵⁸⁰.

El primer informe del 2015, resalta que no se pudieron celebrar las elecciones legislativas, municipales y locales, las cuales se demoraron bastante, llevando a que en fecha 12 de enero del 2015, el parlamento no continuara con sus labores, en tal virtud el Presidente Martelly ha hecho uso de las disposiciones constitucionales para que las instituciones pudieran seguir avanzando. Sin embargo, se realizaron distintas consultas a las partes envueltas por el proceso electoral por lo cual se creó una comisión que debía asesorar al Presidente, para que se hicieran las recomendaciones de lugar a fin de concertar al respecto, y se atendiera a otros acuerdos entre los tres órganos que detentan el Poder Público del Estado, y entre el Presidente de la República y los partidos políticos⁵⁸¹. Si bien no se pudieron celebrar las elecciones en el tiempo pautado, las consultas solucionaron muchos de los problemas⁵⁸².

La seguridad se mantenía en los mismos niveles de “estables, aunque se registró un repunte de determinados delitos, violencia relacionada con bandas y disturbios públicos”⁵⁸³. En ese periodo se produjeron dos fugas relevantes, el día 20 de septiembre salieron del recinto penitenciario de Cap-Haïtien cinco presos y el 30 de noviembre salieron 34 del recinto penitenciario de Saint-Marc. Según los datos de la MINUSTAH la delincuencia seguía en incremento, pues los homicidios se habían incrementado, los cuales en su mayor parte tenían su causa en el enfrentamiento entre bandas, y los cuales

⁵⁷⁸ *Ibidem*, párr. 12.

⁵⁷⁹ *Ibidem*, párr. 12.

⁵⁸⁰ *Ibidem*, párr. 12.

⁵⁸¹ *S/2015/157, del 4 de marzo del 2015, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas*, párr. 2..

⁵⁸² *Ibidem*, párr. 2.

⁵⁸³ *Ibidem*, párr. 11.

se centraban en el área urbana de Puerto Príncipe. También en lo que toca a los secuestros, los mismos aumentaron considerablemente de 15 a 29 secuestros, aumento que es achacado a los presos que se fugaron de las referidas cárceles, mientras que las violaciones se mantuvieron siguiendo el mismo ritmo anterior⁵⁸⁴.

Como actos vandálicos se registraron un número estimable de protestas públicas, con algunos que otros aspectos de violencia que iban desde las barricadas en las carreteras, así como el uso de piedras para arrojarlas a los agentes de la policía nacional, así como múltiples tiroteos, y destrucción de bienes⁵⁸⁵. La policía también mostraba mejoría en el control de masas, pues recibieron entrenamiento para el control de masas por parte de la MINUSTAH, y un dato interesante es que en la gran mayoría de las protestas violentas, la policía pudo hacerle el frente sin la necesidad de contar con las tropas de la MINUSTAH⁵⁸⁶.

Para el último informe del 2015, la seguridad continuaba *“en general estable y fue mucho más tranquilo y menos violento que en los anteriores ciclos electorales. No se registraron aumento de la inseguridad ni la violencia en los departamentos de los que se retiró el componente militar”*⁵⁸⁷. En cuanto a la delincuencia, los homicidios habían disminuidos respecto al informe anterior, siendo interesante el hecho de que el 74% de los homicidios se había cometido en la zona urbana de Puerto Príncipe, y en un gran número respondían a los enfrentamientos entre bandas, mientras que los secuestros seguían relativamente igual, lo mismo ocurría con las violaciones, que tenían prácticamente la misma cantidad⁵⁸⁸.

En sentido general, los informes del Secretario General muestran el imago mundi del Estado haitiano, dónde se encuentra en estos momentos, pero también hacia dónde se dirige, los datos ofrecidos dan muestra de un Estado que tiene ciertamente instituciones bastantes frágiles, pero también de un Estado que tienen instituciones que funcionan, por lo que no puede ser considerado como fallido. Aunque, la fecha de celebración de elecciones es algo que no puede ocurrir en un Estado, cuando hay tantas contrariedades

⁵⁸⁴ *Ibidem*, párr. 11.

⁵⁸⁵ *Ibidem*, párr. 12.

⁵⁸⁶ *Ibidem*, párr. 13.

⁵⁸⁷ S/2015/667, del 31 de agosto del 2015, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, párr. 15.

⁵⁸⁸ *Ibidem*, párr. 16.

políticas, la falta de concretizarse el certamen electoral no puede llevar a que se afirme que un Estado es fallido, pues incluso el Estado haitiano ha tenido la madurez suficiente como para ir resolviendo cada uno de los impases que se la han ido presentando, y muy adecuadamente la búsqueda de la concertación política, como un elemento esencial que pueda sacar al Estado haitiano de la debilidad.

III.12 Amenazas sobre la fragilidad de Haití

¿Hasta dónde llega la amenaza de la debilidad o fragilidad del Estado haitiano respecto a los demás Estados vecinos? Hasta el momento Haití tiene las mismas amenazas que puede tener cualquier Estado considerado en vías de desarrollo o que ha tenido una crisis muy pronunciada. Es decir, su principal problema de amenaza es la migración, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el flujo migratorio en Haití aumento luego del terremoto del 12 de enero del 2010, considerando que hubo cerca de un millón quinientas mil personas desplazadas. Entre la población haitiana en el extranjero el 67.4% radica en los EE.UU, mientras que un 12.4% está en la República Dominicana, un 6.8% en Canadá, un 5.4% en las Antillas Menores, un 2.7% en Francia, un 2.0 distribuido entre algunos Estados de América Latina, la Bahamas un 1.3%, la Guyana un 1.3% y en África un 0.7%⁵⁸⁹.

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones manifiesta que para el 2012 cerca de 458,000 haitianos estaban en la República Dominicana, mientras que más de medio millón de haitianos se encontraban en los Estados Unidos, y que muestra que otros destinos también preferidos por el pueblo haitiano es Canadá, Francia, Islas Bahamas, Curacao, la República Bolivariana de Venezuela, Bélgica, Suiza y Países Bajos, categorizando el estudio que la migración desde Haití está siendo subestimada, debido a que hay una falta de datos al respecto, destacando que la migración entre Haití y la República Dominicana es sumamente difícil de cuantificar, debido a la vulnerabilidad de las fronteras entre ambos países⁵⁹⁰.

⁵⁸⁹ <https://www.iom.int>

⁵⁹⁰ *Catastrophes, Changements, Environnementaux et migration*, Union européenne, United Nations University, Organisation Internationale pour les migrations, pág. 4.

La migración haitiana sur-norte hasta el momento no ha tenido ningún tipo de inconvenientes, tampoco la migración haitiana sur-sur, siendo su mayor flujo hacia la República Dominicana, en donde la mano de obra haitiana se ha enfocado en el sector de la construcción, así como en el sector agrícola y en los ingenios azucareros, los cuales han dejado muestra de buenos aportes⁵⁹¹. En sentido general, hasta el momento, la migración haitiana no ha traído las amenazas que sí puede tener un Estado calificado de fallido.

III.13 El Estado frágil de Haití y el Estado fallido de Somalia: consideraciones sobre la región de Latinoamérica

Haití es el Estado más pobre y con mayores problemas de desarrollo humano de América Latina debido a las situaciones que se han planteado, mientras que Somalia es el Estado que más problemas presenta en África, pero también en cuanto a su estatalidad es el único Estado que se podría decir que es fallido. Cuando se realiza un simple ejercicio de los problemas que han tenido, el monopolio del Poder y las amenazas que representan para la comunidad internacional, es más que simple notar que el Estado haitiano no está en las condiciones de Somalia, por tanto no se le puede endilgar el calificativo de fallido sino de débil o frágil.

Sin embargo, la debilidad o la fragilidad mostrada no quiere decir en modo alguno que no pueda alcanzar la falla estatal, pero sin embargo en la actualidad no se podría decir que Haití muestre rastros de un Estado fallido, como será una delincuencia que llegue a unos niveles que afecte por sí misma a los países vecinos, especialmente a la República Dominicana, por compartir la isla, lo que no ocurre.

Lo interesante en esto es que, Haití es el Estado con más problemas de desarrollo humano de la región, y sin embargo este no se puede comparar con el Estado de Somalia, ya que éste sí representa un ejemplo de lo que es un Estado fallido. Por ende, el entender que los Estados de Latinoamérica son fallidos resulta ser hasta contraproducente, pues si Haití, con inconvenientes de estabilidad, no es asimilable a Somalia, mucho menos lo son los

⁵⁹¹ Cf. *Condición y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana*, Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA)/Consultores Económicos Financieros y Organizacionales (CEFINOSA), 2012.

demás Estados de la región. En ese sentido, los informes de la FFP, no se ciñen sobre la realidad estatal, sino sobre un enfoque que se podría catalogar de populista.

Incluso en la crisis haitiana, muchos de los efectivos que se encuentran formando parte de la MINUSTAH son de países de Latinoamérica, lo que es evidencia que dichos países tienen la capacidad de extender parte de su estabilidad estatal. Uno de los países que fue reputado como fallidos por la FFP, fue la República Dominicana⁵⁹², y es el lugar hacia donde se dirige la migración haitiana hoy en día, aunque muchas veces por el factor de la cercanía y la fragilidad de las fronteras. El hecho de que la migración de un Estado frágil se dirija al territorio de otro Estado es porque las condiciones de vida en ese Estado suelen ser mejor que las del Estado que dejan tras sí, esto utilizando la comparación como método, en tal sentido, si no se puede calificar a Haití como un Estado fallido, sino frágil o débil, entonces ¿se podría calificar a la República Dominicana como un Estado fallido o frágil?

El análisis comparativo de Somalia y Haití, resulta ser obligatorio si se quiere entender a qué se hace referencia cuando se habla de Estados fallidos y a qué se hace referencia cuando se habla de Estados débiles. No puede haber una teoría de los Estados fallidos que menosprecie las condiciones del Estado de Somalia, pues sería completamente infundada, y al tiempo que configuraría un concepto muy genérico, como los que se suelen utilizar popularmente en los medios de comunicación.

El uso de tildar a los Estados de manera genérica como fallidos por situaciones que resultan ser pasajeras no es adecuado, máxime cuando el calificativo de “fallido” está siendo usado en la política exterior de los EE.UU, como una manera de observar puntos que pueden resultar estratégicos para albergar terroristas y por ende serían posibles objetivos de conflictos; lo fallido no viene a ser un mero juego de palabras, sino que tiene que volver a apuntar a aquello que le dio vida, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.

⁵⁹² Cf. *Informe de los Estados fallidos del 2005*, op. cit.

III.14 El Consejo de Seguridad y la disolución de los Estados fallidos: caso Somalia

Como se ha visto en los Capítulos I y II de la presente investigación el Derecho Internacional no ha previsto ninguna fórmula atinente a los Estados fallidos. Sin embargo, las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, llenan un gran vacío al respecto. Aunque el Consejo de Seguridad ha enviado Misiones tanto en Somalia como en Haití, que pueden ser consideradas como violatorias a la soberanía del Estado, sin embargo, las causas que amparan al Consejo están fundamentadas en el título VII de la Carta de San Francisco.

En tal virtud, de manera general el Consejo ha intervenido por violaciones de asuntos humanitarios, derechos humanos, restablecimiento de regímenes democráticos, amparados en el “mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, lo que es muestra de que el derecho a la libre determinación de los pueblos tiene sus límites en estos factores. Pero hasta el momento el Consejo nunca ha tomado la decisión de declarar un Estado extinguido, incluso, ha dado muestra en sus resoluciones de que respeta la soberanía del Estado, sólo interesándose por el buen funcionamiento del Estado, independientemente de que se pueda criticar el accionar de la Misiones, y ese respeto es tal que Somalia perfectamente es subsumible en lo que expresa Herdegen, *“en el caso en que existe evidencia demostrable de una pérdida definitiva del poder, o de otras características del Estado, el Estado desaparece”*⁵⁹³, mas, el Consejo confía en el desarrollo de los Estados.

La ONU ha creído tanto en el desarrollo de los Estados, que el Secretario General ha manifestado, aprendiendo de las lecciones pasadas de las Misiones, y hablando sobre el caso específico de Somalia que según el estatus de la organización internacional del derecho internacional, no es recomendable tratar de salvar ningún Estado considerado de fracasado en contradicción con la voluntad política y la dirigencia del país, debiendo incluso mediar el uso de la fuerza sin el consentimiento del Estado que está afectado, lo cual era permitido por ONUSOM II, es preferible cooperar en los procesos en donde exista un consenso de la población como elemento fundamental para superar la situación

⁵⁹³ HERDEGEN, *op. cit.*, pág. 80.

del fracaso⁵⁹⁴. Dejando muy en claro que la responsabilidad última recae sobre las autoridades y el pueblo mismo de Somalia⁵⁹⁵.

Somalia se adecúa perfectamente a la definición acuñada por Jiménez Piernas de que “*los Estados fracasados son aquellos en los que ha desaparecido precisamente el elemento constitutivo del Estado, es decir, la organización política o gobierno, encargado de cumplir las funciones del Estado tanto en el orden interno como en el orden internacional*”⁵⁹⁶, pero muy especialmente “*en esos Estados no hay gobierno o el que existe no ejerce de hecho el monopolio de la violencia o poder de coerción, que suele compartir o quedar en manos de diferentes grupos o facciones enfrentados entre sí*”⁵⁹⁷. Al perder el monopolio de la violencia o la fuerza el Poder, el gobierno no tiene efectividad para la preservación del orden público y de expresarse a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado⁵⁹⁸.

Ciertamente estos Estados tienen grados de descomposición⁵⁹⁹, y por ello el esfuerzo que se hace en que los Estados puedan ir desarrollando sus instituciones, sin embargo contrario a lo que piensa el profesor Jiménez Piernas, lo aludido por él mismo, sólo es aplicable al Estado de Somalia, no así, a otros Estados a los que hace alusión el índice de Estado fallidos o frágiles que realizó la FFP y que viene realizando desde el 2005.

⁵⁹⁴ JIMÉNEZ PIERNAS, C., Los Estados fracasados y el derecho... pp. 44-45.

⁵⁹⁵ *Ibidem*, pág. 45.

⁵⁹⁶ *Ibidem*, pág. 51.

⁵⁹⁷ *Ibidem*, pág. 51.

⁵⁹⁸ *Ibidem*, pág. 51.

⁵⁹⁹ *Ibidem*, pág. 51.

CAPÍTULO IV. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS CONFIGURADOS EN LA FÓRMULA INTERNA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado como base las intervenciones en los Estados partiendo de las transgresiones a los derechos humanos y a los principios democráticos⁶⁰⁰. Lo cual muestra la relevancia que los mismos tienen en el derecho internacional y en la comunidad internacional. Se entiende que el ESDD no mide la ausencia del monopolio del Poder para la generalidad de los Estados, sin embargo para los Estados que han elegido la forma democrática ese ESDD es un buen parámetro para demostrar que un Estado no es fallido, debido a las actividades que realiza para la consecución de los valores, principio y reglas que inspiran ese ESDD.

Tanto para el trato de la democracia como para los derechos humanos, con atención especial a los derechos sociales, se recurrirá a los lineamientos de los tratados internacionales y al derecho constitucional, pues los mismos fueron desarrollados especialmente en el plano interno, trasladándose posteriormente al plano del derecho internacional, como lineamientos a seguir por los gobiernos de los Estados⁶⁰¹. En el presente capítulo sólo se expondrán los derechos, principios y procesos que le son exigidos a los Estados.

IV.1 El monopolio del Poder y los principios democráticos

La forma de Estado basada en la democracia requiere un conjunto de procedimientos, los cuales exigen que haya un control del Poder del Estado a través de sus instituciones, nivel en el cual la legitimidad sí tiene importancia. Es decir, para la celebración de elecciones, convocatorias de los partidos políticos, transparencia en el funcionamiento del sistema

⁶⁰⁰ Cf. S/RES/940, del 31 de julio del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁶⁰¹ Thürer hablando sobre la resolución 841 (1993) del 16 de junio del 1993 manifiesta que el Consejo de Seguridad “declaró que una forma de gobierno irreconciliable con los principios democráticos constituye una amenaza para la paz, en virtud del artículo 39 de la Carta. Así pues, en línea con la reciente práctica extendida del Consejo de Seguridad, puede darse por sentado que el mero hecho de la existencia de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos o de flagrantes violaciones del principio de la democracia interna son suficientes para permitir la intervención por la fuerza del Consejo de Seguridad en los asuntos internos de un Estado...”, THÜRER, D., *op. cit.*

electoral, la garantía de los derechos civiles y políticos los tribunales contenciosos electorales, es necesario que haya un control del Poder.

Por tal razón, cuando se evalúan indicadores de los derechos humanos y los principios democráticos se toca en parte el monopolio del Poder, por ello, si los resultados de una evaluación revelan que la democracia y la protección a los derechos humanos, aunque de manera imperfecta, están funcionando es porque no hay una anulación de ese monopolio del Poder, puesto que como se ha dicho el cumplimiento de los procesos democráticos requiere de un control del monopolio del Poder, y como ejemplo de ello, es que la debilidad que presenta el Estado haitiano, le ha impedido en varias ocasiones celebrar las elecciones en el tiempo reglamentado⁶⁰².

En concordancia con lo anterior, como los países de la región de Latinoamérica han asumido la forma democrática de Estado, y atendiendo a que cada día las resoluciones de los órganos de decisión de la ONU asumen la democracia como el modelo más adecuado para el individuo, la evaluación de algunos indicadores sobre los principios democráticos, arrojaría resultados de que los Estados de Latinoamérica no tienen problemas con el monopolio del Poder, y por tanto, no podrían ser Estados débiles y muchos menos fallidos.

Debiéndose aclarar, como a lo largo de la investigación se ha hecho, que un resultado cero en la evaluación de los indicadores es sinónimo, en los Estados democráticos, que hay debilidad del Estado, pero no necesariamente que sea fallido, pues los indicadores del monopolio del Poder, deben ser distintos a los que exige el ESDD, midiendo sencillamente ese monopolio de la fuerza. Sin embargo, es lógico que tenga relación con los indicadores de los principios democráticos debido a que cualquier decaimiento en el uso de la fuerza por parte del Estado se notará en las actividades del mismo.

IV.2 El derecho internacional y los principios democráticos

Aunque el derecho internacional no obliga a los Estados a asumir una forma democrática, no menos cierto es que los organismos de la ONU han mostrado gran interés para que los

⁶⁰² Vid. Cap. 3.8

Estados tengan una estructura democrática⁶⁰³. Sin embargo, cuando se busca en el derecho regional americano, sí se encuentran obligaciones de asunción de la democracia. Por ello, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa entre los motivos que inspiran la Carta que “Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, teniendo entre sus propósitos “*Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención*”⁶⁰⁴, y se reafirma como principio que “la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”⁶⁰⁵, y “La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados Americanos”⁶⁰⁶, en cuanto a la suspensión de los Estados en la participación de las sesiones de la Asamblea de la OEA se prevé que “la facultad de suspensión solamente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado”⁶⁰⁷, y “La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa...”⁶⁰⁸, y como parámetros a seguir en pro de los derechos humanos y la democracia la Carta señala que “los Estados miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso”⁶⁰⁹, y como funciones del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral se encuentra promover programas basados en el “Fortalecimiento de la conciencia cívica de

⁶⁰³ Cf. Resolución S/RES/841 (1993), de 16 de junio de 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

⁶⁰⁴ Artículo 2.B, de la Carta de la Organización de Estados Democráticos (OEA).

⁶⁰⁵ Artículo 3.D, *ibidem*.

⁶⁰⁶ Artículo 3.F, *ibidem*.

⁶⁰⁷ Artículo 9.A, *ibidem*.

⁶⁰⁸ Artículo 9.D, *ibidem*.

⁶⁰⁹ Artículo 47, *ibidem*.

los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana”⁶¹⁰.

No obstante, desde la misma Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre ya se manifestaba el interés de la comunidad americana de que el tipo de gobierno que se eligiera en la región fuera de índole democrático⁶¹¹. La aprobación de la Carta Democrática Interamericana representa el punto más elevado de la asunción de la democracia, en la misma se expresa que “*Los pueblos de América tienen derecho a la democracia*”⁶¹², “*La democracia representativa es el sistema político de los Estados de la Organización de los Estados Americanos, en el que se sustentan sus regímenes constitucionales y el Estado de derecho*”⁶¹³, estableciendo como elementos primordiales de la democracia representativa “*la celebración de elecciones libres y justas como expresión de la soberanía popular, el acceso al poder por medios constitucionales, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales*”⁶¹⁴. Como motivo de la aceptación de la Carta Democrática Interamericana, la Misión Permanente de la República Dominicana manifestó:

La Carta Democrática Interamericana es un gran aporte de la Organización a la tarea de preservar y fortalecer la democracia en el hemisferio. Esto reafirma que la OEA está llamada a jugar un rol fundamental en este sentido, no sólo por ser un compromiso contenido en su carta Constitutiva, sino constituir el foro hemisférico idóneo para debatir los temas de carácter político y social.

La lucha contra la pobreza, el fortalecimiento del sistema de derechos humanos, la preservación de la institucionalidad democrática y la promoción de una cultura democrática quedaron plasmados en la carta Democrática como esenciales para la consolidación de la democracia.

A diez años del compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, se dio un paso importante en el camino hacia la modificación de la Carta Constitutiva de la OEA. No cabe duda que la Carta

⁶¹⁰ Artículo 95.C.3, *ibídem*. Asimismo vid. artículos 2.G, 31 y 45.F, *ibídem*.

⁶¹¹ “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” y “Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático”, artículo 29, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

⁶¹² Artículo 1, de la Carta Democrática Interamericana.

⁶¹³ Artículo 2, *ibídem*.

⁶¹⁴ Artículo 3, *ibídem*.

Democrática Interamericana contiene elementos que en el futuro podrán ser considerados para la elaboración de un Protocolo Modificadorio de la Carta de la OEA. Al respecto, vale destacar la introducción del concepto del desarrollo progresivo del derecho internacional en uno de los párrafos de la parte considerativa de la Carta Democrática⁶¹⁵.

En lo atinente el Dr. Hugo Tolentino Dipp, entonces canciller dominicano manifestó que:

Hemos dado nuestro voto aprobatorio a esta resolución, consciente de que una justa interpretación de este documento a la luz de los principios de la Carta de la OEA, constituirá una garantía para la promoción, el perfeccionamiento y la defensa de la democracia en las Américas. Si hacemos mención de la Carta de la Organización se debe a que ella es, sin lugar a dudas, la armazón fundamental del sistema de convivencia de las Américas *y porque ella enfatiza la seguridad de que cualquier acción en contra de cualquier atentado contra la democracia estará inspirada en una conducta que respetará valores, como los de soberanía y no intervención, que no le son ni le deben ser contradictorios*⁶¹⁶.

Para los Estados de América la democracia como modelo de Estado y gobierno es una obligación, mientras que la misma se establece como un derecho para los individuos de los pueblos americanos. Sin embargo, cuál es esa democracia a la que hace referencia el sistema interamericano, y cuáles elementos la componen.

IV.3 Concepto de Democracia

Una manera simple que se ha usado para definir la democracia es atendiendo a la etimología del término, cuyo origen viene del griego, el cual se descompone en dos palabras, demos que significa pueblo, y el kratos, que obedece a la autoridad o kratein que significa gobernar. Para algunos la expresión apareció en el siglo V, durante el mandato de Pericles, y se le acuña su uso por vez primera a Tucídides, al señalar el régimen de Atenas en la Historia de la Guerra del Peloponeso, aunque no se tiene certeza sobre este aspecto⁶¹⁷.

En la actualidad la democracia ha chocado con innumerables inconvenientes, siendo uno de ellos el que plantea Giovanni Sartori al disponer que: "...la democracia tiene, en primer lugar, una definición normativa; pero de ello no se concluye que el deber ser de la

⁶¹⁵ Carta Democrática Interamericana, documentos e interpretaciones, Organización de los Estados Americanos, Washington, 2003, pág. 327.

⁶¹⁶ *Ibidem*, pág. 328.

⁶¹⁷ DALLA VÍA, A. R. (2006): *Teoría política y constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pág. 31.

democracia sea la democracia y que el ideal democrático defina la realidad democrática. Es un grave error cambiar una prescripción por una verificación; y tanto más frecuente sea el error, tanto más las democracias quedan expuestas a malentendidos y trampas”⁶¹⁸.

Lo que expone Sartori es una fórmula para buscar una definición adecuada de la democracia con la cual los sistemas políticos y los doctrinarios puedan encontrar mejores herramientas que fortalezcan el sistema democrático, evitando que la definición utópica pueda robarse los elementos que conforman la democracia en la actualidad, pero a su vez, impide que la realidad de la democracia no tome en consideración sus aspiraciones finales y con ello, sus metas y objetivos. Desde aquí cobra un gran valor la búsqueda de Sartori, pues cuando se deja de ver ambas consideraciones lo que se obtiene es un producto bastante malo y tuerto.

En el mismo tenor, Alain Touraine trata de mostrar que la democracia tal cual se conoce ahora tiende a ser engañosa y frágil, puesto que pondera una serie de elementos que cuando se profundiza en ellos no dejan de ser una mera imagen, a lo que Touraine alienta a la investigación de lo que se conoce como democracia y la realidad de la misma, puesto que parte del hecho del ser de la democracia, y no del deber ser de la democracia⁶¹⁹.

Por Igual, Norberto Bobbio reconoce esto cuando cita que “este escrito representa las transformaciones de la democracia dentro de la línea de las “falsas promesas” o de la diferencia entre la democracia ideal como fue concebida por sus padres fundadores y la democracia real como la que se vive, con mayor o menor participación, cotidianamente”⁶²⁰. Bobbio hace referencia a su libro *el futuro de la democracia*, estableciendo lo que también estatuyen otros escritos sobre la democracia ideal y la democracia real.

Asimismo, Bobbio establece lo que es una “definición mínima de democracia” y dispone que: “se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación

⁶¹⁸ SARTORI, G. (1993): *¿Qué es la democracia?* Tribunal Federal Electoral, México D. F., Pág. 4; Vid. DAHL, R.: “La democracia” en *PostData*, núm. 10, pp. 11-55, 2004, pp. 1 y ss.

⁶¹⁹ Cf. TOURAINE, A. (2004): *Qué es la democracia*, Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid.

⁶²⁰ BOBBIO, N. (1983): *El Futuro de la democracia*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, D. F., pp. 7-8.

posible de los interesados”⁶²¹. Dicha definición para muchos quizás se quedaría un poco corta y se podría decir que sí, y tal vez tampoco cumple con la parte de qué debería ser una democracia, pero no menos cierto es que pone un punto de referencia para discriminar qué es antidemocrático y qué es democrático, por ello Bobbio habla de definición mínima, o sea de la cual se puede partir.

Dalla Vía asume la postura de Bobbio encontrando que la democracia “se identifica, en una primera aproximación, con un procedimiento de toma de decisiones de carácter complejo y formal que regula, a través de mandatos normativos, el modo de convivencia y el comportamiento de los integrantes de una comunidad”⁶²².

La democracia por ende instauro un sistema coherente donde hay reglas claras de juego y jugadores que deben obedecer las normas planteadas en la democracia, en el cual los jugadores se agrupan en las instituciones de los partidos políticos, como el medio más calificado actualmente para alcanzar el Poder. La lucha entre partidos ha de ser lo más transparente posible, pues el fin último es que quien alcance el Poder sea quien más haya calado en la aceptación del pueblo, y como consecuencia se elija a quien por mayoría resulte electo.

Estas reglas de la democracia traen un punto consigo asociado a la legitimidad de los resultados electorales, que se concretiza por la “transparencia” que debe existir en la competencia entre los partidos políticos, pues si no existe ese elemento distintivo de la democracia, tampoco existirá la misma, ya que es la transparencia en las normas pautadas que vendrá a legitimar todo lo ocurrido en el juego democrático.

IV.3.1 Democracia y República

La democracia y la república son dos conceptos que se han confundido a lo largo de la historia, incluso han llegado a puntos de contradicción e incompatibilidad. Pues, la democracia en los tiempos de las ciudades estados no era vista como se observa en la actualidad, sino que esa democracia era calificada como “pura”, por el hecho de que los ciudadanos participaban de manera activa en los procesos de toma de decisión.

⁶²¹ *Ibidem*, pág. 9.

⁶²² DALLA VÍA, A. R., *op. cit.*, pág. 31.

Sartori especifica que la palabra democracia fue usada por Herodoto, y desde entonces en la historia se puede partir para determinar el tiempo que duró la democracia en las antiguas ciudades griegas, al tiempo que aduce que con la desaparición de la democracia en las ciudades estados también desapareció el concepto y que transcurrió casi dos mil años para que el término se usara otra vez. Por lo que en todo el transcurrir hubo una serie de confusiones entre los términos de república y democracia, en el que se entendía que el término democracia implicaba un mal gobierno o un gobierno de unos pocos, mientras que el vocablo república era entendido como el gobierno de todos⁶²³.

Madison en la carta X, del Federalista expresa que “una democracia pura, por la que entiendo una sociedad integrada por un reducido número de ciudadanos, que se reúnen y administran personalmente el gobierno, no puede evitar los peligros del espíritu sectario”⁶²⁴. Al establecer lo de democracia pura hace referencia a la democracia directa de la Atenas; a su vez, dispone que “una república, o sea, un gobierno en que tiene efecto el sistema de la representación, ofrece distintas perspectivas y promete el remedio que buscamos”⁶²⁵.

Este parecer de Madison en su contexto no puede entenderse como una detracción a la democracia pura, sino más bien, como un análisis del por qué el gobierno del entonces naciente Estados Unidos debía ser correspondido con un gobierno republicano, y esto debido al tamaño de la nación y a su diversidad cultural, y en cuyas conclusiones entiende que para esa nación lo más recomendable es la república, pues impediría que los pocos gobiernen y se impongan de mala manera sobre los demás. Por ello Madison expresa que “las dos grandes diferencias entre una democracia y una república son: primera, que en la segunda se delega la facultad de gobierno de un pequeño número de ciudadanos, elegidos por el resto; segunda, que la república puede comprender un número más grande de ciudadanos y una mayor extensión de territorios”, mientras que Madison expone sobre la República que “...debe observarse que por pequeña que sea una república sus representantes deben llegar a cierto número para evitar maquinaciones de unos pocos”⁶²⁶.

⁶²³ SARTORI, G., *op. cit.*, pág. 146.

⁶²⁴ HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., *El Federalista*, en https://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/hamilton__alexander-el_federalista.pdf

⁶²⁵ Al respecto Bobbio dispone que “Los escritores democráticos de fines del siglo XVIII contraponían la democracia moderna (representativa) a la democracia de los antiguos (directa)”, vid. BOBBIO, N., *op. cit.*, pp. 7-8.

⁶²⁶ *Ibidem*.

Se debe destacar que; en un primer plano la masa de ciudadanos en Atenas ascendía entre 30 a 35 mil personas sobre una población de trescientos (300) mil, lo que muestra que la democracia que se realizaba en la ciudad estado tenía un significado restringido de los que podían gozar del privilegio de ser ciudadanos, y como tal entrar al juego de elegir y poder ocupar un lugar en algún órgano público de la ciudad. Al respecto se expresa que las ciudades estados no pueden ser consideradas de dicho modo, puesto que se estaría cometiendo un error por el hecho de que el estado en esas ciudades aún no cumplía con las estructuras que lo podían definir, y que esas ciudades deben ser llamadas como ciudad comunidad, puesto que no hay una relación de los gobernantes con los gobernados, amén de que el término de “Estado” aparece por vez primera en el siglo XVI con Nicolás de Maquiavelo⁶²⁷.

Empero, se puede afirmar que quizás no sea de todo cierto, puesto que como muchos estados modernos, resulta ser que los territorios eran bastante pequeños y no han dejado de ser estados, a su vez que la relación de gobernantes y gobernados nunca se ha establecido de manera taxativa y unívoca, y por último, el uso del vocablo “Estado” no implica que no haya habido uno antes de su uso en el siglo XVI, por ejemplo, Raphael Lemkin acuñó el término de “genocidio” en el 1944, sin embargo no quiere decir que antes de eso no hubiera ocurrido el holocausto ni el genocidio armenio. Lo que se podría aseverar es que las ciudades no tengan los elementos estructurales como es notable, como el mismo Sartori afirma que tienen los estados modernos, con su implicación de la democracia liberal representativa, pero no que no gocen del término estado.

Posteriormente, el concepto democracia adquiere otro significado distinto al de democracia pura o directa o diferente a algún concepto sinónimo de gobierno despótico, arbitrario o sectario, y esto porque absorbe el término de democracia liberal, perdiéndose el calificativo liberal, quedando sólo democracia, y es esa democracia liberal la que se conoce hoy en día⁶²⁸.

⁶²⁷ SARTORI, G., *op. cit.*, pp. 137-146.

⁶²⁸ *Ibidem*.

IV.3.2 Democracia liberal

La democracia de hoy en día responde en realidad a lo que es la democracia liberal, la cual está basada en un sistema económico puramente capitalista en donde la propiedad privada se convierte en uno de los ejes centrales. Con el nacimiento del Estado liberal también se originan los conceptos de liberalismo económico, liberalismo político y liberalismo social, todos los cuales aducen en diferentes áreas a un nuevo modo de comportarse del Estado, dando al traste con el sistema de Estado que imperaba por la época y con ello a su economía, los medios de producción y a la sociedad.

El concepto de liberalismo social se refiere a dos puntos de vista: en un primer lugar, a una protección de la ciudadanía respecto del Poder que ostentaba el Estado y los gobernantes, elaborándose una serie de derechos que tienden a la protección del individuo, y se fueron incorporando garantías que iban en pro de la protección de dichos derechos. Y en un segundo plano, el concepto hace alusión al resguardo de los trabajadores del sistema capitalista, y al igual que la noción anterior, este elemento se ha ido nutriendo con el paso del tiempo, siendo en principios del siglo XX cuando cobran más valor⁶²⁹.

Mientras que el liberalismo económico asume el sistema capitalista como el modelo a seguir, en virtud del cual se privatizan los medios de producción, para ello, asimismo, se generan una serie de derechos que se dirigen a la protección de los bienes de los individuos, tales como, la propiedad privada, garantizándole dicha prerrogativa a los ciudadanos el goce y disfrute en todo su esplendor de las propiedades que fueran adquiriendo de forma lícita, y si el Estado quería apropiarse de algunas tierras con dueño debía hacerlo bajo el procedimiento y con las garantías pautadas previamente para la adjudicación. En tanto que, se establecía la libre empresa, como una forma de motivar al individuo a que pudiera crear sus propios negocios en la manera que lo considerare apropiado bajo los límites determinados⁶³⁰.

Y el tercer punto a tratar es el liberalismo político, el cual intuye un sistema político acorde al Estado de derecho, basado en las libertades individuales, viniendo a ser una especie de limitaciones que se le imponen al Estado como a los demás individuos de la

⁶²⁹ *Ibidem.*

⁶³⁰ *Ibidem.*

sociedad. Bajo estas ideas es que se constituye la democracia liberal, concepto el cual fue subsumido por su denominación simple como “democracia”.

IV.3.3 La mayoría en la democracia

Aunque en la sociedad en sentido general se piensa que la democracia descansa sobre la base del consenso, no es así, pues el pilar de la democracia lo constituye el disenso, puesto que si todos los ciudadanos de un determinado país estuvieran de acuerdo no habría necesidad de ostentar un Estado y un gobierno democrático, lo que hace eficaz el sistema democrático es el disenso a través del principio mayoritario, el cual asegura que las decisiones se adopten por mayoría; esto, tanto en las decisiones donde interviene el pueblo directamente como en los principales órganos de Poder del Estado⁶³¹.

Hostos mira el principio mayoritario como una expresión de la soberanía y como la base que confirma la soberanía cuando es delegada en otras personas, atribuyéndole a éstos el poder suficiente para cumplir sus funciones, sin embargo comprende que el problema es que la voluntad social está conformado por las voluntades individuales, las cuales suelen no estar de acuerdo entre sí, siendo el principio mayoritario el medio más idóneo para solucionar el conflicto, pues “se supone que el número mayor de voluntades que concurren por medio de la elección al acto de la delegación, es el verdadero representante de la voluntad soberana y debe ejercer la soberanía”⁶³².

El principio mayoritario de decisión no sólo implica elegir lo que la mayoría piensa, sino que lleva consigo la protección a la minoría, pues sin el cuidado a la minoría el principio mayoritario no tiene razón de ser, en el entendido de que no se puede pensar en establecer la dictadura de la mayoría, así “Racional y experimentalmente es, pues, el de las minorías un principio que con la mayor fuerza lógica se deriva del mismo sistema representativo. Es un principio moderador de otro principio...”⁶³³.

En cuanto a la importancia de las minorías en las democracias constitucionales, Miguel Carbonell argumenta que:

⁶³¹ *Ibidem*, pág. 543 y ss.

⁶³² HOSTOS, E. M. (2015): *Lecciones de derecho constitucional*, Editora Corripio, S. A.S., Santo Domingo, pág. 81.

⁶³³ *Ibidem*, pág. 82.

“Por un lado, el constitucionalismo tutela y protege los derechos de esa minoría esencial, irreductible, que es el ser humano individual, a través del reconocimiento de los derechos fundamentales; en segundo lugar, el constitucionalismo se ha encargado, desde sus orígenes, de asegurar un estatus mínimo para las minorías políticas, es decir, para los grupos que no tienen el poder político en un momento y un espacio geográfico determinados, pero que aspiran a tenerlo en el futuro”⁶³⁴.

IV.3.4 Sistema de representación y los partidos políticos

El sistema de representación era lo que los federalistas defensores del sistema de gobierno de la joven nación utilizaban para distinguir una república de una democracia, aduciendo al hecho de ver esta última como una democracia pura. Para los federalistas este sistema evitaba más la polarización de un determinado grupo sobre los demás, y al contrario trataban de mostrar que con el sistema de representación todos podrían estar representados, incluso es Hamilton, quien utiliza por vez primera las palabras de “democracia representativa”. Simplemente este sistema sugiere que el pueblo quien no puede reunirse o concentrarse por se y tomar decisiones, pues sería un caos, elija representantes antes los diferentes estamentos del Estado, a fin de que estos tomen las decisiones en representación del pueblo⁶³⁵.

En la actualidad, y haciendo un análisis hacia el pasado es posible darse cuenta que incluso los federalistas se equivocaron, pues muchos de los planteamientos de estos con el sistema de gobierno y su eficacia, no tienen un valor absoluto ya que la corrupción, el sectarismo, la representación sin el apoyo del pueblo, han originado toda una serie de reformas en Latinoamérica que apelan a que los ordenamientos jurídicos vuelvan hacia atrás e integren mecanismos de participación directa, es decir, abra la brecha de la democracia pura.

⁶³⁴ CARBONELL, M.: “Constitución y minorías” en AA.VV.: *Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI*, VALADÉS, D., CARBONELL, M. (dirs), Cámara de diputados, México D. F., 2004, pág. 15. Vid. AA.VV.: *Derecho constitucional*, CARPIZO, J., MADRAZO, J., Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1991, pág. 47.

⁶³⁵ HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., *op. cit.*

IV.3.5 Partidos políticos

Conjuntamente con la democracia representativa se fue desarrollando la institución de los partidos políticos, a decir de Duverger: “*Los partidos políticos constituyen una institución esencial de los regímenes liberales. Nacieron y se desarrollaron al mismo tiempo que las elecciones y la representación. Aparecieron primero bajo la forma de comités electorales, encargados a la vez de conseguir para un candidato el patronazgo de notabilidades y de reunir los fondos necesarios para la campaña*”⁶³⁶.

En el mismo sentido, Edmund Burke sostiene que los partidos políticos son “una reunión de hombres que aúnan sus esfuerzos para ponerlos al servicio del interés nacional, sobre la base de un principio al que todos se adhieren”⁶³⁷. Carro Martínez arguye a que los partidos políticos hicieron su aparición en el siglo XIX con la instauración del sufragio universal⁶³⁸.

Manuel García Pelayo entiende que “el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos”⁶³⁹, mientras que Milton Ray Guevara alude a que “sin partidos políticos no hay verdadera democracia ni Estado de Derecho. Ya no tiene valor la eterna discusión del siglo XX sobre su naturaleza jurídica, si eran entes de derecho público o personas jurídicas de derecho privado”⁶⁴⁰.

En todo lo antes expresado, especialmente con García Pelayo como con Ray Guevara se busca determinar la importancia que tienen los partidos políticos en los Estados democráticos sin importar la naturaleza de los mismos. También, William Muro resalta la relevancia de los partidos políticos al esgrimir que “Afirmando lo que dice, se necesita sólo repetir que ningún país jamás fue capaz de mantener, por periodos razonables de tiempo, cualquier forma de gobierno democrático sin la ayuda de partidos políticos”⁶⁴¹. Esta afirmación se produce como respuesta a las preguntas “¿necesitamos realmente de

⁶³⁶ DUVERGER, M., *op. cit.*, pág. 129; Sobre partidos políticos vid. DUVERGER, M. (2012): *Los partidos políticos*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F.

⁶³⁷ Cit., por JORGE GARCÍA, J. (2016): *Derecho constitucional dominicano*, Editora Corripio, S. A. S., Santo Domingo, pág. 411.

⁶³⁸ *Ibidem*.

⁶³⁹ RAY GUEVARA, M. (2014): *Opinión constitucional*, Ed. Amigos del Hogar, Santo Domingo, pág. 43.

⁶⁴⁰ *Ibidem*.

⁶⁴¹ Cit., por PINTO DA LUZ, R. J.: “Los partidos políticos en Brasil” en AA.VV.: *Ciclo de Conferencias*, BRODZIAK, E., PERCHES, F. (dirs), Instituto Federal Electoral, México D. F., 1992, pág. 15.

partidos políticos? ¿No podríamos libremente escoger nuestros propios candidatos sin ningún intermediario?”⁶⁴²

Manuel Aragón establece que “La importante función de los partidos está reconocida, incluso, en las Constituciones más modernas. La democracia de nuestro tiempo es una democracia de partidos, y difícilmente podría ser de otra manera. Sin la libertad de asociación política, esto es, sin la existencia de los partidos, no puede haber democracia auténtica, o, lo que es igual, democracia pluralista”⁶⁴³.

Desde el punto de vista de Maurice Duverger este prevé dos tipos de partidos: los partidos de cuadros y los partidos de masas. Los primeros son aquellos partidos que suelen tener pocos miembros, quienes se unen por la influencia moral, prestigio o por fortuna, bajo esta organización se fundaron los primeros partidos conservadores y liberales en Inglaterra. Sin embargo, hay otros partidos de cuadros que responden a la modernidad, que prevén otras políticas internas que no observaban los partidos de cuadros tradicionales, tales como las elecciones internas para elegir los candidatos a las elecciones. En la República Dominicana hay un ejemplo bastante claro de los partidos de cuadro, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en sus inicios y su desarrollo hasta el 1996, pues su composición interna obedecía a toda una estructura cerrada y cuyos miembros debían de pasar por círculos de estudios para ser admitidos como miembros, debiendo de guardar los ideales que dieron origen al partido⁶⁴⁴.

Por otro lado, están los partidos de masas, cuya organización fue adoptada por las organizaciones proclives del comunismo y socialismo a comienzos del siglo XX, estos se presentan como representante de grupos de distintas índoles, los cuales le permiten a cualquier ciudadano que se pueda unir, mientras que la cúpula partidaria defiende los intereses de los afiliados, y estos a su vez coadyuvan en el pago de cuota para financiar las campañas.

En Latinoamérica, los partidos de masas han sido los que han gravitado en el escenario político. Como se ha hecho referencia al Partido de la Liberación Dominicana en la

⁶⁴² *Ibidem*, pág. 15.

⁶⁴³ ARAGÓN, M. (2002): *Constitución, democracia y control*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., pág. 205.

⁶⁴⁴ “El PLD tiene que ser un partido de militantes, y lo primero que se requiere para ser militante de un partido es aceptar y defender su posición ideológica sin un titubeo”, Vid. BOSCH, J. (1988): *El partido, concepción, organización y desarrollo*, Ed. Alfa y Omega, Santo Domingo, pág. 1.

República Dominicana, éste tuvo que modificar su organización y moverse de ser un partido de cuadro a un partido de masas, a los fines de poder convertirse en una opción electoral eficaz. Duverger a su vez, identifica dos tipos de partidos de masas, el socialista y el fascista⁶⁴⁵. Aunque la clasificación de Duverger sobre los partidos de masas es apropiada, hoy ha cambiado bastante y se han salido del cauce del socialismo y el fascismo.

IV.3.5.1 Función de los partidos políticos

Maurice Duverger observa dos objetivos principales, uno es de cara a los electores y otro de cara a los candidatos elegidos. En cuanto a los electores, los partidos políticos los concientizan a las pretensiones ideológicas que inspiraron al partido, y éste trata de promover esas ideas en todos los afiliados para cohesionar más a sus integrantes. Los partidos tienen una función social al tratar de que los electores elijan mediante su voto a los candidatos que merezcan ser elegido acorde a sus accionar.⁶⁴⁶

Por igual, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha sido consistente en referirse a los partidos políticos, del cual indica que es “una forma particular de asociación bajo la protección del derecho de asociación del art. 22 CE, cualificada por la relevancia constitucional de sus funciones; su condición de expresión del pluralismo político e instrumento fundamental de la participación política mediante su concurso a la formación y manifestación de la voluntad popular”⁶⁴⁷.

Ese mismo Tribunal ha establecido refiriéndose al aspecto de la pluralidad de los partidos políticos que “De acuerdo con un principio bien establecido en la jurisprudencia de este tribunal, no hay democracia sin pluralismo. En efecto, una de las características principales de la democracia reside en la posibilidad que ofrece de debatir mediante el diálogo y sin recurrir a la violencia las cuestiones planteadas por diferentes corrientes de opinión política, incluso cuando las que puedan molestar o inquietar. La democracia se alimenta en efecto de la libertad de expresión. Es por lo que esta libertad consagrada por

⁶⁴⁵ DUVERGER, *op. cit.*, pp. 130-133.

⁶⁴⁶ *Ibidem*, pp. 135-136.

⁶⁴⁷ STC 138/2012. También al respecto ver STC 48/2003, del 12 de marzo del 2003; STC 3/1981 del 2 de febrero del 1981; STC 62/2011 de fecha 5 de mayo el 2011.

el artículo 10 debe mantenerse, con las reservas del párrafo II, no sólo para las informaciones o ideas acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para las que hieren, chocan o inquietan”⁶⁴⁸.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace eco de dos principios la libertad de asociación, libertad de reunión, y la libertad de expresión. Y es sobre la base de éstos que se fundamentan las agrupaciones y partidos políticos; en relación a los mismos, hay toda una gama de opiniones consultivas y sentencias evacuadas de la Corte Europea de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales son tratados en sus respectivas cartas fundacionales.

Asimismo, la Carta Democrática Interamericana dispone que: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”⁶⁴⁹.

Mas, los partidos han dejado atrás esta función social teniendo como único objetivo la lucha por el poder sin importar los medios para alcanzarlos. Esto explica porqué muchas organizaciones políticas han sido penetradas por las mafias europeas y norteamericanas y por los carteles del narcotráfico en los países de América Latina. El sistema de financiación de los partidos políticos desde sus orígenes hasta los tiempos modernos es un problema que aún no encuentra solución, en el cual el compromiso de erogar fondos a favor de los partidos políticos por parte del Estado aún no logra su cometido, puesto que dicha medida ha conllevado a crear el bipartidismo, tornándose desproporcionar la representación política de los diferentes estratos sociales, aunque los partidos políticos, por más desgaste que presenten, son esenciales para el ESDD, y por ende la solución debe dirigirse a la búsqueda de su perfección.

⁶⁴⁸ *Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Herri Batasuna y Batasuna contra España, de fecha 30 de junio el 2009.*

⁶⁴⁹ Artículo 3, de la Carta Democrática Interamericana.

IV.3.6 Sistemas electorales en el Estado democrático

Para el especialista Dieter Nohlen los sistemas electorales pueden ser definidos desde un aspecto restringido y desde un aspecto amplio. En los países con menos experiencia electoral toman el concepto de sistema de partido de una forma abarcadora en la cual incluyen el derecho al sufragio, la administración electoral hasta llegar a lo contencioso electoral. Sin embargo, desde el punto de vista restringido, los sistemas electorales prescriben los procedimientos por medio de los cuales los electores expresan sus inclinaciones políticas, y a través de las cuales se convierten los votos en puestos parlamentarios (cuando son elecciones parlamentarias) o en cargos gubernamentales cuando se trata de elecciones ejecutivas, ya sean nacionales, provinciales o municipales. El concepto restringido es más propicio para el estudio de los efectos políticos de los sistemas electorales y para el mismo debate político⁶⁵⁰.

Para los consultores de IDEA International los sistemas electorales son:

En su acepción más elemental, los sistemas electorales convierten los votos emitidos en la elección general en escaños ganados por partidos y candidatos. Sus variables claves son la fórmula electoral utilizada (por ejemplo si se utiliza un sistema de pluralidad/mayoría, uno proporcional, uno mixto o algún otro y qué fórmula matemática es utilizada para calcular la distribución de escaños), la estructura de la papeleta de votación (por ejemplo si el elector vota por un candidato o un partido y si sólo puede hacer una selección o puede manifestar distintas preferencias) y la magnitud del distrito (no cuántos electores viven en un distrito, sino cuántos representantes a la legislatura se eligen en ese distrito)⁶⁵¹.

La relevancia de los sistemas electorales para el Estado democrático y el sistema de partido es un tema que entra en controversia, pues de un lado se vincula el futuro de la democracia con los asuntos electorales, del otro la importancia que se le da a los sistemas electorales es casi indigna, pero ambas posiciones no son sostenibles, puesto que la primera desconoce que los factores políticos están determinados por distintas variantes, y no sólo por el sistema de electoral. Pero la segunda postura no aprecia las realidades que se observan en la relación de los sistemas electorales y las conductas electorales, como tampoco el hecho de que los resultados electorales informan la estructuración del

⁶⁵⁰ NOHLEN, D.: "Sistemas electorales y reforma electoral" en *Quid Iuris*, Tribunal Estatal Electoral, año 1, núm. 3, pp. 7-58, pp. 7-8.

⁶⁵¹ AA.VV.: *Diseño de sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional*, REYNOLDS, A., REILLY, B., ELLIS, A. (dirs), Instituto Federal mexicano, México D. F., 2006, pág. 5.

sistema de partidos y la distribución del Poder en el Estado, y que por ende deviene en una importancia para la estabilidad⁶⁵².

IDEA destaca la importancia de los sistemas electorales en el hecho de que al convertir los votos en escaños para conformar la legislatura, la escogencia de un determinado sistema electoral puede de manera efectiva verificar quién es la persona que resultó electa, y cuál es el partido que accede a la administración del Estado. También pone la inseparable relación del sistema político y el sistema electoral, argumentando que para la reforma del sistema político, al estar contenido en la Constitución, viene a ser compleja, mientras que para el sistema electoral bastaría con una nueva ley, pero dejando ver la estrechez de los mismos.

Su importancia es tal que, el sistema electoral donde hay elecciones en que los partidos obtengan cantidades similares de votos puede ayudar a que se incorpore un gobierno compartido o un gobierno de minoría, permitiéndole el acceso a puestos a otro partido que sea mayoría, por lo que el mecanismo mediante el voto intenta que los mismos se transformen en puestos, por ello el sistema electoral es tan importante como el voto mismo, pues de lo que se trata es de respetar lo más que se pueda la voluntad popular⁶⁵³.

Lo que tiende a minimizar la importancia de los sistemas electorales, son los inconvenientes esenciales del desarrollo, la cultura política imperante, la relación basada en el Poder que existe en una sociedad, la conducta que presentan las élites políticas⁶⁵⁴. En la actualidad, se podría decir que esa minimización de los sistemas electorales en los Estados democráticos no tiene mucho asidero, en virtud de que sólo hay que ver la gran cantidad de instituciones que en la región de Latinoamérica y occidente participan como observadores de las elecciones a lo interno de cada país, puesto que las exigencias del pueblo y de los partidos políticos de oposición cada vez crece más, conllevando a que haya un querer mejorar la transparencia en el proceso, como signo de respeto de la voluntad del pueblo, teniendo su rol preponderante el sistema electoral.

⁶⁵² NOHLEN, D., *op. cit.*, pág. 8.

⁶⁵³ AA.VV.: *Diseño de sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional...* pág. 6.

⁶⁵⁴ NOHLEN, D., *op. cit.*, 9.

IV.3.6.1 La representación por mayoría y la representación proporcional como principios de los sistemas electorales

La base de los sistemas electorales radica en el principio de representación. El principio de representación es la expresión de la comprensión social de la representación política, que en algunos países, es una costumbre histórica, y a menudo se encuentra dentro de la normativa constitucional. Hay dos principios de representación política. El principio de representación por mayoría, cuyo objetivo es conformar un gobierno de un partido o coalición de partidos fundamentados en una mayoría del parlamento, mientras que en la representación proporcional se busca reflejar en el parlamento las fuerzas sociales y los grupos de Poder que hay en la sociedad⁶⁵⁵.

Nohlen destaca que el principio de representación por mayoría y el principio proporcional se enfrentan en un triple sentido; *histórico ideológico*: debido a que el debate de la representación, desde la mitad del siglo XIX, está orientado en la alternativa de representación por mayoría contra la proporcional; *político*: por el hecho de que la representación política de los empleados, de las minorías, y de los partidos minoritarios, estaba relacionada a la exigencia de representación proporcional, lucha la cual llegó a su fin en muchos países con la inclusión del sistema de representación proporcional; y, *sistemático*: puesto que la mejor manera de clasificar a los sistemas electorales es por medio de los principios de representación, ya que la representación por mayoría y la representación proporcional constituyen el elemento básico de los tipos de sistemas electorales⁶⁵⁶.

No obstante, esto ha cambiado puesto que en la actualidad los Estados usan sistemas electorales combinados, y no buscan permanecer solamente con un principio de representación, como se contemplaba anteriormente. En tal virtud, los sistemas electorales buscan su clasificación en la graduación de los principios. Tomando en cuenta lo antes expresado, los sistemas electorales mayoritarios son aquellos que en su consecuencia conjunta se acercan a la representación por mayoría, y los sistemas proporcionales aquellos que más se aproximan a la representación proporcional. A su vez, los sistemas electorales combinados, son aquellos en los que impera una mezcla del sistema mayoritario y del sistema proporcional; estos sistemas tornan un poco difícil la

⁶⁵⁵ *Ibidem*, pág. 10.

⁶⁵⁶ *Ibidem*, pp. 10-11.

clasificación de los sistemas, pero no han entrado en desuso, ya que los principios, mayoritario y proporcional, son los indicadores del debate al respecto, sin embargo se advierte que no existen los sistemas electorales mixtos pese a que combinen elementos de ambos principios de presentación⁶⁵⁷.

Como los sistemas electorales son estructuras complicadas, los mismos están compuestos de distintos elementos de carácter técnicos, los cuales se agrupan en cuatro áreas: el repartimiento de las circunscripciones electorales, la manera de la candidatura, la votación y el modo de transformar los votos en escaños. Cada uno tiene consecuencias diferentes tanto en el sistema electoral como en el resultado de las elecciones. Según sean la combinación de estos elementos serán los efectos políticos⁶⁵⁸.

En cuanto a la determinación de las circunscripciones electorales se alude al medio de determinación tanto del número como del tamaño de las circunscripciones electorales. Hay que señalar que el tamaño en las circunscripciones no es en cuanto al territorio en el que se desarrolla la circunscripción sino en cuanto al número de escaños que alberga la misma. Existe una distinción básica entre circunscripciones uninominales y las circunscripciones plurinominales, y éstas se pueden dividir en pequeñas y grandes⁶⁵⁹.

En cuanto a las formas de la candidatura, la distinción fundamental se establece entre la candidatura individual y la lista, sin embargo en cuanto a la lista se pueden ver tres modos diferentes: 1) Una lista bloqueada, en ella el votante dará su voto a la lista, los candidatos serán escogido acorde al número que ostentan en la lista; 2) La lista cerrada pero que no es bloqueada, en ella el elector puede decidir de los candidatos que aparecen quién es el más idóneo; 3) la lista abierta, le permite al elector elegir candidatos de otras listas, por encima de las que le ofertó el partido, pudiendo conformar su propia lista⁶⁶⁰.

En el elemento de la conversión de votos en escaños, lo más importante es decidir cuál es el método utilizado para la determinación de los candidatos vencedores, así como los vencidos en la elección, en esas fórmulas de decisión se encuentran la fórmula mayoritaria y la fórmula proporcional. En las fórmulas mayoritarias la asignación de escaños va a depender de que un candidato pueda reunir la mayoría exigida de los votos, sea ésta

⁶⁵⁷ *Ibidem*, pág. 11.

⁶⁵⁸ *Ibidem*, pág. 14-15.

⁶⁵⁹ *Ibidem*, pág. 15.

⁶⁶⁰ *Ibidem*, pág. 16 y ss.

relativa o absoluta. Y en la fórmula de decisión proporcional la asignación de escaños va acorde al porcentaje de votos del partido o los candidatos, pero en el caso de la conversión del voto, hay una variedad de mecanismos complejos, los cuales tienden a confundir al elector para saber lo que ha ocurrido con su voto⁶⁶¹.

El fin aquí es simplemente mostrar la importancia que tienen los sistemas electorales en el Estado democrático, puesto que los mismos aseguran la transparencia en la concretización de la voluntad manifestada a través del voto, constituyendo un aspecto legitimador. Estado democrático, sistema electoral y sistema de partido, se encuentran envueltos en una relación que no termina, y mientras mejor sea el sistema de partido y el sistema electoral, mejor será la democracia para los individuos, siendo así, se debe procurar tener el sistema electoral que mejor concrete la voluntad de los individuos, y que procure la protección de las minorías.

IV.4 Acercamiento al Estado de Derecho

Para los Estados de América el Estado de Derecho es una obligación que debe constar en las constituciones, de lo que se expresa que “Son elementos de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho...”⁶⁶², por igual, “La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”⁶⁶³. En la práctica la jurisprudencia de la Corte Interamericana hace constante referencia al Estado de Derecho y lo que contiene dicho modelo; así en el Caso Gelmán vs. Uruguay, la Corte entiende las leyes que otorgan alguna Amnistía que violen derechos humanos no son acorde a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, y la misma atentan en contra del Estado de derecho⁶⁶⁴. Así entendiendo que los tribunales deben garantizar los derechos de los procesados como una forma indispensable de un

⁶⁶¹ *Ibidem*, pág. 20 y ss.

⁶⁶² Artículo 3, *Carta Democrática Interamericana*.

⁶⁶³ Artículo 4, *Ibidem*.

⁶⁶⁴ *Sentencia Caso Gelman vs. Uruguay, del 24 de febrero del 2011, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*.

Estado de Derecho⁶⁶⁵, también destaca, poniendo de relieve la separación de poderes, que en un Estado de derecho el legislativo por medio de las leyes regula las atribuciones de los jueces⁶⁶⁶; asimismo, hablando sobre la Carta Democrática Interamericana y el Estado de derecho manifestó que:

En el sistema interamericano la relación entre derechos humanos, democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la Carta Democrática Interamericana (...). En dicho instrumento se señala que: “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho...”⁶⁶⁷.

El término de Estado de derecho es usado por vez primera por el alemán Robert Von Mohl en el decenio del 1830 en su obra “La ciencia política según los principios básicos del Estado de Derecho”, en cuya obra Von Mohl hablaba sobre un Estado en el que la ley estuviera por encima de la voluntad de las personas, por lo que apartaría el ejercicio del poder de manera desmesurada de un ser humano o de un reducido grupo en perjuicio de la colectividad⁶⁶⁸.

Desde la concepción de Mohl el Estado de derecho ha sufrido distintas variaciones que han hecho del término algo más sustancioso y abarcador, implicando una serie de características, sin las cuales el Estado de derecho no vendría a ser tal, puesto que estas características se han considerado indispensables para el correcto funcionamiento de éste, se podrían citar: principio de legalidad, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes del Estado, autonomía plena de estos poderes, el gobierno de la ley, los

⁶⁶⁵ *Sentencia Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México*, del 26 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

⁶⁶⁶ *Sentencia Caso Barreto Leiva vs. Venezuela*, del 17 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; hablando sobre la necesidad de la independencia del juez, especialmente el Juez Constitucional en un Estado de derecho, vid. *Sentencia Caso Tribunal Constitucional vs. Perú*, del 31 de enero del 2001, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sobre la importancia del principio de legalidad y de irretroactividad en un Estado de derecho, vid. *Sentencia Caso Vélez Loor vs. Panamá*, del 23 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y *Sentencia Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá*, del 2 de febrero de 2001, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sobre las ejecuciones extrajudiciales como hechos contrarios al Estado de derecho, vid. *Sentencia Caso Castañeda Gutman vs. México*, del 6 de agosto de 2008, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sobre la triada que representan los derechos y las libertades, las garantías y el Estado de derecho, vid. *Sentencia Caso Yatama vs. Nicaragua*, del 23 de junio de 2005, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

⁶⁶⁷ DALLA VIA, A. R.: “Los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en *Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, pp. 15-79, pág. 26-27.

⁶⁶⁸ VILLAR BORDA, L.: “Estado de derecho y Estado social de derecho” en *Revista Derecho del Estado*, núm. 20, 73-95 diciembre 2007, pág. 73 y ss.

derechos fundamentales, el Estado como un sujeto de derechos y obligaciones, control jurisdiccional de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones⁶⁶⁹.

Ante lo expuesto, ha habido una serie de discusiones sobre el sentido formal y material del Estado de derecho, sin embargo sólo interesa conocer estas puntualizaciones puesto que esclarecen el actual concepto y lo que representan en las sociedades liberales, incluso se puede decir que el término es acuñado aún de manera más amplia por algunos sectores en donde se deja entrever que el Estado de derecho es asociado a la democracia, a su buen funcionamiento, y a que dicha democracia descansa en el contrato social.

IV.4.1 La separación de funciones

La división del Poder estatal o lo que es lo mismo la separación de funciones es una teoría que se remite a tiempos antiquísimos, mas es con John Locke que la teoría de la división de los poderes adquiere su relevancia, llegando a ser considerada por algunos como su precursor, pero es con Montesquieu que la teoría adquiere el sentido que hoy en día ostenta. El pensador entendía que el Poder debía dividirse en tres órganos; el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En tal sentido, Montesquieu explica que:

En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado, hace leyes transitorias o definitivas, o deroga las existentes; el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones; el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial, y al otro poder ejecutivo del Estado⁶⁷⁰.

Estos órganos que en su conjunto ostentan el Poder estatal debían de tener autonomía al tiempo que todos debían limitarse entre sí, es lo que se conoce como el sistema de peso y contrapeso. En este sentido, hay otros autores que han profundizado en el sistema de freno y contrapeso, entendiendo que estos mismos poderes deben tener controles intraórganos,

⁶⁶⁹ BAZÁN, V.: “El estado de derecho como zona de interacción de la democracia, la Constitución, la justicia constitucional y la protección de los derechos fundamentales” en *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, núm. 11, enero-junio, pp. 45-94, 2009, pág. 45 y ss.

⁶⁷⁰ MONTESQUIEU (1971): *Del Espíritu de las leyes*, Ed. Biblioteca de Grandes Obras Famosas, Buenos Aires, pág. 187.

o sea que cada órgano debe de tener mecanismos que auguren que la toma de decisiones se haga de la forma más democrática y transparente posible⁶⁷¹.

En segundo lugar, se trae a colación el sistema bicameral del poder legislativo en el cual dicho órgano cuenta con dos cámaras para conocer de las leyes y demás funciones que se le asignadas, teniendo como objetivo dicho sistema que el conocimiento de los proyectos de ley sean lo más consensuado posible y también que después de aprobado un proyecto en una cámara, la otra cámara medite al respecto teniendo en cuenta el pensar de la población y la opinión pública que generó la aprobación en la primera cámara que conoció de la moción legislativa, empero hay algunos países que degustan del sistema unicameral como órgano que ejerce la función legislativa⁶⁷². También la mayoría calificada que se establece para la aprobación de determinados asuntos o leyes son considerados a su vez como controles intraórganos⁶⁷³.

Y en tercer lugar, se encuentran los controles que están en el interior del órgano judicial, tales como el doble grado de jurisdicción, y todos los recursos ordinarios y extraordinarios que la Constitución y las leyes establecen en el proceso de conocer y dirimir una litis a través de los tribunales. Aquí es donde, al menos socialmente, se puede palpar más lo concerniente a los controles que se ejercen en el interior de los órganos de Poder. Los países de Latinoamérica por ser países con gobiernos presidencialistas con inclinación parlamentaria tienen un sistema de control en el interior del ejecutivo bastante débil.

IV.4.2 El principio de legalidad

Kelsen exhibe que el principio de legalidad se manifiesta de distintas maneras, en su relación con los individuos el principio le permite hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, mientras que en su relación con la administración pública, los individuos que ejerzan una función, sólo pueden hacer lo que la ley expresamente autoriza⁶⁷⁴. Por lo que

⁶⁷¹ LOEWENSTEIN, K. (1965): *Teoría de la Constitución*, Ed. Ariel, Madrid, pág. 236 y ss.

⁶⁷²El artículo 76 de la CRD del 2010 dispone que: “El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados”.

⁶⁷³ LOEWENSTEIN, K., *op. cit.*, pág. 246.

⁶⁷⁴ Cit., por GARCÍA RICCI, D. (2011): *Estado de derecho y principio de legalidad*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, México D. F., pág. 37.

el principio de legalidad nace como una protección al individuo y a la sociedad⁶⁷⁵. En ese tenor Ricardo Guastini define el principio de legalidad como:

En general “legalidad” significa conformidad a la ley. Se llama principio de legalidad aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma: es inválido todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a la ley. Se entiende que esta regla se refiere especialmente –aunque no se forma exclusiva– a los actos del Estado que pueden incidir sobre los derechos subjetivos (de libertad, de propiedad, etcétera) de los ciudadanos, limitándolos o extinguiéndolos. En cuanto tal, el principio de legalidad tiene una evidente función garantista⁶⁷⁶.

Sin embargo, el principio de legalidad también cumple una función en materia penal. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos acoge el principio de legalidad al hacer señalamientos de carácter penal como la proscripción general de retroactividad de la norma penal, el principio pro homine. En sus inicios el principio de legalidad se constituía en un pilar para confinar las acciones derivadas del ejercicio de las funciones públicas, siendo en ese momento una prerrogativa a favor de los individuos, que particularmente recaía sobre el Poder sancionador del Estado, tratando de evitar cualquier exceso⁶⁷⁷.

El artículo 9 de la Convención expresa que:

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiaría de ella⁶⁷⁸.

Respecto al modo de manifestación del principio de legalidad en materia penal la Corte Interamericana ha dicho que:

La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de

⁶⁷⁵ ISLAS MONTES, R.: “Sobre el principio de legalidad” en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, año XV, pp. 97-108, 2009, pág. 98 y ss.

⁶⁷⁶ GUASTINI, R. (2001): *Estudios de teoría constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, Médico D. F., pág. 117.

⁶⁷⁷ LONDOÑO LÁZARO, M. C.: “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 128, pp. 761-814, mayo-agosto de 2010, pág. 762.

⁶⁷⁸ Artículo 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad⁶⁷⁹.

Haciendo una aplicación del principio de legalidad, aun no estando claramente establecido en el artículo 9, la Corte Interamericana declaró la improcedencia de una norma legal que castigaba los hechos “contrarios a la democracia y el orden constitucional” por ser contraria a la Convención, ya que era notorio la ausencia de elementos que definieran claramente la conducta criminal penalizada, en razón de que los crímenes y delitos que sancionan conductas que no se pueden individualizar correctamente como el terrorismo o la colaboración con el terrorismo, la traición a la patria resultan ser contrarios al artículo 9 de la Convención⁶⁸⁰.

En el caso Fermín Ramírez en contra de Guatemala, el tema de debate se erigió en torno a una ley de homicidio que amparaba una condena que oscilaba de 25 a 50 años, por igual disponía la pena de muerte para cuando se determinaba una mayor peligrosidad del agente, lo que estaba a discrecionalidad del juez atendiendo a los aspectos que rodeaban el hecho ilícito. Para la Corte era cuestionable que se pusiera a la voluntad del juez la determinación de la “peligrosidad” ya que ésta implicaría la pena de muerte, conllevando al autoritarismo, y, como era de esperar, la Corte concluyó que era violatorio al artículo 9 del Convención⁶⁸¹.

Profundizando un poco más, se pueden verificar varios aspectos del principio *nullum crimen nullum poena sine lege* o principio de legalidad penal: 1) lo relativo a la irretroactividad; 2) la prohibición de la analogía de delitos; 3) el principio de la máxima taxatividad legal; 4) lo concerniente al principio de reserva de ley⁶⁸². Estos aspectos propios del principio de legalidad en materia penal cumplen una labor de protección al individuo por los desenfrenos que pueda tener el Estado, por lo que representa unos límites directo al *ius puniendis* del Estado, que es una expresión del Poder del Estado.

Sin embargo, el principio de legalidad en el sistema interamericano ya no se queda en la parte penal, sino que se establece como un mandato a los funcionarios públicos, mediante el cual tienen que accionar en base al derecho establecido, lo cual no sólo está sujeto al

⁶⁷⁹ AA.VV.: *Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada*, STEINER, C., URIBE, P. (dirs), Ed. Konrad Adenauer Stiftung, Bolivia, 2014, pág. 258.

⁶⁸⁰ *Ibidem*, pág. 258.

⁶⁸¹ *Ibidem*, pág. 258.

⁶⁸² *Ibidem*, pág. 256.

concepto formalista del derecho sino también como entendiendo el derecho en su carácter vigente y justo del derecho nacional e internacional de los derechos humanos⁶⁸³.

En lo concerniente a este principio, en cuanto su papel administrativo, es importante aclarar que el mismo presenta algunos elementos que expresan que todos los actos deben de estar de acuerdo a la ley, por lo que habría que analizar, primero, a cuáles actos se refiere y en segundo lugar, a cuál concepción de la ley, para de este modo tener un concepto más amplio de dicho principio⁶⁸⁴.

Los actos que deben de estar de acuerdo a la ley, son los actos que emanan de los poderes públicos, más cuando este principio en un momento determinado solamente hacía referencia al órgano que ejerce la función ejecutiva y no a los otros órganos que ejercen funciones del Estado. Por ello muchas veces es entendido que los actos que deben estar cónsonos con la ley son los que vienen de los funcionarios del gobierno, pero en otra concepción más abarcadora, el principio comprenden los actos de los órganos que ejercen tanto la función ejecutiva como la función judicial, y es donde se entra al concepto de la ley formal y el concepto de la ley material⁶⁸⁵.

Desde un punto de vista formal, se hace eco de los actos que emanan del órgano que ejerce la función legislativa, por lo cual a este órgano que ejerce dicha función no se le puede interponer limitaciones legislativas, esto es en principio, por lo cual los funcionarios que deben de tener actos acordes a la ley son los miembros del judicial y el ejecutivo⁶⁸⁶.

Mientras que el concepto material de la ley, entiende ésta como el conjunto de normas que establecen derechos y deberes entre los individuos, así como entre el Estado y los individuos. Y teniendo tal comprensión, dentro de la misma se incluyen las disposiciones constitucionales y legislativas, concluyendo que los actos de todos los funcionarios del Estado deben ser conforme a la ley⁶⁸⁷. Actualmente este es el concepto que ha sido adoptado, y que para los fines de esta investigación interesa para el análisis de los Estados Fallidos.

⁶⁸³ LONDOÑO LÁZARO, M. C., *op. cit.*, pág. 763.

⁶⁸⁴ GUASTINI, R., *op. cit.*, pág. 118.

⁶⁸⁵ *Ibidem*, pp. 118 y ss.

⁶⁸⁶ *Ibidem*, pp. 118 y ss.

⁶⁸⁷ *Ibidem*, pp. 118 y ss.

IV.5 El Estado y los derechos sociales

Acorde al avance que han tenido los derechos humanos, los mismos a través de los tratados internacionales en la materia han intentado que los Estados apliquen derechos sociales con el fin de cerrar la brecha de la desigualdad, sin caer en su perversión de asistencialismo. El Estado social y su corolario en el derecho como “constitucionalismo social” guardan una estrecha relación con el enfoque hacia la consideración que se tiene de los Estados fallidos, producto de que esta asistencia brindada por el Estado es por el hecho de proteger algunos derechos fundamentales, como sería una igualdad de oportunidades⁶⁸⁸, o un acceso a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, a la seguridad social, entre otros derechos que han ido calando en la sociedad mundial, ya que hoy en día resulta imprescindible que los Estados los propicien, al menos en un nivel mínimo, para que los individuos puedan disfrutar de un desarrollo pleno de la personalidad, aunque sería pertinente observar si el Estado social es un indicador aceptable para medir el control del monopolio del Poder en los Estados fallidos, ya sean estos democráticos o autocráticos.

IV.5.1 Surgimiento y noción del Estado Social

El Estado social nace en la Alemania como un concepto que impregna la ideología política, y que empapa a su vez el derecho, aún más el derecho constitucional, siendo en la voz del jurista alemán Herman Heller en donde este adquiere su locución de “Estado social de derecho”; lo cual hoy en día, tomando la CE como referencia, ha encontrado su punto más fuerte en el concepto de “Estado Social y Democrático de Derecho”, parte del cual se ha desmenuzado en el capítulo pasado, y se pretende seguir ahondando por medio del estudio de los derechos sociales⁶⁸⁹.

⁶⁸⁸ “En fin, al momento de la libertad positiva, o libertad como poder, corresponde el momento de la *igualdad social*, llamada de otro modo igualdad de las ocasiones o de las oportunidades: exigir igualdad de las oportunidades significa cabalmente exigir que a todos los ciudadanos les sea atribuida no solamente la libertad negativa o política, sino también la positiva que se concreta en el reconocimiento de los derechos sociales”, BOBBIO, N. (1991): *El tiempo de los Derechos*, Ed. Sistema, Madrid, pp. 46-47:

⁶⁸⁹ VALADÉS, D. (1994): *Constitución y política*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., pp. 61-62.

IV.5.1.1 Dimensión económica y política

Con el aumento de la crisis en la economía mundial, y teniendo como única opción el liberalismo desgarrador de la Europa, comenzaron a unificarse los individuos con el fin de reclamar ciertos derechos para la clase más depauperada del momento como eran los obreros. Estos obreros iniciaron en la Europa occidental un desarrollo que los conminó a organizarse para así enfrentar a sus opresores. En la misma Europa se tomaron muchas medidas para aligerar el peso de la crisis, y que se podría decir en cierto modo que el Estado de bienestar y el Estado social tuvieron su origen en dichas medidas. Con el derrocamiento del zarismo y la llegada de los bolcheviques al Poder en octubre del 1917, el reclamo por mitigar la crisis que seguía devorando a la población alcanzó un matiz aún más preponderante, sin embargo la crisis seguía en pie y no fue sino hasta el 1929 cuando llegó a su nivel más alto con lo que se conoce como el crack del 1929⁶⁹⁰.

El crack del 29 es lo que da lugar a la Gran Depresión que tuvo su mayor impacto en la economía estadounidense con la caída del mercado de valores; esta crisis conllevó a que los economistas reflexionaran sobre las medidas económicas que se estaban llevando a cabo en los países capitalistas, los cuales experimentaron el efecto dominó que se origina cuando la economía de un país sufre un revés, pasándose la recesión económica de un país a otro, como también podría considerarse la crisis actual originada a lo interno de algunos países de la Unión Europea. Hasta ahora la Gran Depresión ha sido la mayor crisis debido a la cantidad de Estados que la padecieron y a su prolongada duración.

A partir de entonces, hubo una serie de modificaciones a las leyes financieras que apuntaban a formar un Estado que interviniera en las políticas económicas como una forma de mitigar las secuelas de la Gran Depresión tanto con los más desfavorecidos, como con la clase burguesa que estaba siendo afectada con las constantes quiebras. El New Deal como políticas que trataban de frenar las consecuencias de la Gran Depresión, tuvo una gran repercusión social más que económica, pues se tomaron grandes medidas como respuesta al desempleo, así como otras que apostaban al desarrollo de la agricultura, y motivaron el continuo progreso de la clase sindical organizada⁶⁹¹.

⁶⁹⁰ Vid. LÓPEZ FERNÁNDEZ, E.: “Crack de 1929: Causas, desarrollo y consecuencias” en *Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho*, volumen I, pp. 1-16, 2009, pp. 1 y ss.

⁶⁹¹ SERRANO SEGARRA, M.: “La crisis económica de 1929: Roosevelt y el New Deal” en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, volumen I, núm. 6, pp. 112-130, 2010, pp. 113 y ss.

Estas medidas económicas tuvieron su plataforma en las ideas de John Maynard Keynes conocidas como el Keynesianismo, cuyas ideas esenciales se encuentran contenidas en su obra “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”⁶⁹². Sin embargo, posteriormente esta corriente dejó de atraer a los economistas, quienes retomaron el libre mercado y criticaron el intervencionismo del Estado, siendo los más destacados Milton Friedman y Friedrich Von Hayek⁶⁹³.

El intervencionismo estatal ligado con la sed de Poder de gobernantes monopolizó el mismo, conducta muy típica de los gobiernos de extrema derecha de entonces, los cuales tendían a imponer sus ideas. Por ello, Hitler, Mussolini, Franco, así como otros dictadores de Latinoamérica y Asia, lograron una gran estabilización de las economías, sin embargo ello conllevó a que muchos sindicalistas fueran reprimidos, por lo que en el fondo había un conflicto de males de no saber cuál de todos era peor. Esto no quiere decir que el intervencionismo sea la antesala de las grandes dictaduras, al contrario, las grandes dictaduras siempre han estado asociadas al liberalismo avasallante; empero, el hecho de centralizar la economía y el Poder en sentido general, hizo que la economía creciera. La réplica de ello en la República Dominicana fue la instauración de un gobierno como el de Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó en la República Dominicana por 31 años, pudiendo resaltarse que dicho gobierno pudo mantener una estabilidad económica sometiendo a la opresión a los dominicanos, opresión que se caracterizó por la supresión de todo derecho a favor del ser humano. Este modelo se reflejó en varios países de América Latina.

En la actualidad, podría decirse que se está ante un paso confuso de un neoliberalismo que busca reencontrarse y un keynesianismo que busca mayores adeptos, pero si bien es cierto que aún los intelectuales se decantan por el libre mercado, no menos cierto es que en la práctica los Estados son proclive de medidas económicas que puedan ayudar a mitigar las desigualdades existentes entre las distintas clases sociales que gravitan en la sociedad.

⁶⁹² Vid. MAYNARD KEYNES, J. (2005): *Teoría General de la ocupación*, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

⁶⁹³ RAVIER, A. O.: “Regla monetaria vs. Discrecionalidad: una ampliación del debate” en *RIIM*, núm. 48, pp. 113-148, mayo 2008, pp. 113 y ss.

La opinión que le merece a algunas personas de que no se puede confundir el Estado social de derecho con el Estado de bienestar se muestra real, cuando se analiza que el Estado social de derecho sólo puede existir bajo una democracia mínima, mientras que un Estado benefactor puede ser un canal de un gobierno totalitario, así como de un gobierno de los reputados “socialistas”, sin embargo, ambos guardan una estrecha relación, más bajo la atmósfera de la democracia. En los tiempos actuales, aún hay autores que apelan a un Estado de bienestar⁶⁹⁴, lo que indica, aparte de la crisis del neoliberalismo, que el Estado de bienestar nunca ha desaparecido, sino que su poder intervencionista simplemente se ha disminuido en algunos decenios desde su surgimiento⁶⁹⁵.

IV.5.1.2 La democracia social

La parte de la democracia que se corresponde con el Estado social es la llamada democracia social⁶⁹⁶. Para el profesor Jorge Reinaldo Vanossi, la democracia debe de comprender las disposiciones del constitucionalismo social y también debe de estar acompañada del principio de racionalización del Poder, manifestando que, tanto el Estado social de derecho como la democracia social, no sienten vergüenza del garantismo, ya que los dos, son polos opuestos de toda dictadura o autocracia, y advierte que por el contrario ambos aspiran a la sujeción de la legalidad y a los controles jurisdiccionales para la defensa de la libertad⁶⁹⁷.

La democracia social se vislumbra hacia dos caminos; primero hacia la ampliación de los derechos subjetivos, y segundo, de la transición del Estado observador y cohibido hacia un Estado benefactor o interventor. Así, la democracia social en el pensamiento político ideológico ha tenido su fundamento en la doctrina social de la iglesia⁶⁹⁸, la socialdemocracia y algunas vertientes del neoliberalismo⁶⁹⁹. Vanossi afirma que la democracia social pretende buscar niveles reales de igualdad de oportunidades por la

⁶⁹⁴ GALBRAITH, J. K. (1996): *Una sociedad mejor*, Ed. Crítica, Barcelona.

⁶⁹⁵ RAMENTOL, S. (2004): *Teorías del desconcierto*, Ed. Urano Tendencias, Barcelona, pp. 255-321.

⁶⁹⁶ Cit. por VANOSSI, J. R. (2002): *Estudios de teoría constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, Médico D. F., P. 127.

⁶⁹⁷ *Ibidem*, p. 127.

⁶⁹⁸ Vid. La *Encíclica Rerum Novarum* proclamada por el Papa León XIII, en el 1891. Siendo esta una encíclica social que mostraba preocupación por el estado de los trabajadores, apareciendo como una forma de hacerle contrapeso a la doctrina marxista, y de devolverle la credibilidad a la iglesia.

⁶⁹⁹ VANOSSI, J. R., *op. cit.*, p. 127.

dificultad que hay de una igualdad absoluta, comprendiendo que se busca crear las condiciones que permitan el disfrute de los derechos que se establecieron como derechos del hombre, tratando que las diferencias sean solamente de las que se deriven de la virtud y la capacidad y no de las condiciones humanas⁷⁰⁰.

IV.5.1.3 Dimensiones jurídicas

Como se había señalado anteriormente, Herman Heller es quien introduce lo que se conoce como “Estado social de derecho en el 1929”, “como única fórmula destinada a cancelar la irracionalidad del Estado fascista y del Estado liberal-burgués de derecho, mediante una acción estatal destinada a la mayor participación de las masas obreras en la distribución de los bienes materiales”⁷⁰¹. Esta doctrina está caracterizada por constitucionalizar una serie de prerrogativas a favor de los individuos, verbigracia, la salud gratuita, protección de la cultura y del medio ambiente, la educación gratuita, promover la creación de empleos, promocionar las viviendas.

Muchos de estos derechos fueron auspiciados con reclamos populares y pueden aparecer puntos en la historia que hagan referencia a ellos, sin embargo lo que el constitucionalismo social ha hecho es que le ha dado un giro y ha optado por la constitucionalización de estos derechos como un modo de que el Estado pueda verlos de manera más palpable y garantizar el cumplimiento de los mismos, pasando muchos de estos a formar parte del legajo de disposiciones programáticas que promueven las constituciones a los fines de alcanzar sus objetivos.

Algunos autores afirman acertadamente que el constitucionalismo liberal clásico sólo entendían como parte de su legajo los derechos civiles y políticos, pero que sin embargo no daban garantía ni siquiera del cumplimiento de estos, puesto que la igualdad que se argüía pasaba a ser meramente formal, mientras que las desigualdades seguían creciendo, y es el constitucionalismo social el que trata de disminuir esta brecha de desigualdad entre

⁷⁰⁰ *Ibidem*, p. 129.

⁷⁰¹ CANTÚ NORIEGA, A. (1988): *Los derechos sociales creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917*, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., p. 37.

clases sociales en donde los que tienen, tienen mucho y los que no tienen, no tienen nada⁷⁰².

Al respecto Bobbio establece que: “Resulta superfluo añadir que el reconocimiento de los derechos sociales plantea, además del problema de la proliferación de los derechos del hombre, problemas bastante más difíciles de resolver respecto a aquella «praxis» de la que he hablado al comienzo, porque la protección de estos últimos requiere una intervención activa del Estado que la protección de los derechos de libertad no requiere, y ha producido aquella organización de servicios públicos de la que ha nacido una nueva forma de Estado, el Estado social”⁷⁰³. Los derechos sociales han venido no sólo a presentarse como una esfera del reconocimiento de nuevas prerrogativas a favor del hombre, sino que vienen a ser el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, actuando estos últimos, desde el punto de vista del Estado, en un accionar negativo, un dejar de hacer del Estado, mientras que los derechos sociales, obligan a una intervención necesaria del Estado⁷⁰⁴.

Aunque el constitucionalismo social tuvo un gran desarrollo en el periodo de entreguerras, no fue sino hasta después de la segunda guerra mundial cuando se implementó plenamente, destacándose con ella la Constitución italiana del 1947, y en Alemania la Ley Fundamental de Bonn del 1949⁷⁰⁵. Para todos los países de Europa estos textos fueron alicientes que aún en la actualidad tienen repercusión, en cambio, en muchos de los países de la América Latina y otros tantos países del África y parte de Asia, aún luchan por ver cumplidas las prerrogativas del constitucionalismo social, en donde los países tienen una contradicción con los textos constitucionales puesto que se promueven los principios, valores y reglas que debe tener el Estado social mientras que la realidad en los países marginados o considerados como subdesarrollados es otra.

En las sociedades actuales hay una clase media no tan favorecida, una clase extremadamente pobre y unos ricos que tienen demasiado; en el fondo, las disposiciones sociales, son la ilusión de los constituyentes para con su población, es la promesa al

⁷⁰² V. JORGE PRATS, E., *Derecho constitucional*, Vol. 1..., pp. 31-34.

⁷⁰³ BOBBIO, N., *op. cit.*, p. 118.

⁷⁰⁴ *Ibidem*, pp. 18-19.

⁷⁰⁵ Vid. HABERLE, P. (2003): *La garantía del contenido especial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn*, Ed. Dykinson, Madrid.

pueblo de Israel que aún no se ha logrado, pero que todos anhelan su cumplimiento⁷⁰⁶. Bien es expresado de que “...el tremendo problema que enfrentan hoy los países en vías de desarrollo es el de encontrarse en condiciones económicas tales que, a pesar de los programas ideales, no permiten desarrollar la protección de la mayor parte de los derechos sociales”⁷⁰⁷ y se pone de ejemplo que el derecho al trabajo “...*está estrechamente ligado a su verificación. No basta fundar ni proclamar tal derecho. Pero tampoco basta protegerlo. El problema de su ejercicio no es un problema filosófico ni moral. Pero tampoco es un problema jurídico. Es un problema cuya solución depende de un determinado desarrollo de la sociedad y, como tal, desafía incluso a la constitución más avanzada y pone en crisis incluso al más perfecto mecanismo de garantía jurídica*”⁷⁰⁸.

El hecho de que el constitucionalismo social no se haya desarrollado completamente en el periodo de entreguerras tiene su razón en el entendido de que las democracias se vieron menguadas por los gobiernos fascistas y totalitarios, y en ese caso sí hubo un Estado Intervencionista, o mejor dicho un Estado benefactor, pero en modo alguno hubo un Estado social, ya que éste existe sólo en compañía de la democracia, a saber:

...sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. Con otras palabras, la democracia es la sociedad de los individuos, y los súbditos se convierten en individuos cuando se les reconoce algunos derechos fundamentales; habrá una paz estable, una paz que no tenga la guerra como alternativa, sólo cuando seamos ciudadanos no ya solamente de este o aquel Estado, sino del mundo⁷⁰⁹.

Por igual establece Vanossi “De nada vale seguir reconociendo y proclamando catálogos de derechos, si la mayoría de sus destinatarios (y potenciales sujetos) se sitúan por debajo de las condiciones mínimas de bienestar que permiten al hombre ejercitar esos aspectos de su libertad (enseñar y aprender, circular por el territorio, usar y disponer de la propiedad, practicar sus creencias religiosas, formar familia, etcétera)”⁷¹⁰.

La democracia conlleva exigencias y garantías, y sólo una sociedad en donde la participación plena esté asegurada, por lo menos en su vertiente natural de votar y ser

⁷⁰⁶ V. JORGE PRATS, E., *op. cit.*, pp. 33-34.

⁷⁰⁷ BOBBIO, N., *op. cit.*, p. 82.

⁷⁰⁸ *Ibidem*, p. 82.

⁷⁰⁹ *Ibidem*, p. 10.

⁷¹⁰ VANOSSI, J. R., *op. cit.*, p. 129.

elegido, puede haber una sincera proyección de tratar de perseguir los derechos sociales, pues la mecánica de todo lo concerniente a la democracia es lo que permite el funcionamiento del sistema, que garantiza a la vez, por la pluralidad de la democracia, la restitución de derechos violados, razón que evidencia que Estado social se contrapone a Estado totalitario.

IV.5.2 La Constitución de Querétaro

Si bien la Constitución de Querétaro no tuvo la repercusión que tuvo la Constitución de Weimar en el constitucionalismo, para los países de Latinoamérica la misma significó su principal fuente a la hora de extrapolar disposiciones que aseguraran un bienestar mínimo de condiciones en las Constituciones. Por tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representó un hito puesto que incluso es la primera Constitución que establece derechos sociales, mas su impacto en el mundo jurídico político de Europa no fue mucho⁷¹¹.

La Constitución de Querétaro disponía que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”⁷¹². Con este artículo se introduce la protección a los derechos pero también se convierte en garantía de los mismos. Éste sólo es uno de los tantos derechos de la Constitución del 1917, la cual “Sin posibilidad de error o equivocación, de acuerdo con los hechos históricos y el más elemental análisis de los mismos, se debe reconocer y proclamar que los derechos sociales que consagra la Constitución Política mexicana de 1917 son la realización institucional de los ideales y aspiraciones, de los sentimientos,

⁷¹¹ Vid. GARCÍA RAMÍREZ, S. (2002): *Temas de derecho*, Universidad Autónoma del Estado de México, México D. F., pág. 75; Para ampliar más sobre la Constitución de Querétaro y los debates que se realizaron para la conformación de la misma vid. *Diario de los debates del Congreso constituyente 1916-1917*, tomo I, Comisión Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclamación de la independencia nacional y del cincuentenario de la revolución mexicana, 1960, en <http://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/images/debatesI.pdf>; y Vid. *Diario de los debates del Congreso constituyente 1916-1917*, tomo I, Comisión Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclamación de la independencia nacional y del cincuentenario de la revolución mexicana, 1960, en <http://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/images/debatesII.pdf>

⁷¹² Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 1917, también llamada Constitución de Querétaro.

que dieron contenido al repertorio de ideas y creencias que animaron el pensamiento de la Revolución mexicana de 1910 y, con ello, fueron la bandera que inspiró y animó a los hombres que participaron en ella”⁷¹³.

Por igual dispone la aludida Constitución que “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares”⁷¹⁴, asimismo “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”⁷¹⁵.

A su vez la Carta Magna enunció derechos laborales como, una duración de 8 horas de jornada de trabajo; siete horas de trabajo nocturno; se prohibió el trabajo de alto riesgo para las mujeres y los menores de 16 años; se previó un día de descanso por cada 6 días trabajados; se dispuso de un régimen especial para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; se fijó el salario mínimo atendiendo a las condiciones de las regiones del Estado, educación, honestidad, y favorece la participación en las utilidades⁷¹⁶.

Hay varias disposiciones que merecen ser destacadas. Para “trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”⁷¹⁷, este es un punto que hasta en la actualidad alcanza toda admiración puesto que derrumba el muro de la discriminación, más aún en el tema de género, por lo cual tanto se ha luchado; Y “El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento”⁷¹⁸, como la otra disposición esta tiende a tener un origen sumamente avanzado a fin de asegurar que el trabajador pueda contar con los recursos mínimos para garantizarse a sí mismo como a su familia un cierto nivel de vida.

Así el artículo 123 arguye que: “En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados a proporcionar a los

⁷¹³ NORIEGA CANTÚ, A., *op. cit.*, 101.

⁷¹⁴ Artículo 2, de la *Constitución de Querétaro*.

⁷¹⁵ Artículo 9, *ibídem*.

⁷¹⁶ Artículo 123, *ibídem*.

⁷¹⁷ Artículo 123, *ibídem*.

⁷¹⁸ Artículo 123, *ibídem*.

trabajadores, habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas”⁷¹⁹.

Este artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue toda una promesa en materia de los derechos sociales en tiempo en donde las luchas por las conquistas obreras aún trataban de dar sus frutos. La influencia que tuvo la Constitución de Querétaro en los Estados Unidos Mexicanos ha sido notoria en sus leyes y en el desarrollo de la doctrina en dicho Estado, y no solamente en el mismo México, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica que hicieron acopio en sus textos de las disposiciones de la Constitución de Querétaro⁷²⁰.

IV.5.3 La Constitución de Weimar

La llegada al poder de la social democracia en la Alemania implicó una reforma constitucional, cuyos constituyentes sancionaron el día 11 de noviembre del 1919, la llamada Constitución de Weimar, la cual conjuntamente con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 1917 conformaron el Constitucionalismo Social del período de entreguerras. En el caso de la Constitución de Weimar tuvo una mayor preponderancia debido a la influencia que siempre ha tenido la Alemania a lo largo de su historia. Entre las disposiciones legales que caben destacarse están “El matrimonio, fundamento de la vida familiar y de la conservación y aumento de la nación, queda bajo la protección especial de la Constitución. Se basa en la igualdad jurídica de los dos sexos. Incumbe al Estado y a los Municipios mirar por la pureza, sanidad y mejoramiento de la familia. Las familias numerosas tienen derecho a medidas de protección compensadoras. La maternidad tiene derecho a la protección y auxilio del Estado”⁷²¹. Aquí el Estado hace un compromiso con la familia como unidad de la sociedad⁷²².

⁷¹⁹ Artículo 123, *ibídem*.

⁷²⁰ Vid. CRD del 1963.

⁷²¹ Artículo 119, de la Constitución del Imperio (Reich) Alemán del 1919.

⁷²² Vid. LÓPEZ OLIVA, J. O.: “La Constitución de Weimar y los derechos sociales” en *Prolegómenos, derechos y valores*, volumen XIII, núm. 26, pp.233-243, Bogotá, diciembre 2010, pág. 233; RUDOLF

Así también expresa que “la educación de la prole para el desarrollo corporal, espiritual y social, constituyen el deber supremo, y un derecho natural de los padres; la comunidad política velará su cumplimiento”⁷²³, como “La juventud será protegida contra la explotación, así como contra el abandono moral, espiritual o físico. El Estado y el Municipio organizarán las instituciones necesarias al efecto. Las medidas de asistencia que tengan carácter coactivo no podrán aplicarse sino en virtud de una ley”⁷²⁴. Estas disposiciones se establecen como un objetivo del Estado, que debe ser un mandato, incluso para las autoridades municipales.

La Constitución de Weimar abre el camino hacia la libertad de asociaciones que como todas las disposiciones de este tipo, la asociación nunca debe ser para asuntos tipificados como ilegales⁷²⁵. Por igual, se promueve la educación de los jóvenes⁷²⁶, y se instituye que “...la vida económica debe responder a principios de justicia, con la aspiración de asegurar a todos una existencia digna del hombre...”⁷²⁷; de lo cual se induce a la justicia social y a una distribución equitativa de la riqueza.

La Constitución promueve la vivienda a las familias alemanas, especialmente a las familias más numerosas, y lo extiende desde el gobierno central hasta los municipios⁷²⁸; igualmente se protege el trabajo y la protección de los derechos obreros⁷²⁹; se implanta que “En todas las profesiones la libertad de asociación para la defensa y mejora de las condiciones del trabajo y de la vida económica deben ser garantizadas a todos los individuos. Todos los acuerdos y medidas que pretendan restringir o impedir esta libertad son nulos”⁷³⁰.

Los constituyentes de Weimar acordaron que “Para atender a la conservación de la salud y de la capacidad para el trabajo, a la protección de la maternidad y a la previsión de las

HORN, H.: “El constitucionalismo alemán en las postrimerías del siglo XX”, AA.VV.: *El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX*, Tomo III, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988, pp. 217 y ss; HERRERA, C. M.: “Estado, Constitución y derechos sociales” en *Revista derecho del Estado*, núm. 15, pp. 75-92, diciembre 2003, pág. 75.

⁷²³ Artículo 120, de la *Constitución del Imperio (Reich) Alemán del 1919*.

⁷²⁴ Artículo 122, *ibídem*.

⁷²⁵ Artículo 124, *ibídem*.

⁷²⁶ Artículo 143, *ibídem*.

⁷²⁷ Artículo 151, *ibídem*.

⁷²⁸ Artículo 155, *ibídem*.

⁷²⁹ Artículo 157, *ibídem*.

⁷³⁰ Artículo 159, *ibídem*.

consecuencias económicas de la vejez, la enfermedad y las vicisitudes de la vida, el Imperio creará un amplio sistema de seguros, con el concurso efectivo de los interesados”⁷³¹. Con ello se organiza un sistema de seguridad social. También “El imperio luchará por obtener una reglamentación internacional de las relaciones jurídicas de los trabajadores, con objeto de asegurar a toda la clase obrera de la humanidad, un *mínimum* general de derechos sociales”⁷³². Los constituyentes introdujeron esta fórmula que abre paso al derecho internacional y muy especialmente en el aspecto de los trabajadores, lo cual cobra vida con los distintos acuerdos y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo.

IV.6 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Con la terminación de la primera guerra mundial y tomando en cuenta los catorce puntos del Presidente Woodrow Wilson⁷³³, se firma el Tratado de Paz de Versalles el 28 de junio del año 1919, el cual auspiciaba la creación de la Sociedad de las Naciones y la creación de una Oficina Internacional del Trabajo⁷³⁴. Esta última motivada por las crecientes protestas que se realizaron y por el consiguiente aumento de los movimientos obreros a nivel mundial. El tratado argumentaba que:

Visto que existen condiciones de trabajo que implican para un gran número de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo que engendra un tal descontento que la paz y la armonía universales son puestas en peligro, y atento que es urgente mejorar esas condiciones por ejemplo, en lo que concierne a la reglamentación de las horas de trabajo, a la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, al reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra la desocupación, la garantía de un salario que asegure condiciones de existencia convenientes, la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales o profesionales y los incidentes resultantes del trabajo, la protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, las pensiones de vejez y de invalidez, la defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, la afirmación del principio de la libertad sindical, la organización de la enseñanza profesional y técnica y a otras medidas análogas; Visto que la no adopción de un

⁷³¹ Artículo 161, *ibídem*.

⁷³² Artículo 161, *ibídem*.

⁷³³ El Presidente Wilson de los Estados Unidos fue unas de las personas que motivó la creación de la Sociedad de las Naciones, quien propuso una serie de catorce puntos que ayudaban en las relaciones interestatales, y en su último punto propuso la creación de una organización internacional que los Estados partes pudieran utilizar para sus fines.

⁷³⁴ Vid. Documento sobre la Organización Internacional de Trabajo en <http://www.situn.org/wp-content/uploads/info-general-oit.pdf>

régimen de trabajo realmente humano es un obstáculo puesto a los esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países⁷³⁵.

Estas motivaciones del Tratado de Versalles son las que dan origen a la Organización Internacional del Trabajo y son justamente dichas motivaciones las mismas que impulsaron al movimiento obrero a las distintas protestas, y no sólo ello, sino que indujeron a las codificaciones en materia de derecho del trabajo. Cuando se analiza la Constitución de Querétaro del 1917 en contraposición del Tratado de Versalles y la Constitución de Weimar, se puede ver lo ingenioso que fueron los mexicanos en las consideraciones de los principios de justicia social, que incluso hoy en día muchas personas reclaman, por ejemplo, en la República Popular China aún están padeciendo del sufrimiento de los maltratos laborales, y de la indiferencia de sus autoridades para contrarrestar el mal, así como en tantas otras naciones⁷³⁶.

IV.6.1 La comunidad internacional y sus esfuerzos

La creación en 1919 de la OIT, y la posterior creación de la ONU, trajo como consecuencia que la comunidad internacional se interesara por atender a las necesidades que presentaban los países en donde no podían cumplirse los derechos del Estado social. En virtud de lo cual se han realizado muchas conferencias internacionales sobre diferentes tópicos como, desarrollo social, derechos humanos, la alimentación, sobre el medio ambiente, sobre el trabajo, sobre la infancia, el racismo, entre otros. Estas conferencias siempre han venido a terminar en la firma de una declaración, convenio o tratado internacional en la materia de que se ha tratado.

Los objetivos de desarrollo del milenio han sido la mayor manifestación de preocupación real que ha tenido la comunidad internacional, pues preveían un seguimiento a ocho temas sustanciales como, la erradicación de la pobreza extrema, enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre hombres y mujeres, reducción de la mortalidad infantil,

⁷³⁵ Sección I, Parte XIII del *Tratado de Versalles* del 1919.

⁷³⁶ Vid. Resumen de informe de Amnistía Internacional en <https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/asa170521990es.pdf>

mejoramiento de la salud materna, combate en contra del VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, la lucha por un medio ambiente sostenible y el fomento de un acuerdo para el desarrollo⁷³⁷. Estos objetivos son evaluados constantemente por la ONU y sus organismos para que los Estados tomen los correctivos de lugar donde se haga necesario

IV.7 El Estado como garante de derecho

La sentencia T406 del 1992, expedida por el Tribunal Constitucional de Colombia ha analizado admirablemente el concepto de Estado social de derecho, lo cual se pretende dilucidar. La Corte comprendió, como bien lo han hecho los doctrinarios en la materia, que el término “social” “no debe ser entendido como una simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del derecho y del Estado. Una larga historia de transformaciones institucionales en las principales democracias constitucionales del mundo, está presente para dar testimonio de la trascendencia de este concepto”⁷³⁸.

El Tribunal alude a que el Estado Social va en dos direcciones, una de índole cualitativa y otra de índole cuantitativa, mientras que la primera se decanta por la efectividad, la segunda se decanta por la proliferación de los textos en protección de estos derechos, y asevera que el fundamento de este Estado social está en “pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos”⁷³⁹. Instaurando un deber a la eficacia por la consecución del goce real de estos derechos.

La Corte también manifestó que “intervención no se manifiesta sólo como el mecanismo necesario para solucionar una disfunción, sino también, y sobre todo, como un elemento indispensable para mejorar las condiciones de comunicación entre el derecho y la sociedad”⁷⁴⁰, aquí los magistrados se refieren al papel que tenía el juez en el constitucionalismo clásico, arguyendo al papel que debe de tener el juez en el

⁷³⁷ Vid. *Informe sobre los objetivos de desarrollo del milenio del 2015*, en http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

⁷³⁸ Sentencia T-406/92.

⁷³⁹ *Ibidem*.

⁷⁴⁰ *Ibidem*.

constitucionalismo social, y añaden “En el Estado intervencionista se desvanece buena parte de la importancia formal (validez) y de la importancia material (justicia) de la ley”⁷⁴¹, importando sólo el fiel cumplimiento de los derechos sociales de los cuales se ha impedido el goce.

En la referida sentencia se destaca el Estado social de derecho que prevé la Constitución colombiana del 1991, la cual en su artículo 1, expresa que: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”⁷⁴², concibiendo los jueces del tribunal que este artículo no es sólo un postulado, sino que estos elementos mencionados son parte del Estado colombiano⁷⁴³.

Los principios y derechos que se establecen son el eje transversal de toda Constitución, motivo por el cual la participación, la organización del Estado, los derechos, los procedimientos de control, el territorio y su organización, los procedimientos de reforma a la Constitución, son canales de los principios y valores, no siendo posible hacer interpretaciones fuera de dichos principios y valores⁷⁴⁴. Constituyendo que los principios y valores estipulados en las constituciones deben de tener un carácter práctico, y ser tomados en cuenta incluso al momento de evaluar aspectos orgánicos de la Constitución.

La Corte resalta que:

No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo o de un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación, irradian todo el tramado institucional⁷⁴⁵.

⁷⁴¹ *Ibidem*.

⁷⁴² Constitución de la República de Colombia 1991. En lo adelante CC.

⁷⁴³ Sentencia T-406/92.

⁷⁴⁴ *Ibidem*.

⁷⁴⁵ *Ibidem*.

La Corte recae sobre el mismo punto de la aplicación directa de los principios y derechos que inspiran la Constitución. Y hacen referencia a la clasificación que existe entre valores, principios y reglas, y a la aplicabilidad de estos.

Si bien la Corte entiende la fortaleza de los valores, como edifica Eduardo Jorge Prats “Así, el valor justicia, entendido como una exigencia estrechamente vinculada a la dignidad humana, puede fundamentar la inconstitucionalidad de toda norma legal que prohíba la revisión de las sentencias sobre la base que altera el principio de la autoridad de la cosa juzgada o de la seguridad jurídica”⁷⁴⁶, no menos cierto es que la misma Corte estima que “Los valores son definitorios a la hora de resolver un problema de interpretación en el cual está en juego el sentido del derecho, no son normas de aplicación directa que puedan resolver, aisladamente, un asunto”⁷⁴⁷. Considerando los jueces que los valores pueden aplicarse de manera directa cuando se ven en su conjunto, pero no resuelven un proceso por sí solos.

La sentencia hace referencia a los principios constitucionales, asentando la diferencia de que los principios, contrario a los valores, establecen metas, prevén mandatos jurídicos, lo que permite que se conviertan en normas de aplicación directa, por los legisladores, y por el tribunal constitucional, sin necesidad de ser visto en su conjunto sino aisladamente. El profesor Eduardo Jorge Prats dispone que “los principios cumplen una función propiamente constitucional, o sea, constitutiva del ordenamiento jurídico”⁷⁴⁸, lo que aprueba su aplicación directa.

Aquí es donde se encuentra uno de los ejes fuertes de la decisión del tribunal, al entender que:

Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los artículos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo 1); la soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se refieren a la naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados⁷⁴⁹.

⁷⁴⁶JORGE PRATS, E., *op. cit.*, 188.

⁷⁴⁷ Sentencia T-406/92.

⁷⁴⁸ JORGE PRATS, E., *Derecho constitucional, volumen I...*, pág. 185.

⁷⁴⁹ Sentencia T-406/92.

La importancia de esta parte radica en que el Estado social de derecho y otros puntos constitucionales se hayan considerados principios, y por ende tengan una aplicación directa sobre cualquier asunto, por lo que el Estado social de derecho no es un simple postulado decorativo, sino que su aplicación debe ser tomada en cuenta por congresistas y por el juez que interpreta y aplica las normativas constitucionales. La Corte intuye que “Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jurídicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del mañana”⁷⁵⁰. La Corte discrimina entre los valores y los principios y asegura que los valores son normas que están dirigidas, por lo común, a las fuentes creadoras del derecho, mientras que los principios comprenden con un deber ser en particular, dando cierto campo de acción legal y judicial, existiendo las únicas diferencias de grado y eficacia⁷⁵¹.

El Tribunal también refiere que los contrastes entre las reglas y los principios no tienen carácter normativo, sino que responden, por igual, a cuestiones de eficacia. Del mismo modo se expresa Robert Alexy: “los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes” y las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no⁷⁵².

Los Magistrados distinguen sabiamente entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social, indicando como bien es sabido que todo derecho carga al Estado con una obligación, y aquí se pone la duda de si el juez sin que un derecho haya sido reglamentado por ley podría aplicarlo, resolviendo la Corte que en el constitucionalismo clásico esto no podría ser, pero que “los nuevos postulados del Estado

⁷⁵⁰ *Ibidem*.

⁷⁵¹ *Ibidem*.

⁷⁵² Cit. por JORGE PRATS, E., *op. cit.*, p. 188.

social y las nuevas relaciones jurídicas derivadas del Estado bienestar imponen un cuestionamiento de esta solución”⁷⁵³.

El hecho de asegurar los derechos sociales radica en que el disfrute de los mismos va relacionado con el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se tiene que retomar el presupuesto de que los derechos sociales vienen a dar cumplimiento a los derechos civiles y políticos, sacándolos de su ámbito de simple formalidad, y tal efectividad es la garantía de los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales son un todo que se necesitan los unos a los otros, pues el cumplimiento de todos hace que no sean simples decoraciones constitucionales⁷⁵⁴.

Los derechos contenidos en la Constitución obedecen al presente, como tal es de aplicación inmediata, por ende no debe confinarse a la relación del constituyente con el legislador, debiendo el juez garantizar el goce de los derechos sociales. No puede dejarse la eficacia y validez de los derechos en manos del legislador, pues la no actuación de este conllevaría a una negación de los derechos, lo cual no debe suceder⁷⁵⁵. El Tribunal Constitucional Federal Alemán dispone que el tribunal no puede ser impotente respecto a la inoperancia del legislador⁷⁵⁶.

El Estado social de derecho y todo lo que implica, no es un concepto para adornar las constituciones, sino que ello engloba un engranaje que debe comenzar por el cumplimiento de los derechos sociales y las garantías para la protección de tales derechos, y, en este cumplimiento también debe de entrar el papel activo del Estado. Los individuos sólo pueden hablar de disfrute de sus derechos, en sentido general, cuando tienen asegurado las condiciones mínimas para la consecución de sus metas en su paso por la vida, y estas condiciones mínimas es a la que obedecen los derechos sociales y su construcción de la igualdad de oportunidades, para que las dificultades y logros que el individuo se pueda encontrar sólo sean producto de su capacidad, esfuerzo y cualidades. Para estos fines, el Estado social de derecho obliga a todas las instituciones del Estado,

⁷⁵³ Sentencia T-406/92.

⁷⁵⁴ *Ibidem*.

⁷⁵⁵ *Ibidem*.

⁷⁵⁶ ALEXY, R.: “Derechos sociales fundamentales” en *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dir.), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2000, p. 81.

dentro de lo cual se encuentran los jueces al momento de aplicar los derechos, muy especialmente los derechos sociales.

Los derechos sociales por las condiciones que deben de garantizar al individuo son considerados como derechos de igualdad, lo que se podría entender como un conjunto de normas desiguales para tratar de poner en condiciones de igualdad al individuo con otros individuos que gozan de sus plenos derechos gracias a sus condiciones⁷⁵⁷. Se podría afirmar que son derechos discriminatorios, pero una discriminación calificada como positiva. Pues como dice Böckenforde, *“si la libertad jurídica debe poder convertirse en libertad real, sus titulares precisan de una participación básica en los bienes sociales materiales; incluso esta participación en los bienes materiales es una parte de la libertad, dado que es un presupuesto necesario para su realización”*⁷⁵⁸. Por igual Alfonso Noriega Cantú, viendo las diferencias entre los derechos del Estado liberal y los derechos el Estado social asimila que es *“poco convincente, cuando en realidad se trata de formas que coinciden en ser, o aspiran ser, Estados de derecho y que además se complementan a no ser que se dé por sentado que libertad e igualdad son radicalmente incompatibles”*⁷⁵⁹.

*Esta tesis ha encontrado sus detractores, quienes se oponen contundentemente, pero sin un fundamento jurídico interesante, en eso, Hayek afirma que no tiene sentido alguno hablar de derechos sociales, puesto que no hay derechos sin una obligación añadida, por la razón de que no es posible saber quién sería el sujeto; puesto que no debe ser la sociedad por no ser considerada como un órgano con capacidad para deliberar*⁷⁶⁰.

Luis Prieto Sanchís entiende que:

...si la protección de todos los derechos supone una mínima estructura estatal, la de los derechos sociales resulta mucho más compleja, dado que ha de contar con una organización de servicios y prestaciones públicas sólo conocidas en el Estado contemporáneo; cabe decir que, en este punto, la distancia que separa a los

⁷⁵⁷ PRIETO SANCHÍS, L.: “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, AA.VV.: *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dirs), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D F., 2000, pp. 23-24.

⁷⁵⁸ *Ibidem*, pp. 23-24.

⁷⁵⁹ NORIEGA CANTÚ, A., *op. cit.*, p. 44.

⁷⁶⁰ NINO, C. S.: “Sobre los derechos sociales” en *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dirs) Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2000, pp. 137-138.

derechos civiles de los sociales es la misma que separa al Estado liberal decimonónico del Estado Social de nuestros días⁷⁶¹.

Sin embargo, el carácter prestacional que tienen los derechos sociales, hacen de ellos derechos de estructura muy compleja, en virtud de que dependen de las necesidades y posibilidades del Estado, y como tal, quizás el Estado no tenga la capacidad de cumplir las exigencias del derecho para con la sociedad. Un ejemplo de ello es el llamado “derecho al trabajo”, si se analiza a fondo, los Estados no están en capacidad de poner la tasa de desempleo en cero, sino a través de las complejidades que exigen la economía y peor aún, lo que exige la economía mundial y el libre mercado⁷⁶².

Tal hecho ocurre puesto que los derechos sociales pueden ser clasificados como normas vinculantes o no vinculantes, teniendo en el caso planteado un carácter no vinculante pero propio de la función estatal. Si el tribunal puede constatar la afectación de un derecho⁷⁶³, y aplicar la solución directamente, entonces quiere decir que se está hablando de un derecho vinculante, en razón de lo cual un estudio de la realidad de estos derechos obliga a examinar los programas que los Estados pueden tener en pro de tratar de mejorar las condiciones para el disfrute de los derechos; así como a analizar la aplicación directa de los derechos sociales por parte de los tribunales.

A medida que la sociedad se ha ido complejizando, y en los países en donde el liberalismo ha crecido de manera desmedida, así como en los países catalogados como en vía de desarrollo, y en los Estados en donde existe una pobreza extrema, el Estado ha cobrado más vida y no solamente se limita al ámbito jurídico, logrando legitimarse a medida que provee las condiciones necesarias a los individuos. Algunos autores puntualizan ciertos aspectos como parámetros del Estado en sus consecuciones sociales⁷⁶⁴:

- 1) El Estado se figura fruto de un acuerdo social, y las partes en este acuerdo son el Estado, los empleados, los empresarios, y una representación de la clase media.
- 2) Se interesa por las urgencias económicas de grandes sectores, por medio de la salud, la escolarización y la vivienda.

⁷⁶¹ PRIETO SANCHÍS, L., *op. cit.*, p. 20.

⁷⁶² ALEXY, R., *op. cit.*, p. 68 y ss.

⁷⁶³ *Ibidem*, p. 68.

⁷⁶⁴ CARBONELL, M. y FERRER MAC-GREGOR, E. (2014): *Los Derechos sociales y su justiciabilidad directa*, Ed. Flores, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., p. 15.

- 3) En el aspecto de las demandas del mercado tienen un rol de estabilizador.
- 4) Busca la paz social en los caminos de reforma en vez de poderes o movimientos fácticos.
- 5) El régimen fiscal de distribución es basado en la justicia social.
- 6) Se instituye como un extenso sector público, y su poder regulatorio por ende tiende a ampliarse.

A merced de estos autores “Las prestaciones...no son más que actuaciones del Estado (en forma de bienes y servicios) constatables y medibles, como lo pueden ser la construcción de hospitales, la provisión de equipamientos escolares, la creación de un sistema de pensiones para jubilados, un sistema de sanidad público, la construcción de viviendas o el financiamiento para adquirirlas, etcétera”⁷⁶⁵. Los derechos sociales lejos de ser algo abstracto, son perfectamente medibles, y esta medición es prueba de las actuaciones del Estado.

IV.8 Los Derechos en el Estado social

Los derechos contenidos en el Estado asistencial son los llamados derechos sociales, los cuales, también, como se ha visto, no sólo construyen derechos jurídicos sino derechos materiales, puesto que los mismos tienen la obligación de crearle el espacio necesitado a los individuos para el desarrollo de sus metas. Este espacio implica una serie de derechos que tienen aplicación directa y otros que constituyen mandatos al Estado, ya sea al legislativo o al ejecutivo. Dejando atrás las confrontaciones entre las teorías de los derechos del liberalismo clásico y las teorías del Estado social, en esta parte lo que interesa es mostrar cuáles son aquellos derechos sociales que los Estados tienen la obligación de tomar en cuenta para desarrollar sus políticas públicas a través del ejecutivo, pero que también el legislativo y los miembros del cuerpo judicial deben de tener pendiente al momento de ejercer sus respectivas funciones, ya que ello permitiría evaluar el funcionamiento del Estado social de derecho en los Estados fallidos, así como los esfuerzos que hacen los Estados para la conquista de estos derechos.

⁷⁶⁵ *Ibidem*, p. 33.

Los distintos derechos conocidos como sociales, al menos lo que han tenido un reconocimiento sine quanón para el desarrollo de la personalidad humana serán desarrollados y vistos por separados de los demás derecho sociales. Mas, en los derechos sociales algunos derechos obedecen a otros derechos o se interrelacionan con otros derechos o principios, en esa índole se tratarán aquellos que como se ha dicho son indispensable en el desarrollo humano.

IV.8.1. Derecho al trabajo

El derecho al trabajo viene a representar unos de los derechos que resultaron ser conquistas del movimiento obrero. La CRD del 2010 prevé que “La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”⁷⁶⁶. El Estado dominicano por ende no sólo se conforma con establecer el derecho al trabajo sino que se funda en el mismo trabajo, sin embargo los asambleístas dominicanos también acordaron que “El trabajo es un derecho, un deber y una función social⁷⁶⁷ que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado”⁷⁶⁸.

Los legisladores dominicanos utilizaron la referida fórmula tomando en cuenta el carácter de derecho no vinculante que tiene el derecho al trabajo, per se, dígase que no es de aplicación inmediata, pero no deja de ser derecho, y lo reconoce como una “función social

⁷⁶⁶ Artículo 7, CRD del 2010. El derecho al trabajo está goza de la protección de distintas circunstancias que permiten la viabilidad de éste derecho, en tal sentido la OIT ha expedido una cantidad necesaria de convenios cuyo trasfondo es la protección de este derecho, vid. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, núm.29; Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, núm. 87; Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, núm. 98; Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, núm. 100; Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, núm. 105; Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, núm. 111; Convenio sobre la edad mínima, 1973, núm. 138; Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, núm. 182; a estos le siguen una ingente producción de convenios por parte de la OIT destinados a la protección de este derecho disponibles en <http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO::>

⁷⁶⁷ El principio I del Código de Trabajo de la República Dominicana dispone que: “El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social”.

⁷⁶⁸ Artículo 62, de la Constitución de la República Dominicana del 2010.

que se ejerce con la protección y asistencia del Estado”, pues como establece Néstor Pérez Sagiúez hablando sobre la Constitución argentina y la jurisprudencia “sin embargo, no autorizaba a suponer que el Estado debía proporcionar trabajo a todo el que lo solicite”⁷⁶⁹ y dispone que “En la convención constituyente de 1957 quedó claro que el trabajo era, fundamentalmente una función social imbricado con la idea de justicia social”⁷⁷⁰.

El derecho al trabajo tal cual se ha visto no carga al Estado con el cumplimiento inmediato de otorgarle trabajo a todo aquel que lo necesite, pues su fin no es este, sin embargo este derecho puede tener cumplimiento inmediato en un determinado caso, pero lo que sí quedó claro es que como “función social” el Estado en su accionar intervencionista debe contemplar proyectos que promuevan la creación de puestos de trabajos dignos.

El derecho al trabajo es un derecho que a la vez engloba otros derechos, tales como derecho a “condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada...descanso, y vacaciones pagados, retribución justa y un salario mínimo, vital y móvil, frente a problemas inflacionarios”⁷⁷¹. El asambleísta dominicano, producto de la constitucionalización del derecho⁷⁷², previó estos derechos dependientes del derecho al trabajo, a saber:

1) El Estado garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo; 2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad; 3) Son derechos básicos de trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal; 4) La organización sindical es libre y democrática, debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes; 5) Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora; 6) Para resolver conflictos laborales y pacíficos se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los

⁷⁶⁹ SAGÜEZ, N. P. (2006): *Constituciones iberoamericana*, Argentina, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., p. 80.

⁷⁷⁰ *Ibidem*, p. 80.

⁷⁷¹ *Ibidem*, p. 80.

⁷⁷² Cfr. La ley 14-92, que estatuye el *Código de Trabajo de la República Dominicana*.

servicios públicos o los de utilidad pública; 7) La ley dispondrá, según lo requiera el interés general, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los salarios mínimos y sus formas de pago, la participación de los nacionales en todo trabajo, la participación de las y los trabajadores en los beneficios de la empresa y, en general, todas las medidas mínimas que se consideren necesarias a favor de los trabajadores, incluyendo regulaciones especiales para el trabajo informal, a domicilio y cualquier otra modalidad del trabajo humano. El Estado facilitará los medios a su alcance para que las y los trabajadores puedan adquirir los útiles e instrumentos indispensables a su labor; 8) Es obligación de todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores y trabajadores para la consecución de estos fines; 9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad; 10) Es de alto interés la aplicación de las normas laborales relativas a la nacionalización del trabajo. La ley determinará el porcentaje de extranjeros que pueden prestar sus servicios a una empresa como trabajadores asalariados⁷⁷³.

El derecho al trabajo al momento de ser considerado por un juez debe analizarse en su justa dimensión, así como los derechos inherentes a este derecho principal. Se podría decir que sin los intraderechos establecidos en el derecho al trabajo, éste sólo tendría una existencia formal, pues lo que le da verdadera existencia son estos intraderechos, que a la vez hacen del derecho al trabajo un derecho de un contenido esencial bastante definido. Si se ve desde un punto de vista estos intraderechos tienen en sí mismos la capacidad de aplicarse directamente, y desde otro punto de vista, el sentido global de estos le otorga su “función social”, que como se había señalado, éste y los demás derechos sociales son perfectamente medibles, por tanto la función social del Estado al respecto también.

Gracias a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho al trabajo se ha desarrollado de manera ágil⁷⁷⁴, puesto que la referida institución ha propiciado acuerdos

⁷⁷³ Artículo 62, CRD del 2010.

⁷⁷⁴ V. Convenios 105 y 29 de la Organización Internacional del Trabajo.

relevantes y ha expedido resoluciones que tienden a garantizar el derecho al trabajo, a su vez, los tribunales laborales han asumido las decisiones de la OIT con un carácter vinculante a la hora de emitir sus fallos, lo que repercute por igual para la función social del Estado a través del ejecutivo.

Otros elementos que se comprenden en el derecho al trabajo, es la libertad que tiene el trabajador para la aceptación de un puesto, lo que también tiene un significado intrínseco que se refiere a la no esclavitud, o alguna modalidad de ésta como el trabajo forzoso, por lo que nunca debe constreñirse la voluntad del trabajador para aceptar algún trabajo. El consentimiento del trabajador nunca debe de ser viciado, aun al trabajador se le protege en casos de trabajos que resulten ser peligrosos, aunque se cuente con su consentimiento.

IV.8.2 El derecho a la salud

El derecho a la salud es uno de esos derechos sociales que resultan ser muy controvertidos por lo que se refiere al posible alcance que han de tener, pues muchas veces no se sabe si su alcance entra al ámbito privado, y dentro del ámbito público se debate si se debe caracterizar por la gratuidad en los servicios médicos en los centros de atención que pertenecen al Estado, y más aún si un individuo puede ser atendido en un centro privado gratuitamente. En la República Dominicana siempre ha existido esta polémica, puesto que siempre se venía cobrando la denominada cuota de recuperación, que era una simple porción de dinero que debían pagar los pacientes al momento de ir a un centro de atención público. Recientemente esto fue eliminado, pero era un asunto tedioso, y para que a una persona no le cobraran esta cuota de recuperación debían agotar un proceso ante una oficina de asistencia social denigrando su dignidad; ahora el escenario se trasladó a la gratuidad de los servicios en el sector privado en caso de urgencia.

El derecho a la salud no puede ser un derecho imaginario. Este derecho se ventila en un doble sentido: en un sentido de prevención de enfermedades y otro de recibir atenciones médicas inmediatamente se presente la ocasión, lo que lo hace un derecho complejo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, y encargado de establecer un seguimiento continuo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido unos aspectos básicos del derecho a la salud, como: 1) Agua bebible y servicios sanitarios

apropiados; 2) Alimentos sanos; 3) Viviendas óptimas; 4) Información sobre la salud; 5) la igualdad de género⁷⁷⁵.

Lo que se deduce de lo argüido por el referido órgano es la orientación del sentido preventivo que debe tener este derecho, y al mismo tiempo, permite darse cuenta que lo que aquí se anuncian como condiciones obedecen a mandatos de derechos sociales, y es una muestra de la interrelación de los derechos y la unicidad de los mismos. Pues dicho órgano también expresa que el derecho a la salud comprende prerrogativas intraderechos, tales como: 1) El derecho a un sistema igualitario de salud, lo que indica que el paciente sin recursos debe de recibir las mismas atenciones que un paciente con recursos; 2) El paso a medicamentos indispensables; 3) El derecho a ser asistidos preventivamente, a tratarse los padecimientos y recibir el seguimiento de las enfermedades; 4) La salud en segmentos débiles de la población como la maternidad, infancia y lo concerniente a la reproducción; 5) Acceder a información sobre la educación; 6) Participación activa de la población en asuntos concernientes a salud⁷⁷⁶.

El servicio de las atenciones médicas debe cumplir con ciertas exigencias, destacando que debe ser gratuito; debe de haber un fácil acceso a los servicios, que se traduce en hospitales por cada cierto número de habitantes y que cumplan con las especialidades necesarias; profesionalidad en el servicio, lo que equivale a decir, buenos salarios a los médicos, capacitación continua; instalaciones con buenas condiciones sanitarias.

El derecho a la salud ha estado combinado al derecho de libertad, puesto que el individuo para desarrollar sus facultades y alcanzar lo que para él es la felicidad, necesita gozar de una salud estable, en modo alguno esto significa que el individuo no se puede enfermar o nacer con alguna incapacidad; las cosas que se consideran naturales y escapan al Estado y los individuos no hay formas de controlarlos, pero la incapacidad debe tratarse como un sector muy vulnerable, y por tanto deben tomarse las medidas necesarias que le permitan a este segmento tratarse y tener una vida igual que la que tienen todos los individuos, y lo mismo ocurre con las enfermedades terminales.

La salud como derecho, como se ha visto, protege a los segmentos vulnerables, verbigracia, la Declaración de los Derechos del Niño fija que: “El niño debe gozar de los

⁷⁷⁵ *El derecho a la salud. Alta Folleto informativo No. 31, Comisionado para los derechos Humanos y Organización Mundial de la Salud, pág. 3.*

⁷⁷⁶ *Ibidem*, pág. 4.

beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”⁷⁷⁷; asimismo, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial dispone: “El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales”⁷⁷⁸, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer asienta: “El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción”⁷⁷⁹. En el mismo tenor se refieren muchas otras convenciones internacionales que extienden el brazo del derecho a la salud⁷⁸⁰.

Se puede observar que la CRD hace acopio de lo dispuesto por las Organizaciones Internacionales sobre las condiciones requeridas en el derecho a la salud, y muy importante es que ordena al Estado cumplir con algunas funciones que se necesitan para el disfrute pleno de este derecho. Y, cuando se refiere a organizaciones internacionales lo hace de manera general, en vista de que las organizaciones que están procurando la salvaguarda del referido derecho son muchas. Sin embargo, en este espacio se quiere destacar la enorme labor llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud, organismo dependiente de las Naciones Unidas, dedicada a la promoción de la salud mundial, se podría decir que es el órgano de mayor autoridad en el desarrollo del derecho a la salud.

IV.8.3 Derecho a la seguridad social

La seguridad social nace como un derecho ligado al derecho al trabajo y por ende al movimiento obrero. Las primeras referencias se encuentran en las leyes de Otto Von Bismarck sobre seguro de enfermedad y la maternidad del año 1883, la de accidentes

⁷⁷⁷ Artículo 4, *Declaración de los Derechos del Niño del 1959*.

⁷⁷⁸ Artículo 5.e.iv, de la *Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial*.

⁷⁷⁹ Artículo 11.f, de la *Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*.

⁷⁸⁰ Ver artículo 12, del *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*; artículo 24 de la Convención sobre los derechos del niño; artículos 28.43.e y 45.c., de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; artículos 25 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

laborales del año 1884 y sobre el seguro de enfermedad, de la jubilación y de la defunción del año 1889⁷⁸¹. Este origen, en principio llevó a la confusión de ambos derechos, en la actualidad son derechos completamente distintos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”⁷⁸². La OIT especificó sabiamente que la seguridad social es:

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos⁷⁸³.

La seguridad social como derecho se asocia, como todas las prerrogativas sociales, al derecho de igualdad, pues éste es uno de los pilares fundamentales de tales derechos, buscando con ello que todos tengan la misma oportunidad. La OIT ha establecido entre otras cosas respecto a este derecho que los miembros de la Organización deben “garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo...”⁷⁸⁴, asimismo “La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencia”⁷⁸⁵.

Un aspecto interesante del derecho a la seguridad social es que incluye en la función protectora al sector privado, incluso asignándole una sanción por el incumplimiento de su rol en el sistema de seguridad social, lo cual también ocurre en el derecho al trabajo en donde la función del sector privado en combinación con el Estado y los trabajadores, se hace indispensable para el respeto de dicho derecho.

⁷⁸¹ Carbonell, Miguel., y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, op. cit., p. 11.

⁷⁸² Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁷⁸³ Administración de la seguridad social 1991. OIT.

⁷⁸⁴ Artículo 7, del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, núm. 102.

⁷⁸⁵ Artículo 8, *ibídem*.

IV.8.4 Derecho a una vivienda digna

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone el: “Derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia”⁷⁸⁶, de este postulado se infiere el derecho a una vivienda digna lo cual se debería leer, acorde a ONU HABITAT como “vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”⁷⁸⁷.

El derecho a una vivienda entrevé algunas libertades como: 1) la defensa contra la expulsión forzada de una residencia; 2) la prerrogativa de evitar injerencias en el hogar; 3) la libre determinación a la lección de su vivienda y a la libre circulación⁷⁸⁸. Este derecho a una vivienda adecuada contiene intraderechos; 1) certeza de la tenencia de la vivienda; 2) restitución de la vivienda y el peculio; 3) la igualdad en el acceso a una vivienda digna; 4) participación en la población en los asuntos referentes a viviendas⁷⁸⁹. El derecho a la vivienda no constituye un derecho simple, puesto que el papel del Estado adquiere relevancia por motivo de éste, “el derecho a la vivienda genera obligaciones lo mismo para las administraciones públicas, que para los Congresos o Parlamentos”⁷⁹⁰. Gerardo Pisarelo argumenta que: “El derecho a una vivienda adecuada no sólo supone... la provisión de viviendas de protección oficial sino también el cumplimiento de otras obligaciones estatales no necesariamente costosas: desde el reconocimiento de seguridad jurídica en la tenencia o la interdicción de las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, hasta la derogación de preceptos discriminatorios en las leyes urbanísticas o la prohibición de desalojos arbitrarios”⁷⁹¹.

Las personas vulnerables también deben de gozar de protección en el derecho a la vivienda digna, por eso Abramovich y Courtis expresan que: “...el contenido mínimo en relación a grupos obliga al Estado a identificar a las personas en situación de vulnerabilidad para asegurarles el disfrute de sus derechos sociales; por ejemplo en materia de derecho a la vivienda se considera como grupo vulnerable a los ancianos sin

⁷⁸⁶ Artículo 11, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

⁷⁸⁷ *Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU HABITAT. El derecho a una vivienda adecuada, Folleto informativo No. 21*, pág. 3.

⁷⁸⁸ *Ibidem*, pág. 3.

⁷⁸⁹ *Ibidem*, pág. 3.

⁷⁹⁰ CARBONELL, M., y FERRER MAC-GREGOR, E., *op. cit.*, pág. 21.

⁷⁹¹ *Ibidem*, pág. 30.

recursos y a las personas con discapacidad; en relación a ellos el Estado debe suministrar una protección especial”⁷⁹².

Aún los términos de qué es “digno” y qué es “adecuado” en el derecho a la vivienda no encuentran sus límites, aunque los organismos internacionales han fijado las pautas para considerar dichos términos, sin embargo todavía en el ámbito jurídico político el debate no termina.

IV.8.5 Derecho a la educación

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la educación, coincidiendo los Estados en que la educación tiene que dirigirse al desarrollo de la personalidad humana, y debe afianzar el respeto por las libertades fundamentales. Los Estados acordaron tomar en cuenta algunos parámetros a los fines de viabilizar el derecho a la educación; 1) establecer la educación primaria como una obligación, la cual deberá de ser completamente gratuita; 2) la implementación de la educación secundaria, técnica y profesional, la cual debe de ser accesible, y debe de encaminarse por los senderos de la gratuidad; 3) la educación superior tiene que ser accesible y gratuita, tomando las iniciativas que conlleven a ello; 4) Promover la educación fundamental; 5) Promover las becas y la capacitación continua, así como mejorar el sistema escolar en todas las escalas de la educación. También los Estados reconocen el sistema privado de educación que igual deben cumplir con las exigencias requeridas, y, el acuerdo insta a los Estados al cumplimiento de la gratuidad en la educación primaria⁷⁹³.

La educación debe de ser de calidad, de lo que se colige que la educación debe preparar a los individuos para un trabajo adecuado, para equilibrar su vida, desarrollar sus capacidades y cualidades, deberán de estar en capacidad de conocer sus derechos, como sus deberes en la sociedad. Además, esa calidad significa que el individuo será preparado para que tenga como opción la enseñanza universitaria. Asimismo, el cuerpo docente de los centros educativos debe gozar de capacitación continua acompañada de evaluación continua.

⁷⁹² *Ibidem*, pág. 52.

⁷⁹³ Artículos 13 y 14, del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales.

El individuo en su calidad de estudiante en todos los ciclos debe disfrutar de valores como la confianza, la tolerancia, la integridad, la libertad, la igualdad, el respeto de su dignidad, debiendo de ser garantizados por sus docentes, por lo que todo tipo de maltrato ha de estar sancionado, por lo cual el modo de corregir a un niño nunca deberá de ser el maltrato. El Estado por igual tendrá que comprometerse con la erradicación del trabajo infantil, pues este es uno de los males que impulsa a la deserción escolar.

El derecho a la educación en sí mismo garantiza que los ciudadanos puedan disfrutar de su libertad en los derroteros de la vida, pues un individuo escolarizado ha de ser un individuo que conoce sus derechos, cumple con sus derechos pero también entiende cuáles son las garantías que protegen sus derechos, y por ende su ámbito de libertad crece a medida que recibe más educación. El fortalecimiento por conseguir un índice de cero en la erradicación del trabajo infantil debe de ser un hecho constatable por parte de los Estados, así como la obligación en la enseñanza primaria, y, a escolaridad de las personas analfabetas.

IV.8.6 El derecho a la alimentación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”, como tal la alimentación es un derecho universalmente reconocido. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define la alimentación del siguiente modo: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”⁷⁹⁴.

Para los organismos de las Naciones Unidas el derecho a la alimentación debe contener varios aspectos en torno al alimento. El alimento tiene que estar disponible, asequible y apropiado. En cuanto a la disponibilidad, este hace referencia, primero, a que los alimentos se obtengan de recursos naturales, y segundo, que los mismos estén a la venta; respecto a la asequibilidad, el mismo hace eco de que los alimentos deben tener costos

⁷⁹⁴ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la FAO. *El derecho a la alimentación adecuada*, Folleto No. 34, p. 3.

que todos los individuos puedan obtenerlos, o que el Estado busque la forma de que llegue a los más necesitados y a la población en sentido general; mientras que el aspecto apropiado hace referencia a la dieta acorde para cada segmento de la población, es decir que los niños, jóvenes, adolescentes puedan contar con alimentos que contengan lo que les asegure que puedan disfrutar y desarrollar sus habilidades, por igual los incapacitados y las personas de edad avanzada deben de tener los alimentos propios para sus respectivos desarrollos.

La contraposición más inmediata del derecho a la alimentación es el hambre, por ello se asienta que los Estados deben reconocer el derecho fundamental de todo individuo a ser defendido en contra del hambre, debiendo los Estados adoptar las medidas y los programas propicios a fin de optimizar las etapas de procesamiento de alimentos hasta llegar a su destino final, así como motivar a la investigación técnica y científica. Y, lograr una distribución mundial basada en las necesidades de los países, atendiendo a los productos que se exportan como a los que se importan⁷⁹⁵.

Si las exigencias de las organizaciones internacionales al respecto son tal que estiman que la alimentación debe cumplir algunas condiciones para su optimización, es porque el combate en contra del hambre debe ser real, para lo cual el Estado tiene que tomar medidas que incluso estén fundamentadas en la relación de salario mínimo, educación, vivienda y alimentos, así como debe de ser una opción para el Estado en algunos casos el subsidio en la materia.

IV.8.7 Derecho al deporte y a la educación física

El deporte como derecho se ha convertido en uno de aquellos derechos que se han tornado novedad en las constituciones de Latinoamérica, así como en la normativa legislativa. La CE dispone que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”⁷⁹⁶. Por igual, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO estatuye que: “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física

⁷⁹⁵ *Ibidem*, pág. 9.

⁷⁹⁶ Artículo 43.3, CE.

y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social”⁷⁹⁷.

Los sistemas jurídicos de las naciones han ido haciendo eco de los tratados internacionales, y en el caso del derecho al deporte esto no ha pasado desapercibido, pues si se hace una comparación de lo estipulado por la Constitución dominicana con las disposiciones de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, se podrá notar que se toma como referencia dicha normativa.

La Convención sobre los derechos del Niño enuncia que: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”⁷⁹⁸. Este esparcimiento mencionado en la convención sobre los derechos del niño se relaciona con el derecho al deporte y a la educación física. El derecho al deporte va de la mano con el derecho a la educación y el derecho a la salud, tanto es ello, que las normativas que se refieren al deporte literalmente ordenan que los mismos sean parte de las actividades que desarrollen los niños en los centros educativos.

Como se dijo anteriormente, este derecho ha ido calando, un ejemplo de este progreso es que hoy en día se está hablando de un derecho deportivo, ya no de un simple derecho al deporte y a la educación física, sino de toda una codificación cuya estructura va dirigida a la protección de este derecho, radicando la diferencia en que se trataría de una rama del derecho⁷⁹⁹.

⁷⁹⁷ Artículo 1, de la Carta Internacional de la educación física y el deporte.

⁷⁹⁸ Artículo 31.2, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

⁷⁹⁹ Vid. Código de derecho deportivo del Reino de España.

CAPÍTULO V. APLICACIÓN DE INDICADORES DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO COMO MECANISMO PARA DETERMINAR LA DEBILIDAD O FALLA DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA

En el capítulo anterior se trató como base el Poder y el modelo democrático de derecho y los derechos humanos, especialmente lo atinente a los derechos sociales, exponiéndose que en los sistemas democráticos, el cumplimiento de los procedimientos que impone el sistema es signo de que el Estado no está funcionando correctamente, mientras que un mal ejercicio, hasta el punto de que no se celebren elecciones es rasgo de la debilidad o fragilidad del Estado, pero no que un Estado sea fallido, pues siendo éste el supuesto también habría que analizar la ausencia del monopolio del Poder en el Estado. En tal sentido, como método para determinar si los Estados de Latinoamérica son fallidos se aplicarán los indicadores, que acorde al anterior capítulo deben ser tomados en cuenta para garantizar un Estado democrático basado en los derechos humanos.

V.1 La separación de funciones y el imperio de la Ley en los Estados de Latinoamérica: World Justice Project y el índice de Estado de Derecho

El índice del Estado de Derecho del 2015 emitido por la World Justice Project permite que se pueda apreciar la realidad de los países de Latinoamérica al respecto, sin embargo, a tal efecto sólo se analizará el indicador sobre las “Limitaciones a los poderes de gobierno”, en el cual se analiza la separación de los poderes y la sumisión a las leyes⁸⁰⁰.

La lista en este indicador, comenzando por las peores puntuaciones, la encabeza Venezuela, y no solamente en la región sino a nivel mundial, obteniendo una puntuación de 0.19, llevándola a ocupar el puesto 102, de los países evaluados; luego continúa Nicaragua, que tiene una puntuación de 0.35, ocupando el puesto 98 de los evaluados. La lista sigue con Bolivia con 0.38, Ecuador con 0.40, Honduras con 0.45, Argentina con 0.49, República Dominicana con 0.49, Guatemala con 0.51, México con 0.51, El Salvador con 0.52, Panamá con 0.53, Colombia con 0.55, Perú con 0.60, Brasil con 0.61, Jamaica con 0.61, Chile con 0.74, Uruguay con 0.76, Costa Rica con 0.78⁸⁰¹.

⁸⁰⁰ Vid. *Índice del Estado de derecho de World Justice Project 2015* en <http://worldjusticeproject.org/>

⁸⁰¹ *Ibidem*.

Para entender estas cifras, se comienza con 0.0, siendo esto lo más bajo y desfavorable, mientras que lo más alto y favorable es 1.0. Desde aquí se puede afirmar, que los Estados que mejor cumplen con la separación de Poderes y el imperio de la ley son Costa Rica, Uruguay y Chile, países estos que también ostentan un puesto señero con el índice de Estados fallidos de la FFP. Lo que se traduce en que el órgano ejecutivo del Poder Público en los referidos países no tiene un nivel de influencia que le permita incidir en los demás órganos del Estado que ejercen las funciones legislativas y judiciales, lo mismo a lo inverso, significa que el Legislativo y el Judicial ejercen el contrapeso adecuado sobre el órgano Ejecutivo⁸⁰².

Mientras que países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Argentina, República Dominicana, Guatemala, México, El Salvador, Panamá y Colombia, son países en donde el órgano Ejecutivo incide determinantemente en las decisiones del Legislativo y el Judicial, y del otro lado, estos no ejercen el contrapeso establecido en contra del órgano Ejecutivo. Y también, la cifra arrojada significa que los representantes de los órganos Ejecutivos no se someten a lo estipulado por la ley, y que en caso de violación de una norma, no se cumple con las investigaciones judiciales de lugar.

Por igual, países como Perú, Brasil y Jamaica se pueden considerar como países que intentan cumplir con la separación de Poderes, y con los mandatos internacionales, constitucionales y legales que son estipulados, pero que necesitan seguir avanzando en la materia. Y, otro punto que llama la atención es que los países que aparecen aquí entre los que han avanzado más según la medición, también aparecen en el Índice de Estados fallidos con una puntuación aceptable.

V.2 El sistema de partidos y los procesos electorales en los Estados de Latinoamérica como elementos esenciales del Estado democrático

El sistema electoral y los partidos políticos son el sostén de la democracia y del ESDD, por ello es necesario que a su vez, se proceda a ver los aspectos formales de algunos de los países de la región que entran en el índice de Estados fallidos dentro de las distintas categorías.

⁸⁰² *Ibidem*.

Al estudiar el sistema de partido en el caso colombiano se podría decir que la historia de dichas organizaciones tiende a ser compleja debido a los acuerdos para gobernar que se realizaron en Colombia⁸⁰³. Mediante el acto legislativo que reformó la Constitución en el 2003, que tenía como fin institucionalizar los partidos políticos, en la cual se prohibía la vinculación a dos partidos, se democratizaban los partidos internamente, regla de la lista y de candidaturas únicas, se estableció el sistema d D'Hondt y la norma de umbral para la asignación de escaños. Estas medidas se tomaban en cuenta en vista de que hubo una gran proliferación de partidos políticos que no obedecían a la voluntad general ni a los principios éticos⁸⁰⁴.

El artículo 258 de la CRC dispone que “En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, la cuales serán distribuidas oficialmente”, también establece que “La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer...los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos”. El órgano regulador de las elecciones en Colombia es el Consejo Nacional Electoral⁸⁰⁵. Se podría decir que en el caso de Colombia cuenta con una amplia legislación en materia electoral⁸⁰⁶.

El Estado guatemalteco establece la libertad para formar las organizaciones políticas, con las únicas restricciones que la Constitución y la ley entiendan⁸⁰⁷, Asimismo, la CG expresa que “Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda prohibido al Presidente de la República, a los funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas”⁸⁰⁸.

⁸⁰³ HERNÁNDEZ BECERRA, A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Colombia”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, pp. 334-335.

⁸⁰⁴ *Ibidem*, pág. 337.

⁸⁰⁵ Artículo 120, CRC.

⁸⁰⁶ Vid. 40.3, 107, 108, 110, 111, 112, 219, 258, 263, 263 y 120, de la CRC, la *ley 130 de 1994* conocido como el Estatuto Básico de los partidos y movimiento políticos, financiación de partidos y campañas electorales, la *Ley 616 de 2000*, *decreto 2241 de 1986*, *reglamento 01 del 2003 del Consejo Nacional Electoral* y *Ley 996/05*.

⁸⁰⁷ Artículo 223, de la CG.

⁸⁰⁸ *Ibidem*.

En el caso de Guatemala la Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone que los partidos son instituciones del derecho público, con personalidad, que promueven candidatos a cargos electivos, fiscalizan procesos electorales, y analizan los problemas nacionales⁸⁰⁹. Guatemala también goza de un amplio legado normativo que proporciona una adecuada base para los partidos políticos y las elecciones⁸¹⁰.

Mientras que en Venezuela, en palabras del profesor Allan Brewer-Carías, la Constitución del 1999, establece en su artículo 67, lo concerniente al derecho a asociarse con fines políticos lícitos, a su vez, en el artículo 293.6, se establece lo concerniente al Poder electoral, al cual se le atribuye competencia para la organización de las elecciones dentro de los partidos políticos, acorde a lo establecido por la ley; y el artículo 293.8 considera como otro de los atributos del Poder electoral organizar la inscripción y registro de las asociaciones políticas, y velar por el cumplimiento de lo previsto en la Constitución⁸¹¹.

Venezuela cuenta con importantes recursos legislativos como son la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones del 1964, en el cual se regula la función y extinción de las asociaciones políticas, por igual la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política del 1998, se estatuye el derecho a promover candidatos, intervenir en campañas electorales y sobre el modo de la financiación de las campañas electorales⁸¹². En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Electoral, órgano este previsto en la CRBV, detalla el modo en que se organiza y funciona el Poder Electoral, desarrolla las estipulaciones de la Constitución sobre el registro de las asociaciones políticas y la participación del Consejo Nacional Electoral en las elecciones internas de las

⁸⁰⁹ Artículos 18, 20 y 22 de la *Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala*.

⁸¹⁰ Vid. Artículo 223 de la CG, *Decreto número 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto no. 54-86 del Congreso de la República, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, decreto no. 26-92 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo*.

⁸¹¹ BREWER-CARÍAS, A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Venezuela”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, p. 898.

⁸¹² Artículos 130, 196 y 201 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política del 1998. Vease BREWER-CARÍAS, A., *op. cit.*, p. 898.

asociaciones políticas⁸¹³. Se podría entender que Venezuela está dotada de estructura jurídica electoral muy sostenible⁸¹⁴.

El Estado de Uruguay ha presentado grandes avances en el desarrollo de su normativa de partidos políticos y asuntos electorales, en ese tenor Héctor Gros Espiell haciendo referencia a las elecciones interna de los partidos políticos expresa que “para la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente es un caso único en el derecho comparado. Se realizan el mismo día y son obligatorias para todos los partidos, en los mismos locales oficiales”⁸¹⁵, la misma estará a cargo de la Corte Electoral.

En cuanto a su norma constitucional Uruguay dispone de un combinado de artículos que van desde el derecho al sufragio, la prohibición de actos políticos partidarios a los funcionarios públicos, así también hay disposiciones referentes a las elecciones nacionales y la lista de candidatos⁸¹⁶. Por igual, Uruguay cuenta con diversas normas sobre la regulación de los partidos y las elecciones⁸¹⁷. Entre los logros destacables se encuentra la Ley de elecciones internas, la cual hace referencia a la Corte Electoral para la supervisión de las elecciones internas de los partidos, la unificación de las convenciones nacionales y las convenciones departamentales. Uno de los puntos que tal vez hubiera podido ser una desventaja pero que en Uruguay no ha sido así, es que la Corte Electoral es quien conoce de los recursos hechos a las resoluciones de la misma Corte.

En lo concerniente a Honduras, para Mario Alfonso Aguilar Gonzáles los partidos políticos en el Estado hondureño no pasan de cientos cincuenta años, sin embargo los partidos políticos “antes de 1957, no pasaron de ser facciones o camarillas políticas, generalmente con clientela de un líder político y se les reconoce como detentadores oficiales del poder, ya que entran a ser regulados por la Constitución sancionada”⁸¹⁸ haciendo referencia a la CH del 1957.

⁸¹³ *Ibidem*, p. 899.

⁸¹⁴ Vid. *Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia*, esta ley guarda incidencia en vista de que el órgano contencioso que dirime los conflictos electorales es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

⁸¹⁵ GROS ESPIELL, H., “Regulación jurídica de los partidos políticos en Uruguay”, AA.VV., *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, p. 857.

⁸¹⁶ Vid. Artículos 77, 77.4, 77.5, 77.9, 77.11, 77.12, 79, 88.1, 96, 151.1, 271.1, 324 de la CU.

⁸¹⁷ Vid. *Ley no. 9,378 del 1934, la Ley 9524, Ley 9,831 del 1939, Ley 7,812 del 1925, Ley 17,113 del 1999, Ley 17,063 del 1998.*

⁸¹⁸ AGUILAR GONZÁLEZ, M. A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Uruguay”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, p. 546.

La CH establece como base del sistema electoral el sufragio⁸¹⁹, y se adopta el sistema de representación proporcional o por mayoría en los casos de elección popular⁸²⁰, y entiende que los partidos político son instituciones de derecho público cuando están inscritos⁸²¹, y subordina la existencia de la Constitución y la ley a los partidos políticos, garantizando con ello la participación política de los ciudadanos⁸²². Sin embargo, en la CH también existen prohibiciones como el quebrantar el sistema “republicano, democrático y representativo de gobierno”⁸²³. En cuanto al financiamiento de los partidos el Estado hondureño contribuirá en la actividad⁸²⁴, pero a la vez establecen que: “Los partidos políticos no podrán recibir subvenciones o subsidios de gobiernos, organizaciones o instituciones extranjeras”⁸²⁵.

Honduras tiene para regular sus asuntos electorales la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por igual dispone de un Tribunal Supremo Electoral, el cual expresa que “Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un tribunal Supremo Electoral, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la República”⁸²⁶, por lo que la República de Honduras cuenta con una base jurídica considerable en materia electoral.

El sistema de partidos y el sistema electoral en los Estados Unidos Mexicanos descansan en las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la CEUM, en el que se establece que se harán elecciones libres para elegir a los representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Respecto a los partidos políticos son considerados instituciones de Poder Público, siendo su finalidad motivar la intervención del pueblo en los procesos democráticos, coadyuvar a integrar los órganos políticos, facilitar el acceso de los ciudadanos al Poder Público acorde con los principios democráticos. A su vez, se constituye como un derecho propio de los ciudadanos el formar partidos políticos, y dispone la libre afiliación a los mismos⁸²⁷.

⁸¹⁹ Artículo 44, CH.

⁸²⁰ Artículo 46, CH.

⁸²¹ Artículo 47, CH.

⁸²² *Ibidem*.

⁸²³ Artículo 48, CH.

⁸²⁴ Artículo 49, CH.

⁸²⁵ Artículo 50, CH.

⁸²⁶ Artículo 51, CH.

⁸²⁷ Artículo 41.1, de la Constitución de México.

También el régimen constitucional electoral establece que las autoridades electorales pueden intervenir en el ámbito interno de los partidos, según lo dispuesto por la Constitución y las leyes⁸²⁸. Asimismo, la Constitución manda a la ley a garantizar que los partidos puedan competir equitativamente y señalará el procedimiento al que quedarán sujetos la financiación de los partidos y las campañas, y resalta de manera importante que los recursos públicos deben de estar por encima de los privados, lo que limita las donaciones hecha a los partidos⁸²⁹.

Los asuntos electorales también son regulados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se prevé una serie de disposiciones concernientes a los partidos políticos. A su vez, se dispone como ley especial la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el Paraguay la Constitución del 1992 es la norma que establece los derechos políticos, el reconocimiento de los partidos políticos, y se regula sus fines y condiciones en particular⁸³⁰. También Paraguay sancionó la ley 834/96 que estatuye el Código Electoral Paraguay, el cual tiene una serie de disposiciones dedicada a los partidos y movimientos políticos, por lo que todo lo referente a la formación, las funciones y responsabilidades están contempladas en el Código Electoral. Paraguay delega todo el andamiaje de regulación en el Código Electoral, sólo estableciendo en su Constitución los preceptos básicos sobre los que se sostiene el sistema electoral y de partidos⁸³¹. La ley 635/95 reglamenta la justicia electoral. También el Código Civil, en los capítulos II y III del título II del Libro I, regula la disposición de patrimonio, lo que se aplica a los partidos políticos.

En Costa Rica la Constitución determina como principios el derecho al sufragio, la independencia de la función electoral, las garantías de credibilidad en el sistema electoral para el respeto del sufragio, la representación de las minorías, el pluralismo político⁸³². Al igual la Constitución carga al Estado con la obligación de coadyuvar a cubrir los gastos de los partidos, lo que se condiciona a que sólo se puede disponer del cero coma diecinueve del PIB del año que antecede a las elecciones, pudiendo la ley reducir dicho

⁸²⁸ *Ibidem*.

⁸²⁹ Artículo 41.2, *ibidem*.

⁸³⁰ Vid. 124, 125 y 126 de la CP.

⁸³¹ BAREIRO, L., SOTO, L.: "Regulación jurídica de los partidos políticos en Paraguay", AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, pp. 745-746.

⁸³² Artículo 95, de la CCR.

porcentaje, dinero que debe usarse para la capacitación y la organización política. También se limita la contribución económica a los partidos al hecho de que saquen un cuatro por ciento de los votos, o que saquen un cuatro por ciento en la provincia o hayan sacado al menos un diputado. Y se establece como parte de los privilegios de los partidos el que se les otorgue adelantos, pero los gastos de los partidos quedan sujetos a la comprobación del Tribunal Supremo de Elecciones. Algo a resaltar es el hecho de que se configura el principio de publicidad para los aportes privados que reciben los partidos políticos⁸³³.

En el mismo sentido, la Constitución dispone el derecho de asociarse con fines partidarios a los ciudadanos, con la obligación de parte de los partidos de respetar el orden constitucional, fijándose como finalidades de los partidos el expresar la voluntad popular, y convertirse en un medio que fomente la participación. Pero la CCR recalca que todo partido debe de ser democrático, por lo que no puede existir un partido que mantenga un caudillo durante muchos años sin tener los mecanismos necesarios para que el mismo sea el fruto de la expresión de la voluntad de los miembros del partido⁸³⁴.

Costa Rica dispone de un Código Electoral estatuido por la Ley 1536 del 10 de diciembre del 1952, y como leyes especiales se encuentran la Ley de Promoción de la igualdad social de Costa Rica del 1990, en la que se establece el porcentaje de la cuota femenina.

En cuanto al Estado peruano el mismo dispone que lo ciudadanos tienen la potestad de hacer uso de sus derechos individualmente o por medio de los partidos políticos, los movimientos y las alianzas, de acuerdo a lo dispuesto en la ley, debiendo ser tales asociaciones mecanismos de la expresión popular, adquiriendo los partidos personalidad jurídica luego de su registro. Es un deber de la ley asegurar que la democracia funcione a lo interno de los partidos, por igual los partidos políticos deben de manejarse con transparencia al momento de percibir fondos⁸³⁵.

En el Perú también existe una ley de partidos, la Ley No. 28094, del uno de noviembre del 2003; una Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de

⁸³³ Artículo 96, CCR.

⁸³⁴ Artículo 98, CCR.

⁸³⁵ Artículo 35, de la CRP.

Elecciones Municipales. En el caso de la ley de partidos, la misma ha sido un gran paso de avance en dicho Estado.

El Estado boliviano como base del sistema de partido dispuso que todos los ciudadanos tienen el derecho al ejercicio el Poder Político, comprendiendo dentro del derecho a la participación, la asociación con fines políticos y el ejercicio del voto que tiene que reunir las características de “igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio”.

⁸³⁶La CRPB hace referencia al Órgano Electoral, compuesto por el Tribunal Supremo Electoral, los Tribunales Electorales Departamentales, los Juzgados Electorales, los Jurados de las Mesas de sufragio, los Notarios Electorales⁸³⁷.

Bolivia cuenta con la Ley de Partidos Políticos del 1999, la cual regula las condiciones para la formación y funcionamiento de los partidos y los órganos responsables de la supervisión de los mismos, mientras que los procesos electorales son regidos por el Código Electoral del 2002.

En Brasil el sistema electoral también descansa sobre la base de los derechos políticos, y por ende desde su mínima expresión que es el voto, y por tanto establece que la soberanía será ejercida por el sufragio que tendrá las características de universal, directo, secreto e igual⁸³⁸. También la Constitución asegura que ningún partido con mayoría pueda aprobar una ley sobre el procedimiento electoral que vaya en beneficio propio al disponer que: “La Ley que altere el proceso electoral sólo entrará en vigor un año después de su promulgación”⁸³⁹.

Asimismo, la Constitución brasileña dedica un capítulo a los partidos políticos, en donde establece la libertad para la creación, fusión, afiliación y extinción de los partidos, teniendo en cuenta el resguardo de la soberanía, el principio democrático, la convergencia de distintos partidos, los derechos de la persona humana; debiendo observar algunos parámetros como, no recibir dinero de institución o gobierno extranjero, rendir cuentas a la autoridad electoral, el funcionamiento parlamentario, sin embargo los partidos políticos podrán estructurar su propia organización interna, dándosele poder estatutario interno. Un

⁸³⁶ Artículo 26.1, CRPB.

⁸³⁷ Artículo 205, CRPB.

⁸³⁸ Artículos 14, de la CFB.

⁸³⁹ Artículo 16, CFB.

punto que tiende a buscar la igualdad entre partidos es la disposición de los partidos de acceder gratuitamente a la radio y la televisión. Y se prohíbe el paramilitarismo⁸⁴⁰.

Brasil prevé algunas normas para regir los partidos políticos y los procesos electorales, como la Ley de los Partidos Político No. 9096 del 1995, la Ley Electoral No. 9504 del 1997, la Ley de Inelegibilidad, Ley sobre transporte y alimentación gratuita de electores residentes en zonas rurales y ley sobre el derecho de reuniones.

En Haití el sustento fundamental de los partidos y agrupaciones políticas al igual que todos los países radica en el voto. Haití también establece la libertad de formación de los partidos políticos, teniendo como limitante el respeto a la soberanía y a la democracia, mientras que la Constitución delega el reconocimiento, la función, ventajas y privilegios⁸⁴¹. Actualmente la base legal usada en las pasadas elecciones descansó en el decreto ley del 2 de marzo del 2015.

V.3 Análisis de los reportes de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instituciones de los procesos electorales de los Estados de Latinoamérica

Si bien los partidos políticos y los procesos electorales en los países de Latinoamérica cuentan con legislaciones moderadamente aceptables, es preciso observar si en la práctica se cumple con la función que tienen las normas electorales. En el primero de los casos, Haití, se debe verificar las ocurrencias de las últimas elecciones, en la cual la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos emitió en su informe que el Consejo Electoral Provisional recibió muchas acusaciones de corrupción, así como la incompetencia del mismo le restó credibilidad como un árbitro del proceso electoral, por lo que uno de los candidatos Jude Celestin confirmó en un discurso televisado que no participaría en la segunda vuelta, a lo que la Misión de Observación Electoral trató de propiciar el diálogo entre los actores políticos. Mientras que con el aumento de la violencia el 22 de enero del 2016, el Consejo Electoral Provisional manifestó que era incapaz de garantizar las elecciones. En esas mismas circunstancias la Misión de la OEA fue víctima de agresiones de violencia, ocasión en la que tuvo que intervenir la

⁸⁴⁰ Artículo 17, CFB.

⁸⁴¹ Artículo 31.1, de la CRH.

MINUSTAH para tranquilizar la situación, pudiendo ser considerado como un fracaso electoral⁸⁴².

En cuanto a las elecciones en Brasil, tanto en las presidenciales del 2010 como en las presidenciales del 2014, Brasil muestra un buen ejemplo de civismo, además que el órgano electoral goza de una confianza considerable, por lo que luego de los resultados de las elecciones sólo cabe hablar de los retos que tiene el candidato electo por delante⁸⁴³, y en modo alguno se pone en duda los resultados de las elecciones, aunque sí la parte de la financiación que es un punto neurálgico en Latinoamérica⁸⁴⁴, pero sin lugar a dudas, se puede decir que Brasil goza de la legitimidad que da la seguridad en los resultados electorales al cumplirse con normas vigentes.

En cuanto a las elecciones locales celebradas en Colombia, la Misión de Observación Electoral, en su informe del 25 de octubre del 2015, expresó, en un sentido general, que las elecciones tuvieron buena preparación, aunque tuvieron algunos impases de organización, y también en lo que toca al desarrollo de las elecciones⁸⁴⁵, pero en cuanto

⁸⁴² Vid. *Informe de la Misión de Observación Electoral en Haití, del 28 de enero del 2016*: “The CEP, originally a nine-member body, was thus left with five active members. This situation, coupled with accusations of corruption, bias, and incompetence, undermined the credibility of the CEP as an electoral arbiter. On January 18, Jude Celestin confirmed in a televised address that he would not be taking part in the second round. In that context, the EOM urged the political actors to hold a dialogue in a bid to find a solution to the political impasse. The Mission also underscored the importance of improving conditions to ensure a competitive process, bearing in mind that Article 3 of the Inter-American Democratic Charter provides that access to power should be in accordance with the rule of law and the holding of periodic, free, and fair elections based on secret balloting and universal suffrage. As a result of the escalation in violence, on January 22, the CEP announced that it was unable to guarantee the elections and requested the president to postpone the ballot. Regrettably, the Mission also fell victim to violence. Over the course of two days, six of our observers sustained attacks that threatened their personal safety and physical integrity, as well as causing significant damage to the vehicles in which they were traveling. The EOM is particularly grateful to the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) for its rapid response in those incidents and for the security they provided us”.

⁸⁴³ Vid. Editorial “El reto de Dilma Rouseff”, *El País*, 28 de octubre del 2014.

⁸⁴⁴ El caso de Petrobras ha mostrado la vulnerabilidad de los partidos políticos en Brasil.

⁸⁴⁵ Vid. *Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia, de fecha 25 de octubre del 2015*, “District-hopping and vote-buying were the most common issues in the local authority elections. Those two practices, which have also been detected in previous electoral processes, distort the popular will as expressed at the ballot box and undermine democratic strengthening. District-hopping is apparently related to vote-buying, since it is assumed that people re-register their national identity cards in places where they are not residents in order to sell their votes in those other municipalities” y “The OAS Mission believes that the measures adopted by the CNE to combat these two scourges are an attempt to respond to a historical problem and to an imperfection in the electoral system. However, although it acknowledges the CNE’s positive intentions and the efforts made, it also believes that the timing of the procedure and the way in which it was implemented could have affected people who were not seeking to jump from one district to another or to sell their votes”. En base de datos de The Electoral Knowledge Network. <http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/CO/colombia-verbal-report-election-of-local/view>

a los resultados de las elecciones, se puede decir que fueron aceptables, no cuestionándose la generalidad de las elecciones.

En el Paraguay, el informe ofertado por la Misión de la OEA gira en el mismo tenor, reconociendo que la alternancia en el Poder, es muestra o reflejo del grado de progreso y madurez del sistema político del Paraguay, siendo esta una gran característica de la democracia⁸⁴⁶. Aunque hay elementos que no cambian y que, en principio, son propios de la práctica electoral, como son las quejas que reciben los organismos internacionales, mayormente en contra del partido de gobierno⁸⁴⁷.

En cuanto a Panamá, la Misión de la OEA, en su informe verbal sobre las elecciones generales del 2014, expuso que las elecciones llevadas a cabo en Panamá tuvo una excelente organización en donde se cumplió con la logística necesitada, por igual ejercieron su derecho al voto muchos ciudadanos, el sistema de cómputo de votos fue bastante óptimo, sin embargo advierten que se necesita avanzar en cuanto a la financiación de los partidos políticos y al uso de los recursos asignados a los partidos, pues se ve una desigualdad en el uso de fondos, lo que le da una ventaja a los partidos que más tienen recursos⁸⁴⁸.

En las elecciones de Honduras del 2009, pese a pasar por unos momentos no muy buenos, el informe preliminar emitido por el Instituto Nacional Democrático (NDI) para Asuntos Internacionales, dispuso, considerando el proceso por el que atravesaba el país⁸⁴⁹, que las elecciones en Honduras presentaron una serie de inconvenientes, pero cuyos resultados

⁸⁴⁶ *Ibidem*, “In the capital and other municipalities, there was an alternation in power, which is recognized as an important characteristic of democratic systems. This in turn reflects a degree of progress and maturity of the Paraguayan political system” En base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/PY/paraguay-report-municipal-elections-oas-2015/view>

⁸⁴⁷ *Ibidem*, “From the pre-electoral period through the day of the elections, the OAS/EOM received a total of 17 complaints, which were forwarded to the Supreme Tribunal for Electoral Justice for appropriate handling”.

⁸⁴⁸ V. *Informe Verbal de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Panamá de las elecciones del 2014*, “To regulate political campaign financing, including the use of public and private funds as well as interference by the executive branch. Current rules set no limits or controls on private donations and/or election spending. This lack of regulation has led to expensive campaigns with little transparency in terms of the source of funds. Money in politics needs to be regulated as a matter of urgency, in order to furnish the democratic system with more fairness and integrity”, en base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/misc/panama-verbal-report-general-election-2014/view>

⁸⁴⁹ El 28 de junio del 2009, le fue dado un golpe de Estado al entonces Presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Vid. *Informe del Instituto Nacional Democrático (NDI) para Asuntos Internacionales del 29 de noviembre del 2009 sobre las elecciones de Honduras*, en base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/HN/honduras-preliminary-report-general-elections-ndi-1/view>

se dieron como buenos y válidos, en virtud de que dichas elecciones habían sido un referente de participación en la historia política hondureña⁸⁵⁰.

En cuanto a las elecciones mexicanas del año 2015, el informe emitido por la Misión de la OEA, admite que en el periodo pre electoral hubo algunos problemas en donde murieron algunas personas, pero que las autoridades de lugar pudieron retomar el control, lo cual conllevó a que el día de las elecciones todo transcurriera de manera muy organizada, a su vez, la Misión muestra admiración y le complace el funcionamiento de las últimas reformas que se realizaron en México, por lo que la voluntad del pueblo se pudo manifestar en las elecciones⁸⁵¹.

En las elecciones presidenciales de El Salvador del 2014, tanto en la celebración de la primera vuelta como en la segunda vuelta, las elecciones marcharon de forma tranquila, pese a que se estaban implementando nuevas reformas electorales, aunque hubo muchas quejas, que se podrían decir estaban en el ámbito de lo normal, entre ellas que estaban participando maras que estaban amenazando a los votantes que ejercían el derecho al voto, sin embargo en la segunda vuelta hubo mayor organización debido a que se corrigieron los entuertos ocurridos en la primera vuelta, pero los resultados de las elecciones tuvieron el efecto correcto, es decir la aceptación de la mayoría⁸⁵².

En las elecciones departamentales y municipales de Uruguay todo transcurrió correctamente, hubo un buen civismo de las personas que fueron a ejercer su derecho al voto, el órgano competente de las elecciones tenía una óptima preparación, la financiación de los partidos políticos en Uruguay es bien estricta, aunque puede haber sus imperfecciones en cuanto al seguimiento de los fondos; las elecciones en Uruguay son ejemplos de transparencia⁸⁵³.

⁸⁵⁰ La OEA no envió la Misión de Observación Electoral en virtud de que dicha organización desconoció el gobierno de Roberto Micheletti y suspendió a Honduras hasta tanto se repusiera al Presidente Zelaya.

⁸⁵¹ *Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en México de las elecciones del 2015*, en base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/misc/mexico-verbal-report-general-election-2015/view>

⁸⁵² *Informe Oral de la Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador de las elecciones del 2014*, en base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/misc/el-salvador-verbal-report-presidential-elections/view>

⁸⁵³ Vid. *Informe de fecha 14 de mayo del 2015, sobre las elecciones departamentales y municipales en el Uruguay*, base de datos del Conseil de Diplomacia Pública de Catalunya (DIPLOCAT), http://www.diplocat.cat/files/docs/150514_Informe_DIPLOCAT_EleccionsUY_ES.pdf

Según lo expuesto por el Centro Carter, en las elecciones de Venezuela del 2013, se presentaron muchas quejas especialmente en lo atinente a intimidación de votantes y publicidad. Los observadores, también notaron que Venezuela era el único país que no daba financiamiento público a los partidos políticos, ni de forma directa como indirecta, constituyendo esto una debilidad, en cuanto a la reglas de campaña se dice que no tuvieron claridad, sin embargo, en definitiva se aceptaron los resultados dados por el órgano competente al respecto⁸⁵⁴.

Las elecciones de la República Dominicana del 2016, se vieron afectadas por la desigualdad en el uso de los recursos por parte de los partidos, donde hubo una serie de denuncias sobre uso del dinero del Estado, lo cual se debe a la carencia de una ley de partidos que toque el tema de la financiación tanto pública como privada, siendo una recomendación de la Misión que se lleve una reforma estructural sobre la disposiciones electorales y de partido. Sin embargo, los resultados dados por el órgano competente, se dieron como buenos y válidos, pese a las interminables quejas de los partidos opositores⁸⁵⁵.

En cuanto al Perú, en la primera vuelta, el informe establecido por la Misión de Observación Electoral de la OEA, hace la recomendación de una reforma estructural en materia electoral, debido a que se establecen ciertas desigualdades con el manejo de los fondos y el financiamiento de los partidos, a lo que entienden debe haber normas más estrictas al respecto, pero el resultado de las elecciones fueron de aceptación, independientemente de las quejas presentadas⁸⁵⁶.

Y, por último, en las elecciones de Costa Rica del 2016, se presentaron algunas denuncias respecto el financiamiento público y la entrega de los fondos por adelantado, como un modo de activar la campaña, sin embargo las elecciones transcurrieron de un modo

⁸⁵⁴ *Informe Electoral de fecha 14 de abril del 2013, del Centro Carter para las elecciones presidenciales de Venezuela*, en base de datos de The Electoral Knowledge Network, <http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/VE/venezuela-informe-final-elecciones-presidenciales/view>

⁸⁵⁵ Vid. *Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA de fecha 17 de mayo de 2016, de las elecciones de la República Dominicana del 2016*, en base de datos de la OEA, <http://www.oas.org/documents/spa/press/informe.preliminar.moe.r.dominicana.may2016.pdf>

⁸⁵⁶ Vid. *Informe preliminar de fecha 11 de abril del 2016, de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de las elecciones de Perú del 2016*, en base de datos de la OEA, http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-preliminar-Peru_FINAL.pdf

bastante organizado, y los resultados de las elecciones fueron aceptados por los costarricenses, lo que deja mucho que decir de su modelo democrático⁸⁵⁷.

V.3.1 Legitimidad del sistema de partidos y de los procesos electorales

Lo anterior es un ejemplo de cómo marcha el sistema electoral en los países de Latinoamérica, ciertamente que los países mejor ubicados en el índice de Estados fallidos o frágiles de la FFP, como los casos de Costa Rica y Uruguay son los países que según el análisis de las observaciones electorales resultan con un nivel mayor de desarrollo en los procesos electorales, indicativo que le da un grado de credibilidad al índice de la Fund For Peace.

Como el derecho viene a dar legitimidad al Poder, en los procesos electorales el derecho también otorga esta legitimidad, pues aunque haya ciertas falencias, lo importante, sin menospreciar dichas falencias, es que el resultado de las elecciones sea lo más aceptado posible, siendo una muestra de que se haya respetado la voluntad popular, no obstante cuando el aparato electoral se desmorona y consigue su fin, entonces quiere decir que el proceso electoral carga con problemas bastantes contundentes y que afectan considerablemente la democracia, pues hay alteración de la voluntad del pueblo, desde este punto de vista, sólo uno de los países del índice de Estados fallidos cumple con la alteración, que es la República de Haití, en los demás casos siempre se consiguen los fines perseguidos, pero se debe decir que en el caso de Haití el problema radicó en la incapacidad de la institución organizadora de las elecciones, lo que hace que aún no se le pueda juzgar como inoperante o fallido, pese que tienen un gobierno que se mantiene funcionando.

V. 4 Los derechos humanos en Latinoamérica y los instrumentos internacionales

Se puede notar un ánimo constante de ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos por parte de los Estados de la región, como un signo de la acogida de

⁸⁵⁷ V. *Informe preliminar de fecha 07 de febrero del 2016 en Costa Rica, de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de las elecciones del 2016*, en base de datos de la OEA, https://www.oas.org/es/sap/deco/moe_informe/info_verbal_CostaRica2016_s.pdf

la dignidad humana, pues la ratificación de los derechos implica que dichos derechos son parte del derecho interno de los países. En ese tenor se puede ver que Haití ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Eliminación de Toda las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, todos los cuales han formado parte del derecho interno de la República de Haití, y a su vez se precisa que Haití ha firmado otras convenciones sobre derechos humanos, sin embargo aún le queda un amplio camino en la materia⁸⁵⁸.

Haití es un ejemplo de la constante actuación de los países de la región en el compromiso de los Estados en firmar los convenios procurando fortalecer la dignidad de la persona humana, pese a las tropelías que ha pasado dicho Estado. En cuanto a Colombia, ha firmado y ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad⁸⁵⁹. Colombia ha ratificado todas la convenciones del derecho internacional de los derechos humanos, lo que simboliza la responsabilidad del Estado en la búsqueda de un mejor vivir por parte del Estado colombiano.

⁸⁵⁸ Haití tiene en trámite de ser ratificado instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En base datos de Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=74&Lang=SP)

⁸⁵⁹ Vid. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=74&Lang=SP)

En lo relativo a la República Dominicana se han ratificado hasta la fecha la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad⁸⁶⁰.

Se puede decir que si bien es cierto que la ratificación de las convenciones internacionales de derechos humanos no es garantía de su cumplimiento, al menos es un indicativo del interés que tienen los Estados en satisfacer las obligaciones que exigen los derechos, a esto se hace referencia en vista de que cuando se analiza la situación del pueblo haitiano, el mismo no ha ratificado convenciones que son de sumo interés y que pueden atribuirse a la inestabilidad que ha tenido Haití.

En cambio, cuando se muestra el imago mundi de la República Oriental de Uruguay se puede ver que dicho país ha ratificado todos los tratados y protocolos que se encuentran en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos⁸⁶¹, asimismo ocurre con el Estado Costarricense, el cual asume casi la totalidad de los tratados que al efecto se ventilan.

En el mismo sentido, se tiene que decir de manera global que los países de Latinoamérica han tenido buena recepción de los tratados, convenios, protocolos y declaraciones de derechos humanos, y así por igual están tratando de disponer de garantías mínimas que protejan los derechos. La importancia de esta recepción de derechos emanados de las convenciones internacionales radica en el hecho de que pese a no estar algún derecho previsto en la Constitución o en las leyes internas, tal ausencia es suplida por los acuerdos internacionales, y en otro sentido la firma y ratificación de los tratados es sinónimo de que las instituciones del Estado están laborando en procura de un mejor bienestar para los seres humanos.

⁸⁶⁰ V. oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=74&Lang=SP)

⁸⁶¹ Vid. *Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas*, en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=74&Lang=SP

V.5 Enfoque analítico de los derechos humanos en América Latina

Se puede ver que Haití siempre ha estado en el índice de Estados Fallidos en la categoría de “high alert”, mientras que hay otros países como Colombia, que al hacerse una comparación de los índices desde el 2005 hasta el 2016, queda en un segundo lugar como un país que está “high warning”; Brasil se encuentra en la frontera de “warning” y “stable”, mientras que Costa Rica tiene su posición en la categoría de “more stable”, y Uruguay con la mejor puntuación en los países de la región se sitúa en “very stable”.

Se hace la observación sobre las posiciones en el índice puesto que lo interesante en ello es que desde la República de Haití hasta la República Oriental de Uruguay todos los Estados mantienen la misma coherencia sobre los derechos humanos y las garantías para protegerlos. Aunque a grandes rasgos los derechos civiles y políticos no se tomaron muy en cuenta en vista de que todos los países que se señalaron asumen un régimen democrático republicano que toma el voto como mecanismo de elegir y ser elegido, por lo que no hay la necesidad de referirse a los derechos antes mencionados, amén de que incluso el voto en muchos de estos países se ejerce de manera más frecuente en virtud de que abren las puertas de la participación por medio de los mecanismos de democracia directa.

Por igual, en cuanto a los derechos, se procedió dar preponderancia a los derechos sociales y algunos de los derechos de la tercera generación como el medio ambiente, puesto que es el cumplimiento de los derechos sociales lo que ha traído más inconvenientes. Si se fuera a emitir una valoración sobre los fundamentos a los derechos humanos de los países de Latinoamérica se tiene que reconocer que los mismos cuentan con la normativa constitucional necesaria para el cumplimiento de los fines de los derechos humanos, sea Haití, Colombia, Uruguay, Brasil o Costa Rica.

5.5.1 Derechos políticos y libertades civiles en Latinoamérica según el IDD-LAT

El índice de desarrollo democrático de América Latina evaluó a 18 países de la región para el año 2015, el informe rendido establece que “En la dimensión que mide el desarrollo democrático desde la óptima del ciudadano, o sea desde las condiciones para que ejerza sus derechos y libertades, se observa un incremento del promedio (10%), que

significa un quiebre en la curva descendente de los últimos años”⁸⁶², lo que se traduce en que los países de la región han avanzado en su conjunto en cuanto a la satisfacción de los derechos civiles y políticos.

Sin embargo, un punto importante es que el índice no incluye en sus evaluaciones al Estado haitiano en virtud de que el mismo no cumple con los requisitos mínimos que exige la democracia pues en los requisitos de admisión se argumenta que “esta dimensión es condición de mínima; por lo tanto, solo es tomada en cuenta para incluir a cada país en el IDD-Lat. Todos los países en la región incluidos en el índice la cumplen”⁸⁶³. Esta situación hace que no se incluya el Estado haitiano, lo cual, de incluirse, podría hacer caer un poco el promedio de la región. Aunque como la evaluación a que se hace referencia es de los últimos dos años la misma tiende a ser objetiva cuando habla de su incremento pues compara etapas, y de seguro esto mismo se viera si se hubiera incluido a Haití en el informe, aunque el incremento no iba a ser tan notorio como un 10%⁸⁶⁴.

En tal tenor, entre los países que obtienen la mejor puntuación del informe se encuentran, en primer lugar Chile, en segundo lugar está Costa Rica y en un tercer lugar yace Uruguay, sin embargo estos mismos países repitieron el año anterior cuando en primer lugar se encontraba Uruguay, siguiéndole Costa Rica y luego Chile. Uruguay tuvo un descenso a la tercera posición en el informe del 2015, pero es preciso observar que estos países también se han mostrado en buenas posiciones en el índice de Estados fallidos de la FFP⁸⁶⁵.

A estos países les siguen Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y Brasil, pues están situados sobre la media de la región, siendo esta 5,551. Por lo que la República Dominicana, Panamá, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia se encuentran por debajo del promedio. Empero la mayoría de los países tienen

⁸⁶² *Índice de desarrollo democrático de América Latina IDD-Lat 2015*, publicado por Konrad Adenauer Stiftung y PoliLat, Montevideo, Uruguay, pág. 27.

⁸⁶³ *Ibidem*, pág. 11.

⁸⁶⁴ “Están incluidos en la medición del IDD-Lat dieciocho países de la América Latina en orden geográfico, de sur a norte: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y República Dominicana”, *Ibidem*, pág. 11.

⁸⁶⁵ Vid. *Índice de Estados fallidos del 2016*.

avance en las puntuaciones independientemente de la posición que ocupen con respecto al año anterior⁸⁶⁶.

En el informe se hallan entre las debilidades encontradas que “Los países aparecen estancados, sin mejoras significativas en los indicadores de respeto a los derechos políticos y libertades civiles” y “Once países de los dieciocho analizados no respetan su sistema de cuota de género en el Poder Legislativo. Muchos países mantienen altos niveles (sic) de violencia y tasa de homicidios”⁸⁶⁷.

En sentido general se puede decir que los países de América Latina no están nada mal sobre el respeto a los derechos civiles y políticos, y muestra de ello es la puntuación obtenida con el informe del 2015, puesto que los países han avanzado, sin embargo lo que sí merece ser tomado en cuenta es la primera de las debilidades presentadas, puesto que lo que se intenta explicar es que los países pueden hacer más de lo que hasta el momento han hecho, lo cual se debe al gran ejemplo que dio Chile al respeto, país este que logró tener una puntuación bastante significativa para encabezar el primer lugar en la dimensión evaluada, pues como bien se expresa en el informe: “La importancia de la tarea y el desarrollo de políticas para alcanzar mayores libertades y derechos para sus ciudadanos es entonces un enorme desafío para gran parte de la dirigencia política latinoamericana”⁸⁶⁸.

V.5.2 Los derechos sociales en Latinoamérica

Para observar la aplicación de los derechos sociales en los países de la región se tomará en cuenta algunos indicadores de diferentes organizaciones internacionales, puesto que los mismos son un reflejo de cómo van las naciones del mundo, y en el caso que ocupa la investigación, cómo va Latinoamérica, sin embargo como una representación simple se tomarán los indicadores de salud, de educación, trabajo y medio ambiente, puesto que estos derechos sociales tienden a ser sumamente primordiales.

⁸⁶⁶ V. *Índice de desarrollo democrático de América Latina IDD-Lat 2015... op. cit.*, pp. 28-29.

⁸⁶⁷ *Ibidem*, pág. 29.

⁸⁶⁸ *Ibidem*, pág. 28.

V.5.2.1 La Educación en América Latina según el índice de desarrollo humano del PNUD

Para el análisis se consideraron diecinueve países uno más que los abordados por el índice de desarrollo democrático, pues en este caso se incluyó Haití⁸⁶⁹. Al realizar una estimación desde el año dos mil diez hasta el dos mil catorce se ha registrado un ligero crecimiento del promedio de la región⁸⁷⁰, sin embargo este crecimiento es signo de que no se han hecho los esfuerzos necesarios para el cumplimiento fiel del derecho a la educación.

Acorde a lo expuesto en el informe para el año 2014, entre los cinco países mejor posicionados se encuentran Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y Panamá, sin embargo otros países se encuentran por arriba del promedio como Brasil, Costa Rica, Perú, Ecuador, México y Bolivia, mientras que Colombia, República Dominicana, Honduras, Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Haití se mantienen por debajo del promedio.

Haití es el país con la menor puntuación en materia de educación, mientras que Argentina es quien obtiene la mayor calificación. Este patrón de los Estados de la región ha sido constante pues cuando se compara el año 2014 con los años 2013 y 2012, la variación que ha habido ha sido muy mínima, lo que también es muestra de que los Estados Latinoamericanos no se han preocupado por tomar las políticas necesarias que permitan ir desarrollando los niveles de educación, empero hay que resaltar los esfuerzos de Argentina y Chile, aunque claro está, también tienen una puntuación constante, que en el caso de estos países puede traducirse en que el derecho a la educación se mantiene y no se ve disminuido, pese a cualquier hecho que pueda surgir en sus respectivos territorios, lo mismo no aplica para los demás países los cuales tienen todo un largo camino que recorrer en la materia⁸⁷¹.

⁸⁶⁹ Haití, Brasil, Colombia, Paraguay, Panamá, Honduras, México, El Salvador, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Chile, Guatemala y Ecuador.

⁸⁷⁰ Vid. *Índice de desarrollo humano 2015, en base de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD/UNDP)* (<http://hdr.undp.org/en/data>). En el 2010 (0.612), 2011 (0.617), 2012 (0.623), 2013 (0.6244), 2014 (0.6248).

⁸⁷¹ *Ibidem*.

V.5.2.2 La Salud en Latinoamérica según el índice de Desarrollo Humano del PNUD

El índice de desarrollo humano también establece como uno de sus indicadores la salud, lo que permite ver cómo están actuando los Estados para dar cumplimiento al derecho a la salud, pues desde esta óptica se puede verificar el reflejo de la realidad actual, que es lo importante resaltar en este capítulo. En tal sentido, se precisa señalar que desde el 2010 hasta el 2014, el promedio del índice de salud de los países de la región ha ido en aumento, aunque muy paulatino.

Tomando en consideración la evaluación para el año 2014, la cual consta en el informe del PNUD del 2015, el país de Latinoamérica con la mayor puntuación en este índice es Chile, seguido de Costa Rica, Uruguay, Panamá y México, a su vez, se encuentran otros países por encima del promedio de la región como Perú, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Brasil. Mientras que encontramos por debajo del promedio a Venezuela, Colombia, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Haití.

El Estado haitiano representa el punto más bajo, mientras que Chile se encuentra en el más alto. Cuando se ven los resultados de los años 2012, 2013 y 2014 se puede notar que todos los países de la región han tenido aumentos ligeros, lo que para países como Chile, Costa Rica, Uruguay y Panamá se puede ver como una constancia en los servicios médicos, sin embargo en el caso de los países por debajo del promedio de la región significa que urge la necesidad de establecer programas públicos que mejoren el derecho a la salud.

Para el Estado haitiano este índice es indicador de que aún no se cuentan con los mecanismos mínimos que garanticen la atención simple a la salud. Otro punto a resaltar, es que Chile tiene un lugar bastante señero en el índice por el hecho de que el país que más se le acerca está a una diferencia un poco cuantitativa del mismo⁸⁷², por lo que es loable la permanencia de Chile, al tiempo que significa una meta para los demás países de la región, pues la meta final es que se logre satisfacer el derecho a la salud de manera absoluta, aunque es entendible las exigencias del día a día con las epidemias y enfermedades que pueden presentarse en la región.

⁸⁷² *Ibidem.*

V.5.2.3 El Trabajo en Latinoamérica según la CEPAL y la OIT

En lo referente al trabajo debemos acudir al informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2015 en el cual se sostiene que:

“En efecto, después de la gradual reducción de los incrementos de la tasa de ocupación a nivel regional entre 2010 y 2012, en 2013 y 2014 las variaciones de esta tasa se tornaron negativas, como consecuencia de una menor demanda laboral y, por lo tanto, la menor generación de nuevos puestos de empleo asalariado. Sin embargo, ni en 2013 ni en 2014 esta caída se reflejó en un aumento de la tasa de desempleo abierto”⁸⁷³.

Para el informe esto se debe a una actividad procíclica⁸⁷⁴ de manera inusual de la fuerza de trabajo, de forma tal que se menguó la entrada a puestos de trabajo⁸⁷⁵. En el informe se entiende que “al contrario de lo que había sucedido en los años anteriores, en 2015 la caída de la tasa de ocupación provocó un alza de la tasa de desempleo abierto urbano, que subió del 6,0% en 2014 al 6,5%”, siendo esto una muestra de cómo está el derecho al trabajo en los países de Latinoamérica, aunque respecto a este derecho y especialmente lo concerniente al desempleo estos van de la mano a las crisis que puedan surgir, sin embargo los niveles en que puede impactar la crisis deberían ser mínimos si hay una real protección de dicho derecho y de la seguridad social⁸⁷⁶.

Los representantes de las instituciones auspiciadoras del informe advierten que:

Para la región en su conjunto, las previsiones de la evolución de los mercados laborales en 2016 son en general negativas, a la luz de un contexto macroeconómico y de crecimiento que, en promedio, mostrará probablemente un deterioro adicional al sufrido en 2015, aunque con marcadas diferencias

⁸⁷³ *Informe sobre Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*, Núm. 14, 2016, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pág. 7. En http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40097/S1600316_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁸⁷⁴ Esta palabra es definida en el informe como “Un comportamiento procíclico de la fuerza laboral significa que la entrada de nuevas personas al mercado laboral se acelera en períodos de crecimiento económico elevado y se desacelera cuando la economía crece poco o se encuentra en crisis. Si bien no todos los países de la región registran un comportamiento procíclico de su fuerza laboral, la región en su conjunto se caracteriza por una evolución levemente procíclica”, *ibidem*, pág. 7.

⁸⁷⁵ *Ibidem*, pág. 7.

⁸⁷⁶ *Ibidem*.

intrarregionales. Según las proyecciones, en 2016 se producirá otra contracción del producto regional, en este caso del 0,6%. El debilitamiento correspondiente de la generación de empleo y la eventual cuarta caída consecutiva de la tasa de ocupación afectarían de nuevo la tasa de desempleo, que podría incrementarse más de medio punto porcentual en 2016⁸⁷⁷.

Otro punto importante que establece el informe de la OIT y la CEPAL es que el crecimiento económico débil no sólo produjo sus efectos en la caída de la tasa de desocupación, sino que a su vez tuvo sus consecuencias con disminuida tasa de decrecimiento del empleo asalariado y decadencia de la composición del empleo, lo que se traduce en un deterioro de la calidad de los empleos⁸⁷⁸. El tema del trabajo resulta ser más complejo de lo que parece, por lo que el análisis del derecho al trabajo también lo es.

Pero hay puntos que se deben de tomar en cuenta como el desempleo, la calidad del empleo, los trabajos asalariados, lo que son datos que ayudan a ver cómo está el derecho al trabajo, no obstante como se había dicho este derecho depende mucho del crecimiento económico de los Estados como se puede ver en las informaciones del informe, sin embargo el cumplimiento del derecho no puede estar sujeto a crisis, al menos inicialmente, pues toda crisis debe ser apaliada por el derecho de la seguridad social que conlleva el derecho a un seguro de desempleo o a una debida remuneración.

V.5.2.4 El Medio ambiente en América Latina según la Economist Intelligence Unit y la ONU

Como un ejemplo bastante constatable de lo que es la evaluación del medio ambiente se produce el índice de ciudades verdes de América Latina, la cual envuelve a 17 ciudades de la región, aunque sólo a 8 países⁸⁷⁹. El informe toca distintos indicadores como la energía y el CO2, el transporte, el agua, la calidad del aire, el uso de la tierra y edificios, los desechos, el saneamiento y la gobernanza medioambiental. En el informe se presenta que las ciudades de Guadalajara y Lima están en la categoría de muy por debajo del promedio; Buenos Aires y Montevideo se encuentran debajo del promedio; Medellín,

⁸⁷⁷ SALAZAR XIRINACHS, J. M., BÁRCENA, A., *Ibidem*, pág. 6.

⁸⁷⁸ *Ibidem*, pág. 11.

⁸⁷⁹ *Índice de ciudades verdes de América Latina*, realizado por la Economist Intelligence Unit con el patrocinio de la empresa Siemens en el 2010. Las ciudades que se tomaron en cuenta son Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Ciudad de México, Curitiba, Guadalajara, Lima, Medellín, Monterrey, Montevideo, Porto Alegre, Puebla, Quito, Río de Janeiro, Santiago y Sao Paulo.

Ciudad de México, Monterrey, Porto Alegre, Puebla, Quito y Santiago están en el promedio; Belo Horizonte, Bogotá, Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paolo están encima del promedio, mientras que la ciudad de Curitiba está muy por encima del promedio.

Lo cual es una muestra de cómo se están comportando las ciudades de Latinoamérica, pues la selección hecha por los investigadores es bastante acertada al elegir ciudades bastantes significativas, principalmente por la cantidad de personas que habitan en ella, pues el compromiso medioambiental en las ciudades más urbanizadas tiende a requerir mayores esfuerzos.

A su vez, la Oficina de Estadística de la ONU, muestra que Haití tiene una emisión del CO₂ de 2.21 millones de toneladas, siendo la emisión per cápita de 0.22; Brasil emite 439.41 y 2.19 per cápita; Colombia emite 72.42 con una emisión per cápita de 1.56; Paraguay de 5.30 y 0.84; Panamá de 9.67 y 2.63; Honduras 8.41 y 1.10; México 466.55 y 3.88; El Salvador 6.68 y 1.10; Bolivia 16.12 y 1.60; Venezuela 188.82 y 6.42; República Dominicana 21.89 y 2.18; Perú 53.07 y 1.78; Costa Rica 7.84 y 1.70; Uruguay 7.77 y 2.30; Argentina 190.03 y 4.56; Nicaragua 4.90 y 0.84; Chile 79.41 y 4.62; Guatemala 11.26 y 0.75 y Ecuador 35.73 y 2.35⁸⁸⁰.

Esto da una muestra de cómo van los países de América Latina en la emisión del CO₂, como uno de los principales contaminantes del medio ambiente. Aunque vale decir, que los contaminantes más significativos son las grandes potencias, y segundo, que la emisión podría variar acorde al desarrollo industrial de los países, por lo que México, Brasil Argentina y Venezuela son los mayores emisores del CO₂, al tiempo que se pueden considerar entre los países de América Latina más industrializados⁸⁸¹.

En cuanto a las áreas protegidas Haití mantiene un 0.1 desde el 1990 hasta 2014, mientras que Brasil ha pasado del 4.7 hasta el 20.4 en el 2014; Colombia va desde el 11.6 hasta el 17.4; Paraguay desde el 2.9 hasta el 6.5; Panamá desde el 4.1 hasta el 5.2; Honduras desde el 4.9 hasta el 7.8; México desde el 1.0 hasta el 6.0; El Salvador desde el 0.0 hasta el 2.1; Bolivia desde el 8.8 hasta el 24.8; Venezuela desde el 26.9 hasta el 36.7; República Dominicana desde el 3.6 hasta el 11.2; Perú desde el 0.0 hasta el 19.4; Costa Rica desde el 2.2 hasta el 3.1; Uruguay desde el 1.3 hasta el 1.7; Argentina desde el 3.3 hasta el 5.4;

⁸⁸⁰ Oficina de División de Estadísticas de las Naciones Unidas (<http://millenniumindicators.un.org/unsd/environment/qindicators.htm>)

⁸⁸¹ *Ibidem*.

Nicaragua desde el 7.0 hasta el 22.0; Chile desde el 3.0 hasta el 6.9; Guatemala desde el 12.5 hasta el 15.7; y Ecuador desde el 14.6 hasta el 15.4⁸⁸².

Este índice es una muestra del compromiso que han asumido los Estados de Latinoamérica en la protección del medio ambiente, evidentemente que en los países donde los Estados han mejorado en su porcentaje de áreas protegidas es signo de un mayor deber, sin embargo no significa que tengan más áreas protegidas, pues esta variará conforme el territorio en el cual ejerza su soberanía el Estado, así el por ciento más mínimo de Brasil significa más que un porcentaje considerable de los demás Estados que no tienen un territorio tan amplio. Los grupos ecologistas propugnan por una protección más responsables de las áreas que puedan etiquetarse de protegidas⁸⁸³.

El indicador del área de bosque muestra que Haití tenía un área boscosa desde el 1990 de 1,160 km², pasando en el 2015 a ser sólo 970 km², con un cambio negativo de 16 por ciento, sólo teniendo bosques en un porcentaje de 3.5 de su superficie; Brasil pasó de 5,467,050 km² a 4,935,380, para una reducción de 9.7, teniendo un área boscosa de 59 por ciento; Colombia pasó de 644,170 hasta 585,017, con una reducción de 9.2, para tener un área de 52.7 de su superficie; Paraguay ostentaba 211,570 y tiene 153,230 para una disminución de 27.6%, con un área de 38.6% de su superficie; Panamá tenía 50,400 km² y 46,170 km² con una disminución de 8.4%, con un área de 62.1%; Honduras de 81,360 km² a 45,920 km², una disminución de 43.6%, para un 41.0% de su superficie; México de 697,600 km² hasta 660,400 km², disminuyendo en 5.3%, con una superficie boscosa de 34.0; El Salvador de 3,770 hasta 2,650, disminuyendo en 29.7%, con área de bosques de 12.8 de su superficie; Bolivia de 627,950 km² hasta 547,640 km², disminuyendo en 12.8, con un área de bosques 50.6%; Venezuela de 520,260 km² hasta 466,830 km², disminuyendo en 10.3, con un área boscosa de 52.9; República Dominicana de 11,050 km² hasta 19,830 km², disminuyendo en un 79.5%, albergando aún un área de bosques del 41.0%; Perú de 779,210 km² a 739,730 disminuyendo sus bosques en un 5.1%, teniendo aún un área de 57.8%; Costa Rica de 25,640 km² a 27,560 km², aumentando su área en 7.5, alcanzando un área de 54.0% de su superficie; Uruguay de 7,978 km² hasta

⁸⁸² Oficina de División de Estadísticas de las Naciones Unidas en <http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/qindicators.htm>. Los datos establecidos se toman desde el 1990 hasta el 2014.

⁸⁸³ Vid. JOAQUÍN, V., "Loma Miranda, ¿parque nacional?", artículo publicado en el *Periódico El Día*, el 8 de septiembre del 2014.

18,450, aumentando sus bosques en un 131.3%, aculando un área boscosa de 10.5; Argentina va de 347,930 a 271,120, disminuyendo en 22.1%, teniendo un área de bosques de 9.9%; Nicaragua de 45,140 a 31,140, disminuyendo en 31.0, teniendo un área boscosa de 25.9%; Chile de 152,630 a 177,350, aumentando en un 16.2%, con un área boscosa de 23.9%; Guatemala de 47,480 a 35,400, disminuyendo en 25.4%, teniendo un 33.0 de área de bosques; Ecuador de 146,309 a 125,479, disminuyendo en 14.2, para un área boscosa de 50.5 de la superficie⁸⁸⁴.

Estos datos muestran cómo los únicos países que aumentaron sus bosques fueron Uruguay, Costa Rica y Chile, entendiendo lo preocupante de los problemas ambientales, mientras que el caso de la República Dominicana resulta más que excesivo una disminución de 79.5% en 15 años; Haití por su parte llama la atención por la escasa área de bosque que tiene su superficie; esto es muestra del crecimiento demográfico irresponsable que han tenido los Estados. Razones que hacen entender que el derecho al medio ambiente sano es una tarea pendiente en los países de la región, pues incluso, aparte de los problemas antes expuesto, el agua potable en muchos de los países no es una realidad, por lo que se debe seguir avanzando al respecto.

V.6 El Comité de Derechos Humanos y la evaluación en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Colombia, República Dominicana, Venezuela y México

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibe periódicamente informes sobre los avances que han tenido los Estados para poner en práctica los distintos instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, de los cuales el Comité emite su opinión, indicando los puntos que deben mejorar. La examinación de los informes como de las observaciones del Comité permite tener una idea de cuál ha sido el desarrollo de tales derechos en los Estados, y el compromiso de éstos con los derechos humanos. Sin embargo, nos limitaremos sólo a algunos aspectos del informe.

⁸⁸⁴ Oficina de División de Estadísticas de las Naciones Unidas, en <http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/qindicators.htm>

V.6.1 Colombia

En el informe CCPR/C/COL/CO/6, del 2010, el Comité de Derechos Humanos ve muy positivos el desarrollo legislativo que ha tenido para implementar el PIDCP, sin embargo critica que el informe no muestra el avance en la implementación de los derechos del PIDCP en la vida práctica⁸⁸⁵. Como aspectos positivos el Comité entiende que fueron la Ley 1257 del 2008 el cual dispone sobre la prevención y sanción de formas de violencia en contra de las mujeres; la aprobación de la Ley 1098 del 2006, que sanciona el Código de la Infancia y la Adolescencia⁸⁸⁶.

Por igual, el Comité ve adecuadamente la relación que tiene el Estado de Colombia con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como la relación con los relatores Especiales, Representantes Especiales y Grupos de Trabajo. También observa con beneplácito que la Corte Constitucional colombiana aplique el derecho internacional de los derechos humanos, por igual verifica que desde el último informe evaluado en el 2004, Colombia ha ratificado: a) el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 23 de enero del 2007; b) el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados el 25 de mayo del 2005; c) la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas el 12 de abril del 2005; d) el Convenio núm. 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil⁸⁸⁷.

Pero el Comité mostró su preocupación, puesto que no había avances prácticos con respecto al informe que se había presentado anteriormente, dentro de las que estaban “...las relativas a beneficios jurídicos para los desmovilizados de grupos armados ilegales, connivencia entre las fuerzas armadas y miembros de grupos paramilitares”⁸⁸⁸, y como otras de las preocupaciones mostraban “la falta de investigaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos y los ataques contra los defensores de derechos

⁸⁸⁵ CCPR/C/COL/CO/6, del 6 de agosto del 2010, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párr. 2.

⁸⁸⁶ *Ibidem*, párr. 3.

⁸⁸⁷ *Ibidem*, párr. 4-7.

⁸⁸⁸ *Ibidem*, párr. 8.

humanos). El Comité lamenta que subsistan muchos motivos de preocupación (art. 2 del Pacto)”⁸⁸⁹. Como preocupaciones puntuales el Comité señala:

El Estado parte debe cumplir con las obligaciones contenidas en el Pacto y otros instrumentos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e investigar y castigar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad⁸⁹⁰.

El Estado parte debe asegurar que se adopte legislación e implementar una política que garantice plenamente el derecho a un recurso efectivo y a una reparación integral. La implementación del derecho debe desarrollarse tomando en cuenta los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (A/RES/60/147, 2006) y asimismo considerar los cinco elementos de este derecho: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no-repetición. Particular atención debe ser prestada a aspectos de género y a las víctimas que son niños, niñas, afrocolombianos e indígenas. Debe habilitarse recursos específicamente destinados a brindar atención psicosocial y rehabilitación⁸⁹¹.

El Estado parte debe asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes, que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen violaciones de derechos humanos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. El Estado debe garantizar recursos adicionales a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que agilice su labor, y el Comité señala la importancia que los casos correspondientes sean asignados a dicha unidad. Asimismo, el Estado debe fortalecer la seguridad para los operadores de justicia y para todos los testigos y víctimas. El Estado parte debe construir un sistema centralizado para poder identificar todas las graves violaciones de derechos humanos y dar debido seguimiento a la investigación de las mismas⁸⁹².

El Estado parte debe tomar medidas eficaces para discontinuar cualquiera Directiva del Ministerio de Defensa que puede conducir a graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione a los responsables. El Comité subraya la responsabilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en resolver los conflictos de competencia y asegurar que estos crímenes quedan claramente fuera de la jurisdicción de la justicia militar en la práctica⁸⁹³.

⁸⁸⁹ *Ibidem*, pág. 8.

⁸⁹⁰ *Ibidem*.

⁸⁹¹ *Ibidem*.

⁸⁹² *Ibidem*.

⁸⁹³ *Ibidem*.

La demás recomendaciones, al igual que la anteriores giran en torno a los problemas que tiene Colombia con las FARC, en todo lo que tiene que ver con el procedimiento de ayudar a las víctimas, así como el fortalecimiento de los cuerpos de investigación de Colombia para que le den una conclusión expedita a los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el territorio colombiano.

Colombia en el informe del 2016, muestra como avances, la admisión jurisprudencial del derecho a la libre determinación y a la participación de las Comunidades Negras, principio éste que se incluye en la Carta Magna del 1991. Por igual, la jurisprudencia protegió el derecho fundamental a la libre determinación de los pueblos indígenas, lo que también se traducía a la no intervención del gobierno en los asuntos concernientes al gobierno del pueblo indígena, ambas jurisprudencia se asentaron en las sentencias T-823 del 2012 y T-049 del 2013, del Tribunal Constitucional⁸⁹⁴.

El informe presenta una amplia respuesta legislativa para promover las garantías de los derechos del PIDCP, como la Ley 1429 del 2010 tendiente a la generación de empleo, la Ley 1482 del 2011, que establece protección de individuos o grupos de individuos de la discriminación o racismo; la Ley 1496, que garantiza una igualdad en el salario entre mujeres y hombres; la Ley 1618 del 2013, que establece protege el goce de los derechos de las personas con discapacidad; el Decreto 4463 del 2011, la ley implementa mecanismos para el reconocimiento del trabajo de las mujeres; el Decreto 1930 del 2013, el cual adopta la equidad de género como una política pública⁸⁹⁵.

V.6.2 República Dominicana

El informe CCPR/C/DOM/CO/5 destaca como aspectos positivos en la implementación PIDCP por parte de la República Dominicana; a) la Constitución dominicana del 2010; b) el derecho al voto para los privados de libertad; c) la adhesión a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en agosto del 2009; d) La ratificación de

⁸⁹⁴ CCPR/C/COL/7, del 7 de abril del 2015, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párr. 9; REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, J., PÉREZ-PRAT DURBAN, L., *op. cit.*, pp. 112-142, respecto al principio de la libre determinación de los pueblos y los pueblos indígenas.

⁸⁹⁵ *Ibidem*, párr. 11- párr.17

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 24 de enero del 2012⁸⁹⁶.

Mas, el Comité tiene como preocupación el hecho de que en el ordenamiento de la República Dominicana no está muy claro el sitio del PIDCP, amén de que no muestra los avances que han tenido los tribunales nacionales en la aplicación del Pacto, cuya recomendación al respecto manifiesta que *“El Estado parte debe estipular claramente la primacía del Pacto sobre el derecho interno. En su próximo informe periódico, el Estado parte debe incluir ejemplos de la aplicación del Pacto por los tribunales nacionales”*⁸⁹⁷.

A su vez, el Comité deplora que luego de diez años de creada la Defensoría del Pueblo, el Estado dominicano aún no había nombrado al defensor del pueblo, por lo que la institución tampoco había iniciado en sus funciones. Recomendando que se nombre cuanto antes a un Defensor del Pueblo garantizando niveles adecuados para su elección⁸⁹⁸. Como otros de los problemas que el Comité atribuye al Estado dominicano se encuentra el hecho de que no otorgue documentos temporales a los refugiados, dirigidos a legalizar la estancia en el país, debiendo el Estado dominicano dar una identificación a las personas que pidan ser asilados y a los refugiados, para que puedan estar protegidos de las deportaciones⁸⁹⁹.

Otro punto que al Comité le llama la atención que si bien entiende que el Estado dominicano está desarrollando un marco legislativo apropiado para el combate de la violencia contra la mujer y la violencia sexual, no obstante el Comité ve con lamento el que en la República Dominicana dichos hechos ocurran con tanta frecuencia, y además que ve algunas limitaciones en las áreas rurales, pues no hay autoridades próximas, ni casas de acogidas o albergues⁹⁰⁰.

Asimismo, el Comité se preocupa por la brutalidad policial y el abuso de la autoridad por parte de los miembros que deben proteger el orden, y por la ingente cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Una observación que hace el Comité es que no hay un tipo penal para esas ejecuciones extrajudiciales en la normativa interna de la República

⁸⁹⁶ CCPR/C/DOM/CO/5, del 19 de abril del 2012, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párr. 3-4.

⁸⁹⁷ *Ibidem*, párr. 5.

⁸⁹⁸ *Ibidem*, párr. 6.

⁸⁹⁹ *Ibidem*, párr. 8.

⁹⁰⁰ *Ibidem*, párr. 11.

Dominicana, lo que impide que el fenómeno se pueda ver en su justa dimensión, y que se le proporcione el trato correspondiente⁹⁰¹.

V.6.3 Venezuela

El informe CCPR/C/VEN/CO/4 del 2015 destaca como elementos positivos del informe presentado por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela; a) la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y la instauración del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; b) la aprobación de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la reforma que incorpora el tipo penal de feminicidio llevada en el 2014; c) la creación de un Ministerio de la Mujer y para la igualdad de género; d) la aprobación de la Ley Orgánica contra la discriminación racial; e) la aprobación de una Ley para penalizar y prevenir la tortura y otros tratos crueles e inhumanos; f) la aprobación de un plan nacional para prevenir la tortura y otros tratos crueles e inhumanos en el 2013. El Comité también mira con agrado que se hayan ratificado o adherido a los siguientes instrumentos internacionales: a) Los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 8 de mayo de 2002, y a la participación de niños en los conflictos armados, el 23 de septiembre de 2003; b) El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el 13 de mayo del 2002; y, c) La Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el 24 de septiembre del 2013⁹⁰².

El Comité le hace a Venezuela la misma observación que a la República Dominicana de que no se esté aplicando por parte de los tribunales las disposiciones de los instrumentos internacionales, instando a que se toma la iniciativa adecuada para concientizar sobre el Pacto y su aplicabilidad directa. En relación con la labor que hace la Defensoría del Pueblo con los derechos de los LGBTI el Comité alaba dicha labor, pero entiende que “le preocupan las informaciones sobre la discriminación y los actos de violencia, incluyendo

⁹⁰¹ *Ibidem*, párr. 13.

⁹⁰² CCPR/C/VEN/CO/4, del 14 de agosto del 2015, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párr. 3-4.

asesinatos, que sufren estas personas debido a su orientación sexual o identidad de género (arts. 2, 6, 7 y 26)”⁹⁰³. Lo mismo se observa con los derechos de la mujer, para lo cual el Estado venezolano ha hecho esfuerzos resaltables pero sin embargo los mismos continúan aún⁹⁰⁴.

Otras de las advertencias que hace el Comité es la siguiente “observa con preocupación que el Código Penal aún criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, salvo cuando sea indispensable para salvar la vida de la mujer, lo que lleva a las mujeres embarazadas a buscar servicios de aborto clandestinos que ponen en peligro su vida y su salud (arts. 3, 6 y 7)”⁹⁰⁵, lo que da muestra del apoyo del Comité por el aborto en sentido general.

Se nota, por igual, un número alto de muertes a causa de la violencia, entre ellos, casos cometidos por los miembros que deben guardar el orden⁹⁰⁶. Y sobre los derechos humanos el Comité da cuenta de constantes informes que refiere a las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante manifestaciones, dentro de esas violaciones se encuentran referentes al uso de manera excesiva de la fuerza, también tortura, detenciones irregulares y falta de previsión de los derechos fundamentales de los detenidos. En ese mismo orden, hay preocupación por el hecho de que los militares están tratando de tener control de las reuniones públicas manifestaciones de índole pacífica⁹⁰⁷.

En el mismo orden de ideas, el Comité constata que sólo un 34% de los jueces son regulares o titulares, mientras que los demás están provisionalmente, lo que puede traer complicaciones si su remoción o nombramiento se haga según la voluntad política. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público, ya que del mismo el Comité no recibió información para saber cuántos de los fiscales son de carrera. La preocupación por parte del Comité aumenta cuando hay informes que se refieren a que los jueces son castigados de alguna forma cuando sus decisiones son contrarias a las esperada por el Gobierno. Como tal, el Comité señala el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, quien fue detenida en el 2009, por darle la libertad a una persona que el mismo Comité había dicho que era una detención arbitraria, y toma en cuenta que “la jueza Afiuni habría sufrido malos tratos

⁹⁰³ *Ibidem*, párr. 8.

⁹⁰⁴ *Ibidem*, párr. 9.

⁹⁰⁵ *Ibidem*, párr. 10.

⁹⁰⁶ *Ibidem*, párr. 11.

⁹⁰⁷ *Ibidem*, párr. 14.

y agresión sexual durante su detención y de que tales alegaciones no habrían sido oportunamente investigadas (arts. 7 y 14)”⁹⁰⁸.

Los informe recibido por el Comité también señalan que el Gobierno de Venezuela ha llevado a cabo actos de intimidación, de descalificación, amenazas o cualquier otros tipos de ataques cometidos en contra de periodistas, de activistas de derechos humanos, y abogados, pero pone atención en los procesos seguidos en contra de Leopoldo López y Daniel Ceballos, puesto que las detenciones de estos fueron consideradas irregulares por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria⁹⁰⁹. Y como otra importantísima preocupación yace la denuncia del Estado de Venezuela a la Convención Americana de Derechos Humanos, invitando el Comité al Estado para que sea parte otra vez en la CADH⁹¹⁰.

V.6.4 México

El informe CCPR/C/MEX/CO/5 del 2010 ve como positivo que el Estado de México hay sancionado las siguientes leyes: a) Ley general de acceso de las mujeres a una vía libre de violencia; b) Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; c) Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil; d) la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y la aprobación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012⁹¹¹.

El Comité es reiterativo en la recomendación de la conciencia sobre el PIDCP que deben tener los actores del sistema de justicia para la aplicación del Pacto en las decisiones judiciales⁹¹². Otros factores en el informe son la desigualdad notable entre hombres y mujeres en muchos escenarios de la vida, dentro de la cual está el ámbito político. Así

⁹⁰⁸ *Ibidem*, párr. 15.

⁹⁰⁹ *Ibidem*, párr. 17.

⁹¹⁰ *Ibidem*, párr. 22.

⁹¹¹ CCPR/C/MEX/CO/5, del 7 de abril del 2010, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, párr. 4.

⁹¹² *Ibidem*, párr. 5.

como la discriminación que están viviendo las mujeres cuando buscan empleo en las industrias ubicadas en las regiones fronterizas, en la que se les preguntan sobre asuntos discretos de cada persona, y la someten a realizarse pruebas de embarazo⁹¹³.

En el Estado de México la violencia en contra de la mujer sigue preocupando al Comité, pues dentro de dicha violencia se encuentra la tortura, los malos tratos, así como las violaciones y otras maneras de violencia sexual y doméstica, y que hasta el momento hay muy pocas sentencias dictadas por este flagelo. Mientras que, incluso algunos Estados no hay mecanismos de alerta en ocasión de la violencia, y que no se penaliza el acoso sexual⁹¹⁴.

En el territorio del Estado mexicano el Comité observa que las torturas se mantienen y los malos tratos por miembros de la policía, y que aún hay muy pocas condenas en contra de los culpables de tales hechos, y a los que se le impone una sanción suele ser muy débil, y mira como alarmante que aun reducido número de individuos víctimas del ilícito se le haya concedido una indemnización por el mal causado⁹¹⁵. Hay una preocupación por el sistema penal acusatorio, el cual no se había podido aplicar plenamente, en ese sentido se le estaba dando un valor bastante considerable a las confesiones obtenidas de primera mano por parte de la policía por lo que había una violación a la presunción de inocencia, ya que dichas confesiones eran el resultado de torturas y tratos crueles e inhumanos⁹¹⁶.

V.7 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la evaluación de tales derechos en Colombia, República Dominicana, Venezuela y México

V.7.1 Colombia

El informe E/C.12/COL/CO/5 del 2010 destaca entre los avances positivos de Colombia, la ratificación del Estatuto de Roma que configura la Corte Penal Internacional, y como avances legislativo mira; a) la Ley núm. 581 del 2010 sobre la participación de la mujer; b) la Ley 823 del 2003, concerniente a la igualdad de oportunidades para las mujeres; c) la Ley núm. 599 del 2010, que incluye como un tipo penal la violación a la libertad de

⁹¹³ *Ibidem*, párr. 7.

⁹¹⁴ *Ibidem*, pág. 8.

⁹¹⁵ *Ibidem*, párr. 13.

⁹¹⁶ *Ibidem*, párr. 14.

trabajo, amén de que ve muy bien las sentencias C-169/01 sobre la discriminación positiva; la sentencia C-1064/01, la cual dispone de criterios para el salario mínimo, así como la estabilidad en el poder adquisitivo; la sentencia C-355/06, la que despenaliza el aborto⁹¹⁷.

Al igual que el Comité de Derechos Humanos, el Comité DESC, muestra preocupación por el extendido conflicto armado en Colombia, con las tropas de las FARC⁹¹⁸, por igual, el Comité DESC muestra su descontento puesto que Colombia no ofrece información que permitan ver los avances del Estado en los derechos económicos, sociales y culturales⁹¹⁹.

En cuanto a los derechos de los indígenas el Comité entiende que en los grandes proyectos encaminados por el Estado sobre infraestructuras y minería no se ha obtenido la aquiescencia de parte de las comunidades indígenas y afrocolombianas que están siendo afectadas por tales actividades, en concordancia con ello, el Comité DESC llama la atención sobre que para el “megaproyecto” minero de Chocó y Antioquía se le debió consultar a los verdaderos representantes de la comunidad indígena⁹²⁰.

También el desempleo es preocupante, puesto que sigue muy elevado, especialmente en las zonas rurales, así como entre los jóvenes, mujeres, pueblos indígenas y afrocolombianos, y que las oportunidades de empleo se estén presentando en un 60% en el sector informal, lo que implica problemas en el disfrute de la seguridad social, pero más preocupante aún es las condiciones en que se trabaja en el sector informal y en las áreas rurales, en los cuales los salarios siguen siendo pírricos⁹²¹.

En el territorio colombiano también se presentan asesinatos a sindicalistas, así como el hecho de que los sindicalistas siguen siendo objeto de amenazas y violencias, lo que viene agudizar más la situación el hecho de que sólo se hayan investigado sólo algunos casos de muertes de sindicalistas⁹²².

El Comité DESC constata que ha recibido informe que alegan que los niños están siendo reclutados forzosamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

⁹¹⁷ E/C.12/COL/CO/5, del 7 de junio del 2010, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, párr. 3, 4 y 5.

⁹¹⁸ *Ibidem*, párr. 7.

⁹¹⁹ *Ibidem*, párr. 8.

⁹²⁰ *Ibidem*, párr. 9.

⁹²¹ *Ibidem*, pág. 11.

⁹²² *Ibidem*, párr. 12.

y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y hay cierta cantidad de casos en donde los niños pierden la vida debido a homicidios, robos, en las minas terrestres, o los enfrentamientos entre el ejército y los grupos armados en Colombia⁹²³.

V.7.2 República Dominicana

Mientras que en la República Dominicana el informe E/C.12/DOM/CO/4 del 2016 mira con agrado que el Estado haya ratificado o se haya adherido a los siguientes instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; a) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 24 de enero del 2012; b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; c) el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño, así como la aprobación de las siguientes: a) Ley núm. 5-13 sobre discapacidad; b) Ley núm. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; c) Ley núm. 135-11 sobre el VIH/SIDA; 4) el Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2020⁹²⁴.

Tienden a ser preocupaciones por parte del Comité DESC, el hecho de que el Estado dominicano no cuente con los mecanismos necesarios para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cooperar con las autoridades para dar garantía del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, también muestran inquietud por el hecho de que ha habido agresión o represalia para con defensores de derechos humanos⁹²⁵. Otros asuntos que perturban al Comité DESC es la falta de garantías para asegurar la independencia del órgano encargado de ejercer la función judicial en el Estado dominicano, pues el Consejo Nacional de la Magistratura no reglamenta un procedimiento transparente de selección de los jueces de las altas cortes⁹²⁶.

Un aspecto a resaltar es que al Comité DESC *“le preocupa que la recaudación fiscal y el gasto social sean muy bajos para el nivel de desarrollo del Estado parte y que el sistema tributario no tenga ninguna capacidad para reducir el alto índice de desigualdad, debido a que reposa esencialmente en impuestos indirectos y reconoce*

⁹²³ *Ibidem*, pág. 16.

⁹²⁴ E/C.12/DOM/CO/4, del 21 de octubre del 2016, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, párr. 3-4.

⁹²⁵ *Ibidem*, párr. 7-9.

⁹²⁶ *Ibidem*, párr. 11.

*numerosas exenciones injustificadas. El Comité lamenta que no se haya proporcionado suficiente información desglosada sobre el gasto social (art. 2, párr. 1)”*⁹²⁷, observando el Comité DESC un problema en la distribución de la riqueza según el modo en que se encuentra el sistema fiscal de la República Dominicana.

También el Comité DESC deja ver otros problemas de desempleo, de discriminación racial, de la desigualdad de hombres y mujeres, del desempleo, del salario mínimo de los trabajadores dominicanos, los derechos sindicales, la seguridad social, el derecho a una vivienda, agua y saneamiento, entre otros factores que chocan con las disposiciones de los derechos económicos, sociales y culturales⁹²⁸.

V.7.3 Venezuela

El Comité DESC observa positivamente que el Estado Venezolano haya ratificado algunos instrumentos internacionales; a) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; b) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños relativo a la venta de niños; d) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por igual la aprobación de los siguientes instrumento legislativos: a) Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA; Ley Orgánica del Trabajo; c) Ley Orgánica de educación; d) Ley de Idiomas Indígenas; e) Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna⁹²⁹.

En cuanto a la exigibilidad de los derechos, el Comité DESC se preocupa porque el Tribunal Supremo de Venezuela ha entendido en algunas sentencias que los derechos económicos, sociales y culturales no gozan de la protección judicial⁹³⁰. También el Comité DESC observa como preocupación la denuncia hecha a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que puede afectar los derechos económicos, sociales y

⁹²⁷ *Ibidem*, pág. 17.

⁹²⁸ *Ibidem*.

⁹²⁹ E/C.12/VEN/CO/3, del 7 de julio del 2015, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, párr. 3-4.

⁹³⁰ *Ibidem*, párr. 7.

culturales⁹³¹. También produce inquietud que a los pueblos indígenas no se les esté consultando respecto a la explotación y a la exploración de los recursos naturales⁹³².

Asimismo, se establecen problemas con la independencia del órgano que ejerce las funciones judiciales, ya que hay muchos jueces con un estatus provisional, lo que puede hacer que los mismos sean dependientes⁹³³. Se expresan problemas de corrupción, especialmente una falta de información de casos sometidos y que se hayan obtenido condenas. Hay una ausencia de mecanismos que ayuden a la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, por igual el Comité DESC se refiere a problemas con la seguridad social, con la libertad sindical, con la igualdad de género, con la violencia económica, con la explotación de mores, con la pobreza, con el derecho a una vivienda adecuada, con el derecho a la alimentación, con el sistema de salud, con la salud sexual, con la prevención de enfermedades, con el derecho a la educación y otros puntos a considerar⁹³⁴.

V.7.4 México

En cuanto a los aspectos positivos el Comité DESC resalta la elaboración por parte de las autoridades mexicanas de un Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a su vez señala la alta cooperación de México con la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la fundación del Instituto Nacional de las Mujeres, la creación de un Comité Técnico para medir la pobreza, así como el acceso gratuito de los pacientes con VIH/SIDA para la obtención de los medicamentos antirretrovirales⁹³⁵.

Entre los problemas que se observan en el territorio mexicano es la falta de consulta al pueblo indígena en la construcción de la represa hidroeléctrica La Parota y de otros proyectos en lo concerniente al Plan Puebla-Panamá, puesto que la construcción de la misma puede traer serios inconvenientes a los pobladores indígenas del área. También en

⁹³¹ *Ibidem*, párr. 8.

⁹³² *Ibidem*, párr. 9.

⁹³³ *Ibidem*, párr. 10.

⁹³⁴ *Ibidem*.

⁹³⁵ E/C.12/MÉX/CO/4, del 9 de junio del 2006, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, párr. 4-8.

la población activa el 40% trabajar en el sector no estructurado, asimismo se constata que hay limitaciones muy rigurosas para la constitución de los sindicatos y la adhesión a éstos, en cuanto a los trabajadores al servicio del Estado, en el mismo tenor se encuentra el plan de seguro ya que sólo se prevé un retiro a una edad muy mayor⁹³⁶.

El Comité DESC muestra mucha inquietud los niños trabajando con menos de 16 años, por la pobreza que aún se mantiene con niveles altos, por la deficiencia de los programas de vivienda, por la ausencia de educadores en las escuelas de enseñanzas, y por la falta legislativa de protección a la autoría colectiva de los pueblos indígenas⁹³⁷.

V.8 Elementos que impide la concreción de los derechos humanos y los principios democráticos en América Latina

A raíz de la investigación que se ha llevado a cabo se ha podido identificar cuatros problemas de los Estados de Latinoamérica que en los distintos índices analizados presentan calificaciones con síntomas preocupantes, y que concuerdan con problemas de funcionalidad del Estado reflejados en la no consecución del ESDD. Dichos problemas también son tratados por otros índices y análisis que ayudarán para su desarrollo, siendo tales males: 1. La corrupción de las institucionales estatales; 2. La brecha de la desigualdad entre los ricos y los pobres; 3. El desarrollo de la delincuencia; y, 4. La falta de voluntad política para combatir estos males.

V.8.1 La Corrupción de las instituciones estatales en los países de la región

La corrupción se ha convertido en el símbolo del estancamiento de los Estados, siendo este el mayor mal que presentan. Velázquez Mainardi entiende que “Entre todos los males que padecen los sistemas políticos, la corrupción parece ser el más eficiente por las inmoralidades que ha determinado”⁹³⁸. La corrupción como mal permea todas las instituciones del Estado, desde el sistema judicial, pasando por el órgano que ejerce las

⁹³⁶ *Ibidem*, párr. 16-17.

⁹³⁷ *Ibidem*.

⁹³⁸ VELÁZQUEZ MAINARDI, M. Á. (1993): *Corrupción e impunidad*, Ed. Tele-3, Santo Domingo, pág. 21.

Funciones Legislativas, así como por el Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados y autónomos.

Definiendo la corrupción Velázquez Mainardi sostiene que:

No hay que entrar en consideraciones teóricas profundas y complejas, tomadas de los tratados de moral de los grandes pensadores de distintas épocas para saber lo que es la corrupción. En efecto, se trata de un proceso de descomposición moral en el que está implícita una inversión y confusión de valores, amparada por la lenidad y permisibilidad del Estado⁹³⁹.

Empero se entiende que la mejor definición dada por el autor es cuando expresa que: “...la corrupción es el mal de males de toda la sociedad en donde impera la impunidad frente a las ilicitudes de todos los pelajes”.⁹⁴⁰ Para González Llaca la corrupción es: “la acción u omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el interés público y/o el de la entidad privada en la que labora”⁹⁴¹.

La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción en su preámbulo prevé la gravedad de la corrupción al estatuir: “Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la Ley”⁹⁴².

En ese sentido, la corrupción provoca el deterioro de la democracia, la justicia, el desarrollo y el Estado de Derecho. También se podría decir que la corrupción da origen a otros ilícitos penales como el enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, trata de persona, fuga de capitales por vías ilícitas, y el tráfico de influencias⁹⁴³. Todo lo cual agudiza más la situación del fenómeno de la corrupción, pues la misma se refleja en todos los sectores de la sociedad y sus efectos son sufridos por la generalidad de la población⁹⁴⁴.

⁹³⁹ *Ibidem*, pág. 23.

⁹⁴⁰ *Ibidem*, pág. 23.

⁹⁴¹ GONZÁLEZ LLACA, E. (2005): *Corrupción, patología colectiva*, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), México, D. F., pág. 53.

⁹⁴² Vid. *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*, Participación Ciudadana y la USAID, ed. Tropical.

⁹⁴³ VELÁZQUEZ MAINARDI, M. Á., *op. cit.*, pág. 23.

⁹⁴⁴ AA.VV.: *Las múltiples caras de la corrupción*, CAMPOS, J. E., PRADHAN, S. (dirs), Banco Mundial, Mundi-Prensa y Mayol Ediciones, Colombia, 2009.

Para Baltasar Garzón Real la corrupción es un fenómeno antiguo, por tal en las disposiciones de Hammurabi se establecía una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y de la misma manera en la actualidad se diferencia entre la ética en la función pública y usar los recursos del Estados en su propio provecho, al tiempo que la diferencia de los individuos contribuye a la debilidad de la acción pública y a la impunidad de los actos de corrupción, y en el momento de la insostenibilidad de los acontecimientos ocurren los cambios⁹⁴⁵.

Eloísa del Pino ha comprendido, sobre la corrupción en Centroamérica y la República Dominicana, que ha habido muchas investigaciones que miran la corrupción como un gran problema con serias consecuencias para el desarrollo en las dimensiones, política, económica y social, por lo que las investigaciones sobre la corrupción indican que la misma es un problema de gobernabilidad, de la democracia, elementos que ha conllevado a que se pasara de la tolerancia del problema a tener conciencia de la lucha en contra de la corrupción⁹⁴⁶.

Para Álvarez Flores la corrupción es el uso de un puesto, poder o recursos públicos para la satisfacción de las apetencias personales, lo cual no sólo tiene que ver con las transacciones de dinero, sino que dichas transacciones resultan ser pagos por decisiones que se toman para favorecer a unos pocos, por igual identifica la corrupción con los tipos penales con los cuales se identifica la corrupción, otro punto muy importante que individualiza es que la corrupción puede variar acorde a los criterios éticos que tenga una sociedad en un determinado momento, razón por la que un hecho puede ser considerado corrupción en un país y en otro no, aunque estos aspectos pueden ser propios de los distintos tipos penales y del derecho en sentido general⁹⁴⁷.

Álvarez Flores establece cuatro elementos que identifican a la corrupción: 1) todo acto corrupto es una violación a una norma; 2) la consumación del acto es con el fin de la obtención de un beneficio propio; 3) tiene que ver con la funciones asignadas a un

⁹⁴⁵ GARZÓN REAL, B.: "Prólogo", AA.VV., *Informe Global de la Corrupción 2007*, RODRÍGUEZ, D., EHRICH, L. (Dir), Transparencia Internacional y Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pág. VII.

⁹⁴⁶ DEL PINO, E. et al (2007): *Avances y obstáculos en el fortalecimiento del Estado en Centroamérica y República Dominicana: un análisis de la capacidad institucional, la reforma de la administración y la gestión pública*, INAP y AEI, Madrid.

⁹⁴⁷ ÁLVAREZ FLORES, C. A.: "Combate a la Corrupción", AA.VV., *Combate a la corrupción*, VIZCAÍNO ZAMORA, Á. (Dir), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México D. F., 1era., ed., 2011, pág. 19.

empleado o funcionario, y 4) el intento de encubrimiento de la conducta corrupta⁹⁴⁸, a lo que añade que “Estas características relacionan la conducta del agente corrupto con el secreto, la apariencia de legalidad y la alteración de las funciones públicas para conseguir una ventaja privada”⁹⁴⁹. Estas características son propias de la corrupción pública, sin embargo se podría hacer unas observaciones y es que el acto objeto de corrupción no siempre tiene que ser en provecho propio, puede ser simplemente a favor de un tercero, por existir algún tipo de influencia por amistad, familiaridad o cualquier otra, y otro punto sería que no siempre la conducta es catalogada como un tipo penal, pero siempre la conducta es rechazada por la generalidad de la sociedad.

La corrupción desde un punto de vista tiene dos fases, la primera, obedece a los actos que se pueden calificar en una determinada sociedad como actos de corrupción, y por ende le puedan asignar una sanción a la conducta, constituyendo un delito, y la segunda fase se presenta cuando aparece esa conducta punible que la sociedad ha determinado que no está de acuerdo por ser contraria a sus creencias sociales y morales, puesto que afecta al interés general, no se puede sancionar, ya sea por razones de falta de logística o por razones propias de la misma corrupción; trasladándose la corrupción al sistema de justicia, es decir a las agencias de investigación, al Ministerio Público y a los jueces; lo que resulta aún peor, esta corrupción puede ser hasta una simple influencia por parte de un funcionario o cualquier individuo.

Sobre lo planteado y hablando específicamente de la corrupción en México, Casar establece que:

...en las mediciones de percepción de los problemas que aquejan a nuestro país, la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas, incluso por encima de la pobreza...la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. Como ocurre en México, los que se definen como actos de corrupción casi nunca se castigan. La cifra negra –el porcentaje de delitos de corrupción cometidos pero no castigados⁹⁵⁰.

Sin embargo, todos convergen en la relevancia e incidencia de la corrupción, así como de lo complejo que es este fenómeno en virtud de que se entiende que debe de ser abordado

⁹⁴⁸ *Ibidem*, pág. 20.

⁹⁴⁹ *Ibidem*.

⁹⁵⁰ CASAR, M. A. (2015): *México Anatomía de la Corrupción*, Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., (IMCO), México D. F., pág. 5.

por diferentes disciplinas, y que dicho fenómeno ha corrompido a un gran número de instituciones⁹⁵¹.

V.8.2 La corrupción y los derechos humanos

El Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos y la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, han realizado un trabajo que muestra la estrecha vinculación de los actos de corrupción con los derechos humanos, pero interesa sobremanera la vinculación con los derechos sociales, pues el cumplimiento de estos es signo del cumplimiento de los derechos civiles y políticos, ya que la mayor afectación de la corrupción se produce en estos derechos, pues así expresa la investigación realizada, a saber. “La corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables (tales como las minorías, los pueblos indígenas, trabajadores inmigrantes, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, refugiados, prisioneros y personas pobres). También afecta, en forma desproporcionada a las mujeres y a los niños”⁹⁵².

La corrupción en la región de Latinoamérica choca con el fin mismo de los Estados debido al compromiso internacional que han asumido éstos en cuanto a la salud, vivienda, agua potable y educación, acorde a los tratados que se han visto en el desarrollo del presente trabajo. El punto de afectación de estos derechos radica en que estos servicios se fundamentan en contratos públicos, los cuales son vistos como oportunidades para la corrupción, además de que hay cierta desproporción en cuanto al impacto de esta corrupción, pues afecta el acceso de los más pobres a estos servicios⁹⁵³.

Jaime López entiende que “Para comprender la relación que existe entre corrupción y Derechos Humanos, deben tenerse en cuenta, entre otras consideraciones, que la corrupción es propiciada por grupos de poder que buscan obtener, mantener o expandir

⁹⁵¹ MORILLO, A.: “La corrupción: ¿problema social y/o político?” en *Revista Venezolana de Ciencia Política*, núm. 36, 2009, p. 148. Vid. *La Corrupción y los derechos humanos, estableciendo el vínculo*, Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos y Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Monterrey, 1ra. Ed., 2005, pág.9.

⁹⁵² *Ibidem*, pág.9.

⁹⁵³ *La Corrupción y los derechos humanos, estableciendo el vínculo*, Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos y Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, Monterrey, 1ra. Ed., 2005, pág.51.

una posición dominante en la explotación de los espacios o recursos públicos”⁹⁵⁴. Sin embargo, López entiende que tales grupos de poder podrían ser sectores ricos de una nación o los partidos o asociaciones políticas dominantes, sin dejar de lado a grupos que por alguna razón han adquirido ciertos niveles de influencia en un país, siendo ejemplo de ello el influjo militar sobre los gobiernos en el siglo XX en la región Latinoamericana y ocurriendo lo mismo con los inversionistas extranjeros⁹⁵⁵.

Esto grupos suelen tener influencia sobre las autoridades que dirigen los destinos del Estado, ya sea sobre el Ejecutivo, sobre los miembros del Congreso, y sobre los jueces de altas cortes y de los tribunales ordinarios. La corrupción en estos casos constituyen desviaciones al mandato dado por el pueblo, que en algunos es un mandato directo y en otros es un mandato indirecto, en el primero de los casos se ubican todos los funcionarios electos de manera directa, y en el segundo están aquellos funcionarios que son designados por otras autoridades, por ejemplo, los funcionarios designados por el Presidente de la República, los miembros del órgano de justicia. Son, especialmente, las desviaciones del mandato lo que hace que se despilfarran fondos destinados a mejorar los derechos de los individuos⁹⁵⁶.

V.8.3 Corrupción judicial en Latinoamérica

Para Linn Hammergren cuando se iniciaron las reformas judiciales de la región en los 80, entre las denuncias que se dirigieron a los jueces se encontraba la corrupción, entendiendo los ciudadanos que la gratuidad de la justicia no existía en vista de que la decisiones judiciales tenían un precio, otras de las quejas que se presentaba era la influencia política, la falta de protección de los derechos humanos, los problemas que engendraban los gobiernos autoritarios, no obstante todos estos tópicos tenían una relación con la corrupción⁹⁵⁷, ejemplo de ello es que: “cuando los gobiernos intervenían en el proceso de

⁹⁵⁴ LÓPEZ, J.: “Anticorrupción y defensa de los derechos humanos”, AA.VV.: *Corrupción y derechos humanos. Estrategias comunes por la transparencia y contra la impunidad*, RINCÓN PATIÑO, R. (Dir), Instituto de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular, Medellín, 2005, pág. 65.

⁹⁵⁵ *Ibidem*, pág. 65.

⁹⁵⁶ *Ibidem*, pág. 66.

⁹⁵⁷ HAMMERGREN, L.: “La lucha contra la corrupción judicial: una perspectiva comparada de América Latina”, AA.VV.: *Informe Global de la Corrupción 2007*, RODRÍGUEZ, D., EHRICH, L. (Drs), Transparencia Internacional y Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pp. 175-176.

selección judicial, los jueces eran escogidos por sus vínculos partidarios o su flexibilidad, más que por mérito. Por tanto, iniciaban sus carreras con pocos motivos para pensar que la conducta honesta incidiría en el avance profesional. La falta de garantía de la titularidad del cargo (aun en sistemas con carreras judiciales formales) ejercía presión adicional sobre los jueces y los impulsaba a actuar de modo oportunista durante su impredecible permanencia en el puesto”⁹⁵⁸.

El proceso de democratización en la región agravó más el mal de la corrupción judicial, en donde los gobiernos electos suplantaban a los jueces obviando las disposiciones constitucionales y del debido proceso, pasando los jueces a ser designados acorde a si eran miembros del partido de gobierno, es puesto como ejemplo que en Bolivia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Perú el órgano Ejecutivo hizo revocaciones masivas con el propósito de colocar a miembros de sus partidos, pues la democracia le dio el lugar de órgano del Poder Público a la justicia, pero a la vez fueron creciendo los medios de corrupción de los jueces⁹⁵⁹.

Empero, aunque se esté en un proceso de reforma judicial continuo en la región de Latinoamérica, aún no se ha podido desvincular la corrupción de los procesos judiciales, más aún cuando es para proteger a la misma corrupción actuando en otros escenarios, la percepción de la corrupción se ha mantenido disminuyendo y aumentando sin mostrar mejoría notables, pese a los intentos de reforma que se han hecho. Este mal que salpica en mucho a la justicia no debe de entenderse solamente a nivel de los jueces, pues, cuando se trata de proteger a un corrupto el mayor vínculo que existe es con los jueces pero también con los fiscales.

En cambio, el sistema de justicia se muestra peor desde las agencias de investigación, en donde se comienza a poner de relieve la corrupción en investigaciones de crímenes y delitos comunes como homicidios, robos, falsificaciones, entre otros delitos tradicionales. Lo cual es sumamente preocupante. La misma corrupción golpea al Ministerio Público, en mayor o menor grado que a la policía, y por último y en mayor preocupación, están los jueces, siendo en los órganos del Ministerio Público y la Judicatura en donde se apoyan los que incurren en tipos penales de corrupción.

⁹⁵⁸ *Ibidem*, pág. 176.

⁹⁵⁹ *Ibidem*, pág. 177.

V.8.4 La impunidad y la corrupción en el sistema de justicia

La impunidad es la garantía de la corrupción, pues es esta justamente la que permite que la corrupción siga mermando el ESDD, pero la impunidad puede ser vista desde otro punto de vista, y es como la misma corrupción, sólo que en otro órgano del Estado, como es el Judicial, es decir, es la misma corrupción la que impide que los cuerpos de investigación, el Ministerio Público y los jueces no puedan judicializar los procesos con tipos penales propios de este malestar.

Es preocupante que se cometan actos de corrupción que socaven el ESDD, es decir que se realicen hechos que no hagan posible el Estado de Derecho y que impidan el cumplimiento fiel de los DDHH, todavía más cuando se trata de los derechos sociales que tratan de acabar con la brecha de desigualdad, creando oportunidades horizontales, pero es peor cuando los órganos que ejercen las investigaciones, y que están facultados para investigar a los corruptos, son quienes institucionalizan la corrupción al darle cabida, y no solamente ello sino que se convierten en corruptos iguales.

Lo peor no es que se cometan actos de corrupción sino que exista la indiferencia judicial, que hace que se institucionalice la corrupción, ya sea que esta no pase de las agencias de investigación, del Ministerio Público o a nivel de la judicatura. Y es justamente esa institucionalización de la corrupción que se erige en impunidad, lo que implica un ESDD defectuoso, Joseph Stiglitz, considera que:

No se compra a los jueces en particular, sino las propias leyes, a través de las contribuciones a las campañas electorales y a los lobbys, en lo que ha venido en llamarse corrupción a la americana. En algunos estados, los jueces son elegidos, y en esos estados existe una relación todavía más estrecha entre el dinero y la justicia. Los intereses económicos utilizan las contribuciones a las campañas electorales para conseguir unos jueces que sean solidarios con sus causas⁹⁶⁰.

V.8.5 Corrupción y violación al libre acceso a la justicia

La corrupción en el sistema de justicia amén de contribuir al detrimento de los derechos en sentido general, también afecta al derecho de libre acceso a la justicia, pues al designarse jueces y fiscales en provecho de los intereses propios de un grupo, se le impide

⁹⁶⁰ Stiglitz, Joseph E. (2014): El precio de la desigualdad, Prisa ediciones, Barcelona, pág. 260.

a los individuos ir en busca de lo considerado como “justo”. El sistema de justicia en el ESDD debe tener un diseño cuya base sea la igualdad, pues como afirma Stiglitz:

Gestionar un sistema judicial resulta costoso, y las reglas del juego determinan lo grandes que son esos costes y quién los soporta. Si se diseña un sistema caro donde las propias partes cargan con los costes, se está diseñando un sistema injusto, aunque en principio no lo parezca. Si se diseña un sistema judicial lento, también puede resultar injusto. No es solo que la justicia con demora es justicia denegada, sino que los pobres no pueden soportar los costes de la demora igual que los ricos. Las grandes empresas lo saben. En las negociaciones con sus oponentes menos adinerados, una táctica estándar es realizar una pequeña oferta inicial y amenazar con imponer un proceso largo y costoso, con un resultado incierto si no se acepta la oferta⁹⁶¹.

El punto principal de la corrupción y el derecho de libre acceso a la justicia radica en lo antes establecido, pues los sistemas de justicia se han convertido en un mecanismo utilizado para amedrentar a otros⁹⁶², lo cual debe acabarse, pues éste no es el fin del sistema de justicia. Al derecho de libre acceso a la justicia le atraviesa el derecho a la igualdad dependiente del debido proceso, que entiende un sistema basado en los medios necesarios que le permitan a los individuos recurrir al sistema cuando ha sido transgredido un derecho, todo lo cual es socavado por la corrupción.

V.8.6 La corrupción en Latinoamérica como obstáculo para los derechos humanos, según el Banco Mundial, Latinobarómetro y la World Justice Project

Acorde al informe de Latinobarómetro entre el 2001 al 2010 hubo una disminución del índice de corrupción de 15 puntos, mientras que entre el 2011 y 2013 hubo un aumento de un 12 a 16 puntos, disminuyendo 5 puntos en el 2015, y al decir del informe “En términos de evolución se puede decir que hay un retroceso en la percepción de corrupción donde parece perderse los avances de la primera década del siglo XXI”⁹⁶³.

Otro de los indicadores analizados por el informe de Latinobarómetro muestra que la lucha en contra de la corrupción entre 2004 y 2009 aumentó de 26 a 39 puntos porcentuales, desde entonces hay una disminución de un 39 a 33 puntos porcentuales en el 2015, siendo esto un reflejo de que la corrupción ha ido ganando espacio. Teniendo la

⁹⁶¹ *Ibidem*, pág. 263.

⁹⁶² *Ibidem*, pp. 263-264.

⁹⁶³ *Informe de Latinobarómetro 1995-2015*, Santiago de Chile en www.latinobarometro.org.

obligación los Estados de tomar más medidas al respecto, puesto que las medidas sobre transparencia y rendición de cuentas aún no habían logrado las consecuencias esperadas⁹⁶⁴.

Para Latinobarómetro la corrupción es uno de los problemas principales, puesto que la legitimidad de la democracia ha estado sujeta a la misma. Así, en el índice de los problemas principales la percepción de la corrupción para muchos individuos no suele ser el problema principal, sin embargo esto puede ser porque incluso muchos individuos ya se han acostumbrado a la corrupción y la creen parte de sí, y hay otros países en donde no hay muchos casos de corrupción y los individuos suelen reaccionar de otro modo, esto son algunos de los inconvenientes que presentan los índices basados en la percepción⁹⁶⁵.

World Justice Project presenta en su índice de Estado de Derecho como uno de los indicadores la ausencia de corrupción, el cual tiende a medir los órganos Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los cuerpos de investigación como la policía y los militares. El promedio de la región es de 0.45 puntos⁹⁶⁶. Argentina muestra un porcentaje de 0.48 puntos, República Dominicana 0.36 puntos, Brasil 0.46 puntos, Colombia 0.43 puntos, Panamá 0.49 puntos, Honduras 0.34 puntos, México 0.33 puntos, El Salvador 0.43 puntos, Bolivia 0.34 puntos, Venezuela 0.27 puntos, Perú 0.34 puntos, Costa Rica 0.68 puntos, Uruguay 0.78 puntos, Nicaragua 0.37 puntos, Chile 0.72 puntos, Guatemala 0.33 puntos, Ecuador 0.45 puntos.

Uruguay, Chile y Costa Rica se encuentran mejor en el indicador de ausencia de corrupción, ya que están muy por encima del promedio de la región, mientras que Argentina, Panamá y Brasil están ligeramente por encima del promedio, y Ecuador tiene la misma cantidad del promedio, mientras que los demás países se encuentran por debajo del promedio de Latinoamérica. Estas cifras son una muestra de cómo van los países de la región en el combate a la corrupción.

Como se puede observar hay una similitud de los indicadores que se han visto y se puede ver la correlación que existe entre los países de la región, y cómo las mejores

⁹⁶⁴ *Ibidem*, pp. 71-73.

⁹⁶⁵ *Ibidem*, pp. 101-102.

⁹⁶⁶ Para ello se tomaron en cuenta los siguientes países: Argentina, República Dominicana, Brasil, Colombia, Panamá, Honduras, México, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Chile, Guatemala y Ecuador.

puntuaciones favorecen a Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina, lo que muestra el carácter científico de los indicadores, lo que, a su vez, es signo de cómo la corrupción se convierte en una de las causas primordiales de los Estados, y cómo ella puede hacer que los países puedan devenir con problemas en su funcionamiento⁹⁶⁷.

Asimismo, el informe de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial también prevé una medición sobre el control de la corrupción que trata de medir el modo en que se ejerce el Poder para beneficio privado, tanto en su forma mínima como a gran escala, así como el uso del Estado por minorías y por los intereses privados; los informes del Banco Mundial sobre la gobernabilidad son un referente de estudio⁹⁶⁸.

Aquí se tomaron en cuenta 18 países de la región para realizar el análisis del control de la corrupción⁹⁶⁹. Las puntuaciones van desde -2.5, considerada débil, hasta 2.5 considerada fuerte, en donde para el año 2014 el promedio de la región era de -0.34, así Argentina presenta una puntuación de 0.14, Bolivia de -0.64, Brasil de -0.38, Chile de 1.48, Colombia de -0.39, Costa Rica de 0.73, República Dominicana de -0.79, Ecuador de -0.82, El Salvador de -0.39, Guatemala -0.70, Honduras de -0.79, México de -0.73, Nicaragua de -0.88, Panamá de -0.36, Paraguay de -1.00, Perú de -0.59, Uruguay de 1.35 y Venezuela con -1.38.

Hay que comenzar diciendo que el promedio de la región de Latinoamérica del año 2013 en comparación con el año 2014 bajó 5 puntos, por lo que la corrupción ligeramente ha subido en América Latina, sin embargo hay dos países que están muy por encima del promedio Chile y Uruguay, mientras que Costa Rica le sigue y luego Argentina, los demás países están por debajo del promedio, cabe mencionar el caso de Venezuela que se muestra con la puntuación más desfavorable en el control de la corrupción.

Si se hace una comparación con el indicador de ausencia de la corrupción del informe de World Justice Project sobre el Estado de Estado, con el informe de los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, particularmente con el indicador de control de la

⁹⁶⁷ *Informe del Estado de Derecho 2015 de World Justice Project* en <http://worldjusticeproject.org/rule-law-around-world>.

⁹⁶⁸ "Reflects perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as "capture" of the state by elites and private interests", en *informe sobre los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial 2015* (<http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>).

⁹⁶⁹ Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

corrupción, es notable que los primeros cuatro lugares en ambos indicadores corresponden a Uruguay, Chile, Costa Rica y Argentina, habiendo una coherencia en los resultados sobre la corrupción, incluso Venezuela es quien también aparece obteniendo la calificación más baja en la región, y se encuentran otras similitudes con los demás países y las posiciones que ocupan en América Latina.

Estos indicadores de la corrupción son muestra de que la corrupción es uno de los males que impide el fortalecimiento del ESDD, y que por ende mantiene a los pueblos de Latinoamérica sumergidos con problemas para alcanzar el ESDD, sobresaliendo por encima de todos los demás el Estado uruguayo, Costa Rica, Chile y Argentina, pese a algunas falencias que puedan mostrar estos Estados, entonces se tiene que decir que la relación de la corrupción con los problemas estatales es estrecha, dejando ver que superando la corrupción se puede dar paso a un ESDD sólido, en donde la protección a los derechos humanos se convierten en una realidad.

V.9 Distribución de la riqueza, desigualdad y pobreza

Otro de los males que afecta el ESDD es el correspondiente a la manera en que se distribuye la riqueza en los países de Latinoamérica⁹⁷⁰, pues el modelo económico que se reproduce, muy distanciado del sistema jurídico, contribuye al enriquecimiento de unos pocos, en perjuicio de las mayorías, y hablando sobre el problema de la distribución y los derechos de los individuos Joseph Stiglitz establece que “El inconveniente de la interrelación entre la cuestión de los derechos de propiedad/externalidades y la distribución es que es imposible distinguir de libertad y justicia”⁹⁷¹, sin embargo la problemática es resuelta por el mismo economista al entender que:

⁹⁷⁰ Cfr. AGUILAR ZULUAGA, I. (2011): *Un análisis del desarrollo, la pobreza y la desigualdad*, Ecoe ediciones, Bogotá, muestra un estudio bastante interesante de la desigualdad y la distribución de la riqueza en los países de América Latina y su relación con los modelos económicos. También vid. ZICCARDI, A. (2005): *Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: los límites de las políticas sociales en América Latina*, Ed. CLACSO, Buenos Aires, aquí se muestra cómo las políticas públicas deben de estar enfocadas a la determinación previa de las desigualdades existentes. Y vid. AA.VV.: *Desigualdad, legitimación y conflicto: dimensiones políticas y culturales de la desigualdad en América Latina*, CASTILLO, M., BASTÍAS, M., DURAND, A. (Dir.), Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2014. Este trabajo muestra un análisis cuyo centro es la inclusión social en Latinoamérica.

⁹⁷¹ STIGLITZ, J. E. (2014): *El precio de la desigualdad*, Prisa ediciones, Barcelona, pág. 250. Desde el punto de vista sociológico vid. DELGADO BRITO, Y. (2009): *Conceptualización de la desigualdad: un acercamiento desde el enfoque sociológico*, El Cid Editor, Córdoba, pág. 1.

Las libertades de todo individuo deben restringirse cuando causan perjuicio a los demás. La libertad de contaminar de un individuo priva a otro de su salud. La libertad de una persona de conducir a toda velocidad priva a otra de su derecho a no resultar herida. Pero ¿qué libertades son las más importantes? Para responder a esta pregunta básica, las sociedades desarrollan las reglas y las normativas. Esas reglas y normativas afectan al mismo tiempo a la eficiencia del sistema y a la distribución: algunos salen ganando a expensa de los demás⁹⁷².

Así es el modo en que Stiglitz introduce el tema de la desigualdad, comenzando por el hecho de que los más vulnerables son quienes sufren las consecuencias de las irresponsabilidades de las minorías que conglomeran a su favor las grandes riquezas. Stiglitz da en uno de los puntos neurálgicos de los problemas que atrofian el ESDD en Latinoamérica, más en el sistema de derechos, en donde la repartición de la riqueza no llega a los más necesitados, empero los problemas que generan esta riqueza sí afectan a la mayoría.

Para OXFAM Intermón hay una economía que se está gestando a favor del 1% de la población mundial, lo que se viene convirtiendo en una desigualdad extrema, por lo que las esperanzas de los más desfavorecidos está menguando, así también es establecido por Credit Suisse, los cuales comprenden que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres está en constante crecimiento. OXFAM en sus cálculos destaca que: 1. En el 2015, 62 persona detentaban la riqueza de 3,600 millones; 2. Esa misma riqueza detentada en 62 personas ha aumentado en 45% en cinco años; 3. En ese mismo sentido, la riqueza que tienen la mitad más empobrecida de la población disminuyó en 38%; 4. La mitad más empobrecida de la población mundial recibió el 1% de la riqueza desde el 2000, mientras que el 50% de esa riqueza está en las manos del 1% más rico; y, 5. En cuanto a los ingresos medios anuales del 10% de la población mundial más depauperada, se incrementó menos de tres dólares en el año, tomando como referencia los años transcurridos⁹⁷³.

En el mismo tenor el informe expresa que: “La creciente desigualdad económica perjudica a todo el mundo, ya que debilita el crecimiento y la cohesión social. Pero es la población más pobre la que sufre sus peores consecuencias”⁹⁷⁴. Al referirse al debilitamiento del crecimiento económico OXFAM entiende que si las riquezas son distribuidas de manera más equitativa el crecimiento se desarrollaría más, al igual se

⁹⁷² *Ibidem*, pág.250.

⁹⁷³ *Informe de OXFAM Intermón, del 18 de enero de 2016, “Una economía al servicio del 1%”, en <https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1>*

⁹⁷⁴ *Ibidem*.

expresa en lo concerniente a la cohesión social, pues aduce que un mejor equilibrio en la distribución de la riqueza conlleva a que los individuos no se alíen a la delincuencia como forma de salir de la pobreza.

En lo relativo a la pobreza y a la desigualdad, estos factores van de la mano, sin embargo no siempre los avances en la disminución de la pobreza son sinónimos de una disminución de la desigualdad, pues expresa el informe de OXFAM entre el 1990 y el 2010 hubo cambios positivos en la reducción de la pobreza extrema, sin embargo en el mismo periodo de tiempo la desigualdad dentro de los países también aumentó, lo cual si no hubiera incrementado, un número mayor de individuos habría salido de la pobreza extrema⁹⁷⁵.

Un ejemplo de que la desigualdad afecta los derechos humanos es que los países en donde la desigualdad de los ingresos es más firme también suele tener más diferencias entre los hombres y las mujeres en lo que toca a los asuntos sanitarios, de educación, de trabajo y de participación en las instituciones públicas, lo cual fue resaltado por el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, otros de los puntos de la desigualdad, acorde a lo expresado por Stiglitz sobre la distribución de la riqueza y los derechos, es lo que expone OXFAM de que sólo la mitad más empobrecida del mundo es responsable del 10% de la emisiones de gases de efecto invernadero, sin embargo los pobres, son a quienes más le afecta el cambio climático, en cambio es distinto cuando se toma el 1% más enriquecido de la población, puede multiplicar por 175 la del 10% de los depauperados⁹⁷⁶.

Otro aspecto de la brecha de la desigualdad es que los salarios entre los trabajadores y sus directivos se han ido distanciando, puesto que los salarios de los trabajadores comunes se han mantenido sin un crecimiento, los de los puestos directivos han estado en un aumento constante. En adición a esta problemática el informe expone que “El entramado mundial de paraísos fiscales y la floreciente industria de la evasión y la elusión fiscal constituyen el mejor ejemplo de cómo el sistema económico se ha contaminado para favorecer los intereses de los poderosos”⁹⁷⁷.

⁹⁷⁵ El informe dispone que “El porcentaje de la población mundial que vive en situación de pobreza extrema pasó del 36% en 1990 al 16% en 2010, cumpliendo así el Objetivo del Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la pobreza extrema cinco años antes de la fecha límite, fijada inicialmente para 2015”, *ibidem*.

⁹⁷⁶ *Ibidem*.

⁹⁷⁷ *Ibidem*.

El modo en que los derechos sufren con la evasión y la elusión fiscal, se centra en el hecho de que estas prácticas conllevan a que los ingresos colectados por un determinado Estado se vean minimizados, y con ello el presupuesto dedicado a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al desarrollo de empleos, a pensiones dignas, a la construcción de carreteras, así como todo lo demás que implique mejoría para el individuo. Se debe señalar a su vez, que entre los países con los índices más bajos de pobreza extrema se encuentran Uruguay, Argentina y Chile con tasas cerca del 10%, mientras que de otro lado de la balanza se encuentran Nicaragua, Honduras y Guatemala con las tasas más elevadas de la pobreza extrema que van desde el 37% de Nicaragua hasta el 50% de Guatemala⁹⁷⁸.

La falta de equidad en la distribución de la riqueza ha hecho que se abra la brecha de los pobres y la clase media de la sociedad, por lo cual se puede constatar que un 39% de los individuos de la región de Latinoamérica se consideran parte de la clase media, teniendo Uruguay un 49% de sus ciudadanos, Bolivia un 48%, Argentina un 47% y Costa Rica un 46% de sus ciudadanos que se consideran parte de la clase media, siendo dichos países los que tienen la mejor puntuación en la región. En esto se ha de tomar en cuenta que en los países antes citados Uruguay, Argentina y Costa Rica están, por lo común, entre las mejores evaluaciones que sobre los derechos humanos se han hecho, tal como se ha tratado en la presente investigación, así como entre los mejores posicionamientos de los Estados en la clasificación que ha hecho la FFP para la región de América Latina, lo cual es muestra del vínculo que existe entre la distribución de la riqueza, la pobreza, la desigualdad y el fortalecimiento de la clase media⁹⁷⁹.

Mientras que entre los Estados con un porcentaje bajo en la clase media se encuentran El Salvador con un 20% y Honduras con un 24%, en el mismo sentido la población del Estado salvadoreño en un 70% se siente de clase baja, mientras que la población hondureña se siente en un 65% perteneciente a la clase baja. Aunque esta apreciación

⁹⁷⁸ *Ibidem*; Al respecto y ahondando más sobre la corrupción privada vid. AA.VV.: *Informe Global de la Corrupción 2009, corrupción y sector privado*, ZINNBAUER, D., DOBSON, R., DESPOTA, K., BOCK, T. (Dirs), ED. Cambridge University Press, Nueva York, 2009.

⁹⁷⁹ *Latinobarómetro, op. cit.*, pág. 74. El informe expresa en cuanto a Bolivia que: “es especialmente al mirar su PIB per cápita porque de acuerdo a ello Bolivia no podría tener la misma cantidad de clase media que Uruguay o Argentina que históricamente han tenido una clase media bastante consolidada. Sin embargo los bolivianos se sienten de clase media porque el nivel de mejora que perciben es muy significativo, ellos parte de una situación de masiva desigualdad, con bajo ingreso de la inmensa mayoría de la población. Bolivia junto con Ecuador, son los dos países de la región que han logrado mejorar muy significativamente sus indicadores socioeconómicos, produciendo un cambio significativo de percepción en la ciudadanía”.

adquiere fuerza cuando se usan otros medios de análisis⁹⁸⁰, deja ver la relevancia que implica el ser considerado parte de la clase media para la población de los Estados de la región, muy especialmente por lo que ello trae anexo, puesto que implica un mejor nivel adquisitivo.

V.9.1 Pobreza extrema en América Latina

En el resumen ejecutivo del informe de investigación intitulado en español “Los Olvidados” del Banco Mundial se establecen cinco (5) hechos que se relacionan con la pobreza crónica en la región. El primer hecho es que desde el 2004 al 2012 uno de cada cinco latinoamericanos ha vivido en la pobreza crónica, también de cada cien pobres en el 2004, sólo cincuenta logran salir de la pobreza. Lo cual es una muestra del panorama de las personas que viven en la pobreza extrema⁹⁸¹.

En cuanto al segundo hecho, se expresa que la pobreza crónica se concentra geográficamente, esto porque hay regiones en lo interno de los distintos Estados de Latinoamérica que presentan distintos niveles de pobreza, concentrándose la pobreza crónica en regiones muy puntuales, esto es importante en el entendido de que ello puede ayudar a determinar a dónde deben estar encaminadas las políticas públicas, por lo menos cuando se debe tomar en cuenta políticas focalizadas⁹⁸².

En lo concerniente al tercer hecho, se alude a que la pobreza crónica afecta al medio tanto urbano como rural. Las regiones rurales son focos de concentración de la pobreza crónica, más que las regiones rurales, sin embargo hay algunos países en los cuales el número de pobres crónicos de la zonas urbanas está por encima del número de pobres crónicos de la zonas rurales, tal es el caso de Chile, México, Colombia y República Dominicana, y en

⁹⁸⁰ *Ibidem*, “El autopoicionamiento de clase social de la población de la región sirve para comprender muchos comportamientos sociales, ya que la gente no se comporta de acuerdo a su clasificación objetiva de ingreso por día por persona como lo calcula el Banco Mundial, sino más bien se comporta de acuerdo a su propia apreciación del lugar que cada cual ocupa en la sociedad. En otras palabras para comprender a la sociedad latinoamericana, hay que mirarla como ella se ve, y no como la vemos los académicos, los intelectuales o analistas de las sociedades. Una buena lección de realismo”. Vid. AA.VV.: *La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina*, FERREIRA, F. H. G., MESSINA, J., RIGOLINI, J., LÓPEZ CALVA, L. F., LUGO, M. A., VAKIS, R., Banco Mundial, Washington D. C., 2013. El tema de la clase media es tratado de manera aún más profundo en este estudio y se puede ver la interrelación de la movilidad en la economía con la clase media.

⁹⁸¹ AA.VV.: *Informe Los olvidados, pobreza crónica en América Latina y el Caribe*, VAKIS, R., RIGOLINI, J., LUCCHETTI, L., The World Bank, Washington, 2015, pp. 12-13.

⁹⁸² *Ibidem*, pp. 13-15.

otros países el número de ambos es casi igual, sin embargo hay que señalar que los pobres crónicos que viven en peores condiciones son los rurales⁹⁸³.

El cuarto hecho asegura que el crecimiento económico no ha significado lo suficiente para ayudar a los pobres crónicos a salir de la pobreza, ejemplo de ello, es el crecimiento económico del decenio del 2000, y un caso particular es que Guatemala creció menos del 1% anual, y cerca del 50% de la personas en principio siguió en la pobreza en el 2012. Otro caso es del Estado panameño, que creció un 6% al año, y el 20% de las personas continuó en la pobreza en el periodo 2004-2012. Otro dato es que los que eran pobres para el 2004, pero que pudieron salir de la pobreza para el 2012 tenían en principio un ingreso per cápita de \$3, acabando con un ingreso medio de \$6 diario en el 2012, lo cual es una constante en 17 países de la región. En este aspecto, los pobres crónicos también aumentaron sus ingresos de \$1,5 a \$2,7 diario, empero este aumento no es significativo para que los pobres salieran de la pobreza⁹⁸⁴.

El quinto y último hecho se expresa en dirección a que las personas en estados de pobreza crónica tienen sus oportunidades de ingreso limitadas; este postulado trata de mostrar que las personas en la pobreza extrema no acceden a la fuerza laboral, como las demás personas, lo que se hacen más dependiente de los ingresos no laborales, pues el estudio muestra cómo en los países de la región los hogares crónicamente pobres perciben menos ingresos laborales si se equipara con los demás hogares que pudieron salir de la pobreza, o simplemente con los hogares que no son pobres. Igual que como se había señalado anteriormente, lo importante en cada uno de estos hechos, es que se puede dirigir una política de combate a la desigualdad y a la pobreza, como defensa del ESDD atendiendo a determinados sectores y segmentos de la población⁹⁸⁵.

V.10 El desarrollo de la delincuencia acorde al Banco Mundial y al Barómetro de las Américas

Al hacer referencia al desarrollo de la delincuencia que presentan los Estados se hace alusión al aumento de los actos de los individuos que van en contra de la misma población

⁹⁸³ *Ibidem*, pp. 15-17.

⁹⁸⁴ *Ibidem*, pp. 17-18.

⁹⁸⁵ *Ibidem*, pp. 19-20.

y que constituyen tipos penales, lo cual se genera como resultado de la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la pérdida de la confianza en los gobiernos y sus políticas públicas, por lo que en sí mismo el desarrollo de la delincuencia no constituye un mal causante de la no concreción del ESDD, pero debido a la trascendencia de la delincuencia hay que tratarla como uno de los males con que debe lidiar el ESDD ⁹⁸⁶. Aquí se tiene que entender que una delincuencia desbordada a sus extremos representa problemas en el control del monopolio del Poder, pero ese tipo de delincuencia no es propia de los Estados de Latinoamérica.

Entre los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial se presenta el indicador de la estabilidad política y la ausencia de violencia, lo cual muestra una media de -0.27 para el año 2013 de los países de la región⁹⁸⁷, en el cual -2.5 es lo más débil y 2.5 es lo más fuerte. Entre los países mejores valorados por el índice se encuentran Uruguay con 0.81, Costa Rica con 0.66, Chile con 0.38, República Dominicana con 0.18 y Argentina con 0.05; sorprende en este grupo la República Dominicana, pues en los demás indicadores analizados no había sido parte de los primeros Estados, sin embargo en lo demás, Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina siguen constante en tener los mejores indicadores de la región, mientras que Panamá, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, se mantienen por debajo de la media para el año 2013⁹⁸⁸.

En lo concerniente al año 2014, la media de la región baja a -0.15, Uruguay se mantiene con la mejor cifra alcanzando un 1.00, Costa Rica disminuye ligeramente a 0.63, Chile aumenta a 0.49, República Dominicana sube ligeramente a 0.19, Panamá aumentó significativamente a 0.10 y Argentina sube ligeramente a 0.08. De los países de la región

⁹⁸⁶ Vid. BANDA CASTRO, A. L.: “Indigencia infantil y conducta antisocial: un modelo ecológico”, AA.VV.: *Delincuencia juvenil: aspectos sociales, jurídicos y psicológicos*, Frías Amienta, Martha, Corral Verdugo, Víctor (Dir.), Ed. Plaza Valdés, S. A., México D. F., 2009, 2ed, pp. 107-108, en el cual se establece que “Desde una perspectiva de desarrollo, los menores indigentes –que habitualmente se enfrentan a un estado continuo de enfermedades, privaciones, abusos, violencia, discriminación y pobreza–, ven minada su potencialidad para desarrollarse a diferencia del común de los menores a su edad. La identificación de las razones que los mueven a preferir la vida en la calle pese a la inseguridad y a los peligros que encuentran en la misma resulta necesaria ya que ofrece la posibilidad de planificar la intervención en los ambientes familiares, escolares y comunitarios para que, de inicio, se reduzca la presencia de los menores en la calles, hasta conseguir su integración a la familia y a la sociedad”, esto muestra la relación existente con la desigualdad, la pobreza y la delincuencia.

⁹⁸⁷ En este análisis se tomaron en cuenta los Estados de Argentina, República Dominicana, Brasil, Colombia, Panamá, Honduras, México, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua, Chile, Guatemala, Ecuador y Paraguay.

⁹⁸⁸ Informe sobre los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial 2015, en <http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>

Honduras, México y Bolivia aumentaron sus cifras de manera negativa aunque ligeramente, mientras que El Salvador aumentó negativamente 7 puntos para llegar a -0.15; Ecuador logró una reducción hasta el -0.01, igual que Brasil que logra una reducción de 27 puntos hasta -0.01, asimismo vale mencionar la reducción que experimentó Paraguay de -0.69 en el 2013 a -0.20 en el 2014; Perú, Venezuela y Nicaragua logran reducciones bastantes significativas⁹⁸⁹. Al analizar estos dos años, se muestra que la dirección que lleva América Latina es hacia la baja, lo que también es signo de que se han producido avances. Este indicador funciona como un medidor de cómo los Estados tienen el monopolio de la coacción, y de cómo no han permitido que esa coacción sea arropada por la delincuencia.

El índice del Estado de derecho también prevé otro indicador denominado “Orden y seguridad”, el cual evalúa tres categorías, el control efectivo del crimen, control sobre los conflictos civiles y la recurrencia de las personas a la violencia como modo de reclamar sus derechos. La media establecida en la región para este indicador es 0.63⁹⁹⁰, teniendo el mejor puntaje el Estado uruguayo con 0.72, seguido de Chile, Panamá y Costa Rica con 0.70 cada uno, le sigue El Salvador y Nicaragua con 0.68 ambos y Brasil en 0.66, luego de estos países sólo Perú tiene la misma cifra que la media de la región, los demás países están por debajo del promedio. Se puede observar, al comparar ambos indicadores, que hay cierta coincidencia, como elemento que muestra el trabajo científico, en este caso la República Dominicana se presenta con 0.59 ligeramente por debajo. Aunque ambos indicadores son un tanto distintos, son herramientas que muestran la realidad de Latinoamérica en el manejo de la delincuencia, sin embargo al tomarse distintos factores esos indicadores muestran el control de la coacción por parte del Estado, pero es necesario ver más palpablemente cómo se encamina la delincuencia⁹⁹¹.

El informe del barómetro de las américas correspondiente al año 2014 expone que:

...la región LAC tuvo en 2012 la tasa más alta de homicidio que cualquier otra región representada en el estudio de la UNODC. La tasa promedio de homicidio intencional o doloso de LAC en 2012, de 23,0 homicidios dolosos por 100,000 habitantes, es más del doble que el segundo promedio más alto por región,

⁹⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁹⁰ Aquí se tomaron en cuenta Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

⁹⁹¹ Informe sobre el Estado de Derecho de World Justice Project en <http://worldjusticeproject.org/rule-law-around-world>

sostenido por la región del África Sub-Sahariana (11,2 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes), cinco veces más alto que la tasa en Asia del Sur (4,4) y que en Asia Oriental y el Pacífico (3,9), siete veces más alta que la tasa en Estados Unidos y Canadá (3,2) y que el Medio Oriente y África del Norte (2,9) y aproximadamente diez veces más alta que la tasa en Europa y Asia Central (2,5)⁹⁹².

En el informe se destaca que dentro de los países de Latinoamérica, la región de Centroamérica tiene la tasa de asesinato más alta, y dentro de dicha región Honduras tiene la mayor tasa con 90,4 por cada 100,000 habitantes para el año 2012, contrario a Costa Rica que se presenta con 8,5 homicidios por cada 100,000, siendo el que ostenta la tasa más baja. En Suramérica Venezuela, Colombia y Brasil presentan tasas de homicidio doloso de 53,7, 30,8 y 25,2 por cada 100,000, respectivamente, y entre los países con menos peligro del Sur de América se encuentran Chile, Uruguay y Perú con tasas de 3,1, 7,9 y 9,6, respectivamente⁹⁹³. Estos datos se presentan, a grosso modo, para ver el nivel de delincuencia y control de la coacción del Estado que muestran los países de Latinoamérica, pues este problema afecta directamente el ESDD, pues irrumpe los derechos humanos en toda su gama, cobrando relevancia el denominado “derecho a la paz”, el cual debe ser un propósito de todo Estado con el objetivo último de garantizar un real y efectivo ESDD.

V.11 Falta de voluntad política para combatir los males que enfrenta Latinoamérica

En el informe de OXFAM se especifica que “La experiencia de Brasil, Corea y muchos países de ingresos bajos y medios demuestra que reducir las desigualdades está en manos de los responsables políticos. No faltan mecanismos, pero sí voluntad política”⁹⁹⁴. Esta voluntad política es lo que se hace necesario para que el malestar que yace en la sociedad y el aparato estatal de Latinoamérica desaparezca.

Los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, todos los órganos creados con el fin de hacer factible tal transparencia, el Poder Judicial, los organismos internacionales

⁹⁹² CARRIÓN, J. F., ZARATE, P., ZECHMEISTER, E. J., (2015): *Informe sobre Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas*, 2014: *Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas*, USAID y Vanderbilt University, Lima, pág. 6, en http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/AB2014_Peru_Country_Report_Final_W_042215.pdf

⁹⁹³ *Ibídem*, pág. 7.

⁹⁹⁴ *Informe de Intermón Oxfam No.32, del 13 de diciembre 2012, sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”*, en <http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/campanas-educacion/crisis-pobreza-desigualdad>

de protección a los derechos humanos, así como todos los esfuerzos de las instituciones internacionales no gubernamentales, las instituciones internacionales gubernamentales, las ONGs nacionales, y en sentido general, todo queda supeditado a la voluntad política, pues si los líderes políticos se propusieran combatir todos los males de seguro su mitigación fuera a un paso vertiginoso.

Esto no quiere decir que no se puedan producir cambios desde el pueblo mismo o que no vale la pena el intento por mejorar las instituciones del Estado. Al contrario, si los cambios se producen desde el pueblo mismo son vislumbres de la misma voluntad política, y si se produce a través del esfuerzo en las instituciones del Estado, también son vislumbres de esa voluntad política, por lo que esta voluntad política puede surgir desde los mismos ciudadanos, como de los gobernantes mismos.

Continuando con lo planteado, mientras más la ciudadanía acuda a los recursos institucionales que le favorecen a través de los Tratados Internacionales, la Constitución y las leyes, más forzarán esa voluntad política, pues no hay ningún reclamo o logro que se quiera alcanzar en el cual no sea necesario la voluntad política, por ello, Oscar Oszlak, en su trabajo sobre el gobierno abierto entiende que:

...estamos hablando de instaurar nuevas reglas de juego sobre la manera en que los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Y si bien aceptamos que la tecnología permitiría esa interacción, también debemos admitir que para que los funcionarios políticos y los administradores permanentes se muestren dispuestos a funcionar bajo nuevas reglas, hace falta una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel gubernamental para imponerlas⁹⁹⁵.

Hay una estrecha relación desde la voluntad política que viene desde los ciudadanos hasta la voluntad política que proviene de quienes administran el Estado, pues en última instancia estos últimos son quienes se comprometerán con el cambio, ya sea que se advierta de manera fáctica o en base al derecho, por esta misma razón el compromiso de todos los líderes políticos, estén o no en el tren gubernamental, debe estar dirigido a asegurarle a la ciudadanía que habrá una lucha por el ESDD como medio para dejar de ser un Estado con problemas, débil o frágil o fallido.

⁹⁹⁵ OSZLAK, O. (2013): *Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública*, Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, pág. 6. En base de datos de la Organización de Estados Americano (OEA), en <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf>.

El hecho de que el mayor esfuerzo requerido sea a quienes administran el Estado ocurre porque quienes más se benefician del malestar que agobia a Latinoamérica, son justamente estos, cuando entienden que el Estado es un modo para acrecentar su patrimonio o el de algún relacionado o familia, o simplemente los del partido de gobierno. Las mayorías en el contexto de los males son quienes salen perjudicados, pero esta mayoría no es la que decide, sino una minoría que se beneficia de la corrupción, de la desigualdad y la pobreza, la delincuencia y otros males generados a raíz de estos.

Es esta la razón por la cual hay una ausencia de voluntad política que se refleja en la falta de compromiso con el cambio necesario en los países de la región, puesto que la minoría gobernante se lucra inadecuadamente mientras están en el aparato estatal, aquí es donde el reclamo de los ciudadanos adquiere relevancia, por ello es indispensable que se forme una cultura cívica fuerte, capaz de exigir, entre los individuos de las naciones, pues mientras esto no ocurra los menos seguirán por encima de la mayoría, y con ello se malogra el ESDD, que ampara a todos los individuos de un Estado.

CONCLUSIÓN

El presente trabajo de investigación ha permitido confirmar algunas hipótesis formuladas sobre los Estados fallidos y su relación con los derechos humanos y los principios democráticos formulados en el derecho regional americano y su abstracción en el derecho interno del Estado Social y Democrático de Derecho como Estado ideal de los Estados de Latinoamérica, puesto que las conclusiones a que hemos arribado son el fundamento de tal confirmación, en la cual se muestra que los Estados de la región distan de mantenerse como Estados fracasados o inoperantes, aunque muestran que tienen problemas que deben ser corregidos, en ese sentido las conclusiones son las siguientes:

Primero: Los Estados de América Latina no constituyen Estados que puedan ser calificados como fallidos, pues dicho calificativo sólo ha de corresponderle a los Estados que tienen una anulación real del monopolio del Poder del Estado, sin embargo dentro de la clasificación que se ha propuesto se tiene que determinar que la mayor parte de los Estados en la región obedecen a la categoría de “moderadamente estables”, y que el único país que se encuentra dentro de Estados con “debilidad o fragilidad” es Haití, pero que sin embargo no podría ser considerado como Estado fallido, en virtud de que dicho Estado no tiene una ausencia del monopolio del Poder.

Segundo: El concepto de “Estados en proceso de formación” tampoco es propio para categorizar a los Estados en Latinoamérica puesto que esto equivaldría a decir que el monopolio del Poder en uno de los Estados ha sido interrumpido y se está formando otra vez, o que los Estados han salido de un proceso de descolonización o protectorado o se han recientemente independizado, lo cual no es el caso de los países en América Latina que han sido objeto de la investigación.

Tercero: Hasta el momento según el tratamiento de los académicos el único Estado que puede tener el calificativo de fallido es “Somalia”, el cual al ser comparado con la situación del Estado haitiano, prueba suficientemente que Haití no puede ser considerado como un Estado fallido pero que mucho menos los demás Estados de la región.

Cuarto: El tratamiento dado a los Estados fallidos y a los Estados débiles por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas van dirigidos a la protección del sistema

democrático, a los derechos humanos, a los principios del derecho internacional humanitario, basando sus intervenciones en el capítulo VII de la Carta de San Francisco, resultando que el Consejo siempre ha protegido la unidad y soberanía de los Estados, por eso ha creído en la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo, aunque comúnmente sus misiones han sido criticadas, pero siempre han preferido el desarrollo de los Estados que la extinción de los mismos como preferirían algunos académicos.

Quinto: Los Órganos de las Naciones Unidas se han decantado por el sistema democrático de los Estados, aunque el derecho internacional no exige una forma determinada de Estado, pero el derecho regional americano sí le impone la adopción del sistema a los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo que para los Estados de Latinoamérica una manera de evaluar su funcionamiento es con los indicadores que miden el Estado Social y Democrático de Derecho, puesto que el mismo es percibido como un Estado ideal, que tiende a renovarse constantemente por los principios que alberga, y como tal cuando hay una completa distorsión de los valores, principios y reglas de dicho modelo de Estado, también hay una disfuncionalidad del Estado y una falta de control del monopolio del Poder que no necesariamente significa que es fallido pero sí que es débil.

Sexto: Los Estados que han elegido una forma de Estado autocrática no pueden ser evaluados bajo el mismo sistema de indicadores que miden los Estados democráticos, pues de hacerse de ese modo no se atenderá a la objetividad, sin embargo si lo que se quiere es evaluar simplemente el monopolio del Poder, sí podría hacerse bajo indicadores comunes, pero que en nada alberguen reglas, valores o principios derivados del Estado Social y Democrático de Derechos.

Séptimo: Si bien la legitimidad es un punto muy importante para los Estados democráticos esta no puede ser considerada al momento de evaluar el fracaso de un Estado, pues no permitiría explicar algunos acontecimientos históricos de la región de Latinoamérica y otras partes del mundo, en el que el Poder era detentado por dictadores, y sin embargo aún el Estado continuaba funcionando con pleno monopolio del Poder.

Octavo: Las violaciones a derechos humanos, a la legitimidad, a los principios democráticos no son sinónimos de ausencia del monopolio del Poder, sino simplemente

de que dicho Estado no respeta tales derechos, como sería un ejemplo sobresaliente el e Corea del Norte.

Noveno: Los Informes de la Fund For Peace publicados a través de la revista Foreign Policy, desde el 2005 hasta el 2009, no obedecieron a métodos científicos y bien definidos, sino a criterios arbitrarios de selección que no se correspondían con la realidad de los Estados en Latinoamérica.

Décimo: Luego del 2009, los informes de la Fund For Peace tendieron a ser más coherentes puesto que los indicadores respondían de manera más científica, razón por la cual los informes guardaban relación con otros informes realizados por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y otras instituciones.

Décimo primero: El concepto de “índice de Estados fallido” es un término demasiado restringido para englobar los países que han sido evaluados, al igual que “índice de Estados frágiles”, pues dan a considerar que los Estados que están contenidos en él son fallidos o frágiles, conceptos los cuales no se corresponden con la tarea realizada por la Fund For Peace, por lo que la fundación debiera considerar otros nombres para determinar el listado, pues la simple inclusión de los países nórdicos pone en entredicho el informe y no pasa de ser un mero informe populista y poco objetivo.

Décimo segundo: El análisis de los distintos indicadores, así como los informes de la OEA y los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dan muestra de que los Estados de la región, con excepción de Haití, tratan de cumplir con las exigencias de los derechos humanos y los principios democráticos, aunque con inconvenientes innegables para su total cumplimiento.

Décimo tercero: El usar el método de los indicadores del Estado Social y Democrático de Derecho para la evaluación de los países permite observar claramente incluso cuáles son los problemas o falencias que presentan los Estados de la región de manera concreta, siendo los más destacados, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y la falta de voluntad política para cambiar dichos males.

Décimo cuarto: Si bien los males de la corrupción, la pobreza, la desigualdad, y la falta de voluntad política son fallas de los Estados de la región, no menos cierto es que los mismos hasta el momento no han originado problema con el monopolio del Poder, que es

el punto para determinar cuándo un Estado debe ser considerado como fallido, aunque la inobservancia y empeoramiento de dichos males puede dar lugar a la falta de control del monopolio del Poder.

Décimo quinto: La mejor manera en que la comunidad internacional puede ayudar a los Estados débiles y fallidos sin afectar la soberanía es a través de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo, pues la intervención es un recurso que aún no encuentra legitimidad en la esfera internacional.

Décimo sexto: La mejor clasificación que se puede realizar es la siguiente: *Estados fuertes*, para aquellos Estados cuyos resultados en la medición del Estado ideal sean sumamente óptimos, y a la vez, cumplen con un papel referencial respecto a los demás Estados; *Estados moderadamente estables*, para los Estados cuya evaluación del Estado ideal no están dentro de los Estados débiles ni dentro de los Estados fuertes, los cuales presentan inconvenientes de funcionamiento en sus Estados, como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, no a grandes escalas, y en lo que se mantiene la lucha por alcanzar el Estado ideal, y no hay un cuestionamiento al monopolio del Poder de coacción del Estado; los *Estados débiles o frágiles*, los cuales presentan serios conflictos con el Estado ideal, además que el monopolio del Poder de coacción del Estado está seriamente cuestionado; y, los *Estados fracasados, colapsados, inoperantes o fallidos*, estos cuatro conceptos devienen como sinónimos, y es cuando hay una anulación real del monopolio del Poder del Estado. Con esta clasificación se les hace más justicia a otros países, además de que se obtiene un análisis más objetivo de los Estados, y no trata de forzar categorías que no permiten la distinción clara entre dónde debe pertenecer un Estado y dónde pertenece otro con idénticos problemas. Las categorías pueden admitir niveles o grados.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS COLECTIVAS

AA.VV.: *Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional*, GANDÁSEGUI, M. A. (dir), Ed. CLACSO, Buenos Aires, 2016.

AA.VV.: *Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada*, STEINER, C., URIBE, P. (dirs), Ed. Konrad Adenauer Stiftung, Bolivia, 2014.

AA.VV.: *El futuro de las relaciones Latinoamérica-Estados Unidos*, MARTÍNEZ LILLO, P. (dir), Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 2011.

AA.VV.: *Las múltiples caras de la corrupción*, CAMPOS, J. E., PRADHAN, S. (dirs), Banco Mundial, Mundi-Prensa y Mayol Ediciones, Colombia, 2009.

AA.VV.: *Diseño de sistemas electorales: El nuevo manual de IDEA Internacional*, REYNOLDS, A., REILLY, B., ELLIS, A. (dirs), Instituto Federal mexicano, México D. F., 2006.

AA.VV.: *Manual de derecho internacional público*, SORENSEN, M. (Ed), Fondo de Cultura Económica, México D. F., 2004.

AA.VV.: *State Failure Task Force Report: Phase III Finding*, GOLDSTONE, J. A., GURR, T. R., HARFF, B., LEVY, M. A., MARSHALL, M. G., BATES, R. H., EPSTEIN, D. L., KAHL, C. H., SURKO, P. T., ULFELDER, J. C., UNGER, A. N., 30 de septiembre del 2000, en <https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/stm103%20articles/StateFailureReport.pdf>

AA.VV.: *State Failure Task Force Report*, ESTY, D. C., GOLDSTON, J. A., GURR, T. R., SURKO, P. T., UNGER, A. N., del 30 de noviembre del 1995, en https://www.researchgate.net/publication/248471752_Working_Papers_State_Failure_Task_Force_Report

AA.VV.: *State Failure Task Force Report: Phase II Findings*, ESTY, D., GOLDSTONE, J. A., GURR, T. R., HARFF, B., LEVY, M., DABELKO, G. D., SURKO, P. T., UNGER, A. N., 1999, en https://www.researchgate.net/publication/247638675_State_Failure_Task_Force_Report_Phase_II_Findings

AA.VV.: *El predominio del poder ejecutivo en Latinoamérica*, ALEGRÍA, P., CARPIZO, J., STEIN, J. L. (dirs), Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 1977.

AA.VV.: *Derecho constitucional*, CARPIZO, J., MADRAZO, J., Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

LIBROS

ALCALDE CARDOZA, J. (2004): *Los Estados fallidos: la influencia del desarrollo*, Ed. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP), Lima.

ANDERSON, P. (1987): *El Estado absolutista*, Ed. Siglo XXI, México, D. F.

ARAGÓN, M. (2002): *Constitución, democracia y control*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.

ARIAS NÚÑEZ, L. (2010): *Manual de derecho internacional público americano*, Ed. Centenario, S. A., Santo Domingo.

ARIAS NÚÑEZ, L. (2005): *Derecho internacional público contemporáneo*, Ed. Centenario, S. A, Santo Domingo.

ATIENZA, M. (2001): *El sentido del derecho*, Ed. Ariel, Barcelona.

BARBE, E. (1995): *Relaciones Internacionales*, Ed. Tecnos, Madrid.

BARBOZA, J. (2003): *Derecho internacional público*, Ed. Zavalía, Buenos Aires

BOBBIO, N. (1991): *El tiempo de los Derechos*, Ed. Sistema, Madrid.

BOBBIO, N. (1983): *El Futuro de la democracia*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, D. F.

BOERSNER, D. (1985): *Relaciones internacionales de América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.

BOSCH, J. (2006): *Temas internacionales*, Ed. Búho, Santo Domingo.

BOSCH, J. (2000): *El Estado: sus orígenes y desarrollo*, (5ta. ed), Ed. Editora Alfa & Omega, Santo Domingo.

BOSCH, J. (1988): *El partido, concepción, organización y desarrollo*, Ed. Alfa y Omega, Santo Domingo.

BREMER, J. J. (2013): *De Westfalia a post-westfalia, hacia un nuevo orden internacional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F.

CANTÚ NORIEGA, A. (1988): *Los derechos sociales creación de la Revolución de 1910 y de la Constitución de 1917*, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

CARBONELL, M. y FERRER MAC-GREGOR, E. (2014): *Los Derechos sociales y su justiciabilidad directa*, Ed. Flores, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

CÁRDENAS GRACIA, J. (2009): *Introducción al estudio del derecho*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

CASAR, M. A. (2015): *México Anatomía de la Corrupción*, Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C., (IMCO), México D. F.

CHOMSKY, N. (2015): *La quinta libertad, la intervención de los Estados Unidos en América Central y la lucha por la paz*, Ed. Planeta, S. A, Barcelona.

CHOMSKY, N. (2007): *Estados fallidos, el abuso de poder y el ataque a la democracia*, Ed. B., Barcelona.

CHOMSKY, N. (2003): *Hegemonía o supervivencia, el dominio mundial de EE.UU.*, Grupo Editorial Norma, Bogotá.

COLLIER, P. (2011): *El club de la miseria*, Ed. Turner Publicaciones, Madrid.

DABIN, J. (2003): *Doctrina General del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

DALLA VÍA, A. R. (2006): *Teoría política y constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

DE MALBERG, R. C. (2001): *Teoría General del Estado*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F.

DEL PINO, E. et al (2007): *Avances y obstáculos en el fortalecimiento del Estado en Centroamérica y República Dominicana: un análisis de la capacidad institucional, la reforma de la administración y la gestión pública*, INAP y AEI, Madrid.

DIEZ DE VALASCO, M. (2007): *Instituciones de derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid.

DUVERGER, M. (2012): *Los partidos políticos*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F.

DUVERGER, M. (1982): *Instituciones políticas y derecho constitucional*, Ed. Ariel, Barcelona.

FERNÁNDEZ, E. (2009): *¿Estados fallidos o Estados en crisis?*, Ed. Comares, Granada.

FERNANDEZ TOMÁS, A., SÁNCHEZ LEGIDO, A., ORTEGA TEROL, J. M., FORCADA BARONA, I. (2011): *Lecciones de derecho internacional público*, Tirant Lo Blanch, VALENCIA.

FERRAJOLI, L. (2001): *Derecho y razón*, Ed. Trotta, Madrid.

FOUCAULT, M. (2003): *Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión*, Ed. Siglo veintiuno editores, Buenos Aires.

FOUCAULT, M. (2000): *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*, Ed. Alianza Editorial Madrid, Madrid.

FUCUYAMA, F. (2004): *La construcción del Estado, hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI*, Ediciones B, Barcelona.

GALBRAITH, J. K. (1996): *Una sociedad mejor*, Ed. Crítica, Barcelona.

GARCÍA RAMÍREZ, S. (2002): *Temas de derecho*, Universidad Autónoma del Estado de México, México D. F.

GARCIANDÍA GARMENDIA, R. (2013): *De los Estados fallidos a los Estados frágiles: un reto para el Derecho internacional contemporáneo*, Ed. Comares, Granada.

GAMBOA SERAZZI, F. (1992): *Manual de derecho internacional público*, LOM Ediciones, Santiago.

GARCÍA RICCI, D. (2011): *Estado de derecho y principio de legalidad*, Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, México D. F.

GAVIRIA LIÉVANO, E. (1998): *Derecho internacional público*, Ed. Temis, Bogotá.

GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., SAENZ DE SANTA MARÍA, P. A. (2008): *Curso de derecho internacional público*, 4ta. Ed., Editora Thomson Civitas, Pamplona.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., MANERO SALVADOR, A. (2011): *El conflicto de Haití*, Instituto de estudios internacionales y europeos Francisco de Vitoria/ Escuela de Guerra del Ejército del Ministerio de Defensa/Ministerio de Defensa, Madrid

GONZÁLEZ LLACA, E. (2005): *Corrupción, patología colectiva*, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), México, D. F.

GUASTINI, R. (2001): *Estudios de teoría constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

GUGLIELMO, M. (2009): *Somalia, Le ragioni storiche del conflitto*, Edizioni Altravista, Lungavilla.

HABERLE, P. (2003): *La garantía del contenido especial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn*, Ed. Dykinson, Madrid.

HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., *El Federalista*, en https://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/hamilton__alexander-el_federalista.pdf.

HELLER, H. (2012): *Teoría del Estado*, Ed. Fondo de Cultura Económico, México D. F

HERBST, J. (2007): “El fracaso y el colapso de los Estados – nación. Descomposición, prevención y reparación”, en *Los Estados fallidos o fracasados, un debate inconcluso y sospechoso*, MONCADA ROA, P. (dir), Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá.

HERDEGEN, M. (2005): *Derecho internacional público*, Universidad Nacional Autónoma de México/ Fundación Konrad Adenauer, México D. F.

HERNÁNDEZ BECERRA, A. (1981): *Estado y Territorio*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

HERNÁNDEZ LORENTE, M. J. (2013): *Cooperación al desarrollo en los Estados frágiles: Una arquitectura de la ayuda diferenciada*, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación IUDC-UCM.

HOBBS, T. (1982): *Leviatán, la materia, forma y poder, de una República, eclesiástica y civil*, Ed. Skla, Bogotá.

HOSTOS, E. M. (2015): *Lecciones de derecho constitucional*, Editora Corripio, S. A.S., Santo Domingo.

JIMÉNEZ PIERNAS, C. (2010): *Introducción al derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid.

JORGE GARCÍA, J. (2016): *Derecho constitucional dominicano*, Editora Corripio, S. A. S., Santo Domingo.

JORGE PRATS, E. (2012): *Derecho Constitucional, vol. II*, Ed. Ius Novum, Santo Domingo.

JORGE PRATS, E. (2010): *Derecho Constitucional, vol. I*, Ed. Ius Novum, Santo Domingo.

KAPLAN, M. (1996): *El Estado latinoamericano*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

KAPLAN, M. (1985): *Sociedad, política y planificación en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

KAPLAN, M. (1981): *Aspectos del Estado en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

KRASNER, S. D. (2001): *Soberanía, hipocresía organizada*, Ed. Paidós, Barcelona.

LOEWENSTEIN, K. (1965): *Teoría de la Constitución*, Ed. Ariel, Madrid.

MAYNARD KEYNES, J. (2005): *Teoría General de la ocupación*, el interés y el dinero, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. (2005): *Derecho Internacional público*, Editorial Trotta, Madrid.

MIRANDA, C., MARTÍN TAPIAS, J. (2011): *Ricardo Ortega, salgo para Haití*, Ediciones A P M, Madrid.

MONROY CABRA, M. G. (2002): *Derecho Internacional Público*, Ed. Temis, S. A., Bogotá.

MONTANER, C. A. (2001): *Las raíces torcidas de América Latina*, Madrid, en <http://www.hacer.org/pdf/Montaner16.pdf>.

MONTESQUIEU (1971): *Del Espíritu de las leyes*, Ed. Biblioteca de Grandes Obras Famosas, Buenos Aires.

NINO, C. S.: “Sobre los derechos sociales” en *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dirs) Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2000.

NÚÑEZ MERETTE, A. (2004): *Derecho Internacional del Mar, orígenes y codificación*, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, Santo Domingo.

ORTIZ, J. C. (1986): *Poder político y orden social*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

POZO SERRANO, P.: “La aplicación del derecho internacional humanitario a la fuerzas de Naciones Unidas: algunos interrogantes”, *El derecho Internacional humanitario antes los nuevos conflictos armados*, RAMÓN CHORNET, C. (ED), Tirant Lo Blanch Monografías, 2002.

PRIETO SANCHÍS, L.: “Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, AA.VV.: *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dirs), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D F., 2000.

RAMENTOL, S. (2004): *Teorías del desconcierto*, Ed. Urano Tendencias, Barcelona.

RAY GUEVARA, M. (2014): *Opinión constitucional*, Ed. Amigos del Hogar, Santo Domingo.

REMIRO BROTONS, A., RIQUELME CORTADO, R., ORIHUELA CALATAYUD, E., DIEZ-HOCHLEITNER, PÉREZ-PRAT DURBAN, .L. (2010): *Derecho internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia.

REMIRO BROTONS, A. (1972): *La hegemonía norteamericana, factor de crisis de la OEA*, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, Zaragoza.

RIZZO ROMANO, A. (1994): *Derecho internacional público*, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires.

RODRÍGUEZ CABRER, M. A. (2002): *Definiciones, notas y apuntes en el derecho internacional público*, Ed. Unicaribe, Santo Domingo.

RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J. (2007): *Lecciones de derecho internacional público*, Ed. Tecnos, Madrid.

ROJAS AMANDI, V. M. (2010): *Derecho Internacional Público*, NOSTRA ediciones, México, D. F.

SARTORI, G. (1993): *¿Qué es la democracia?* Tribunal Federal Electoral, México D. F.

Somalia, Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR), Madrid.

ROTBERG, R. I.: “El fracaso y el colapso de los Estados – nación. Descomposición, prevención y reparación”, en AA.VV.: *Los Estados fallidos o fracasados, un debate inconcluso y sospechoso*, MONCADA ROA, P. (dir), Ed. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007.

ROUSSEAU, J. J. (2007): *Contrato social o principios de derecho político*, Ed. Espasa Calpe, S. A., Madrid.

RUZIÉ, D. (2002); *Droit international public*, DALLOZ, París.

SAGÜEZ, N. P. (2006): *Constituciones iberoamericana*, Argentina, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

SALMÓN, E. (2014): *Curso de derecho internacional público*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

SALVATIERRA, M. (2010): El próspero negocio de la piratería en África, CATARATA/Casa África, Madrid.

SEITENFUS, R. A. S. (2016): *Reconstruir Haití: entre la esperanza y el tridente imperial*, Fundación Juan Bosch/CLACSO, Santo Domingo.

SOTELO VALENCIA, A. (2005): *América Latina: de crisis y paradigmas, la teoría de la dependencia en el siglo XXI*, Ed. Plaza y Valdés, S. A., Barcelona.

STIGLITZ, J. E. (2014): *El precio de la desigualdad*, Prisa ediciones, Barcelona, pág. 250. Desde el punto de vista sociológico vid. DELGADO BRITO, Y. (2009):

Conceptualización de la desigualdad: un acercamiento desde el enfoque sociológico, El Cid Editor, Córdoba,

SUAREZ, H. (2010): *Intervenciones de Estados Unidos en América Latina*, Ed. Manifesto Press, Londres.

TORO JIMÉNEZ, F. (1982): *Manual de derecho internacional público*, volumen I, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

TOURAINE, A. (2004): *Qué es la democracia*, Ed. Fondo de Cultura Económica. Madrid.

VALADÉS, D. (1994): *Constitución y política*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

VANOSSI, J. R. (2002): *Estudios de teoría constitucional*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

VARGAS CARREÑO, E. (2007): *Derecho internacional público*, Editorial jurídica de Chile, Santiago.

VELÁZQUEZ MAINARDI, M. Á. (1993): *Corrupción e impunidad*, Ed. Tele-3, Santo Domingo.

VERDROSS, A. (1976): *Derecho internacional público*, Ed. AGUILAR, Madrid.

WEBER, M. (2002): *Economía y Sociedad, Esbozo de sociología comprensiva*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Madrid.

ZIPPELIUS, R. (1985): *Teoría General del Estado*, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F.

ZORGBIBE, C. (1997): *Historia de las relaciones internacionales*, tomo I, Alianza Editorial, Madrid.

ZORGBIBE, C. (1997): *Historia de las relaciones internacionales*, tomo II, Alianza Editorial, Madrid.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

AGUILAR GONZÁLEZ, M. A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Uruguay”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008.

ALEXY, R.: “Derechos sociales fundamentales” en *Derechos Sociales y derechos de las minorías*, CARBONELL, M., CRUZ PARCERO, J. A., y VÁSQUEZ, R. (Dirs.), Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2000.

ÁLVAREZ FLORES, C. A.: “Combate a la Corrupción”, AA.VV., *Combate a la corrupción*, VIZCAÍNO ZAMORA, Á. (Dir), Instituto Nacional de Ciencias Penales, México D. F., 1era., ed., 2011.

BAREIRO, L., SOTO, L.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Paraguay”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008.

BAZÁN, V.: “El estado de derecho como zona de interacción de la democracia, la Constitución, la justicia constitucional y la protección de los derechos fundamentales” en *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, núm. 11, enero-junio, pp. 45-94, 2009.

BERGER, M.: “Visión Alemana sobre ‘Atalanta’: la misión europea contra la piratería somalí” en *Europeans Review*, en <http://www.ieeiweb.eu/wp-content/uploads/2016/01/n3.pdf>

BREWER-CARÍAS, A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Venezuela”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008.

BUITRAGO VALERO, C. J.: “La formación del Estado latinoamericano: entre la dependencia externa y el colonialismo interno” en *Revista Gráfica* Vol. 11, núm. 1, 2014.

CALDUCH CERVERA, R.: “Dinámica de la sociedad internacional”, *CEURA*, Madrid, 1993, pág. 3. En <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib2cap1.pdf>

CALDUCH CERVERA, R.: “Concepto y método de las relaciones internacionales”, en *Lecturas básicas para introducción al Estudio de Relaciones Internacionales*, Cid Capetillo, Ileana (dir), Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2001.

Catastrophes, Changements, Environnementaux et migration, Union européenne, United Nations University, Organisation Internationale pour les migrations.

CARBONELL, M.: “Constitución y minorías” en AA.VV.: *Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI*, VALADÉS, D., CARBONELL, M. (dirs), Cámara de diputados, México D. F., 2004.

Condición y aportes de la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana, Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA)/Consultores Económicos Financieros y Organizacionales (CEFINOSA), 2012.

DAHL, R.: “La democracia” en *PostData*, núm. 10, pp. 11-55, 2004.

DALLA VIA, A. R.: “Los derechos políticos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” en *Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, pp. 15-79.

DE LA CORTE IBAÑEZ, L.: “Al Shabaab en el cuerno de África” en *Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV05-2015_Al_Shabaab_CuernoAfrica_LuisdelaCorte.pdf

DE LA TORRE, M. V.: “La Primavera árabe 5 años después: el norte de África como caso de análisis” en *Observatorio de Política Internacional*, en <http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/08/AfricaDelaTorre.pdf>.

DURÁN VARGAS, L. R.: “Terremoto en Haití: las causas persistentes de un desastre que no ha terminado” en *Revista Nueva Sociedad*, núm. 226, marzo-abril de 2010.

El derecho a la salud. Alta Folleto informativo No. 31, Comisionado para los derechos Humanos y Organización Mundial de la Salud.

ESCALONA CARRILLO, N. C.: “Somalia: proceder de los actores internos, regionales e internacionales y su impacto sobre el conflicto en el período”, en *CLACSO*, 2011, pp. 339-391.

FERNÁNDEZ REYNA, L.: “República Dominicana no es un Estado fallido”, *Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano*, Ed. Universidad Alcalá, Madrid, núm. 14, primavera, 2006, pp.179-186.

GARZÓN REAL, B.: “Prólogo”, AA.VV., *Informe Global de la Corrupción 2007*, RODRÍGUEZ, D., EHRICH, L. (Dirs), Transparencia Internacional y Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007.

GAUTHIER, A., BONIN, P.: “Haití: Las voces de los actores, un proyecto de investigación sobre la Misión de la ONU” en *FRIDE*, núm. 52.

GRACIANO, J.: “El Estado Latinoamericano en perspectiva, figuras, crisis, prospectiva” en *Revista Pensamiento Iberoamericano*, núm. 5, enero-junio, 1984.

GROS ESPIELL, H., “Regulación jurídica de los partidos políticos en Uruguay”, AA.VV., *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008.

GUZZINI, S.: “El poder en Max Weber” en *Revista de Relaciones Internacionales, Grupo de Estudio de Relaciones Internacionales (GERI) –UAM*, núm. 30, octubre 2015 – Enero 2016, pp. 97-116.

Haití: soberanía y dignidad, Informe final de la Misión Internacional de Investigación y Solidaridad con Haití, en http://www.papda.org/IMG/pdf/Rapport_final.pdf.

HELMAN, G., RATNER, S.: “Saving Failed States” en *Foreign Policy*, núm. 89, 1993.

HENDRY, K.: “From failed to fragile: Renaming the index”, en *The Fragile States Index 2014*, pág. 8, Fund For Peace, en <http://library.fundforpeace.org/library/cfsir1423-fragilestatesindex2014-06d.pdf>.

HERBST, J., MILLS, G.: “The invisible State” en *Foreign Policy Magazine*, pp. 1-80, 2013.

HERNÁNDEZ BECERRA, A.: “Regulación jurídica de los partidos políticos en Colombia”, AA.VV.: *Regulación jurídica de los partidos políticos en América Latina*, ZOVATTO, D. (Dir), Universidad Nacional Autónoma de México e International IDEA, México D. F., 2008, pp. 334-335.

HERRERA, C. M.: “Estado, Constitución y derechos sociales” en *Revista derecho del Estado*, núm. 15, pp. 75-92, diciembre 2003.

ISLAS MONTES, R.: “Sobre el principio de legalidad” en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, año XV, pp. 97-108, 2009.

JACKSON, R.: “Los Estados fallidos y la tutela internacional” en *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, núm. 10, febrero de 2008, GERI – UAM, en <http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/144.html>

JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Estados débiles y Estados fracasados” en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. LXV/2, Madrid, julio-diciembre 2013, pp. 11-49.

JIMÉNEZ PIERNAS, C.: “Los Estados fracasados y el derecho internacional: el caso de Somalia” en *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LXII/1, Madrid, enero-junio 2010, pp. 17-59.

KAPLAN, M.: “La teoría del Estado en la América Latina contemporánea: El caso del marxismo” en *El Trimestre Económico*, vol. 50, núm. 198 (2), pp. 677-711, abril-junio de 1983.

KRASNER, S.: “Governance failures and alternatives to sovereignty” en *CDDRL*, Workin Papers, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law, Stanford IIS, 2004, en: <http://cddrl.stanford.edu>.

LONDOÑO LÁZARO, M. C.: “El principio de legalidad y el control de convencionalidad de las leyes: confluencias y perspectivas en el pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 128, pp. 761-814, mayo-agosto de 2010.

LÓPEZ FERNÁNDEZ, E.: “Crack de 1929: Causas, desarrollo y consecuencias” en *Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho*, volumen I, pp. 1-16, 2009.

LÓPEZ MARTÍN, A. G.: “Los Estados ‘fallidos’ y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico internacional”, *Universidad Complutense de Madrid*, Madrid, en http://eprints.ucm.es/14687/1/LOS_ESTADOS_FALLIDOS-CURSO_VITORIA.pdf.

LÓPEZ OLIVA, J. O.: “La Constitución de Weimar y los derechos sociales” en *Prolegómenos, derechos y valores*, volumen XIII, núm. 26, pp.233-243, Bogotá, diciembre 2010.

MARTÍN-PERALTA, C. M.: “2013: Somalia y el Cuerno de África en la encrucijada” en *Boletín Electrónico del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, núm. 12/2013, enero de 2013, en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO12-2012_SomaliaCuernoAfrica_Encrucijada_Martin-Peralta.pdf

MENDOZA PINTO, J. E.: “Los Estados fallidos – Estados desestructurados: una amenaza a la seguridad internacional o un pretexto para la injerencia de las grandes potencias” en *Revista Política y Estratégica* núm. 98, pp.83-98, Ed. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, junio 2005.

MORILLO, A.: “La corrupción: ¿problema social y/o político?” en *Revista Venezolana de Ciencia Política*, núm. 36, 2009.

NOHLEN, D.: “Sistemas electorales y reforma electoral” en *Quid Iuris*, Tribunal Estatal Electoral, año 1, núm. 3, pp. 7-58.

Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONU HABITAT. El derecho a una vivienda adecuada, Folleto informativo No. 210.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la FAO. El derecho a la alimentación adecuada, Folleto No. 34.

OROZCO RESTREPO, G.: “Estados fallidos y fallas globales. Un análisis crítico sobre el origen de las amenazas en la globalización” en *RAI Revista Análisis Internacional*, núm. 1, 95-118, Madrid, año 2010.

PASTOR GÓMEZ, M. L.: “La política exterior norteamericana hacia América Central y el Caribe: una aproximación histórico-política” en *Documento de Análisis*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 08, 2016.

PERAZA MARTELL, V.: “Las Naciones Unidas y el conflicto somalí”, en *Revista de África y Medio Oriente*, vol. 12.

PETRAS, J.: “Estados Unidos y América Latina. Los cambiantes contornos del imperio: jerarquías, redes y clientes” en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, núm. 57-78, 2007.

PFAFF, W.: “El destino manifiesto de EE UU: ideologías y política exterior” en *Revista Política Exterior*, núm. 117, mayo/junio, 2007.

PONCE ESTEBAN, M. E.: “Los conceptos de justicia y derecho en Kant, Kelsen, Hart, Rawls, Habermas, Dworkin y Alexy” en *Revista Jurídica de la Universidad Iberoamericana*, pp. 211-234, 2005.

RAVIER, A. O.: “Regla monetaria vs. Discrecionalidad: una ampliación del debate” en *RIIM*, núm. 48, pp. 113-148, mayo 2008.

ROTBERG, R. I.: “Disorder in the ranks” en *Foreing Policy Magazine*, 2009.

ROYO ASPA, J. M.: “Las sucesivas crisis de Somalia” en *FRIDE*, en http://fride.org/descarga/COM_Somalia_ESP_sep07.pdf

RUDOLF HORN, H.: “El constitucionalismo alemán en las postrimerías del siglo XX”, AA.VV.: *El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX*, Tomo III, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.

RUIZ MEDRANO, S. F.: “De los estados fallidos, Failed States” en *Revista boliv. de derecho*, Núm. 11, pp. 86-113, 2011.

SERRANO SEGARRA, M.: “La crisis económica de 1929: Roosevelt y el New Deal” en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, volumen I, núm. 6, pp. 112-130, 2010.

TEDESCO, L.: “El Estado en América Latina ¿Fallido o en proceso de formación?” en *Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE)*, núm. 37, 2007.

THÜRER, D.: “El ‘Estado desestructurado’ y el derecho internacional” en *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 1999, en <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdntg.htm>.

TOKATLIÁN, J. G.: “La Construcción de un “Estado fallido” en la política mundial” en *Revista Análisis político*, núm. 64, septiembre-diciembre, 67-104, Bogotá, 2008

TREMINIO SÁNCHEZ, I.: “El Estado en su dimensión de filtro: un breve esbozo de la teoría del Estado” en *Revista de Derecho Electoral*, Tribunal Supremo de Elecciones, núm. 8, 2009, pág. 5, en https://www.tse.go.cr/revista/art/8/Treminio_Sanchez.pdf.

TRIPODI, P., VILLAR, A.: “Haití: la encrucijada de una intervención latinoamericana” en *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, año 19, núm. 2005, pp. 17-35.

VILLAR BORDA, L.: “Estado de derecho y Estado social de derecho” en *Revista Derecho del Estado*, núm. 20, 73-95 diciembre 2007.

ZAPATA CALLEJAS, J. S.: “Teoría del Estado Fallido: entre aproximaciones y disensos” en *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, vol. 9, núm. 1, enero-junio, pp. 87-110, Universidad Militar de Nueva Granada, Bogotá, 2014.

ZEITLER, T. E.: “La colonización de América y sus consecuencias” en *Universidad Nacional del Nordeste, Chaco*, en <http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/handle/minam/1721/BIV01492.pdf?sequence=1>

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.

Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre del 1970.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

S/RES/2313, del 13 de octubre del 2016, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/2243, del 14 de octubre del 2015, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1972 (2011), del 17 de marzo del 2011, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1927, del 4 de junio del 2010, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1908, del 19 de enero del 2010, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1907 (2009), del 23 de diciembre del 2009, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1846 (2008), del 2 de diciembre del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1814 (2008), del 15 de mayo del 2008, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1702, del 15 de agosto del 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1658, del 14 de febrero de 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1576, del 29 de noviembre del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1542, del 30 de abril del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1529, del 29 de febrero del 2004, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1086, del 5 de diciembre del 1996, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/1048, del 29 de febrero del 1996, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/1007, del 31 de julio del 1995, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/954 (1994), del 4 de noviembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/953 (1994), del 31 de octubre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/948, del 15 de octubre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/946 (1994), del 30 de septiembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/944, del 29 de septiembre del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/940, del 31 de julio del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/933, del 30 de junio del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/923 (1994), del 31 de mayo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/917, del 6 de mayo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/905, del 23 de marzo del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/897 (1994), del 4 de febrero del 1994, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/885 (1993), del 16 de noviembre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/873, del 13 de octubre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/867, del 23 de septiembre del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/862 (1993), del 31 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/861 (1993), del 27 de agosto del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/841 (1993), del 16 de junio del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/RES/837 (1993), del 6 de junio de 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/814 (1993), del 26 de marzo del 1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/794 (1992), del 3 de diciembre del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/RES/767 (1992), del 27 de julio del 1992, de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resolución 751 (1992), del 24 de abril del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resolución 746 (1992), del 17 de marzo del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Resolución 733 (1992), del 23 de enero del 1992, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

S/2015/667, del 31 de agosto del 2015, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/2015/157, del 4 de marzo del 2015, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

S/2014/617, del 29 de agosto del 2014, del Secretario General de las Naciones Unidas

S/2014/162, del 7 de marzo del 2014, del Secretario General de las Naciones Unidas.

S/2013/493, del 19 de agosto del 2013, del Secretario General de las Naciones Unidas

S/2013/139, del 8 de marzo del 2013, del Secretario General del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

S/2011/1540, del 25 de agosto del 2011, del Secretario General de las Naciones Unidas.

S/2010/200, del 22 de febrero del 2010, del Secretario General de las Naciones Unidas.

COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

E/C.12/DOM/CO/4, del 21 de octubre del 2016, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

CCPR/C/VEN/CO/4, del 14 de agosto del 2015, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

E/C.12/VEN/CO/3, del 7 de julio del 2015, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

CCPR/C/COL/7, del 7 de abril del 2015, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

CCPR/C/DOM/CO/5, del 19 de abril del 2012, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

CCPR/C/COL/CO/6, del 6 de agosto del 2010, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

E/C.12/COL/CO/5, del 7 de junio del 2010, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

CCPR/C/MEX/CO/5, del 7 de abril del 2010, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

E/C.12/MÉX/CO/4, del 9 de junio del 2006, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Sentencia Caso Gelman vs. Uruguay, del 24 de febrero del 2011, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, del 26 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Vélez Loor vs. Panamá, del 23 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, del 17 de noviembre de 2010, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Castañeda Gutman vs. México, del 6 de agosto de 2008, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Yatama vs. Nicaragua, del 23 de junio de 2005, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, del 2 de febrero de 2001, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentencia Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, del 31 de enero del 2001, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

INFORMES E ÍNDICE

Resumen de informe de Amnistía Internacional en <https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/asa170521990es.pdf>

Informe de OXFAM Intermón, del 18 de enero de 2016, “Una economía al servicio del 1%”, en <https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1>

Fragile States Index 2016, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016>

Informe preliminar de fecha 07 de febrero del 2016 en Costa Rica, de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de las elecciones del 2016

Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA de fecha 17 de mayo de 2016, de las elecciones de la República Dominicana del 2016.

Informe preliminar de fecha 11 de abril del 2016, de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de las elecciones de Perú del 2016

Informe sobre Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Núm. 14, 2016, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Informe de la Misión de Observación Electoral en Haití, del 28 de enero del 2016

Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia, de fecha 25 de octubre del 2015.

Índice de desarrollo democrático de América Latina IDD-Lat 2015, publicado por Konrad Adenauer Stiftung y PoliLat, Montevideo, Uruguay.

Informe sobre los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial 2015, en <http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>

Índice de desarrollo humano 2015, en base de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD/UNDP) (<http://hdr.undp.org/en/data>). En el 2010 (0.612), 2011 (0.617), 2012 (0.623), 2013 (0.6244), 2014 (0.6248).

Fragile States Index 2015, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015>

Índice del Estado de derecho de World Justice Project 2015 en <http://worldjusticeproject.org/>

Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en México de las elecciones del 2015

Informe sobre los objetivos de desarrollo del milenio del 2015, en http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

Informe de fecha 14 de mayo del 2015, sobre las elecciones departamentales y municipales en el Uruguay

Informe Verbal de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Panamá de las elecciones del 2014.

Fragile States Index 2014, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2014>

Informe Oral de la Misión de Observación Electoral de la OEA en El Salvador de las elecciones del 2014.

Informe Electoral de fecha 14 de abril del 2013, del Centro Carter para las elecciones presidenciales den Venezuela.

The Failed States Index 2013, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2013-sortable>

The Failed States Index 2012, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2012-sortable>

The Failed States Index 2011, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2011-sortable>

The Failed States Index 2010, Fund For Peace <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2010-sortable>

Índice de ciudades verdes de América Latina, realizado por la Economist Intelligence Unit con el patrocinio de la empresa Siemens en el 2010

The Failed States Index 2009, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2009-sortable>

The Failed States Index 2008, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2008-sortable>

The Failed States Index 2007, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2007-sortable>

The Failed States Index 2006, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2006-sortable>

The Failed states index 2005, Fund For Peace, en <http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2005-sortable>

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Carta Democrática Interamericana, documentos e interpretaciones, Organización de los Estados Americanos, Washington, 2003.

Carta Internacional de la educación física y el deporte.

Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Declaración de los Derechos del Niño del 1959.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

WEBS











Real Academia Española en <http://lema.rae.es>

Oficina de División de Estadísticas de las Naciones Unidas
(<http://millenniumindicators.un.org/unsd/environment/qindicators.htm>)

ANEXOS:

**ÍNDICES DE ESTADOS FALLIDOS DE LA FFP CORRESPONDIENTES A
LOS AÑOS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2014 Y 2016**

2005

Rank	Country													Total
1	Cote d'Ivoire	8.0	8.0	7.7	8.8	9.0	7.7	9.8	9.5	9.4	9.0	9.1	10.0	106.0
2	Congo (D. R.)	9.0	9.4	9.0	7.0	9.0	8.0	8.0	9.0	9.1	8.7	9.1	10.0	105.3
3	Sudan	8.6	9.4	7.8	9.1	9.0	8.5	9.2	8.7	8.0	9.8	8.7	7.3	104.1
4	Iraq	8.0	9.4	8.3	6.3	8.7	8.2	8.8	8.9	8.2	8.4	10.0	10.0	103.2
5	Somalia	9.0	8.0	7.4	6.3	9.0	8.3	9.8	10.0	7.8	10.0	8.7	8.0	102.3
6	Sierra Leone	9.0	8.0	7.5	8.9	8.7	10.0	7.5	9.1	8.7	6.3	8.6	9.8	102.1
7	Chad	8.0	9.1	7.1	8.3	9.0	8.0	8.9	9.0	9.1	7.0	9.4	8.0	100.9
8	Yemen	7.8	8.0	6.4	8.2	9.0	8.8	9.8	9.3	6.4	9.0	9.4	7.6	99.7
9	Liberia	9.0	7.8	7.3	8.1	9.0	10.0	7.5	8.2	8.2	6.5	7.9	10.0	99.5
10	Haiti	8.8	8.0	7.7	3.4	9.0	8.1	9.4	9.8	8.7	7.8	8.5	10.0	99.2
11	Afghanistan	9.0	8.0	8.0	7.4	8.8	7.5	8.1	8.1	7.9	8.2	8.0	10.0	99.0
12	Rwanda	9.0	7.8	8.0	8.6	9.0	9.2	9.5	5.0	8.3	5.0	8.9	8.2	96.5
13	North Korea	8.0	6.0	7.2	8.1	9.0	9.6	9.8	9.7	9.0	8.3	8.0	3.0	95.7
14	Colombia	9.0	8.0	6.9	9.2	9.0	7.1	9.8	4.2	8.2	5.4	9.2	9.0	95.0
15	Zimbabwe	9.0	8.0	6.4	7.7	9.0	7.3	7.9	8.5	7.5	9.0	7.9	6.7	94.9
16	Guinea	9.0	6.0	6.1	10.0	9.0	4.5	9.7	7.5	8.1	8.1	9.2	7.5	94.7
17	Bangladesh	8.4	7.0	7.6	6.0	9.0	7.4	9.5	8.2	8.5	8.0	8.7	6.0	94.3
18	Burundi	9.0	7.2	7.1	3.8	8.8	7.8	7.2	9.0	8.3	7.5	8.6	10.0	94.3
19	Dominican Republic	9.0	8.0	7.1	8.5	9.0	6.8	6.8	9.6	9.2	7.0	9.2	4.0	94.2













20	Central African Rep.	9.0	5.0	8.8	3.0	7.0	9.0	9.7	8.0	8.2	9.0	10.0	7.0	93.7
21	Venezuela	8.0	8.0	6.8	7.6	9.0	4.5	9.8	8.2	9.1	7.8	7.2	7.5	93.5
22	Bosnia & Herz.	7.0	8.0	8.6	5.7	9.0	5.7	8.5	6.0	7.3	9.0	8.7	10.0	93.5
23	Myanmar	8.9	8.0	6.3	8.0	9.0	6.9	9.2	8.0	9.6	9.0	7.5	3.0	93.4
24	Uzbekistan	6.5	8.0	6.8	6.8	9.0	6.0	9.1	5.0	9.6	9.0	9.4	8.0	93.2
25	Kenya	9.0	8.0	6.7	8.3	8.8	6.3	8.9	7.4	8.5	8.4	8.4	4.0	92.7
26	Bhutan	8.0	8.0	5.5	8.0	9.0	8.0	9.8	5.0	8.0	6.0	10.0	6.7	92.0
27	Uganda	9.0	7.6	6.9	5.7	8.4	6.0	8.0	8.4	8.3	8.0	8.1	7.3	91.7
28	Laos	9.0	6.7	6.3	8.8	9.0	6.5	7.9	2.5	9.4	9.0	9.7	6.7	91.5
29	Syria	9.0	8.0	7.5	6.8	9.0	5.0	9.0	5.0	7.6	9.0	8.2	7.4	91.5
30	Ethiopia	8.7	8.0	6.0	7.3	9.0	8.5	7.9	5.5	6.3	9.0	8.9	6.0	91.1
31	Guatemala	9.0	6.0	7.4	7.5	9.0	7.7	9.5	5.0	8.7	8.1	9.1	4.0	91.0
32	Tanzania	9.0	7.2	7.6	6.7	8.9	4.5	8.2	7.8	8.6	7.9	7.5	7.1	91.0
33	Equatorial Guinea	8.0	6.0	6.3	9.0	9.0	5.1	9.9	8.0	7.8	7.0	9.8	5.0	90.9
34	Pakistan	5.0	5.0	6.9	8.0	9.0	3.3	9.8	7.5	8.1	9.0	9.3	8.5	89.4
35	Nepal	9.0	8.0	5.6	4.0	9.0	7.1	8.9	6.0	9.1	7.6	8.0	6.7	89.0
36	Paraguay	4.0	5.0	6.9	8.3	9.0	7.8	9.9	7.0	8.3	8.0	8.7	6.0	88.9
37	Lebanon	8.0	8.0	7.5	7.1	7.0	4.7	8.7	4.3	7.3	8.1	9.2	9.0	88.9
38	Egypt	9.0	8.0	7.8	5.0	9.0	3.8	9.5	7.3	7.7	8.5	8.2	5.0	88.8
39	Ukraine	9.0	7.0	6.9	8.8	9.0	7.3	8.9	5.5	8.5	2	9.1	6.8	88.8
40	Peru	6.0	7.0	6.6	9.0	8.5	5.0	9.6	4.4	7.1	9.0	8.9	7.0	88.1

41	Honduras	9.0	6.0	5.3	9.7	9.0	5.4	9.9	3.0	7.2	8.0	9.1	6.0	87.6
42	Mozambique	9.0	8.0	5.7	9.0	8.8	7.8	8.1	6.7	7.4	3.8	8.2	5.0	87.5
43	Angola	7.9	8.6	6.3	3.8	9.0	4.4	7.9	7.2	8.3	7.0	8.1	8.8	87.3
44	Belarus	9.0	8.0	7.0	2.4	9.0	5.4	8.5	7.0	7.3	6.8	9.4	7.5	87.3
45	Saudi Arabia	7.6	6.3	7.8	8.8	9.0	2.2	9.8	4.3	8.6	9.0	8.3	5.4	87.1
46	Ecuador	9.0	6.0	5.6	6.9	9.0	5.0	9.5	7.5	7.9	8.0	8.6	4.0	87.0
47	Indonesia	8.6	7.0	6.3	8.9	9.0	4.0	9.2	4.0	8.6	7.6	8.8	5.0	87.0
48	Turkey	9.0	8.0	7.3	5.0	9.0	4.2	9.7	4.8	5.0	8.0	9.1	7.0	86.1
49	Tajikistan	9.0	5.0	6.2	6.7	9.0	5.3	8.6	5.0	9.4	8.0	9.5	5.0	86.7
50	Azerbaijan	8.0	6.0	6.0	5.8	9.0	4.1	9.7	5.0	8.5	7.0	9.6	7.0	85.7
51	Bahrain	6.0	5.0	6.7	9.0	9.0	1.7	9.7	4.0	8.4	9.0	9.6	7.5	85.6
52	Vietnam	8.6	8.0	5.6	8.5	8.9	3.4	7.6	4.3	8.4	8.0	6.4	7.2	84.9
53	Cameroon	9.0	7.0	5.1	8.6	9.0	4.2	6.4	7.5	6.6	8.0	8.2	5.0	84.6
54	Nigeria	7.2	3.0	6.5	8.7	8.9	5.8	8.8	6.9	6.7	9.0	8.3	4.5	84.3
55	Eritrea	8.0	8.0	5.4	4.0	9.0	8.8	9.0	7.0	5.7	5.0	9.2	5.0	84.1
56	Philippines	7.0	7.0	6.5	8.2	9.0	4.7	9.3	3.8	8.2	7.0	9.2	4.0	83.9
57	Iran	5.0	8.0	7.3	6.0	9.0	3.3	9.1	4.8	8.8	7.3	9.1	6.1	83.8
58	Cuba	5.0	8.0	6.3	5.4	8.8	5.7	7.8	3.8	9.0	9.0	8.6	6.3	83.7
59	Russia	9.0	6.0	7.5	2.3	9.0	3.8	9.4	6.7	9.0	7.6	9.2	4.0	83.5
60	Gambia	7.0	7.0	5.4	4.0	9.0	6.7	8.1	7.0	7.9	6.0	8.3	6.0	82.4
61	Algeria	5.0	9.0	6.4	6.0	9.0	3.0	9.0	5.0	6.6	8.0	9.2	5.0	81.2

62	Brazil	9.0	5.0	5.7	5.9	9.0	2	7.8	8.3	6.7	6.5	8.7	6.4	81.0
63	Libya	7.0	8.0	6.7	7.1	9.0	3.1	8.7	3.0	8.7	8.0	8.4	3.0	80.7
64	Togo	5.0	6.0	7.0	6.0	9.0	3.0	8.9	10.0	7.6	5.0	7.9	5.0	80.4
65	Kyrgyzstan	8.0	5.0	5.4	4.3	9.0	5.8	8.9	5.7	7.9	5.0	9.7	5.7	80.4
66	Serbia & Mont.	7.0	6.0	7.5	4.3	9.0	7.5	6.9	5.0	6.2	6.0	9.6	5.0	80.0
67	Morocco	6.0	8.0	5.9	8.0	9.0	5.7	8.5	1.8	6.3	9.0	8.2	2.5	78.9
68	Kazakhstan	9.0	5.0	7.2	3.8	9.0	2.5	9.1	5.0	8.1	6.0	9.6	4.0	78.3
69	Thailand	9.0	5.0	6.3	4.0	9.0	0.9	8.5	3.5	7.0	9.0	9.2	6.0	77.4
70	Turkmenistan	8.0	5.0	4.9	4.3	9.0	3.1	9.8	6.0	7.6	5.0	9.8	4.0	76.5
71	Tunisia	6.0	8.0	6.2	7.1	9.0	3.6	7.8	4.0	7.3	6.0	8.3	3.0	76.3
72	El Salvador	5.0	5.0	5.6	2.7	9.0	7.5	9.0	3.0	8.0	6.0	9.7	5.0	75.5
73	Mexico	7.1	5.0	6.8	9.2	8.9	2	7.7	7.9	7.3	2.3	8.4	2	74.6
74	Malaysia	7.0	5.0	5.9	5.0	9.0	1.3	8.0	7.7	8.6	6.0	8.3	1.8	73.6
75	China	6.8	5.0	7.4	6.0	9.0	0.5	8.6	2.9	8.9	7.0	8.4	1.8	72.3
76	India	8.0	6.2	5.4	6.7	9.0	5.8	4.0	5.1	5.9	2.4	6.8	4.2	69.5

Copyright (C) 2006 The Fund for Peace

2006

Rank	Country													Total
1	Sudan	9.6	9.7	9.7	9.1	9.2	7.5	9.5	9.5	9.8	9.8	9.1	9.8	112.3
2	Congo (D. R.)	9.5	9.5	9.1	8.0	9.0	8.1	9.0	9.0	9.5	9.8	9.6	10.0	110.1
3	Cote d'Ivoire	8.8	7.6	9.8	8.5	8.0	9.0	10.0	8.5	9.4	9.8	9.8	10.0	109.2
4	Iraq	8.9	8.3	9.8	9.1	8.7	8.2	8.5	8.3	9.7	9.8	9.7	10.0	109.0
5	Zimbabwe	9.7	8.9	8.5	9.0	9.2	9.8	8.9	9.5	9.5	9.4	8.5	8.0	108.9
6	Chad	9.0	9.0	8.5	8.0	9.0	7.9	9.5	9.0	9.1	9.4	9.5	8.0	105.9
7	Somalia	9.0	8.1	8.0	7.0	7.5	8.5	10.0	10.0	9.5	10.0	9.8	8.5	105.9
8	Haiti	8.8	5.0	8.8	8.0	8.3	8.4	9.4	9.3	9.6	9.4	9.6	10.0	104.6
9	Pakistan	9.3	9.3	8.6	8.1	8.9	7.0	8.5	7.5	8.5	9.1	9.1	9.2	103.1
10	Afghanistan	7.9	9.6	9.1	7.0	8.0	7.5	8.3	8.0	8.2	8.2	8.0	10.0	99.8
11	Guinea	7.5	7.2	8.1	8.4	8.0	8.0	9.1	9.0	8.1	8.1	9.0	8.5	99.0
12	Liberia	8.0	9.3	7.0	7.1	8.6	8.9	7.8	9.0	7.2	7.3	8.8	10.0	99.0
13	Central African Rep.	9.0	7.7	8.8	5.5	8.5	8.1	9.0	8.0	7.5	8.9	8.0	8.5	97.5
14	North Korea	8.0	6.0	7.2	5.0	9.0	9.5	9.8	9.5	9.5	8.3	8.0	7.5	97.3
15	Burundi	9.0	9.1	7.0	6.7	8.8	7.8	7.2	8.5	7.5	7.3	7.8	10.0	96.7
16	Yemen	7.8	6.7	7.0	8.2	9.0	7.8	8.8	8.2	7.2	9.0	9.4	7.5	96.6
17	Sierra Leone	8.5	7.9	7.1	8.9	8.7	9.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.7	8.8	96.6
18	Myanmar	8.9	8.8	9.0	6.0	9.0	7.1	9.2	8.2	9.8	9.0	8.0	3.5	96.5
19	Bangladesh	9.0	5.8	9.5	8.5	9.0	7.0	9.0	7.5	7.8	8.3	8.9	6.0	96.3

20	Nepal	8.5	4.8	9.2	6.0	9.2	8.5	9.2	6.2	9.1	9.0	9.0	6.7	95.4
21	Uganda	8.0	9.2	7.8	5.7	8.4	7.5	8.0	8.0	8.0	8.5	7.9	7.5	94.5
22	Nigeria	8.0	5.9	9.1	8.5	9.0	5.4	9.0	8.3	7.1	9.2	9.0	5.9	94.4
23	Uzbekistan	7.7	5.8	7.5	7.5	8.1	7.0	9.3	7.0	9.3	9.1	9.1	7.0	94.4
24	Rwanda	9.5	7.0	9.0	8.2	7.2	8.0	8.7	6.9	7.7	5.0	8.9	6.8	92.9
25	Sri Lanka	8.0	8.2	9.1	6.7	8.0	5.7	8.6	7.0	7.2	8.5	8.9	6.5	92.4
26	Ethiopia	9.0	7.6	7.0	7.5	8.5	8.0	7.6	6.2	8.0	7.5	8.7	6.3	91.9
27	Colombia	7.0	9.1	7.4	8.5	8.5	3.2	8.7	6.5	7.6	9.0	9.2	7.1	91.8
28	Kyrgyzstan	8.0	6.6	7.0	7.5	8.0	7.5	8.3	7.3	7.9	8.3	7.9	6.0	90.3
29	Malawi	9.0	6.0	6.0	7.0	8.8	8.8	8.0	9.0	8.0	5.5	6.7	7.0	89.8
30	Burkina Faso	9.0	5.9	6.5	6.6	8.8	8.2	7.8	8.4	6.5	7.6	7.7	6.7	89.7
31	Egypt	8.0	6.0	8.5	6.0	8.0	7.0	9.0	7.3	8.0	6.5	7.7	7.5	89.5
32	Indonesia	7.5	8.2	6.3	8.3	8.0	6.8	6.7	7.2	7.5	7.5	7.9	7.3	89.2
33	Syria	7.0	7.1	8.0	6.8	8.9	6.5	9.0	5.5	9.0	7.5	7.1	6.2	88.6
34	Kenya	9.0	7.1	6.7	8.0	8.0	6.8	7.3	7.2	6.9	7.0	7.6	7.0	88.6
35	Bosnia & Herz.	6.5	8.5	8.6	6.0	7.3	6.2	8.1	5.8	5.3	7.5	8.7	10.0	88.5
36	Cameroon	6.5	6.8	6.5	8.0	8.7	6.0	8.5	8.0	7.2	7.6	7.9	6.7	88.4
37	Angola	8.0	8.5	6.3	5.0	9.0	4.9	8.8	7.6	7.8	6.8	8.0	7.6	88.3
38	Togo	7.0	5.8	6.0	6.5	7.5	8.0	8.7	8.1	8.1	8.1	7.8	6.7	88.3
39	Bhutan	6.0	8.1	7.0	6.7	9.0	8.0	8.4	6.0	8.6	5.0	8.4	6.7	87.9
40	Laos	8.0	5.9	6.3	6.6	5.9	6.5	7.9	8.0	8.2	9.0	8.9	6.7	87.9

41	Mauritania	9.0	5.9	8.5	5.0	7.0	7.8	7.1	8.2	7.1	7.6	7.9	6.7	87.8
42	Tajikistan	7.0	6.6	6.2	6.5	7.4	6.8	8.9	7.5	8.6	7.5	8.7	6.0	87.7
43	Russia	8.0	7.2	8.0	7.0	8.0	3.7	8.2	6.9	9.1	7.5	9.0	4.5	87.1
44	Niger	9.4	4.3	8.5	6.0	7.2	9.0	7.9	8.5	6.5	6.7	6.0	7.0	87.0
45	Turkmenistan	7.0	4.2	5.2	6.0	7.2	8.0	9.1	7.2	9.7	8.5	8.0	6.0	86.1
46	Guinea-Bissau	7.0	4.9	5.5	7.0	9.3	7.4	7.8	8.0	7.9	7.5	6.5	6.6	85.4
47	Cambodia	7.5	6.5	7.0	8.0	7.2	6.0	7.8	7.5	6.9	6.7	7.5	6.4	85.0
48	Dominican Republic	7.8	7.0	6.5	8.5	8.0	6.0	6.2	8.0	7.1	7.0	7.4	5.5	85.0
49	Papua New Guinea	8.0	2.5	8.0	8.0	9.0	7.0	7.8	8.0	6.1	7.0	6.7	6.5	84.6
50	Belarus	9.0	5.1	5.5	3.5	8.5	6.3	9.0	7.5	7.3	6.8	8.0	8.0	84.5
51	Guatemala	8.7	6.0	7.1	6.7	8.0	7.1	7.5	7.1	7.1	7.5	6.0	5.5	84.3
52	Equatorial Guinea	7.0	2.0	6.7	7.5	9.0	4.0	9.0	8.0	8.5	8.3	8.0	6.0	84.0
53	Iran	6.5	8.7	6.9	5.0	7.5	3.0	8.1	6.1	9.1	8.0	8.8	6.3	84.0
54	Eritrea	8.0	7.2	5.4	6.0	6.0	8.0	8.0	7.3	6.8	7.2	7.5	6.5	83.9
55	Serbia & Mont.	5.7	8.5	8.6	5.5	8.0	6.5	7.8	5.0	5.6	6.5	8.6	7.5	83.8
56	Bolivia	7.5	4.0	7.0	7.0	8.8	6.2	7.0	7.8	6.7	6.5	8.4	6.0	82.9
57	China	8.5	5.1	8.0	6.6	9.2	4.5	8.5	7.3	9.0	5.5	8.0	2.3	82.5
58	Moldova	7.0	4.7	7.3	8.0	7.5	7.5	7.4	7.0	6.8	5.5	6.8	7.0	82.5
59	Nicaragua	6.5	5.5	6.4	7.1	9.0	8.5	7.3	7.2	5.7	6.5	7.0	5.7	82.4
60	Georgia	6.0	6.8	7.4	6.1	7.0	5.5	7.7	6.3	5.6	8.1	7.1	8.6	82.2
61	Azerbaijan	6.0	8.1	7.3	5.0	7.5	5.9	8.1	6.5	6.0	7.0	7.5	7.0	81.9

62	Cuba	7.5	4.7	5.5	6.0	7.9	6.5	7.8	4.0	8.3	8.0	8.0	7.7	81.9
63	Ecuador	6.0	5.6	6.8	7.1	8.0	5.2	8.3	7.4	6.7	6.8	7.8	5.5	81.2
64	Venezuela	7.5	4.8	6.8	7.0	8.0	4.0	7.5	7.0	7.8	7.5	7.3	6.0	81.2
65	Lebanon	6.8	4.3	7.8	7.0	6.8	5.3	6.4	5.0	6.8	7.5	8.3	8.5	80.5
66	Zambia	9.2	5.2	5.2	6.7	7.3	7.6	7.5	7.8	5.8	6.0	5.2	6.1	79.6
67	Israel	7.0	8.5	9.0	3.5	7.0	3.8	7.3	7.0	7.0	4.8	7.5	7.0	79.4
68	Philippines	7.0	5.5	7.2	5.7	7.5	5.3	7.8	6.0	6.1	7.0	7.2	6.9	79.2
69	Peru	6.5	4.6	7.0	7.6	8.0	5.4	6.8	6.4	6.8	8.0	7.1	5.0	79.2
70	Vietnam	7.0	6.5	5.3	7.0	6.2	5.6	7.0	6.6	7.0	7.5	7.0	5.9	78.6
71	Tanzania	7.0	6.8	6.0	6.0	7.0	7.0	6.5	7.8	6.0	6.0	5.2	7.0	78.3
72	Algeria	6.0	6.6	7.1	5.6	7.4	3.5	7.5	7.6	7.5	6.8	6.4	5.8	77.8
73	Saudi Arabia	6.0	6.9	7.9	3.5	7.0	2.0	8.5	4.1	8.5	7.8	7.5	7.5	77.2
74	Jordan	6.0	6.8	6.0	5.0	7.6	6.5	6.8	5.8	6.1	6.8	6.6	7.0	77.0
75	Honduras	8.8	2.1	5.3	6.0	9.0	7.6	7.5	6.9	5.6	6.0	6.4	5.5	76.7
76	Morocco	6.5	8.0	6.9	6.2	7.0	6.5	8.0	5.7	6.6	5.6	5.5	4.0	76.5
77	El Salvador	8.5	6.1	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	7.4	6.7	6.0	3.9	5.5	76.1
78	Macedonia	5.7	5.1	7.1	7.0	7.5	6.0	7.2	5.6	5.3	6.1	6.2	6.3	75.1
79	Thailand	7.5	5.7	8.1	4.3	7.5	2.0	6.8	6.0	6.5	6.8	7.2	6.5	74.9
80	Mozambique	7.0	2.0	4.5	8.1	7.1	7.0	7.4	8.0	6.7	5.5	5.5	6.0	74.8
81	Mali	8.5	4.2	6.0	8.0	6.8	8.5	4.6	8.6	4.7	4.5	3.5	6.7	74.6
82	Turkey	7.2	6.1	7.3	5.0	8.6	4.1	6.1	5.7	5.0	6.4	6.9	6.0	74.4

83	Gambia	6.0	5.0	4.0	6.0	7.0	8.1	7.5	6.5	6.6	5.5	5.8	6.0	74.0
84	Gabon	6.0	5.4	3.0	6.0	7.9	5.0	7.9	7.5	6.2	5.5	7.5	5.7	73.6
85	Mexico	7.2	4.3	6.1	7.0	8.3	6.3	5.9	6.0	5.1	6.0	4.7	6.2	73.1
86	Ukraine	7.0	3.8	7.2	7.5	7.0	4.5	7.0	5.5	5.9	3.0	7.5	7.0	72.9
87	Paraguay	5.0	1.5	6.2	6.0	7.5	6.6	8.0	6.8	8.0	4.5	7.5	4.4	72.0
88	Kazakhstan	5.0	2.9	5.1	4.0	6.2	6.5	7.5	6.7	7.0	6.7	7.7	6.6	71.9
89	Armenia	6.0	7.1	5.0	7.0	6.0	5.1	7.0	6.5	6.0	4.5	5.8	5.5	71.5
90	Benin	6.0	5.1	4.0	6.9	7.3	6.5	6.5	7.8	4.8	5.5	3.8	6.7	70.9
91	Namibia	5.7	4.9	5.5	8.0	8.0	5.5	4.5	7.8	5.8	5.5	3.5	6.0	70.7
92	Cyprus	5.0	3.6	8.6	6.0	7.7	5.0	5.4	4.2	3.5	4.0	8.5	9.0	70.5
93	India	8.8	2.8	6.9	7.1	8.5	5.0	4.8	6.7	5.4	4.5	5.7	4.2	70.4
94	Albania	6.0	2.7	4.5	7.0	6.0	7.0	7.0	6.9	5.5	5.5	4.5	6.0	68.6
95	Libya	6.0	2.1	5.5	4.0	7.3	5.1	7.5	4.5	8.1	5.5	7.9	5.0	68.5
96	Botswana	9.3	6.0	3.5	6.0	6.9	5.0	5.5	6.8	4.9	4.0	3.0	6.0	66.9
97	Jamaica	6.5	2.5	4.5	6.7	6.5	5.0	7.0	6.5	5.6	6.0	3.9	6.1	66.8
98	Malaysia	6.5	4.1	5.5	3.5	6.6	4.3	5.9	5.8	6.5	6.2	5.5	5.7	66.1
99	Senegal	6.8	4.3	5.2	5.0	6.8	5.2	5.8	6.5	6.0	5.5	3.5	5.5	66.1
100	Tunisia	5.7	3.6	5.0	5.0	7.5	3.6	6.5	6.0	7.5	6.0	6.0	3.0	65.4
101	Brazil	6.5	3.6	5.7	5.0	8.5	2.7	5.5	6.7	5.3	5.7	3.2	4.7	63.1
102	Romania	6.5	3.9	5.4	5.5	6.0	5.9	6.2	5.3	4.8	3.5	4.1	5.5	62.6
103	Bulgaria	6.0	4.1	4.0	6.0	6.2	4.3	6.2	5.3	4.9	5.5	4.1	5.5	62.1













104	Croatia	5.7	6.6	6.5	5.0	5.7	5.8	4.2	4.1	4.6	4.0	3.9	5.8	61.9
105	Kuwait	5.7	4.5	4.5	4.0	6.0	2.8	6.8	3.0	6.5	5.5	7.5	4.0	60.8
106	Ghana	5.5	4.5	5.0	8.0	6.8	4.0	5.5	6.8	4.4	2.0	3.5	4.5	60.5
107	Panama	6.5	2.6	4.5	5.0	7.5	5.7	4.9	5.8	4.8	5.3	3.0	4.0	59.6
108	Mongolia	6.0	1.0	4.1	2.0	5.7	4.5	6.2	5.3	6.7	4.7	5.0	7.2	58.4
109	Latvia	5.7	5.9	4.5	5.0	7.0	5.5	4.8	4.0	3.7	2.0	4.1	4.0	56.2
110	South Africa	7.7	5.8	4.5	4.0	8.0	2.2	4.1	6.0	4.0	3.4	4.0	2.0	55.7
111	Estonia	5.0	5.1	4.5	4.0	5.0	3.5	5.0	4.0	3.7	2.0	5.9	3.3	51.0
112	Slovakia	4.5	1.8	4.4	5.5	6.5	4.5	3.8	4.3	4.6	2.0	4.0	4.0	49.9
113	Lithuania	5.7	3.5	3.5	5.5	6.1	4.5	4.1	4.1	3.7	2.0	3.0	4.0	49.7
114	Costa Rica	6.0	4.2	4.0	5.0	6.2	4.5	3.9	2.5	3.5	2.0	3.3	4.5	49.6
115	Poland	5.0	3.2	3.2	6.5	4.7	4.3	4.2	4.3	3.5	2.0	3.0	4.0	47.9
116	Hungary	3.7	3.6	3.0	5.0	6.4	4.0	3.8	4.2	4.0	2.0	3.0	4.0	46.7
117	Oman	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	3.5	6.3	3.5	6.5	5.5	7.5	2.0	43.8
118	Mauritius	3.0	1.0	3.5	2.0	6.0	3.1	5.1	4.5	4.7	4.0	3.0	2.0	41.9
119	Czech Republic	4.0	3.5	3.2	5.0	4.0	2.5	3.7	3.9	3.0	2.0	3.5	3.5	41.8
120	Uruguay	5.0	1.0	2.0	6.0	5.0	3.5	3.0	4.0	2.5	3.0	2.5	3.7	41.2
121	Greece	5.0	1.4	3.5	5.5	5.0	3.5	4.0	3.0	3.0	2.0	1.5	3.7	41.1
122	Argentina	3.0	1.4	4.0	4.0	5.2	4.2	3.5	4.0	3.7	2.0	2.8	3.0	40.8
123	South Korea	4.0	4.2	3.5	5.5	2.5	1.0	3.9	1.5	2.8	1.0	3.0	7.0	39.9
124	Germany	4.0	5.0	4.9	3.0	6.2	3.2	2.3	1.8	2.9	2.5	1.8	2.1	39.7

125	Spain	3.2	1.8	5.8	1.5	5.0	3.3	1.5	1.5	2.9	3.2	5.7	2.0	37.4
126	Slovenia	4.0	1.5	3.5	3.5	5.5	3.2	3.2	3.5	3.7	3.0	1.2	1.0	36.8
127	Italy	3.5	2.8	3.5	3.0	4.5	4.0	3.2	1.5	1.8	2.5	2.8	2.0	35.1
128	United States	5.0	6.0	3.0	1.0	6.0	1.5	2.5	1.0	5.0	1.0	1.5	1.0	34.5
129	France	4.0	3.8	6.0	2.0	5.0	3.0	1.5	1.0	3.2	1.0	1.8	2.0	34.3
130	United Kingdom	3.5	3.9	5.0	2.0	5.0	1.0	2.5	1.8	2.0	2.5	3.0	2.0	34.2
131	Portugal	5.0	1.0	2.5	2.0	4.0	3.7	1.5	3.8	3.3	1.0	1.4	3.5	32.7
132	Chile	3.0	1.0	3.5	2.0	4.0	3.4	1.5	3.5	3.6	2.0	1.5	3.0	32.0
133	Singapore	2.0	1.0	3.0	3.0	2.5	3.3	3.5	1.0	3.5	1.0	4.0	3.0	30.8
134	Netherlands	3.0	4.1	4.8	2.5	4.0	2.0	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	2.0	28.1
135	Japan	4.0	1.0	3.8	2.0	2.5	2.6	1.8	1.0	3.0	1.0	1.3	4.0	28.0
136	Austria	2.5	2.1	3.5	1.0	5.0	1.9	1.3	1.0	1.5	1.0	2.0	3.3	26.1
137	Denmark	3.0	2.5	4.5	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	3.3	24.8
138	Belgium	3.0	1.5	3.5	1.0	4.0	2.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	2.5	24.0
139	Canada	3.0	2.3	2.0	2.0	5.0	1.2	1.5	1.0	1.5	1.0	1.6	1.0	23.1
140	Australia	2.5	1.5	3.0	1.0	4.5	1.5	1.0	1.0	2.5	1.0	1.5	1.0	22.0
141	New Zealand	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	2.9	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	19.4
142	Switzerland	3.0	1.5	2.0	2.0	2.5	1.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	18.7
143	Ireland	2.0	1.4	1.0	2.0	3.0	1.9	1.5	1.3	1.5	1.0	1.0	1.0	18.6
144	Finland	3.0	1.5	1.0	2.0	2.0	2.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	18.2
145	Sweden	3.0	2.5	1.0	2.0	2.0	1.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	18.2

146	Norway	3.0	1.5	1.0	1.0	2.0	1.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	16.8
-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Copyright (C) 2006 The Fund for Peace

2007

Rank	Country													Total
1	Sudan	9.2	9.8	10.0	9.0	9.1	7.7	10.0	9.5	10.0	9.9	9.7	9.8	113.7
2	Iraq	9.0	9.0	10.0	9.5	8.5	8.0	9.4	8.5	9.7	10.0	9.8	10.0	111.4
3	Somalia	9.2	9.0	8.5	8.0	7.5	9.2	10.0	10.0	9.7	10.0	10.0	10.0	111.1
4	Zimbabwe	9.7	8.7	8.8	9.1	9.5	10.0	9.5	9.6	9.7	9.5	9.0	7.0	110.1
5	Chad	9.1	8.9	9.5	7.9	9.0	8.3	9.5	9.1	9.2	9.6	9.7	9.0	108.8
6	Cote d'Ivoire	8.6	8.3	9.8	8.4	8.0	8.9	9.5	7.9	9.2	9.6	9.3	9.8	107.3
7	Congo (D. R.)	9.4	8.9	8.8	7.6	9.1	8.0	8.3	8.7	8.9	9.6	8.6	9.6	105.5
8	Afghanistan	8.5	8.9	9.1	7.0	8.0	8.3	8.8	8.0	8.2	9.0	8.5	10.0	102.3
9	Guinea	7.8	7.4	8.1	8.3	8.5	8.5	9.6	8.9	8.6	8.1	9.0	8.5	101.3
10	Central African Rep.	8.9	8.4	8.8	5.5	8.6	8.4	9.0	8.0	8.2	8.9	9.3	9.0	101.0
11	Haiti	8.6	4.2	8.0	8.0	8.2	8.4	9.2	9.0	9.1	9.3	9.3	9.6	100.9
12	Pakistan	8.2	8.5	9.0	8.1	8.5	5.8	8.7	7.1	8.7	9.5	9.5	8.5	100.1
13	North Korea	8.0	6.0	7.2	5.0	8.8	9.6	9.8	9.5	9.7	8.3	7.9	7.9	97.7
14	Myanmar	8.5	8.5	9.1	6.0	8.9	7.6	9.1	8.3	9.8	9.0	8.2	4.0	97.0
15	Uganda	8.1	9.4	8.5	6.0	8.5	7.5	8.5	8.2	8.2	8.3	7.8	7.4	96.4
16	Bangladesh	8.6	5.8	9.6	8.4	9.0	6.9	9.0	7.4	7.8	8.0	9.5	5.9	95.9
17	Nigeria	8.2	5.6	9.5	8.5	9.1	5.4	9.1	8.7	7.1	9.2	9.5	5.7	95.6
18	Ethiopia	9.0	7.9	7.8	7.5	8.6	8.0	7.9	7.0	8.5	7.5	8.9	6.7	95.3
19	Burundi	9.1	8.9	6.7	6.7	8.8	8.2	7.1	8.9	7.5	6.8	7.5	9.0	95.2

20	Timor-Leste	8.1	8.5	7.1	5.3	6.5	8.5	9.5	7.9	6.9	9.0	8.8	8.8	94.9
21	Nepal	8.1	5.2	8.9	6.1	9.2	8.2	8.5	6.6	8.8	8.3	8.5	7.2	93.6
22	Uzbekistan	7.7	5.4	7.1	7.1	8.6	7.5	9.2	6.8	9.0	8.9	9.2	7.0	93.5
23	Sierra Leone	8.6	7.4	7.1	8.7	8.7	8.7	8.0	8.0	7.0	6.5	7.7	7.0	93.4
24	Yemen	8.0	6.7	7.3	7.2	8.7	8.0	7.8	8.1	7.2	8.0	9.0	7.2	93.2
25	Sri Lanka	7.0	8.6	9.5	6.9	8.2	6.0	8.9	6.5	7.5	8.7	9.2	6.1	93.1
26	Congo (Republic)	8.7	7.3	6.8	6.1	8.1	8.3	8.5	8.8	7.9	7.9	7.2	7.4	93.0
27	Liberia	8.1	8.5	6.5	6.8	8.3	8.4	7.0	8.6	6.7	6.9	8.1	9.0	92.9
28	Lebanon	6.9	8.6	9.0	7.0	7.1	6.3	7.3	6.4	7.0	9.0	8.8	9.0	92.4
29	Malawi	9.0	6.0	6.0	8.0	8.8	9.2	7.9	9.0	8.0	5.4	7.5	7.4	92.2
30	Solomon Islands	8.5	4.8	8.0	5.1	8.0	8.0	8.5	8.5	7.1	7.7	8.8	9.0	92.0
31	Kenya	8.4	8.0	6.9	8.0	8.1	7.0	8.0	7.4	7.0	7.1	8.2	7.2	91.3
32	Niger	9.2	5.9	8.9	6.0	7.2	9.2	8.2	8.8	7.1	6.7	6.0	8.0	91.2
33	Colombia	6.8	9.5	7.4	8.4	8.4	3.8	8.2	6.0	7.4	8.3	8.5	7.0	89.7
33	Burkina Faso	8.6	5.6	6.4	6.6	8.9	8.2	7.6	8.9	6.6	7.6	7.7	7.0	89.7
35	Cameroon	7.0	6.8	7.0	7.9	8.7	6.1	8.5	7.5	7.2	7.7	8.0	7.0	89.4
36	Egypt	7.7	6.5	7.8	6.2	7.8	7.0	9.0	6.7	8.5	6.1	8.3	7.6	89.2
36	Rwanda	9.1	7.0	8.7	7.6	7.1	7.5	8.5	6.9	7.4	4.6	8.2	6.6	89.2
38	Guinea Bissau	7.6	6.5	5.4	7.0	8.6	8.0	7.2	8.5	8.0	8.0	6.8	7.2	88.8
39	Tajikistan	7.7	6.1	6.3	6.4	7.3	7.3	9.0	7.3	8.6	7.8	8.8	6.1	88.7
40	Syria	6.5	8.9	8.0	6.8	8.1	6.8	8.5	5.3	8.5	7.4	7.5	6.3	88.6

41	Equatorial Guinea	8.0	2.0	7.0	7.4	9.0	4.0	9.4	8.6	9.4	8.9	8.5	6.0	88.2
41	Kyrgyzstan	7.5	6.2	6.8	7.4	8.0	7.5	8.2	6.3	7.9	7.9	7.5	7.0	88.2
43	Turkmenistan	7.0	4.5	6.2	5.6	7.3	7.4	9.0	7.7	9.6	8.5	8.2	6.5	87.5
44	Laos	8.0	5.5	6.5	6.6	5.7	7.1	7.9	8.0	8.5	8.2	8.6	6.6	87.2
45	Mauritania	8.7	6.2	8.0	5.0	7.0	7.8	6.8	8.1	7.1	7.4	7.9	6.7	86.7
46	Togo	7.5	5.4	6.0	6.5	7.5	8.2	7.7	8.0	7.8	7.8	7.6	6.6	86.6
47	Bhutan	6.5	7.5	7.0	6.7	8.7	7.9	8.0	6.5	8.5	4.6	8.0	6.5	86.4
48	Cambodia	7.6	5.9	7.3	8.0	7.2	6.4	8.5	7.6	7.1	6.2	7.5	6.4	85.7
48	Moldova	7.0	4.7	7.3	8.4	7.5	7.5	7.9	7.1	6.8	6.3	7.5	7.7	85.7
50	Eritrea	8.1	7.1	5.4	6.0	5.9	8.4	8.3	7.7	7.4	7.5	7.2	6.5	85.5
51	Belarus	8.0	4.6	6.5	5.0	7.5	6.8	9.1	6.9	8.5	6.7	8.5	7.1	85.2
52	Papua New Guinea	7.5	3.5	8.0	7.9	9.0	7.3	7.8	7.8	6.1	7.0	6.7	6.5	85.1
53	Angola	8.5	7.5	5.9	5.0	8.7	4.2	8.6	7.7	7.5	6.2	7.5	7.6	84.9
54	Bosnia	6.1	8.0	8.3	6.0	7.2	6.0	7.6	5.6	5.3	7.3	8.3	8.8	84.5
55	Indonesia	7.0	7.5	6.0	7.5	8.0	6.5	6.5	7.0	7.0	7.3	7.2	6.9	84.4
56	Philippines	7.0	5.7	7.2	6.7	7.6	5.8	8.2	5.9	6.8	7.6	7.8	6.9	83.2
57	Iran	6.2	8.6	7.1	5.0	7.2	3.3	7.8	5.7	8.7	8.3	8.9	6.0	82.8
58	Georgia	6.3	6.8	7.6	5.7	7.0	5.7	7.9	6.1	5.4	7.8	7.8	8.2	82.3
59	Bolivia	7.4	3.7	7.0	7.0	8.5	6.4	7.2	7.4	7.0	6.2	8.3	5.9	82.0
60	Guatemala	7.0	6.0	7.1	6.7	8.0	7.0	7.4	6.6	7.1	7.3	5.9	5.3	81.4
61	Swaziland	8.7	4.0	4.0	5.3	6.0	7.7	8.8	8.1	7.5	7.1	7.1	7.0	81.3

62	Lesotho	9.0	4.5	5.5	5.4	5.5	9.1	7.5	8.9	6.7	6.2	6.7	6.2	81.2
62	Russia	7.5	5.9	7.7	6.5	8.2	3.9	7.6	6.2	8.5	6.8	8.5	3.9	81.2
62	Azerbaijan	6.0	7.5	7.3	5.3	7.4	6.3	7.8	6.0	6.4	7.2	7.5	6.5	81.2
62	China	8.7	5.1	8.0	6.5	9.0	4.0	8.5	6.5	9.0	5.3	7.5	3.1	81.2
66	Cape Verde	7.9	4.8	4.8	8.2	6.2	8.0	7.0	7.4	6.4	6.1	6.4	7.9	81.1
66	Maldives	8.0	7.0	4.9	7.0	4.9	7.3	7.9	7.1	7.7	6.1	7.2	6.0	81.1
66	Serbia	6.0	8.0	7.7	5.5	7.7	6.5	7.5	5.0	6.1	6.3	8.0	6.8	81.1
69	Dominican Republic	6.5	6.4	6.1	8.3	8.1	5.8	6.0	6.9	7.0	6.5	7.4	5.6	80.6
69	Zambia	9.1	6.2	5.2	6.7	7.4	7.9	7.6	7.9	5.8	5.5	5.2	6.1	80.6
71	Djibouti	7.9	6.5	5.5	5.0	6.1	6.9	7.4	7.5	6.0	7.0	6.9	7.6	80.3
72	Nicaragua	6.7	5.1	6.4	7.1	8.6	7.8	6.5	7.0	5.4	6.5	7.2	5.7	80.0
73	Ecuador	6.2	6.0	6.7	7.1	8.0	5.3	7.5	6.8	6.6	6.6	7.6	5.5	79.9
74	Venezuela	6.9	5.2	6.8	6.9	8.2	4.0	7.5	6.3	7.9	6.9	7.5	5.7	79.8
75	Israel	7.0	7.9	9.0	3.5	6.9	3.7	7.3	7.0	7.4	5.3	7.2	7.4	79.6
76	Tanzania	7.4	7.1	6.2	6.0	6.9	7.4	6.3	7.8	6.0	5.7	5.5	7.0	79.3
77	Sao Tome	7.9	4.8	5.1	7.4	6.1	8.5	7.3	8.1	5.3	5.8	5.9	6.4	78.6
77	Cuba	6.5	4.7	5.5	6.0	7.2	6.3	7.6	3.8	7.8	7.7	7.8	7.7	78.6
79	Vietnam	6.5	5.9	5.3	7.0	6.2	6.2	7.0	6.5	6.9	7.4	7.0	5.9	77.8
79	Comoros	6.2	3.6	5.3	5.7	6.1	7.6	7.9	8.7	6.6	6.7	6.5	6.9	77.8
81	Mozambique	7.5	2.2	4.7	8.0	7.2	7.5	7.4	8.0	7.0	5.9	5.6	5.9	76.9
82	Jordan	6.2	6.8	6.5	5.0	7.7	6.6	6.2	5.6	6.2	6.4	6.5	6.9	76.6

83	Madagascar	8.5	3.0	5.1	5.0	7.0	7.5	5.7	8.7	5.7	6.1	6.7	7.5	76.5
83	Saudi Arabia	5.9	7.2	7.7	3.6	6.5	2.3	8.8	4.3	8.8	7.3	7.6	6.5	76.5
85	Peru	6.6	4.0	6.9	7.5	8.1	5.6	6.6	6.2	5.2	7.7	7.0	5.0	76.4
86	Gambia	6.4	5.2	4.2	6.0	7.0	8.0	7.9	6.6	6.8	5.8	5.9	6.2	76.0
86	Morocco	6.6	7.5	6.8	6.2	7.3	6.6	7.8	6.0	6.6	5.2	5.4	4.0	76.0
86	Thailand	7.0	5.8	7.8	4.4	7.5	3.0	8.0	5.5	6.3	7.2	8.0	5.5	76.0
89	Algeria	6.1	6.7	7.0	5.6	7.3	3.5	7.3	7.0	7.4	6.4	5.9	5.7	75.9
90	Fiji	5.9	4.0	7.5	5.4	7.5	5.9	9.0	4.1	5.9	7.0	8.2	5.3	75.7
91	Mali	8.5	4.4	6.1	7.9	6.6	8.7	4.7	8.6	4.6	4.8	3.7	6.9	75.5
92	El Salvador	7.6	5.6	6.0	7.0	7.3	5.4	7.0	6.9	6.9	5.8	3.9	5.5	74.9
92	Turkey	6.9	5.8	7.4	5.0	8.7	4.7	6.1	5.4	5.1	6.7	7.1	6.0	74.9
94	Honduras	7.8	2.0	5.3	6.0	8.7	7.6	7.4	6.6	5.8	5.9	6.3	5.4	74.8
95	Macedonia	5.4	4.7	7.1	7.0	7.4	5.9	7.3	5.1	5.3	6.1	6.4	6.4	74.1
96	Suriname	7.1	4.2	6.1	6.7	8.3	6.9	6.4	4.9	5.7	6.2	5.1	6.3	73.9
97	Samoa	6.8	3.8	5.0	7.9	7.2	6.3	6.7	4.7	4.9	6.7	5.4	8.4	73.8
98	Micronesia	7.7	3.2	5.0	8.1	7.1	6.5	6.9	7.1	2.5	6.0	5.4	8.0	73.5
99	Gabon	6.6	5.7	3.0	6.0	7.8	4.9	7.3	7.0	6.7	5.3	7.2	5.8	73.3
99	Guyana	6.9	4.1	5.4	7.9	8.1	6.8	6.4	5.7	5.6	5.9	4.9	5.6	73.3
101	Paraguay	6.5	1.6	6.2	6.0	7.4	6.7	8.1	6.5	7.9	4.3	7.5	4.2	72.9
102	Mexico	6.9	4.0	6.1	7.0	8.4	6.2	6.1	5.7	5.1	6.1	4.8	6.2	72.6
103	Kazakhstan	5.7	3.0	5.2	4.0	6.2	6.6	7.5	6.1	7.0	6.7	7.7	6.6	72.3

104	Benin	6.5	5.2	4.0	6.9	7.4	7.1	6.4	8.1	4.8	5.2	3.8	6.6	72.0
105	Grenada	5.9	3.6	5.0	7.9	7.1	6.5	6.5	4.1	5.1	5.9	5.7	8.3	71.6
106	Ukraine	6.5	3.6	7.0	7.5	7.0	5.0	7.5	4.5	5.9	3.0	7.9	6.0	71.4
107	Seychelles	6.9	5.0	5.5	4.7	6.9	4.0	7.9	4.1	6.7	6.2	6.7	6.7	71.3
107	Namibia	6.5	5.1	5.4	7.9	8.2	5.9	4.4	7.5	5.7	5.5	3.2	6.0	71.3
109	Brunei Darussalam	6.3	5.6	7.4	4.2	7.9	3.2	7.7	3.3	6.6	6.9	7.4	4.7	71.2
110	India	8.3	3.2	7.0	7.1	8.9	4.6	4.8	6.7	5.4	5.0	5.6	4.2	70.8
111	Albania	6.5	2.7	5.4	7.5	6.1	6.8	7.4	6.2	5.4	5.5	5.4	5.6	70.5
112	Armenia	5.8	7.6	5.0	6.9	6.0	5.0	6.5	6.2	5.5	4.5	5.8	5.5	70.3
113	Cyprus	5.1	4.2	8.3	5.7	7.5	4.8	5.5	3.8	3.5	4.2	8.4	9.2	70.2
114	Belize	6.6	5.2	5.2	6.9	7.6	6.0	6.5	5.7	3.8	5.7	5.0	5.6	69.8
115	Libya	6.2	2.6	5.6	4.0	7.3	5.3	7.4	4.5	8.1	5.3	8.0	5.0	69.3
116	Trinidad and Tobago	5.9	3.8	5.2	6.4	8.1	3.8	6.4	5.8	5.4	5.7	5.7	5.4	67.6
117	Senegal	7.0	4.5	5.2	5.1	6.9	5.7	5.7	6.7	5.6	5.2	3.8	5.5	66.9
117	Brazil	6.6	3.4	6.1	5.0	8.8	3.2	6.2	6.3	5.3	6.9	4.5	4.6	66.9
119	Botswana	9.2	5.8	3.4	6.0	7.0	5.6	5.4	6.5	4.8	3.9	2.8	6.0	66.4
120	Malaysia	6.3	4.1	5.5	3.6	6.6	4.6	5.9	5.4	6.5	6.3	5.3	5.8	65.9
121	Antigua and Barbuda	5.2	3.6	5.2	7.9	7.1	4.8	6.3	4.9	5.5	5.2	4.6	5.4	65.7
122	Tunisia	5.6	3.4	5.1	5.1	7.4	4.3	6.4	5.9	7.3	5.9	6.2	3.0	65.6
123	Jamaica	6.1	2.4	4.3	6.7	6.7	5.4	7.0	5.8	5.4	5.6	3.7	6.0	65.1
124	Kuwait	5.9	4.8	4.5	4.1	6.1	3.1	6.9	3.3	6.5	5.3	7.6	4.0	62.1













125	Ghana	6.0	4.5	5.1	8.0	6.8	4.0	5.5	6.9	4.5	2.4	3.5	4.7	61.9
126	Romania	5.5	3.8	5.2	5.2	6.1	5.7	6.1	5.2	4.8	3.4	4.5	5.4	60.9
127	Croatia	5.3	6.5	6.0	5.0	5.7	5.7	4.2	4.1	4.5	3.9	3.9	5.7	60.5
128	Bulgaria	5.4	4.1	4.2	5.9	6.2	4.3	5.7	5.0	4.7	5.4	3.9	5.5	60.3
129	Bahamas	6.0	3.6	5.3	5.4	7.2	3.2	6.4	4.1	3.0	5.4	5.3	5.2	60.1
130	Barbados	4.1	3.6	5.8	6.9	7.6	5.0	6.1	2.6	3.0	5.3	4.8	5.1	59.9
131	Panama	6.6	3.1	4.4	5.0	7.5	5.8	4.8	5.6	4.7	5.0	2.9	4.0	59.4
132	Mongolia	6.0	1.0	4.1	2.1	5.4	5.2	6.0	5.3	6.7	4.8	4.9	6.9	58.4
133	South Africa	8.2	6.0	4.7	4.0	8.5	2.8	4.3	5.7	4.1	3.2	3.9	2.0	57.4
134	Bahrain	5.3	3.6	6.0	3.7	5.0	3.5	6.8	3.7	4.7	3.4	6.0	5.3	57.0
135	Latvia	5.2	5.7	4.6	5.0	7.0	5.8	4.7	4.0	3.8	2.2	4.4	4.3	56.7
136	Montenegro	5.4	4.1	5.8	2.5	4.3	4.0	4.5	3.6	5.6	4.8	6.0	5.0	55.6
137	Qatar	5.0	3.6	5.6	3.6	4.8	4.9	7.0	2.6	4.7	2.5	4.7	4.6	53.6
138	United Arab Emirates	5.6	3.6	4.0	3.7	5.2	2.6	7.0	4.1	6.1	2.1	3.6	4.0	51.6
139	Hungary	3.7	3.6	3.0	5.0	6.3	4.1	6.0	3.8	4.0	2.1	5.5	4.1	51.2
140	Costa Rica	5.6	4.4	4.0	5.0	6.6	4.8	3.9	2.9	3.5	2.0	3.3	4.5	50.5
140	Estonia	4.8	4.8	4.5	4.0	4.9	3.7	5.0	3.8	3.7	2.1	5.9	3.3	50.5
142	Slovakia	4.3	1.8	4.4	5.5	6.5	4.5	4.2	4.1	3.9	2.0	4.2	3.9	49.3
143	Lithuania	5.4	3.4	3.5	5.4	6.2	4.5	4.2	3.7	3.7	2.0	3.0	4.0	49.0
144	Malta	3.8	6.1	3.9	4.8	4.5	3.5	4.5	3.3	3.5	4.5	1.6	4.5	48.5
145	Poland	4.9	3.0	3.2	6.5	4.8	4.3	4.2	4.2	3.5	2.0	3.0	4.0	47.6

146	Oman	3.1	1.1	3.0	1.1	2.0	3.7	6.3	4.2	6.6	5.3	7.1	2.0	45.5
147	Greece	4.7	2.0	3.5	5.4	5.0	3.5	4.0	3.1	3.9	3.1	1.6	3.7	43.5
148	Mauritius	3.6	1.1	3.5	2.1	5.9	3.8	5.1	4.4	3.9	3.5	3.0	2.8	42.7
149	Czech Republic	4.0	3.3	3.2	5.0	3.9	2.8	3.7	3.8	3.5	2.0	3.5	3.4	42.1
150	Argentina	3.8	1.5	4.0	4.0	5.2	4.6	3.4	3.8	3.7	1.9	2.7	2.8	41.4
151	Uruguay	5.1	1.1	2.0	5.9	5.1	3.5	2.9	4.0	2.5	3.0	2.3	3.5	40.9
152	South Korea	4.0	3.9	3.5	5.5	2.4	1.4	3.9	2.0	2.7	1.0	2.9	6.5	39.7
153	Spain	3.7	1.8	5.7	1.6	5.0	3.4	1.4	1.9	2.8	4.3	5.6	2.0	39.2
154	Germany	3.9	4.8	4.9	3.0	5.5	3.0	2.3	1.7	2.9	2.5	1.8	2.1	38.4
155	Slovenia	4.0	1.7	3.4	3.5	5.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.0	1.1	2.0	37.5
156	Italy	3.6	3.5	3.5	3.0	4.5	3.8	3.7	2.0	1.8	2.5	3.2	2.0	37.1
157	United Kingdom	3.4	4.0	4.2	2.0	4.7	1.4	2.2	1.8	2.6	3.0	2.7	2.1	34.1
157	France	4.1	3.6	5.8	2.0	4.8	2.9	1.5	1.4	3.2	1.0	1.8	2.0	34.1
159	Chile	3.8	1.1	3.5	2.1	4.0	3.8	1.6	3.7	3.7	2.0	1.5	3.0	33.8
160	United States	3.5	5.5	3.2	1.0	5.8	1.8	2.8	1.4	4.6	1.3	1.7	1.0	33.6
161	Singapore	2.9	1.1	3.0	3.0	2.5	3.4	3.6	1.5	4.0	1.0	4.0	3.0	33.0
162	Portugal	4.8	1.1	2.5	2.1	3.9	3.7	1.5	3.7	3.3	1.0	1.3	3.5	32.4
163	Netherlands	3.2	4.0	4.8	2.5	4.0	2.0	1.3	1.4	1.4	1.0	1.0	2.0	28.6
164	Japan	4.1	1.1	3.8	2.0	2.5	2.6	1.8	1.2	3.5	1.0	1.3	3.6	28.5
165	Luxembourg	2.1	1.8	3.7	1.2	2.5	2.0	3.3	2.6	1.6	2.0	3.0	2.3	28.1
166	Austria	2.8	2.2	3.5	1.1	5.0	1.9	1.3	1.4	1.5	1.0	2.0	2.3	26.0

167	Belgium	3.2	1.6	4.0	1.1	4.0	2.1	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	2.0	25.5
168	Canada	3.3	2.4	2.0	2.1	5.0	1.5	1.5	1.2	2.0	1.0	1.6	1.5	25.1
169	Australia	2.9	1.6	3.0	1.1	4.4	1.8	1.0	1.4	2.5	0.9	1.5	1.1	23.2
170	Denmark	3.2	2.6	2.5	2.0	1.9	2.1	1.0	1.4	1.5	1.0	1.0	2.0	22.2
171	Iceland	1.0	0.9	1.0	3.2	2.5	3.5	1.3	1.3	2.1	1.0	0.8	2.5	21.1
172	New Zealand	1.1	1.2	2.0	2.1	4.0	3.0	1.1	1.4	1.5	1.0	1.0	1.1	20.5
173	Switzerland	3.3	1.7	2.1	2.0	2.6	1.5	1.0	1.4	1.7	1.0	1.0	0.9	20.2
174	Ireland	1.6	1.5	1.0	2.1	2.9	2.1	1.5	1.8	1.5	1.0	1.0	1.5	19.5
175	Sweden	3.2	2.8	1.0	2.0	2.0	1.3	1.0	1.2	1.4	0.9	1.0	1.5	19.3
176	Finland	2.5	1.6	1.0	2.1	1.9	2.2	0.9	1.2	1.5	0.9	0.7	2.0	18.5
177	Norway	2.0	1.6	1.0	1.1	2.0	2.1	1.0	1.3	1.5	1.0	1.0	1.5	17.1

Copyright (C) 2007 The Fund for Peace

2008

Rank	Country													Total
1	Somalia	9.8	9.8	9.5	8.3	7.5	9.4	10.0	10.0	9.9	10.0	10.0	10.0	114.2
2	Sudan	9.0	9.6	10.0	8.8	9.3	7.3	10.0	9.5	9.9	9.8	9.9	9.9	113.0
3	Zimbabwe	9.7	9.0	9.5	10.0	9.6	10.0	9.5	9.6	9.8	9.5	9.3	7.0	112.5
4	Chad	9.1	9.2	9.7	7.8	9.1	8.3	9.7	9.4	9.5	9.8	9.8	9.5	110.9
5	Iraq	9.0	9.0	9.8	9.3	8.5	7.8	9.4	8.5	9.6	9.9	9.8	10.0	110.6
6	Congo (D. R.)	9.6	9.2	8.8	7.9	9.0	8.3	8.3	9.1	8.9	9.6	8.6	9.4	106.7
7	Afghanistan	9.1	8.9	9.5	7.0	8.1	8.5	9.2	8.3	8.4	9.6	8.8	10.0	105.4
8	Cote d'Ivoire	8.4	8.3	9.5	8.4	8.0	8.5	8.9	7.8	9.0	9.2	8.9	9.7	104.6
9	Pakistan	8.0	8.6	9.5	8.1	8.8	6.2	9.5	7.1	9.5	9.6	9.8	9.1	103.8
10	Central African Rep.	9.0	8.8	8.9	5.5	8.8	8.4	9.2	8.6	8.7	9.4	9.4	9.0	103.7
11	Guinea	7.9	7.4	8.5	8.3	8.6	8.6	9.7	9.0	8.9	8.4	8.6	7.9	101.8
12	Bangladesh	9.8	7.1	9.7	8.4	9.0	7.1	9.1	7.8	8.0	8.3	9.6	6.4	100.3
12	Myanmar	8.5	8.5	9.5	6.0	9.0	7.6	9.5	8.3	9.9	9.3	8.7	5.5	100.3
14	Haiti	8.5	4.2	8.0	8.0	8.2	8.3	9.0	8.8	8.9	8.9	8.9	9.6	99.3
15	North Korea	8.2	6.0	7.2	5.0	8.8	9.6	9.8	9.6	9.7	8.3	7.6	7.9	97.7
16	Ethiopia	8.9	7.5	7.8	7.5	8.6	8.2	7.9	7.5	8.5	7.5	8.9	7.3	96.1
16	Uganda	8.7	9.3	8.3	6.0	8.5	7.6	8.3	7.9	7.9	8.1	7.8	7.7	96.1
18	Lebanon	7.2	9.0	9.4	7.1	7.4	6.3	8.0	6.7	7.0	9.3	9.4	8.9	95.7
18	Nigeria	8.2	5.1	9.4	8.2	9.2	5.9	8.9	8.7	7.5	9.2	9.3	6.1	95.7

20	Sri Lanka	7.0	9.0	9.8	6.9	8.2	6.0	9.2	6.6	8.0	9.3	9.5	6.1	95.6
21	Yemen	8.6	7.2	7.3	7.2	8.8	8.2	8.0	8.3	7.5	8.2	8.9	7.2	95.4
22	Niger	9.5	6.0	9.2	6.0	7.2	9.2	8.4	9.1	7.9	7.5	6.7	7.8	94.5
23	Nepal	8.1	5.5	9.0	6.1	9.2	8.2	8.3	7.0	8.8	8.5	8.3	7.2	94.2
24	Burundi	9.1	8.2	6.7	6.5	8.8	8.0	7.1	9.0	7.5	6.8	7.8	8.6	94.1
25	Timor-Leste	8.1	8.6	7.1	5.3	6.5	8.2	9.0	8.0	6.9	8.8	8.5	8.8	93.8
26	Kenya	8.7	8.5	7.6	8.0	8.1	6.9	8.2	7.4	7.2	7.1	8.4	7.3	93.4
26	Congo (Republic)	8.7	7.7	6.8	6.1	8.1	8.0	8.8	8.8	7.9	7.9	7.2	7.4	93.4
26	Uzbekistan	7.7	5.4	7.1	7.1	8.6	7.7	9.3	6.8	9.2	9.0	9.2	6.3	93.4
29	Malawi	9.0	6.2	6.0	8.2	8.8	9.1	8.0	9.0	7.8	5.4	7.6	7.8	92.9
30	Solomon Islands	8.7	4.8	8.0	5.1	8.0	8.0	8.7	8.5	7.1	7.7	8.8	9.0	92.4
31	Sierra Leone	8.6	7.4	6.9	8.4	8.2	8.7	7.7	8.2	7.0	6.4	7.5	7.3	92.3
32	Guinea Bissau	8.0	6.5	5.4	7.0	8.6	8.2	7.9	8.5	8.0	8.4	7.1	7.7	91.3
33	Cameroon	7.4	7.1	7.1	7.9	8.7	6.1	8.7	7.6	7.4	7.8	8.2	7.2	91.2
34	Liberia	8.1	8.4	6.0	6.5	8.3	8.3	7.0	8.5	6.7	6.7	7.9	8.6	91.0
35	Syria	6.5	9.0	8.0	6.8	8.1	6.8	8.8	5.7	8.8	7.6	7.7	6.3	90.1
36	Burkina Faso	8.6	5.6	6.4	6.6	8.9	8.1	7.6	8.9	6.6	7.6	7.7	7.3	89.9
37	Colombia	6.8	9.2	7.4	8.4	8.4	3.8	7.9	6.0	7.2	8.0	8.3	7.6	89.0
38	Tajikistan	7.9	6.1	6.5	6.4	7.3	7.0	9.2	7.1	8.8	7.8	8.6	6.2	88.9
39	Kyrgyzstan	7.5	5.8	6.8	7.4	8.0	7.5	8.4	6.5	7.9	8.1	7.5	7.4	88.8
40	Egypt	7.5	6.3	7.7	6.2	7.8	6.9	9.0	6.3	8.5	6.1	8.4	8.0	88.7

40	Laos	8.0	5.7	6.8	6.6	5.7	7.1	8.2	8.0	8.9	8.2	8.6	6.9	88.7
42	Equatorial Guinea	7.8	2.0	7.0	7.4	9.2	3.9	9.4	8.3	9.5	9.0	8.5	6.0	88.0
42	Rwanda	9.1	7.0	8.5	7.5	7.4	7.3	8.2	6.8	7.3	4.6	7.8	6.5	88.0
44	Eritrea	8.6	7.1	5.6	6.0	5.9	8.5	8.4	7.9	7.4	7.5	7.2	7.3	87.4
45	Togo	7.7	5.6	6.0	6.5	7.5	8.2	7.2	8.0	7.9	7.8	7.5	6.9	86.8
46	Turkmenistan	7.0	4.5	6.2	5.6	7.3	7.1	8.7	7.7	9.6	8.3	7.9	6.3	86.2
47	Mauritania	8.4	6.2	8.0	5.0	7.0	7.8	6.6	8.1	6.9	7.2	7.6	7.3	86.1
48	Cambodia	7.8	5.7	7.5	8.0	7.2	6.6	8.3	7.6	7.1	6.2	7.2	6.6	85.8
49	Iran	6.5	8.7	7.3	5.0	7.4	4.3	8.0	5.8	8.7	8.5	9.0	6.5	85.7
50	Moldova	7.0	4.7	7.3	8.4	7.2	7.2	8.3	7.0	7.1	6.5	7.7	7.3	85.7
50	Bhutan	6.5	7.5	7.0	6.7	8.7	7.8	7.7	6.7	8.3	4.6	7.7	6.2	85.4
52	Papua New Guinea	7.5	3.5	8.0	7.9	9.0	7.3	7.8	7.8	6.1	7.0	6.7	6.0	84.6
53	Belarus	7.7	4.3	6.7	5.0	7.2	6.7	9.3	6.6	8.8	6.5	8.5	7.1	84.4
54	Bosnia	6.1	8.0	8.5	6.0	7.2	5.5	7.9	5.4	5.3	7.3	8.6	8.5	84.3
55	Bolivia	7.7	4.2	7.3	7.0	8.5	6.4	7.4	7.6	7.0	6.2	8.5	6.4	84.2
56	Angola	8.6	6.9	5.9	5.0	9.0	4.0	8.4	7.6	7.5	6.2	7.5	7.2	83.8
56	Georgia	6.3	6.8	8.1	5.7	6.9	5.4	8.4	5.9	5.9	7.7	8.3	8.4	83.8
58	Israel/West Bank	7.2	8.1	9.0	3.8	7.5	3.9	7.5	7.2	7.9	5.5	8.0	8.0	83.6
59	Philippines	6.9	5.7	7.0	7.2	7.6	5.9	8.3	5.9	6.8	7.4	7.8	6.9	83.4
60	Indonesia	7.0	7.3	5.9	7.5	8.0	6.3	6.8	6.7	6.8	7.1	7.0	6.9	83.3
61	Lesotho	9.1	4.6	5.6	6.0	5.6	8.2	7.6	8.5	6.8	6.3	6.9	6.5	81.7

61	Nicaragua	7.5	5.7	6.5	6.8	8.4	7.5	6.3	7.5	5.4	6.5	7.1	6.5	81.7
63	Zambia	8.8	6.4	5.2	6.7	7.4	8.1	7.8	7.9	5.8	5.5	5.5	6.5	81.6
64	Azerbaijan	6.0	7.8	7.3	5.3	7.0	5.9	8.1	5.5	6.9	7.2	7.5	6.5	81.0
65	Cape Verde	7.9	4.8	4.8	8.2	6.2	7.8	7.3	7.2	6.4	5.8	6.4	7.9	80.7
66	Guatemala	6.8	6.0	6.9	6.7	8.0	6.7	7.2	6.6	7.1	7.3	6.0	5.3	80.6
67	Maldives	7.7	6.5	4.9	7.0	4.9	7.1	7.6	7.1	7.7	6.3	7.6	6.0	80.4
68	China	8.8	5.1	7.8	6.3	9.0	4.0	8.3	6.6	8.9	5.2	7.0	3.3	80.3
68	Ecuador	6.2	6.0	6.5	7.3	7.8	5.9	7.1	6.8	6.4	6.7	7.9	5.7	80.3
70	Serbia	6.0	7.3	7.9	5.5	7.5	6.5	7.4	5.0	6.1	6.3	8.0	6.6	80.1
71	Djibouti	7.7	6.4	5.5	5.2	6.2	7.1	7.4	7.3	6.2	6.5	6.9	7.6	80.0
72	Swaziland	8.8	4.0	4.0	5.5	6.1	7.8	8.5	7.5	7.5	6.5	6.9	6.9	80.0
72	Russia	7.0	5.4	7.5	6.5	7.9	3.7	7.9	5.9	8.7	7.0	8.0	4.2	79.7
74	Comoros	6.7	3.6	5.3	6.0	6.1	7.3	8.1	8.5	6.9	7.0	6.7	7.4	79.6
75	Tanzania	7.4	7.0	6.4	6.0	6.9	7.2	6.3	7.6	5.8	5.7	5.8	7.0	79.1
76	Cuba	6.5	4.7	5.5	6.8	7.2	6.1	7.6	4.0	7.8	7.7	7.0	7.7	78.6
77	Dominican Republic	6.5	5.4	6.1	8.3	8.1	5.6	5.8	6.9	7.0	6.1	7.0	5.6	78.4
78	Sao Tome	7.9	4.5	5.1	7.4	6.1	8.3	7.4	7.9	5.3	5.8	6.2	6.4	78.3
79	Venezuela	6.5	5.0	6.8	6.9	8.0	4.6	7.1	6.3	7.4	6.6	7.5	5.2	77.9
80	Algeria	6.1	6.8	7.2	5.9	7.3	4.0	7.5	6.8	7.6	6.7	6.2	5.7	77.8
81	Peru	6.9	4.2	6.9	7.5	8.1	5.7	6.4	6.4	5.5	7.4	7.0	5.5	77.5
82	Jordan	6.7	7.8	6.5	4.7	7.5	6.6	6.0	5.6	6.7	6.0	6.5	6.7	77.3

83	Gambia	6.9	5.8	4.2	6.0	7.0	7.5	7.9	6.6	6.8	5.8	5.9	6.5	76.9
84	Saudi Arabia	6.3	6.2	7.7	3.4	7.0	2.3	8.8	4.3	9.1	7.3	7.7	6.8	76.9
85	Mozambique	7.8	2.2	4.7	7.8	7.2	7.4	7.3	8.0	7.0	5.8	5.6	6.0	76.8
86	Madagascar	8.5	2.5	5.1	5.0	7.2	7.4	6.0	8.7	6.0	5.8	7.0	7.5	76.7
87	Fiji	5.9	4.0	7.5	6.0	7.5	5.9	8.7	4.4	5.9	7.0	8.2	5.6	76.6
88	Morocco	6.6	7.1	6.8	6.2	7.6	6.6	7.3	6.0	6.6	5.1	5.7	4.2	75.8
89	Mali	8.5	4.4	6.1	7.4	6.6	8.5	4.7	8.6	4.6	5.9	3.7	6.6	75.6
89	Thailand	6.8	6.0	7.7	4.4	7.5	3.6	7.7	5.5	6.2	7.0	7.7	5.5	75.6
91	El Salvador	7.4	5.6	6.0	7.0	7.6	6.0	7.0	6.5	7.0	6.3	3.9	5.2	75.5
92	Turkey	6.7	6.2	7.6	5.0	8.2	4.6	6.0	5.2	5.5	6.7	7.5	6.2	75.4
93	Gabon	6.9	6.2	3.0	6.0	8.1	5.2	7.5	7.0	6.5	5.6	7.2	5.8	75.0
94	Honduras	7.2	2.0	5.3	6.5	8.7	7.2	7.4	6.6	6.1	6.2	6.3	5.4	74.9
95	Macedonia	5.4	4.6	7.4	7.0	7.4	6.0	7.6	5.1	5.3	5.8	6.6	6.4	74.6
95	Vietnam	6.6	5.0	5.3	6.0	6.2	6.1	7.2	6.0	7.0	6.4	6.9	5.9	74.6
97	Micronesia	7.7	2.9	5.0	8.6	7.3	6.6	6.9	7.2	2.5	5.7	5.4	8.2	74.0
98	India	8.0	3.2	7.0	6.9	8.9	4.6	4.8	6.7	6.0	6.6	6.0	4.2	72.9
98	Namibia	7.2	5.0	5.4	7.6	8.9	6.0	4.7	7.1	6.0	5.5	3.2	6.3	72.9
100	Benin	6.9	5.2	4.0	6.7	7.4	7.0	6.7	8.1	5.2	5.2	3.8	6.6	72.8
101	Kazakhstan	6.2	3.6	5.2	4.0	6.5	6.0	7.7	5.5	6.8	6.5	7.8	6.6	72.4
101	Samoa	6.8	3.2	5.0	8.2	6.9	6.1	6.7	4.8	4.6	6.3	5.4	8.4	72.4
101	Suriname	6.5	3.9	6.1	6.7	8.3	6.2	6.4	4.9	6.0	6.0	5.4	6.0	72.4

104	Paraguay	6.6	1.3	6.2	6.0	7.7	6.2	8.3	6.0	7.1	5.0	7.7	4.2	72.3
105	Guyana	6.3	3.6	5.7	7.9	7.8	6.4	6.4	5.7	5.4	6.7	5.1	5.2	72.2
105	Mexico	7.0	4.0	5.8	7.0	8.4	6.0	6.1	5.7	5.1	5.8	4.8	6.5	72.2
107	Senegal	7.0	5.5	6.0	5.1	7.1	6.0	5.7	7.0	6.0	6.0	4.0	5.5	70.9
108	Ukraine	6.5	3.2	7.2	7.3	6.7	5.0	7.3	4.5	5.9	3.0	7.9	6.3	70.8
109	Armenia	5.8	7.5	5.0	6.7	6.0	5.6	6.5	6.0	5.5	4.5	6.0	5.6	70.7
110	Belize	6.8	5.5	5.2	6.9	7.6	5.8	6.5	5.7	3.8	5.7	5.0	5.7	70.2
111	Libya	6.2	4.0	5.6	4.0	7.3	5.3	7.4	4.5	8.1	5.6	7.0	5.0	70.0
112	Albania	6.2	2.7	5.4	7.5	6.1	6.3	7.2	5.9	5.4	5.5	5.7	5.8	69.7
112	Cyprus	4.9	4.2	8.3	5.2	7.5	4.2	5.5	3.8	3.5	5.0	8.4	9.2	69.7
114	Seychelles	6.7	4.8	5.4	4.7	6.8	3.9	7.6	4.1	6.3	6.0	6.5	6.7	69.5
115	Grenada	5.7	3.0	4.9	7.9	7.1	5.8	6.5	4.1	4.9	5.4	5.7	8.0	69.0
116	Brunei Darussalam	5.9	4.9	6.7	4.2	7.4	3.2	7.7	3.3	6.8	6.3	7.4	4.7	68.5
117	Brazil	6.3	3.3	6.1	5.0	8.8	3.7	6.2	6.0	5.6	7.1	4.9	4.6	67.6
118	Malaysia	6.3	5.0	5.9	3.6	6.9	4.2	5.9	5.1	6.5	6.3	5.7	5.8	67.2
119	Trinidad	5.5	3.6	5.2	6.7	7.7	4.0	6.4	5.5	5.4	5.7	5.9	5.4	67.0
120	Botswana	9.2	6.0	3.4	6.0	6.9	5.3	5.4	6.2	4.8	3.9	2.8	6.0	65.9
121	Jamaica	6.1	2.4	4.3	6.5	6.5	6.0	6.9	6.0	5.4	5.6	4.0	6.0	65.7
122	Tunisia	5.6	3.4	5.1	5.1	7.2	4.3	6.6	5.9	7.3	5.9	6.2	3.0	65.6
123	Ghana	6.8	5.0	5.1	8.0	6.8	5.0	5.5	6.9	4.5	2.4	3.9	4.7	64.6
124	Antigua and Barbuda	4.9	3.3	4.9	7.9	6.9	4.6	6.0	4.9	5.5	5.2	4.6	5.4	64.1












125	South Africa	8.4	7.0	4.9	4.0	8.5	4.2	5.0	5.7	4.2	3.9	4.4	2.5	62.7
126	Kuwait	5.5	4.4	4.7	4.1	6.1	2.9	6.7	3.3	7.0	5.1	6.9	5.3	62.0
127	Bahamas	6.2	3.6	5.3	5.4	7.2	3.7	5.9	4.3	3.0	5.4	5.3	5.2	60.5
128	Romania	5.3	3.5	5.2	5.2	6.1	5.2	5.9	5.2	4.8	3.4	4.7	5.4	59.9
129	Croatia	5.1	6.3	5.7	5.0	5.5	5.3	4.4	4.1	4.5	3.9	3.9	5.7	59.4
130	Panama	6.4	3.1	4.4	5.0	7.5	5.6	4.6	5.4	4.7	5.0	2.9	4.0	58.6
131	Barbados	4.1	3.3	5.5	6.9	7.0	5.0	5.9	2.6	3.0	5.3	4.8	5.1	58.5
131	Bulgaria	5.1	4.1	4.0	5.7	6.0	4.3	5.4	4.6	4.7	5.2	3.9	5.5	58.5
133	Mongolia	5.8	1.0	4.1	2.1	5.4	5.5	6.0	5.3	6.2	4.8	4.7	6.9	57.8
134	Bahrain	5.3	3.1	6.0	3.7	5.0	3.3	7.0	3.4	4.7	3.7	6.0	5.6	56.8
135	Montenegro	5.4	4.1	6.1	2.5	4.3	4.0	4.3	3.6	5.6	4.6	6.0	5.3	55.8
136	Latvia	4.9	4.9	4.6	5.0	6.0	5.0	4.7	4.2	3.8	3.0	4.4	4.0	54.5
137	Qatar	4.7	3.3	5.3	3.3	5.0	4.6	6.8	2.6	5.0	2.3	4.9	4.9	52.7
138	United Arab Emirates	5.0	3.6	4.3	3.4	5.5	2.6	7.0	3.9	5.9	1.9	3.8	4.3	51.2
139	Estonia	4.8	4.8	5.1	4.0	4.9	3.7	4.8	3.8	3.5	2.6	5.7	3.3	51.0
140	Costa Rica	5.6	4.2	4.0	4.8	6.6	4.6	4.1	3.5	3.5	2.2	3.3	4.5	50.9
141	Hungary	3.7	3.4	3.4	5.0	6.1	4.3	5.7	3.8	4.0	1.9	5.3	4.3	50.9
142	Slovakia	4.3	1.8	4.2	5.3	6.2	4.2	4.0	4.1	4.3	2.0	4.2	4.2	48.8
143	Lithuania	4.9	3.1	3.9	5.4	6.2	4.5	4.4	3.5	3.5	2.0	3.0	4.3	48.7
144	Malta	3.8	6.1	3.9	4.6	4.5	3.5	4.3	3.4	3.5	4.3	1.6	4.8	48.3
145	Poland	4.8	3.0	3.2	6.4	4.8	4.3	4.2	3.8	3.8	2.0	3.3	4.0	47.6

146	Oman	4.6	1.3	3.0	1.1	2.0	3.9	6.3	4.4	6.6	5.3	6.9	2.0	47.4
147	Greece	4.9	2.6	4.3	5.0	5.0	3.7	4.0	3.6	3.9	3.1	1.6	3.7	45.4
148	Mauritius	3.6	1.1	3.5	2.1	5.9	3.8	5.1	4.1	3.9	3.5	3.0	2.8	42.4
149	Czech Republic	3.8	3.1	3.2	4.8	3.9	3.4	3.7	3.8	3.5	2.0	3.5	3.4	42.1
150	Spain	3.9	2.1	6.2	1.6	5.0	3.4	1.4	2.4	2.8	5.2	5.6	2.0	41.6
151	Argentina	3.8	1.5	4.0	4.0	5.2	4.5	3.4	3.9	3.7	1.9	2.7	2.8	41.4
151	Uruguay	5.1	1.1	2.0	5.9	5.1	3.7	2.9	4.0	2.5	3.0	2.3	3.8	41.4
153	South Korea	4.0	3.9	4.0	5.3	2.4	1.6	3.9	2.0	2.7	1.0	3.3	6.5	40.6
154	Italy	3.7	3.5	4.0	3.0	4.5	3.8	3.8	2.5	2.1	3.7	3.3	2.0	39.9
155	Germany	3.9	4.3	4.9	2.8	5.3	2.8	2.3	1.9	2.7	2.5	1.8	2.1	37.3
156	Slovenia	4.0	1.7	3.4	3.5	5.2	3.0	3.2	3.5	3.5	3.0	1.1	2.0	37.1
157	Chile	3.8	2.0	3.9	2.1	4.6	3.7	2.0	3.8	3.9	2.0	1.5	3.0	36.3
158	France	4.1	3.1	6.0	2.0	5.5	3.0	1.7	1.4	3.2	1.0	1.8	2.0	34.8
159	Singapore	2.9	1.1	3.0	2.7	2.9	3.1	4.0	1.5	4.3	1.0	4.0	2.8	33.3
160	United Kingdom	3.0	3.0	4.5	2.0	4.5	1.7	2.0	1.8	2.6	3.0	2.7	2.1	32.9
161	United States	3.5	4.0	3.2	1.0	5.5	2.3	3.0	1.8	4.2	1.3	2.0	1.0	32.8
162	Portugal	4.3	1.0	2.5	2.1	3.6	3.8	1.5	4.0	3.5	1.0	1.3	3.2	31.8
163	Japan	4.3	1.1	3.8	2.0	2.5	2.3	1.8	1.2	3.4	2.0	1.7	3.6	29.7
164	Belgium	3.2	1.6	4.7	1.1	4.6	2.5	1.8	1.4	1.5	1.6	3.0	2.0	29.0
165	Luxembourg	2.1	1.8	3.7	1.2	2.5	1.8	3.3	2.6	1.6	2.0	3.0	2.3	27.9
166	Netherlands	3.4	3.0	4.9	2.2	3.7	2.0	1.3	1.4	1.4	1.0	1.0	2.0	27.3

167	Canada	3.3	2.4	3.0	2.1	5.0	1.5	1.5	1.2	2.0	1.0	1.8	1.5	26.3
168	Austria	2.8	2.2	3.5	1.1	4.9	1.9	1.3	1.4	1.5	1.0	2.0	2.3	25.9
169	Australia	2.9	2.0	3.5	1.1	4.4	2.3	1.0	1.4	2.5	0.9	1.5	1.1	24.6
170	Denmark	3.2	1.9	2.5	2.0	1.9	2.1	1.0	1.4	1.5	1.0	1.0	2.0	21.5
171	New Zealand	1.1	1.2	2.9	2.1	4.0	3.0	1.1	1.4	1.5	1.0	1.0	1.1	21.4
172	Iceland	1.0	0.9	1.0	3.2	2.8	3.0	1.3	1.3	2.1	1.0	0.8	2.5	20.9
173	Switzerland	2.9	1.7	2.6	2.0	2.6	1.5	1.0	1.4	1.7	1.0	1.0	0.9	20.3
174	Ireland	1.9	1.5	1.0	2.0	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5	1.0	1.0	1.5	19.9
175	Sweden	3.2	3.0	1.3	2.0	2.1	1.2	1.0	1.2	1.4	0.9	1.0	1.5	19.8
176	Finland	2.6	1.6	1.0	2.1	1.9	2.0	0.9	1.2	1.5	0.9	0.7	2.0	18.4
177	Norway	2.0	1.6	1.0	1.1	2.0	1.8	1.0	1.3	1.5	1.0	1.0	1.5	16.8

Copyright (C) 2008 The Fund for Peace

2009

Rank	Country												Total	
1	Somalia	9.8	9.9	9.7	8.5	7.7	9.5	10.0	9.9	9.9	10.0	10.0	9.8	114.7
2	Zimbabwe	9.8	9.1	9.1	10.0	9.7	10.0	9.8	9.8	9.9	9.7	9.5	7.6	114.0
3	Sudan	9.0	9.8	9.9	9.0	9.6	7.0	9.8	9.5	9.8	9.7	9.5	9.8	112.4
4	Chad	9.3	9.4	9.8	7.8	9.3	8.3	9.8	9.6	9.5	9.9	9.8	9.7	112.2
5	Congo (D. R.)	9.7	9.6	8.9	8.1	9.3	8.3	8.6	9.2	9.0	9.7	8.7	9.6	108.7
6	Iraq	8.7	8.9	9.7	9.1	8.6	7.6	9.0	8.4	9.3	9.7	9.6	10.0	108.6
7	Afghanistan	9.3	8.9	9.6	7.2	8.4	8.3	9.8	8.9	8.8	9.9	9.1	10.0	108.2
8	Central African Rep.	8.9	9.0	8.6	5.7	9.1	8.4	9.3	9.3	8.9	9.6	9.5	9.1	105.4
9	Guinea	8.5	7.1	8.2	8.6	8.9	8.7	9.8	9.2	9.0	9.4	9.2	8.0	104.6
10	Pakistan	8.3	8.6	9.6	8.3	8.8	6.4	9.1	7.5	8.9	9.5	9.6	9.5	104.1
11	Cote d'Ivoire	8.6	7.8	9.0	8.4	8.1	8.3	9.1	8.0	8.5	8.5	8.5	9.7	102.5
12	Haiti	9.3	5.8	7.3	8.6	8.2	8.9	9.2	9.5	8.5	8.4	8.3	9.8	101.8
13	Myanmar	9.0	8.8	8.9	6.0	9.5	8.2	9.5	9.0	9.0	8.4	8.7	6.5	101.5
14	Kenya	9.0	9.0	8.6	8.3	8.8	7.5	9.0	8.0	8.2	8.0	8.8	8.2	101.4
15	Nigeria	8.5	5.3	9.7	8.3	9.5	6.6	9.2	9.0	8.6	9.4	9.6	6.1	99.8
16	Ethiopia	9.4	8.0	8.2	7.7	8.8	8.3	7.9	8.2	8.5	7.5	8.8	7.6	98.9
17	North Korea	8.5	6.0	7.2	5.0	8.8	9.6	9.8	9.6	9.5	8.3	7.8	8.2	98.3
18	Yemen	8.8	7.9	7.7	7.4	8.9	8.2	8.3	8.5	7.7	8.4	9.0	7.3	98.1
19	Bangladesh	8.9	6.9	9.4	8.4	9.0	8.0	8.5	8.0	7.6	8.0	8.9	6.5	98.1

20	Timor-Leste	8.4	9.0	7.3	5.7	6.8	8.4	9.4	8.4	7.0	9.0	8.8	9.0	97.2
21	Uganda	8.7	9.3	8.0	6.5	8.7	7.6	8.0	8.0	7.7	8.2	8.2	8.0	96.9
22	Sri Lanka	7.5	9.3	9.8	6.9	8.5	6.1	9.0	6.6	8.5	9.2	9.2	6.1	96.7
23	Niger	9.5	6.4	8.5	6.3	7.6	9.2	8.7	9.5	8.2	7.4	7.1	8.1	96.5
24	Burundi	9.2	8.1	7.5	6.5	8.4	8.0	7.5	9.0	7.6	7.3	7.7	8.9	95.7
25	Nepal	8.3	6.8	8.7	6.0	9.3	8.5	8.0	7.4	8.7	8.1	8.4	7.2	95.4
26	Cameroon	8.0	7.5	7.2	8.0	8.9	6.9	9.2	8.0	8.0	7.8	8.7	7.1	95.3
27	Guinea-Bissau	8.6	6.5	5.8	7.0	8.5	8.5	8.6	8.7	8.0	8.5	8.0	8.1	94.8
28	Malawi	9.3	6.3	5.9	8.3	8.5	9.1	8.3	8.8	7.5	5.6	7.8	8.4	93.8
29	Lebanon	7.0	9.0	9.2	7.2	7.4	6.3	7.8	6.2	6.9	9.1	9.1	8.3	93.5
30	Congo (Republic)	8.9	7.8	6.5	6.1	8.0	8.0	8.6	8.8	7.9	7.8	7.1	7.6	93.1
31	Uzbekistan	7.9	5.3	7.4	7.0	8.7	7.2	9.0	6.6	9.2	9.0	9.0	6.5	92.8
32	Sierra Leone	8.9	6.9	6.6	8.5	8.4	8.6	7.4	8.7	7.0	6.1	7.7	7.3	92.1
33	Georgia	6.4	8.3	8.5	6.0	7.5	6.0	9.0	6.3	7.5	7.9	8.9	9.5	91.8
34	Liberia	8.6	8.0	6.1	6.8	8.5	8.2	7.0	8.5	6.7	6.9	7.9	8.6	91.8
35	Burkina Faso	9.0	6.0	6.1	6.5	9.0	8.2	7.9	9.0	6.5	7.5	7.6	8.0	91.3
36	Eritrea	8.6	7.0	5.8	6.5	6.0	8.6	8.6	8.6	7.9	7.4	7.7	7.6	90.3
37	Tajikistan	8.2	6.4	6.9	6.5	7.3	7.5	8.9	7.6	8.6	7.5	8.4	6.5	90.3
38	Iran	6.5	8.5	7.6	6.8	7.4	5.5	8.3	6.0	8.9	8.6	9.1	6.8	90.0
39	Syria	6.1	9.2	8.2	6.8	8.0	6.8	8.8	5.7	8.6	7.8	7.8	6.0	89.8
40	Solomon Islands	8.0	5.0	7.5	5.0	8.0	8.3	8.3	8.4	7.0	7.2	8.0	8.9	89.6

41	Colombia	6.9	9.2	7.2	8.5	8.5	4.3	7.9	6.0	7.2	7.5	8.0	8.0	89.2
42	Kyrgyzstan	8.0	5.3	7.2	7.5	8.3	7.6	8.3	6.5	7.6	7.7	7.3	7.8	89.1
43	Egypt	7.6	6.9	8.0	6.2	7.6	7.0	8.6	6.4	8.4	6.2	8.1	8.0	89.0
44	Laos	8.2	5.9	7.0	6.6	6.0	7.5	8.2	8.0	8.5	7.6	8.3	7.2	89.0
45	Rwanda	9.3	6.9	8.7	7.2	7.3	7.5	7.9	7.3	7.3	4.6	8.0	7.0	89.0
46	Mauritania	8.7	6.2	8.2	5.0	7.0	7.8	7.0	8.5	7.1	7.9	8.0	7.3	88.7
47	Equatorial Guinea	8.3	2.0	6.8	7.4	9.0	4.4	9.4	8.6	9.2	8.6	8.6	6.0	88.3
48	Bhutan	6.5	7.5	7.9	6.8	8.7	7.5	7.4	7.2	8.4	5.5	7.7	6.2	87.3
49	Cambodia	7.9	5.2	7.0	8.0	7.2	7.5	8.5	7.9	7.4	6.5	7.5	6.7	87.3
50	Togo	7.9	6.0	5.8	6.9	7.5	8.2	7.5	8.3	7.6	7.4	7.3	6.8	87.2
51	Bolivia	7.8	4.9	7.5	6.9	8.7	7.0	7.6	7.7	6.8	6.4	8.2	6.8	86.3
52	Comoros	7.4	3.7	5.5	6.0	6.3	7.8	8.7	8.7	7.0	7.5	7.9	9.8	86.3
53	Philippines	7.2	6.3	7.5	7.2	7.6	6.0	8.5	6.1	7.0	7.7	7.9	6.8	85.8
54	Moldova	6.6	4.2	7.1	8.0	7.0	6.8	8.1	6.7	7.0	8.0	8.0	7.6	85.1
55	Angola	8.6	7.0	6.1	5.5	9.4	4.5	8.0	8.0	7.2	6.2	7.3	7.2	85.0
56	Azerbaijan	6.4	8.2	7.9	5.7	7.4	6.1	8.2	5.5	7.0	7.3	7.9	7.0	84.6
57	China	9.0	6.8	7.9	6.1	9.2	4.5	8.5	7.2	8.9	6.0	7.2	3.3	84.6
58	Israel/West Bank	7.2	8.0	9.3	4.0	7.5	4.1	7.5	7.0	8.0	6.0	8.0	8.0	84.6
59	Turkmenistan	7.0	4.8	6.5	5.6	7.6	6.9	8.5	7.2	8.9	7.6	7.7	6.0	84.3
60	Zambia	9.0	7.1	5.3	7.0	7.1	8.5	7.8	8.4	5.6	5.2	5.7	7.5	84.2
61	Papua New Guinea	7.5	4.0	7.3	7.6	8.9	6.8	7.7	8.1	6.5	6.7	7.1	5.9	84.1

62	Indonesia	7.3	6.7	6.3	7.2	8.1	6.9	6.7	6.7	6.7	7.3	7.3	6.9	84.1
63	Bosnia & Herz.	5.5	7.2	8.2	5.8	7.3	5.5	8.2	5.6	5.4	7.4	8.7	8.5	83.3
64	Nicaragua	7.4	5.2	6.3	6.9	8.1	7.7	7.1	7.8	5.8	6.5	7.2	6.6	82.6
65	Swaziland	9.2	4.0	4.0	6.0	6.0	8.0	8.8	7.8	7.5	6.8	6.9	7.4	82.4
66	Belarus	7.2	4.1	6.9	5.0	7.2	6.6	8.9	6.6	8.0	6.6	8.1	7.1	82.3
67	Lesotho	9.4	4.7	5.2	6.5	5.6	8.4	7.4	8.7	6.5	5.5	6.9	7.0	81.8
68	Madagascar	8.9	5.0	5.6	5.0	7.6	7.4	6.6	8.8	5.9	5.9	7.1	7.8	81.6
69	Ecuador	6.5	6.3	6.3	7.3	8.0	6.4	7.0	6.8	6.0	6.8	7.8	6.0	81.2
70	Tanzania	8.0	7.1	6.6	6.0	6.9	7.5	6.7	8.0	5.8	5.4	6.3	6.8	81.1
71	Russia	7.0	5.9	7.5	6.2	8.1	4.6	8.0	5.7	8.3	6.9	8.0	4.6	80.8
72	Mozambique	8.7	3.2	4.8	7.6	7.4	8.0	7.3	8.9	7.2	6.0	5.6	6.0	80.7
73	Algeria	6.7	6.7	7.7	6.2	7.3	4.6	7.7	6.7	7.6	7.0	6.7	5.7	80.6
74	Djibouti	8.0	6.4	5.7	5.2	6.3	6.6	7.4	7.5	6.2	6.2	6.9	8.2	80.6
75	Guatemala	7.0	5.8	6.7	6.7	8.2	6.6	7.1	6.6	7.0	7.1	6.3	5.5	80.6
76	Cuba	6.9	5.9	5.5	7.2	6.8	6.3	7.5	5.0	7.4	7.5	7.1	7.5	80.6
77	Venezuela	6.8	5.0	7.0	6.9	8.0	5.3	7.2	5.9	7.3	6.9	7.7	5.5	79.5
78	Serbia	5.8	7.3	7.9	5.5	7.4	5.9	7.3	5.2	5.8	6.3	7.9	6.9	79.2
79	Thailand	6.9	6.5	8.0	4.5	7.7	3.8	8.2	5.4	6.9	7.5	8.0	5.8	79.2
80	Gambia	7.2	5.7	4.4	6.4	7.0	7.4	7.8	7.1	6.9	6.0	6.2	6.9	79.0
81	Maldives	6.5	6.5	5.2	7.0	5.2	6.7	7.2	7.3	7.5	6.3	7.4	6.0	78.8
82	Fiji	6.1	4.3	7.3	6.5	7.7	6.3	8.6	5.0	6.1	6.7	8.2	6.0	78.8

83	Mali	8.7	4.6	6.5	7.4	6.9	8.3	5.3	8.4	5.2	6.5	4.0	6.9	78.7
84	Cape Verde	7.9	4.0	4.4	8.2	6.2	7.2	7.4	7.6	6.2	5.7	6.1	7.6	78.5
85	Turkey	6.8	6.6	7.7	5.0	8.0	5.3	6.5	5.3	6.0	7.0	7.8	6.2	78.2
86	Jordan	6.7	7.9	6.8	5.0	7.4	6.5	6.0	5.4	6.9	6.0	6.5	6.8	77.9
87	India	8.3	4.9	7.3	6.7	8.9	5.0	5.5	7.0	6.0	7.1	6.0	5.1	77.8
88	Dominican Republic	6.7	5.3	6.0	8.5	8.0	5.6	5.8	6.7	6.7	5.8	6.8	5.8	77.7
89	Saudi Arabia	6.5	6.0	8.0	3.4	7.0	2.7	8.4	4.3	8.9	8.0	7.8	6.5	77.5
90	Honduras	7.8	4.0	5.0	6.3	8.5	7.2	7.0	7.1	6.3	6.0	6.1	5.9	77.2
91	El Salvador	7.6	5.7	6.2	6.9	7.8	6.3	7.0	6.6	6.9	6.4	4.5	5.3	77.2
92	Peru	6.6	4.5	6.4	7.3	8.2	5.6	6.9	6.3	5.5	7.2	6.9	5.7	77.1
93	Morocco	7.0	6.7	6.8	6.2	7.8	6.5	7.4	6.5	6.7	5.1	6.2	4.2	77.1
94	Vietnam	6.8	5.3	5.5	6.0	6.5	6.7	7.3	6.3	7.2	6.2	7.1	6.0	76.9
95	Sao Tome	8.0	4.0	5.0	7.3	6.1	7.9	7.3	7.5	5.3	5.6	6.3	6.4	76.7
96	Namibia	7.7	5.5	5.8	7.7	9.1	6.1	5.0	7.1	6.0	5.8	3.6	6.2	75.6
97	Benin	7.5	6.2	4.1	7.0	7.4	6.9	6.6	8.0	5.6	5.2	4.3	6.7	75.5
98	Mexico	7.0	4.3	5.9	7.0	8.2	6.1	6.8	6.0	5.5	7.0	5.0	6.6	75.4
99	Gabon	7.2	5.7	3.0	6.0	7.8	5.5	7.3	6.8	6.3	5.9	7.2	5.7	74.4
100	Macedonia	5.0	4.6	7.5	6.9	7.3	6.3	7.4	4.8	5.3	5.8	6.7	6.8	74.4
101	Armenia	5.9	7.2	6.0	6.7	6.5	5.3	7.1	5.4	6.1	5.3	6.9	5.9	74.3
102	Senegal	7.4	6.0	6.3	5.6	7.5	6.5	6.0	7.3	6.0	5.9	4.0	5.7	74.2
103	Suriname	6.2	3.9	6.2	6.9	7.9	6.3	6.7	5.0	6.0	6.2	5.8	6.1	73.2


















































104	Guyana	6.3	3.5	6.1	7.9	7.9	6.6	6.7	5.5	5.4	6.8	5.1	5.2	73.0
105	Kazakhstan	6.0	3.9	5.5	4.0	6.4	6.4	7.7	5.3	6.8	6.5	7.6	6.4	72.5
106	Paraguay	6.4	1.3	6.5	6.0	7.9	5.9	7.9	6.0	6.9	5.3	7.5	4.4	72.0
107	Micronesia	7.2	3.1	4.5	8.3	7.0	6.6	6.6	6.8	3.0	5.3	5.5	8.0	71.9
108	Samoa	6.5	3.0	5.2	8.2	6.8	5.8	6.6	5.0	4.7	6.0	5.5	8.1	71.4
109	Albania	6.4	2.6	5.4	7.2	5.9	6.5	7.3	5.8	5.8	5.5	5.9	5.7	70.0
110	Ukraine	6.1	3.0	6.9	7.1	6.4	5.5	7.2	4.2	5.5	3.3	7.9	6.6	69.7
111	Belize	7.0	5.0	4.9	6.9	7.3	6.0	6.2	5.7	4.0	5.9	4.6	6.0	69.5
112	Libya	5.9	4.2	5.8	4.0	7.1	5.5	7.1	4.2	8.1	5.4	7.1	5.0	69.4
113	Brazil	6.4	3.9	6.4	5.0	8.9	4.1	6.4	6.0	5.6	6.9	5.1	4.4	69.1
114	Cyprus	5.0	4.5	7.5	5.2	7.8	4.0	5.4	3.6	3.8	5.2	7.9	9.0	68.9
115	Malaysia	6.5	5.2	6.2	3.8	6.9	4.7	6.1	5.2	6.5	6.1	6.1	5.6	68.9
116	Botswana	9.2	6.7	4.3	6.0	7.2	5.6	5.8	6.4	5.0	4.0	2.8	5.8	68.8
117	Jamaica	6.4	2.7	4.5	6.3	6.7	6.6	7.0	6.4	5.7	6.0	4.0	6.3	68.6
118	Brunei Darussalam	5.4	4.4	6.6	4.0	7.8	3.4	7.9	3.6	6.8	6.1	7.4	4.7	68.1
119	Grenada	5.9	2.9	4.5	7.8	6.9	5.9	6.3	4.1	4.7	5.5	5.8	7.6	67.9
120	Seychelles	6.3	4.4	5.0	4.7	6.8	4.8	7.1	4.6	5.9	5.6	6.0	6.5	67.7
121	Tunisia	5.9	3.2	5.4	5.3	7.2	4.9	6.6	6.1	7.4	6.2	6.0	3.4	67.6
122	South Africa	8.4	7.4	5.3	4.3	8.5	4.6	5.5	5.7	4.5	4.3	5.9	3.0	67.4
123	Trinidad	5.8	3.1	4.9	7.1	7.6	4.5	6.1	5.4	5.6	5.7	5.6	5.3	66.7
124	Ghana	7.0	5.1	5.4	8.1	6.6	5.5	5.3	7.2	4.7	2.4	4.2	4.7	66.2























































125	Kuwait	5.7	4.2	5.1	4.3	6.1	3.5	6.5	3.5	6.9	5.1	7.2	5.3	63.4
126	Antigua and Barbuda	4.7	3.6	4.3	7.8	6.5	4.8	5.8	5.0	5.0	5.0	4.4	5.9	62.8
127	Mongolia	5.8	1.2	4.3	2.3	5.8	5.9	6.7	5.5	6.6	5.0	5.7	7.1	61.9
128	Bulgaria	4.7	3.8	4.4	6.0	6.3	5.0	6.0	5.0	4.8	5.3	4.6	5.6	61.5
129	Romania	5.6	3.4	5.5	5.1	5.8	5.3	6.2	5.0	4.5	4.3	5.1	5.5	61.3
130	Bahamas	6.7	3.7	5.0	5.7	6.9	4.4	5.5	4.6	3.0	5.3	4.8	5.3	60.9
131	Croatia	4.9	6.1	5.4	4.8	5.5	5.9	4.5	3.9	4.7	4.3	4.3	5.8	60.1
132	Panama	6.6	3.4	4.6	5.0	7.3	5.6	4.7	5.5	4.7	5.1	3.0	4.2	59.7
133	Bahrain	5.0	3.1	6.4	3.7	5.9	3.5	6.9	3.1	5.0	4.4	6.1	5.9	59.0
134	Montenegro	5.1	4.1	6.4	2.5	4.6	4.6	4.7	4.0	5.5	4.7	6.0	5.8	58.0
135	Barbados	4.1	3.3	5.3	7.0	7.1	5.2	4.5	2.8	3.0	5.0	4.5	5.4	57.2
136	Latvia	4.5	4.5	4.5	5.0	6.2	5.5	5.1	4.4	3.7	2.9	4.3	4.0	54.6
137	Costa Rica	5.7	4.5	4.1	4.7	6.7	5.0	4.1	4.0	3.5	2.2	3.2	4.8	52.5
138	Qatar	4.7	3.2	5.2	3.3	5.3	4.4	6.5	2.6	4.5	2.5	5.0	4.7	51.9
139	United Arab Emirates	4.6	3.4	4.7	3.3	5.7	3.2	6.7	3.6	5.8	2.3	4.0	4.5	51.8
140	Estonia	4.7	4.4	4.9	4.0	5.4	4.4	4.7	3.5	3.5	2.5	5.5	3.7	51.2
141	Hungary	3.5	3.0	3.4	5.0	6.1	5.0	5.5	3.8	3.5	2.1	5.0	4.8	50.7
142	Poland	4.9	3.0	3.2	6.1	4.9	4.8	4.4	3.9	4.0	2.3	3.7	4.4	49.6
143	Malta	3.9	6.0	4.0	4.3	4.6	3.9	4.3	3.5	3.6	4.0	1.7	5.0	48.8
144	Slovakia	4.3	2.0	4.3	5.4	5.8	4.6	3.9	4.0	4.0	2.0	3.9	4.4	48.6
145	Lithuania	4.5	2.8	4.2	5.2	6.2	4.7	4.1	3.4	3.5	2.1	3.0	4.3	48.0























































146	Oman	4.5	1.0	3.0	1.3	2.3	4.4	6.0	4.5	6.4	5.0	6.6	2.2	47.2
147	Greece	4.5	2.7	4.4	4.7	4.8	4.0	4.5	3.9	3.6	3.5	2.0	3.5	46.1
148	Mauritius	3.9	1.0	3.5	2.4	5.9	4.3	5.3	4.4	3.9	3.6	3.3	3.2	44.7
149	Argentina	4.1	2.0	4.5	4.0	5.5	4.8	3.4	4.2	4.0	2.1	3.1	3.0	44.7
150	Italy	3.8	3.7	4.5	3.0	4.7	4.4	4.3	2.8	2.6	4.0	3.7	2.4	43.9
151	Spain	3.9	2.6	6.2	1.7	5.2	4.0	1.3	2.6	2.7	5.2	5.7	2.2	43.3
152	Czech Republic	3.5	2.7	3.6	4.5	4.3	4.1	3.6	3.8	3.5	2.0	3.3	3.7	42.6
153	South Korea	4.0	3.5	4.1	5.0	2.4	2.1	4.1	2.2	2.7	1.4	3.6	6.5	41.6
154	Uruguay	4.7	1.0	2.0	5.8	5.2	4.1	2.8	3.6	2.5	3.3	2.5	3.7	41.2
155	Chile	4.0	2.5	3.6	2.1	4.4	4.3	2.0	4.2	3.6	2.0	1.5	3.3	37.5
156	Slovenia	3.6	1.3	3.4	3.5	5.2	3.6	3.0	3.2	3.2	2.7	1.3	2.3	36.3
157	Germany	3.5	3.9	4.9	2.8	4.9	3.2	2.3	1.9	2.5	2.1	1.8	2.4	36.2
158	France	3.9	3.0	5.8	2.0	5.5	3.3	1.8	1.5	2.9	1.2	2.0	2.4	35.3
159	United States	3.1	3.7	3.3	1.0	5.3	2.9	3.0	2.3	4.0	1.4	2.5	1.5	34.0
160	Singapore	3.0	1.1	3.1	2.7	3.0	3.2	4.0	1.5	4.3	1.0	4.1	2.8	33.8
161	United Kingdom	3.2	2.8	4.3	1.9	4.7	2.5	1.8	2.2	2.3	2.6	2.9	2.4	33.6
162	Belgium	2.8	1.7	4.9	1.3	4.9	3.2	2.8	2.0	1.7	1.7	3.5	3.0	33.5
163	Portugal	3.9	1.4	2.6	2.3	3.9	4.2	1.6	3.8	3.7	1.1	1.2	3.0	32.7
164	Japan	4.2	1.1	3.8	2.0	2.5	3.1	2.0	1.2	3.4	2.0	2.0	3.9	31.2
165	Iceland	1.0	0.9	1.0	3.2	2.5	6.7	2.2	1.4	2.1	1.0	2.0	5.0	29.0
166	Canada	3.3	2.4	3.0	2.1	4.7	2.0	1.7	1.2	2.1	1.1	2.4	1.7	27.7


167	Luxembourg	2.1	1.5	3.2	1.2	2.5	2.2	2.9	2.4	1.5	2.0	3.6	2.5	27.6
168	Austria	2.9	2.2	3.6	1.1	4.9	2.3	1.6	1.4	1.6	1.0	2.4	2.6	27.6
169	Netherlands	2.9	3.1	4.7	2.1	3.3	2.5	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4	2.0	27.0
170	Australia	3.1	2.2	3.4	1.1	4.4	2.8	1.4	1.4	2.5	1.0	1.5	1.1	25.9
171	New Zealand	1.3	1.2	3.2	2.3	4.2	3.6	1.1	1.4	1.7	1.0	1.2	1.1	23.3
172	Denmark	3.0	1.6	3.0	2.0	2.2	2.7	1.3	1.5	1.5	1.3	1.0	2.1	23.2
173	Ireland	1.9	1.5	1.0	2.0	3.0	2.7	1.8	2.3	1.5	1.1	1.3	1.5	21.6
174	Switzerland	2.6	1.3	2.9	2.0	2.6	2.1	1.2	1.6	1.7	1.0	1.0	1.2	21.2
175	Sweden	2.8	2.6	1.3	2.0	2.3	1.6	1.0	1.2	1.6	1.1	1.3	1.8	20.6
176	Finland	2.5	1.6	1.2	2.1	1.9	2.4	0.9	1.1	1.7	0.9	0.9	2.0	19.2
177	Norway	1.9	1.6	1.3	1.1	2.2	2.3	1.0	1.3	1.5	1.1	1.1	1.9	18.3

Copyright (C) 2009 The Fund for Peace

		 DP	 REF	 GG	 HF	 UED	 ECO	 SL	 PS	 HR	 SEC	 FE	 EXT	Total	
		Very High Alert													
1		South Sudan	9.1	10.0	10.0	6.8	8.9	8.8	9.7	9.9	9.9	9.9	10.0	9.9	112.9
2		Somalia	9.5	10.0	9.3	8.9	8.7	9.1	9.1	9.6	9.8	9.4	10.0	9.2	112.6
3		Central African Rep.	8.7	10.0	9.5	7.0	9.4	7.8	9.5	9.7	9.5	9.9	9.7	9.9	110.6
4		Congo (D. R.)	9.4	9.9	9.6	7.2	8.5	8.2	9.3	9.4	10.0	9.4	9.5	9.8	110.2
5		Sudan	8.6	9.7	9.9	8.7	8.2	8.1	9.3	9.1	9.3	9.6	10.0	9.6	110.1
		High Alert													
6		Chad	9.6	9.8	8.5	8.3	8.8	7.7	9.4	10.0	9.5	9.1	9.8	8.2	108.7
7		Afghanistan	8.8	9.3	8.7	7.8	7.5	8.3	9.5	9.0	8.3	10.0	9.4	9.9	106.5
8		Yemen	9.1	9.0	9.3	7.3	7.8	9.1	8.9	8.5	9.0	9.5	9.4	8.5	105.4
9		Haiti	8.7	8.5	7.0	9.1	9.3	9.4	8.9	9.5	7.5	7.5	9.1	9.8	104.3
10		Pakistan	8.8	8.8	10.0	6.9	7.6	7.5	8.5	7.6	8.6	9.9	9.5	9.3	103.0
11		Zimbabwe	8.9	8.4	8.1	8.3	8.3	8.3	9.3	8.8	8.6	8.1	10.0	7.7	102.8
12		Guinea	8.0	8.3	8.4	7.5	7.9	8.9	9.9	9.2	8.5	9.2	9.6	7.3	102.7
13		Iraq	8.0	8.5	10.0	8.0	8.1	7.0	8.7	7.7	8.7	10.0	9.6	7.9	102.2
14		Cote d'Ivoire	7.8	9.1	9.0	7.0	7.6	7.4	8.8	8.7	8.7	8.8	9.4	9.4	101.7
15		Syria	6.0	10.0	10.0	6.9	6.9	6.7	9.8	7.2	9.9	10.0	9.6	8.6	101.6
16		Guinea Bissau	8.5	8.1	6.0	8.3	8.1	8.4	9.3	9.1	7.5	8.6	9.6	9.1	100.6
		Alert													
17		Nigeria	8.3	6.9	9.8	7.0	8.9	7.3	8.8	9.0	8.7	9.5	9.5	6.0	99.7
18		Kenya	8.7	8.2	9.3	7.8	8.0	7.9	8.4	8.2	6.8	8.2	9.3	8.2	99.0
19		Ethiopia	9.4	9.0	8.9	6.7	7.3	7.4	7.1	8.9	8.0	8.1	8.7	8.4	97.9
19		Niger	9.3	8.2	7.5	6.6	7.9	8.1	7.8	9.3	7.3	8.4	8.9	8.6	97.9
21		Burundi	8.7	9.0	8.1	6.5	7.5	8.8	8.1	8.6	8.0	7.4	7.9	8.5	97.1
22		Uganda	8.7	8.7	8.3	6.9	7.6	7.3	7.8	8.3	7.6	7.9	8.9	8.0	96.0
23		Eritrea	8.5	7.3	6.4	7.5	7.2	8.0	8.8	8.4	9.2	7.6	8.1	8.5	95.5
24		Liberia	8.5	9.1	6.5	6.9	8.0	8.0	6.9	9.3	6.3	6.8	8.3	9.7	94.3
24		Myanmar	7.3	8.2	9.3	5.3	8.1	7.0	9.3	8.3	8.0	8.0	8.6	6.9	94.3
26		North Korea	7.5	4.7	6.6	4.4	8.0	9.0	9.9	9.2	9.6	8.5	8.2	8.4	94.0
27		Cameroon	8.1	7.6	7.8	7.5	7.5	5.9	8.2	8.5	8.3	7.7	9.5	6.5	93.1
28		Mauritania	8.4	8.8	7.2	6.0	6.8	7.7	7.4	8.6	7.7	7.7	8.5	8.2	93.0
29		Bangladesh	7.6	6.9	8.7	7.2	7.5	7.0	8.4	8.4	8.0	7.8	9.3	6.0	92.8
30		Sri Lanka	6.5	8.5	9.3	7.6	7.5	6.2	8.3	5.3	9.1	8.2	9.4	6.7	92.6
31		Egypt	7.1	6.4	8.6	5.1	6.8	7.9	9.0	5.7	9.7	7.9	9.4	7.4	91.0
31		Nepal	7.8	7.6	9.0	6.2	7.8	7.1	7.6	7.4	7.6	7.3	8.3	7.3	91.0
31		Timor-Leste	8.8	7.1	6.8	6.7	6.4	8.2	7.7	8.5	5.7	8.0	8.3	8.8	91.0
34		Rwanda	8.0	8.2	8.5	7.2	7.9	6.7	6.5	7.5	7.8	5.9	8.2	8.1	90.5
		Very High Warning													
35		Sierra Leone	8.7	7.8	5.9	8.3	8.5	8.3	7.2	9.1	5.9	5.1	7.7	7.4	89.9
36		Mali	9.0	7.5	7.5	8.1	7.1	7.9	5.9	8.6	6.8	8.0	4.9	8.5	89.8
37		Congo (Republic)	8.1	8.1	6.3	6.5	8.1	6.7	8.4	8.8	7.6	6.4	6.7	7.9	89.6
38		Malawi	8.8	6.4	5.7	8.4	8.1	8.3	7.6	8.1	6.5	5.1	7.7	8.4	89.1
39		Burkina Faso	9.0	7.6	5.3	6.6	8.1	7.4	7.8	8.8	6.5	6.9	7.3	7.7	89.0
40		Cambodia	7.5	6.1	7.3	7.2	7.4	6.1	8.4	8.0	7.9	6.3	8.6	7.7	88.5
41		Libya	5.7	5.7	7.5	5.5	6.4	6.1	8.5	7.4	8.7	9.2	8.1	9.0	87.8
41		Togo	7.9	7.4	4.8	7.1	7.8	7.1	8.4	8.3	7.5	7.1	7.6	6.8	87.8
43		Angola	9.0	7.5	7.1	6.0	9.5	5.4	8.0	9.1	7.0	5.8	7.2	5.8	87.4
44		Iran	5.3	6.8	8.8	5.9	6.4	6.4	8.7	4.8	9.3	8.3	9.4	7.1	87.2
45		Djibouti	8.1	7.4	6.4	5.5	7.5	7.2	7.9	7.7	6.9	6.9	7.6	8.0	87.1
46		Lebanon	6.0	8.6	8.9	5.7	6.0	5.6	7.3	5.7	6.8	8.6	9.3	8.4	86.9
47		Solomon Islands	8.2	5.2	6.8	6.0	8.6	7.5	7.0	7.9	6.0	6.7	8.0	8.5	86.4
48		Uzbekistan	6.4	5.7	7.4	6.6	7.3	7.1	9.3	5.4	9.3	7.6	8.8	5.4	86.3
49		Zambia	9.3	7.2	6.0	7.7	8.3	8.0	7.7	7.9	6.8	4.7	5.7	6.9	86.2






























50		Mozambique	8.9	4.9	5.4	7.4	8.3	8.1	7.5	8.7	6.4	6.6	6.6	7.1	85.9
51		Swaziland	8.7	5.2	3.6	6.6	7.8	8.9	8.8	7.7	8.0	5.7	7.0	7.8	85.8
52		Equatorial Guinea	8.0	3.6	6.6	6.3	8.8	4.2	9.7	7.4	9.5	7.2	8.2	5.8	85.3
52		Philippines	7.8	7.7	8.3	5.9	6.3	5.7	7.3	6.9	6.4	8.8	8.0	6.2	85.3
54		Comoros	7.3	4.8	5.3	7.5	6.7	8.3	7.1	8.2	6.9	7.5	7.5	8.0	85.1
55		Tajikistan	7.5	5.1	7.0	6.1	5.9	7.7	9.0	6.2	7.9	7.1	8.4	6.7	84.6
56		Laos	7.4	5.9	6.0	7.1	6.6	5.8	8.6	7.4	8.0	6.3	8.3	6.9	84.3
57		Papua New Guinea	7.6	4.9	6.6	7.3	9.3	6.6	6.6	9.0	6.3	6.4	7.1	6.4	84.1
58		Kyrgyz Republic	6.0	5.5	8.2	6.1	6.7	7.3	8.2	5.9	7.3	7.1	8.0	7.6	83.9
59		Colombia	6.2	8.0	7.7	7.0	7.8	4.1	7.4	6.3	7.1	7.0	7.7	6.8	83.1
59		Gambia	7.9	6.7	3.7	7.4	7.1	7.5	7.5	7.8	8.3	5.2	6.8	7.2	83.1
59		Madagascar	8.2	4.2	4.9	5.8	8.2	7.9	7.3	8.8	5.8	6.8	7.6	7.6	83.1
62		Senegal	8.1	7.3	6.6	7.1	7.0	7.0	6.0	7.9	6.5	6.5	6.6	6.2	82.8
63		Georgia	4.9	7.2	8.0	5.5	6.2	6.3	8.7	5.1	6.1	7.6	9.5	7.6	82.7
64		Bhutan	6.3	7.2	7.6	7.1	7.2	6.0	5.5	6.6	7.0	5.3	7.5	7.6	80.9
65		Tanzania	8.6	6.7	5.9	6.7	6.7	6.7	6.0	8.7	6.3	5.2	5.7	7.6	80.8
66		Guatemala	7.2	6.0	7.6	6.8	7.9	6.1	6.5	7.1	6.7	6.7	6.0	5.7	80.3
		High Warning													
67		Israel/West Bank	6.3	7.1	9.7	3.5	7.2	4.0	6.6	5.6	7.1	6.8	8.1	7.5	79.5
68		China	7.7	5.9	8.6	4.8	7.7	3.9	7.9	6.5	9.1	6.2	7.2	3.5	79.0
68		Fiji	5.0	3.7	7.3	7.3	7.1	7.0	7.8	4.8	7.2	7.0	7.9	6.9	79.0
70		Bolivia	6.6	4.3	6.8	6.1	8.6	5.9	6.9	7.0	6.0	6.4	8.0	6.3	78.9
71		Algeria	5.7	6.7	7.9	5.0	5.9	6.1	7.5	6.1	7.4	7.5	7.3	5.7	78.8
72		Lesotho	8.0	5.2	4.7	7.1	7.0	8.2	5.7	8.2	5.1	4.9	7.0	7.5	78.6
73		Nicaragua	5.9	5.1	6.2	7.8	7.6	6.5	7.6	6.9	5.1	5.3	6.8	7.6	78.4
74		Benin	8.2	6.3	3.6	6.5	7.2	6.9	6.1	8.7	5.1	5.9	6.1	7.6	78.2
74		Turkmenistan	6.0	4.2	6.9	5.1	6.7	5.3	9.6	6.4	8.5	6.8	7.8	4.9	78.2
75		Honduras	6.7	4.2	6.1	6.3	7.8	6.6	7.0	6.7	6.0	6.4	7.0	7.1	77.9
76		Azerbaijan	5.4	7.6	6.7	4.7	6.2	4.4	8.3	5.3	7.7	7.0	7.9	6.6	77.8
78		Tunisia	4.7	4.4	7.8	5.3	5.7	6.3	8.0	5.2	8.1	7.3	8.1	6.6	77.5
79		Ecuador	5.9	5.7	7.5	6.5	7.1	5.6	6.9	6.6	5.0	6.4	8.2	5.9	77.3
80		Thailand	7.6	6.5	8.0	3.8	6.1	3.6	7.1	4.9	7.4	7.9	9.5	4.6	77.0
81		India	7.7	5.1	7.8	5.2	7.8	5.7	5.3	7.0	5.6	7.9	6.8	5.0	76.9
82		Indonesia	7.4	5.9	7.6	6.0	6.6	5.5	6.5	6.0	6.2	6.5	7.0	5.6	76.8
83		Jordan	6.7	8.3	7.4	3.9	6.2	6.6	6.4	5.0	7.3	5.5	6.9	6.5	76.7
83		Venezuela	5.4	5.1	6.8	5.5	6.9	5.5	7.7	7.5	7.8	6.2	7.7	4.6	76.7
85		Russia	5.4	5.2	8.5	4.8	6.7	3.6	7.6	5.0	8.7	8.6	8.1	4.3	76.5
86		Bosnia	4.1	6.8	7.4	5.8	5.9	5.5	6.8	4.4	6.1	6.5	8.7	7.9	75.9
87		Sao Tome & Principe	6.9	4.6	4.8	8.2	6.6	8.1	6.6	6.2	4.1	5.8	6.3	7.6	75.8
88		Maldives	5.7	5.0	4.9	5.9	4.2	6.7	8.4	6.4	7.4	5.8	8.3	6.7	75.4
89		Moldova	5.6	4.7	6.2	6.6	5.6	6.6	6.6	5.4	5.7	6.9	7.8	7.4	75.1
90		Belarus	5.5	3.6	7.1	3.7	5.5	6.0	8.8	5.0	8.1	6.1	8.3	7.3	75.0
91		Micronesia	7.2	3.5	4.2	8.7	8.3	7.8	6.3	6.0	3.4	5.4	5.6	8.2	74.6
92		Morocco	5.7	5.6	6.8	7.3	6.6	5.6	6.6	5.9	6.5	6.0	6.6	5.2	74.4
93		Cape Verde	6.8	4.4	4.2	8.6	7.2	6.2	6.0	6.8	4.8	5.7	5.5	7.9	74.1
93		Turkey	5.4	7.1	9.0	3.7	6.5	5.3	6.0	5.2	5.9	7.4	7.3	5.3	74.1
95		Dominican Republic	6.5	5.6	6.1	7.9	6.6	5.5	5.7	6.5	5.8	4.9	6.5	5.8	73.4
96		Saudi Arabia	6.0	4.9	7.7	3.4	6.1	3.9	8.1	4.0	8.8	6.9	8.0	5.3	73.1
97		Peru	5.8	5.0	7.3	6.4	7.5	4.2	7.4	6.7	4.8	6.7	6.7	4.4	72.9
98		Vietnam	6.2	5.0	6.0	5.5	5.8	5.7	8.0	5.5	7.6	5.1	6.9	5.4	72.7
99		Gabon	6.9	5.3	3.6	5.5	7.0	5.1	7.7	7.1	6.6	5.1	7.1	5.2	72.2
100		El Salvador	7.1	5.6	6.0	6.6	6.9	6.2	5.6	6.4	5.8	6.1	4.3	5.4	72.0
100		Serbia	4.2	6.5	8.0	5.0	5.6	6.4	5.8	4.4	5.2	6.2	8.0	6.7	72.0
102		Paraguay	5.8	2.7	6.2	4.9	8.7	5.4	7.4	6.4	6.0	6.2	7.8	4.1	71.6
103		Namibia	7.1	5.8	5.6	6.8	8.4	6.8	4.1	7.0	4.6	4.6	3.5	7.2	71.5
104		Armenia	4.7	6.7	5.7	5.7	5.3	5.8	6.7	4.4	6.8	5.6	7.4	6.5	71.3
105		Mexico	6.7	4.3	6.1	5.6	6.9	4.9	5.8	6.3	6.0	7.6	5.1	5.8	71.1
106		Guyana	5.9	4.1	6.2	8.8	6.5	6.7	5.6	6.3	4.1	5.5	5.1	6.2	71.0



























107		Cuba	5.9	5.0	4.8	6.0	5.9	4.8	6.8	4.9	7.0	6.0	7.2	6.5	70.8
108		Ghana	6.9	5.8	4.9	7.3	6.8	6.0	4.8	7.9	4.9	4.1	5.0	6.3	70.7
109		Suriname	5.6	3.3	6.1	7.4	6.9	7.1	5.8	5.5	5.2	5.7	5.8	6.2	70.6
		Warning													
110		Samoa	6.5	2.4	4.8	8.9	5.7	6.2	6.0	5.1	4.8	5.5	5.1	8.3	69.3
111		Kazakhstan	5.1	3.8	6.5	3.9	5.0	5.9	7.7	4.8	7.2	6.0	7.6	5.0	68.5
112		Cyprus	4.3	4.2	7.3	4.8	6.7	6.4	5.6	3.3	3.6	4.7	7.9	9.1	67.9
113		Ukraine	4.5	3.4	6.4	5.4	5.0	5.5	8.0	3.9	6.1	4.7	8.0	6.3	67.2
114		Belize	6.2	4.6	4.4	6.8	6.5	5.6	6.0	6.1	4.4	5.5	4.3	6.6	67.0
115		South Africa	7.4	6.2	5.8	4.6	7.7	5.8	5.0	6.1	4.3	4.9	5.6	3.2	66.6
116		Macedonia	3.8	5.0	7.3	5.8	5.9	5.9	5.8	4.1	4.2	5.7	7.0	5.9	66.4
117		Malaysia	5.5	4.5	6.2	4.8	5.6	3.9	6.6	4.6	6.9	6.5	7.0	4.1	66.2
118		Grenada	5.5	3.5	3.9	8.2	5.6	6.1	6.2	3.9	4.0	5.3	5.6	7.4	65.2
119		Jamaica	5.5	3.3	4.0	7.5	5.8	6.8	5.6	5.6	5.1	6.0	3.7	6.0	64.9
120		Bahrain	4.9	2.9	7.6	3.3	5.4	3.5	7.9	2.5	7.8	6.2	7.1	5.6	64.7
121		Botswana	8.0	5.5	5.1	5.3	7.8	6.4	4.1	6.3	4.6	3.2	3.3	4.9	64.5
122		Seychelles	5.4	3.4	4.8	5.2	6.3	4.9	6.0	3.5	4.9	6.4	5.7	7.2	63.7
123		Albania	4.4	3.4	4.7	6.9	4.5	5.5	6.5	4.8	5.5	5.0	6.2	6.2	63.6
123		Brunei	4.5	3.0	6.2	4.9	7.8	3.1	7.1	2.5	7.4	5.6	7.4	4.1	63.6
125		Brazil	6.7	3.6	5.6	3.8	8.0	3.6	5.4	5.6	5.6	5.6	4.9	3.0	61.4
126		Trinidad & Tobago	5.2	3.3	4.4	7.8	5.8	4.6	5.3	5.1	4.9	5.4	5.6	3.9	61.3
		Less Stable													
127		Antigua & Barbuda	4.9	3.3	4.1	7.6	5.3	4.5	5.8	4.1	4.7	4.9	3.7	6.1	59.0
127		Kuwait	5.4	3.7	4.9	3.4	5.0	3.3	7.3	2.8	6.9	4.2	8.0	4.1	59.0
129		Mongolia	5.8	2.5	4.0	2.8	6.5	4.6	4.8	6.0	5.1	4.3	5.5	6.2	58.1
130		Romania	4.0	3.0	6.6	4.4	5.0	5.7	6.1	4.6	4.2	3.8	5.2	4.3	56.9
131		Montenegro	3.6	4.8	7.0	3.3	3.2	4.9	4.3	3.9	4.5	4.3	6.3	5.6	55.7
131		Panama	5.6	4.0	5.3	4.2	7.6	3.7	4.6	5.2	4.7	4.8	2.5	3.5	55.7
133		Bulgaria	4.1	3.4	4.9	4.9	4.8	5.2	4.9	4.1	3.7	4.4	5.3	4.7	54.4
134		Bahamas	6.5	2.7	4.4	5.3	5.3	4.7	4.6	4.7	3.1	4.3	4.5	4.0	54.1
135		Oman	5.3	2.3	2.7	2.1	3.9	4.8	6.4	4.1	7.4	5.0	6.6	2.5	53.1
136		Croatia	3.5	5.2	5.6	4.6	4.1	5.0	3.7	3.2	4.4	4.5	4.4	4.7	52.9
137		Greece	3.5	1.9	5.1	4.1	4.0	6.5	6.4	3.6	3.7	4.2	3.5	5.6	52.1
138		Barbados	4.1	3.0	4.4	5.9	5.4	5.8	3.3	3.0	2.8	4.2	4.2	5.3	51.4
		Stable													
139		Qatar	4.6	2.1	4.9	3.4	5.1	2.9	6.2	2.3	5.9	2.8	5.0	3.7	48.9
140		Costa Rica	4.6	4.4	4.4	3.2	5.8	4.6	3.2	4.8	2.3	2.8	3.8	4.6	48.5
141		Hungary	2.8	2.8	4.4	3.6	4.6	5.6	6.0	3.2	4.1	2.6	4.9	3.7	48.3
142		Latvia	3.7	3.2	5.8	4.1	4.6	4.3	4.2	3.7	3.3	3.3	4.3	3.5	48.0
143		United Arab Emirates	4.2	2.5	4.0	2.7	4.5	3.4	6.7	3.2	6.5	3.1	3.6	3.2	47.6
144		Argentina	4.2	2.3	5.3	2.7	5.7	4.3	4.3	4.1	4.4	3.3	2.8	3.9	47.3
145		Mauritius	4.4	2.5	3.5	3.9	4.6	4.4	3.8	4.1	3.7	3.1	3.2	4.9	46.1
146		Slovakia	3.1	2.3	5.6	4.5	4.3	5.4	4.0	3.2	3.0	2.6	3.7	3.6	45.3
147		Estonia	3.6	3.2	6.2	3.8	4.0	3.8	3.5	3.3	2.5	2.8	5.5	3.0	45.2
148		Italy	3.6	3.4	4.6	2.3	3.3	5.1	4.2	2.6	2.8	4.7	4.9	1.9	43.4
149		Lithuania	3.6	2.9	4.0	4.0	5.3	4.8	3.5	3.7	2.7	2.7	3.0	3.0	43.2
150		Spain	3.0	2.0	6.1	2.7	3.8	5.3	3.4	3.0	2.2	3.6	6.1	1.9	43.1
151		Malta	3.1	4.9	4.0	4.3	3.2	3.9	3.8	2.6	3.6	3.7	2.0	3.9	43.0
152		Poland	3.6	3.1	4.1	4.7	3.8	4.0	3.5	3.1	2.8	2.6	3.8	3.0	42.1
153		Chile	4.6	2.6	3.8	2.9	5.4	3.9	3.3	4.2	3.7	2.8	1.7	3.1	42.0
		Very Stable													
154		Czech Republic	2.4	2.3	3.8	3.1	3.5	4.8	4.2	3.4	2.4	2.3	4.3	2.9	39.4
155		Uruguay	3.8	2.2	2.7	4.4	4.5	3.5	1.6	3.7	2.2	3.4	2.7	3.2	37.9
156		South Korea	2.9	1.8	3.1	3.6	3.2	2.3	2.8	2.1	2.9	2.4	3.6	5.7	36.4
157		Japan	4.7	3.4	4.1	2.3	2.1	3.6	2.0	2.4	3.3	1.9	2.6	3.9	36.3
158		Singapore	2.8	1.4	2.8	3.6	4.0	2.8	3.5	2.1	4.9	2.0	4.0	2.0	35.9
159		United States	3.3	2.4	4.5	1.2	4.5	3.1	2.4	2.5	3.5	2.7	4.0	1.3	35.4
160		France	3.0	2.5	6.4	2.2	4.0	4.5	2.1	1.8	2.2	2.6	1.9	1.6	34.8



























161		United Kingdom	2.8	2.7	5.3	2.1	3.4	4.0	1.7	2.4	2.1	2.8	3.5	1.5	34.3
162		Portugal	3.1	1.9	2.3	2.5	3.2	5.2	2.3	3.3	2.6	1.9	1.8	3.0	33.1
163		Slovenia	2.4	1.6	3.6	2.9	4.2	3.9	2.9	2.3	2.3	2.4	1.6	2.5	32.6
164		Belgium	2.8	1.6	4.2	1.9	3.5	4.0	2.0	2.4	1.5	2.3	3.9	1.9	32.0
165		Germany	2.9	3.3	4.3	2.4	3.6	2.9	1.5	1.9	1.8	2.4	2.0	1.6	30.6
		Sustainable													
166		Netherlands	3.3	2.4	4.1	2.4	2.4	3.7	1.0	1.8	1.2	2.1	2.6	1.6	28.6
167		Austria	2.7	2.3	4.6	1.8	3.7	2.2	1.6	1.8	2.0	1.4	2.7	1.7	28.5
168		Canada	2.7	2.3	3.4	2.2	3.2	2.1	1.2	2.3	2.1	2.1	2.5	1.3	27.4
169		Australia	3.4	2.4	3.9	0.9	3.0	2.4	1.0	2.1	2.3	2.0	1.6	1.3	26.3
170		Ireland	2.5	1.4	1.6	3.1	2.7	4.2	1.8	2.2	1.2	2.1	1.3	2.0	26.1
171		Iceland	1.9	1.6	1.0	3.1	1.9	3.9	1.2	1.9	1.4	1.3	1.8	4.9	25.9
172		Luxembourg	2.0	1.7	2.8	2.4	1.8	1.8	1.6	1.6	1.3	2.3	3.4	1.9	24.6
173		New Zealand	2.4	1.2	3.8	2.2	3.1	3.9	0.5	2.1	1.1	1.4	1.1	1.3	24.1
174		Switzerland	2.4	1.8	3.5	2.4	2.4	2.2	0.9	1.7	1.7	1.7	1.0	1.6	23.3
175		Norway	2.3	2.2	3.7	1.9	1.7	2.0	0.5	1.7	1.6	2.8	1.1	1.5	23.0
176		Denmark	2.8	1.4	3.4	2.0	1.8	2.2	0.8	1.7	1.6	1.8	1.4	1.9	22.8
177		Sweden	2.8	2.6	1.0	1.8	1.8	2.0	0.8	1.8	1.3	2.4	1.8	1.3	21.4
		Very Sustainable													
178		Finland	1.8	1.5	1.3	2.2	1.3	3.5	0.8	1.4	1.2	1.3	1.1	1.3	18.7

Copyright © 2016, The Fund for Peace



























2016
























		 DP	 REF	 GG	 HF	 UED	 ECO	 SL	 PS	 HR	 SEC	 FE	 EXT	Total	
		Very High Alert													
1		Somalia	9.7	9.7	9.4	9.5	9.3	9.0	9.5	9.0	9.7	9.7	10.0	9.5	114.0
2		South Sudan	9.9	10.0	9.9	6.6	9.0	9.3	9.7	10.0	9.7	10.0	9.7	10.0	113.8
3		Central African Rep.	8.7	10.0	9.3	7.2	9.9	8.6	9.8	10.0	9.9	9.2	10.0	9.5	112.1
4		Sudan	9.0	10.0	9.8	9.1	7.6	8.7	9.8	9.1	9.3	9.2	10.0	9.9	111.5
4		Yemen	9.5	9.6	9.5	7.5	8.4	9.4	9.4	9.3	9.4	10.0	9.5	10.0	111.5
6		Syria	8.4	10.0	10.0	8.6	7.4	7.8	10.0	8.9	9.8	10.0	9.9	10.0	110.8
7		Chad	9.9	9.8	8.5	8.9	9.3	8.0	9.2	9.8	9.3	9.1	9.8	8.5	110.1
8		Congo (D. R.)	9.1	9.7	9.7	6.8	8.9	8.1	9.3	9.7	10.0	9.2	9.8	9.7	110.0
		High Alert													
9		Afghanistan	9.5	9.5	8.6	8.4	7.5	8.5	9.1	9.6	8.7	10.0	8.6	9.9	107.9
10		Haiti	9.2	7.9	6.7	9.0	9.5	8.9	9.4	9.4	7.7	7.9	9.6	9.9	105.1
11		Iraq	8.1	9.4	9.8	7.9	7.5	6.8	9.2	7.8	8.9	10.0	9.6	9.7	104.7
12		Guinea	8.9	8.4	8.8	7.5	7.4	9.4	9.8	9.2	7.9	9.0	9.9	7.6	103.8
13		Nigeria	9.1	7.7	9.4	7.4	8.8	7.7	8.8	9.4	9.1	9.7	9.9	6.5	103.5
14		Pakistan	8.9	8.9	9.7	7.3	7.0	7.4	8.3	8.2	8.2	9.3	8.9	9.6	101.7
15		Burundi	9.5	9.1	8.1	6.5	7.4	8.2	9.0	8.2	8.5	9.0	8.5	8.7	100.7
16		Zimbabwe	8.6	8.7	7.5	8.1	8.2	8.3	8.9	8.5	8.4	7.8	9.8	7.7	100.5
		Alert													
17		Guinea Bissau	8.3	7.5	5.4	8.3	8.7	8.5	8.9	9.5	7.5	9.1	9.6	8.5	99.8
























18		Eritrea	9.1	8.5	6.6	8.0	7.5	8.3	9.5	8.6	9.1	7.4	8.1	7.9	98.6
19		Niger	9.5	8.0	7.7	7.2	8.2	8.0	7.8	9.2	6.7	8.9	8.9	8.3	98.4
20		Kenya	9.1	8.0	9.1	7.8	8.0	7.4	7.8	8.2	7.2	8.5	8.9	8.3	98.3
21		Cote d'Ivoire	8.2	8.0	8.3	7.0	8.2	6.8	8.1	8.7	8.1	7.7	9.4	9.4	97.9
22		Cameroon	8.3	8.0	8.5	7.8	8.1	6.3	8.7	8.9	7.7	8.1	9.4	8.0	97.8
23		Uganda	8.7	9.1	9.0	7.6	7.6	6.7	8.3	8.5	8.0	7.3	8.9	8.0	97.7
24		Ethiopia	9.3	9.5	8.6	7.3	6.7	6.7	7.7	8.3	8.5	8.1	8.3	8.2	97.2
25		Libya	5.1	8.0	8.3	6.5	5.8	8.0	9.5	7.2	9.3	9.6	9.4	9.7	96.4
26		Myanmar	7.3	8.3	9.9	6.0	7.9	6.4	8.7	8.7	8.6	8.4	8.6	7.5	96.3
27		Liberia	9.2	8.9	6.0	6.9	8.6	8.3	7.0	9.5	6.7	6.6	8.3	9.5	95.5
28		Mauritania	8.9	8.2	7.2	6.6	7.0	7.9	8.2	9.2	8.1	7.1	8.8	8.2	95.4
29		Mali	8.7	8.1	7.9	8.7	7.6	7.9	6.3	9.0	7.0	9.2	5.2	9.6	95.2
30		North Korea	7.9	4.6	6.0	4.1	7.7	8.9	10.0	8.8	9.6	8.5	8.5	9.3	93.9
31		Congo (Republic)	8.1	7.9	6.9	7.1	8.3	6.7	9.1	9.2	8.2	6.7	6.7	7.3	92.2
32		Rwanda	8.2	8.0	9.1	7.6	8.5	6.2	6.8	7.6	7.4	5.9	8.3	7.7	91.3
33		Nepal	8.8	8.0	9.5	6.7	7.2	7.0	7.1	7.4	7.4	6.7	8.3	7.1	91.2
34		Sierra Leone	9.2	7.9	5.9	8.7	8.5	8.8	7.1	9.0	5.5	4.5	7.8	8.1	91.0
35		Timor Leste	9.2	6.5	6.7	7.3	7.0	8.1	7.1	8.7	5.5	7.4	8.3	9.0	90.8
36		Bangladesh	8.0	6.3	8.9	7.5	6.9	6.3	8.0	7.8	7.6	7.8	9.6	6.0	90.7
37		Angola	9.0	7.3	7.7	6.3	9.6	6.1	8.8	9.2	7.5	6.2	7.2	5.6	90.5
38		Egypt	6.8	7.0	9.0	4.4	6.2	8.4	8.4	5.1	9.7	8.3	8.8	8.1	90.2
		High Warning													
39		Djibouti	8.5	7.5	6.7	5.5	8.1	7.1	7.9	8.1	7.5	6.6	7.3	8.9	89.7
40		Lebanon	5.8	9.5	8.7	5.1	5.8	6.1	7.8	5.9	7.4	8.9	9.3	9.3	89.6
41		Burkina Faso	9.4	6.8	4.7	7.2	8.4	6.5	7.3	8.9	6.3	8.1	8.1	7.7	89.4
42		Mozambique	9.5	5.5	5.6	7.7	8.9	7.7	6.7	9.2	5.8	6.7	6.9	7.6	87.8
43		Sri Lanka	5.7	7.9	9.2	7.9	7.3	5.6	7.4	5.3	8.5	7.6	8.8	6.5	87.7




44		Malawi	9.3	6.3	5.1	8.1	8.5	8.6	6.6	8.1	6.4	4.5	7.7	8.4	87.6
44		Swaziland	8.9	4.8	3.4	7.2	8.4	9.4	8.8	7.8	8.8	6.0	6.8	7.3	87.6
46		Cambodia	7.2	5.9	7.1	7.8	6.8	5.9	8.5	8.0	7.9	6.4	8.3	7.6	87.4
47		Iran	5.1	6.7	8.8	6.5	5.8	6.6	9.2	4.7	9.5	7.7	9.6	6.7	86.9
48		Gambia	8.5	6.5	3.4	8.4	6.9	8.1	8.1	8.0	8.9	6.0	6.8	7.2	86.8
49		Zambia	9.5	6.6	5.4	8.1	8.9	8.1	7.2	8.1	7.1	4.7	5.7	6.9	86.3
50		Papua New Guinea	7.9	4.7	6.5	7.4	9.3	5.8	7.0	9.2	7.1	7.2	7.1	7.0	86.2
51		Togo	8.0	6.8	4.8	7.6	8.4	6.5	8.0	8.3	6.9	6.7	7.6	6.2	85.8
52		Solomon Islands	8.2	4.6	6.5	6.6	9.2	7.3	7.0	7.9	5.4	6.1	8.2	8.3	85.3
53		Equatorial Guinea	7.7	3.6	6.3	5.7	8.9	6.2	9.9	7.4	9.4	6.7	8.2	5.2	85.2
54		Philippines	7.7	7.1	8.1	6.5	5.9	5.7	7.2	6.9	5.6	9.4	8.0	6.6	84.7
55		Laos	7.4	5.3	6.6	7.7	7.1	5.4	9.3	7.2	8.1	5.7	8.3	6.3	84.4
56		Madagascar	8.8	3.6	4.3	6.4	8.8	7.8	7.3	9.3	5.8	7.3	7.8	7.0	84.2
57		Comoros	7.5	4.7	5.0	7.6	7.2	8.2	6.8	8.4	6.5	6.9	7.5	7.5	83.8
57		Tajikistan	8.1	4.5	7.6	6.4	5.3	7.5	9.3	5.8	7.9	6.9	8.4	6.1	83.8
59		Senegal	8.3	7.5	6.6	7.7	7.6	7.6	5.2	7.6	6.2	5.9	6.6	6.8	83.6
60		Uzbekistan	5.8	5.7	7.3	6.0	7.1	6.5	9.7	5.1	9.4	7.3	8.8	4.8	83.5
61		Guatemala	7.4	5.8	8.2	7.0	8.3	5.7	6.7	7.7	6.9	7.3	6.8	5.4	83.2
62		Tanzania	8.9	6.9	5.4	7.3	7.3	6.4	6.1	8.8	6.1	5.2	6.0	7.4	81.8
63		Venezuela	5.2	4.8	7.4	5.2	6.9	7.0	8.7	7.2	8.6	6.8	8.2	5.6	81.6
64		Kyrgyz Republic	5.7	5.5	8.6	6.7	6.1	7.2	7.9	5.3	7.0	6.5	8.0	6.6	81.1
65		Russia	4.8	6.0	9.0	4.2	6.4	5.4	8.2	4.4	9.4	9.2	8.1	5.9	81.0
66		Lesotho	8.2	4.8	4.1	7.7	7.6	8.2	6.1	8.3	4.7	5.9	7.3	8.0	80.9
67		Colombia	6.7	7.9	7.0	6.3	7.8	3.9	6.5	6.1	7.2	7.0	7.6	6.2	80.2
		<i>Elevated Warning</i>													
68		Honduras	6.5	4.0	6.1	6.6	7.9	6.6	7.0	7.0	6.6	7.0	6.8	7.7	79.8
69		Israel (& West Bank)	5.7	7.5	9.8	3.5	7.0	4.0	6.6	5.0	7.7	7.1	8.1	7.7	79.7

70		India	8.1	5.5	8.5	5.8	7.2	5.3	4.9	7.6	6.2	7.6	7.3	5.6	79.6
71		Nicaragua	5.5	4.2	6.7	8.3	8.2	5.9	7.6	6.9	5.4	5.7	7.1	7.5	79.0
72		Benin	8.5	5.7	3.6	7.1	7.8	6.3	5.9	8.9	5.4	5.9	7.0	6.8	78.9
72		Georgia	4.2	7.7	8.1	5.1	5.7	5.6	8.5	4.5	5.8	7.0	9.1	7.6	78.9
74		Thailand	6.6	6.1	9.0	4.4	5.5	3.8	7.7	4.6	8.2	9.2	9.7	4.0	78.8
75		Bolivia	6.4	4.1	6.2	6.7	8.8	5.1	7.0	7.0	6.2	6.7	8.3	6.0	78.5
76		Algeria	5.4	6.5	7.9	5.4	6.3	6.8	7.8	5.5	6.8	7.7	7.1	5.1	78.3
77		Jordan	6.7	9.3	7.7	3.9	5.6	6.6	6.4	4.4	8.0	5.2	6.9	7.3	78.0
78		Bhutan	6.3	7.2	7.6	7.2	6.6	5.2	4.5	6.3	6.3	4.7	7.5	8.2	77.6
79		Turkey	5.1	8.8	9.5	3.6	5.9	4.8	6.6	4.6	7.4	7.8	7.6	5.6	77.3
80		Micronesia	7.6	3.6	4.0	9.5	8.5	9.0	5.7	6.2	3.4	4.8	5.6	9.2	77.1
81		Azerbaijan	4.8	7.9	6.7	4.0	5.6	3.8	8.9	5.1	8.6	6.4	7.9	6.6	76.3
82		Fiji	4.4	3.3	7.1	7.9	6.5	6.7	7.1	4.5	6.6	6.8	7.9	7.4	76.2
83		Turkmenistan	5.6	3.7	6.8	4.8	6.9	5.1	9.8	5.8	8.9	6.5	7.8	4.3	76.0
84		Ecuador	6.0	5.4	7.5	5.9	6.9	5.5	6.7	6.0	5.2	6.5	8.2	5.8	75.6
85		Ukraine	4.4	4.3	6.9	5.4	4.4	7.0	8.4	3.9	6.2	7.8	8.0	8.8	75.5
86		China	6.9	5.1	8.1	4.6	7.5	4.1	8.3	5.9	8.7	5.6	7.2	2.9	74.9
86		Indonesia	6.8	5.6	7.3	6.6	6.0	5.5	5.3	6.1	7.4	5.9	7.0	5.4	74.9
88		Bosnia	4.0	7.8	7.0	5.2	5.3	5.7	6.7	3.8	6.1	5.9	8.7	8.4	74.6
88		Tunisia	4.4	4.2	7.9	5.8	5.1	6.9	6.7	4.6	6.7	7.9	7.8	6.6	74.6
89		Morocco	5.0	5.6	7.4	7.9	6.4	5.0	6.8	5.4	7.0	5.4	6.6	5.7	74.2
91		Maldives	5.5	4.4	4.8	5.9	3.8	6.1	8.7	5.8	7.7	6.6	8.0	6.7	74.0
92		Belarus	5.3	3.8	7.1	3.1	4.9	6.2	8.9	4.4	8.1	6.3	8.3	7.5	73.9
93		Moldova	5.0	4.1	7.0	6.3	5.0	6.6	6.8	5.1	5.1	6.3	8.3	7.6	73.2
94		Sao Tome & Principe	6.4	4.4	4.5	8.2	6.2	8.7	5.8	6.1	3.5	5.2	6.3	7.6	72.9
95		Paraguay	6.2	2.8	6.0	5.5	8.1	5.2	7.2	6.4	6.1	6.8	7.8	4.5	72.6
96		El Salvador	6.6	5.0	6.2	7.5	6.6	5.6	5.0	6.6	6.5	7.0	4.3	5.6	72.5
97		Saudi Arabia	5.5	4.9	7.5	3.5	5.5	4.7	8.1	4.0	8.9	6.5	8.2	4.9	72.2
98		Gabon	6.8	4.7	4.0	5.8	6.7	5.0	7.7	6.9	7.2	4.7	7.1	5.4	72.0

98		Peru	5.2	4.5	7.6	7.0	7.6	3.4	7.4	6.9	4.5	7.3	6.9	3.7	72.0
98		Serbia	4.5	8.6	7.8	5.0	5.0	6.6	5.4	4.4	4.6	5.7	8.0	6.4	72.0
101		Cape Verde	7.2	4.4	4.1	8.2	7.3	5.7	5.5	6.2	4.2	5.4	5.5	7.8	71.5
102		Ghana	7.1	5.2	4.6	7.9	6.8	6.6	4.7	7.4	5.3	3.8	4.9	6.9	71.2
103		Namibia	7.3	5.2	6.0	6.8	8.4	7.0	3.5	7.6	4.0	5.2	3.5	6.6	71.1
104		Guyana	5.5	3.8	6.4	9.4	5.9	6.1	5.6	6.4	3.6	6.1	5.1	7.0	70.9
105		Dominican Republic	7.0	3.5	6.0	7.3	6.0	5.2	5.7	6.8	6.0	5.5	6.2	5.6	70.8
106		Vietnam	5.8	4.4	6.2	5.9	5.2	5.3	8.4	4.9	7.5	4.8	6.9	5.4	70.7
107		Mexico	6.2	4.1	6.7	5.5	6.3	4.4	6.2	6.5	6.2	8.0	5.1	5.2	70.4
		Warning													
108		South Africa	7.3	5.6	6.3	5.2	7.7	6.6	5.0	7.2	4.4	5.8	5.6	3.2	69.9
109		Armenia	3.3	6.7	5.6	5.9	4.7	6.5	7.2	3.8	7.0	5.0	7.0	6.9	69.6
110		Samoa	5.9	2.4	4.5	9.2	5.1	6.5	5.7	5.1	4.3	4.9	5.1	8.9	67.6
111		Macedonia	3.0	7.0	7.1	5.2	5.4	6.0	6.0	4.1	4.0	5.7	7.3	6.2	67.0
112		Suriname	5.0	3.0	5.8	7.0	6.3	6.8	5.2	5.8	4.8	5.1	5.8	6.1	66.7
113		Kazakhstan	4.7	3.2	7.3	3.3	4.4	6.6	8.0	4.2	7.4	5.4	7.6	4.4	66.5
114		Cuba	5.7	4.2	4.2	5.4	5.6	4.2	7.3	4.3	7.7	5.4	7.0	5.3	66.3
115		Malaysia	5.5	3.9	6.7	4.7	5.2	3.3	7.4	4.4	7.7	6.5	6.8	4.0	66.1
116		Belize	5.6	3.8	4.1	6.7	5.9	6.4	5.4	6.1	4.4	6.1	4.3	7.2	66.0
117		Brazil	7.6	2.9	5.7	4.3	8.0	4.5	5.9	6.0	6.1	6.4	4.9	3.0	65.3
118		Jamaica	4.9	3.1	3.6	8.1	5.6	7.1	5.0	6.1	5.2	6.6	3.7	6.0	65.0
119		Cyprus	3.7	5.0	6.5	4.2	6.1	6.4	5.0	2.7	3.2	4.1	7.9	9.2	64.0
120		Botswana	7.9	4.7	5.1	5.2	8.0	6.0	3.5	7.0	4.7	3.8	3.3	4.3	63.5
121		Bahrain	4.3	2.5	7.9	3.2	4.8	3.5	8.4	2.0	8.3	6.4	7.1	5.0	63.4
122		Grenada	4.9	3.2	3.8	8.6	5.0	6.2	5.6	4.0	3.4	5.9	5.6	6.8	63.0
123		Brunei	3.9	2.4	5.9	4.3	7.8	3.0	8.3	2.0	7.9	5.3	7.4	3.8	62.0
124		Albania	4.2	3.3	4.7	7.6	3.8	5.5	5.9	4.2	5.0	4.4	6.2	6.4	61.2

125		Seychelles	4.8	2.9	4.5	5.6	5.7	4.3	5.7	2.9	4.3	6.3	6.0	7.2	60.2
		Stable													
126		Kuwait	5.2	3.7	5.2	3.3	4.4	2.7	7.4	2.8	7.6	4.2	7.5	4.5	58.5
127		Trinidad & Tobago	4.7	2.8	4.4	7.8	5.1	4.6	4.7	4.5	4.3	6.0	5.6	3.3	57.8
128		Mongolia	5.3	2.7	4.0	3.0	6.1	5.0	4.2	5.6	4.7	3.7	5.5	6.8	56.6
129		Antigua & Barbuda	4.3	2.8	3.9	7.0	4.7	4.7	5.6	4.0	4.6	5.4	3.7	5.5	56.2
130		Greece	3.9	5.0	5.1	3.5	3.9	7.0	6.2	4.0	3.2	4.2	3.8	6.1	55.9
131		Montenegro	3.0	4.8	7.6	3.7	2.6	4.9	4.8	3.3	4.1	3.7	6.5	6.2	55.2
132		Bulgaria	3.9	4.0	5.3	4.3	4.6	5.9	4.7	3.9	3.5	3.8	5.3	4.5	53.7
133		Panama	5.4	3.2	5.3	4.3	7.6	3.1	3.7	5.3	4.5	5.4	2.5	2.9	53.2
134		Romania	3.4	3.0	7.0	4.2	4.4	4.9	5.7	4.0	3.9	3.2	5.4	3.8	52.9
135		Hungary	2.0	6.7	5.0	3.0	4.0	5.6	6.3	3.4	4.9	2.4	5.3	4.1	52.7
136		Croatia	3.3	7.5	6.0	4.2	3.5	5.5	3.1	2.6	3.8	3.7	4.4	4.8	52.4
137		Oman	5.0	2.2	3.1	2.2	4.3	4.2	6.5	3.7	7.4	4.4	6.6	2.0	51.6
137		Bahamas	6.6	2.7	4.1	4.7	4.7	4.5	4.0	4.8	3.3	4.3	4.5	3.4	51.6
		More Stable													
139		Barbados	4.1	2.6	4.1	5.1	4.8	6.0	2.7	2.7	2.6	4.4	4.2	5.7	49.0
140		Argentina	4.0	2.5	4.7	2.7	5.1	5.5	5.0	4.0	3.8	4.0	2.8	4.3	48.4
141		Latvia	3.1	3.0	7.7	4.5	4.3	3.7	3.6	3.1	2.8	3.2	4.3	4.1	47.4
142		Costa Rica	3.8	3.6	4.4	3.8	5.5	4.2	2.6	4.1	1.7	3.3	3.8	4.3	45.1
142		Qatar	4.0	2.0	4.6	2.8	4.9	2.3	6.3	1.5	6.5	2.3	5.0	2.9	45.1
144		Slovakia	2.5	4.0	6.5	3.9	3.7	4.8	4.5	2.6	2.7	2.0	4.2	3.5	44.9
145		United Arab Emirates	4.2	2.2	3.6	2.2	3.9	2.6	6.9	2.4	7.5	2.8	3.6	2.6	44.5
146		Estonia	3.0	2.6	6.8	3.7	3.4	3.7	2.9	3.1	1.8	2.9	5.5	4.0	43.4
147		Mauritius	3.8	2.4	3.8	4.1	4.0	4.2	3.2	3.5	3.6	2.5	3.2	4.9	43.2

148		Italy	2.8	5.0	5.0	1.7	3.1	5.5	3.9	2.3	2.2	4.2	4.9	2.5	43.1
149		Lithuania	3.0	2.4	4.6	4.1	4.7	4.7	2.9	3.7	2.7	3.1	3.0	3.5	42.4
150		Chile	5.4	2.2	3.8	3.5	5.4	3.3	3.5	4.2	3.2	2.9	2.2	2.3	41.9
151		Czech Republic	1.6	4.0	5.0	2.5	2.9	4.3	4.9	2.8	2.6	2.3	5.0	2.9	40.8
152		Poland	3.0	3.8	4.9	4.2	3.2	3.8	3.5	2.5	2.9	2.0	3.8	3.1	40.7
		Very Stable													
153		Spain	2.2	2.0	5.9	2.1	3.7	5.2	3.0	2.4	2.0	3.0	6.3	2.0	39.8
154		Malta	2.7	4.1	3.9	3.9	2.8	4.2	3.8	2.2	3.2	3.3	2.0	3.5	39.6
155		Uruguay	4.0	2.2	2.7	4.1	4.3	3.3	1.1	3.1	2.5	3.5	2.7	2.7	36.2
156		South Korea	3.3	1.7	3.1	3.6	3.2	2.1	3.4	2.1	2.9	1.8	3.8	5.1	36.1
157		Japan	4.5	3.4	3.9	2.9	1.8	4.3	1.4	1.8	3.2	1.3	2.6	4.0	35.1
158		France	3.0	2.7	7.0	1.9	3.4	4.5	1.5	1.3	2.3	3.0	1.9	2.0	34.5
159		United States	3.0	2.1	5.1	1.4	4.5	2.5	2.1	1.8	3.4	2.9	4.3	0.9	34.0
160		Slovenia	2.5	4.5	4.2	2.8	3.6	4.0	2.9	1.7	1.7	1.8	1.7	2.5	33.9
161		Singapore	2.7	1.4	2.8	3.0	4.0	2.2	3.9	1.5	4.3	1.7	4.0	1.4	32.9
162		United Kingdom	2.6	2.2	5.9	1.8	3.8	3.8	1.7	1.8	1.9	2.4	3.5	1.0	32.4
		Sustainable													
163		Portugal	2.3	1.9	2.7	1.9	2.7	5.0	1.8	2.4	2.0	1.5	2.5	2.5	29.2
164		Belgium	2.2	2.1	4.4	1.6	2.9	4.4	1.6	1.8	1.0	1.9	3.9	1.2	29.0
165		Germany	2.2	5.7	4.8	1.8	3.0	2.4	1.0	1.3	1.3	1.8	2.3	1.0	28.6
166		Netherlands	2.7	4.0	4.4	2.3	2.4	2.9	1.5	1.2	1.1	1.7	3.1	0.9	28.2
167		Austria	2.1	6.1	4.0	1.2	3.1	1.9	1.1	1.3	1.4	1.2	2.7	1.4	27.5
168		Luxembourg	1.7	3.7	3.1	1.8	1.7	1.2	1.0	2.3	1.0	1.9	3.4	1.3	24.1
169		Canada	2.1	2.0	3.6	1.9	2.7	1.9	1.0	1.7	1.5	1.9	2.5	1.0	23.8
170		Iceland	1.8	1.7	1.3	2.5	1.3	3.5	1.0	1.4	1.0	1.2	1.8	4.3	22.8

171		Sweden	2.2	5.5	1.7	1.2	1.5	2.0	1.0	1.3	1.3	1.8	1.8	1.3	22.6
172		Ireland	1.9	1.7	1.6	2.5	2.4	3.6	1.2	1.6	1.1	1.8	1.5	1.6	22.5
172		Australia	1.5	2.0	4.1	1.0	2.4	1.8	1.0	1.7	2.5	1.8	1.7	1.0	22.5
174		Switzerland	1.7	2.2	3.8	1.8	2.4	2.5	1.0	1.1	2.0	1.3	1.0	1.0	21.8
175		Denmark	2.2	1.8	4.6	1.6	1.8	2.2	0.6	1.1	1.7	1.4	1.4	1.1	21.5
176		New Zealand	1.6	1.5	3.8	1.8	2.5	3.8	0.6	1.6	0.7	1.4	1.1	0.9	21.3
177		Norway	1.7	3.0	3.8	1.3	1.7	1.7	0.5	1.1	1.6	2.2	1.1	1.5	21.2
		Very Sustainable													
178		Finland	1.3	2.5	2.0	2.0	1.2	3.7	0.6	1.0	1.0	1.4	1.1	1.0	18.8

Copyright © 2016, The Fund for Peace